



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
UNIDAD XOCHIMILCO  
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  
POSGRADO EN DESARROLLO RURAL  
NIVEL DOCTORADO**

**CRÓNICAS SOBRE LAS AGUAS  
DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA (1867-2022)**

**Fragmentaciones, manejo mancomunado, privatización,  
oligarquías, despojo a campesinos y fractalidades en un territorio  
semidesértico**

**T E S I S  
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE  
DOCTOR EN DESARROLLO RURAL  
P R E S E N T A**

**SAÚL EUGENIO ANGEL CARRILLO**

**DIRECTOR DE TESIS  
ROBERTO SERAFÍN DIEGO QUINTANA**

**CIUDAD DE MÉXICO, 6 DE JUNIO DE 2025**

*A Liz Elizabeth y Liz Itziar, por todas las afectaciones sentimentales y materiales que les causé durante el excesivamente largo proceso para alcanzar este grado.*

*A Papá Ferrusca, por el apoyo que de mil maneras me ha dado durante todos estos años.*

## Agradecimientos:

La publicación de esta tesis es fruto de la conjunción de los apoyos de una serie de actores, la mayor parte de ellos individuales pero también institucionales, que incidieron en propiciar ambientes amables en lo académico, en lo profesional, en el trabajo de campo y en lo familiar. De ahí que considero que es de elemental justicia extender los siguientes:

En lo académico: Al Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-X, por darme cabida en su seno. Uno muy especial para Roberto Diego Quintana, porque nunca dejó de creer en que yo culminaría este documento y dirigirme a lograrlo, con su enorme paciencia. A los sinodales del examen de grado: Cristóbal Santos Cervantes, Francisco Martínez Gómez, Guadalupe Espinoza Saucedo y Carlos Cortés Ruíz. También a Gonzalo Chapela y Mendoza, por el tiempo que le hice perder y por el beneficio que me dieron sus enseñanzas.

En lo material: al CONACyT por la beca que me permitió alcanzar este objetivo profesional y de vida. A Luis Alejandro Ayala Farías y a Luis Eduardo Garza Dávila, por las facilidades que desinteresadamente y de manera personal me brindaron desde la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila; sin su apoyo me hubiera sido imposible culminar este posgrado. Uno adicional a Luis Eduardo por asumir las consecuencias de mis salidas.

A Juan Gamboa Maldonado y a Asunción Sandoval Torres por su apertura y confianza para obsequiarme datos históricos sobre sus ejidos y por vincularme con otros actores locales. Sus pláticas han sido sustanciales para que pudiera comprender el conflicto de la Presa Jalpa.

A Lalo Alonso Tello, por la confianza que me brindó, a pesar de los avatares y riesgos en los que se encontraba inmerso durante sus primeras batallas contra el confinamiento de residuos industriales tóxicos de Noria de La Sabina.

A José Luis García Valero por nutrirme generosamente con sus invaluable conocimientos y opiniones, fundados en su praxis como activista, que me facilitaron comprender los procesos sociales implicados en la defensa del agua de General Cepeda.

Un agradecimiento póstumo, por su apoyo solidario y sus siempre pertinentes consejos, a Gloria Tobón Echeverri (+) y a Juan Francisco Rodríguez Aldape (+); activistas incansables en pro de la defensa del derecho humano al agua y en pro de las causas campesinas, respectivamente. A Martín Torres Rada (+), ex Diácono de la Parroquia de San Francisco, por su intercesión ante la Diócesis de Saltillo para que ahí me brindaran facilidades para relacionarme con las bases de sus Pastorales Rural y Social. A Sonia Comboni Salinas (+) (Coordinadora del Posgrado en turno durante el periodo escolarizado de mis estudios), por su amable trato y su comprensión de las complicaciones surgidas durante mi trabajo de campo.

A tod@s y cada un@ de l@s campesin@s de Jalpa, Noria de la Sabina y San Juan del Cohetero que con sus comentarios o su presencia en momentos clave contribuyeron directa o indirectamente a hacer realidad esta tesis.

# Índice General

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>9</b>
<b>CAPÍTULO 1. EL DESIERTO CHIHUAHUENSE COMO CONTEXTO .....</b>	<b>26</b>
1.1. AGUA Y POBLAMIENTO DE COAHUILA HASTA 1877 .....	27
1.2. MINERÍA Y DESPOBLAMIENTO DEL NORESTE DE MÉXICO .....	29
1.3. SIGLO XIX: DESPOBLAMIENTO Y DESPOJO TERRITORIAL .....	33
1.4. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX COMO SEGUNDA ETAPA FUNDACIONAL DE COAHUILA .....	35
CONCLUSIÓN .....	37
<b>CAPÍTULO 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL SURESTE DE COAHUILA .....</b>	<b>39</b>
2.1. LAS HACIENDAS DEL MARQUESADO DE AGUAYO .....	41
2.2. LOS SÁNCHEZ NAVARRO .....	43
2.3. LOS MADERO .....	45
2.4. REFORMA AGRARIA Y FRAGMENTACIÓN DE LA HACIENDA .....	54
CONCLUSIÓN .....	56
<b>CAPÍTULO 3. SECANO PARA EL SURESTE; REGADÍO PARA LA LAGUNA .....</b>	<b>57</b>
3.1. EL IXTLE. FIBRA QUE MARCÓ LA HISTORIA RECIENTE DEL SURESTE DE COAHUILA .....	57
3.1.1. Surgimiento de la demanda del ixtle e interés hacendario .....	61
3.1.2. Reparto Agrario e intervención del Estado .....	63
3.2. EL EMPORIO AGROINDUSTRIAL DE LA LAGUNA .....	66
3.3. LAS VEDAS DE MEDIADOS DE SIGLO .....	75
3.4. DEMANDA INTERNACIONAL DE IXTLE Y VEDAS .....	80
CONCLUSIÓN .....	85
<b>CAPÍTULO 4. USO COLECTIVO DEL AGUA EN EL DESIERTO CHIHUAHUENSE .....</b>	<b>88</b>
4.1. HERENCIA INSTITUCIONAL IBÉRICA PARA EL MANEJO DEL AGUA .....	89
4.2. LA HERENCIA DEL DERECHO CONSUEUDINARIO IBÉRICO EN LOS ACUERDOS PARA EL USO DEL AGUA DURANTE EL VIRREINATO .....	91
4.3. LA HERENCIA DEL DERECHO NOVOHISPANO EN LOS ACUERDOS PARA EL USO DEL AGUA DURANTE EL VIRREINATO Y EL MÉXICO POSTINDEPENDIENTE .....	95
4.4. MANEJO DE ESCORRENTÍAS EN LAS LABORES VIEJAS DEL SURESTE DE COAHUILA .....	96
CONCLUSIÓN .....	102
<b>CAPÍTULO 5. FRAGMENTACIONES .....</b>	<b>106</b>
5.1. ALGUNOS EFECTOS DEL FRACCIONAMIENTO DEL LATIFUNDIO SÁNCHEZ NAVARRO SOBRE LOS DERECHOS DE ACCESO AL AGUA .....	108
5.2. REDUCCIONISMO TERRITORIAL EN LA REFORMA Y CONTRARREFORMA AGRARIAS .....	111
5.3. CONTRARREFORMA AGRARIA DE 1992 Y FRAGMENTACIÓN DEL PAISAJE .....	116
5.4. FRAGMENTACIONES SOCIOAMBIENTALES .....	120
5.5. FRAGMENTACIONES SOCIOCULTURALES .....	125
CONCLUSIÓN .....	126



<b>CAPÍTULO 6. COMPLEJIDAD DEL ANÁLISIS SOCIOAMBIENTAL DEL DESPOJO DE LOS COMPONENTES DEL TERRITORIO .....</b>	<b>129</b>
6.1. DE CÓMO LA MAGNITUD REAL DE LOS CONFLICTOS POR EL AGUA OBLIGARON A RECONFIGURAR EL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN .....	131
6.2. RECONFIGURACIONES A LA INVESTIGACIÓN Y TEORÍA FUNDAMENTADA .....	133
6.3. ACUMULACIÓN POR DESPOJO DEL AGUA (WATER GRABBING) .....	135
6.4. NECROPOLÍTICA, NECROECONOMÍA Y NECROCAPITALISMO .....	137
6.5. ACTORES Y ACTANTES ENSAMBLADOS A DIFERENTES ESCALAS .....	144
6.6. ARENAS INTEGRADAS JERÁRQUICAMENTE COMO CORTES DE CEBOLLA MORADA .....	147
6.7. FRAGMENTACIONES Y FRACTALIDAD DE LAS REDES HIDROGRÁFICAS .....	152
6.8. MICROHISTORIA Y SUBJETIVIDAD DE LOS ACTORES .....	157
6.9. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS .....	157
6.9.1. <i>Por tipo de afectación territorial</i> .....	158
6.9.2. <i>Por el tipo de cuerpo de agua afectado</i> .....	160
CONCLUSIÓN .....	161
<b>CAPÍTULO 7. CONFLICTOS POR EL AGUA A ESCALAS MACRO Y MESO .....</b>	<b>166</b>
7.1. APROXIMACIÓN GENERAL A LOS CONFLICTOS REGIONALES .....	169
7.2. LA ESCALA MACRO .....	172
7.2.1. <i>Arena regional /contexto</i> .....	175
7.2.2. <i>Actores regionales</i> .....	178
7.3. LA ESCALA MESO .....	184
7.3.1. <i>Arenas y actores municipales</i> .....	185
7.3.2. <i>El Acuífero 0502 Derramadero</i> .....	188
7.3.3. <i>Acuífero 0521 Saltillo Sur</i> .....	200
7.3.4. <i>Acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda</i> .....	212
CONCLUSIÓN .....	216
<b>CAPÍTULO 8. CONFLICTOS POR EL AGUA A ESCALA MICRO .....</b>	<b>220</b>
8.1. DESECAMIENTO DE LOS ARROYOS PATOS Y SAN MIGUEL .....	222
8.2. UN LUGAR AL NORTE DE GENERAL CEPEDA .....	226
8.2.1. <i>La Presa Jalpa y el vencimiento generacional de los acuerdos primordiales</i> .....	229
8.2.2. <i>Noria de la Sabina: necrocapitalismo sin máscara</i> .....	239
8.3. COLECTIVO SÍ A LA VIDA .....	255
8.4. LOS “CUSTODIOS DEL ARROYO SAN MIGUEL” .....	267
8.5. CONFLUENCIA, SINERGIA Y CEMENTO DE LOS MOVIMIENTOS .....	271
8.6. CONTEXTO POLÍTICO Y <i>STATUS QUO</i> .....	278
8.7. CONFLICTOS POR EL AGUA Y PRAXIS DE <i>LAUDATO SI</i> .....	287
CONCLUSIÓN .....	292
<b>CONCLUSIONES GENERALES .....</b>	<b>298</b>
<b>REFLEXIONES METODOLÓGICAS .....</b>	<b>309</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>315</b>

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Poder: hilo conductor de los ejes de investigación .....	18
Figura 2 Sistema de Producción Ixtlero en San Juan del Cohetero, Mpio.de General Cepeda.....	59
Figura 3. Estructura hidrológica de un arroyo del semidesierto .....	98
Figura 4 Fragmentación territorial de la Hacienda y su paisaje .....	113
Figura 5 Modelo de la cebolla morada cortada transversalmente .....	148
Figura 6. Clasificación de una red de drenaje, según Strahler (1952).....	155
Figura 7 Esquema simplificado de los Arroyos San Miguel y Patos .....	224

## ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1 Comportamiento de los niveles freáticos (1900-2000) .....	191
Gráfica 2. Posicionamiento de actores de la sociedad civil frente al conflicto por el confinamiento de residuos tóxicos industriales, en 2016.....	281
Gráfica 3. Posicionamiento de actores institucionales locales y regionales (privados, gubernamentales y partidos políticos) en 2016 .....	284

## ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1. Región Florística Desierto Chihuahuense .....	27
Mapa 2 Actividades mineras y principales poblaciones en Nueva España durante el siglo XVI..	29
Mapa 3. Marquesado de Aguayo (1682-1840) .....	42
Mapa 4 Haciendas de General Cepeda, Parras y Saltillo, durante El Porfiriato.....	51
Mapa 5 Acuíferos subterráneos de Coahuila.....	169
Mapa 6. Localización de la zona de influencia económica de la Zona Industrial de Derramadero, dentro de la Región Sureste de Coahuila .....	173
Mapa 7. Corredor NAFTA/T-MEC .....	177
Mapa 8 Distribución del gas shale en el Noreste de México .....	183
Mapa 9 Poligonal del Acuífero 502 Derramadero .....	188
Mapa 10 Magnitud del impacto de conflictos por el agua y calidad de las relaciones entre el Estado y la sociedad local.....	193
Mapa 11 Poligonal del Acuífero 0521 Saltillo Sur .....	200
Mapa 12. Poligonal del Acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda.....	212
Mapa 13. Proyectos SEMNSA en 2016.....	261

## ÍNDICE DE IMÁGENES SATELITALES

Imagen Google Earth 1. Misma área del Mapa 4 (2015) .....	51
Imagen Google Earth 2. Fragmentación territorial de las Haciendas de Los Richardson .....	54
Imagen Google Earth 3. Zona Industrial de Derramadero .....	118
Imagen Google Earth 4 Localización de los estudios de caso en el área de influencia de la Zona Industrial de Derramadero, Coahuila .....	174
Imagen Google Earth 5 Parteaguas de las Cuencas R24 Rio Bravo y R36 Nazas-Aguanaval.....	227

## ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1. Hacienda Ciénega del Carmen .....	50
Foto 2 Ruinas de la Presa “La Castañuela” o “El Carruaje” .....	115
Foto 3. Asamblea interejidal en Noria de la Sabina. Por la defensa del territorio y de la Madre Tierra .....	256
Foto 4 Manifestación del Colectivo Sí a la Vida en las calles de General Cepeda.....	260
Foto 5 Cabalgata (2023) por la defensa del Arroyo San Miguel.....	270
Foto 6. Raúl Vera, José Luis García, Juan Gamboa y Pedro Jasso. Cuatro actores con agencia que coinciden en el Colectivo Sí a la Vida y en Los Custodios del Arroyo San Miguel.....	274
Foto 7 Presencia de la Iglesia Católica en las movilizaciones contra el confinamiento de residuos tóxicos.....	288

## ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1 Pozos perforados y en uso en La Laguna (1920-1950) .....	73
Cuadro 2 Primeros decretos de vedas para la protección de acuíferos subterráneos en México (1948-1952).....	77

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Recarga, extracción y disponibilidad en los acuíferos del Sureste de Coahuila que tienen volúmenes registrados bajo el concepto de libre alumbramiento (Datos en hm <sup>3</sup> /año) ....	168
---	-----

*La discordia social nace de distintas causas, algunas moralmente más censurables que otras. Sin duda, las motivaciones poco encomiables como la codicia y la envidia impulsan a algunos a apropiarse de las propiedades de otros. De manera casi invariable son alentados, directa o indirectamente, por autoridades incapaces o corruptas cuya falta de dedicación a sus puestos públicos les hace creer que gozarán de impunidad. La búsqueda del poder, ya como un medio para alcanzar un fin o ya como un fin en sí, también produce cierta hostilidad en el grupo. En conflictos de este tipo los que son patológicamente débiles son víctimas de los más fuertes y no tienen muchas alternativas. Algunas de las disputas relacionadas con el agua en el norte de la Nueva España pueden atribuirse justamente a los réprobos de la sociedad. Los colonizadores españoles sabían por experiencia que el agua era una fuente de poder y no dudaron en utilizarla, tanto en la búsqueda de bienes materiales como de influencia...*

Michel C. Meyer (1997, p. 57)

## INTRODUCCIÓN

En el presente documento se ofrecen los resultados de una investigación orientada a buscar una explicación sobre las razones por las cuáles surgieron y han ido progresivamente complejizándose un conjunto de conflictos por el agua que tienen como marco la Región Sureste de Coahuila y más específicamente las zonas rurales de los municipios de General Cepeda y de Saltillo.

Como suele suceder en casos como éstos, los eventos se desarrollan en un contexto complejo, en el que los múltiples factores que los generan inciden en un agravamiento progresivo de las condiciones sociales y ambientales que se manifiestan de diferente manera a diferentes escalas, transversalmente influidos por factores económicos, políticos y culturales. De ahí que, para poder aspirar a obtener una explicación simple y comprensiva, no tenga sentido orientar la investigación desde un enfoque unidisciplinar, sino que resulta imprescindible aplicar uno interdisciplinario y multiescalar.

Como se discute en el Capítulo 6 de esta obra, que trata sobre los aspectos metodológicos, la concreción de las anteriores afirmaciones, que definen la mirada actual del investigador, pasaron por un periodo de maduración, en el que mucho de la reflexión académica se centró en contrastar los supuestos teóricos iniciales de la investigación y los acontecimientos que se estaban presenciando durante el trabajo de campo; esto es, la aplicación de la dialéctica para evaluar, comparar y en su caso modificar los postulados originales de la investigación realizados *antes* la retroalimentación que proporciona el aprendizaje empírico contra la mirada lograda *después* de realizar el trabajo de campo.

La propuesta original planteaba, en esencia, estudiar de manera minuciosa los acuerdos tradicionales establecidos al interior del ejido Jalpa para manejar mancomunadamente las aguas que bajan de la Sierra de Parras: tanto las encauzadas naturalmente en el Arroyo San Miguel, que se almacenan en la Presa Jalpa, como las que bajan por las laderas de sus cerros sin ningún cauce aparente (conocidas regionalmente como “*aguas broncas*”). Sin embargo, a partir de las primeras incursiones al trabajo de campo el investigador se enteró que los derechos de uso de las aguas almacenadas en esa presa no sólo los tienen los ejidatarios de Jalpa sino también los de San Juan del Cohetero; así como que existen disputas entre ellos, derivadas de las contradicciones existentes entre los acuerdos para repartirse las aguas almacenadas en la presa establecidos a la usanza tradicional por los ejidatarios primordiales y los porcentajes de agua formalmente inscritos en los estatutos los decretos de dotación ejidal. También se reparó que los desacuerdos entre vecinos de parcelas no se pueden explicar a cabalidad analizándolos únicamente desde una escala *micro*, sino que es necesario hacerlo también desde una escala *macro*. Esto porque a partir de los comentarios de los actores entrevistados se hizo evidente hay factores a escalas regional que no se habían percibido en la propuesta original de investigación, pero que influyen decisivamente en magnificar los desacuerdos locales, subordinándolos a procesos de deterioro ambiental.

Que fueran campesinos de dos ejidos y no de un solo los que tienen derechos sobre esas aguas se consideró una variación contextual pequeña que no ameritaba cambiar los métodos de análisis, en tanto que en éstos ya se había previsto la posibilidad de encontrar disputas entre usuarios y se planteaba estudiar las vías por las cuáles las diferencias son resueltas, basándose en los mismos acuerdos tradicionales. Pero conforme fue avanzando el trabajo de campo el investigador fue conociendo otros aspectos que no habían sido considerados dentro del marco contextual de su propuesta original, que sin embargo trascienden hasta su raíz la explicación de las causas de los conflictos por el agua en el universo de trabajo, destacadamente los siguientes: i) los caudales del Arroyo San Miguel han ido decreciendo de forma continua y cada vez más alarmante desde que los nuevos concesionarios del agua de los acuíferos subterráneos de la microrregión aceleraron su extracción para regar nuevas plantaciones de nogal y de uva; ii) existen ruinas de un antiguo sistema hidrotécnico construido en la Época Hacendaria, que por su magnitud dan a ver que era la base de manejo integral y eficiente de las escorrentías de toda la cuenca del Arroyo San Miguel; iii) la emergencia de un conflicto generado por la imposición autoritaria de un confinamiento de residuos industriales tóxicos en un ejido vecino de San Juan del Cohetero, que en cuestión de días desvió completamente la atención de los actores locales e hizo pasar a segundo término los conflictos por el agua entre ellos, pues conlleva graves riesgos de contaminación de los mantos acuíferos.

Esos aspectos son factores que reconfiguraron la definición del contexto del conflicto por el agua entre los ejidatarios de Jalpa y de San Juan del Cohetero. El primero de ellos porque la disminución de los volúmenes de escorrentías provoca que, año con año, haya menos agua almacenada en la Presa Jalpa para repartir entre los usuarios; lo cual aviva la disputa por los porcentajes que cada ejido quiere recibir de los volúmenes de agua almacenados, incentivando a sus usuarios a no ceder a negociar ningún volumen menor al que consideran que tienen derecho. En el segundo aspecto porque la existencia de infraestructuras hidrotécnicas hacendarias implica la existencia de acuerdos previos al reparto agrario para manejar el agua; o lo que es lo mismo, una forma de gobernanza del agua diferente. En el tercero porque al constituirse la contaminación de los mantos subterráneos como una amenaza mayor, tanto por la magnitud del daño ambiental como por la magnitud del daño social y económico, las unidades de producción rurales regionales potencialmente afectables cerraron filas ante el “enemigo común”, dejando las disputas entre ellos por el agua local en un plano secundario.

Reconocer haber omitido consideraciones importantes en la propuesta original de investigación implicó reflexionar sobre los objetivos instrumentales que subyacen a dicha propuesta y a partir de ello evaluar las consecuencias de tales omisiones. Trajo en conclusión que mantener la propuesta original implicaba enfrentarse a la imposibilidad de mantener la congruencia entre el quehacer investigativo y la aspiración de contribuir, aunque sea de manera pequeña, a resolver o difundir la perspectiva de los actores locales respecto a la problemática del agua en la que los han involucrado las acciones de actores externos que se han ido apropiando de este bien natural, por lo que se decidió reconfigurar la propuesta.

Al reformular la investigación el investigador reconoce que su percepción original de los conflictos no estaba completa y que las opiniones y puntos de vista de los actores locales han sido fundamentales para retroalimentar los postulados teóricos de esta investigación. Y aunque desde los enfoques de muchas metodologías es cuestionable efectuar sobre la marcha cambios a los proyectos de investigación, por contraparte existen otros enfoques (pej. en la Teoría Fundamentada) con diferentes bases epistemológicas que los justifican e incluso los recomiendan, dado que la formulación de los objetivos de investigación dependen no sólo de la información que tiene el investigador, sino también de su subjetividad, que no puede sustraerse de los sesgos que le dan su trayectoria profesional y su historia de vida.

Así, las facetas de la problemática del agua que se han incluido al reconfigurar el marco de referencia de la investigación parten de considerar que la sobreexplotación de los mantos acuíferos contribuye a agravar los conflictos locales por las escorrentías, en tanto que afecta la profundidad de los niveles freáticos y con ello altera las relaciones hidrodinámicas que determinan de manera directa el afloramiento de los manantiales que alimentan el caudal de los arroyos. Y que al complejizarse el contexto con los factores no percibidos originalmente, para poder allegarse una mejor explicación de los conflictos por el agua: *i)* se extendió el periodo histórico abarcado por este estudio, con la intención de incluir en él una perspectiva de los acuerdos para el manejo de escorrentías previos al reparto agrario; *ii)* se incorporó el riesgo de contaminación como una amenaza para la integridad física de los acuíferos subterráneos; *iii)* se enfatizó el rol que han desempeñado los actores externos a la región, como generadores del deterioro de los cuerpos de agua; *iv)* se profundizó en el enfoque multiescalar de las vías por las cuáles se efectúa dicho deterioro; *v)* se amplió la atención al análisis de las motivaciones que incentivan el comportamiento depredador en los actores externos.

En base a las consideraciones anteriores, se reformuló la pregunta central de investigación de la siguiente manera: *¿Es cierto que los conflictos por el agua en General Cepeda y Saltillo son manifestaciones sociales de un mismo proceso de deterioro ambiental a escala regional?* A responder teniendo como premisa la existencia de dos vertientes o causas generadoras de dicho deterioro: *i)* una *vertiente de cantidad*, que se liga a extracción de volúmenes de agua superiores a las tasas de recarga natural; *ii)* una *vertiente de calidad*, ligada a la contaminación de los cuerpos de agua.

Pero para reconfigurar la propuesta de estudio también hubo necesidad de reorganizar el diseño metodológico; con tal de: *i)* tener herramientas analíticas para vincular los conflictos locales, municipales y regionales a un solo proceso, pleno de interdependencias entre ellos; *ii)* abordarlo como una serie de etapas secuenciales dentro de la dimensión del *tiempo*, pero también dentro de los parámetros de la dimensión del *espacio* inherente al análisis escalar; esto es, incorporar al estudio las perspectivas de la historiografía y de la geografía.

No se omite señalar que, a pesar de los retrasos e inconvenientes que generó el haber realizado tales cambios al marco teórico de la investigación, existe la convicción en quien estas líneas escribe de que el resultado final de haber tomado la decisión de reconfigurarla

ha sido muy positivo, ya que permitió una mejor contextualización y tipificación de los conflictos por el agua: ya no se diga que una definición más adecuada de las arenas y de los actores a diferentes escalas de análisis. De esa forma, el investigador pudo tener una mayor amplitud de visión, pues a la perspectiva regional que le proporcionó la escala *macro* pudo sumar la perspectiva de “lo pequeño” que le proporciona la escala *micro*; es decir, los detalles de los conflictos locales y los vínculos que tienen entre sí.

Al tenor de lo anterior, la propuesta original de describir y analizar detalladamente la práctica de los acuerdos para manejar mancomunadamente las escorrentías que se almacenan en la Presa Jalpa, así como las formas como se dirimen los eventuales desacuerdos entre los usuarios inconformes, pasó a concebirse como un ejemplo de cómo la privatización de los derechos de extracción de las aguas subterráneas se convierten en factor disruptor de las instituciones locales para el manejo del agua que han logrado sobrevivir durante siglos bajo la concepción social de este elemento natural como un bien común; que ha sido trastocada hasta su raíz por el paradigma privatizador del neoliberalismo.

Pero el enfoque multiescalar aplicado a la nueva configuración de la investigación obligó a orientar el análisis de los acuerdos hacia un abordaje más general; eso sí, sin menoscabo de realzar aquellos aspectos relacionados con el manejo mancomunado históricamente establecido entre los actores locales; es decir, desde antes de que se presentara el problema del secamiento de los manantiales, que hoy día es factor fundamental del abatimiento paulatino de los volúmenes de escorrentías que bajan por los cauces de los arroyos de la microrregión, como son los del San Miguel, el Patos y el Macuyú.

Por su parte, la dinámica del conflicto por el confinamiento de residuos tóxicos llevó a dar mayor relevancia al estudio microsocial; ésto porque, en un determinado momento, los actos de violencia de los actores externos desencadenaron sentimientos de agravio, individuales y colectivos, que se decidió registrarlos para este estudio enfocándolos desde la perspectiva de su dimensión de tragedia humana; incluyendo opiniones de actores locales que fueron afectados de manera muy directa por dichos agravios; recurriendo a métodos etnográficos para recolectar los sentimientos y resentimientos que afloraron espontáneamente en esos momentos de violencia económica, política, moral y física; lo cual, a la postre, redituó en una serie de testimonios que resultaron ser más detallados que los recolectados previamente en las entrevistas dirigidas aplicadas en el caso de la Presa Jalpa.

Un aspecto a destacar es el hecho de que la revisión historiográfica de los conflictos de la Presa Jalpa y de Noria de La Sabina condujo a establecer que no se trata de conflictos nuevos sino que representan la continuidad de conflictos ocurridos durante los años noventa del Siglo XX, que emergieron también a consecuencia de las acciones de actores externos que buscaron privatizar las aguas subterráneas e instalar un primer confinamiento de residuos industriales tóxicos en el mismo municipio de General Cepeda. La misma revisión ha dejado claro que en ambas ocasiones aparecen los mismos actores, tanto locales como externos; siendo por demás significativo que estos últimos pertenecen a la misma coalición de empresarios y funcionarios políticos que participan en negocios inmobiliarios de gran envergadura en la Zona Metropolitana de Saltillo sus zonas industriales.



Como suele suceder en ese tipo de coaliciones, hay entre ellos actores que juegan un doble rol como empresarios y como funcionarios, dependiendo de la conveniencia del momento; de tal suerte que en una primera fase se erigieron como gestores para privatizar las tierras y aguas ejidales y en una segunda facilitando los cambios de uso de suelo requeridos para establecer nuevas factorías. Utilizando para lograr esos fines las estructuras administrativas de las alcaldías y de las dependencias federales y estatales encargadas de expedir permisos nodales y estratégicos para sus negocios.

Esos mismos actores se han cobijado durante un cuarto de siglo con la ley salinista de aguas nacionales, aplicando un sistema de tráfico de influencias como *modus operandi*; de ahí que hoy día han logrado acaparar concesiones de agua por toda la región de estudio y con ello han multiplicado de manera exponencial la perforación de pozos a gran profundidad. Con la descontrolada multiplicación de pozos, se ha sobrepasado la capacidad de recarga natural de los mantos acuíferos subterráneos, con lo cual su presión hidrostática ya no resulta suficiente para que el agua emerja a la superficie terrestre en forma de manantiales; se genera con este trastocamiento del ciclo natural del agua una serie de afectaciones negativas a la estructura y la fisiología de los delicados ecosistemas terrestres que dependen de ellos, especialmente porque la región entera tiene déficits de humedad permanentes, debido a la escasez de lluvias. De ahí que los efectos de la disminución de los caudales de los arroyos puedan ser fatales e irreversibles para los ecosistemas locales, mientras que en lo económico se abate la disponibilidad de agua para auxiliar con riego las áreas agrícolas de temporal, limitando las prácticas ganaderas por la doble vía de caídas en la producción de forrajes y la falta de suficiente volumen para que abreen los animales.

La codicia de estos actores externos por lucrar con las aguas subterráneas parece no tener límites. Alimentados por su visión desarrollista cortoplacista basada en la especulación y concebidas la tierra y el agua como insumo para sus proyectos inmobiliarios, no tienen la mínima consideración respecto a la amenaza de agotamiento que representan las bajas tasas de recarga natural de los mantos acuíferos; quedando de manifiesto el grado al que pretenden llegar al atreverse incluso a proyectar construir una nueva ciudad en el Cañón de Derramadero.

Puede comprenderse entonces que este proceso implica una doble degradación que afecta al entorno de los actores locales: tanto al ambiental como al económico; tras del cual, con el pasar del tiempo, han ido surgiendo inconformidades y manifestaciones populares de diferente magnitud: desde protestas verbales hasta demandas judiciales; pero que han logrado poca o nula sensibilización de los actores agresores, cuya narrativa sostiene que la Región Sureste de Coahuila es un territorio del país en el que los cambios al marco jurídico efectuados en 1992 han cumplido con creces su objetivo de abrir al mercado las tierras y aguas, “detonado el desarrollo regional”. Argumento que al hacerlo extensivo al medio rural los lleva a afirmar que el agua extraída del subsuelo permite obtener hoy día cultivos que alcanzan un alto precio en el mercado, sustituyendo los antiguos cultivos de subsistencia.

Pero además de las ambientales y económicas, los actores locales también resienten de manera drástica las afectaciones que la mercantilización del agua provoca en sus valores y

en sus estructuras sociales tradicionales. Los resultados del estudio de caso del conflicto por el agua almacenada en la Presa Jalpa a escala *micro* y su contextualización en el Arroyo San Miguel a escala *meso* apuntan a confirmar que no estuvo equivocada la hipótesis central del protocolo original de investigación, que postulaba que las instituciones para el manejo mancomunado de las escorrentías tienen alguna relación causal con la conversión del agua en mercancía. Pero los resultados también demuestran que existe una percepción diferenciada entre escalas, ya que han permitido confirmar que existen elementos que no son perceptibles al trabajar sobre la escala *meso*, pero que se hacen tangible a la escala *micro*, o viceversa; más aún, que cuando se pasan a enfocar los conflictos por el agua a escala *macro* se visualiza que hay una vinculación en el origen de casi todos los conflictos con el uso faccioso del *poder económico y político* que ostentan grupos oligárquicos.

Lo anterior significa que la interpretación sobre los orígenes de los conflictos por el agua, al menos los estudiados aquí, no necesariamente resulta la misma cuando se enfoca el estudio en una escala que en otra. Esto es, que centrar la investigación en los procesos locales sin ver los procesos históricos regionales conlleva a realizar un estudio incompleto y reduccionista; es decir, que el estudio a escala *micro* sin realizar un estudio minucioso del contexto a escalas *meso* y *macro*, no permite visualizar que la disputa por los caudales del Arroyo San Miguel tiene sus orígenes en la privatización del agua consumada en otras zonas de la región; con lo cual se establece una limitación metodológica, que ni siquiera se percibe, para aportar ya no digamos propuestas de solución sino ni siquiera una explicación satisfactoria a las disputas intraejidales e interejidales

Pero si la aproximación multiescalar fue resultante de gran importancia de la decisión de reconfigurar la investigación, también lo ha sido por otro lado el reconocer la trascendencia para la misma que tiene la existencia de los vestigios arqueológicos dispersos en la cuenca del Arroyo San Miguel, puesto que dan cuenta que sus aguas fueron controladas en siglos pasados mediante un complejo sistema de riego. Es decir, que a pesar de que hoy están reducidos a un montón de ruinas, son evidencia de que el manejo de escorrentías no es una novedad surgida a partir del reparto agrario de 1936; antes bien, permiten vislumbrar otras formas de uso mancomunado a otra escala territorial, ya que debido a la enorme extensión de las haciendas en el siglo XIX, debieron haber sido comprendido cuencas o subcuencas enteras, no solamente parte de ellas como fue entre los ejidos del siglo XX.

Lo anterior implica la existencia de un “antes” y un “después” histórico, que separa dos formas diferentes de gobernanza del agua: una en la época cuando el sistema hidrotécnico era funcional y otra cuando dejó de serlo. La existencia de los vestigios de dicho sistema implica la necesidad de estudiar la institucionalidad hacendaria para el manejo de las escorrentías como antecedente de la institucionalidad campesina para el mismo propósito. Aquí se postula que ese “antes” y ese “después” de la gobernanza del agua en la región de estudio tiene su parteaguas histórico en la fragmentación territorial que significó el reparto agrario; el cual tuvo como efecto general la modificación de los equilibrios del poder en el medio rural regional y local.

Pero las repercusiones de la fragmentación territorial ocurrida en 1936, como la que ocurrió en 1867 con el fraccionamiento del latifundio en haciendas, se han manifestado en una multitud de ámbitos, destacadamente en el paisajístico, el económico, el cultural y el socioambiental. Con el correr del quehacer investigativo, pronto se reparó que aparte de esas dos fragmentaciones territoriales, resulta que hoy por hoy está en curso una tercera, derivada de las modificaciones al marco jurídico de la tenencia de la tierra de 1992. Es decir, tres fragmentaciones ligadas a tres cambios al marco jurídico. Los efectos, por separado o en conjunto, han sido de tal trascendencia que aquí se estudian de acuerdo a los ámbitos arriba indicados, como: fragmentación paisajística, fragmentación económica, fragmentación socioambiental y fragmentación sociocultural. Desde luego, sin perder nunca de vista que esta separación es artificial y únicamente con fines de facilitar el estudio, pues en *holum* se interrelacionan estrechamente, dentro de una realidad compleja y llena de codependencias.

Partiendo de las anteriores consideraciones, al reconfigurar la presente investigación se decidió establecer el periodo de estudio a abarcar partiendo de aquel 1867 y hasta el año en el que se dejó de realizar la presente investigación. Esto es, un periodo de prácticamente un siglo y medio; para lo cual se recurrió principalmente a la bibliografía para estudiar el caso del fraccionamiento del Latifundio Sánchez Navarro, acontecido en dicho año, así como el de la fragmentación de la Hacienda La Jalpa en 1936, que sirvió para dotar a los ejidos estudiados; pero aparte de la bibliografía también a la colecta de información en campo para estudiar la fragmentación de los ejidos, a partir de 1992. En todos los casos, dando relevancia al papel que jugaron los actores que se consideran claves y centrando la atención del estudio en indagar los efectos socioambientales de las fragmentaciones; considerando además que toda fragmentación territorial genera resistencias, que en unas ocasiones son más álgidas y en otras no tanto, también se realza un enfoque sobre los factores de contexto que median los equilibrios de poder establecidos en cada coyuntura.

Empleando la aproximación multiescalar, que atraviesa transversalmente esta investigación, se ha dado relevancia al abordaje a escalas *meso* y *micro*; destacando de esta última que se encontró ser muy adecuada para aplicar el enfoque del actor, ya que permite observar aspectos del comportamiento humano y detalles del contexto de vida cotidiana de los actores protagonistas del caso; merced a lo cual se hace posible buscar circunstancias y/o razones que pudieran contribuir en alguna medida a explicar las actitudes de los actores. Así, en los casos de las fragmentaciones de su propiedad se ha podido visualizar:

- i) que en 1867 hubo poca resistencia por parte de la familia Sánchez Navarro, al menos en apariencia, lo cual pudiera explicarse en función de que el fraccionamiento de su latifundio fue asumida por ellos como una inevitable consecuencia política y económica de su adhesión al Imperio de Maximiliano; merced a la cual las cabezas de familia estaban siendo cuestionados como traidores a la patria por el triunfante Estado Republicano y objetivamente no tenían margen para protestar ante el embargo, so pena de que se les aplicaran sanciones más severas.
- ii) que el decreto de expropiación de tierras de la Hacienda Jalpa, efectuado en 1936, coincidió con el fallecimiento del elemento masculino del matrimonio

propietario de la misma y que debido a que no se procrearon hijos no había herederos directos de la tierra, circunstancia que quizá haya tenido algún peso en la decisión de la viuda, para optar en no oponer mucha resistencia a la expropiación.

- iii) el drama humano por el que han tenido que pasar los actores locales durante la fragmentación territorial en curso, iniciada en 1992; que al amparo del decreto de un nuevo marco jurídico mercantilista ha facilitado la reprivatización de las tierras que heredaron de sus abuelos y bisabuelos, causándoles tan graves afectaciones que bien puede asegurarse que ejemplifican cómo el capitalismo instrumentado a nivel regional está transitando desde su fase de acumulación por despojo a la del necrocapitalismo.

## EJES DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación tiene como orientación última la de plantear una mirada holística a los procesos históricos que llevaron a configurar las actuales formas de *resistencia* de los actores locales de General Cepeda frente a actores externos que utilizan su *poder* oligárquico para despojarlos de sus tierras y de sus aguas.

Para lograr aprehender esa mirada holística, o al menos intentar aprehenderla, se hace un ejercicio de integración de un conjunto de temas cuyo estudio se realiza generalmente desde diferentes disciplinas; mismos que se consideran importantes de comprender la manera como se fue configurando y delimitando a lo largo de varios siglos el marco contextual en el que se desarrollan las formas de resistencia social actuales, aquí estudiadas; en ese sentido, el presente estudio emplea metodologías tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales, tejidas sobre un eje historiográfico, abarcando principalmente los ámbitos socioambiental, institucional, económico y jurídico.

Bajo esos principios, se hace aquí primero una explicación sobre las características ambientales de la región de estudio, sobre las formas de apropiación del territorio, sobre la manera como se integraron al mercado los productos regionales, sobre los impactos de las fragmentaciones territoriales, para finalmente llegar al escenario actual, en el que se ubican los conflictos por el agua y las arenas donde contienden por ella los actores involucrados. Ubicados en el escenario actual, se abordó el análisis de los casos de estudio partiendo de la premisa de que los actores externos utilizan las instituciones del Estado alineadas con el modelo de mercado para generar condiciones favorables para instrumentar un esquema privatizador de la tierra y del agua; con lo cual han logrado desdibujar las nociones de *bien natural* y *bien común*, imponiendo a la sociedad la noción mercantilista de que son meros *insumos para la producción*, susceptibles de comprarse y venderse.

El caso es que la expansión de los procesos de extracción o de polución han sido facilitados o fomentados por las leyes que permiten privatizar las tierras y el agua a favor de una oligarquía que despoja de sus bienes naturales a los actores locales, en especial a quienes debido a sus desventajosas condiciones económicas son más vulnerables a los abusos de poder.

Las nociones de *bien natural* y bien común epistemológicamente se encuentran más ligadas a la cosmovisión de las sociedades rurales tradicionales, que conciben la relación del ser humano no de forma reduccionista y economicista sino como un ente vivo interdependiente con todos los elementos de la naturaleza, entre ellos la tierra y el agua, integrados dentro de un mismo *holum* ambiental. En ese tenor, concebir a la naturaleza y al hombre como mercancía es equiparable a concebirlos como “una cosa” que se compra y se vende sin más propósito que el de normalizar la “toma de decisiones de mercado” respecto a su uso y destino.

Con lo anterior, se pasa a hablar de “capital natural”, al cual “hay que poner a trabajar”, sin cuestionar las consecuencias ambientales y sociales que tales usos puedan acarrear en el futuro. Del mismo modo, con argumentos tales como la búsqueda de “vías más eficientes” (eufemismo para decir que de lo que se trata es extraer el máximo lucro en el menor tiempo posible), sin importar lo que se destruya en el camino y justificando cualquier decisión, por depredadora que pueda ser. Esto es, que en un contexto regido por el modelo capitalista extractivista, se termina fomentando la consolidación de condiciones favorables para acrecentar la ambición de los “emprendedores” por acumular la tierra y el agua, puesto que la posesión de ellas les otorga *poder* o *agencia* ante sus “competidores”. Lo peor del caso es que, en un momento dado cuando lograr acapararlas, los impactos socioambientales de sus decisiones económicas pueden llegar a ser tan grandes que podrían afectar no solamente a localidades o municipios, sino incluso pueden llegar a afectar a regiones enteras.

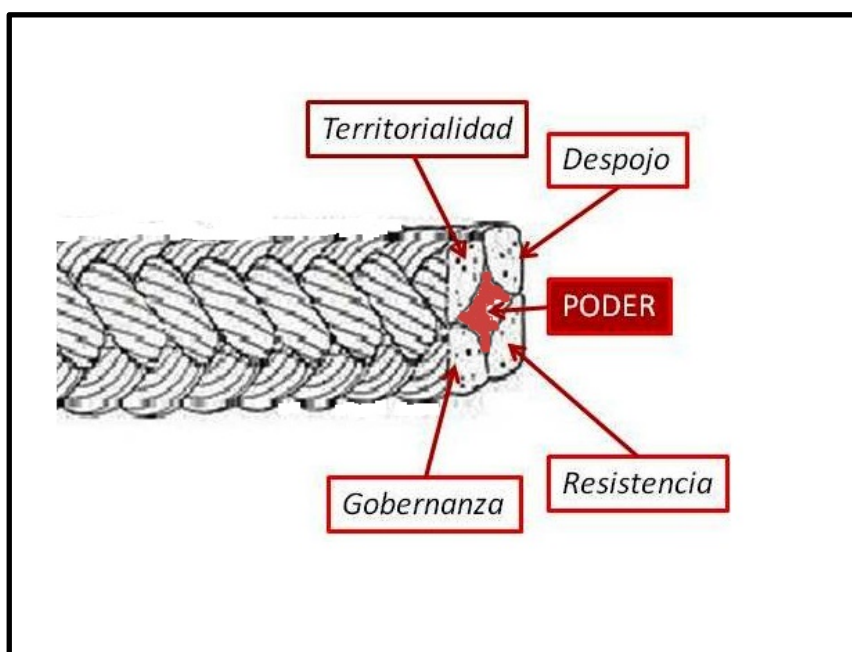
Más allá de la extensión geográfica que puedan llegar a tener los impactos derivados de la mercantilización y acumulación de la tierra y del agua, no debería de perderse de vista el hecho de que las propiedades físicas que ambos elementos naturales tienen condicionan la forma y la magnitud de tales impactos; es decir, que las abstracciones economicistas de la naturaleza no pueden abstraerse confrontarse con las restricciones y condicionamientos que les imponen las leyes de la naturaleza. Esto es, que debido a que el agua es líquida y como tal fluye sobre la litósfera no resulta tan fácil de manejarse como propiedad privada, puesto que, al contrario de la tierra, que puede ser dividida físicamente entre diferentes poseedores debido a que sólida y está fija a su sustrato, el agua es indivisible.

La indivisibilidad del agua condiciona a los propietarios de los diferentes predios por los que fluye a establecer acuerdos para poder hacer uso de ella; los cuales resultan nodales para la sobrevivencia de las sociedades, por lo que al combinarse con otras reglas de convivencia comunitaria contribuyen a construir las instituciones sociales locales para el manejo de los bienes comunes, mismas que son parte constitutiva fundamental de la *gobernanza del agua*; pero también de la *gobernanza comunitaria*, la cual representa un elemento estratégico en el que se cimenta la *resistencia* ciudadana contra la privatización de este elemento natural. Sin embargo, debido a la naturaleza fluida del agua el abuso en el uso de ella en un predio determinado afecta de manera drástica el acceso que históricamente han tenido los usufructuarios de los predios cercanos; dicho de otra manera, que la acumulación o sobreexplotación en uno solo de los predios se traduce de manera automática e inevitable en

una forma de *despojo* a los vecinos, al tiempo que desestabilizan las instituciones de manejo mancomunado que sostienen las formas tradicionales de la gobernanza.

Bajo las consideraciones anteriores puede comprenderse mejor porqué el acaparamiento de concesiones del agua trae en consecuencia la reconfiguración del balance de los equilibrios del *poder*, lo cual acontece actualmente en la región de estudio como en cualquier lugar del mundo en el que se haya desatado el proceso conocido como *blue grabbing*, que es usado para denominar al proceso económico y político a través del cual los dueños del capital *despojan del agua* a sus poseedores originales, como nueva vía de acumulación. *Despojo* ante el cual oponen resistencia los actores locales involucrados en los casos estudiados. De aquí que los ejes de la presente investigación han sido concebidos como una cuerda de cuatro hilos, trenzada sobre un quinto hilo, tal como se muestra en la Figura 1, donde los cuatro ejes de Territorialidad, Gobernanza, Despojo y Resistencia se entrelazan en el quinto eje, que es el del Poder.

**Figura 1. Poder: hilo conductor de los ejes de investigación**



Fuente: Elaboración propia.

Empleando el Enfoque del Actor de Long (2007), esta analogía de la cuerda puede interpretarse en el sentido de que la lucha por el poder es un factor presente en todas las arenas de todas las escalas; siendo de interés para esta investigación en específico el análisis a escala *micro*, ya que en ella se encuentran los actores en conflicto que originalmente se planteó estudiar; pero sin dejar observar lo que sucede en las arenas meso y macro, puesto que las acciones u omisiones de los actores que contienden en las arenas a

esas escalas no resulta inocuas, puesto que inciden a la localidad a través de las mismas vías por la que se transmiten las relaciones de poder . Del mismo modo, sobre la base de uno de los postulados generales de Latour, respecto a que los objetos inanimados pueden adquirir en sí mismos agencia, el agua se constituye en el centro de este análisis de la lucha por el poder, a través de los siguientes tópicos: i) el acceso al agua, como elemento natural, bien común y derecho humano; ii) el proceso histórico de apropiación del y acceso al agua (informal y jurídico). Para lo cual se han definido en la metodología de este documento las características de los enfoques sociológico y geográfico que se aplican.

Tómese la narrativa de las páginas precedentes como una manera de presentar los siguientes **OBJETIVOS**.

### **GENERAL:**

Comprender los conflictos por el agua que acontecen en el municipio de General Cepeda, Coahuila, con perspectiva histórica-territorial desde el año 1867 y enfocando diferentes escalas de estudio.

### **ESPECÍFICOS:**

1. Contextualizar territorial, histórica, social y políticamente los conflictos por el agua en General Cepeda, Coahuila.
2. Interpretar las posibles interrelaciones de los conflictos por el agua de General Cepeda; tanto las que se dan entre la escala local como municipal como con similares conflictos que han acontecido y acontecen en el Sureste de Coahuila.
3. Comprender como estudios de caso y desde una perspectiva ecológico política dos conflictos locales por el agua, que se suscitan en General Cepeda:
  - 3.1. la disputa entre campesinos vecinos por las escorrentías almacenadas en la Presa Jalpa, desde la fundación de sus ejidos;
  - 3.2. la resistencia de la ciudadanía cepedense a la construcción del confinamiento de residuos industriales tóxicos en los límites del ejido Noria de La Sabina, para defender los mantos acuíferos del riesgo de contaminación química.

Planteados los objetivos, para estructurar este documento se le ha ordenado de acuerdo a la siguiente sucesión de capítulos:

En el Capítulo 1 se describen las características ambientales del Desierto Chihuahuense y se destaca el impacto que históricamente ha tenido en esa región la escasez de agua, como factor limitante para establecer actividades económicas y por ende para el poblamiento de este extenso territorio. Como primer acercamiento al tema central de la tesis, la narrativa de este capítulo ha sido dedicada a los periodos comprendidos entre La Conquista y El

Porfiriato, abarcando en conjunto tres siglos y medio en los que el acaparamiento de grandes extensiones territoriales fue el rasgo “normal” de la tenencia de la tierra.

Mediante una aproximación que pretende ser interdisciplinaria, se insiste en destacar la complejidad de las interrelaciones multifactoriales ligadas a la presencia o la ausencia de este bien natural que resulta vital para el ser humano.

En el Capítulo 2 se describen los procesos generales por medio de los cuáles se realizó la apropiación del territorio, durante las mismas etapas abordadas en el capítulo anterior. Iniciando por el despojo que hicieron los invasores europeos a los pueblos originarios y cerrando la narrativa en los años posteriores a la Revolución Mexicana, cuando se ejecutó la Reforma Agraria. Al final del capítulo se alude al tema del fraccionamiento de las haciendas, como preludeo del Capítulo 5 en el que se trata con detalle el tema de las consecuencias que las fragmentaciones territoriales han tenido en el manejo de escorrentías.

El Capítulo 3 es dedicado a explicar cómo, a partir de la demandas de diferentes productos por el mercado internacional, durante El Porfiriato se diferenciaron en la Franja Sur del Estado dos sistemas de producción: uno de temporal o de secano para el Sureste de Coahuila y otro de regadío para la Comarca Lagunera. Con lo cual se definió una brecha tecnológica para el manejo del agua entre ambas regiones, cuya influencia ha sido trascendental, en la medida que terminaron definiendo dos estilos de desarrollo rural en extremo contrastantes, que calaron a tal grado que hoy son elementos definitorios de sus identidades regionales.

En este capítulo también se enfatizan los impactos sociales y económicos al largo plazo que generaron las políticas de Estado para el manejo del agua establecidas durante las tres décadas posteriores a la culminación de la Revolución Mexicana; en especial las que aplicaron Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. También se aborda por un lado la discusión respecto a las vedas de extracción que se aplicaron a partir de los años cincuenta, que favorecieron en la consolidación en La Comarca Lagunera del modelo agroindustrial basado en la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos; por otro lado, las aplicadas en el Sureste de Coahuila por para fomentar la producción de productos forestales no maderables, que a pesar de aparentemente haber sido bien intencionadas, no solamente no lograron sacar de la pobreza a los miles de campesinos que forzaron a dedicarse a esa actividad económica, sino que terminaron extendiendo su pobreza hasta nuestros días.

El Capítulo 4 plantea un acercamiento al conocimiento de los orígenes y características del manejo mancomunado del agua de escorrentías, cuyos relictos todavía son posibles de encontrar hasta la actualidad en algunos lugares recónditos del Desierto Chihuahuense; entre ellos los ejidos que se encuentran dentro de la cuenca del Arroyo San Miguel, que se comparte por los municipios de General Cepeda y Parras de la Fuente. El tema que subyace a los apartados de este capítulo es el de la historia de la forma de gobernanza del agua que soporta los sistemas tradicionales de secano, abordados en el capítulo anterior. El breve rescate historiográfico que se presenta muestra cómo, a diferencia de otros lugares de México en los que pueden encontrarse formas de gobernanza del agua en las que se



acrisolan los conocimientos y las institucionalidades provenientes tanto de la tradición ibérica como de la mesoamericana, para el caso del Desierto Chihuahuense las formas de gobernanza del agua provienen prácticamente por entero de Europa y más remotamente de los pueblos árabes; situación que puede explicarse en el sentido de que Aridoamérica fue una región con una cultura del agua muy rudimentaria, desde antes de la invasión europea.

El Capítulo 5 retoma los temas que se abordan en capítulos anteriores. En algunas ocasiones conjuntándolos y en otras integrándolos al contexto; procurando imprimirles una mirada interdisciplinaria, orientada a explicar los impactos que han generado en las formas de manejo del agua las fragmentaciones del territorio acontecidas a partir de la disolución del latifundio, en 1867. Mismo que representa el primero de tres grandes fragmentaciones de la tenencia de la tierra en la región de estudio, siendo los otros dos: i) el reparto agrario de 1936, en el que se expropiaron a las haciendas una parte de sus tierras, para otorgarlas en usufructo a campesinos semi proletarizados; ii) la contrareforma agraria de 1992, que orientó el marco jurídico de la materia, para reprivatizar las tierras ejidales que fueron otorgadas en el reparto agrario.

Resulta pertinente dedicar este amplio capítulo a discutir el tema de las fragmentaciones territoriales, ya que las tres mencionadas en el párrafo anterior tienen como característica común el hecho de que implicaron la realización de cambios sustanciales al marco jurídico de la tenencia de la tierra, a partir de los cuáles no solamente se afectaron las dimensiones de los predios, sino que fragmentaron el paisaje, la economía, la sociedad y la cultura de los actores locales, puesto que dislocaron las formas organizativas tradicionales para el manejo del agua.

El Capítulo 6 trata sobre los aspectos metodológicos relativos a la presente investigación. En sus dos primeros apartados se contextualizan las circunstancias que llevaron al investigador a reconfigurar su protocolo de investigación original, aludiendo a los desafíos metodológicos que se le presentaron cuando el escenario en estudio evolucionó hacia una situación mucho más compleja y explicando cómo decidió enfrentarlos empleando razonamientos basados en un pensamiento holístico y ecléctico, manteniendo los ejes de investigación planteados originalmente, pero también sustentando la reconstrucción del marco metodológico en los preceptos de la Teoría Fundamentada Constructivista (Charmaz 2006), que plantean vías para abordar la investigación mediante procedimientos de retroalimentación de conocimientos entre los actores o sujetos del estudio y el investigador.

Ante las circunstancias planteadas por la realidad de un contexto de investigación mucho más complejo que el originalmente percibido en la reconstrucción del marco metodológico se ha recurrido a retomar: por un lado, los postulados de Harvey D. (2005), en torno a lo que él define en su idioma nativo como *accumulation by dispossession* (que en castellano se ha difundido como “acumulación por desposesión”, pero también puede ser traducido como “acumulación por despojo”); por otro lado, los de Banerjee, S.B. (2008), en torno a su definición de “necrocapitalismo”. Integrándolos a la aproximación sociológica original propuesta por Norman Long (2007), Enfoque del Actor, complementado con la perspectiva de la Teoría del Actor Red de Bruno Latour (2008), que propone una aproximación al estudio

mediante ensamblajes que se dan entre aspectos heterogéneos de la realidad, así como la capacidad que tienen algunos objetos o actores inanimados de poseer agencia, como lo es el agua, en este caso.

Considerando que los ensamblajes se efectúan tanto entre las arenas de una misma localidad como entre estas arenas y otras con una cobertura geográfica más amplia, se incorpora un procedimiento de análisis multiescalar un modelo concebido por el autor bajo la denominación “capas de una cebolla morada”, pensado para estudiar estructuras dinámicas empujadas o ensambladas en varios niveles y de diferentes maneras. Debido a que este procedimiento en cierto momento topó con la dificultad de analizar al mismo tiempo efectos diferenciados que han tenido las fragmentaciones territoriales sobre los constructos físicos o materiales y los constructos sociales o intangibles, se ha incorporado el concepto *fractalidad* para explicar la labilidad de los primeros y la resiliencia de los segundos.

Para finalizar este capítulo se incluye un último apartado en el que se presenta una tipología de conflictos por el agua, a tener en cuenta para abordar los casos estudiados.

En los Capítulos 7 y 8 se entra, finalmente, a tratar en forma los conflictos por el agua. Tanto en uno como en otro capítulo se plantea la idea de que los conflictos desatados al final del Siglo XX en el Sureste de Coahuila representan expresiones de resistencia, emprendidas por los actores rurales para confrontar las maniobras de la oligarquía saltillense para despojarlos de las aguas subterráneas que eran suyas, hasta antes de la contra reforma agraria decretada a nivel constitucional en 1992.

En ambos capítulos se describen los principales vínculos de carácter “horizontal” entre los conflictos que se dan al interior de una misma escala de aproximación (*macro*, *meso* o *micro*), sin perder de vista que también existe una trama de relaciones de carácter intra-escalar, que son necesarias para poder explicar los qué, porqué y para qué de los movimientos sociales por la defensa del agua. La diferencia entre ellos es que, en el 7 los conflictos son abordados a escalas *macro* (regional) y *meso* (municipal), mientras que en el 8 lo son a escala *micro*. La separación en dos capítulos permite establecer un orden más claro de los eventos que caracterizan a los conflictos; con ello, presentar al lector de mejor manera la historiografía y el análisis de la información vertida; también permite visualizar que las problemáticas que se abordan en el Capítulo 7 representan el contexto de la que se presenta en el Capítulo 8.

Para cerrar esta obra se han incluido en sus últimas páginas dos secciones, pudieran ser llamadas capítulos también, en las que se tratan conclusiones sobre aspectos teóricos y sobre aspectos metodológicos, respectivamente.

Respecto a las conclusiones teóricas, se han tratado de resaltar especialmente las que se obtienen a partir de la revisión histórica socioambiental orientada a elucidar: por un lado el rol fundamental que han tenido los acuerdos para el acceso al agua, desde hace miles de años; por otro, cómo los desarrollos tecnológicos, desde las construcciones de obras hidrotécnicas para el manejo de escurrimientos hasta la automatización de los sistemas de extracción de aguas subterráneas, se vinculan a una institucionalidad orientada a manejar

las aguas de manera mancomunada. En ese mismo tenor, se discuten las consecuencias que han tenido las fragmentaciones: (territoriales, socioambientales y socioculturales) para la conservación/destrucción de la integridad de esos constructos físicos y sociales. Todo lo anterior dentro de una narrativa histórica que cuida de incorporar transversalmente al papel que han tenido: i) actores específicos que en determinado momento tuvieron una agencia sobresaliente para definir el uso y el manejo de las aguas disponibles; el desarrollo del capitalismo y sus diferentes etapas en la orientación de la producción regional, que inevitablemente se encuentra ligada al empleo del agua; el Estado en lo general y los cambios al marco jurídico de la tenencia de la tierra en lo particular.

Por lo que se refiere a los temas relacionados con la metodología, se ha preferido hablar de reflexiones, mejor que de conclusiones, considerando que en el proceso de investigación se hizo necesario integrar métodos de diferentes disciplinas, usando varios enfoques. Debido a ello, esta sección tiene una orientación especial a presentar los argumentos teóricos que permiten sostener que el modelo multiescalar que se creó se encuentra científicamente fundamentado. Derivado de lo cual se abre la puerta a justificar la fortaleza y viabilidad tanto los procedimientos como las herramientas tomadas de manera ecléctica de diferentes disciplinas para aplicarse a ese modelo. Se espera con ello facilitar al lector la comprensión de las razones por las cuáles se optó por ajustar el marco teórico a varias escalas y así poder fundamentar desde un enfoque más holístico las posibles respuestas a las preguntas de investigación; pero también para subrayar el hecho de que los objetivos de la investigación se fundamentaron metodológicamente mediante un proceso constructivista al retroalimentar opiniones y emociones sentidas de los actores locales. Esta manera de proceder dialécticamente alinea esta investigación con la propuesta filosófica y metodológica de la Teoría Fundamentada, en particular los que se hace Charmaz (2006) desde la corriente constructivista; lo cual, desde el punto de vista de quien esto escribe, no la excluye de alinearse también a las propuestas y definiciones que hace Long (2007) desde su Enfoque del Actor, en especial aquellas que articulan el concepto de las arenas (que aquí se propone concebir las arenas imbuidas en otras arenas) para abordar de manera más integral el tema de la lucha por el poder a escalas locales, municipales; esto es, retomando el concepto que hace este autor, respecto a que la *lucha por el poder* es el elemento que da razón de ser a las *arenas* donde los actores despliegan sus acciones y estrategias para sobrevivir ante las adversidades.

Sin duda que se puede decir que esta forma de aproximarse a la investigación es heterodoxa, pero se presentan a la crítica con la intención de que se juzgue si merece considerarse como un aporte metodológico, en el que combina un enfoque geográfico con uno sociológico para poder estudiar el objeto de investigación a diferentes escalas y a los sujetos involucrados mediante postulados generales del Enfoque del Actor. Justificando esta manera de abordar el análisis en el hecho de que la geografía es una ciencia interdisciplinaria por lo que sus métodos resultan muy adecuados para ser empleados para estudiar conflictos socioambientales.

Cabe señalar que el proceso de reconfiguración de la investigación no se hizo de la noche a la mañana; pues aparte de que los aprendizajes en campo no se adquirieron de una sola vez, tampoco se asimilaron de una sola ocasión; de hecho, a algunos solamente se les encontró sentido hasta después de que se conocieron otros factores o elementos; como en un rompecabezas, algunas piezas que se tenían separadas desde el principio se encontró el sitio donde encajaban hasta después de armar una parte de la que al principio no se tenían las piezas. Lo anterior significa que tuvo que pasar mucho tiempo para poder integrar todas “las pistas” en una imagen general; no solamente por el hecho de encontrarse dispersas y sin conexión aparente, sino porque se tuvo que enfrentar también el problema de cómo integrar y analizar metodológicamente la propuesta investigación reconfigurada.

El autor reconoce de antemano que han quedado muchos detalles por afinar en el método de aproximación empleado y que la reconfiguración no ha sido inocua para la extensión del tiempo de investigación, pues el efecto neto que tuvo el diversificar las escalas para analizar los conflictos por el agua es que hizo más complejo y extenso al marco teórico. Lo cual puede verse más como un aspecto positivo que como uno negativo, ya que los estudios que se ubican en el marco general de la Ecología Política requieren precisamente de enfoques que permitan abordar asuntos complejos; es decir, que no se puede esperar obtener buenos resultados de investigación en este campo de conocimiento aplicando metodologías concebidas desde una visión unidisciplinar, so pena de obtener conclusiones reduccionistas, por tanto simplistas respecto a una realidad que es muy compleja.

Instrumentar un esquema de trabajo de “ensayo y error” no siempre condujo a resultados satisfactorios; sin embargo, cuando se tuvo éxito se estuvo en posibilidad de dar “un salto” hacia otro momento más propicio para adquirir conocimiento y comprensión, tanto de la realidad estudiada como del grado real o potencial de aplicabilidad del método en construcción. Así se pueden citar, por ejemplo: i) que cuando se aplicó la revisión historiográfica relacionada con las ruinas del sistema hidrotécnico hacendario surgió un cúmulo de información respecto a que el manejo mancomunado del agua en el Desierto Chihuahuense es herencia cultural que proviene de Europa, en contraste con el hecho de que los pueblos originarios locales no practicaban la agricultura, al haber sido nómadas; ii) que al estudiar los desacuerdos entre campesinos por los caudales de los arroyos se encontró que tales desacuerdos se han ido incrementando debido al agotamiento de sus manantiales, provocado por las actividades económicas intensivas en capital y uso extractivo de los mantos acuíferos que realizan otros actores fuera de la cuenca de dicho arroyo; iii) de la idea de estudiar los conflictos por el agua a diferentes escalas se derivó la idea de visualizarlos como los niveles de integración que se emplean en la ecología y la biología, con lo cual surgió el, por así llamarlo, arquetipo o *modelo de la cebolla morada*.

No se omite señalar que, en términos de la responsabilidad que se contrae con el trabajo académico y la obligación de cumplir lo que se propone, tomar la decisión de reconfigurar el marco de referencia de la investigación significó un momento en extremo difícil para el responsable de realizarla. La sola posibilidad que se presentó al investigador, de tener que reconfigurar debido a que se dio cuenta que había problemas con el agua y con la tierra a

los que los actores locales les otorgaban mucho mayor importancia que al problema objeto de su interés, lo llevó a la disyuntiva de tener que elegir entre renunciar a estudiar a fondo los acuerdos y desacuerdos campesinos para manejar las escorrentías o mantener su intención de analizarlos a detalle, como lo había planteado en la propuesta original del estudio. Optar por esto último le significaba, sobre todo, renunciar definitivamente a su aspiración de generar con su investigación conocimiento significativo para los actores locales, lo cual le pareció un contrasentido entre su querer y su quehacer.

Habiendo decidido por la primera opción, el contexto del conflicto se amplió para enfocarlo simultáneamente desde lo local (escala *micro*), lo municipal (escala *meso*) y lo regional (escala *macro*); esto al considerar que la mayoría de las veces las movilizaciones sociales se estudian mirando a la acción colectiva como una acción unitaria e impersonal, enfocándola en el mejor de los casos desde una escala *meso*, en la que no se alcanzan a apreciar ni las reflexiones ni los sentimientos individuales de los actores involucrados en la lucha, frente a las diversas amenazas y abusos que directamente sobre su persona ejercen quienes detentan el poder económico y/o político, con diferentes grados de violencia; o una colusión de ellos, como acontece en este caso.

## CAPÍTULO 1. EL DESIERTO CHIHUAHUENSE COMO CONTEXTO

Coahuila, estado que contextualiza geográficamente a esta investigación, conforma con Nuevo León y Tamaulipas la llamada Región Noreste de México<sup>1</sup>. Estos tres Estados tienen entre sí diferencias importantes por cuanto a sus configuraciones económicas y sociales, pero los tres encuentran en el Río Bravo el elemento común de sus identidades<sup>2</sup>; más aún, del otro lado de su cauce se encuentra Texas, estado de la Unión Americana con el que también, a pesar de casi dos siglos de presiones para marcar una hegemonía de la cultura anglo sajona, se comparten muchos de los rasgos de esa identidad riobravense.

Desde un punto de vista geomorfológico, la región de estudio se localiza en la parte norte del Altiplano de México, región que de acuerdo Granados Sánchez et al., (2011) tiene una delimitación bien definida entre Este y Oeste, puesto que sus límites físicos son la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, pero difusa en el eje Norte-Sur, donde no hay límites físicos tan evidentes. Debido a que se trata de un territorio donde llueve poco<sup>3</sup> y existen pocos cuerpos de agua superficiales, su biota está adaptada para soportar altos déficits de humedad atmosférica y temperaturas extremas; de ahí que, a partir de las peculiaridades taxonómicas encontradas en su vegetación ha sido definida como una región florística aparte, reconocida como Desierto Chihuahuense, diferenciándose en ella tres tipos florísticos: matorral desértico micrófilo, matorral desértico rosetófilo y matorral desértico crasicaule (Rzedowski, 1978).

Según Granados Sánchez et al. (2011), con sus 507,000 Km<sup>2</sup> este desierto es el de mayor extensión en Norteamérica<sup>4</sup>, extendiéndose al sur hasta parte de Guanajuato, Hidalgo y Querétaro y al norte partes de Nuevo México, Texas y Arizona (Mapa 1). Estos autores

---

<sup>1</sup> . Existen muchas regionalizaciones y se desconoce la referencia exacta de quien definió la Región Noroeste de México como el conjunto de estos tres estados o a la Región Sureste de Coahuila como conformada con los cinco municipios que aquí se asumen. No obstante, se encuentran tan extendidas como parte del conocimiento del dominio popular que aquí se asumen como convenciones establecidas, sin entrar en indagaciones más profundas

<sup>2</sup> . Esta identidad común se manifiesta de manera más intensa en las cercanías del Río Bravo, que en su Cuenca alta se extiende también como frontera con Texas, de Chihuahua (que con límite terrestre también la tiene con Nuevo México).

<sup>3</sup> . La escasez de precipitaciones está determinada principalmente porque se trata de una región continental que se encuentra limitada en su mayor parte por las cadenas montañosas de las mencionadas Sierras Madre, que obstaculizan la entrada de la humedad oceánica. Es de esta suerte que las precipitaciones medias anuales son bajas, variando de 175 mm en los valles de Coahuila, hasta 300-400 mm en las montañas localizadas en los límites occidental y sur. Las temperaturas diurnas en verano superan los 35°C y en algunas zonas hasta los 42°C, contrastando con temperaturas nocturnas de hasta -12°C en las zonas con altitudes mayores a 2,000 msnm (García et al., 1985).

<sup>4</sup> .Al tiempo de coincidir con Rzedowski (1978) y Granados Sánchez et al. (2011) en estimarlo como el desierto más grande de Norteamérica, el World Wildlife Fund (2020) lo considera el segundo con mayor diversidad biológica a nivel mundial, otorgándole dentro de sus propios parámetros o definiciones el carácter o nivel de Ecorregión.

retoman la propuesta de subregionalización que de ella hace Brown (1982), quien define como su “Zona Central” un territorio que comprende al Bolsón de Mapimí, el Oriente de Chihuahua, casi todo Coahuila (excepto su parte Noreste), Sur de Nuevo León, norte de Zacatecas y norte de San Luis Potosí. La cobertura de tal “Zona Central” de Brown (1982) prácticamente es la misma que a fines de los años ochenta del siglo XX fue denominada “Zona Ixtlera” por el FIDA. El World Wildlife Fund (2020) coincide con Granados Sánchez (2011), al considerar que las Sierras Madre definen sus límites al Este y al Oeste; prácticamente coincide con ellos en sus límites al Norte, pero difiere notablemente en los del Sur, pues excluye a Querétaro e Hidalgo y extiende un corredor que atraviesa Durango y llega hasta Nayarit y una pequeñísima porción de Jalisco. En esa medida, las estimaciones en superficie terminan difiriendo notablemente, ya que las define en 630,000 Km<sup>2</sup>

**Mapa 1. Región Florística Desierto Chihuahuense**



Fuente: Granados Sánchez et al (2011).

### 1.1. Agua y poblamiento de Coahuila hasta 1877

Todas las subregiones del Desierto Chihuahuense están sujetas a déficits de humedad y a variaciones de temperatura ambiente que desde siempre han limitado a los seres humanos para establecerse de manera permanente en ellas. Además de las incomodidades que el clima impone al cuerpo y a la salud, de todos es sabido que donde falta el agua no se puede desarrollar la agricultura, por tanto no se puede garantizar el abasto de alimentos. Así, desde antes de que se efectuara la invasión europea a este territorio, los pueblos originarios

que en él habitaron se adaptaron a un modo de vida itinerante que les permitió superar los retos derivados de esa carencia de agua.

Salvo la excepción notable la del pueblo Hohokam que construyó una sofisticada red de canales para riego, en las cercanías de lo que hoy es Phoenix, Arizona, entre el 800 y 1000 D.C. (Punzo, 2006; Hill., et al. 2015), no hay evidencia registrada de que haya habido otro pueblo que haya desarrollado algún sistema de producción agrícola en el Desierto Chihuahuense<sup>5</sup>. Resulta evidente, pues, que la falta de agua fue un factor determinante para que los pueblos que lo habitaban no pudieran superar su condición de nómadas. Así se encontraban a la llegada de los españoles los habitantes de la región estudiada, quienes basaban su sobrevivencia esencialmente en la caza y de la recolección, a diferencia del avanzado desarrollo de tecnologías agrícolas que alcanzaron las civilizaciones en Mesoamérica y en Centroamérica; circunstancia que fue determinante para que la totalidad de los centros urbanos de esta parte del país hayan sido fundados por los invasores.

Sin decir que las disputas por el territorio no hayan estado presentes entre los pueblos originarios desde antes de la llegada de los europeos<sup>6</sup>, tras estos últimos repartirse entre ellos mismos el territorio americano, afloraron de forma inmediata problemas de deslindes y obsesiones por reclamar estas regiones para sí; muchos de los cuáles que han permanecido vigentes o latentes durante siglos<sup>7</sup>. Y es que la historia nos muestra que, en la práctica, la Corona Española se quedó muy corta para completar la labor de colonización que le hubiera permitido tomar posesión efectiva del territorio que reclamó para sí; le faltaron muchas décadas, por no decir que siglos, para poder ocupar los enormes territorios ubicados al norte de Santa Fe y de San Antonio, creando una situación de abandono que primero abonó la ambición de los franceses posesionados de La Louisiana; cuyo interés por adueñarse del territorio bajo dominio español endosaron a los Estados Unidos, cuando en 1803 les vendieron ese territorio, puesto que en 1836 Estados Unidos se adueñó de Texas y en 1847 de todo lo que era el Noroeste mexicano.

Podemos entonces hablar que la pérdida de esos territorios son consecuencia de que nunca se consumó en ellos la colonización española; que durante todo el Virreinato la posesión que la Corona Española tuvo de la mayor parte de Aridoamérica y las zonas templadas que a lo largo del Pacífico se encuentran hasta lo que hoy es el estado de Oregon, le

---

<sup>5</sup> Punzo (2006) especula que monumentos arqueológicos como los de Casas Grandes u otros menores encontrados en varios afluentes del Nazas y el Conchos sólo pudieron hacerse logrado en lugares donde se desarrolló la agricultura.

<sup>6</sup> Aunque no se pueda afirmar que no haya habido conflictos por el agua y por la tierra entre los pueblos originarios, se puede señalar que muy probablemente hayan sido diferentes y en el mejor de los casos menos álgidos, en tanto que por ser nómadas su relación económica con la tierra era precapitalista y carecía de los apegos a su potencial agropecuario; además de que su perfil cultural-religioso determinaba formas de concebir a los elementos de la naturaleza diferente a la visión cristiana; es decir, no que no tenían una relación con la tierra de tipo mercantil ni que sus deidades habían puesto a la tierra y sus “recursos” a su servicio como seres superiores, como sí lo era en el caso de los invasores europeos.

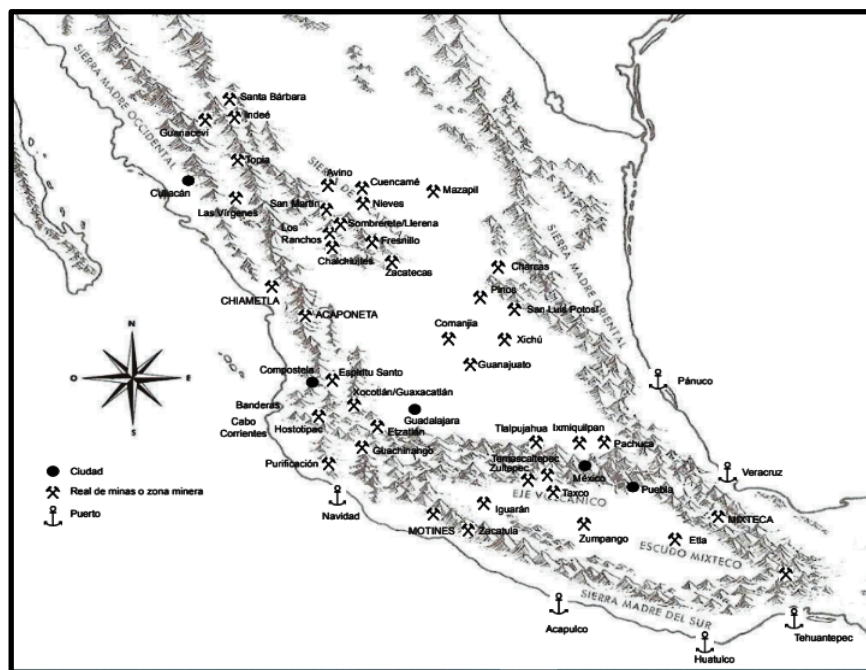
<sup>7</sup> Los mexicanos no estamos exentos de ellos, desde 1847.



pertenecieron solamente en el papel, puesto que en la realidad nunca logró su ocupación efectiva. Las fuentes historiográficas coinciden en señalar que la motivación fundamental que los invasores españoles tuvieron para fomentar el poblamiento de estos lugares tan agrestes fue la búsqueda de plata y oro; debido al hecho de que los yacimientos se fueron descubriendo del lado de la Sierra Madre Occidental, el interés por colonizar los territorios al centro del Altiplano (i.e. Coahuila-Texas) quedó relegado; ya no se diga al Reino de Nuevo León (Nuevo León-Tamaulipas), ubicados en la vertiente de la Sierra Madre Oriental que baja hacia el Golfo de México (Mapa 2).

## 1.2. Minería y despoblamiento del Noreste de México

**Mapa 2 Actividades mineras y principales poblaciones en Nueva España durante el siglo XVI**



Fuente: Hillerkus, 2013

La secuencia de los descubrimientos y explotación de minas de esos metales preciosos, durante la Época Colonial, empujó la orientación de la invasión, iniciando de la Ciudad de México, primero hacia Guanajuato y Jalisco y de ahí hacia Zacatecas y Durango<sup>8</sup>. Por razones geológicas, los filones se encontraron siempre cercanos a la Sierra Madre Occidental; de tal suerte que medio siglo después de la caída de Tenochtitlan la mayor parte

<sup>8</sup> Según Rodríguez García, E. (2013, p. 56), “La mayor cantidad de plata exportada de la Nueva España en el periodo colonial se extraía de los yacimientos de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Chihuahua. Esta riqueza minera constituyó el factor decisivo para la colonización del norte mexicano.”

de lo que hoy son los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas todavía estaban despoblados; ya no se diga Texas. Fue así que durante el resto del Siglo XVI, la tendencia del poblamiento fue la de expandirse, siempre vinculadamente a la minería, hacia el Noroeste de la Nueva España; primero hacia Chihuahua y luego hacia Nuevo México.

Al cabo de unos años esa subregión del Desierto Chihuahuense cobró una importancia mayor con la construcción o reconstrucción<sup>9</sup> del Camino Real Tierra Adentro, una ruta que se trazó aprovechando los antiguos caminos prehispánicos (LaMadrid E. et al., 2005) y que para los primeros años del Siglo XVII constituía una vía de 2,400 Km<sup>10</sup> que conectaba los centros urbanos-mineros fundados por los españoles desde Guanajuato (fundado en 1570) hasta Santa Fe (fundado en 1610, en lo que hoy es el estadounidense Nuevo México). Rodríguez García (2013) cita algunos acontecimientos que marcaron el inicio del siglo XVII, precisando que con la fundación de la ciudad de Albuquerque, en Nuevo México (1706), y la de Chihuahua (1709) se consolidó dicho Camino Real.

Aunque la fuente de la que se obtuvo el Mapa 2 no indica la fecha, se pueden tomar como referencia los datos de que ya aparecen: Mazapil, Zacatecas que fue fundado en 1562; Santa Bárbara, Chihuahua, fundada en 1567; al no aparecer Saltillo, que se fundó en 1577, se podría pensar en fechar el mapa en los primeros años setenta del Siglo XVI. Existe en esa mapa, no obstante, la inconsistencia de que aparece San Luis Potosí, que fue fundado en 1592 o lo que es lo mismo quince años después que Saltillo; de ahí que la omisión de Saltillo en el mapa, desde la perspectiva de quien esto escribe, se pueda interpretar de dos maneras: una que se trate de un error del dibujante o del autor del artículo; la otra, que siendo el interés particular de este autor el de resaltar las localidades mineras, resulta muy probable que la no inclusión de Saltillo se debe a que se trata de una localidad no minera<sup>11</sup>.

Dado que el interés central de esta investigación está centrada en el agua y su importante rol en la creación de instituciones sociales y económicas, resulta de lo más relevante

---

<sup>9</sup> A la pregunta de si ¿Existió un Camino Real de Tierra Adentro que uniera el lejano norte de los indios pueblo, con el centro de Mesoamérica? Puzos (2006) plantea que "...si entendemos camino no necesariamente como lo pensamos hoy día, como una carretera o una vereda de terracería que une los grandes centros poblacionales de Mesoamérica con el Gran Noroeste, sino como una ruta por donde transitan ideas y objetos, la respuesta debe ser a todas luces afirmativa... [y que]... Esa pregunta se la han hecho prácticamente todos los investigadores que han trabajado en el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos de América (EUA), quienes han llamado al camino de muchas maneras; la más lograda y trabajada es la Ruta de la Turquesa, propuesta por el doctor Phil Weigand..."

<sup>10</sup> No existe un acuerdo respecto a la longitud que tuvo este Camino Real, pues las cifras que manejan diferentes actores van desde los 2,200 hasta los 2,900 Km.

<sup>11</sup> Quien esto escribe se inclina por la segunda; es decir, que se debe a que la fundación de Saltillo no estuvo relacionada, al menos directamente, con la minería. Un apoyo adicional a este punto de vista es el hecho de que el mencionado mapa tampoco incluye a Parras de La Fuente, que aunque fundada unos pocos años después que Mazapil y San Luis Potosí (en 1598), para los primeros años del Siglo XVII ya había adquirido una gran fortaleza económica, no por su producción minera sino por su producción agrícola.

constatar que la primera fundación poblacional del Sureste de Coahuila fue la de Parras de La Fuente, que definitivamente marca una absoluta diferencia motivacional respecto a las ciudades del Noroeste. Desde luego, no se está diciendo que no tuviera una relación indirecta con la minería, ya que el hecho de ubicarse Parras a menos de 50 kilómetros al norte de una de las franjas mineras de oro más importantes hasta la actualidad (la que incluye a Mazapil) la convirtió inmediatamente en un punto estratégico para sostener la actividad minera; literalmente en un gran y generoso oasis en medio del desierto, en el cual hasta nuestros días se tiene la posibilidad de producir alimentos y fruticultura comercial. Esto es, que no se fundó porque hubieran minas sino por su gran cantidad de manantiales<sup>12</sup>, que hicieron posible la consolidación de su producción agrícola y agroindustrial: vitivinícola en el caso de Parras y textil para el caso de Saltillo; también hizo viable la crianza de ganado vacuno lechero, como en la Sierra de Arteaga-Zapalinamé, que tiene mayor valor en el mercado que el ganado caprino que es, de los dos tipos, el único que se adapta para sobrevivir en las zonas semiáridas.

En términos reales, durante los tres siglos que duró el Virreinato, el Reino de España jamás tuvo la capacidad de ocupar de facto los territorios que bajo la institucionalidad *de jure* se había autoadjudicado, mediante el proceso de despojo a los pueblos originarios; las fronteras reales del dominio y poder español se encontraban precisamente en los territorios donde se realiza actualmente esta investigación, porque cualquier intento de colonización más hacia el norte de los últimos macizos de la Sierra Madre Oriental (unos ciento cincuenta kilómetros al norte de Saltillo) era desarticulado por las permanentes incursiones de apaches y comanches en resistencia.

Pero hay que prevenirse de no caer en explicaciones reduccionistas y considerar que en el tipo de poblamiento que se gestó en esta región dependió exclusivamente de la minería y del clima. En la revisión bibliográfica se encontró que también hubo importantes razones políticas, como las que se pueden destacar en el siguiente texto de Santoscoy Flores (2016), que hace referencia a la crítica original que hiciera Fray Juan Agustín Morfi (Morfi, 2010) respecto al despoblamiento que encontró a su paso durante la travesía que hizo como acompañante de Théodore de Croix, enviado del Rey para reconocer los territorios del norte de Nueva España, en las postrimerías de El Virreinato; puesto que al referirse a Parras de la Fuente señala que:

...La existencia de enormes latifundios impidió la creación de nuevas fundaciones en la Provincia de Coahuila. En el año de 1777 fray Morfi así lo informó al rey Carlos III, alegando que tal era “ la causa de la despoblación de las Américas”. Sobre el pueblo de Santa María de las Parras, el propio fraile anotó que su población hubiera crecido rápidamente si en lugar de otorgar la tierra en inmensas porciones la hubiesen distribuido en “suertes vecinales”. Criticó mucho el hecho de que se había antepuesto

---

<sup>12</sup> De la misma manera que las severas condiciones ambientales han representado hasta nuestros días un factor fuertemente limitante para el desarrollo de sus fuerzas productivas, la presencia de la Sierra Madre Oriental en el Sureste da lugar a la conformación, en las umbrías y algunos valles pequeños y cerrados de sus partes más altas, de “islas” de clima templado que, además de proporcionar un alivio de su sufrimiento por calor a los pobladores de los entornos, propician la formación de nubes y la caída de lluvias que, al infiltrarse, depositan en su subsuelo los mantos de agua de los que se alimentan o alimentaban manantiales que afloran o afloraban en muchos sitios.

“dar gusto a cuatro poderosos que se hicieron dueños de los antiguos pueblos”, no quedándole al vecindario ni un palmo de tierra para ejidos [...] porque los Hornos, Santa Bárbara, manantial y viña del colegio los posee la ocupación de las temporalidades [jesuitas]; las tierras y aguas de la dotación de los pueblos de Parras y el Álamo [Viesca] los supuestos tlaxcaltecas, y todo el resto es de tres particulares, ninguno de ellos vecino del lugar.

Santoscoy Flores (2016, p.161).  
(el subrayado es mío)

Llama en este texto la atención que refiera a “supuestos tlaxcaltecas”, pues da a maliciar que existieron algunas suertes de prestidigitación de los actores locales para hacer uso de camuflajes o de simulaciones con intención de burlar la ley, como para sacar algún tipo de provecho personal o de grupo, tal cual suele suceder en nuestros días.

Independientemente de la ausencia de recursos minerales con potencial especulativo<sup>13</sup>, la literatura tiene muchos llamamientos a ver que fue el agua el factor que hizo diferente la forma de desarrollo de los centros urbanos coloniales del Sureste de Coahuila, ya que en ese mismo tenor, respecto a la riqueza de manantiales a los que refiere a Morfi (2010), pero ya no para Parras, sino para Saltillo, resulta ilustrativa la siguiente descripción de otro autor:

Si bien en el valle de Saltillo no se contaba con ríos grandes sino fundamentalmente con arroyos y ciénegas, los ojos de agua y cauces eran muy numerosos: en 1777, fray Juan Agustín de Morfi, al visitar Saltillo, señalaba la existencia de más de 665 manantiales en el valle.

Quince años más tarde, en 1792, el bachiller Pedro Fuentes, cura de Saltillo señalaba sobre el valle de Saltillo: “De lo primoroso de sus tierras y abundancia de aguas se colige claramente la abundancia de semillas que producen sus muchas labranzas.”

Agregaba el padre Fuentes que todas las aguas del valle “sin excepción alguna”, eran “dulces, cristalinas, frescas y hermosas...”

Recio Dávila C. (2021, p. 14).

Los datos que ofrece Fray de Morfi, tomados directamente por él al inicio del tercer cuarto del Siglo XVI muestran que era muchísima la cantidad de agua que en aquella época afloraba de manantiales; se infiere de ellos que, incluso si estuviera incluyendo los manantiales de Arteaga (que son donde en la actualidad son más numerosos), explican porqué en lo que hoy se denomina Región Sureste de Coahuila pudieron obtenerse volúmenes de cultivos y crianzas suficientes para sostener procesos agroindustriales. De manera indirecta también nos explican, por contraste, porqué hasta nuestros días el Oeste-Noroeste coahuilense y su colindante Este-Noreste Chihuahuense se encuentran en casi absoluto despoblamiento, pues aunque pertenecen al mismo bioma son zonas que no disponen (o en los que no han sido detectados en su subsuelo) ni minerales ni agua.

---

<sup>13</sup> Aunque Coahuila también se considera un estado minero en las estadísticas económicas nacionales, lo es por otro tipo de minerales que ni son metálicos, ni mucho menos preciosos, pues las regiones productoras de plata y de oro empiezan justo afuera de sus límites territoriales, en Zacatecas.

Como quiera que sea, a partir de la discusión anterior, se puede sostener la afirmación de que el poblamiento de Coahuila, Texas, Nuevo León y Tamaulipas respondió a una lógica diferente al generado por la minería de metales preciosos, que se dio en el Noroeste de la Nueva España. Con la excepción de Parras de La Fuente, Saltillo, Monclova, Nadadores, Los Adaes y San Antonio, cuyo poblamiento se remonta a la Época Colonial<sup>14</sup>, la mayoría de las ciudades de Coahuila-Texas fueron fundadas hasta la segunda mitad del Siglo XIX.

### 1.3. Siglo XIX: despoblamiento y despojo territorial

La Independencia de México no marcó más cambio que el desmembramiento del Marquesado de Aguayo en varios latifundios a nombre de nuevas familias de hacendados. Sin duda que es de enorme importancia para la reconfiguración de las territorialidades locales, pero en términos del territorio a escala nacional no hubo ningún impacto. El esquema administrativo centralista, que quedó intacto tras la Guerra de Independencia mantuvo las condiciones propicias para que los territorios al norte del Río Sabinas, pero sobre todo los localizados al norte del Río Bravo permanecieran abandonados.

Durante los dos primeros tercios del Siglo XIX México se vio envuelto en constantes enfrentamientos armados, derivados de la pugna sobre el tipo de régimen político que debería tomar el país. Unos por la monarquía y otros por la república, los gobiernos que se sucedieron al menos hasta la séptima década de esa centuria vivieron en una crónica inestabilidad política, siempre fomentada por intereses colonialistas externos, de Europa y de Estados Unidos de América; así se perdió primero Texas y después Nuevo México, Arizona, La Alta California, Colorado, Nevada, parte de Utah y Oregon. Los enfrentamientos armados, sumados a otros factores de crisis como las epidemias y la pérdida de la mitad del territorio nacional en 1848, tuvieron un impacto demográfico notable; Romero y Jaúregui (2003) explican que debido a ellos México tuvo un crecimiento demográfico menor que el de los países europeos entre 1820 y 1870; explican que, en los años que duró la Guerra de Independencia y debido a la violencia que se desprendió de ella, el número de habitantes de localidades mineras descendieron de forma drástica, debido a que obreros y trabajadores especializados en la minería emigraron en gran escala. Así, por ejemplo Guanajuato perdió dos terceras partes de sus habitantes, pero también hubo severos descensos poblacionales en Real del Monte, Pachuca, Zacatecas y Durango. Por contraparte, crecieron la Ciudad de

---

<sup>14</sup> . Monclova y Nadadores fueron fundadas en 1674; y aunque siempre iban juntos militares y religiosos, se considera que la primera funcionaba más como guarnición militar y la segunda como misión. San Antonio, Texas, se fundó en 1718, originalmente como misión aunque más bien para facilitar a los españoles el tránsito por el *Camino Real de Los Tejas*, que conectaba Saltillo con Los Adaes, asentamiento que terminó siendo abandonado pero que en su momento fue considerado por los españoles la capital de Texas, ya que fue fundado específicamente para contener el avance de los franceses que, siendo colonizadores de Louisiana, aspiraban a extenderse hasta el Río Bravo (Gregory H.F. et al (s/f)).

Monclova mantuvo los poderes políticos del hoy territorio de Coahuila hasta que en la Constitución de 1824 se creó el Estado de Coahuila y Texas y los trasladó a Saltillo (recuperado el 21/05/2018 de [https://coahuila.gob.mx/flash/conoce\\_coahuila/mapas/pdfs/pdfs\\_anteriores/monclova.pdf](https://coahuila.gob.mx/flash/conoce_coahuila/mapas/pdfs/pdfs_anteriores/monclova.pdf)).

Nadadores fue abandonada un tiempo, pero fue refundada en 1733 en un sitio un poco más alejado del Río Salado de los Nadadores (Escobedo De León, 2014).

México, Guadalajara y San Luis Potosí, por ser destino principal de esas migraciones; cabiendo destacar que este último vio fortalecer su sector minero debido a que sacó provecho de la desarticulación del sector minero y se hizo de muchos canales de comercialización que antes se concentraban en otras ciudades<sup>15</sup>.

Tras el breve Imperio de Iturbide, con la erección de la República los constituyentes propusieron fomentar la ocupación efectiva de los extensos territorios deshabitados desde el Virreinato; fue así que el 18 de Agosto de 1824 se expidió la Ley de Colonización. Las leyes y dependencias administrativas que se expidieron entre esa primera legislación y el inicio de El Porfiriato, con ese mismo propósito fueron las siguientes, de acuerdo a De Vos (1985): Ley de Colonización de 6 de Abril de 1830; creación de la Dirección de Colonización e Industria en 1848<sup>16</sup> y proyecto de ley de 1854, de Santa Ana; proyecto de ley de 1856, de Comonfort; Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos del 22 de julio de 1863, de Juárez; Ley General sobre Colonización del 31 de mayo de 1875, de Lerdo de Tejada.

La agitación social en la que se encontraba el país puso coto a la efectividad de estas leyes, tanto por la incapacidad política y económica del naciente Estado para aplicarlas<sup>17</sup>, como porque al amparo de ellas se observó en el Noreste un importante crecimiento demográfico después de la Guerra de Independencia, que en pocos años resultó contraproducente, pues como explican Romero Sotelo y Jaúregui (2003) este se debió a la llegada masiva de colonos estadounidenses a Coahuila-Texas, que en 1836 tuvieron que ser descontados de los censos tras promover ellos mismos la Independencia de Texas; de tal modo que, explican los mismos autores en la Región Noreste de México “*el crecimiento rápido se reinició después de 1869*”.

Como puede observarse, a pesar de los buenos deseos y de los empeños de los sucesivos gobernantes de revertir el despoblamiento histórico de las regiones fronterizas de México la

---

<sup>15</sup> Romero Sotelo y Jaúregui (2003) explican a lo largo de su artículo que los movimientos migratorios se relacionaban estrechamente con la crisis minera y agrícola debido a que son actividades que se efectúan en el medio rural; por tanto estaban más expuestas a la violencia de la guerra. En ese contexto, también motivaron movimientos migratorios de los trabajadores portuarios de Tampico o de sectores más diversificados pero localizados cerca de las confrontaciones bélicas, como en Valladolid (hoy Morelia).

<sup>16</sup> Romero Sotelo y Jaúregui (2003, p. 37) proporcionan la siguiente información que complementa la que ofrece De Vos (1985): “*Tal vez debido a ese triste acontecimiento [la separación de Texas], el gobierno creó una institución encargada de buscar soluciones al problema del poblamiento del territorio nacional. De esta forma, el 1 de junio de 1839 se creó la Dirección General de Colonización e Industria. Años después, el 27 de noviembre de 1846, a esta institución le fueron asignados fondos especiales para operar sus programas.*”

<sup>17</sup> Señala De Vos (1985, p. 79) que las luchas civiles entre liberales y conservadores impidieron que fueran aplicadas las leyes de 1824 y 1830, que “*apuntaban a lograr poblar, sobre todo, a los estados del norte árido*” y que la ley de 1863:

“*...resultaba costosísima para una persona en particular. No era realizable ésta, sino por el gobierno mismo o por poderosas compañías creadas con ese fin... [y que]... por eso, en 1875, el presidente Lerdo de Tejada decidió confiarla a la iniciativa privada y legislar en ese sentido. El 31 de mayo de 1875, dictó la Ley General sobre Colonización, confiando explícitamente la tarea colonizadora, además de al Estado, a empresas particulares. Estas recibieron toda clase de facilidades...*

mayor parte de las del norte<sup>18</sup> seguían deshabitadas, ya que los intentos de colonización no mostraban resultados positivos. Por su parte, la presión de factores externos estuvieron siempre a la orden del día, siendo de tal suerte que en 1847 el país fue despojado de más de la mitad de su territorio, por los estadounidenses; manteniéndose la amenaza de nuevas invasiones, ya que durante ese periodo casi se pierde por completo el país, tras el embate del ejército francés y el intento de instaurar una extensión del linaje imperial Habsburgo.

Un factor adicional de la mayor trascendencia para la prolongación del despoblamiento durante todo el Siglo XIX, también de origen externo pero muy poco conocido fuera de los historiadores de la frontera norte, lo fue la persistencia de los ataques de los Apaches. Para contextualizar las incursiones de estos guerreros desde el país del norte hay que tener presente que entre 1861 y 1865 se libró la Guerra de Secesión en Estados Unidos, tras la cual prosiguió la llamada “Conquista del Oeste” y con ella campaña para exterminar a los pueblos originarios que defendían sus territorios de la invasión anglosajona. Guerra y colonización estadounidenses empujaron a los Apaches y Comanches a incursionar en México. Una tierra que también les resultó hostil, pues como explica Durazo Herrmann haciendo referencia a otro autor (González (1995 v.4:24ss.)):

La aceptación del carácter bárbaro de los apaches autorizó el uso de todos los métodos de guerra, incluidos los prohibidos por el *jus belli*. Con esta base se recurrió a la traición, la violación de la inmunidad de los emisarios y la ruptura de las treguas. El objetivo de la guerra apache, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, fue el exterminio<sup>19</sup>...

Durazo Herrmann (2001, p.96).

#### **1.4. La segunda mitad del Siglo XIX como segunda etapa fundacional de Coahuila**

A partir de la enorme pérdida de territorio se acicató en los mexicanos la urgencia por colonizar la despoblada frontera norte. Por lo que toca al caso de Coahuila, en 1850 se enviaron los primeros colonos a asentarse en las abandonadas riberas del Río Bravo. Tal es el origen de las ciudades de Piedras Negras y Acuña. En el primer caso, de acuerdo a Villarello I. (1973), en 1848 se ocupó el predio situado frente al Fuerte Duncan (hoy Eagle

---

<sup>18</sup> Desde luego, también se allude la frontera sur, de la que poca mención explícita se hace en este documento; pero que en este tema del despoblamiento muestra un patrón similar, por cuanto a que está relacionado con la falta de dominio real del Estado y sus poderes instituidos, durante siglos en sus territorios aledaños.

<sup>19</sup> En ese contexto de violencia y racismo, que Durazo Herrmann (2001) vincula con el vacío de poder que dejaba el gobierno central por su incapacidad para atender los territorios fronterizos y que era aprovechado por los gobernadores norteros para abrogarse la competencia federal de ejercer el control contra los apaches, dicho autor ofrece una conclusión por demás interesante:

*“...la política exterior no tradicional, conducida por entidades subestatales (estados federados) frente a un enemigo extracivilizacional, “bárbaro”, es fundamental en la explicación de la frontera septentrional mexicana como la conocemos hoy. Así, una perspectiva heterodoxa de los problemas de México en sus relaciones con las naciones indígenas puede servir para analizar exitosamente la política exterior mexicana...”*

Pass), que había sido fundado el año anterior al lado norte de dicho río<sup>20</sup>; pero se presentó el propietario del terreno y al no fructificar esa fundación civil el gobierno mexicano dispuso construir la Colonia Militar Guerrero, que se aprovisionaba en el Fuerte Duncan y que hoy se reconoce oficialmente como el asentamiento fundacional de Piedras Negras. Desde ahí se envió en 1860 una partida a fundar la Colonia Militar Manuel Leal, que tras varios cambios de denominación hoy lleva la de Ciudad Acuña. En el intermedio, en 1850 se fundó El Nacimiento, un lado de un afluente del Río Sabinas, en el actual municipio de Múzquiz, para dar a un grupo de Kikapooos, procedente de la Región de los Grandes Lagos en el Canadá<sup>21</sup>, a quienes Benito Juárez otorgó la nacionalidad mexicana y con ella la posesión de la tierra<sup>22</sup>, a cambio de su compromiso de colaborar con su gobierno a contener las incursiones de Apaches y Comanches que asolaban a los colonos del centro del estado (Mager, 2006).

Esto es, que tras más de medio siglo de Independencia apenas si se había logrado, en el periodo presidencial juarista, un pequeño avance en el poblamiento de la franja definida por la presencia del Camino Real de Los Tejas, con la fundación exitosa de dos asentamientos al Norte de Monclova; el primero a unos 100 Km de esta ciudad, que dio cabida a empleados y obreros de la mina carbonífera Nueva Rosita, concesionada a una empresa inglesa; poblado desde el cual se construyó un ramal de poco más de 50 Km hacia el Oeste, desde el cual se llega al segundo de ellos, El Nacimiento, fundado por el pueblo originario Kikapoo, procedente de Canadá<sup>23</sup> con la encomienda de ser un punto de contención a las

---

<sup>20</sup> En aquellos años la ciudad mexicana más cercana para abastecerse era Monclova, ubicada a 300 Km de distancia; para llegar, además de que en aquel entonces esa distancia representaba muchos días de viaje, los viajeros tenían que correr grandes riesgos, incluso el de la muerte, dados los constantes ataques de apaches y comanches. En ese sentido, el propósito de los colonos mexicanos, al asentarse frente a ese destacamento militar estadounidense, era el de aprovechar para su propia sobrevivencia las mercancías y aprovisionamientos que llegaban para sus elementos desde San Antonio y/o Laredo (Villarello I., 1973).

<sup>21</sup> Martínez Sánchez (2008) explica que las tierras que les fueron concedidas son una fracción de las que les fueron confiscadas en 1867 a Jacobo y Carlos Sánchez Navarro, tras haberlos enjuiciado bajo el cargo de traición a la patria, por haber formado parte de la estructura de gobierno de Maximiliano de Austria. Mager Hois (2006) explica que al lado de la localidad de Nacimiento el gobierno juarista también cedió terrenos a un grupo de personas de raza negra, que pidieron asilo para huir de la esclavitud a la que estaban sometidos en los Estados Unidos de América. Grupo al que pasaron a denominar mascogos.

<sup>22</sup> Aunque en una primera aproximación a este asunto pareciera no tener demasiada importancia el otorgamiento de la nacionalidad mexicana, en la práctica marcó una marcada diferencia entre los derechos de los Kikapooos y las de los Apaches. De hecho una diferencia con consecuencias fatales para estos últimos. Durazo Herrmann (2001) retoma de Luis Aboites Aguilar (1995: 75-89) la convicción de que “El México independiente heredó de la colonia un sistema contradictorio de relaciones con los pueblos indígenas en su seno. La tradición de las leyes de Indias separaba las repúblicas de indios de las de españoles, lo que en el septentrión se expresó en una división tajante entre indígenas sedentarios y nómadas”

<sup>23</sup> De acuerdo a su tradición oral, dejaron sus tierras de Wisconsin debido a la presión de los colonizadores anglosajones, ya que quienes quedaron del lado canadiense pudieron permanecer sin hostigamiento. Se desplazaron hacia el sur, realizando su primer asentamiento en Texas, mismo que les fue reconocido por quien fuera el primer presidente de México Guadalupe Victoria; con la anexión de Texas a Estados Unidos, con la intención de continuar bajo la protección del Estado mexicano decidieron seguir su migración hacia el sur, hasta llegar a Múzquiz, Coahuila, donde el entonces



incursiones de apaches y comanches, que representaron un obstáculo que por momentos parecía insalvable para los intentos de colonizar esa parte del estado.

Localidades que hoy son ciudades importantes en la región centro del estado fueron fundadas hasta la segunda mitad del Siglo XIX. Tales son los casos de San Juan de Sabinas y de Sabinas, fundadas respectivamente en 1866 y en 1883; la primera por Decreto de Juárez<sup>24</sup> y la segunda al establecerse ganaderos de Ramos Arizpe atraídos por las facilidades que les otorgó el gobierno central para instalarse con sus hatos en terrenos aledaños al Río Sabinas. Obsérvese la importancia del agua en la definición de los sitios para fundar los nuevos centros de población; puede parecer una obviedad pero no se deja de mencionar tal detalle, en tanto su relación y relevancia para el interés del presente estudio; destacando también que la fundación de Sabinas se realizó ya durante El Porfiriato.

A pesar de haberse logrado establecer algunos nuevos asentamientos, la realidad del despoblamiento seguía extendiéndose por todo el Oeste, Noroeste y Norte de Coahuila<sup>25</sup>. Para 1887, año en que el tomó posesión Díaz como Presidente de la República, La Laguna apenas si había empezado a colonizarse, pues como lo señala Guerra (2006) "...Torreón no era sino un rancho con unos pocos años de haber sido oficialmente fundado...". En ese mismo contexto histórico las únicas poblaciones en territorio coahuilense con perfil urbano asentadas al lado del virreinal Camino Real Los Tejas seguían siendo Saltillo y Monclova; las dos guarniciones militares que después serían Piedras Negras y Acuña eran más bien como "asentamientos de avanzada"; fuera de dicho Camino Real, fundadas sobre un ramal, Nueva Rosita y Nacimiento no eran sino pequeños caseríos. Se puede decir entonces que la parte coahuilense funcionalmente articulada al territorio nacional era, al final de El Porfiriato, casi la misma que la que la articulaba al término del Virreinato con Nueva España.

## Conclusión

En presente capítulo se ha dedicado a ofrecer una panorámica general de la evolución económica y demográfica de los territorios que hoy conforman el estado de Coahuila. La razón fundamental de abordar estos temas de producción y población es que son dos factores que tienen un papel determinante para definir la magnitud de las presiones que se ejercen por las sociedades humanas para usar de manera adecuada o inadecuada el agua; tanto y más en un bioma semidesértico como lo es el Desierto Chihuahuense, donde el agua resulta ser el elemento natural más escaso.

---

presidente de la república José Joaquín Herrera les obsequió tierras, que posteriormente les legalizó Benito Juárez, bajo un acuerdo de autonomía.

<sup>24</sup> Juárez funda el municipio de Sabinas sobre una fracción del latifundio confiscado a la familia Sánchez Navarro (Martínez Sánchez, 2008).

<sup>25</sup> Lo sorprendente no es tanto eso, sino el hecho de que siglo y medio después poco ha cambiado este perfil poblacional, pues aunque actualmente las dos localidades señaladas sean ciudades consolidadas, fuera de ellas el estado sigue sin contar en su parte Oeste-Noroeste con localidades cuya población rebase los 500 habitantes. Más aún, el área despoblada se continúa hacia el oriente, hasta bien entrado el estado de Chihuahua. Para dar una mejor idea de lo que esto significa, se puede decir que se está hablando de extensiones territoriales tan enormes que equivalen a las que tienen juntos varios estados del centro y sur del país.

Al mediano o largo plazo el uso inadecuado del agua genera su escasez, lo cual deviene generalmente en un desequilibrio ambiental y en injusticia social, propiciando con ello un contexto favorable a dinámicas de competencia entre los actores para acceder a su uso. Escasez y competencia por el agua crean, en el seno de cualquier sociedad, un medio propicio para el desencadenamiento de disputas entre sus integrantes por este elemento natural, puesto que el agua es un insumo esencial para los sistemas de producción de cualquier sector económico; pero si este tipo de disputas son en sí mismas ya un problema de consecuencias impredecibles, el asunto se vuelve grave cuando las disputas por el agua se dan en un medio donde la escasez es tan grande que no alcanza ni para satisfacer las necesidades mínimas de consumo humano.

En la medida que durante los años que corren del siglo XXI los conflictos por el agua en el Sureste de Coahuila se han ido incrementando tanto en número como en magnitud, el conocimiento de sus causas representa un aspecto de enorme importancia para comprender la problemática socioambiental que actualmente aqueja a quienes habitan en esta región, tanto en localidades rurales como urbanas. De la narrativa presentada en los párrafos del presente capítulo puede deducirse que la lentitud del proceso de poblamiento que tuvo lugar en el centro y norte de Coahuila desde la invasión española tiene estrecha correspondencia con los elevados riesgos que implicaba la creación de nuevos asentamientos; esto es, que sumado a lo inhóspito del clima y la pocas fuentes de agua, la defensa del territorio por parte de los pueblos originarios hizo de la fundación de nuevos centros de población una empresa en la que se podía incluso perder la vida.

El poblamiento del Sureste de Coahuila cursó un proceso histórico notablemente diferente al del resto de las regiones de lo que hoy es el territorio estatal. La disponibilidad de grandes volúmenes de agua permitió el sostenimiento de las sociedades urbanas cuya importancia para el Estado Virreinal era la de que proporcionaban las condiciones adecuadas para dar cabida a una burguesía mercantilista y a una clase gobernante, protegida de varias maneras por una población numerosa.

Los manantiales que abundaban en las cordilleras plegadas de la Sierra Madre Oriental, ya se ha dicho, fueron la base para que Saltillo y Parras de La Fuente se consolidaran como centros urbanos y sedes del control político colonial. Esto es, que los flujos de capital hacia la región sur mostraron saldos muy positivos, lo cual se reflejó en el mejoramiento de los volúmenes de producción y de las infraestructuras y servicios en torno dichas ciudades. Mientras tales ciudades se consolidaban económica y urbanísticamente durante todo el Siglo XIX, para seguir siguiendo las principales del estado. A partir segunda mitad del Siglo XIX se inicia la fundación de nuevos asentamientos en el centro y norte del estado, así como en la Comarca Lagunera.

## CAPÍTULO 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL SURESTE DE COAHUILA

*El cronista que narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, da cuenta de una verdad: que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia. Por cierto, que sólo a la humanidad redimida le cabe por completo en suerte su pasado. Lo cual quiere decir: sólo para la humanidad redimida se ha hecho su pasado citable en cada uno de sus momentos. Cada uno de los instantes vividos se convierte en una citation À l'ordre du jour, pero precisamente del día final.*

Walter Benjamin, 1942.<sup>26</sup>

En este Capítulo 2 se retoma la historia económico-demográfica abordada en el Capítulo 1, pero ahora realizando una descripción más focalizada y detallada<sup>27</sup>, pues ya no se hace referencia a todo el estado sino solamente a la *Franja Sur del estado de Coahuila*, que comprende las actuales Región Sureste de Coahuila y Comarca Lagunera<sup>28</sup>. La secuencia de temas que se abordan se enlaza con las descripciones generales que para el Estado de Coahuila se hacen en el Capítulo 1; tomándolas como contexto de las especificidades del proceso de poblamiento del Sureste de Coahuila; región del estado en la que fueron fundados la casi totalidad de las ciudades que jugaron un papel hegemónico, tanto en lo político como en lo económico, durante todo el Virreinato.

En base a la revisión bibliográfica realizada para referenciar históricamente al Sureste de Coahuila, se tiene la impresión que los cronistas tienden a concentrar la mayor atención de su actividad en sus centros urbanos, en donde abundan los personajes ligados a los poderes político, económico, cultural, científico, religioso y de cualquier sector. En contraste,

---

<sup>26</sup> En Benjamin W. (2008: 37-38).

<sup>27</sup> Este cambio de escala está respaldado con los argumentos metodológicos que se exponen en el apartado 6.6 de este documento.

<sup>28</sup> El vertiginoso crecimiento demográfico y económico de la Comarca Lagunera tuvo mucho que ver con el hecho de que a fines del Siglo XIX presentaba menos riesgos para los colonos debido a la ausencia de pueblos originarios guerreros, pero sobre todo a la presencia de los ríos Aguanaval y Nazas, gracias a los cuáles muy pronto se transformó en una rica región productora de algodón y hoy día es considerada por algunos como la “Cuenca Lechera más grande de América Latina” (Encuentro Ciudadano Lagunero, 2013).

En el texto original de su libro Historia de Torreón, escrito en 1932, el historiador Eduardo Guerra atribuye la fundación de esa ciudad a las decisiones del empresario Andrés Eppen, explicando que principios de los años ochenta decimonónicos promovió la construcción de una colonia en el punto donde estaba proyectado el cruce de los ferrocarriles Internacional y Central Mexicano. Sin embargo, en una nota al calce de la edición comentada de 2006 de su mismo libro, Castañón Cuadros pone la siguiente nota: “En realidad Torreón es producto de una serie de circunstancias o procesos sociales mucho más complejos y anteriores a la influencia individual de Andrés Eppen y el Ferrocarril. Al menos desde 1850 ya operaba el rancho del Torreón, y fue sin lugar a dudas el punto de partida para la formación de la congregación (1887), la villa (1893) y luego la ciudad (1907).” (Guerra, E. 2006; p 11)

la información asequible en la prensa u otros medios de difusión sobre los conflictos por el agua que en ella acontecieron durante el siglo XX y la primera década del siglo XXI son en extremo escasos. Sea debido a que quizá no se daba la debida importancia a la posibilidad de que llegara un día en que faltara el agua, o quizá porque los conflictos se hicieron visibles solamente hasta después de que las modificaciones al marco constitucional privatizador empezaron a afectar a los colectivos en los que hasta entonces la veían como un bien común; o quizá sea simplemente por esa insistencia de los cronistas en mirar hacia la ciudad o la que tienen los historiadores cuya visión espacial es más amplia pero dirigen su mirada hacia tiempos más lejanos, no encontrando mucho interés en los sucesos actuales.

Por las consideraciones anteriores y para contextualizar históricamente los conflictos por el agua de interés en esta investigación, se han recuperado historias de los actores locales por diferentes vías, de acuerdo a la época en la que ellos vivieron o viven; es decir, recurriendo a fuentes documentales para los que vivieron en pasadas épocas y a entrevistas y/u observaciones de campo para los protagonistas de los conflictos actuales. El eje de este estudio es el tema de la apropiación del territorio, desde el siglo XVI hasta la actualidad, el cual lleva a destacar que durante El Virreinato se dieron las facilidades para hacer del latifundio la forma hegemónica de tenencia de la tierra; la cual sobrevivió durante dos tercios del siglo XIX, hasta que en 1867 Juárez promovió su fraccionamiento en haciendas, en el marco de la Restauración de la República. Dada la enorme extensión del territorio que hasta entonces se encontraba en posesión de una sola familia, el régimen de tenencia desde el sur y centro de Coahuila, incluso norte de Zacatecas, pasó del latifundista al hacendario; es decir, incluyendo al actual municipio de General Cepeda, donde se enfoca el presente estudio. El régimen hacendario perduró hasta que en 1936 se instrumentó en la región el reparto agrario adviniendo con ello un nuevo periodo, el del minifundismo.

Con la descripción anterior, se quiere destacar la importancia de un factor que resulta imprescindible reconocer para comprender las razones que son la raíz de los conflictos por el agua que se suscitan en la actualidad: la fragmentación de la tenencia de la tierra que, de manera secuencial, se fue dando entre 1867 y 1936; misma que, vista desde un enfoque territorial significa una drástica reconfiguración de las posibilidades que tienen los actores locales para acceder a la tierra y al agua. En ese mismo sentido, los apartados del presente capítulo están dedicados a resaltar sus antecedentes, resaltando los roles que para este autor han llamado más la atención, por cuanto a que representan antecedentes históricos del tema a tratar, que es el de los acuerdos que han establecido los actores locales para acceder y usar el agua.

Por ser el latifundio y la hacienda formas de propiedad privada, en el presente capítulo se destacan aspectos relativos a la agencia que, en su momento, los terratenientes ejercieron para controlar las decisiones sobre la tierra y sobre el agua, dejando para capítulos posteriores el tratamiento del tema enfocado desde la perspectiva de los detentores de la

propiedad social; es decir el punto de vista campesino<sup>29</sup>. Cabiendo también señalar que en el presente capítulo no se entra todavía a tratar los aspectos relacionados con los acuíferos subterráneos, que están más relacionados con una tercera fragmentación que ocurre desde 1992 hasta la actualidad; de aquí que en los siguientes apartados se discuta solamente en torno a las escorrentías; no de manera discrecional, sino obligada, por cuanto a que las tecnologías disponibles entre 1867 y 1936 todavía no estaban orientadas a la extracción del agua bajo la superficie terrestre.

## **2.1. Las Haciendas del Marquesado de Aguayo**

La consideración principal para integrar un perfil histórico del Marquesado de San Miguel de Aguayo al contexto de esta investigación es que se trata de un inmenso territorio que, durante El Virreinato, constituyó un enorme latifundio que abarcó varias Haciendas; una de las cuáles era la Hacienda de Patos, cuya casa principal o casco original dio origen al asentamiento que hoy es General Cepeda, cabecera del municipio en el que se encuentran Jalpa y Noria de La Sabina, dos ejidos centrales en el presente estudio.

Existen muchas obras muy documentadas sobre la historia del Marquesado de San Miguel de Aguayo, pero en estos apartados solamente se hace un acercamiento a la misma, retomando para ello algunos párrafos de García Alonso (2010) enfocados el tema del agua, complementándolos con datos de Charles J. Harris III (1975) y de Sánchez Navarro (2004).

Aunque existen registros de que había algunas propiedades intercaladas<sup>30</sup>, debido a su relativamente pequeña dimensión, se puede asumir que todas las Haciendas que se encuentran en el Sureste de Coahuila, una parte del centro del mismo estado, una franja del Norte de Zacatecas y una pequeña porción del oriente de Durango pertenecieron a éste solo latifundio, cuya formación inició con la llegada de los invasores europeos durante el último cuarto del Siglo XVI, pero que durante los siguientes doscientos años se expandió tan extraordinariamente que llegó a ser el más grande de todos los que hubo en los tres siglos que existió la Nueva España.<sup>31</sup>

---

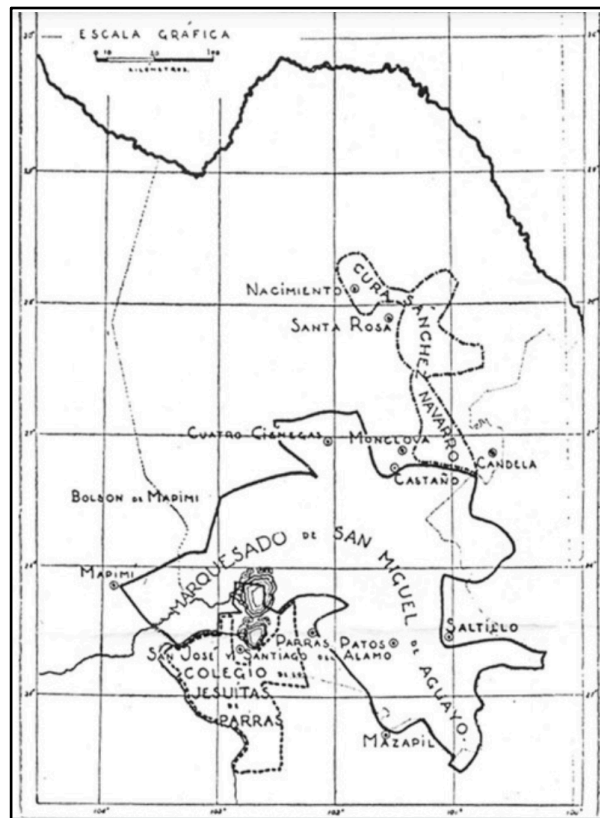
<sup>29</sup> Por la trascendencia que tiene en la vida de este sector actores locales, se ha dedicado a discutir sus repercusiones (sociales, culturales, económicas, ambientales, políticas, etc.), se le han dedicado por entero los Capítulos 5 y 8.

<sup>30</sup> Señala García Alonso (2010) que: "En 1713 la marquesa ganó una provisión de la Real Audiencia de Guadalajara que le permitía matar a lanzadas a los ganados que penetrasen en sus haciendas, ya que los vecinos de las colonias y misiones estaban muy constreñidos en sus ejidos, precisamente por estar rodeados de las posesiones de los marqueses."

<sup>31</sup> De la extensión del Marquesado de Aguayo, Sánchez Navarro (2004) explica que "...su época de esplendor se dio a mediados del Siglo XVIII, [puesto que] para 1760 la propiedad ocupaba 6,540,847 hectáreas, manteniéndose su sede administrativa en la Hacienda de Patos..."

Por su parte, González González (2010) explica que: "La tierra se explotaba en mayor medida para la ganadería extensiva... la fuente de riqueza de los marqueses de Aguayo era, en primer lugar, la lana, y en segundo, el sebo y las pieles..." según Vargas-Lobsinger, las casi 10 mil personas (un 20

### Mapa 3. Marquesado de Aguayo (1682-1840)



Fuente: González González A. (2010).

Aunque formalmente el Título Señorial de Marquesado de San Miguel de Aguayo le fue otorgado el 7 de noviembre de 1682 a las tierras que Francisca de Valdés Alcega y Urdiñola, para entonces ya la más antigua de esas Haciendas contaba con más de un siglo de fundada por su bisabuelo Francisco de Urdiñola, a cuyo cargo corrió la invasión a los territorios que hoy son del Noreste de México y de Texas. Esto es, la Hacienda de San Francisco de los Patos (hoy General Cepeda) que fue fundada por él en 1575, en su calidad de comandante del ejército hispano-tlaxcalteca, como parte de los actos de posesión efectuados para asentar los poderes de El Rey y de La Iglesia; pero no fue sino hasta un siglo después, , que el latifundio pasó a denominarse, cuando Agustín Echevers y Subiza, esposo de la bisnieta heredera de Francisco Urdiñola, compró tal título nobiliario en un remoto lugar ubicado en Castilla La Vieja<sup>32</sup>.

---

por ciento de la población total de la entonces provincia de Coahuila) que trabajaban en las tierras del marqués...

<sup>32</sup> Dice García Alonso (2010) que: “Don Agustín de Echeverz [esposo de la bisnieta heredera de Francisco de Urdiñola] es un notorio ejemplo de la nobleza de servicios a la corona que se enriquece como hombre de negocios y hacendado y, como remate necesario, consigue un título señorial... su capital y riquezas provienen, en un principio, de la familia de su mujer... doña Francisca de Valdés Alcega y Urdiñola, heredera...de todas estas haciendas como bisnieta de don Francisco [Urdiñola]...

Dan una idea de cómo se fueron acrecentando las posesiones del heredero en turno del Título Señorial Marquesado de Aguayo, los siguientes datos que ofrece el mismo García Alonso (2010):

...en 1731 se concedía nuevo título de propiedad al marqués sobre 115 sitios y un cuarto de ganado menor. En 1740 nueva adjudicación de 101 sitios de ganado mayor. En 1744 se hizo merced al marquesado de 98 sitios y tres cuartos de ganado mayor en la región norteña de Cuatro Ciénegas [sic]... En 1760 el marqués adquirió en la región de La Laguna 27 sitios y tres cuartos de ganado mayor. Todas las tierras de su propiedad en este lugar se calcularon en 226 y medio sitios de ganado mayor, pero en el plano de San Lorenzo de la Laguna, realizado tiempo después, se midieron 299 sitios y 747 milésimos...

El Marquesado de Aguayo no pudo sostenerse, entró en crisis y terminó desintegrándose al culminar la Guerra de Independencia, perdiendo el Título Señorial como consecuencia inmediata de la separación del dominio de la Corona Española. García Alonso (2010) explica que: “A partir de 1750 los beneficios de todas estas grandes haciendas declinaron hasta su completa bancarrota y las propiedades hubieron de hipotecarse...”

## 2.2. Los Sánchez Navarro

El cura José Miguel Sánchez Navarro, quien es considerado el iniciador de un latifundio que, en su apogeo entre 1840 y 1848, se extendió por más de 6.500,000 hectáreas: desde Múzquiz, Coahuila al norte hasta Mazapil, Zac., al sur; y desde Gómez Palacio, Dgo. al oeste hasta Saltillo al este (Harris, 1972)<sup>33</sup>.

José Miguel estableció su centro de operaciones en Monclova, a donde llegó designado como *diezmero* en 1762. Para 1765 ya tenía un rancho ganadero y unos pocos años después se hizo de una tienda que, para 1777, monopolizaba el comercio en esa ciudad. El diversificar sus fuentes de ingresos le permitió acrecentar su capital y acumular tierras, mediante la compra directa de ellas o dando en su tienda crédito ilimitado a ganaderos, bajo aval de sus tierras, para quedarse con ellas cuando la deuda se les hacía impagable. Fue así que culminar la Guerra de Independencia había logrado acaparar una enorme cantidad de ellas y comercializar sus productos a lugares tan lejanos como Oaxaca, apoyándose siempre en su red familiar; sobre todo en sobrinos, puesto que no tuvo hijos, dada su condición de cura. José Miguel heredó su fortuna a uno de ellos, José Melchor, que por

---

Con su encumbramiento pues marchó a España, donde consiguió el mayorazgo y el título de nobleza que deseaba. Le daba igual cual fuese puesto que no tenía intención de administrarlo personalmente, y al final lo consigue [comprándolo]... en San Miguel de Aguayo [Castilla La Vieja]... cuando consigue también hacerse ordenar como caballero de Santiago”

<sup>33</sup> La mayor parte de este apartado se basa en la ponencia presentada por el Charles J. III Harris en el Congreso de Historia del Noreste de México, que se llevó a cabo en Monterrey en 1971 y se publicó como artículo en 1972 por la Universidad de Nuevo León.

también poseer grandes habilidades como negociador se había convertido su representante en Saltillo, donde además había logrado a destacarse como político.

Al morir José Miguel, en 1821, tenía entablados varios litigios legales contra sus deudores y tocó a José Melchor darles finiquito; lo cual pudo lograr de manera exitosa, gracias a su poder negociador, económico y político. Su acumulación de poder ya era tanta que le permitió sortear exitosamente los avatares del fin del Virreinato, para conservar todas las propiedades que acumuló la familia durante esa etapa histórica. De esa manera, para 1829 el latifundio ya cubría alrededor de 700,000 Has.

Murió José Melchor en 1836, dejando su riqueza a sus dos hijos: Jacobo se quedó en Coahuila a administrar el latifundio y Carlos se asentó en la capital del país para manejar los asuntos legales y financieros de la familia, así como al manejo de relaciones políticas que eran indispensables para preservar sus privilegios, en el clima de inestabilidad que se vivía en el país por aquellas épocas. En 1840 Carlos compró El Marquesado de Aguayo y sus 6.5 millones de hectáreas a un consorcio mexicano-inglés que lo había comprado en 1823. Con la compra de las 17 Haciendas que fueron del Marquesado de Aguayo, en 1841 el control administrativo del latifundio Sánchez Navarro se trasladó a la Hacienda de Patos; ahí se mantuvo hasta 1867, cuando sus tierras les fueron confiscadas por el gobierno de Benito Juárez, como castigo por haber apoyado a los invasores franceses durante la Guerra de Intervención, acontecida entre 1862 y ese año.<sup>34</sup>

Desde luego, esta familia no fue la única que tuvo que pasar por lo que Harris (1972) llama “la amargura de ver perder su patrimonio”, pues bajo esas mismas circunstancias históricas el gobierno mexicano emprendió acciones similares contra otros personajes: no obstante, no en todos los casos se confiscaron las tierras, puesto que hubo casos en los cuáles la penalidad aplicada fue la de cancelar las concesiones de agua otorgadas<sup>35</sup>.

El contexto histórico que enmarca el trascendental acontecimiento de la fragmentación del latifundio es complejo; más allá los sentimientos de agravio nacionalista generados a los

---

<sup>34</sup> El Diccionario Porrúa señala que Carlos Sánchez Navarro ocupó el cargo de Primer Ministro de la Casa Imperial de Maximiliano. Por otro lado, Harris (1972, p. 393) menciona que su cargo fue el de Gran Chambelán de Maximiliano, señalando que los Sánchez Navarro “por su apolítica, como era de esperarse, eran conservadores, pero tuvieron bastante éxito en ajustarse a los frecuentes cambios de gobierno, hasta que cometieron el error catastrófico de hacerse partidarios de Maximiliano...”

Resulta muy *interesante* confrontar los argumentos anteriores con los que hace Bazant (1983, p 558), quien explica que “Los Sánchez Navarro tuvieron un enemigo en el gobernador liberal de Nuevo León, Santiago Vidaurri. Al incorporar Coahuila a Nuevo León en febrero de 1856, Vidaurri comenzó a extorsionarlos. En la capital de la república Carlos Sánchez Navarro apoyó en 1858 al gobierno conservador pero el Noreste quedó en las manos de Vidaurri... En 1861 Vidaurri confiscó por un supuesto adeudo fiscal dos haciendas del ex-marquesado; Sánchez Navarro se defendió donando, arrendando y vendiendo tierras a bajo precio. En 1862 Vidaurri todavía se apoderó de otra hacienda. No era extraño que los Sánchez Navarro se volvieran partidarios de la intervención y del imperio...”

<sup>35</sup> Una descripción detallada sobre qué propiedades confiscadas, qué permisos o concesiones les fueron suspendidos y/o respecto a cuánto, quiénes y en qué momento se les aplicaron esos castigos se encuentra en el amplio trabajo de Martínez Sánchez (2008).



mexicanos por la pérdida de en 1848 los vastos territorios del norte, las consecuencias que vivía la región de estudio en ese momento era su profunda reconfiguración geopolítica, puesto que la región pasó de ser un punto de paso hacia Texas para convertirse en un territorio de frontera. Situación nada sencilla por la que tuvieron que pasar los gobiernos de la época, entre confrontaciones entre conservadores y liberales, entre regionalistas y centralistas, rebeliones de apaches y comanches, Invasión Francesa, Guerra de Secesión en Estados Unidos, contrabando, entre otras circunstancias

Al decretarse las confiscaciones y pasar a manos del gobierno federal enormes extensiones de tierras, éste pudo emprender varias acciones concretas para fomentar la colonización de los territorios desocupados hasta entonces en el norte de México. Esto es, acciones que en mucho dependieron de las características, necesidades y demandas específicas de cada región de Coahuila; así, en el centro del estado el gobierno juarista pudo realizar la dotación a los Kikapoo y la fundación del municipio de Sabinas, sobre terrenos que habían pertenecido a esa familia. En la franja sur del estado resultó más conveniente para el gobierno federal poner a la venta las haciendas o fracciones a quien tuviera interés en adquirirlas; haciendas con mucho potencial productivo y por tanto muy atractivas para ser adquiridas, en tanto a la presencia, en aquellos años, de numerosos manantiales y riachuelos permanentes en toda su extensión, que hicieron de algunas de esas haciendas sitios estratégicos para albergar las mayores inversiones industriales, textiles y vinícolas. De interés para esta investigación es el hecho de que el 15 de julio de 1865<sup>36</sup>, don Benito Juárez erigió mediante un Decreto la Villa de Patos dentro de las tierras expropiadas a los Sánchez Navarro.

### **2.3. Los Madero**

La gestación, durante la segunda mitad del Siglo XIX, de los hoy poderosísimos grupos empresariales de Monterrey es un elemento de contexto muy importante, por cuanto a que tiene mucho que ver con el destino histórico de la micro región de estudio. De acuerdo con Cerutti (2006) se trataron de años muy importantes para esos grupos, puesto que al estar transitando por su etapa de acumulación originaria de su capital no perdían oportunidad para expandirse en busca de adueñarse de canales de comercialización y de medios de producción. Fue bajo esa lógica que habían sacado muy buen provecho de las necesidades que tuvieron los Estados Confederados de los Estados Unidos de América durante la Guerra de Secesión<sup>37</sup>, acontecida entre 1861-1865, además de que supieron sacar ventaja

---

<sup>36</sup> Fecha recuperada de [https://coahuila.gob.mx/flash/conoce\\_coahuila/mapas/pdfs/gralcepeda.pdf](https://coahuila.gob.mx/flash/conoce_coahuila/mapas/pdfs/gralcepeda.pdf), el 12/04/2022; en la que también se señala que en 1824 se reservó “el casco de la hacienda para erigir el municipio”.

<sup>37</sup> Cerutti (2006) retoma estadísticas del estado de Texas, que corresponden a la segunda mitad del Siglo XIX, para argumentar que fue el acelerado crecimiento demográfico de ese estado el que creó la demanda comercial y nichos de mercado que fueron aprovechados por los grupos empresariales regiomontanos para comercializar y para desarrollar industrias; también explica Cerutti que durante los años de la Guerra de Secesión se dieron condiciones para ellos, pues al encontrarse bloqueados

económica de la coyuntura política creada por la confiscación consumada en 1867 a los Sanchez Navarro, pues no tardaron en ocupar los territorios y espacios comerciales e industriales que habían estado controlados hasta ese momento por esa familia. Es en este contexto en el que llega a la región un prominente empresario nacido del lado coahuilense del Río Bravo y que logró consolidar en Monterrey la fortuna heredada de su padre, quien acumuló tierras al lado de dicho río como pago a una serie deslindes: Evaristo Madero Elizondo.

Evaristo Madero Elizondo fue un personaje que brilló con luz propia, si bien con ciertos matices de oscuridad, en la historia de todo el Noreste de México. El libro de Cerutti (2006) dedica un apartado completo<sup>38</sup> orientado a describir la importancia que tuvieron él y su familia bajo su liderazgo, en la conformación de la oligarquía regiomontana. Y si bien se pueden decir muchas cosas de Evaristo Madero Elizondo<sup>39</sup>, en este apartado solamente se destacará que su presencia en la micro región de estudio ha dejado una huella indeleble, pues entre otras acciones impulsó la modernización de los procesos de producción y de transformación tanto en el sector agroindustrial, en el que se destacan los de la uva, el algodón y la nuez; pero también en el ramo textil, dado que hasta la actualidad sobreviven en Parras de La Fuente fábricas de ropa, a base de algodón. En cualquier caso, eficientando sus procesos de producción a tal grado que han sobrevivido y son competitivos hasta los actuales tiempos de economía globalizada.

Así, si la desintegración del latifundio Sánchez Navarro fue la consecuencia de errores personales que desequilibraron los balances del poder político que desde fines del Virreinato habían logrado sostener a la familia en los sectores hegemónicos de la convulsa sociedad decimonónica, la irrupción de otros actores acaudalados al escenario para adquirir las haciendas que les fueron confiscadas no puede considerarse un acto fortuito, sino que evidencian que, para el último tercio del Siglo XIX, el capitalismo había madurado en el Noreste del país lo suficiente para establecer entre diferentes grupos de burgueses una abierta competencia para adueñarse de los medios de producción a nivel regional, al tiempo de diversificar e integrar empresas rurales a sus empresas urbanas. Es por ello que la oferta de tierras que hizo el gobierno juarista significó una coyuntura favorable a los empresarios urbanos de Monterrey para enajenar a su favor los medios de producción rural de Parras, para integrarlos a su proceso de expansión capitalista.

---

los puertos de los Estados Confederados no les era posible exportar, hacia Europa, el algodón que se producía en Louisiana, Arkansas y Texas; en esas circunstancias, la única vía para hacerlo era enviarlo a Piedras Negras y de ahí a Matamoros, lo cual los obligaba a pasar por el intermediarismo o los servicios de transporte que controlaban las familias regiomontanas.

<sup>38</sup> En el apartado "*Los Madero en la Economía de Monterrey (1890-1910)*" Cerutti (2006) distingue a cuatro familias que desde los años cincuenta del Siglo XIX que se destacaron por su incidencia en la acumulación original de capital en la ciudad de Monterrey: los Milmo (de origen irlandés), los Hernández (españoles), los Zambrano y los Madero (mexicanos).

<sup>39</sup> Cerutti (*op cit*) es una excelente fuente para comprender la compleja vida de este personaje, que lo mismo fue: contrabandista de algodón y prestamista que Gobernador y Constituyente de Coahuila; agroempresario innovador de los sistemas de producción de Parras y de la Comarca Lagunera, que abierto promotor del aniquilamiento de indios comanches en Viesca.

Entre los actores que entraron en el escenario económico del Sureste de Coahuila tienen presencia destacada los integrantes de la familia Madero, cuyas cabezas vieron la oportunidad de acceder a las arenas locales para expandir sus propios negocios. La cita siguiente así lo constata:

Traficantes en gran escala de algodón, [Evaristo] Madero y su yerno [Lorenzo Fabián González Treviño] formalizan en febrero de 1868 un contrato en el que se comprometen a habilitar el funcionamiento de la fábrica de mantas La Estrella, ubicada en Villa de Parras, en Coahuila. La Estrella es [sic] un establecimiento con 150 telares, con capacidad de generar más de 40 mil piezas anuales. La fábrica pasará posteriormente a manos de los prestamistas [o sea, Evaristo y Lorenzo], cuando, a fines de 1869, la firma regiontana adquiera también la hacienda “El Rosario”. En Parras, así mismo, se encontraba la hacienda San Lorenzo, conocida por sus vinos y aguardientes, que Evaristo compra [sic] casi simultáneamente con la anterior.

Comercio, tierras fértiles y bien regadas, industria textil y vitivinicultura, multiplicarán de forma vigorosa el poder económico de Evaristo Madero, quien a principios de los años setenta ya ha traspasado la sede de Madero y Cía. de Monterrey a Parras [...] y más tarde hará que algunos de los Madero se dediquen de manera específica al cultivo del algodón, para auto abastecerse. Hacia principios del siglo XX, Evaristo Madero nucleará en torno suyo inclusive a importantes firmas dedicadas a la producción textil, en un claro intento de carácter oligopólico a nivel regional destinado a asegurar la colocación y buen precio de los géneros fabricados...

Cerutti (2006:47-48).

Fue así que Evaristo Madero Elizondo llevó a su familia a convertirse en la familia más poderosa de Parras<sup>40</sup>, a partir de 1868. En ese sentido, no cabe duda que a él<sup>41</sup> debieron mucho de su próspero destino y la fama sus numerosos descendientes, incluyendo (sin demérito de sus propias cualidades personales) a su nieto Francisco Ignacio Madero González, que ha sido considerado uno de los más ilustres Presidentes de México.

Pero no es ni Evaristo ni alguno de sus nietos quienes de manera directa son del interés más específico de este apartado, que refiere a la historia del uso del agua en algunos ejidos que se localizan en las proximidades de las cabeceras municipales de Parras de La Fuente

---

<sup>40</sup> Se considera pertinente especificar aquí que, al hablar sobre la presencia de los Madero en Parras, el autor de este texto no limita la expresión al territorio del municipio que lleva ese nombre, sino que incluye a los municipios de su entorno; es decir, los de la Comarca Lagunera hacia el Oeste y el de General Cepeda hacia el Este. Esto porque se está haciendo referencia a las propiedades que fueron de los Sánchez Navarro y posteriormente de los Madero, que cubrían también esos municipios, pero se administraban desde Parras.

Aunque para 1897 los Madero ya habían regresado a Monterrey para crear otras empresas muy poderosas, como el Banco de Nuevo León, las empresas de Parras no sólo no se descuidaron, sino que gracias a una esmerada atención se encontraban en pleno apogeo (Cerutti, *op cit*).

<sup>41</sup> Existe una vastísima colección de fuentes de información histórica sobre Los Madero. Y en todos los casos se reconoce en Evaristo Madero Elizondo al patriarca o patricio (como lo llamara el más ilustre de sus biógrafos José Vasconcelos).

y de General Cepeda. Se trata de una figura hasta cierto punto un tanto inesperada, al menos para el autor de esta investigación, quien considera que una investigación más profunda sobre su vida y obra sería de muchísima utilidad para revalorar el rol histórico que le tocó jugar, puesto en las escasas referencias documentales encontradas sobre ella se logra entrever a una mujer fuera de serie, con rasgos de personalidad destacable para la etapa del proceso de desarrollo regional que le tocó vivir: *Pilar González Madero*.

“La pista” para ubicarla como actor sobresaliente de estas crónicas se encuentra en el nombre de uno de los ejidos que forman parte de la cuenca del Arroyo San Miguel: *Pilar de Richardson*; nombre que, sin embargo, resulta insuficiente para que ella sea conocida a nivel local ¡Mucho menos para tener al menos una idea sobre la importante participación que esta mujer tuvo en la historia local! Esto es, que a más de 85 años de haberse decretado la dotación legal de dicho ejido, en la memoria de la sociedad local, salvo algunos pocos miembros que la ubican como parte del linaje de los Madero, se ha perdido la noción de quién fue ella como persona y su nombre viene a quedar como otro de tantos denominativos dados a los ejidos de los alrededores<sup>42</sup>.

Comencemos por decir<sup>43</sup> que fue prima hermana por dos vías de Francisco Ignacio Madero González, pues el padre de él, Francisco Madero Hernández fue hermano (mayor) de la madre de ella, Pudenciana Madero Hernández. Se destaca aquí el hecho de que, a la más pura usanza de la oligarquía regiomontana de la época que, como muchas otras burguesías, acostumbraba afianzar las relaciones de negocios a través de lazos familiares (Cerutti, 2006), Francisco se casó con Mercedes González Treviño y Pudenciana con el hermano de Mercedes, Lorenzo Fabián González Treviño<sup>4445</sup>.

---

<sup>42</sup> Incluso, frecuentemente se encuentran personas se refieren al ejido como “El Pilar de Richarson”, pensando que con tal nombre se alude a una estructura arquitectónica.

<sup>43</sup> La información genealógica que se detalla en los siguientes párrafos se dedujo al analizar: <https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&m=D&p=evaristo&n=madero+elizondo&siblings=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on> (recuperada el 19/05/2021). Otra fuente destacable en la que también pueden encontrarse información sobre los parentescos de los Madero es el libro de Cerutti (2006).

<sup>44</sup> No es el único caso en la familia. El árbol genealógico de Evaristo Madero da cuenta que Victoriana y Carolina, hermanas de Francisco y Pudenciana se casaron, respectivamente, con Melchor y Viviano Villarreal González, hermanos entre sí (no se indagó si son rama de los mismos González a los que perteneció Lorenzo Fabián); Magdalena Madero González, hermana de Francisco Ignacio, se desposó con José Madero Farías, hijo del segundo matrimonio de su abuelo Evaristo y por tanto su medio tío. Gustavo Adolfo, hermano también de Francisco Ignacio que fue asesinado con él, casó con Carolina Villarreal Madero, hija de su media Hermana Carolina y de Viviano Villarreal.

Las observaciones anteriores no deberían interpretarse como una apreciación frívola del autor de estas líneas, sino como una forma de corroborar la apreciación expresada por Cerutti (2006), respecto a que la consolidación del capitalismo en Monterrey, en este caso una extensión a Parras de la Fuente con los Madero como protagonistas, se facilitó vinculando a las familias hegemónicas mediante el contrato matrimonial, incluso entre consanguíneos cercanos.

<sup>45</sup> El padre de Lorenzo Fabián, consuegro de Evaristo, fue Francisco González Prieto, quien había consolidado su fortuna acaparando tierras y aguas; estas últimas mercantilizadas por él para surtir a

Lorenzo Fabián tenía 27 años al casarse en 1867 con Pudenciana, quien contaba con 16; en 1868 nació su primogénita Pilar. Es decir, el mismo año en el que Evaristo y Lorenzo Fabián firmaron contrato para rehabilitar la fábrica La Estrella, con la que terminaron quedándose en propiedad un año después, según refiere la cita hecha dos páginas atrás,.

Entre todos los hijos de Evaristo Madero, Pudenciana fue la primera en casarse; es decir, lo hizo antes que su primogénito, Francisco, quien en ese 1867 contaba con 17 años de edad. El caso es que Pilar vino a ser la primera nieta de Evaristo.

En 1870 muere María Rafaela, madre de Pudenciana, abuela de Pilar. Evaristo no tarda en volverse a casar y lo hace con Manuela Farías Benavides, en 1871; de ahí que cuando en 1872 nace Ernesto Madero Farías, el primero de los once medios hermanos que tendría su mamá, Pilar ya tiene 4 años. Francisco Ignacio, hijo de Francisco, nace a fines de 1873, ocupando el cuarto lugar en el orden de los nietos de Evaristo, después de Rafaela, hermana de Pilar y de Lázaro, hijo de Victoriana con Melchor Villarreal.

El infortunio pasó por el hogar de Lorenzo Fabián y Pudenciana, pues Rafaela y Lorenzo, la segunda y tercero de sus hijos, murieron siendo bebés en 1871 y 1875. Fue así que Pilar terminó llevándole dos años al segundo nieto de Evaristo, cuatro al primero de sus medios tíos y seis a su hermano Carlos. Sin embargo, este último muere en 1891 a la edad de quince años y, con ello, la estructura de la familia González Madero queda conformada por la madre, el padre y cuatro hijas; pero debido a la muerte de tres de sus hermanos la diferencia de edad entre Pilar y la segunda hermana viva que le queda, Beatriz, se hace de diez años pues en ese momento Pilar tenía 23 años, Beatriz 13, Victoria 8 y Margarita 3.

Se ha considerado pertinente verter aquí la descripción de la estructura familiar de los Madero, al inicio de la última década de los años noventa del Siglo XIX porque, desde la perspectiva del autor de este estudio, permite apreciar claramente que Pilar tuvo una posición privilegiada dentro de ella. Independientemente de que todos sus tíos y sus tías Madero Hernández establecieron matrimonios con herederos de fortunas regiomontanas y, en ese sentido, se puede inferir que tendría una posición similar a sus primos (i.e. los hijos de aquellos y aquellas), de esa misma inferencia se puede plantear que a pesar de tener la desventaja de ser mujer (en esa época difícilmente podría ser de otra manera) tenía al menos tres ventajas sobre ellos: era la mayor de todos, era la hija de la hija mayor de Evaristo e hija del yerno de Evaristo que se asoció con él para incursionar empresarialmente a Parras (o sea, Lorenzo Fabián)<sup>46</sup>. Si a estas consideraciones se agrega la de que era

---

la ciudad de Monterrey. Al respecto, González Maíz R. (2011) explica que en numerosas ocasiones le fueron titulados terrenos procedentes de deslindes o mediante la recuperación de mercedes coloniales de agua, siempre como co-beneficiario de José de Jesús Dávila y Prieto, primo suyo que había sido gobernador de Nuevo León.

<sup>46</sup> Resulta explicable que Evaristo se haya asociado con quien entonces era su único yerno, Lorenzo, para ir en pos de La Estrella, porque además de que en 1868 su primogénito Francisco se encontraba estudiando en Houston; aparte de que, para los 17 años de edad que entonces tenía, todavía le faltaban varios años para tener capacidad legal para firmar contratos, puesto que en aquella época la mayoría de edad se alcanzaba hasta los 21 años.

mayor en edad que todos sus tíos y tías Madero Farías, resulta razonable, por donde se le vea, pensar que Pilar adquirió un estatus o aprecio especialmente distintivo al interior de la familia Madero; quizá no preponderante, pero sí muy especial, tanto por orden de nacimiento de su madre y de ella misma en el contexto de toda la descendencia de Evaristo Madero Elizondo, en general, como por la muerte de sus dos hermanos varones y la consecuente feminización de la familia González Madero, en específico.

**Foto 1. Hacienda Ciénega del Carmen**



Fuente:

<https://m.facebook.com/juanmanuel.calderongalvan.7?grouppid=358416700926300> (recuperado el 11/04/2021).

El poder económico heredado por Pilar se manifestó públicamente desde que ella todavía era muy joven, pues tras su casamiento, en 1892 con William Richardson<sup>47</sup>, el matrimonio pronto empezó a titular a su nombre varias haciendas. Tales son los casos de Ciénega Grande, Castañuela y Jalpa, cuyos polígonos catastrales ocuparon la cuenca del Arroyo San Miguel, que es el cuerpo de agua central en la presente investigación.

---

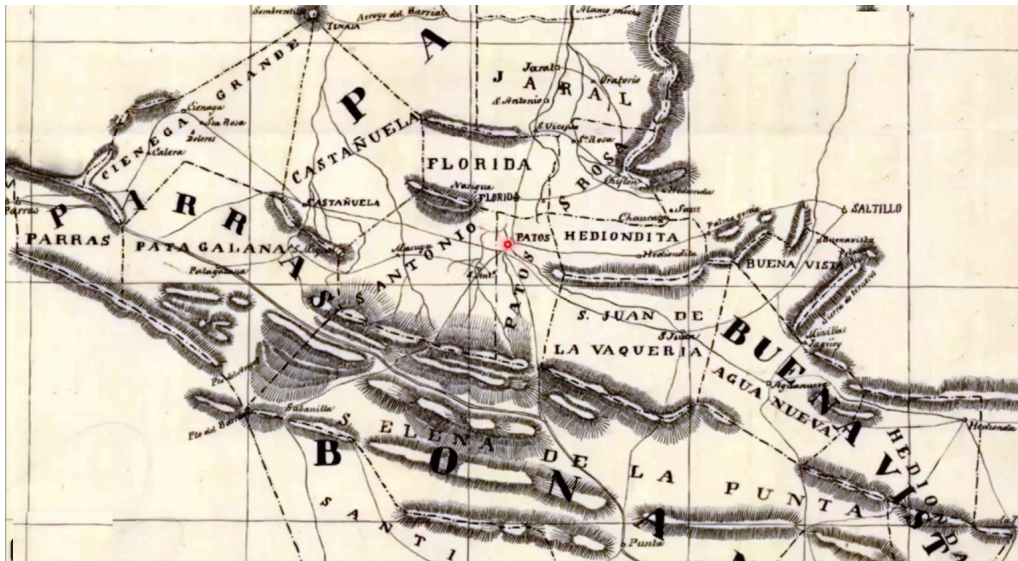
<sup>47</sup> Se dice que William o Guillermo Richardson (en los títulos de propiedad solía usar su nombre castellanizado) fue inglés. Hinojosa reconoce que existe muy poca información sobre él y aporta de la siguiente manera la que recuperó en una entrevista a un ejidatario de Porvenir de Jalpa, nacido en 1923: "William Richardson, era un terrateniente inglés, accionista de ferrocarriles en Coahuila, que a su vez mantenía la finca. Al venir el momento de la Revolución este señor formó parte de un grupo anti revolucionario, en este caso particular, él pertenecía a las "Camisas Doradas" o "Camisas Amarillas"... la gente que trabajaba para Richardson debía de pertenecer a este partido, lo que dejaron de hacer hasta la petición de tierras." (Hinojosa, 2000)

Se recomienda no confundirlo con William E. Richardson, un estadounidense que fue protagonista de una historia de deslindes y construcción de infraestructuras hidráulicas en el Valle del Yaqui, Sonora (Okada A., 2000); si bien William E. es contemporáneo del esposo de Pilar González Madero, aparte de la letra inicial de un segundo nombre y su diferente nacionalidad, no se encontró referencia de que haya visitado Coahuila o tenido vínculo con los Madero.



De una entrevista realizada en un Podcast a Oyervides Dávila (2020), se ha retomado una imagen mediante una captura de pantalla, que aunque es de fecha no precisada se considera que viene muy a la mano para ilustrar la distribución territorial de las haciendas de los Richardson González; se le ha denominado como Mapa 4 a esa imagen y se muestra a continuación, al lado de una imagen satelital contemporánea:

**Mapa 4 Haciendas de General Cepeda, Parras y Saltillo, durante El Porfiriato**



Fuente: Oyervides Dávila (2020).

**Imagen Google Earth 1. Misma área del Mapa 4 (2015)**



Fuente: Google Earth.

Respecto a esas haciendas, Gutiérrez Becerra (2013) explica que, en 1898: "...compran la Hacienda Ciénega del Carmen, en ese momento llamada "Cienega Grande"... impulsando el desarrollo y vitalización colocando barricas de roble de todos los tamaños, destiladores, silos de fermentación, depósitos para la uva prensas y maquinaria, produciendo diversas clases de vino hasta finales del siglo XIX"

Por cuanto a La Castañuela, se encontró referencia en la edición del 03/06/1985 del Diario Oficial de la Federación, relacionada con una solicitud de ampliación a la dotación original de 1935 del ejido San Antonio de La Pegajosa (hoy ejido Presa de San Antonio), Mpio. de Parras, se inscribe que: "...para resolver la presente acción, se desprende que dentro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor se localizó como afectable una superficie de 1,263-84-22 Has., de agostadero en terrenos áridos que se pueden tomar del "Lote No. 15 del Fraccionamiento de Seguí y Castañuela", propiedad de la sucesión de Guillermo H<sup>48</sup>. Richardson, según inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Parras, Coahuila, bajo el número 96, folio 5, volumen 44, Sección I, de fecha 30 de enero de 1905, el cual, según constancia expedida por el C. Presidente Municipal de Parras, Coahuila, con fecha 25 de junio de 1982, en la que señala que los campesinos del poblado que nos ocupa, se encuentra en posesión desde 1968..."

Por lo que se refiere a la titularidad de Richardson como propietario de la Hacienda Jalpa, se ha tomado como fuente de información a Pasztor (2000), quien hace mención de un conflicto legal en el que se vio envuelto en 1898, como su dueño. Se trata de una demanda que fue llevada a los tribunales de la ciudad de Saltillo, originada de una disputa por las escorrentías locales, que se tratará de manera específica en el apartado destinado a analizar los efectos del fraccionamiento del Latifundio Sánchez Navarro. Aunque en el

**Mapa 4** no se ilustra la Hacienda Jalpa, en la Imagen Google Earth 1 si es posible localizar los ejidos Jalpa y Porvenir de Jalpa, que pueden usarse como una buena referencia para constatar que el San Miguel también pasaba por ahí quedaba comprendido dentro de lo que fueron sus poligonales.

Se encuentra fuera de los alcances de este trabajo el detallar qué afluentes de ese Arroyo San Miguel se encontraban en aquella época comprendidos en terrenos de haciendas que no pertenecían al matrimonio Richardson González; como quiera que sea, de una revisión general se encontraron datos que aquí sólo se dejan señalados, como el de la Hacienda de Guadalupe, que de acuerdo al DOF de 18/02/1976 era propiedad de Antonia Elgueazabal de Aguirre, sufriendo afectaciones en 1925, 1940 y 1976. Otro caso es el de la Hacienda La Hediondita y San Vicente, que eran propiedad de Martín Morales en aquellos años en que las haciendas vecinas de La Castañuela y La Jalpa pertenecían a Guillermo Richardson. Siendo historias de gran relevancia, pero que poco aportan a este trabajo, no se entra tampoco a indagar la razón o las razones por la cual o por las cuáles las haciendas fueron tituladas a nombre de Guillermo Richardson y no a nombre de Pilar González de

---

<sup>48</sup> Esta inicial de segundo nombre corrobora que se trata de una persona diferente al estadounidense que se dedicaba, en aquellos mismos años, a construir infraestructuras de riego en Sonora.



Richardson. También quedan sin abordar aquí los muy trascendentes acontecimientos en esas propiedades durante los años cuando se recrudecieron los enfrentamientos armados de la Revolución Mexicana y Parras de La Fuente se mantuvo como nodo central de las agroempresas de la familia Madero.<sup>49</sup> En todo caso, se resalta aquí que la rama genealógica Richardson-González Madero quedó truncada, al no dejar descendientes.

Guillermo murió en 1935, por lo que ya no le tocó pasar el trago amargo del fraccionamiento que afectó grandes superficies de tierras que durante más de cuarenta años había ido acumulando el matrimonio Richardson González<sup>50</sup>. Durante los dos años siguientes a muerte que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación varias resoluciones a las solicitudes de tierras efectuadas por campesinos. Pilar tomó entonces las riendas de la administración; al menos de la Hacienda Ciénega del Carmen, pues de acuerdo a Gutiérrez Becerra (2013) "La sociedad "Bodegas del Carmen S.A" formada por Pilar Gonzalez Madero, Jose L Hernandez y Ricardo Flores, hacia el año de 1943, producía distintos tipos de vino ...[pero que]... concluyeron sus producciones [la autora no precisa la fecha] debido a problemas entre los vecinos que peleaban sus tierras y los dueños, que por ley, exigían su espacio, obligando a desalojar las viviendas que existían que por lo menos eran 20 familias cuyo enojo produjo el ataque a las barricas de vino, dejando derramar casi en su totalidad el vino que se encontraba en la barricas, impidiendo a los propietarios reanudar la producción."

De la cita anterior se deduce que Pilar González Madero no fue una mujer que se cruzara de brazos ante las adversidades. Información dispersa sobre ella hay<sup>51</sup>, pero se requiere entrar en minucias para confirmar una suposición del autor de estas líneas, respecto a que debió haber tenido un importante grado de participación en la administración y tomas de decisión en los asuntos de sus haciendas, mientras vivía su esposo. Resulta difícil pensar que no fuera así, en tanto que durante la investigación bibliográfica no se encontraron antecedentes de las riquezas que Guillermo Richardson tenía al casarse, en contraste con las muchas evidencias de que Pilar era en ese momento poseedora por herencia de una inmensa fortuna y una posición privilegiada no solamente dentro de la familia Madero sino incluso dentro de la clase hegemónica regiomontana.

---

<sup>49</sup> De hecho, hasta nuestros días Casa Madero, empresa productora de vinos, constituye una figura empresarial icónica para este lugar y no es la única que con mayor o menor éxito conservan los sucesores de Evaristo Madero Elizondo.

<sup>50</sup> Resulta un tanto obvio pensar que, derivado de los juicios agrarios a los que estaba emplazado, Guillermo debió de haber estado sujeto a un contexto de muchísima presión personal al momento de su muerte; quizá demasiada para la edad que tenía en ese momento, que era de 66 años.

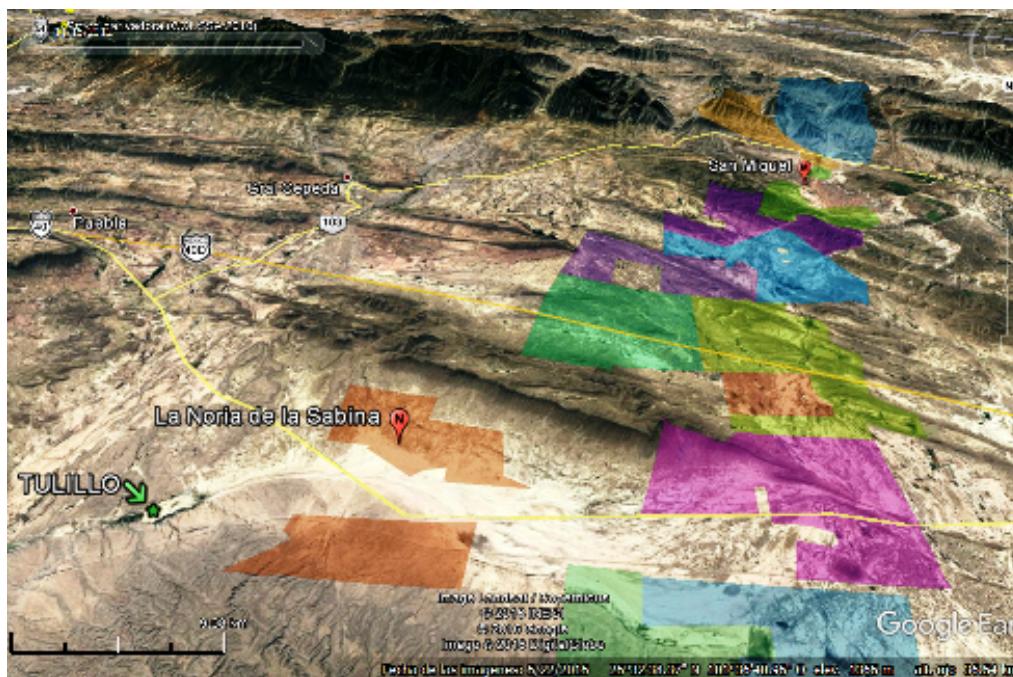
<sup>51</sup> Reguer (1997) recupera una nota periodística de 1926, es decir en tiempos de la Guerra Cristera, en la que Pilar y otras señoras se abalanzaron contra unos agentes de la Secretaría de Gobernación y la policía, que irrumpieron en una misa con la intención de detener a los sacerdotes que se encontraban oficiando. Al no haber cedido en su furia cuando fueron bañadas con chorros de agua lanzados desde un camión de bomberos, el grupo de mujeres fueron violentadas por los agentes del Estado "a fuetazos" y varias de ellas llevadas a los separos de la policía, no precisándose si entre las detenidas iba Pilar, quien por ese entonces tenía unos 58 años de edad.

Con la muerte de Pilar, en 1955, se cierra la etapa histórica de las haciendas en el territorio objeto de esta investigación. Desafortunadamente no hubo más tiempo para conocer más sobre la suerte final que tuvieron cada una de las propiedades del matrimonio, tanto de las que les fueron expropiadas como las que no, sobre todo las comprendidas dentro de la cuenca hidrográfica del Arroyo San Miguel.

#### 2.4. Reforma agraria y fragmentación de La Hacienda

El fraccionamiento de las Haciendas de los Richardson González-Madero para materializar la Reforma Agraria representa la culminación del proceso de fragmentación del territorio que comenzó con la confiscación del latifundio Sánchez Navarro. La Imagen Google Earth 2 fue diseñada pensando en proporcionar al lector una primera aproximación a la actual división de la propiedad en la Cuenca del Arroyo San Miguel y con ello contextualizar geográficamente las localidades en las que se realizaron los estudios de caso a nivel micro de esta investigación.

##### Imagen Google Earth 2. Fragmentación territorial de las Haciendas de Los Richardson



Integrado para este documento por Miguel Angel Villa De Los Santos, con datos del Registro Agrario Nacional (<https://www.datos.ran.gob.mx>).

La imagen base ha sido tomada de la plataforma de Google Earth®, a la que se le agregaron en una capa adicional los datos georreferenciales de los ejidos existentes en el Registro Agrario Nacional, para poder apreciar la cobertura territorial de cada uno de ellos.

Las poligonales que se seleccionaron y se destacan con diferentes colores son las de los ejidos que comparten porciones la cuenca del Arroyo San Miguel.

La perspectiva de esta imagen mira hacia el Sureste, desde el Noreste, por lo que se sugiere ubicar en ella a:

- i) El poblado de General Cepeda (ExHacienda de Patos), un poco al fondo, como a las 10:30 de un imaginario reloj;
- ii) Una sierra más al fondo del poblado de General Cepeda. Su ladera es fácilmente distinguible por su color oscuro, que denota la presencia de bosques templados, que crecen bien ahí por estar dicha ladera orientada hacia el Norte (*i.e.* es la umbría); se denomina a este accidente orográfico *Sierra de La Casita* en las cercanías del poblado citado y *Sierra de Parras* en las inmediaciones del ejido *San Miguel* y de hacia ahí hacia el poniente
- iii) Tres carreteras (líneas amarillas) que corren de oriente a poniente: al sur (en la parte superior de la imagen) la Carretera Estatal 2, que ocupa prácticamente el trazo del camino colonial (Cfr. Mapa 4; puede identificarse como la Carretera Federal 40 Saltillo-Torreón la que se encuentra al Norte y pasa entre Noria de La Sabina y El Tulillo; la tercera es la Autopista 40D Saltillo-Torreón, que pasa en medio de las dos primeras.

Con esas referencias y observando las poligonales de los ejidos, se puede observar que éstas tienen una disposición prácticamente de Sur a Norte, siendo las partes más altas las que están al fondo (*i.e.* al Sur). También es ese el rumbo que lleva el *Arroyo San Miguel*, cuyas aguas descienden desde la Sierra de Parras, desde el ejido San Miguel donde se ubica la vertiente, con dirección a tres ejidos cuyas poligonales se pueden ubicar en el mapa, al lado de la Autopista 40D: al oriente de color verde oscuro Porvenir de Jalpa; al poniente, en tono de verde más claro, *Jalpa*; del lado norte de la carretera (semi rodeado por Jalpa) la de *San Juan del Cohetero*, mostrada en color pardo claro. La poligonal color bugambilia con la que colinda Jalpa es la de *Pilar de Richardson*. Se recomienda tener presente especialmente la localización de *Jalpa* y *San Juan del Cohetero*, ya que entre estos ejidos existe un conflicto por el agua del Arroyo San Miguel, que representa una de las *arenas* que se analizan a escala micro en esta investigación.

No se omite mencionar que en la parte alta de esta cuenca, a unos 9 Km al oeste de San Miguel en línea recta, se encuentra San José Patagalana; que vivió sus épocas de mayor esplendor durante el Marquesado de Aguayo y después en el latifundio Sánchez Navarro, por haber sido sede de una de sus principales haciendas. En los terrenos de la cuenca baja el cauce del arroyo cruza por los ejidos mencionados en el párrafo anterior, entre lomeríos de pequeña altura que representan las estribaciones de la Sierra Madre Oriental; al dejar atrás dichas geoformas, las escorrentías se dispersan y terminan infiltrándose al subsuelo en los amplios *bajíos* que, de oriente a poniente<sup>52</sup>, corren paralelos a la Sierra de La Paila.

---

<sup>52</sup> Obsérvese que la línea de colindancia con orientación hacia el norte del ejido Pilar de Richardson no empata en sus límites con el siguiente ejido, sino que se encuentra separada por una franja, que

Se hace notar, finalmente, que en la Imagen Google Earth 2 se ha rotulado la poligonal del ejido *Noria de la Sabina* y marcado la Presa El Tulillo, que se encuentran al oriente de Pilar de Richardson pero ya fuera de la cuenca del Arroyo San Miguel. Se ha hecho así para resaltar los puntos de la micro región donde se localizan, puesto que son otra de las arenas analizadas a escala *micro* en esta investigación, porque el conflicto que ahí se ha desatado involucra una amenaza a la integralidad del Acuífero 505 General Cepeda-Sauceda.

## Conclusión

La historia de General Cepeda se encuentra íntima e indisolublemente ligada al agua. Así ha sido desde su fundación en el siglo XVI, como puede deducirse aplicando un razonamiento lógico a la denominación original de Hacienda de Patos a las tierras que Francisco de Urdiñola se adjudicó para sí en el contexto de la invasión española a Aridoamérica.

Como se ha venido planteando desde el Capítulo 1, desde tiempos cuando las escorrentías que bajan por las sierras, los lomeríos o bajíos eran la única fuente de agua aprovechable para las actividades agropecuarias, la escasez de agua propia del semidesierto ha sido el factor más determinante para el éxito o fracaso de cualquier emprendimiento productivo. En ese contexto, el peso del poder económico y político que el agua les dio a los actores locales no se puede desligar de la extensión de tierra en propiedad, esto porque entre más territorio se poseyera mayor poder de decisión se podía ejercer sobre los volúmenes de escorrentías de las cuencas hidrográficas. Es por ello que el poder acumulado por los latifundistas y sus familias a partir de su capacidad de decidir los usos del agua, trascendió a tener poder sobre las vidas de sus coterráneos y con ello, también definió su capacidad de incidir en la orientación de los procesos históricos locales y regionales, especialmente en los siglos previos a que la tecnología hiciera posible la extracción de grandes volúmenes de agua subterránea.

A la vista de lo anterior, fue hasta la culminación del segundo tercio del Siglo XIX que el poder de decisión sobre los usos del agua se concentró en el núcleo familiar del latifundista, primero el del Marqués de Aguayo y después el de los Sánchez Navarro. Cuando, por una decisión de Estado el latifundio fue fraccionado, se reconfiguró esa estructura de poder autocrática en otra de tipo oligárquico; en tanto que emergieron como detentores de esos poderes los núcleos familiares de los nuevos hacendados, los cuáles se fueron fortaleciendo durante los años de el Porfiriato mediante lazos de compadrazgo y parentesco que se tradujeron en un diferente tipo de concentración del poder económico y político, que en el contexto del presente documento conducen a ubicar como una de las familias más prominentes a la familia Madero y dentro de ésta varios actores dentro de la que se ha destacado, en el contexto de la presente investigación, la peculiar figura de Pilar González Madero, conocida también por su nombre de casada como Pilar González de Richardson o simplemente Pilar de Richardson. Hacendada que hasta el reparto agrario de 1936 fue

---

no es otra cosa que el derecho de vía del ferrocarril que une Saltillo con Torreón; la cual, como es de esperarse se construyó sobre los terrenos más planos de esta microrregión.

propietaria de las tierras donde, como consecuencia del mismo reparto, se encuentran los ejidos en los que se realizaron los estudios de caso de esta investigación.

## CAPÍTULO 3. SECANO PARA EL SURESTE; REGADÍO PARA LA LAGUNA

Los temas de la tenencia de la tierra y del poblamiento en los dos primeros capítulos de esta obra describen aspectos que tienen que ver con el poder o la agencia que tuvo la burguesía agraria de la Franja Sur de Coahuila, entre los siglos XVI y XIX, derivada de su relación de propiedad con la tierra y con el agua. Retomando tal perspectiva para ir describiendo el contexto de investigación, en los apartados que conforman este Capítulo 3 se incluyen temas destinados a mostrar una discusión sobre el sometimiento que hizo el capital a los campesinos, favorecido por las políticas diferenciadas que el Estado instrumentó tras el reparto agrario para la Región Sureste de Coahuila y para la Comarca Lagunera. Al hacerlo de esta manera se pone a disposición del lector información que se considera debe conocer como antecedente a los temas abordados en los últimos capítulos de este documento.

### 3.1. El Ixtle. Fibra que marcó la historia reciente del Sureste de Coahuila

Hubo un tiempo, que duró muchos siglos, en el cual los procesos productivos agropecuarios de lo que hoy es la Región Sureste de Coahuila dependían de las escorrentías y no de los acuíferos subterráneos, como lo son en la actualidad. Tal periodo se puede ubicar entre los últimos años del siglo XVII y los últimos del siglo XX, dentro de los cuáles se pueden distinguir dos grandes sistemas de producción en torno a los cuáles giró la economía de las haciendas: el de ovinocultura y el de las fibras vegetales duras; la lana como producto del primero y el ixtle como producto del segundo

Y es que durante el latifundio la lana de ovinos era el objetivo principal de la producción, pues tenía su demanda asegurada como materia prima para la industria textilera regional, reconocida por su producción de sarapes. Se comentó en el capítulo anterior que tras consumarse la Independencia Carlos Sánchez Navarro estableció su residencia en la Ciudad de México para gestionar desde ese lugar estratégico las relaciones comerciales y políticas de su latifundio; entre las cuáles la comercialización de la lana a consumidores ubicados en plazas distantes del mercado nacional era una prioridad.

Con la fragmentación del latifundio se dislocó de manera muy importante el sistema de producción de ovinos, pues al haberse adquirido las haciendas por diferentes propietarios resultó en que no a todas correspondieron ambientes de producción<sup>53</sup> adecuados para la crianza de los borregos. Pero no solamente eso, sino que la mayor parte de los nuevos

---

<sup>53</sup> Angel Carrillo (2012) ha desarrollado una tipología de estos sitios donde el trabajo humano ha logrado hacerlos productivos, definiendo los tipos de acuerdo al tipo cultivo específico para el cual se orientan, aplicando diferentes labores. Denomina a esos sitios de trabajo como *ambientes de producción agrícola*, señalando que "...al construir o mantener estos ambientes de producción, los campesinos procuran siempre la permanencia de una pequeña pendiente en los terrenos, para que las escorrentías de agua se desvíen, se dispersen o se concentren, dependiendo de la forma de incidencia de dichas escorrentías y según sea la necesidad de producción...."

hacendados tenían entre sus rasgos comunes una visión modernizante<sup>54</sup> y una mirada más focalizada hacia los mercados de los Estados Unidos de América y Europa; de tal suerte que los nuevos hacendados integraron al *ixtle* o fibra dura de la lechuguilla (*Agave lechuguilla*) y de la palma del desierto (*Yucca carnerosana* y *Y. filifera*) a sus sistemas de producción en el transcurso del último cuarto del Siglo XIX.

La información disponible destaca que la demanda del mercado que impulsó el tallado de la lechuguilla se generó en el mercado internacional en los últimos años del Siglo XIX y que el *ixtle* cobró más peso dentro del sistema de producción regional hasta bien entrado el Siglo XX<sup>55</sup>. Por razones que se discuten en otros apartados, tras el reparto agrario se dieron las condiciones sociopolíticas que definieron que el *ixtle* pasara a constituir la base o el elemento central del sistema de producción en los ejidos, del que en la época hacendaria era sólo un elemento complementario. Es decir, que todavía hasta los años veinte de esa centuria la fibra vegetal no pasaba de representar para el productor de secano del Sureste de Coahuila un complemento a su ingreso fuerte, proveniente de las actividades ganaderas.

Por lo anterior, el autor de estas líneas considera que al, aludir a un “*sistema de producción ixtlero*” sin tener presente que el tallado del *ixtle* ya se hacía en las haciendas, permite cuestionar la existencia de una supuesta *identidad ixtlera*<sup>56</sup>. Los tiempos de este estudio no han alcanzado para entrar en detalles sobre este tópico, pero no se omite señalarlo porque se considera que no es asunto menor, ya que de comprobarse de que se trata de un constructo del imaginario burocrático y académico sin fundamento teórico, abriría la puerta a preguntarse si en realidad no se trató sino de un instrumento ideológico utilizado para legitimar otro constructo artificial, la llamada *Región Ixtlera*, que encadenó a los campesinos a producir un artículo poco rentable de producir, pero estratégico para la economía transnacional.

El hecho es que la producción de *ixtle* adquirió una importancia trascendental durante el Siglo XX, como principal fuente de ingresos de los llamados *campesinos ixtleros*, sin que

---

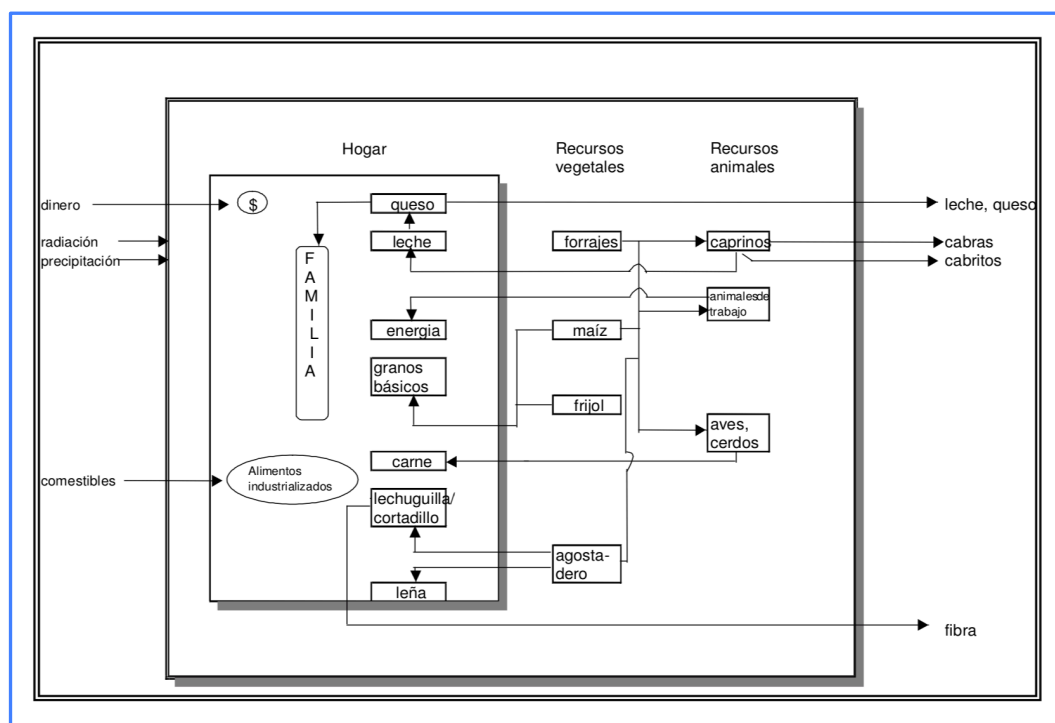
<sup>54</sup> Meyer define como modernizantes a este tipo de hacendados que llegan a comprar las haciendas de los Sánchez Navarro, cuando al referirse señala: “Hay que distinguir entre el latifundio tradicional, vasto dominio bien o mal trabajado, directa o indirectamente, pero de manera paternalista, muchas veces en simbiosis con las comunidades circunvecinas, y la hacienda moderna que participa con diligencia en el crecimiento económico nacional. El primero está en retirada después de 1880-1890, la segunda toma como modelo la plantación tropical de las costas. La modernización socava la hacienda tradicional en cuanto la tierra se vuelve un capital que debe multiplicarse...” (Meyer, 1986 p. 484)

<sup>55</sup> Cabe señalar que ninguna de las muchas referencias bibliográficas, revisadas a lo largo de los años que duró esta investigación, refiere a que el *ixtle* haya tenido un papel central en el sistema de producción hacendaria.

<sup>56</sup> Corría el año 2008, cuando Francisco Zamora Cancino, líder campesino del Cañón de Derramadero que en su juventud trabajó tallando *ixtle* para la cooperativa de su ejido, en un contexto diferente al de esta investigación, me reconvino cuando retomé ese concepto durante una plática sostenida con él, dándola como un hecho comprobado. Pancho me hizo el siguiente comentario que en aquel entonces no alcancé a comprender en toda su dimensión: “*Primero habría que ver si realmente existió esa identidad ixtlera, de la que tanto hablan ¿No crees?*”

eso signifique que se pueda afirmar, desde un punto de vista tecnológico, que hubiera diferencias significativas entre la versión del sistema de producción que ya estaba siendo practicado en los últimos años del Siglo XIX en las haciendas. La que se muestra a continuación, muestra un esquema de su estructura y funcionamiento:

**Figura 2 Sistema de Producción Ixtlero en San Juan del Cohetero, Mpio.de General Cepeda**



Fuente: Sánchez Licea L. (2003, p 33)

Como puede observarse en el esquema anterior este sistema de producción no se limita a realizar un aprovechamiento de especies forestales, sino que incorpora cultivos para el autoconsumo familiar y crianzas con fines comerciales, mediante labores poco tecnificadas de las que se obtenían: i) ixtle, que se extrae mediante una técnica manual denominada *tallado*, que se aplica a las hojas de plantas que pertenecen a las especies *Agave lechuguilla*, *Yucca filífera* y *Y. carnerosana*; ii) rastrojo de maíz y frijol de temporal, con semillas criollas, sin uso de agroquímicos y labores con uso de tracción animal; iii) pastoreo en agostaderos de pequeños hatos de cabras

La precipitación escasa e irregular se traduce en una región con temporal deficiente, con todas sus implicaciones de alta incertidumbre de la producción agrícola y pecuaria. Ésta es la principal causa de que cada año experimente siniestros, parcial o totalmente la producción agrícola en grandes superficies. En estas condiciones, el grado de incertidumbre de no levantar la cosecha es muy alto; así, bajo esa incertidumbre, el maíz se siembra no con la



esperanza de obtener el grano para las toritillas sino rastrojo para complementar la alimentación del ganado, que se deja al libre pastoreo en un agostadero siempre semi seco.

La caprina constituye la actividad ganadera más adaptada dentro de este sistema de producción, pues es sabido que en los lugares donde escasea el agua las cabras tienen ventajas sobre las vacas o los ovinos, por cuanto a eficiencia de productos obtenibles a partir de su crianza.<sup>57</sup> La cantidad que los campesinos logren acumular de ellas se considera el mejor indicador de su estatus económico, pues su venta provee el mayor porcentaje del ingreso monetario de las unidades económicas familiares, cuando se logra consolidar un hato de al menos medio centenar de cabras. Además de la leche y el queso, un producto final de alto valor en el mercado es la cría masculina, ya que constituye el elemento central del platillo tradicional más típico de esta región del país, “*el cabrito*”; las crías femeninas se incorporan al hato como potenciales reproductoras.

Resulta destacable señalar que en la versión hacendaria de este sistema de producción la especie de ganado de la que se conformaban los hatos no era la cabra, sino el borrego u oveja. El autor de estas líneas infiere como explicación del desplazamiento de los borregos del sistema de producción original es consecuencia del fraccionamiento del territorio hacendario; su apreciación la basa en un estudio realizado por él mismo en ejidos ubicados entre Saltillo y General Cepeda (Angel Carrillo, 2009a), en el que documenta cómo los terrenos planos que fueron fraccionados de las áreas de uso común de los ejidos del Cañón de Derramadero fueron cercadas por los nuevos dueños, tras la privatización durante los primeros años noventa, rompiendo con ello la integralidad del territorio y obstruyendo los pasos a las praderas y manantiales, a donde los ejidatarios llevaban a pastar a sus vacas y borregos. Esta situación privó del acceso al agua a muchos actores locales, obligándolos: por un lado, a desprenderse de sus vacas y borregos, puesto que ya no podían llevarlos a pastar a los bajíos, ricos en forraje natural debido a la mayor humedad que les dejan sus abundantes escorrentías; por otro lado, para tratar de equilibrar su economía, a incrementar la cantidad de cabras en sus hatos, pues a estos animales, a diferencia de vacas y borregos, pueden llevarlos a comer plantas del desierto, en los secos lomeríos; pero también provocó, en menos de cinco años, la desestructuración de las redes de cooperación campesina, tanto intra como inter ejidales, trastocando con ello los acuerdos de uso mancomunado del agua.

A partir de tal evidencia se considera razonable postular que debió de haber ocurrido algo similar con el fraccionamiento de las haciendas durante el reparto agrario; pues téngase presente que fue muy común que los hacendados maniobraran política y económicamente para que los funcionarios operadores del reparto agrario no afectaran a sus mejores tierras; es decir, a aquellos ambientes de producción ricos en humedad y/o con presencia de manantiales. De esa suerte, los campesinos beneficiarios del reparto agrario tuvieron que prescindir de incluir en su sistema de producción a los borregos, encontrando mejor opción en las cabras, dada su rusticidad y adaptación al ambiente natural del semidesierto.

---

<sup>57</sup> El Índice de Agostadero que maneja el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Pecuarias y Forestales (INIFAP) es de una res vacuna por cada 20 a 25 ha de agostadero; una res caprina requiere, en cambio, de 3 ha del mismo, para alimentarse.

### 3.1.1. Surgimiento de la demanda del ixtle e interés hacendario

La demanda de ixtle inició su despunte durante la segunda mitad del Siglo XIX, como efecto del fortalecimiento del modelo porfirista agroexportador. Tanto en el país como fuera de él, el transporte y comercialización de una infinidad de productos agrícolas requería envasarlos en costales<sup>58</sup>, que por aquellos años eran de uso generalizado en la industria así como una amplia variedad de cuerdas y cordeles, cepillos y brochas; todos ellos fabricados con ixtle, como materia prima.

La fibra vegetal era obtenida principalmente a partir de las hojas de dos especies de agaváceas que crecían en dos distantes regiones del país y bajo diferente tecnología de producción: en Yucatán, plantaciones de henequén (*Agave fourcroydes*); en el Desierto Chihuahuense, colecta de cogollos de las siguientes especies de flora silvestre: lechuguilla (*Agave lechuguilla*), cortadillo (*Nolina cespitifera*) y dos tipos de palma del desierto (*Yucca carnerosana* y *Y. filifera*).

Durante El Porfiriato se hizo evidente que había una demanda de ixtle en el mercado, por lo que el proceso de trabajo para su obtención se integró al sistema de producción hacendario, como una actividad complementaria. Sobre la manera como se fue estructurando el mercado ixtlero, se ha rescatado el texto siguiente:

[A mediados del Siglo XIX] ...las fibras duras de palma y lechuguilla eran empleadas por los campesinos de la región solamente para usos domésticos y no tenían ningún valor comercial. Sin embargo, dos situaciones derivadas de las políticas del gobierno mexicano propiciaron, entre 1856 y 1880, la gestación del sistema del ixtle. La primera de ellas fue la formación de los latifundios durante el proceso de legislación de la tenencia de la tierra, llevado a cabo en esa época, y la segunda fue la entrada masiva al país de compañías deslindadoras extranjeras... [y que]... las zonas áridas no fueron la excepción, en los latifundios de la región se ampararon [sic] los campesinos que se convertirían, posteriormente, en ixtleros...

Ramírez González (1985, p.18).

La legislación aludida por este autor se orientaba a abrir el mercado de tierras baldías mediante dos vías: i) promoviendo la consolidación de una clase media rural, como vía para modernizar el sector agropecuario del país; ii) captando recursos fiscales que sirvieran para aliviar el pago de la gran deuda adquirida por gobiernos anteriores. Y aunque no las menciona de forma precisa, difícilmente pueden ser otras que la *Ley de Desamortización de Tierras en Manos Muertas* (conocida como *Ley Lerdo*) y la *Ley General de Colonización*; la primera decretada en 1856 y atribuida en su concepción a Miguel Lerdo de Tejada,

---

<sup>58</sup> Había gran demanda en el mercado de granos y semillas como los cereales (maíz, trigo y cebada, principalmente), las leguminosas (frijol y lenteja principalmente) y de manera muy destacada las bebidas aromáticas (café y cacao).

Secretario de Hacienda del Presidente Comonfort; la segunda<sup>59</sup>, decretada en 1875 por el Presidente de la República Sebastián Lerdo de Tejada, hermano del primero.

Para los últimos años del Siglo XIX la demanda había crecido, pues la cordelería se empleaba en grandes cantidades tanto en la industria como en la agricultura mecanizada de las plantaciones estadounidenses (Sauri, 2012, p. 409). Y aunque gracias a la eficiencia de las haciendas henequeneras el primer productor de la fibra a nivel mundial era, por mucho, Yucatán (Ídem), no resultaba tampoco desdeñable la importancia de la producción del Desierto Chihuahuense<sup>60</sup>. Fue en ese contexto que el gobierno porfirista fomentó la inversión extranjera para fortalecer al sector, pues “...el uso de las fibras vegetales [...] se repuntó [sic] con el establecimiento, en la región, de industrias del ramo textil. Una de las primeras compañías de este tipo fue la Santa Gertrudis, Cía. Limitada Manufacturera de Yute, propiedad de los hermanos Kinnel de Inglaterra<sup>61</sup>...” (Ramírez González, 1985:18)

Si bien el ixtle representó siempre un buen negocio para los comercializadores, en especial los exportadores, como todo producto del sector primario, su precio estaba sujeto a una serie de factores, que ya desde fines del Siglo XIX y principios del XX provocaron que no siempre los montos de las ganancias alcanzaran a satisfacer las expectativas propias del capitalista que está siempre al tanto de las tasas de retorno de su inversión. El caso de la fábrica Santa Gertrudis resulta muy ilustrador en ese aspecto; Garner y Martínez Rodríguez

---

<sup>59</sup> Ambas legislaciones generaron reacciones muy controvertidas en la sociedad de la época y aún de hoy, pues cuando son vistas a la luz de sus desastrosas consecuencias para las comunidades indígenas, a las que interpretó jurídicamente como corporaciones sociales, es decir equivalentes ante la ley a las instituciones religiosas, con lo cual abrió el camino legal para despojarlas de sus tierras. Lo anterior, sin contar que, especialmente la primera, permitió al gobierno incautar los bienes de la iglesia católica, con lo cual rompió un equilibrio de poder hegemónico, que al afectar intereses muy altos, fue detonador del estallido de la Guerra de Reforma, que confrontó a liberales contra conservadores entre 1858 y 1861 (González Lezama R., 2019); la segunda terminó generando mayor acumulación de tierras, debido a sus imprecisiones (De Vos, J., 1985).

<sup>60</sup> Destacan en la flora del Desierto Chihuahuense tres tipos de matorrales o ecosistemas con amplia biodiversidad. En uno de ellos, el matorral rosetófilo, crece un tipo de plantas llamadas ixtleras, pues de sus hojas se obtienen fibras duras. Las fibras duras se conocen comúnmente en México como “ixtle”, por tener su etimología en las lenguas de sus pueblos originarios (Cf. por ejemplo: <https://dem.colmex.mx/ver/ixtle>). El ixtle es la materia prima para la producción de las cuerdas y costales que todavía en los años cincuenta y sesenta del Siglo XX se empleaban de manera profusa como materia prima para las industrias de la cordelería y la cepillería.

En Yucatán, para usos similares, se obtiene del henequén (*A. fourcroydes*); en zonas tropicales húmedas de Tabasco, Oaxaca y Chiapas se obtiene una fibra de calidad superior en textura y color de la pita (*Aechmea magdalenae*), para el tejido artesanal de indumentaria para la charrería.

<sup>61</sup> La empresa se constituyó con el nombre de The Santa Gertrudis Yute Mill Company, Limited; su representante Thomas Kinell dio aviso oficial del inicio de su construcción, en febrero de 1893; en septiembre de 1894 confirmó el inicio de la manufactura (Garner y Martínez Rodríguez, 2018). Tomó su nombre del cantón o barrio parroquial de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Probablemente incluyó dentro de su nombre el nombre Yute, para aludir a una herbácea tropical originaria de Asia Meridional [el Yute o Jute (*Corchorus capsularis*)], de la que se obtiene una fibra dura muy similar a lo que en México se denomina ixtle, si bien dicho producto era importado de la India y Bangladesh, que por aquel entonces eran colonias de Inglaterra.

(2018) explican que, en los años que gobernaba Díaz, era muy común que los concesionarios aplicaran estrategias “clientelistas”, aplicadas mediante influencias políticas y relaciones personales, lo que facilitó a los empresarios ingleses y mexicanos que invirtieron en esa fábrica esgrimir una serie de argumentos para no construir otras dos fábricas a las que se habían comprometido en el contrato que firmaron con la Secretaría de Fomento. Y aunque durante la Revolución no faltaron incidentes que afectaron las instalaciones o incluso saqueos a los trenes, que los ingleses llevaron a los tribunales internacionales, comercializar con ixtle atrajo todavía a acopiadores internacionales durante los años veinte; sin embargo, el precio del ixtle cayó de manera vertical, con el desplome de los mercados internacionales en 1929, generando la primera gran crisis de la producción ixtlera.

Tras la Revolución Mexicana y pese a que Coahuila tuvo un papel protagónico en esta etapa fundacional de la conformación del actual Estado Mexicano, el reparto agrario solamente se concretó hasta después de tres lustros de haber terminado la lucha armada. Tarde y malo fue el reparto agrario en el Sureste de Coahuila; durante ese tiempo los hacendados tuvieron oportunidad de influir de muchas maneras para que no les fueran expropiadas las tierras con mejores condiciones para la agricultura<sup>62</sup>; fue así que la mayor parte de los terrenos que se dotaron a los ejidos fueron, de origen, poco aptos para cultivar. Esas deficiencias en la capacidad productiva de la tierra ejidal influyó de manera muy importante para que el tallado del ixtle mantuviera durante la mayor parte del Siglo XX su relevancia como casi única alternativa de ingreso monetario familiar de los ejidatarios.

### **3.1.2. Reparto Agrario e intervención del Estado**

Si bien desde el Siglo XIX la producción de ixtle era una actividad económica bien consolidada en la Región Sureste de Coahuila, el control tanto de la extracción y tallado de las plantas como de la comercialización del ixtle era ejercido en su totalidad por los dueños de las haciendas; quienes además tenían a su disposición la fuerza de trabajo de los peones acasillados. Considerando, que Porfirio Díaz llegó a la Presidencia de la República en 1877 y que el reparto agrario en Coahuila no se aplicó con determinación sino hasta 1936, se puede asumir razonablemente que el periodo en el que la colecta y tallado del ixtle estuvo integrado al sistema de producción hacendario fue de aproximadamente medio siglo, en el que se fue consolidando la demanda del mercado del producto; lo cual sin duda tuvo que reflejarse en una mayor importancia de su proceso de trabajo dentro del sistema de producción hacendario. Esto es, cinco décadas a través de las cuáles el tallado del ixtle pasó de jugar un rol marginal a ser una fuente muy importante de los ingresos monetarios de

---

<sup>62</sup> El concepto de aptitud es relativo, en tanto que se desprende de los intereses humanos, de cualquier tipo pero finalmente antropocéntricos. En ese sentido, se aclara que en esta frase el autor realza el enfoque económico; más específicamente se habla de la aptitud para producir, que para las regiones áridas o semiáridas (como es el caso que se trata aquí), debe precisarse que cuando se habla de una tierra apta para la agricultura no debe tomarse literalmente en el sentido de la tierra *per se*, por cuanto a la fertilidad del suelo que la cubre; debe interpretarse por cuanto a la humedad que a ella incide y que, además, tiene capacidad de retener; ésto porque no es su fertilidad el factor crítico que le permite sostener un cultivo, sino su humedad; es decir, no el suelo, sino el agua.

la mayor parte de las familias campesinas; cincuenta años que, en aquellos tiempos, eran más de los que alcanzaban a vivir la mayor parte de sus integrantes. Fueron tiempos en los que decenas de miles de peones de las haciendas fueron forzados a sujetarse a acuerdos de aparcería con los dueños de la tierra, quienes al ser acopiadores de la fibra acapararon la mayor parte del ingreso obtenido de la venta de su venta<sup>63</sup>.

En el contexto anterior, el reparto agrario significó un cisma que trastocó severamente las relaciones de producción establecidas. Salvo muy raras excepciones, para el caso de Coahuila las dotaciones ejidales se concentraron en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas; la mayor parte de ellas dadas en 1936, cuando todavía estaban presentes los estragos económicos locales provocados por efecto de la Gran Depresión de 1929. Paralelamente al reparto agrario, se fueron conformando varias federaciones regionales campesinas, cuyos integrantes aspiraban a competir con la empresa privada denominada “Nacional Ixtlera”, que en esos tiempos monopolizaba el mercado regional. La versión histórica dominante plantea que, para materializar esa aspiración de hacerse del mercado regional, se generaron movilizaciones campesinas multitudinarias, a partir de las cuáles lograron proyectar su causa a nivel nacional, logrando para 1940 desplazar definitivamente a esa empresa y crear la La Federación de Cooperativas Ixtleras La Forestal F.C.L. (Peña Garza J.M. 2002).

Lo que aquí se quiere destacar es el rol determinante que tuvo el Estado para orientar, en tal coyuntura histórica, la producción campesina regional casi de manera exclusiva hacia el ixtle. Lo hizo instrumentando un abanico de acciones cuidadosamente concertadas, a las que denominó *Proyecto Ixtlero*, asignando el nombre de *Región Ixtlera* al conjunto de municipios donde lo instrumentó. En términos metodológicos, no están claros los criterios que se emplearon para delimitar esta región, ya que desde un punto de vista florístico esos municipios no son muy distiguibles de otros del Desierto Chihuahuense; es decir, que la lechuguilla es una planta que se encuentra en muchísimos más municipios que los que se incluyeron en la misma. El sentido común indica que debieron haberse seleccionados en base al peso que tenía en ese momento el tallado del ixtle<sup>64</sup> en el PIB municipal; el caso es que se denominó “*ixtleros*” a los campesinos que quedaron incorporados al proyecto.

---

<sup>63</sup> En un determinado momento, cuando el capital hacendario “reparó” en que el ixtle ya se podía vender con ganancia, pronto encontró la manera de apropiarse del excedente generado por la fuerza de trabajo campesina cautiva de la hacienda. Al repartirse las tierras por la Reforma Agraria: “Los campesinos se convirtieron en talladores independientes y, aunque muchos de ellos no disponían terrenos propios, tallaban el ixtle en terrenos privados, pagando a los propietarios un porcentaje del valor de la fibra recolectada. Los ex hacendados, representando el mismo papel de intermediarios, se convirtieron en compradores, quienes para facilitar su labor y establecer el buen control, instalaron tiendas rurales con radios de acción que alcanzaban varios poblados. Paulatinamente, esta forma de organización condujo a una situación similar a la de la etapa anterior...” (Ramírez González, 1985:22).

<sup>64</sup> El proceso del tallado tradicional consiste en pasar sobre las hojas de lechuguilla o de palma samandoca el filo de un machete, muchas veces y longitudinalmente, de modo de ir raspando el tejido blando sin romper la fibra dura que a manera de soporte anatómico da rigidez a las hojas. A mediados de los años ochenta del siglo pasado se introdujo una máquina talladora, compuesta de un motor eléctrico, que eficientó de manera superlativa la obtención de la fibra, si bien sacrificando un poco la calidad de la fibra, debido a la brusquedad con la que las navajas pasan sobre las hojas.

La opinión personal de quien estas líneas escribe es que, justificada o injustificadamente, se reificó al ixtle como elemento central para la vida de la región y del productor<sup>65</sup>; indicador de ese enfoque se encuentra incluso en trabajos académicos en los que se ha pretendido reconocer una “*identidad ixtlera*”. Tal es el caso, por ejemplo, de Peña Garza S. (2001, p.3), quien plantea que su propuesta de desarrollo rural la hace “*partiendo del reconocimiento de que existe una identidad colectiva de los campesinos ixtleros que se objetiviza tanto en la denominada Región Ixtlera como en la lucha, de estos campesinos, por la histórica creación y reciente recuperación de su organización social, La Forestal F.C.L...*”.

Pese a esta visión idealizada, la historia del Siglo XX muestra que los ingresos obtenidos por los afiliados a La Forestal F.C.L. nunca alcanzó, en la vida real, el nivel mínimo suficiente para abrirles la posibilidad de salir de pobres; antes al contrario, la Federación terminó definiéndose como un ente de control económico y político que los mantuvo atados a los intereses del capital, tanto local como internacional. Las demandas de un mercado internacional inestable marcaron siempre la pauta de las constantes fluctuaciones en el precio de compra y de la cantidad de ixtle posible de vender en un determinado momento. Los cambios tecnológicos que trajo el desarrollo de la petroquímica provocaron el casi absoluto desplazamiento de las fibras naturales del mercado internacional, por lo que la actividad ixtlera cayó estrepitosamente durante el último cuarto del XX. Tampoco faltaron decisiones de gobierno que con el tiempo trajeron en consecuencia efectos no esperados o diferentes a los que se manejaron en el discurso oficial. Por ello, el autor de este trabajo considera que el Proyecto Ixtlero no fue tan exitoso para los campesinos como muchos pretenden; ni en lo social, ni en lo económico; sí obtuvo, en cambio, buenos dividendos políticos para el partido de Estado porque a partir de él se construyó una amplia red de cooperativas ejidales, que significaron un andamiaje institucional idóneo para corporativizar a los campesinos afiliados a La Forestal dentro de su estructura.

Independientemente de cuál sea la explicación más certera respecto a la realidad de las motivaciones económicas y políticas que dieron origen al *Proyecto Ixtlero* y a su estructura orgánica, lo que es innegable es que en sus mejores años cubrió un territorio muy amplio y logró estructurar con buen nivel de eficiencia la cadena de producción y comercialización del ixtle ofertado por más de seis centenas de cooperativas; tampoco se puede cuestionar que la Federación de Cooperativas dio cobertura asistencial en salud a las familias de sus integrantes, con una prestación tan impensable tanto antes como después del Proyecto, como lo fue su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en el ámbito del abasto de víveres y productos básicos la estructura de transportes de la misma fue bien aprovechada para mejorar la calidad de consumo de los habitantes de los ejidos afiliados.

Visto en su perspectiva política, al subsidiar la constitución de una organización de segundo nivel orientada a acopiar la fibra, el Estado cumplió con su obligación de ofrecer espacios de desarrollo a los beneficiarios de la acción agraria, al tiempo de legitimar aún más su imagen ante ellos; es decir, dos convincentes motivaciones para los gobernantes del momento para

---

<sup>65</sup> Desde la perspectiva de muchos funcionarios y/o académicos el *Proyecto Ixtlero* fue un éxito logrado a partir de la capacidad organizativa, la autonomía, la participación, la motivación, la energía y muchas otras cualidades que se les han atribuido a las sociedades campesinas que se integraron en cooperativas locales y posteriormente en la *Federación de Cooperativas Ixtleras La Forestal F.C.L.*

impulsar a La Forestal F.C.L. Sin embargo, la evidencia documental disponible y las condiciones materiales que, hoy día, a simple vista, se observan al recorrer los que eran denominados “*ejidos ixtleros*”, no permiten afirmar que el Proyecto haya sacado de la pobreza más que a unos cuantos líderes campesinos que asumieron puestos de administración y/o de representación legal dentro de la Federación<sup>66</sup>; lo que sí se puede decir, en cambio, es que contribuyó de manera muy importante a sentar las bases para conformar las actuales relaciones de poder en el campo.<sup>67</sup>

### 3.2. El emporio agroindustrial de La Laguna

También conocida como Comarca Lagunera, La Laguna es una región natural que hasta mediados del siglo XX se encontraba bien definida por los ríos Nazas y Aguanaval y un conjunto de lagunas que hoy se encuentran secas la mayor parte del año, cuando no definitivamente han desaparecido. Se trata de un territorio que comparten los estados de Coahuila y Durango y aunque existe consenso general respecto a la mayor parte de los municipios que la conforman, algunas fuentes discrepan respecto a la inclusión o exclusión de ciertos municipios periféricos. Existen fuentes, como lo es el caso de la Comisión Nacional del Agua, que incluso integran Parras de La Fuente cuando refieren a aguas superficiales, municipio que en otro tipo de regionalización vinculan al Sureste de Coahuila (el de aguas subterráneas)<sup>68</sup>. Pero también los procesos sociohistóricos entre la microrregión de estudio

---

<sup>66</sup> Se encuentra muy extendida la opinión, tanto entre los hijos y nietos de los cooperativistas que hoy representan a los actores locales, hasta académicos y funcionarios públicos, que en la mayoría de los casos los últimos dirigentes campesinos de La Forestal F.C.L. ejercieron una función política inclinada más a favor de los intereses del Estado que a los sus representados; algo similar a los llamados “líderes charros” del sector obrero, que fueron pieza estratégica para el control y el sometimiento político de los trabajadores de la industria, al partido oficial.

<sup>67</sup> Lastimosa evidencia de la forma de ejercer y construir cotos de poder cobijándose en el aparato corporativo del Estado, se palpa en el hecho de que algunos de los hijos de quienes tuvieron puestos de dirigencia dentro de La Forestal F.C.L. son actualmente funcionarios de mediano nivel en las dependencias gubernamentales estatales y municipales enfocadas a atender el medio rural. Siendo Coahuila un estado donde no ha habido alternancia de partido en el gobierno, llegan a esos puestos solamente después de probar irrestricta lealtad a la C.N.C., donde también suelen alternarse puestos directivos. Más grave resulta el hecho que, ya articulados a la oligarquía que controla el Estado, de manera consciente o inconsciente pero siempre de manera subordinada, cuando se les ha requerido han jugado un papel como infiltrados en las movilizaciones independientes de los actores locales; o simplemente convocando a la inmovilización de actores locales que dependen de alguna forma de la C.N.C.; con lo cual han sido factor para facilitar el despojo de la tierra y del agua.

<sup>68</sup> Para tratar el tema de las aguas superficiales, la Conagua o CNA ubica a Parras dentro de la Subregión Cuencas y Planicies del Norte, que es la misma en la que se incluye toda la Comarca Lagunera. Sin embargo, al tratar las aguas subterráneas ubica a Parras dentro del Acuífero 521 Saltillo-Sur, que comparte con otros dos municipios del Sureste de Coahuila. Este dato se considera importante de resaltar porque el municipio de Parras de La Fuente es un referente nodal para el contexto de esta investigación; especialmente porque una parte del ciclo natural del agua pasa por un flujo vertical subterráneo, tanto en sentido descendente (infiltración) como ascendente (afloramientos), de hace más complejo el análisis *micro* relacionado con los estudios de caso

han estado permanente y estrechamente imbricados con los del Sureste y de La Laguna<sup>69</sup>, al menos durante los últimos cuatro y medio siglos; en ese sentido, sería un error entrar a analizar los temas del acceso y la competencia por el agua sin antes contextualizar tales procesos, volteando hacia ambas regiones vecinas de la franja sur de Coahuila; de ahí que en el presente apartado se resalten al lector algunos datos históricos considerados pertinentes para este estudio.

Dicho lo anterior, con la finalidad de tener una idea de su contexto en relación al tema del agua y en el periodo de mayor interés dentro de las necesidades del presente trabajo, se puede señalar que La Laguna o Comarca Lagunera remonta su origen a la segunda mitad del siglo XIX y debe buena parte de su existencia a los ríos Nazas y Aguanaval, que se distinguen en esta región semidesértica por ser de los escasísimos cuerpos de agua que hasta eso años eran de corriente permanente. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se fomentó su colonización y el impulso a las tecnologías de riego, así como del fomento a la iniciativa privada, enfocados a la producción del algodón, que entonces era de una gran demanda en el mercado internacional. Es por ello que se puede decir que la historia de La Laguna durante los últimos ciento setenta años está ligada íntimamente a la globalización de los mercados agropecuarios<sup>70</sup> y que su acelerado crecimiento económico se ha basado en la ventaja de disponer de grandes volúmenes de agua en el contexto del desierto.

Las crecientes del Aguanaval y del Nazas fueron la fuente para introducir el cultivo del algodón e iniciar la conversión del sistema agropecuario de secano tradicional a la modernidad del riego, desde 1840; luego, la alta demanda en el mercado internacional permitió extender de manera amplia y rápida la superficie de este cultivo hasta los inicios de los cincuenta del Siglo XX), cuando empezó a ser desplazado por el de forrajes que, como alimento para cientos de miles de cabezas de ganado vacuno, hoy día sostienen uno de los *clusters* de productos lácteos más grandes del Continente Americano<sup>71</sup>.

Por lo anterior, no sorprende que, en Coahuila, sea esta región donde han surgido los conflictos por el agua más antiguos e importantes dentro del periodo que abarca el presente estudio. El primero de ellos del que se tiene noticia se desencadenó en los años ochenta del

---

<sup>69</sup> Como ya se explicó en apartados anteriores, la vinculación entre Parras y Saltillo fue intensa durante todo el Virreinato y la mayor parte del Siglo XIX. A partir del triunfo de La República, al desarticularse el Latifundio Sánchez Navarro, Parras se convirtió en el nodo urbano-rural desde el cual los nuevos hacendados (la mayoría de ellos ligados al capital financiero regiomontano) se lanzaron a realizar nuevos proyectos orientados a aprovechar productivamente las aguas de los ríos Nazas y Aguanaval, con lo cual desencadenaron las fuerzas productivas de La Laguna.

<sup>70</sup> Inzunza y Curtis (2005, p. 363) señalan que “El análisis histórico de la región revela que hubo cuatro periodos importantes en la evolución de la agricultura de riego: el periodo de los grandes latifundios (1700 a 1825) cuando toda la Laguna fue usada para actividades de pastoreo; el periodo de Las haciendas (1840 a 1910) con el inicio de la irrigación y el esplendor algodonnero; el periodo después del Reparto Agrario (1936 a 1946) cuando los agricultores todavía usaban la antigua infraestructura hidráulica; y finalmente, el periodo de Modernización (1950 a 1975) cuando se construyeron importantes estructuras hidráulicas para mejorar el sistema de irrigación.”

<sup>71</sup> Los forrajes se eslabonan a la cadena de producción de productos lácteos, que genera mucho más valor agregado que el algodón eslabonado a la cadena productiva industrial textil.



siglo XIX, a partir de que la empresa algodonera Tlahualilo construyó obras que desviaron las aguas del cauce principal del Nazas, con lo cual desabastecieron a las propiedades ubicadas en partes más bajas del mismo. Al respecto, Wolfe (2006) señala que:

...la Tlahualilo Cotton Estate fundada en los 1880s por empresarios Mexicanos, que fue comprado por un consorcio británico-americano en 1903. Era la empresa agrícola más rica y tecnificada en la región, la cual construyó un canal de 70 kilómetros, artificialmente emulando el antiguo brazo norte del curso del río Nazas antes de 1840 cuando el río había cesado de fluir hacia la Laguna del Caimán en Durango<sup>72</sup>. En tanto altamente tecnificado y usuario río arriba, su medida y posición única hizo a la Tlahualilo Company una agrupación en sí misma dentro de un esquema geográfico que dividía a los usuarios del río Nazas entre los intereses de los ribereños de arriba, los de abajo y la Tlahualilo.

(el pie de nota es mío).

De acuerdo a ese mismo autor, la construcción del canal por parte de la empresa originó una disputa con los dueños de los predios ubicados en partes más bajas de la cuenca, quienes acudieron tanto a los tribunales locales como a los estatales y federales. Al no serle favorables los dictámenes, la empresa demandó al gobierno federal, con el apoyo de los gobiernos británico y estadounidense. La magnitud que alcanzó este conflicto llevó a que se le denominara popularmente como *“La cuestión del Nazas”* y obligó a Porfirio Díaz a enviar desde su gobierno central una comisión especial de funcionarios y técnicos a La Laguna, quienes tras dos o tres años de estudiar el caso propusieron construir un gran sistema de presas y canales, que distribuyera el agua de una forma con la que todas las partes estuvieran conformes (Wolfe M. 2006).

El proyecto desató una gran controversia, entre quienes lo cuestionaban y quienes lo apoyaban; entre estos últimos se encontraba Francisco I. Madero, quien publicó un pequeño libro (Madero, F. 1907) en el que daba sus argumentos a favor. Pero su llamado no encontró eco más que en una minoría de los propietarios privados locales, pues los detractores del proyecto también tenían contra argumentos de peso, como eran: que la presa detendría los limos que fertilizaban los terrenos anegados con las crecientes del río; no habría viabilidad financiera para la obra y se les cargarían los costos del fracaso a los terratenientes, pero sobre todo temían que con la construcción se alterarían los derechos que ellos habían logrado adquirir poco a poco, durante décadas. Estando en esas controversias sobrevino la Revolución Mexicana, que obligó a interrumpir las negociaciones orientadas a materializar megaproyecto hidráulico porfirista y no fue sino hasta el sexenio presidencial de Lázaro Cardenas, un cuarto de siglo después, que la construcción de la obra pudo ser iniciada; aunque vale decir que durante todo el periodo intermedio el tema permaneció vigente.

---

<sup>72</sup> Esta era una de las lagunas que dieron nombre a la región. Junto con otras, dentro de las que destacan la Laguna de Mayrán y la Laguna de Viesca, representaban humedales, que desde una perspectiva ecológica tenían la importante función de ser hábitats de especies vegetales y animales poco comunes en el Desierto Chihuahuense (Valencia Castro, 2005).

En relación a este momento histórico, Wolfe (2006) sostiene que el logro de la *construcción física* de las grandes infraestructuras de almacenamiento y de distribución del agua pudo ser posible solamente a partir de una *construcción social* previa; esto es, que contaron con un apoyo popular desde los exhortos de Francisco I. Madero, en su rol de hacendado en los tiempos en que Porfirio Díaz era Presidente, hasta la presencia personal de Lázaro Cárdenas en La Laguna, durante tres meses, para supervisar el reparto de tierras y aguas. En ese mismo sentido, subraya en otra obra Wolfe (2010) el hecho de que durante el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles (1924-1928) y durante “El Maximato”<sup>73</sup> (es decir, entre el porfiriato y el cardenismo) el gobierno federal nunca dejó de mantener su presencia en La Laguna, a través de funcionarios y técnicos que estuvieron tratando el tema del Sistema de Riego: ante los propietarios de la tierra y ante los gobernadores de Durango y Coahuila, orientando una relación multilateral que la mayor de las veces no fue tersa, en ocasiones ríspida o aún casos en los que salieron a relucir los rasgos autoritarios del apodado *Jefe Máximo*<sup>74</sup>; pero que a fuerza de constancia logró moldear, poco a poco, el imaginario social y construyó las condiciones objetivas para poder instrumentar el proyecto.

Quien estas líneas escribe comparte íntegramente la opinión que hace Wolfe, más considera que se queda corta pues no incorpora que hay evidencia clara de que el Estado también instrumentó una *reconstrucción orgánica gubernamental*, especialmente en los tiempos del callismo. Esto es, adaptó las estructuras administrativas y operativas de gobierno relativas al agua subterránea y para lograrlo pasó por hacer previamente una *construcción jurídica*, decretando la *Ley sobre Irrigación de Aguas Federales* (DOF 09/01/1926; Agua para todxs, 2015) y creando a partir de ella la *Comisión Nacional de Irrigación (CNI)*. Dicho de otra forma, se debe reconocer y ratificar que Calles construyó una nueva institucionalidad, tanto social como gubernamental.<sup>75</sup> Implicó la realización de un trabajo político muy amplio, pero a la vez muy detallado; sin duda definitorio del devenir histórico del país, pues hasta ese momento los caudillos de la Revolución no acababan de ponerse de acuerdo sobre las reglas y acuerdos que darían forma al nuevo Estado Postrevolucionario; un trabajo a todas luces muy complicado, tanto por las tendencias autocráticas y autoritarias propias de los

---

<sup>73</sup> Plutarco elías Calles halló la manera de controlar a tres de los presidentes que lo sucedieron en el cargo: Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortíz Rubio (1930-1932) y Abelardo L. Rodríguez (1932-1934). A este periodo histórico se le conoce como “El Maximato”, que culminó con la negativa de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) a dejarse manipular.

<sup>74</sup> Romero Navarrete (2006) refiere que, ante la oposición de los terratenientes a la propuesta de regular la distribución del agua mediante la construcción de un sistema de riego, Plutarco Elías Calles aplicó políticas de mano dura para disuadirlos de seguir ofreciendo resistencias.

<sup>75</sup> No hay que olvidar que Plutarco Elías Calles fue el gran promotor de una profunda transformación de las instituciones del Estado Postrevolucionario. Se le reconoce a él ser el constructor de la gran tramoya que hizo posible mantener el régimen del partido-gobierno durante todo el resto del Siglo XX y parte de las dos primeras décadas del Siglo XXI. Y es dentro de esa escala más amplia que debe de verse la institucionalidad para el control y uso del agua. Aboites Aguilar L. (2001a, 2009, 2010) llama a la última institucionalización el *Agua de la Nación*, cuyo resultado fue la transformación de lo que Aboites Aguilar mismo ha denominado “*labores nuevas*”, para diferenciarlas de las “*labores viejas*”.

caudillos revolucionarios (baste con señalar el asesinato de Álvaro Obregón en 1928) sino por las inercias que desde el régimen porfirista todavía se dejaban sentir tanto en las instituciones *de jure* como *de facto* que orientaban el quehacer gubernamental. El siguiente texto, recuperado de un artículo de periódico, ilustra la importancia que tuvo esta *construcción institucional en torno al agua*, en el contexto de aquellos años

...el control federal sobre los recursos hídricos, establecido desde 1888, fue claramente legitimado hasta la Constitución de 1917... [que]... fue la primera en considerar expresamente al agua subterránea [...] creó la Secretaría de Agricultura y Fomento... con el fin de lograr el pleno aprovechamiento del recurso, ocuparse de la cuestión agraria y de administrar las aguas de propiedad federal. Como resultado, el Presidente de la República, Plutarco Elías Calles, envió al Congreso una iniciativa de ley aprobada en 1926, en la que se declaraba de utilidad pública la irrigación de propiedades privadas. En ese mismo año se formó la Comisión Nacional de Irrigación, que fue el primer organismo de carácter nacional dedicado al agua, con autonomía suficiente para organizarse como mejor conviniera para administrar el recurso y con una relación directa con el Ejecutivo...

Jiménez Cisneros (2010).  
[los subrayados son míos]

Resulta crucial para la comprensión del alcance de la propuesta callista considerar que, al concebirse como uno de los proyectos insignia del Estado Postrevolucionario, esta construcción institucional integraba el reparto del agua con el reparto de la tierra; lo cual representa una diferencia nodal con la propuesta porfirista, que solamente consideraba la distribución del agua entre hacendados y ni remotamente se planteaba la posibilidad de una reforma agraria. Del mismo modo, la propuesta porfista se planteaba únicamente en términos de modernización y eficiencia en el uso de los medios de producción y de la circulación de mercancías, sin detenerse en absoluto a considerar los efectos sociales negativos que pudiera generar entre quienes llevaban sobre sus espaldas el mayor esfuerzo de trabajo físico requerido para mantener activos los sistemas de producción.

No es de extrañar, pues, que ese rediseño al proyecto original haya levantado inmediatas manifestaciones de inconformidad por parte de los propietarios privados, a quienes por un lado se les proponía riego pero por otro se les advertía que una proporción de las propiedades beneficiarias del sistema de irrigación serían expropiadas para aplicar el reparto agrario<sup>76</sup>. Fue así que esta propuesta abrió nuevos frentes de conflictos por el agua para el gobierno federal.

---

<sup>76</sup> La propuesta callista no estaba, sin embargo, exenta de contradicciones, incluso ideológicas; una de las más importantes es la señalada, tanto por Wolfe (2010) como por Aboites Aguilar (2009, 2010), respecto a que Calles era más partidario de fortalecer la pequeña propiedad que emprender una reforma agraria radical orientada a la constitución de ejidos; de acuerdo a estos mismos autores, su visión de este proyecto estaba influenciado por el modelo dominante de irrigación que se seguía en los Estados Unidos, por cuanto a las formas técnico-administrativas mediante las que se realizaba el control de los equivalentes a los distritos de riego. Pero en tanto que al interior del Estado y su

Súmese a las anteriores consideraciones el hecho de que, en esos mismos tiempos y en La Laguna, los agraristas habían logrado empoderarse lo suficiente como para generar temores entre los propietarios y se podrá tener una idea más cabal respecto a que el clima social era propicio para la generación de conflictos tanto por el agua como por la tierra. El debate por el reparto agrario y por la construcción del sistema de riego fueron ingredientes de un caldo de cultivo para un nuevo tipo de conflictos por la tierra y por el agua, durante los años veinte y treinta del Siglo XX. Esto es, que la competencia por el agua ya no solamente fue protagonizada entre los dueños de la tierra, sino que entraron a participar en ella ese contingente de peones de haciendas que se habían mantenido a la sombra durante el Porfiriato, pero que se hicieron visibles como solicitantes de tierras ejidales, al popularizarse los ideales del agrarismo. Las siguientes palabras, que son parte de las conclusiones de una investigación histórico-sociológica orientada a indagar los factores que originaron en La Laguna la emergencia de demandas y movilizaciones por la tierra y por el agua en el periodo postrevolucionario, ilustran claramente el sentido y dimensión de tales conflictos: "...la competencia por el agua dividió a la élite, la competencia por la tierra dividió la región entre los propietarios y los no propietarios, es decir, entre ricos y pobres" (Meyers W.K, 1994).

Cabe señalar que en la misma obra W.K. Meyers (*op cit.*) destaca que aunque el tipo de relaciones laborales en las haciendas de esta región del país se caracterizaban por tener un importante componente de filiación solidaria con el hacendado<sup>77</sup>, muchos jornaleros habían participado en los regimientos villistas y otros habían trabajado en los campos agrícolas de los Estados Unidos (hasta que el desempleo derivado de la Gran Depresión y/o la deportación los obligó a buscar trabajo en La Laguna). A partir de la descripción de esos antecedentes, el autor sostiene que el contacto de estos trabajadores con los sindicatos agrícolas estadounidenses les había dado a ellos una experiencia vivencial respecto a que que existían otras maneras para concebir relaciones laborales entre patrones y trabajadores agrícolas, lo cual favoreció en ellos la aparición de una actitud rebelde ante los patrones.<sup>78</sup>

El caso es que en el sexenio de Lázaro Cárdenas la presión ejercida desde el Estado logró finalmente romper la resistencia de los grandes propietarios con los que se había confrontado por décadas: desde Díaz hasta Calles y su proyecto de Grande Irrigación<sup>79</sup>. En

---

gobierno existían fracciones conformadas por actores políticos radicales, por cuanto a lo que se refiere a la concepción de cómo el gobierno federal debía apegarse a los valores de la Revolución, no le resultaba políticamente viable ni conveniente desligar de su discurso su disposición a instrumentar el reparto agrario.

<sup>77</sup> En un apartado previo de este documento se describe un planteamiento similar, realizado por J. Meyer (1986),

<sup>78</sup> En ese mismo trabajo, mediante un estudio estadístico, Meyers W.K. (1994) encontró que existía una relación estrecha entre los años de sequía y los momentos en los que se fortaleció de manera evidente el Ejército de Pancho Villa, lo cual lo llevó a deducir que los peones optaban por integrarse al ejército villista, ante la incertidumbre económica que les generaba la falta de trabajo; pero que muchos regresaban a trabajar a las haciendas cuando las crecientes del río eran abundantes y, con ello, no faltaba el trabajo en las haciendas, porque el desarrollo del algodón era saludable.

<sup>79</sup> Aboites Aguilar (2001a, 2009, 2010) ha estudiado de manera minuciosa este gigantesco proyecto concebido por Calles al calor de los rescoldos que todavía no se habían apagado del fuego

este contexto histórico, mediante una serie de negociaciones, en La Laguna se logró reorganizar la distribución del agua del Nazas, a través de un sistema de presas y canales de riego, al tiempo de dotar de tierras a campesinos en ejidos concebidos, en su mayoría, como colectivos<sup>80</sup>.

Pero la historia está llena de ejemplos sobre las estrategias que logra aplicar el capital para no perder sus ventajas para mantener bajo su control los medios de producción. No fue excepción el caso de La Laguna, pues al tiempo de cuando se realizaba la *construcción institucional* callista, para alcanzar la construcción física del sistema de riego para uso de las aguas del Nazas, los terratenientes incorporaron la electrificación a sus norias, tras lo cual prosiguieron con la perforación de pozos profundos equipados con bombas hidroeléctricas.<sup>81</sup> Muy pronto se extendió por toda la Comarca Lagunera el riego agrícola con agua subterránea; el número de pozos en uso prácticamente se multiplicó por nueve entre los doce años que pasaron entre los inicios de la construcción institucional emprendida por Calles y los decretos de reparto de tierra y aguas emitidos por Cárdenas; esto es, que entre 1926 y 1938 pasaron de haber 114 a 996 (Cuadro 1).

---

revolucionario para desarrollar el sector agropecuario del norte del México mediante gigantescas obras de irrigación, beneficiando a los pobladores de sus extensos territorios rurales y manteniendo el control administrativo y distributivo del agua por el Estado. Y aunque Aboites Aguilar enfoca la atención de sus investigaciones al proceso de construcción del Distrito de Riego N° 5 a partir de 1933 (que dio lugar a la fundación de Ciudad Delicias, Chihuahua) el autor de estas líneas no ve razón aparente por la cual no pueda asumirse que ese mismo enfoque de darle al Estado todo el poder en materia de uso de las aguas también sea aplicable a La Laguna. No solamente porque se trata de regiones cercanas (Delicias se ubica a unos 400 Km de Torreón-Gómez Palacio), sino sobre todo por lo que ya se ha discutido antes en este mismo apartado, respecto a que La Laguna fue una de las regiones en las que se dieron los principales conflictos por el agua, desde fines del Siglo XIX y que desde el Porfiriato hasta el Cardenismo tuvo una atención muy especial por parte de los sucesivos gobernantes federales.

<sup>80</sup> La tesis doctoral de Wolfe (2010) es una referencia ineludible de leer para quien quiera comprender la magnitud del reto, visciditudes y obstáculos que el gobierno cardenista tuvo que enfrentar para ejecutar la dotación de ejidos en la Comarca Lagunera. Su trabajo explica desde cómo Cárdenas supervisó personalmente durante tres semanas la expropiación de 226 haciendas para crear cerca de 300 ejidos colectivos; pero también relata cómo el problema de la falta de agua para la mayoría de ellos fue el problema más grave al que tuvieron que enfrentarse los campesinos beneficiarios de las tierras dotadas y de cómo los técnicos a cargo trataban de encontrar una salida airosa a este problema, a pesar de tener en sí mismos sus propias contradicciones profesionales, al darse cuenta que el agua no iba a alcanzar para todos ni para siempre.

<sup>81</sup> Wolfe (2010) refiere a periódicos de la época en la que se relata que el primer pozo que fue perforado para uso agrícola en La Laguna fue en 1893, pero que no fue sino hasta 1920 cuando se equipó con una bomba de motor de gasolina, gracias a lo cual fue capaz de triplicar la superficie de agua regada. Señala este mismo autor que, con todo y ese incremento en la eficacia, los propietarios veían en la falta de garantías para no ser afectados por el reparto agrario el principal obstáculo para equipar sus pozos; pero por el contrario, la posibilidad de disminuir los riesgos de siniestro e incrementar la producción representaban atractivos muy fuertes; sobre todo porque al estabilizar las producciones anuales se abatían las tensiones sociales, al emplear a miles de trabajadores.

**Cuadro 1 Pozos perforados y en uso en La Laguna (1920-1950)**

AÑO	POZOS PERFORADOS	POZOS EN USO
1920	12	12
1926	114	114
1932	365	365
1938	996	996
1944	1546	1546
1950	2014	2014

Adaptado de Wolfe 2010/Rolando Victor 1987

Los autores de la bibliografía revisada (Aboites Aguilar, Wolfe, Meyers, Sosa, Navarrete) coinciden en ubicar a la falta de regulación gubernamental del agua del subsuelo como el factor determinante para que la superficie irrigada se expandiera de manera desmedida, a partir de los años veinte. Situación que pudo darse a consecuencia de la obsolescencia que provocó la nueva tecnología en el marco legal, debido a que la ley de aguas vigente no planteaba ningún tipo de restricción al uso de los mantos acuíferos y mucho menos contemplaba la posibilidad de aplicar la fuerza electromotriz para extraer sus volúmenes a la superficie.

Tras la Segunda Guerra Mundial sobrevino una caída de los precios internacionales del algodón, lo que conllevó a la disminución de su cultivo en La Laguna; pero no melló en la expansión del riego con aguas subterráneas, pues en la medida que fue abandonándose su cultivo, fue incrementándose el de la alfalfa, planta forrajera que requiere aún mayores cantidades de agua<sup>8283</sup>. Esta forma de reconversión productiva encontró nuevas facilidades a partir de 1946 pues, al llegar a la Presidencia de la República, Miguel Alemán Valdés abrió a los propietarios privados el acceso a créditos blandos y subsidios gubernamentales para la producción de forrajes, favoreciéndolos por sobre los ejidatarios, a los que mantuvo orientados al cultivo del abaratado algodón<sup>84</sup>.

---

<sup>82</sup> Otro factor que, en alguna medida, también contribuyó a facilitar la expansión del riego, fue la influencia de la cultura de los refugiados de la Guerra Civil en España, que en gran número fueron enviados por Cárdenas a estas tierras, quienes estaban ya familiarizados con tal sistema de producción.

<sup>83</sup> La alfalfa es un producto que debe cultivarse bajo sistemas intensivos con riego, que posee muchas características que lo ubican dentro de la definición de “commodity” (Cf. <https://www.rankia.co/blog/analisis-colcap/3690806-que-son-commodities-caracteristicas-tipos>).

<sup>84</sup> No hay que perder de vista que Miguel Alemán, además de ser más afín a los valores capitalistas que quienes lo precedieron, fue investido recién culminada la Segunda Guerra Mundial, que en

En materia de administración del agua, Alemán decretó el finiquito de la Comisión Nacional de Irrigación y trasladó sus competencias a la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), instancia estructurada acordemente con el Modelo de Sustitución de Importaciones, que venía siendo impulsado desde su predecesor en el cargo, Manuel Ávila Camacho. En ese contexto, los privados pronto eslabonaron la producción intensiva de forrajes a la cadena de producción de la leche,<sup>8586</sup> con lo cual sentaron las bases para construir la gran agroindustria que hoy día ha colocado a La Comarca Lagunera como el emporio lechero más importante del país (Salas Quintanal, 2011).

En poco tiempo, la extracción de grandes volúmenes de agua provocó el abatimiento de los mantos acuíferos de la región, lo cual trajo en consecuencia la crisis del agua que empezó a dar muestras de materializarse desde los años cuarenta y que hoy día se ha convertido en la amenaza número uno contra la viabilidad del actual modelo de producción intensiva agropecuaria; pero sobre todo para la salud humana, puesto que actualmente gran parte del agua que consume la población lagunera, contiene concentraciones de arsénico que rebasan con mucho la norma oficial establecida.<sup>87</sup> La bibliografía que describe estas problemáticas es muy basta; se puede asegurar, sin la menor duda, que el problema del agua en La Laguna es uno de los la mayor gravedad a nivel nacional, si no es que continental; las referencias que aquí pueden dar al lector una primera aproximación a su complejidad, pero existen innumerables autores de las más diversas especialidades que pueden localizarse sin dificultad para los lectores que deseen profundizar en el tema. Aquí solamente se pretende dar un contexto *ad hoc*, en todo caso, para redondear esta explicación se puede decir de manera sintética que la crisis actual de La Laguna es muy grave. Los equilibrios ambientales fueron rotos desde hace muchos años y hoy día el ciclo natural del agua presenta alteraciones irreversibles. Los conflictos socioambientales se

---

términos económicos representó un momento histórico muy propicio para el fortalecimiento del modelo de libre mercado, a nivel global.

<sup>85</sup> Esto es, el encadenamiento del cultivo de forrajes a la cría de ganado europeo, usando: i) en lo agrícola, agua extraída del subsuelo mediante pozos profundos a la producción y el uso de intensivo de agroquímicos; ii) en lo pecuario, producción de leche mediante ordeña mecanizada de vacas de alto registro, alimentadas con forraje enriquecido con nutrientes altamente proteínicos y calóricos), en condiciones de movilidad restringida.

<sup>86</sup> Wolfe (2010) recupera de Fred Pierce ["Earth: The Parched Planet," *The New Scientist*, February 25, 2006] la estimación de que son necesarios 2000 litros de agua para producir un litro de leche de vaca. Se deduce que incluye la cantidad de agua necesaria para producir el forraje con el que se alimenta, puesto que por otra parte recupera de un periódico de La Laguna la estimación de que en 1959 una vaca requería aproximadamente 150 litros de agua: "...dairy cows in the United States required 151 liters a day each just for drinking" ("Requieren Agua Abundante Las Vacas Lecheras," *El Siglo de Torreón*, July 26, 1959").

<sup>87</sup> Las personas más afectadas son las pertenecientes a los estratos de menor ingreso económico; más allá de los elevados precios que hacen impagable para ellos el gasto de comprar garrafas de agua purificada, las concentraciones de arsénico presentes en el agua extraída de los pozos se manifiesta en graves enfermedades (véase, por ejemplo, el documental "Incidencia de arsénico en La Laguna", recuperado el 10/10/2022 de [https://www.youtube.com/watch?v=6jkLq7tp\\_Xw](https://www.youtube.com/watch?v=6jkLq7tp_Xw)).

encuentran a la orden del día y el hecho de que los mantos subterráneos se encuentren privatizados *de facto*, es como un combustible para exacerbarlos.<sup>88</sup>.

### 3.3. Las vedas de mediados de siglo

El 6 de octubre de 1936 Lázaro Cárdenas decretó la dotación de más de 200,000 Hectáreas de terrenos irrigables ubicados en La Laguna, a unos 40,000 beneficiarios directos. Refiere Wolfe (2010) que, pese a la trascendencia histórica de este acontecimiento, tres o cuatro meses después del Decreto Oficial los ingenieros de la Comisión Nacional de Irrigación a cargo del megaproyecto hidráulico advertían al Presidente sobre los riesgos de sobre-explotar el acuífero y terminar afectando a los campesinos beneficiarios del reparto de tierras y de aguas, sugiriéndole establecer con urgencia medidas jurídicas para regular la extracción de agua del subsuelo. Paradójicamente, se presentaba a los funcionarios de la CNI el dilema técnico-administrativo de decidir entre apoyar el bombeo de agua del subsuelo o ampliar la red de canales de irrigación, pues aunque la propaganda del proyecto hablaba de la construcción de la presa como la solución definitiva a los problemas de agua de La Laguna, la realidad era que las obras durarían años; así que, mientras no fueran terminadas, los volúmenes de agua disponible simplemente no alcanzaban para irrigar las tierras ejidales.

En referencia a estas contradicciones coyunturales, Romero Navarrete (2002) considera las adaptaciones legislativas decretadas en 1939, para tratar específicamente el tema del agua, fueron aplicadas precipitada, discrecional y en ocasiones autoritariamente, pasando por encima de infinidad de cuestionamientos y reclamos de injusticia e inequidad; todo lo cual, según la misma fuente, fueron “negligencias y descuidos que tuvieron una secuela grave, pues en un número indefinido de casos no se resolvieron los problemas (técnicos económicos o sociales) que generaron los conflictos”.

Por lo anterior, al entrar en funciones Manuel Ávila Camacho como Presidente, en 1940, de manera soterrada se desataron las críticas a Cárdenas, respecto a lo que dieron en llamar el “incompleto reparto de aguas” (Wolfe, 2010). Pero las lealtades e hipocresía políticas coligadas al poder que todavía mantenía el ex presidente no permitían manifestar públicamente los desacuerdos; así, pronto afloraron contradicciones entre el discurso oficial y las versiones personales de algunos funcionarios. Fue en ese contexto que el nuevo Secretario de Agricultura Marte R. Gómez proclamaba públicamente que en La Laguna había agua disponible para regar 300,000 ha, pero en privado reconocía que el volumen

---

<sup>88</sup> Tal situación es posible debido a que la acumulación de concesiones para tener el derecho exclusivo de explotar los mantos acuíferos no presenta mayor problema, pues cuentan con la protección de la Ley de Aguas Nacionales (DOF 01/12/1992). Esta inequidad ha abierto la vía para que las movilizaciones sociales contra los acaparadores sean permanentes (ver p ej. [http://www.milenio.com/region/Agricultores\\_La\\_Rosita-modulo\\_de\\_riego\\_15-Palacio\\_de\\_Gobierno-Ruben\\_Moreira\\_0\\_638336354.html](http://www.milenio.com/region/Agricultores_La_Rosita-modulo_de_riego_15-Palacio_de_Gobierno-Ruben_Moreira_0_638336354.html), revisado el 14/05/2016).



máximo de irrigación era apenas de 160,000 ha: 100,000 provenientes de la presa y 60,000 por los pozos (*ídem*).

De acuerdo a la misma fuente, mientras este doble discurso se desarrollaba en las esferas de la burocracia, el número de pozos seguía incrementándose, puesto que para 1941 los técnicos de la CNI los estimaban en alrededor de 2,500; preocupados porque estaban mostrando signos de materializarse las advertencias que habían hecho una década antes a Cárdenas, empezaron a hacer públicas sus opiniones respecto a que se estaba realizando una excesiva extracción del agua subterránea y dieron a conocer los resultados de los análisis que mostraban que en algunos de ellos se estaba extrayendo agua salobre (*Ibídem*). Tras de ello, volvieron a proponer al Presidente y al poder legislativo cambios al marco legal obsoleto.

Ante las condicionantes de la realidad, la reglamentación jurídica del uso de los mantos de agua subterránea se convirtió en un asunto crucial para La Laguna; así, el 21 de abril 1945 (DOF) lograron que se incluyera en el Artículo 27 Constitucional la definición legal de que las aguas del subsuelo estaban sujetas a la administración de la Nación, de la misma manera como lo estuvieron las aguas superficiales desde el texto original de 1917. Sin embargo, a pesar de este importante cambio en “las reglas del juego” para acceder al agua del subsuelo, no se encontraron registros de que en la realidad se hayan efectuado acciones concretas para detener la extracción incontrolada del agua subterránea, ni en 1945 ni en 1946<sup>89</sup>. En diciembre de 1946, con la llegada de Miguel Alemán a la Presidencia de la República, se decretó la desincorporación de la CNI del organigrama del gobierno federal, para dar lugar a la Secretaría de Recursos Hidráulicos, una dependencia con un ámbito de competencias mucho más amplio e integral en materia de administración de los recursos acuíferos; en este contexto se hicieron nuevas revisiones a la ley, que Wolfe sintetiza de la siguiente forma:

... establecimiento de reglas como la obligación de los propietarios de informar a la SRH el inicio de trabajos para extraer agua del subsuelo, con la excepción de pozos para uso doméstico. Más importante aún, las regulaciones efectuadas en 1947 impusieron por primera vez una restricción concreta, que era la de vincularla con el conocimiento derivado de estudios técnicos. Si tales estudios de una zona o región y de las tecnologías para extraer el agua del subsuelo determinaran que, en sus límites máximos, trajeran en consecuencia el detrimento del interés público o de los usos existentes, la SRH podría proponer al Presidente su prohibición.

La reglamentación de 1947 fue aún más lejos, al estipular penalizaciones por violar la ley y autorizó a la SRH a prevenir la instalación de trabajos o tecnologías que pudieran provocar dicha violación, hasta el punto de demoler dichos trabajos.

Wolfe (2010, Cap 4).

---

<sup>89</sup> Una especulación de quien escribe estas líneas es que pudo deberse a que 1945 fue el último año del sexenio de Ávila Camacho y que la fecha en la que se realizó la modificación constitucional, junio de 1945, se ubica en los tiempos en los que se dió el nombre del candidato del partido oficial; esto es, que la emisión de la ley se efectuó en tiempos en los que las que debieran ser las prioridades de los funcionarios estaba distraída por el calendario electoral.

La misma fuente explica que en el mismo decreto constitutivo también se le asignó a la SRH la tarea de fomentar el uso de agua subterránea para impulsar el desarrollo agrícola, lo que posteriormente originó contradicciones prácticas a los fines regulatorios de la dependencia federal. En 1948, las reestructuraciones al marco legal y orgánico de la administración del agua subterránea se tradujeron en dar al Estado la capacidad de restringir la extracción descontrolada; con ese propósito se promulgaron medio centenar de decretos de veda durante los siguientes quince años, en diferentes regiones del país, pero especialmente en el norte: 22 entre 1948 y 1952; 25 de 1953 a 1957 y 4 entre 1958 y 1963.<sup>90</sup>

**Cuadro 2 Primeros decretos de vedas para la protección de acuíferos subterráneos en México (1948-1952)**

#	Fecha	Municipio	Estado
1-2	25/10/1948	León	Guanajuato (2)
3	24/01/1949	San Miguel de Allende	Guanajuato (3)
4	13/02/1949	Cañada de El Marqués	Querétaro (1)
<b>5</b>	<b>27/04/1949</b>	<b>Comarca Lagunera</b>	<b>Coahuila (1)/Durango</b>
6	24/06/1949	San Miguel de Allende	Guanajuato (4)
7	22/12/1949	Abasolo	Guanajuato (5)
8	22/12/1949	Zumpango	México (1)
9	28/06/1950	Tehuacán	Puebla (1)
10	27/10/1950	Tequisquiac	Querétaro (2)
11	03/02/1951	Alvarado	Veracruz (1)
<b>12</b>	<b>10/03/1951</b>	<b>Ramos Arizpe</b>	<b>Coahuila (2)</b>
13	11/07/1951	Hermosillo	Sonora (1)
14	12/07/1951	Jiménez	Chihuahua (1)
15	17/07/1951	Monterrey	Nuevo León (1)
16	03/10/1951	Cadereyta,	Querétaro (3)
17	28/10/1951	Valle de Santo Domingo	Baja California Sur (1)
<b>18</b>	<b>07/02/1952</b>	<b>Saltillo</b>	<b>Coahuila (3)</b>
19	07/10/1952	Chihuahua	Chihuahua (2)
20	18/03/1952	Juárez	Chihuahua (3)
21	28/10/1952	Ceballos	Durango (2)
22	29/10/1952	Celaya	Guanajuato (6)

Adaptado de Wolfe (2010)/Carvajal Ramírez (1967).

En el

<sup>90</sup> Wolfe (2010) refiere a la siguiente cita original: Source: René Carvajal Ramírez, “Aspectos legales del agua subterránea en México,” *Ingeniería Hidráulica en México* 23, no. 3 (1967), 255.

Cuadro 2 puede observarse que nueve de las primeras vedas decretadas a nivel nacional se aplicaron a una de las regiones agropecuarias más tecnificadas y capitalizadas del país: El Bajío y sus vecindades; seis a Guanajuato y tres a Querétaro. Es decir, el 41% del total de decretos emitidos se aplicaron a esta franja territorial del centro de México. Aunque fueron doce los decretos de veda se aplicaron en el norte del país, no debe perderse de vista que las dimensiones de los territorios de los estados norteros del país son mucho mayores que las de los del centro y por tanto no son geográficamente comparables; no obstante, hubo cuatro decretos concentrados en la *Franja Sur de Coahuila* extendida a Ceballos (Durango), que es una zona de extensión equivalente a la franja queretano-guanajuatense.

Por lo anterior puede señalarse a la Franja Sur de Coahuila como la segunda región del país que el gobierno federal priorizó en su política restrictiva para extraer aguas del subsuelo, puesto que esas cuatro vedas representan el 18% del total de los decretos emitidos entre octubre de 1948 y el mismo mes de 1952. No omitiendo señalar, por otra parte, que los restantes decretos de vedas de acuíferos subterráneos son tres y se localizan en el sur del país; no siendo de extrañar lo escaso de su número, en tanto que por esas latitudes llueve mucho más y existe amplia disponibilidad de cuerpos de agua superficiales.<sup>91</sup>

Sin entrar en más detalles, los que aquí se quiere subrayar es el hecho de que, al entrar en vigor de la Ley de Riegos (DOF 31/12/1946), primera en la historia jurídica mexicana que se enfocó a regular el uso de los acuíferos subterráneos, el gobierno federal otorgó inmediata atención a la región donde se sitúa el universo de trabajo de esta investigación. Pero más allá de las explicaciones de perfil técnico jurídico, dadas para justificar los decretos de veda como instrumento legal orientado a evitar el abatimiento de los mantos freáticos en regiones coligadas con los sistemas de riego, como es el caso de La Laguna, en este capítulo se considera importante subrayar la incompatibilidad de las lógicas y necesidades tecnológicas de la producción agrícola bajo este tipo de sistemas de forrajes con la producción del ixtle; esto es, que este investigador considera que no se pueden extrapolar esos criterios técnicos a la Región Sureste de Coahuila; por tanto, resulta muy extraño el hecho de que se le haya incluido a esta última región dentro de la lista nacional de acuíferos prioritarios para ser vedados en los inicios de los años cincuenta. Esto es, que desde un punto de vista técnico no se halla o no se entiende la lógica que decretar vedas en esta región, dado que no se estaba haciendo uso de los acuíferos subterráneos de la misma; de hecho, no se ven razones para pensar que había en la región una demanda importante de agua: con una minería inexistente, un sector agropecuario limitado a la producción extensiva de temporal a causa del clima y escaso desarrollo tecnológico, una industrialización apenas incipiente y un tamaño de población pequeño<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Tehuacán se encuentra en una región con clima semiárido, y los decretos seguramente tuvieron que ver con la presencia de manantiales de agua mineral conectados geológicamente con un subsuelo volcánico, que han sido explotados desde tiempos precolombinos; Zumpango se encuentra ligado a Querétaro en términos de su perfil productivo.

<sup>92</sup> Considérese que el Censo General de Población de 1950 reportó una población total para el Sureste de Coahuila de 178,311 personas: Arteaga con 13,845, General Cepeda con 14,478, Parras de la Fuente con 31,658, Ramos Arizpe con 19,727 y Saltillo con 98,603. Y que autores como

Se encuentran otras inconsistencias lógicas al comparar la política de vedas aplicada al Sureste de Coahuila con la que se aplicó en otras regiones con características ambientales similares; es decir, que no solamente se encontraron casos similares de veda en pleno semidesierto sino, al contrario, se fomentó en muchas de ellas la agricultura de riego (como por ejemplo en Delicias, Chihuahua, como lo describe (Aboites Aguilar, 2001a). De ahí que se considera válido plantearse la siguiente pregunta:

*¿Porqué el trato desigual con otras regiones del semidesierto donde no solamente no fueron decretadas vedas a los acuíferos, sino que se promovió desde el Estado la tecnificación de la agricultura de riego?*

Dado el activo papel jugado por el Estado, por un lado para decretar las vedas y por otro a fomentar la expansión del llamado sistema de producción ixtlero, surgieron otras preguntas:

*¿Porqué el Estado no optó por fomentar el empleo del agua subterránea que yace bajo toda la Región Sureste de Coahuila para tecnificar la agricultura y/o la ganadería?*

*¿Porqué se concentró la atención del Estado en implementar el Proyecto Ixtlero FIDA-FAO en la confluencia con los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas y no en otras zonas del Desierto Chihuahuense?*

*¿Porqué se orientó la política gubernamental a fomentar la extracción de las fibras duras, siendo éstas un producto mucho menos rentable que los que se pudieran haber obtenido mediante una agricultura de riego?*

Cabe señalar, en relación a la última pregunta, que el sistema de producción agrícola bajo riego ya se instrumentaba por aquel entonces en los huertos frutícolas localizados en el Valle de Saltillo, donde los mantos freáticos estaban casi a nivel del suelo y eran aprovechados usando norias o acequias rústicas desde los manantiales (Destenave s/f).

La reflexión derivada de las preguntas anteriores permiten inferir que los decretos de veda fueron un factor histórico determinante para obstaculizar un desarrollo alternativo para la Región Sureste durante el Siglo XX<sup>93</sup>; esto es, que bloqueó a los habitantes del medio rural la posibilidad de acceder a un desarrollo agrícola basado en sistemas de irrigación, tal se hizo en otras regiones del norte del país. Más perturbador resulta constatar que las vedas jugaron un papel primordial para imponer, mejor dicho que fomentar, la concentración de la actividad económica campesina en la extracción y beneficiado del ixtle; con ello, el Estado condenó a la pobreza a un enorme contingente de campesinos. Pobreza que, al prolongarse por al menos tres generaciones, creó las condiciones de vulnerabilidad económica que en la

---

Destenave (s/f) explican que todavía en los años noventa era posible encontrar mantos acuíferos casi a flor de tierra, en Saltillo.

<sup>93</sup> De acuerdo con la SEMARNAT/CONAGUA la incompleta cobertura de una serie de decretos realizados por el gobierno federal, mediante los que se vedaron los acuíferos 0502, 0505 y 0511, ha sido fuente de inconformidad social. Esto es, que debido a que se dejaron áreas de territorio fuera de la zona de veda se creó inequidad en las posibilidades de acceso a los mismos, incluyendo los que subyacen al Cañón de Derramadero. (DOF, 11/10/2011). Llama la atención que las áreas que no fueron sujetas a la veda son, por lo general, asiento de propiedades privadas, en tanto que las zonas vedadas son por lo general ejidos.

actualidad favorecen el despojo, por parte del capital inmobiliario, de las tierras y del agua que les fueron entregadas con el reparto agrario. Peor aún, con sus omisiones técnico administrativas el Estado clausuró la alternativa tecnológica de manejar las escorrentías de la manera como se había venido practicando durante siglos, contribuyendo con ello a facilitar la destrucción de infraestructuras hidrotécnicas cuya construcción requirió de enormes inversiones financieras y siglos de mucho trabajo.

### 3.4. Demanda internacional de ixtle y vedas

Al llegar a este apartado, se ha considerado importante hacer una recensión respecto a la narrativa desarrollada en los apartados anteriores, con el propósito de resaltar los vínculos entre los dos temas centrales que se han abordado en el presente capítulo, que son el del secano del Sureste y el del riego de La Laguna. Ésto, con el propósito de llamar la atención del lector hacia elementos de contexto que no son tan evidentes, pero son importantes para abordar la parte analítica de esta investigación. En tal línea de trabajo, se puede sintetizar diciendo que este capítulo ha concentrado, hasta este punto, su atención en la historia productiva de la *Franja Sur de Coahuila*, destacando los procesos que, durante el periodo que va de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, fueron dando origen al estado actual del desarrollo rural de cada una de las dos regiones que la conforman.

La elección del periodo histórico abarcado no se realizó ni arbitrariamente, sino pensando en que quedaran incluidas dentro del mismo acciones promovidas desde el Estado que por su impacto socioeconómico tuvieron un peso determinante en dar forma a los acuerdos y desacuerdos sociales que hoy determinan *de jure* o *de facto* quien puede tener acceso a la tierra y al agua en la región estudiada. Esto es, con dos grandes fragmentaciones al territorio que acontecieron: el primero al triunfo de la República sobre el Imperio de Maximiliano; el segundo tras el triunfo de la Revolución<sup>94</sup>. Pero también refieren a los decretos de vedas de acceso al agua subterránea, que en la *Franja Sur de Coahuila* se aplicaron de manera casi inmediata a la emisión de la Ley de Riegos (31/12/1946), puesto que su ejercicio práctico, como actos de autoridad, representan un instrumento de control estatal del agua subterránea, que de cierto modo puede concebirse como una manera de “fraccionar” el volumen del acuífero<sup>95</sup>.

Cabe destacar, por otra parte, que la narrativa histórica de los apartados precedentes de este capítulo se enfocó a describir los acontecimientos del ámbito nacional<sup>96</sup>, haciendo

---

<sup>94</sup> En el inicio del periodo estudiado se ubican las acciones del gobierno juarista orientadas a fraccionar el gran latifundio de los Sánchez Navarro, que tras ser fraccionado fue subastado a favor de una nueva generación de miembros de la burguesía agraria alineados a los valores del capitalismo y de la modernidad. La segunda gran partición del territorio fue producto de la aplicación del reparto agrario, casi 70 años después durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, mediante expropiaciones y dotaciones a campesinos sin tierras y sin capital.

<sup>95</sup> Se ha entrecomillado la palabra “fraccionar” porque, no obstante de que jurídicamente es posible plantearse, en el mundo real dicho fraccionamiento es físicamente imposible de realizar, ya que el agua es un elemento natural indivisible, debido a sus propiedades físicas como líquido o como vapor.

<sup>96</sup> Como lo ha señalado reiteradamente Aboites Aguilar (2001a, 2001b, 2009, 2010), tras la Revolución Mexicana la intervención del Estado ha sido omnipresente en la definición del destino de las regiones rurales del país y, en la medida que fueron los caudillos o generales del norte del país

pocas alusiones a los que al mismo tiempo se daban en el internacional. De ahí que se considere pertinente ampliar en el presente apartado el tema del contexto internacional de ese entonces, en especial hechos tan trascendentales para la humanidad como las dos Guerras Mundiales y en medio de ellas la Gran Depresión Económica de 1929<sup>97</sup>, cuyas fuerzas económicas, políticas y bélicas a nivel global, se tradujeron en fuertes presiones para definir las decisiones de gobiernos de países subalternos como México; incluso a costa del interés de sus ciudadanos o incluso de los nacionales.

El siguiente texto permite comprender mejor cómo la coyuntura político-económica global de los años cuarenta impulsó al gobierno a tomar decisiones que, si bien en el corto plazo significaron asegurar un ingreso para los talladores de ixtle, a la larga les trajeron consecuencias nefastas a su economía familiar:

Durante la Segunda Guerra Mundial la demanda de materias en los Estados Unidos creció considerablemente...[y]... aparentemente, la situación que condicionaba la exportación de fibra de palma a los excedentes del mercado nacional y el inicio de la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra, propiciaron que se vendieran todas las existencias de ixtle de lechuguilla que se habían estado acumulando durante los últimos años.

Durante esta época, el gobierno de Estados Unidos creó la Defense Supplies Corporation, con la finalidad de regular sus importaciones. Este departamento fijó un precio tope para la fibra de palma y asignó la distribución a la M Argueso y Cía., Smith and Bird y William Garretson.

El precio tope fijado, sin ser exagerado, tenía que ser alto para favorecer que se le vendiera la fibra a los Estados Unidos.

Esta situación fue aprovechada por la Secretaría de Economía Nacional para fijar un precio interno más bajo, que protegiera a la industria mexicana y, de esta forma, el mercado externo de la fibra de palma permitiría subsidiar al mercado interno de ésta y al mercado de la fibra de la lechuguilla..."

Ramírez González (1985: 28).  
[el subrayado es mío]

Dicho de otra forma, para satisfacer la demanda de fibra por parte de los Estados Unidos, generada por las necesidades de aprovisionamiento de cordeles, costales y telas de fibra necesarios para la guerra, el gobierno mexicano optó por crear una economía ficticia en torno a la extracción e industrialización del ixtle.

---

quienes tomaron el poder político nacional una vez concluida la lucha armada, tal incidencia ha sido especialmente visible en las regiones más septentrionales del país y tras la consolidación del gran proyecto que el mismo Aboites Aguilar ha denominado la Grande Irrigación.

<sup>97</sup> Polanyi (2017) considera que no debiera de hablarse de dos guerras mundiales, sino de una sola que fue interrumpida durante unos años. Argumenta, sobre esa misma idea, que la Gran Depresión no fue otra cosa que la consecuencia de que en su primer periodo no se alcanzaron a resolver una parte importante de los problemas que la desencadenaron, que eran de carácter económico y se venían arrastrando desde el Siglo XIX.

Una hipótesis factible es que, fuera del supuesto neoclásico que plantea un mercado que responde exclusivamente a la ley de la oferta y la demanda para lograr un equilibrio en los precios, por medio de presiones diplomáticas el gobierno de los Estados Unidos haya condicionado a nuestro país a satisfacer su demanda coyuntural, forzando al gobierno mexicano a desestimar las claras señales que se habían manifestado desde la década de los treinta respecto al advenimiento de una crisis en la demanda.

Como ha sucedido en muchos momentos de la historia de este país, la iniciativa privada en situación de crisis “propuso” al gobierno federal la creación de comercializadoras campesinas, para que estas realizaran el trabajo de acopio a nivel regional, guardándose para ellas mismas el rol de constituirse en una especie de acopiadores de segundo nivel, lo cual les permitiría ofrecer al mercado internacional el producto en los grandes volúmenes requeridos. En ese sentido puede interpretarse el siguiente texto, que habla de las empresas exportadoras de ixtle que habían caído en fuertes problemas de rentabilidad financiera por la caída de los precios de la fibra en el mercado internacional:

A medida que se realizaba esta labor de reparto y organización, los problemas por el control de la compra-venta de ixtle se incrementaron, lo que, sumado al desplome de los precios de la fibra, de 6 a 2 centavos de dólar la libra, puso al borde de la quiebra a varias compañías extranjeras que tenían grandes cantidades de fibra almacenada.. El presidente de una de las compañías extranjeras afectadas, el Sr. Thomas Unsworth, celebró una serie de entrevistas con los principales compradores y exportadores de fibra de lechuguilla en el país, proponiendo la organización de una cooperativa de compra-venta de ixtle. Fue así que se constituyó... la “Nacional Ixtlera” S.C.L. Posteriormente... con el apoyo de la compañía del Sr. Unsworth y de la A&L Mayer and Co. de Hamburgo, Alemania, se solicitó su reconocimiento por la Secretaría de Economía Nacional. Dado que la organización de los campesinos no resolvía satisfactoriamente los problemas derivados de la crisis, la Secretaría mencionada dio la aprobación oficial el mismo año. Con la creación de esta organización se establecieron, un precio fijo para la fibra y un impuesto de exportación, aunque también se concedió un subsidio...

Ramírez González. (1985, 25).

Resulta sospechosa la coincidencia que a simple vista puede observarse en el contenido de las preocupaciones manifestadas por Mr. Unsworth, respecto a la viabilidad de seguir manteniendo los canales de comercialización en manos privadas y la rapidez con la que la Secretaría de Economía Nacional dió las autorizaciones necesarias para constituir una empresa forestal de perfil campesino, muy similar al que Mr. Unsworth insinuó o propuso. Ya no se digan los incentivos fiscales que el gobierno federal otorgó a la recién fundada Federación de Cooperativas Ejidales, planteados de manera tan generosa como para disminuir el riesgo de que se pudieran resistir o quisieran desistir ante las dudas que en esos momentos había respecto a la rentabilidad del producto, ante el disminuído precio internacional.

Está fuera de los objetivos de esta obra analizar si la conformación de La Forestal F.C.L. surgió efectivamente de una iniciativa de actores campesinos conscientes de los elevados riesgos presentes en el mercado internacional del ixtle a partir de la Gran Depresión de

1929, así como de las implicaciones sociales y económicas que contraerían al involucrarse en la comercialización de la fibra; o si, en realidad, “alguien” (empresarios, funcionarios de gobierno o a ambos) “les vendió la idea” de controlar el mercado regional, con la oculta intención de trasladarles los más onerosos costos del acopio inicial. Quienes defienden el postulado de que La Forestal F.C.L. fue una organización campesina autónoma, o al menos lo fue en sus inicios, no ponen en tela de duda su origen democrático y popular. Cuestionar ese paradigma fundacional trastoca el significado del proceso social y económico por el que transcurrieron como subsector rural, ya que genera una perspectiva totalmente diferente respecto al infortunado devenir histórico, forjado a lo largo del Siglo XX, que dejó como saldo a sus nietos y bisnietos igual o peor de pobres que ellos; tal vez al mismo nivel que los peones acasillados de las haciendas porfiristas a quienes el reparto agrario trataba de reivindicar.

Bajo la perspectiva anterior, quien esto escribe considera que la llamada “*Región Ixtlera*” no fue otra cosa que un constructo artificial creado por el Estado mexicano postrevolucionario; esto es, un concepto al cual se recurrió por encajar muy bien como instrumento político adecuado para alcanzar los objetivos políticos prioritarios de esa época, que estaban orientados a lograr la corporativización social y cooptación ideológica de la clase trabajadora al partido de Estado<sup>98</sup>; en este caso el subsector que conformaban los campesinos a quienes se les había dotado de tierras en la Zona Central del Desierto Chihuahuense, que en su gran mayoría habían sido peones de las haciendas, a quienes convenía mantener como mano de obra cautiva de los intereses del capital extractivista globalizado, que demandaba la provisión de una materia prima que le era imprescindible para mantener la Segunda Guerra Mundial, en la que estaban involucrados.

Reconocer lo anterior significa aceptar que fue por una decisión de terceros y no de los ixtleros mismos<sup>99</sup> el haberse pasado sesenta años ejecutando una actividad extenuante, ruda y poco remunerada; peor aún, aceptar que una decisión del Estado les bloqueó la posibilidad de explorar otras rutas de crecimiento económico coligadas a la oportunidad histórica única de ser beneficiarios de la dotación de la tierra. Significa decir que la subsunción de los campesinos al capital (Bartra, 1979) basada tanto en sistemas de producción expoliadores de su fuerza de trabajo como en el reparto inequitativo del plusvalor

---

<sup>98</sup> No debe perderse de vista que la exportación de fibras fue uno de los proyectos rurales más subsidiados del Noreste de México, durante los años cuarenta y cincuenta del Siglo XX; esto es, que se canalizaron grandes cantidades de dinero público para fortalecer La Forestal F.C.L., sin lo cual difícilmente hubiera llegado a tener una cobertura institucional en subregiones de cinco estados del país, corporativizando a más de 3000 sociedades cooperativas locales.

<sup>99</sup> En condiciones de pobreza, dedicarse a una actividad económica debido a costos de oportunidad más bajos, no significa necesariamente que quienes toman esa “opción” respondan a la lógica de la producción capitalista; es decir, a orientar su producción hacia procesos que reditúan las mayores tasas de ganancia (Martínez Alier J., 1991). Esto se debe a que esos costos de oportunidad están vinculados a lograr la sobrevivencia, antes que obtener una ganancia; es decir, que la ganancia es mantenerse con vida, no importa que al hacerlo se pierda en lo económico. Es por eso que el dedicarse a tallar ixtle en realidad se trata de una decisión entre sobrevivir o morir, aunque equivalga a aceptar mantenerse en el círculo vicioso de la pobreza; es decir, una magra oportunidad de disminuir el elevado riesgo de dedicarse a producir alimentos bajo condiciones climáticas que no prometen nada a cambio de mucho trabajo invertido.



mercantil se prolongó, con la ayuda del Estado, por casi un siglo más después de haber sido desterrado Porfirio Díaz del país, al grito de “Tierra y Libertad”. Con el muy serio agravante de que esta forma de subordinación productiva al capital del campesino empobrecido fue no sólo avalado, sino incentivado por el Estado Mexicano, con la intención de favorecer el abastecimiento de ixtle a un mercado internacional sujeto: por un lado al menos en el Continente Americano, a satisfacer la exigencia de los intereses estadounidenses; por otro lado, a los sesgos y desequilibrios en la oferta y la demanda propios del desorden económico global generado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial<sup>100</sup>.

Dejando de lado el punto de vista que concibe a La Forestal FCL como un logro reivindicativo de los campesinos que dejaban atrás su condición de peones acasillados, alternativamente se puede plantear que al transferirle a esta empresa social el mercado regional, que antes estaba en poder de los hacendados, le evitó al capital no solamente el problema de tener que afrontar los elevados costos de transacción durante el acopio<sup>101</sup>, relacionados con la nueva forma de distribución de la tierra, sino también en el corto plazo le evitó un problema de desabasto de fuerza de trabajo y de fibra, que se hubiera provocado a partir del abandono del tallado del ixtle por los nuevos ejidatarios, en caso de que su nuevo estatus de tenencia les abriera nuevas oportunidades económicas más redituables<sup>102</sup>.

Pero se insiste que, para poder analizar de manera más objetiva esa decisión de Estado, no debe de dejarse de mirar al contexto; por un lado a la incertidumbre y “sugerencias” planteadas por los empresarios privados y por otro lado al momento en el que se encontraba la construcción del modelo institucional concebido por Lázaro Cárdenas, en el que las características orgánicas de la Federación de Cooperativas eran idóneas para integrarse en y fortalecer a la Confederación Nacional Campesina, vista en su función última, que era la de forjarse como uno de los pilares del partido de Estado que se estaba construyendo. Fue de tal manera que, pocos años después de su formación La Forestal F.C.L. era ya un instrumento de control político de sus afiliados, al corporativizar la figura jurídica dentro de la estructura del Partido Revolucionario Institucional.

De lo anterior surgió una duda que no se quiere dejar de incluir en este documento, debido a que implica consecuencias históricas trascendentales; con la esperanza de que tal vez pudiera despertar en el futuro el interés de algún investigador en responderla:

---

<sup>100</sup> Innumerables autores han explicado que esa conflagración disparó la demanda del ixtle en el mercado internacional durante los años cuarenta del Siglo XX.

<sup>101</sup> Con la hacienda la empresa compradora de ixtle tenían que tratar únicamente con el hacendado o su administrador, que le proveía de un volumen grande de la fibra; con los ejidos, como fragmentos territoriales de la hacienda, tenía que tratar con muchos vendedores, cada uno con pequeños volúmenes de venta. Esto significó más recursos, más tiempo, más contradicciones y en general más dificultades para efectuar la compra.

<sup>102</sup> La mala calidad de la tierra que entregada a los campesinos fue, sin duda, factor fundamental para empujarlos a dedicarse al tallado del ixtle. De haber sido de buena hubiera dado la opción de desarrollar actividades agropecuarias más rentables que el tallado.

*¿Fueron las vedas un mecanismo premeditado para evitar que los ejidatarios extrajeran agua subterránea para usarla en la producción agrícola, sacrificando con ello sus intereses y subordinando sus decisiones económicas a los intereses de las naciones involucradas en la Segunda Guerra Mundial, aglutinadas en el llamado bloque de Los Aliados?*

Cabe aclarar que de la pregunta anterior se tiene la expectativa de recibir una respuesta que no se enmarque en el economicismo neoclásico; es decir, que no pretenda explicarla en base al equilibrio definido por la ley de la oferta y la demanda. Muy al contrario, se esperaría que se detallen los intereses de particulares que generaron presiones económicas y políticas que sesgaron el tal supuesto equilibrio, así como el papel que jugaron funcionarios y/o dependencias gubernamentales específicos. Esto porque esas intervenciones en el mercado tuvieron consecuencias devastadoras en la vida de miles de familias campesinas durante todo el Siglo XX; sin que al parecer eso haya importado en lo más mínimo a los dueños del capital extractivista que fueron beneficiados por tales intervenciones, así como tampoco hubo consecuencias de ningún tipo para quienes tenían la responsabilidad de conducir al Estado; de la misma manera como hoy tampoco parece que importen las vidas de los campesinos a los dueños del capital inmobiliario y a los funcionarios cómplices beneficiados con el despojo de sus tierras y sus aguas, hecho bajo el amparo de las leyes privatizadoras.

## **Conclusión**

Dos sistemas de producción primaria muy contrastantes entre sí preponderaron en la *Franja Sur de Coahuila* durante el Siglo XX: el de secano extendido por la Región Sureste (al oriente) y el de regadío extendido por La Laguna (al poniente). Entre las diferencias más evidentes entre ambos sistemas son destacables las que existen entre las tecnologías y requerimientos de capital indispensables para su implementación, cabiendo señalar que en el caso de las primeras, éstas son definidas por los volúmenes de agua que se encuentran disponibles para los procesos de producción en cada una de las dos regiones: aguda escasez en el Sureste y generosa abundancia en La Laguna, de este elemento natural.

Desde luego, la disponibilidad y capacidad de acceder al agua y a la tierra que han tenido los habitantes el Desierto Chihuahuense a lo largo de su historia ha determinado los modos de vida de sus sociedades; los cuáles, por otra parte, también se vinculan con los modos de producción y con los regímenes de tenencia de la tierra imperantes en cada época. En ese sentido, los sistemas de producción que se instrumentaban durante el régimen hacendario que tuvo su época de esplendor entre los siglos XVI y XIX se encuentra ligados a un modo de producción diferente a los que se constituyeron a partir del siglo XX<sup>103</sup>.

Y si bien los volúmenes de agua, la tecnología y el capital a los que tienen acceso los actores locales son los factores que determinan la viabilidad los sistemas de producción que

---

<sup>103</sup> No es lugar éste en el que quepa entrar a profundidad en estos detalles, pero se puede indicar que si bien en el periodo que va desde la última parte de El Virreynato y del México Postindependiente (y hasta La Reforma) corresponde al capitalismo temprano europeo, el estatus de territorio colonizado de la Nueva España confería a su modo producción características propias del feudalismo y del esclavismo

aquí son estudiados, en una investigación como la presente resulta impensable dejar de integrar al análisis de los procesos sociales y económicos el peso y las razones del Estado, para promover o desalentar ciertos sistemas de producción y no otros; tomando en especial consideración las políticas y reglamentos jurídicos que directa o indirectamente inciden en el uso del agua. Este factor cruza transversalmente los apartados del presente capítulo, puesto que al tratar el tema del hoy extinto sistema de producción al que se denominó “ixtlero” y al tratar el del regadío, hoy en expansión, puede observarse que existen en ambos evidencias de una intervención continua del Estado; con lo cual puede afirmarse que éste ha jugado un papel trascendente para el establecimiento de los sistemas de producción que dominaron la Franja Sur de Coahuila durante el siglo XX.

Otro aspecto que se ha tratado de manera transversal en las páginas inmediatamente precedentes es el de las presiones que de muchas maneras han sido ejercidas por el capital transnacional para obtener de los territorios estudiados materias primas para su industria: ixtle de la Región Sureste y algodón de La Laguna. Empleando, sí, la demanda del mercado, pero también presiones políticas; destacando el caso de las fibras vegetales duras, por ser una materia prima estratégica para diversos objetos de uso militar durante la guerra desatada en Europa. Esto es, la intervención en el mercado para evitar la caída de la producción, a consecuencia de que los altos costos de transacción implicados en las primeras etapas del proceso productivo generaba el problema de no ser atractivas para las empresas exportadoras. En ese sentido, la “mano negra” que durante el Cardenismo fomentó la creación de La Forestal F.C.L., puede verse como una acción realizada desde el Estado para trasladar esos altos costos de transacción a los nuevos ejidatarios. Pero la constitución de esa organización de segundo nivel fue también una vía para cumplir dos objetivos políticos: uno interno (fortalecer al partido oficial) y otro externo (cumplir las exigencias de Estados Unidos a México, como país subordinado a ser aliado de guerra). La vulnerabilidad a la que los campesinos estaban expuestos, en un medio donde privaba la escasez de agua, hicieron de ellos blanco fácil del intervencionismo estatal.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la reincorporación al cultivo del algodón de países que habían dejado de producirlo, se presentó una caída en los precios mundiales del algodón, afectando directamente a los productores, propietarios privados y ejidatarios, de La Laguna; la invención del plástico y su introducción a la cordelería significó también la caída de los precios mundiales de las fibras duras, dando un golpe a la economía campesina de los ejidatarios de la Región Ixtlera en general y la Región Sureste en particular. Esto es, se desencadenaron las fuerzas del capitalismo que rigen la ley de la oferta y la demanda. Ante este nuevo escenario, el Estado Mexicano jugó nuevamente su papel determinante en el rumbo que habrían de tomar los destinos de las economías rurales en una y otra región que han sido señaladas: al intervenir instrumentando políticas diferenciadas: i) en La Laguna facilitando la consolidación de sistemas de producción agropecuaria basados en el riego, fomentando mediante subsidios y créditos blandos la reconversión productiva del sistema producto algodón en sistema producto forraje encadenado a la cadena de valor de la leche; ii) en el Sureste, dificultando cualquier opción de reconversión productiva que pretendiera desplazar al sistema extractivista de producción de fibras forestales duras.

Para dimensionar la incidencia que ha tenido el Estado para desencadenar procesos económicos y sociales relacionados al uso del agua también conviene traer a consideración los decretos de vedas de extracción que afectaron a varios acuíferos subterráneos de La Laguna y del Sureste de Coahuila durante los sexenios alemanista y ruizcortinista. Y si bien deben de ser contextualizadas dentro de un conjunto de decretos similares aplicados en varios estados del país, cabe plantarse la pregunta de si no hubo otras razones por las cuáles se haya incluido a la Región Sureste de Coahuila (aparte de las que se expresaron en los decretos oficiales). No se trata de insinuar una intriga en la línea conspiracionista, pero se considera que cabe cuestionar el decreto, en el sentido de que estas vedas impidieron la implementación, en esta región, de sistemas de producción alternativos al llamado sistema de producción ixtlero, a la vista de que nunca dejó de ser algo así como “el consentido” por el Estado, a pesar denunca haber dejado de presentar asegunes económicos y sociales.

Al final del día, la intervención del Estado en La Laguna terminó favoreciendo la consolidación de un desarrollo capitalista con procesos productivos de alto valor para los propietarios privados, relegando a los ejidatarios a la producción algodonera como materia prima. Para el caso del Sureste, la empresa de acopio, beneficio y comercialización de ixtle, supuestamente campesina, pudo mantenerse con pérdidas económicas cada vez más altas; merced a los subsidios cada vez más altos, pero finalmente colapsó cuando en el sexenio salinista se le cortaron los apoyos gubernamentales y se le hicieron efectivos los cobros de sus deudas acumuladas con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Desde la perspectiva de quien esto escribe, el Estado cometió un error garrafal, diríase criminal, al apoyar con tanta vehemencia al Proyecto Ixtlero: no tomar previsiones respecto a la posibilidad de que sobreviniera el fracaso económico de La Forestal F.C.L.<sup>104</sup>. Y vaya que tuvo mucho tiempo para prevenirlo, ya que las señales de declinación de la organización no se presentaron de manera súbita, sino paulatinamente a lo largo de décadas. De esa suerte, al sobrevenir su colapso los campesinos dependientes de ella quedaron totalmente imposibilitados para cobijarse económicamente en un proyecto alterno, ya no se diga de desarrollo, sino al menos de emergencia. Lo peor fue que, con muy pocas excepciones en lo individual, quedaron sumidos en una pobreza, quizá equiparable a la que tuvieron sus abuelos medio siglo antes, cuando paradójicamente el Estado les proveyó de las tierras que teóricamente serían para ellos el medio de producción necesario para salir de su condición de peones. Así, con su omisión, el Estado favoreció la prolongación de su condición de explotados por el capital, arrastrada desde muchos siglos atrás en su condición de proletarios, dejándolos inermes (como se verá más adelante) ante el siguiente embate del capital destinado a volverlos a proletarizar.

---

<sup>104</sup> ¿Acaso en esta actitud, se encuentran ocultos los intereses o ambiciones particulares de algunos actores externos, que bien pueden ser gubernamentales o de otro tipo, pero con un grado importante de poder?

## CAPÍTULO 4. USO COLECTIVO DEL AGUA EN EL DESIERTO CHIHUAHUENSE

Dos propiedades físicas de los líquidos se sintetizan en dos palabras: *continuum indivisible*. Propiedades que, como se analiza en apartados de este capítulo, son determinantes para definir las relaciones de uso entre los seres humanos, puesto que determinan que ni las escorrentías ni los acuíferos subterráneos puedan repartirse en fracciones por quienes los usan; tampoco pueden cercarse, como se hace con la tierra cuando existe intención de apropiarse de ella; mucho menos existe manera de cortar los vapores de un geyser o las nubes, para hacer con los pedazos lo que a un interés individual o colectivo convenga.

De lo anterior se explica porqué desde los tiempos más remotos han debido establecerse reglas entre los humanos que aspiran a tener derecho de acceso al agua. Reglas que son base de acuerdos que poseen un rol nodal para las relaciones de una sociedad, en tanto que son previsorios de lo que sus miembros pueden o no pueden hacer ante la ocurrencia de diferentes escenarios. Dichos acuerdos, que dialécticamente son fuente de conflictos, se aplican a diferente escala, pues puede uno encontrarlos entre dos vecinos de parcelas, entre varios vecinos de un mismo potrero<sup>105</sup>, entre quienes tienen acceso a potreros vecinos, entre ejidatarios de diferentes ejidos, entre ejidatarios y propietarios privados, entre todos los actores que habitan en un mismo cañón, entre actores locales y actores externos. De igual modo, pueden establecerse a través de documentos escritos formalizados ante las instancias jurídicas competentes y someterlos a la supervisión de su cumplimiento a los jueces<sup>106</sup>, o establecerlos “a la palabra”. Siendo esto último lo más usual en las sociedades tradicionales, en tanto que en ellas la palabra empeñada tiene implicaciones mucho más profundas que en las sociedades modernizadas, dado que significa una cuestión de honor; de ahí que cumplirla o no cumplirla enaltece o mancha la imagen de quien la empeña y define el respeto que se merecerá de los demás integrantes de la comunidad<sup>107</sup>.

Llámense acuerdos a la palabra o contratos formales por escrito, su establecimiento significa la construcción de *instituciones*<sup>108</sup>, concepto al cual se recurre de manera constante en el presente trabajo; en especial al referir al manejo local, colectivo o mancomunado del agua.

---

<sup>105</sup> .En esta región de país se llama potrero a un área que comprende varias parcelas de cultivo; se usa indistintamente con la denominación de labor. Se considera importante hacer esta aclaración, a fin de advertir al lector de que no debería de confundir su significado con el que tiene en el sur del país, donde se llama de esa manera a un pastizal ganadero.

<sup>106</sup> . Los acuerdos de este tipo son más usuales entre actores que pertenecen a una sociedad muy grande y con muchos sectores, en los que la posibilidad de que las partes no se conozcan es alta.

<sup>107</sup> . Entre más pequeño sea un colectivo es más frecuente la interacción de quienes lo conforman, de ahí que sea más importante mantener un buen prestigio a sus integrantes; es por ello que en las sociedades muy grandes, la posibilidad de perder el prestigio es menor, por lo que deben de establecerse otras vías de castigo social a la falta de cumplimiento de las reglas y los acuerdos, como son las jurídicas, que pasan por acuerdos escritos y firmados.

<sup>108</sup> Oliver Williamson (1989), reconocido economista institucionalista, describe así la funcionalidad económica de las instituciones: “*reducen los costos de transacción, definen regímenes de autoridad,*

Para poder percibir en toda su dimensión la importancia sociocultural, económica y política que han tenido las instituciones para el acceso y uso del agua en el mundo, es que se presenta el presente capítulo, en el cual se se focalizan aquellas que pueden considerarse precursoras de las que hoy día regulan el uso mancomunado de las escorrentías que bajan hacia los terrenos agrícolas (*labores*) de las localidades rurales aquí estudiadas. Para lograr este propósito, en los siguientes apartados se destaca la importancia que tuvo el Derecho Romano en la conformación del Derecho Español y cómo éste tuvo que flexibilizarse ante la realidad de la ocupación mora de la Península Ibérica; se explica cómo las excepciones establecidas por los fueros y las ordenanzas medievales influyeron en los acuerdos para el uso del agua durante el Virreinato y cómo incluso se prolongaron después de la Independencia y de la Revolución.

#### **4.1. Herencia institucional ibérica para el manejo del agua**

Contrastando al alto nivel de conocimiento sobre el manejo del agua que a la llegada de los españoles tenían los habitantes de Mesoamérica, los pueblos originarios del Altiplano Mexicano solamente lo tenían a nivel rudimentario, ya que siendo nómadas sobrevivían a partir de las actividades de recolección y caza. Las condiciones de sequía permanente hizo para ellos inviable apostar su sobrevivencia a sembrar sus alimentos, por tanto su conocimiento tecnológico agropecuario era escaso, no desarrollando formas de organización social ligadas al manejo colectivo del agua. De aquí que resulte poco menos que indiscutible la afirmación de que fueron los invasores españoles quienes llevaron a Aridoamérica tanto la tecnología como la institucionalidad para dar uso productivo a las escorrentías, adaptando el conocimiento sobre sistemas de riego que ya aplicaban en su tierra<sup>109</sup>, echando mano de los usos y costumbres heredados en su cultura por los siete siglos de dominación musulmana, de la que recién se habían liberado ese 1492 que llegó Colón por vez primera a América.

Y aunque es difícil saber hasta qué tanto la cultura árabe sobre el manejo del agua influenció la cultura ibérica sobre el manejo del agua, los siguientes comentarios que hace Meyer (1997) dan una idea tanto de su contribución, como de que se trata de un tema que, al menos a los españoles, les causa cierto escozor:

El alcance de la influencia árabe en la cultura española provoca controversias historiográficas de proporciones gigantescas. Los historiadores españoles que desean desacreditar la ocupación de los moros argumentan en contra de un legado morisco perdurable en la civilización española. Entre otras influencias culturales que rechazan, las prácticas de irrigación juegan un papel principal en la disputa. Otros historiadores encuentran las similitudes de las técnicas de irrigación en la Península Ibérica y el Norte

---

*establecen los derechos de propiedad, coordinan la vida económica de los individuos al difundir las reglas del juego, así como las normas y costumbres y contribuyen al desempeño económico”.*

<sup>109</sup> Sería particularmente más cierto esa circunstancia para quienes provenían del sur de la península, donde la sequía mediterránea es más acentuada y la irrigación ha sido imprescindible para cultivar la tierra, desde tiempo inmemorial.

de África tan persuasivas que el legado morisco se presenta como indiscutible. Sin proponernos entrar aquí en esa discusión, basta decir que en la relación del agua con la lengua el legado árabe es difícil de negar. Una breve lista de términos españoles relacionados con el agua tendría que incluir aljibe (depósito, del árabe al-yubb), albañal (desagüe o canal, del árabe al-batt'á), alema (distribución o agua de riego, del árabe al-ammá), alberca (poza o estanque, del árabe al-birka), alamín (juez de riegos, del árabe al-amín), acequia (canal de riego, del árabe as-saquiya), almoceda (derecho de tomar agua para regar durante ciertos días, del árabe al-musdá) y alfarda (contribución por aprovechamiento de las aguas, del árabe al-farda)...

Meyer (1997, p. 28).

Como quiera que sea, lo que sí está claro es que en los años previos al arribo español a América existían en la Península Ibérica formas de manejo del agua muy avanzadas. De eso hay incontables registros, más con los fines meramente ilustrativos que aquí se persiguen se toma como ejemplo el caso de las instituciones de irrigación en Valencia, España, vigentes en el año 1435, recuperando el siguiente párrafo del libro clásico “El Gobierno de los Bienes Comunes” (Ostrom, E., 2000), que hace referencia a las competencias que tenía El Tribunal de Aguas:

...El Tribunal de Aguas es un juzgado de aguas que durante siglos se ha reunido los jueves por la mañana en la Puerta de Los Apóstoles de la Catedral de Valencia. En virtud de las numerosas características islámicas de sus tradiciones, muchos académicos argumentan que el tribunal se desarrolló en el periodo del régimen islámico. Sus procedimientos se llevan a cabo sin abogados, pero con muchos espectadores; preside un oficial que interroga a los que están involucrados en una disputa y a otros que podrían proporcionar información adicional. Los miembros del juzgado, excluyendo al síndico – cuyo canal está comprometido –, toman una decisión inmediata respecto a los hechos del caso a la luz de las reglas específicas de ese canal particular; las multas y daños se fijan de acuerdo a esas reglas... el síndico es el funcionario ejecutivo de la unidad individual de irrigación; sus responsabilidades incluyen la aplicación básica de los reglamentos de su propia unidad y tiene el poder de autorizar adjudicaciones físicas de agua autoritarias cuando surgen disputas en la administración cotidiana de los sistemas de abastecimiento de agua, al mismo tiempo que imponen multas y determinan el orden y la frecuencia del reparto de agua en tiempos de escasez grave.

(Ostrom E., 2000:124).

El texto anterior proporciona una buena idea de lo que implicaba, en términos de acuerdos y de mecanismos de control de su cumplimiento, una asociación de regantes. Desde luego, cada asociación tenía sus propias peculiaridades, que respondían en complejidad a una serie de factores materiales, sociales y técnicos, como pueden ser los volúmenes de agua de regadío, la cantidad de regantes, la ubicación de las parcelas, las vecindades, la longitud de los canales y una larga lista de etcéteras. Pero más allá de las particularidades que pudieran haber tenido, coincidían en lo esencial: la noción del agua como bien común al cual

se debe procurar repartir de manera, si no equitativa, sí justa; noción que se ha incluso se mantiene hasta nuestros días en las sociedades rurales herederas de esos usos y costumbres, que tampoco se puede decir que vienen exclusivamente de Eurasia, puesto que con los españoles llegaron los tlaxcaltecas, quienes como pueblo originario lograron desarrollar muy diversas tecnologías para el uso agrícola del agua, desde tiempos prehispánicos, adaptadas a diferentes ambientes de producción en su amplia variedad de ecosistemas (González Jácome, 2013). De aquí que se pueda afirmar que tanto técnica como culturalmente, las organizaciones locales para el manejo del agua en la región de estudio surgen de un crisol de conocimientos tradicionales antiquísimos, de uno y otro lado del océano.

#### **4.2. La herencia del Derecho Consuetudinario Ibérico en los acuerdos para el uso del agua durante el Virreinato**

Más allá de las esclarecedoras ejemplificaciones casuísticas y de la enorme riqueza de la información que vierte Meyer (1997) en los primeros capítulos de su libro, sobre la historia del agua entre los años previos a la Independencia de México y los posteriores al Tratado de Guadalupe Hidalgo, para los fines de este trabajo resulta ilustradora la disertación que ese autor realiza en la parte final de su obra, respecto al espíritu filosófico de las leyes españolas sobre el uso del agua, así como a los usos y costumbres que los invasores españoles trajeron a esta región del país para el manejo mancomunado del agua. En ese sentido, se destacan las siguientes palabras:

La legislación [española] de las aguas superficiales y del agua del subsuelo estaba regida por dos éticas distintas, pero juntas ofrecían una especie de simetría filosófica al colocar los derechos de los particulares en su epicentro... Considerada de manera holística... si no representaba el triunfo de la razón por encima de la voluntad, era un sistema ingenioso que proporcionaba los mecanismos morales para acortar la distancia entre los intereses personales del individuo y las preocupaciones más amplias de la sociedad. Combinaba la sensatez de la propiedad privada con la justicia de servir al bien común...

Meyer (1997, p.192).

Para llegar a concluir lo anterior, el autor pasa previamente por plantear que la legislación española es heredera del Derecho Romano y que los principios y enfoques de éste se mantuvieron durante el Medievo, después durante el Virreinato y que pueden encontrarse hasta nuestros días vestigios suyos en las legislaciones que rigen a los países de Occidente.

De acuerdo al mismo autor, en relación al agua el Derecho Romano consideraba que quienes eran dueños de un terreno por el que corriera por su superficie agua, en poca cantidad (escorrentías) o formando cauces medianos y mayores (arroyos y ríos), eran poseedores de una "*propiedad imperfecta*" pues aunque eran dueños de la tierra no lo eran del agua (Meyer, 1997 p. 192); por el contrario, consideraba que quienes eran dueños de un



terreno con un manantial o con agua bajo su subsuelo, eran poseedores de una “*propiedad perfecta*” porque tanto la tierra como el agua eran suyos sin objeción<sup>110</sup>.

Explica Meyer (1997, p.196) que la influencia jurídica romana se manifiesta en la obra considerada “La Madre del Derecho Castellano”: el cuerpo normativo conocido como Las 7 Partidas, decretadas en el Siglo XIII, por Alfonso X El Sabio en el Reino de Castilla; destacando que, en lo que corresponde a la regulación de las aguas, se puede observar la intención del rey fortalecer el interés individual sobre el interés común, puesto que se especifica que: “...El agua de las lluvias o el agua de deshielo que fluían en un arroyo intermitente podían ser retenidas por el terrateniente en represas, presas, cisternas, tanques de almacenamiento o en cualquier otro dispositivo y posteriormente podía hacerse uso de ellas sin permiso alguno, pues eran consideradas aguas privadas...” Sin embargo, insiste Meyer, la formalidad legal encontraba en la práctica un contrapeso en el manejo mancomunado del agua; es decir, en un sistema de organización social en el que un colectivo de vecinos se ajustaban a un reglamento o acuerdo establecido por ellos, más comúnmente por sus ancestros, que tenía como última finalidad la de garantizar que el agua disponible alcanzara para todos ellos.

Los detalles que da este autor sobre las características de este sistema permiten apreciar, de manera muy clara, que tienen una enorme similitud con las que todavía se practican por los actores locales de la Región Sureste de Coahuila y en general actores locales de otras subregiones del Desierto Chihuahuense. Tan similares son, que muy difícilmente pudiera objetarse que en ellas se encuentra el origen de las formas actuales de organización social que prevalecen para el manejo de las escorrentías en las localidades más tradicionalistas aquí estudiadas. De aquí que, por considerar que son un excelente referente histórico de los acuerdos y finalmente para la gobernanza local de los canales de riego; se ha seleccionado el siguiente fragmento de la obra citada de este autor:

Por medio del proceso de mancomunicación, la comunidad de los regadores rurales, los parciantes (también llamados parcioneros en algunas zonas de la Nueva España y aparceros en otras), voluntariamente formaron asociaciones (mancomunidades) para construir, mantener y administrar los canales de riego al igual que para solucionar futuras disputas municipales de agua; eran orales y no escritos y se pasaban de generación en generación entre los irrigadores. No existe ninguna indicación en los documentos existentes de que requieran ratificación por parte de alguna autoridad municipal o provincial cercana. Para cada canal de riego ideaban planes para compartir el agua en términos informales. Estos acuerdos eran similares pero no idénticos de una acequia a otra en la misma cuenca. La mayoría eran simples, pues los derechos de cada parciante eran igualmente dignos, pero algunos incluían un nexo más complicado de prioridades,

---

<sup>110</sup> . Meyer (1997 p. 191) interpreta que “...La legislación española sobre el agua del subsuelo fue diseñada para proteger los derechos de particulares...Era un capitalismo incipiente, una glorificación de la inviolabilidad de la propiedad privada y una celebración del *laissez faire*. Sólo a excepción de contadas ocasiones una persona podía hacer lo que quisiera con su fuente de agua subterránea, incluso perjudicando los intereses de su vecino...”

rotaciones y relaciones de agua. Mientras que estaba incluido el mecanismo de autorrestricción y se preveía la cooperación, la sumisión no se daba como un hecho. Se necesitaba alguna forma de protección y los irrigadores rurales optaron por la administración sin el gobierno. Creían que ésta era un mejor instrumento de equidad que el sometimiento a una burocracia que podía manifestar intereses competitivos e incluso hostiles [...]

...] Después de un tiempo la mancomunidad o la asociación de la acequia llegó a tener una importancia que iba más allá de sus propósitos originales. Así como el canal unía a los campos, la asociación unía a los vecinos reforzando el compadrazgo y convirtiéndose en un mecanismo de ayuda mutua durante las crisis o tiempos de necesidad. En esencia se convirtió en una especie de cofradía secular, una hermandad que constituía el núcleo de la vida rural...

Meyer (1997: 21-22)

Resulta por demás interesante la descripción anterior porque ayudan a comprender hasta dónde el agua llegó a ser el elemento fundamental no sólo para dar soporte material a la vida de las personas, sino para la integración de su sociedad. Esto es, que más allá de que el agua se convirtió en nodo central social de las comunidades rurales novohispanas que se fundaron en el Desierto Chihuahuense, se convirtió en el eje de una compleja red de gobernanza, conforme los asentamientos se fueron consolidando.

La riqueza descriptiva de Meyer para aprender de ella la evolución de las instituciones locales para el manejo del agua en esta parte del país debe, no obstante, complementarse con otras consideraciones pues, desde el punto de vista de quien esto escribe, Meyer enfoca mucho de su análisis al ámbito moral. Ejemplo de ello es que, tras constatar que las prácticas del sistema mancomunado para el manejo del agua en muchas ocasiones eran contradictorias con el marco jurídico formal español, interpreta que ésto se debía a la influencia de valores morales, como lo ilustran sus siguientes afirmaciones respecto a la legislación española de la época: "...reconocía que la ambición desenfrenada de las personas nunca llevaría a una sociedad armoniosa y consideraba a la justicia no como una abstracción metafísica sino como un objetivo alcanzable. Englobando el concepto de restricción normativa, estaba designada claramente para controlar el monopolio, limitar la influencia de habitantes irresponsables, proteger a los marginados, y sobre todo para fomentar la equidad..." (Meyer, 1997: 171). Y que "...El hecho de que [las mancomunidades] tuvieran una posición legal no era una aberración en el sistema legal español. Bajo la legislación romana las asociaciones voluntarias gozaban de una personalidad jurídica y podían poseer propiedades comunales. Esta condición se mantuvo en ciertos reinos españoles durante la Edad Media..." (Meyer, 1997: 202)

No es aquí lugar para analizar qué tanto peso pudieron tener las consideraciones morales a las que alude Meyer, pero se considera pertinente dejar aquí asentado que, sin hacerlas de lado, que otras razones deben buscarse en el enfoque que hacen autores especializados en el estudio del Derecho, quienes han documentado ampliamente que hubo razones políticas de mucho peso que obligaron a la Corona Española a ceder, en sus territorios y desde el

medieval, la prevalencia del Derecho Consuetudinario por sobre el Derecho Positivo. Al respecto, López Villalba (2006) plantea que lo que obligó a la Corona Española a conceder un notable grado de autonomía a las mancomunidades fue la invasión musulmana, acontecida durante siete de los diez siglos que duró la Edad Media. Esto porque los monarcas católicos, arrinconados en Los Pirineos, comprendieron que para hacer viable la reconquista de las comarcas invadidas no bastaba con salir victoriosos de las acciones guerreras, sino que todavía era más importante repoblar los territorios reconquistados. De ahí que, como una forma de incentivar a los repobladores a no retornar a territorios menos expuestos a las incursiones de los moros, tenían que retractarse de exigirles todas las prerrogativas que, como monarcas, tenía prevista para ellos la ley; se hicieron conscientes que, de negar a los repobladores potestades quasi absolutas para hacer en las tierras a las que llegaban lo que a su mejor interés conviniera pronto las abandonaban, lo cual significaba el fracaso en reintegrarlas a sus reinos de las tierras reconquistadas.

Las mancomunidades no se encontraban aisladas, sino que estaban circunscritas en nuevos municipios, en los que se construyeron los centros urbanos en donde se asentaron los poderes civiles y religiosos. Los instrumentos legales mediante los cuáles se fortaleció la autonomía<sup>111</sup> jurídica y económica de esas instancias se denominaron fueros<sup>112</sup> y ordenanzas<sup>113</sup>, cuya última finalidad consistió en:

Restaurar un mínimo organismo institucional desde la disposición generalista resultaba poco menos que imposible debido a la grave dispersión en los poblamientos. Pero a la vez, estos poblados eran la primera piedra para levantar la gran obra de un Estado nuevo. Estado difuso en el espacio y muy lejano en el tiempo, es muy cierto, mas en aquellos momentos los poblados se presentaban como el caldo de cultivo del mismo y eran, por lo tanto, un objetivo necesario para garantizar la supervivencia futura del reino. Su normalización se debía realizar a través de unos elementos sencillos y autónomos, pero que sirviesen para regular la vida vecinal.

(López Villalba, 2006: 340).

---

<sup>111</sup> "...Autonomía en la actividad económica y a continuación en los aspectos jurídicos. Era una necesidad perentoria y se manifiesta diferente, experimental en cada asentamiento. La autonomía jurídica se nutre de la consuetudo, como código que permanece en los tiempos y cuya evolución se alimenta tanto de la praxis diaria como del conjunto de valores que dicha experiencia les había proporcionado... El mercado urbano, motor vital de cualquier sociedad urbana poco evolucionada, se constituye en el gran elemento vertebrador y por lo tanto debe ser controlado en beneficio de la economía del municipio..." (López Villalba, 2006: 344).

<sup>112</sup> "El fuero se entiende como la carta expedida por los reyes, y, en su caso, por algunos señores, en virtud del privilegio dimanado de la soberanía en la que se contienen un conjunto de normas destinadas al buen gobierno de las villas y ciudades" (López Villalba, 2006 p. 340).

<sup>113</sup> López Villalba asume la definición del término ordenanza, en tanto se aplique para englobar la normativa municipal, como: "...toda norma general, cualquiera que sea su autor, cuyo ámbito territorial se circunscribe al municipio, que se dicta para él y que regula aspectos de la vida económica social, vecinal, de organización y funcionamiento del Concejo, su actividad y competencia" (Corral García, 1988: 37; cit. por López Villalba, 2006: 344).

Pero he aquí que llega el año 1492, cabalístico para la historia de España pues cae el último reducto musulmán, se expulsa del país a los judíos sefarditas y Colón llega (que no descubre) a lo que hoy se llama Continente Americano. Respecto a este último suceso y dado que se coliga con la investigación que aquí se presenta, se vuelve a retomar al mismo autor, quien expone que:

...la llegada de los españoles al continente americano propició un proceso inagotable de conquista y posterior repoblación que dio lugar al nacimiento de numerosos centros de población urbanos y rurales. Dichos centros pronto se vieron apremiados a redactar una serie de normas que hicieron viable la vida urbana en los nuevos territorios. Situación que se presentaba compleja por la diversidad de marcos en que dicha vida proyectaba desarrollarse, pero que no dejaba de mostrar una continuidad a lo que se venía desenvolviéndose en las tierras hispanas desde siglos atrás.

A los dos extremos de la mar océano, metrópoli y colonia seguían caminos paralelos en el desarrollo político-jurídico de las poblaciones, utilizando las ordenanzas como *corpus* orgánico de disposiciones locales. En el llamado Nuevo Mundo, en un breve espacio de tiempo se entremezclaron dos aspectos esenciales: un inmenso espacio habitable y un grupo de agentes sociales dispuestos a recrear las estructuras ciudadanas que ya se habían desarrollado en el reino de Castilla durante varios siglos.

Era un retorno a la situación de conquista-repoblación que se había llevado a cabo en la Península Ibérica durante setecientos años.

(López Villalba, 2006: 348)

Como tema relevante vinculado a los datos históricos que se han retomado de López Villalba (2006) se encuentra el de la gobernanza; esto es, que se considera que resultan ser muy ilustrativos respecto a la importancia fundamental que tiene la coyuntura por la que atraviesa en un determinado momento el contexto político dentro del cual los gobernantes deben tomar decisiones de Estado. Específicamente para el proceso que él relata, queda claro que las formas en las que se constituyó la gobernanza en las zonas rurales durante los Siglos XV al XVIII es el resultado de la permisividad a la que se vio obligada a recurrir la Corona Española para con las mancomunidades; dejando pasar los usos y costumbres de la sociedad rural por encima de la ley escrita; al grado tal que esas mancomunidades se fueron empoderando y al final terminaron imponiéndose, paradójicamente como medio para poder ejercer gobernabilidad y cohesión al Estado.

#### **4.3. La herencia del Derecho Novohispano en los acuerdos para el uso del agua durante el Virreinato y el México Postindependiente**

Hablar del Derecho Castellano sería irrelevante para poder comprender las actuales instituciones para el manejo del agua en la región de estudio si no fuera por el hecho de que siguieron practicándose después de consumarse la Independencia de México. Así lo ilustra el siguiente texto:

Los estudiosos coinciden en sostener que, luego de la Independencia de México de 1821, las normas, costumbres y procedimientos de origen colonial continuaron rigiendo en el nuevo país. Por supuesto que hubo adaptaciones ... Pero el agua, por así decir, era la misma, pues era aprovechada por pequeñas tomas y obras ... La distribución del agua entre los vecinos tuvo que ajustarse, ya sea mediante compra o arrendamiento o incluso el robo, algo muy común... los ayuntamientos sustituyeron en algunos lugares a los pueblos como representantes de la propiedad comunal de tierras y aguas, y en esa calidad procedieron a otorgar nuevos derechos; en otros casos, los jefes políticos y hasta los gobernadores lo hicieron. Si bien la nación mexicana había heredado los derechos originarios de la Corona, no había autoridad ni instancia gubernamental que reclamara una prerrogativa similar o equivalente. Así que el agua continuó siendo manejada por vecinos y autoridades locales...

(Aboites Aguilar et al., 2010: 24).

Se puede afirmar, sin mucho margen de duda, que en esta extensión temporal de la aplicación del Derecho Castellano debió haber tenido un peso muy importante la debilidad del Estado Mexicano durante todo el Siglo XIX, manifestado en su incapacidad para emitir leyes y/o reglamentos; pero también tuvieron influencia en tal extensión los obstáculos sociopolíticos, como lo fueron las confrontaciones internas o invasiones extranjeras e incluso otros de carácter cultural, puesto que:

La expresión “Obedézcase pero no se cumpla” es una fórmula del derecho castellano que tuvo gran influencia en el desarrollo del derecho colonial con efectos indudables en el mundo novohispano... Todo parece indicar que esta fórmula se origina en Las Siete Partidas, en su artículo 22, y se le concibió como un recurso para impedir temporalmente que una orden real se ejecutara en caso de que existiera obrepción o subrepción... Era una especie de “déjense las cosas en el estado que guardan.

De este modo la soberanía del monarca no se cuestionaba... y sí permitía que las cosas se mantuvieran ... en aras a una posible reconsideración.

La verdad es que alude a la realidad medieval en Castilla y después de las “colonias de ultramar más allá del mar oceánico”, esta figura jurídica tuvo mucho sentido... [pero] ... tal pareciera que en México nos tomamos muy en serio la fórmula de obedecer para no cumplir y la llevamos mucho más allá de sus comprensibles límites castellanos...

Madrazo y Méndez (2015: 198).

#### **4.4. Manejo de escorrentías en las *labores viejas* del Sureste de Coahuila**

Pero hablar de uso mancomunado del agua tanto en el centro y sur de España como en el norte de la Nueva España no puede dissociarse de hablar de los problemas de abastecimiento de las necesidades humanas que se derivan de un ecosistema con poca disponibilidad de este elemento natural.

Para el caso del *Desierto Chihuahuense*, el déficit hídrico que se presenta se refleja desde en la biota que lo habita, hasta en los sistemas de producción, ya que ambos requieren adaptarse a las condiciones de sequía semipermanente. Las escasas precipitaciones que son propias de esta parte del país son factor determinante para que los cauces hidrológicos sean estacionales, pues sólo conducen agua cuando llueve y son alimentados de pequeñas corrientes de agua que se forman con las lluvias y se deslizan cuesta abajo por el terreno, por acción de la fuerza de la gravedad, cuando ha caído un volumen de precipitación suficiente para saturar las capas más superficiales del suelo.

A tales pequeñas corrientes de agua que se forman en las partes más altas de las cuencas y van confluyendo conforme descienden se les denomina *escorrentías* o *escurrimientos*; lógicamente, a menos que permeen, se evaporen o de alguna manera sean desviadas por la acción externa, van formando cauces cada vez mayores en partes más bajas de la cuenca, a la vez que las aguas adquieren mayor energía cinética debido al incremento del volumen líquido combinado con la fuerza de la gravedad. Es por ello que se explica el hecho de que, cuando bajan grandes volúmenes de las laderas, lo hacen con tal fuerza que arrastran y deslavan incluso la roca madre, formando cárcavas que con el tiempo evolucionan hacia cauces más grandes, pasando a formar arroyos.

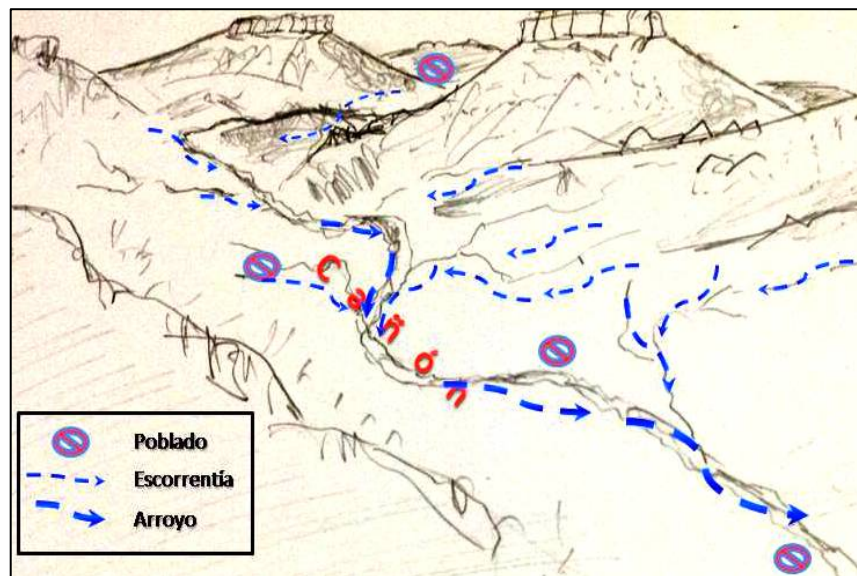
El destino final que tiene el agua que corre por ellos depende principalmente de tres factores: la permeabilidad del sustrato geológico de los cauces, la intensidad de las lluvias y la temperatura atmosférica acaecidas en un año determinado. Esto es, que el volumen de las escorrentías depende de la intensidad y localización de las precipitaciones pluviales, pero son la permeabilidad de los suelos y las temperaturas atmosféricas las variables que determinan el porcentaje que, de dicho volumen, se filtra o se evapora, a medida que corre por la superficie terrestre.

Así, dependiendo de qué tan copiosa sea la precipitación pluvial, pueden formarse desde corrientes muy superficiales hasta tumultuosos torrentes que arrasan todo a su paso, pudiendo desembocar en alguno de los siguientes escenarios posibles:

- 1) Si no sigue lloviendo en las partes altas, la corriente durará tres o cuatro horas y “desaparecerá” tan repentinamente como “apareció”; más aún, si llovió muy poco el agua se infiltrará rápidamente al subsuelo y quienes viven en partes más bajas ni siquiera se enterarán que el agua llegó hasta las partes medias de la cuenca;
- 2) Si llueve de forma relativamente abundante y durante un periodo de tiempo también relativamente largo, las escorrentías serán tantas que al confluir su volumen cobrará tal magnitud que arrastrará todo lo que encuentre a su paso; si no hay nada que las detenga, irán desembocando en cauces cada vez más grandes -los arroyos- que, si la permeabilidad del suelo y la evaporación no alcanzan a “desaparecerlos”, eventualmente desembocarán en un cuerpo de agua permanente (natural o artificial) en algún sitio de la geografía.

- 3) Independientemente sean pequeñas o grandes, la importancia que tienen estas avenidas que bajan por las laderas es que representan prácticamente toda el agua disponible para las actividades agropecuarias y en ocasiones hasta para el consumo humano. Con el paso de las eras geológicas, esas fuerzas erosivas terminan conformando cañones<sup>114</sup> y bajiales<sup>115</sup> o bajíos (Figura 3). De aquí que sea en los fondos de los cañones donde las escorrentías proporcionan al sitio la humedad requerida para establecer cultivos agrícolas, empleando para ello grandes cantidades de trabajo humano, que se va acumulando a través de decenas o aún cientos de años, para dar a la topografía un perfil más plano, por tanto más adecuados para cultivar.

**Figura 3. Estructura hidrológica de un arroyo del semidesierto**



Fuente: Elaboración propia.

La vecindad no determina, sin embargo, que las interacciones entre los habitantes de uno y otro cañón sean unívocas. Por el contrario, revisten de gran complejidad, debido a la

<sup>114</sup> En síntesis, los cañones son valles intermontanos muy estrechos a lo ancho y muy extendidos a lo largo cuya geoforma es en última instancia definida por su localización entre cordilleras paralelas, en el caso de estudio ubicadas en la Sierra Madre Oriental. Por tanto, sus pendientes, suelos y vegetación se presentan en gradientes, que en última instancia se determinan por el origen geológico de sus accidentes orográficos. Estamos hablando de anchuras que en general van de los 1000 hasta los 3000 metros y longitudes que miden algunas decenas de kilómetros (aunque generalmente rondan los 5 a 10 Km, los hay de alrededor de 20 o 30 Km y excepcionalmente más de 50 o 60 Km).

<sup>115</sup> Desde una perspectiva geomorfológica, los llamados *bajiales* (también conocidos en la literatura geomorfológica como *bajadas* o como *glacis de piedemonte*) tienen su origen en la deposición continua de los materiales erosivos que son arrastrados desde las partes más elevadas de un relieve.

multitud de factores de todo tipo que intervienen en dichas interacciones; quienes habitan un determinado cañón comparten entre ellos condicionamientos ambientales específicos al cañón; derivado de lo cual comparten problemáticas que los atañen exclusivamente a ellos. Sin embargo, debido a que tales condicionamientos ambientales son a un mismo tiempo múltiples y heterogéneos a lo largo del cañón, los actores rurales que viven en localidades ubicadas a diferentes altitudes del mismo no enfrentan necesariamente las mismas dificultades o facilidades para acceder y/o manejar sus bienes naturales. Es de ese modo que también se dan los casos en los que una determinada situación o problemática que se presenta en un cañón afecta únicamente a una parte de los habitantes del mismo, que puede ser mayoría o minoría, pero en cualquier caso pudiera excluir a otra parte de los pobladores del mismo cañón en el que viven<sup>116</sup>, quienes mantienen interrelaciones sociales, económicas o de otra índole con parte de los habitantes de otro u otros cañones<sup>117</sup>.

En la medida que del control de las aguas de los arroyos ha dependido la sobrevivencia humana, los cañones por los que corren han ido quedado incorporados al proceso histórico de construcción de su territorio, a escala comunitaria o *micro*. En ese sentido, al tiempo de que construye o mantiene un *ambiente de producción agrícola*, los actores locales también consolidan su sentimiento de vinculación con y pertenencia a los arroyos y los cañones.

En esos contextos de agricultura temporalera, de ninguna manera se puede asumir que las escorrentías y arroyos sean fuente garantizada de sobrevivencia de los cultivos, el ganado o incluso las personas. El campesino tiene claro que esos componentes del paisaje son ariscos, nada dóciles, difíciles de domeñar; de ahí que cobre sentido que el término “aguas broncas” sea el común en la región para denominar las que corren sin control; a las que los campesinos tienen que detener de alguna forma, para poder incorporarlas a los procesos de trabajo agropecuarios; cuando logran controlarlas, pasan a nombrarlas “aguas mansas”. Es por ello que, en el contexto de sequía del Desierto Chihuahuense, aunque siempre existe la posibilidad de que caiga una lluvia copiosa directamente sobre *las labores*, los campesinos saben bien que este evento es muy eventual, por lo que ninguno de ellos se atendrá a esperar que llueva, pues saben que hacerlo significa arriesgar la escasa seguridad alimentaria que poseen; en lugar de ello, buscaran amansar las “aguas broncas”, construyendo pequeñas estructuras para detenerlas y desviarlas hacia sus *labores*, dando con ello viabilidad a los sistemas de producción, a los que las acoplan.

---

<sup>116</sup> De hecho, se puede afirmar que para el caso de los cañones de estudio poco o nada interactúan quienes habitan los cabezales de cuenca, ya que unos y otros se encuentran ubicados en sitios muy distantes (a unos 100 Km).

<sup>117</sup> Contémpense las anteriores consideraciones en un contexto microregional y se tendrá una mejor idea sobre cómo la complejidad del paisaje ecológico es un factor preponderante en la complejización de las interacciones sociales. En las sociedades campesinas estas últimas se vinculan íntimamente con sus sistemas tradicionales de producción; abordar este tema significa incorporar al proceso de investigación el estudio de las relaciones sociedad-naturaleza. Entendidas éstas como una compleja y heterogénea red de interacciones sociales, económicas, políticas y culturales, la investigación requiere un enfoque orientado a “desmenuzar” la complejidad y la heterogeneidad; con esta intención se retomará el que propone Norman Long (2007), pues se considera que cumple con esta orientación como premisa.



Cabe hacer la precisión de que no todas las labores son iguales: existen múltiples factores topográficos, hidrográficos, sociales, económicos, históricos, jurídicos y tecnológicos (entre otros) que dan a cada una características peculiares. Esto es, que no es lo mismo que estén en un lugar casi plano que con pendiente (ligera, moderada o abrupta); en las inmediaciones de un arroyo estacionario o de un río permanente; que la escorrentía o arroyo tenga poco, mediano o mucho caudal; en una sociedad tradicional o modernizada; que sus unidades económicas estén descapitalizadas o capitalizadas; que hayan pasado por un periodo de inestabilidad política o que nunca hayan pasado por procesos similares; que sean propietarios privados o ejidatarios; que cuenten con infraestructuras rústicas o con sistemas hidrotécnicos complejos conectados a distritos de riego. Más aún, tiene mucho que ver también para el establecimiento de acuerdos para el manejo de las escorrentías la extensión y la forma de cada terreno de labor.

Predecir la gama de posibilidades que pueden adquirir física y fisonómicamente las labores, para con ello poder definir una tipología de aptitudes agropecuarias requeriría de entrar en estudios estadísticos, que si bien por un lado ayudarían a comprender las razones por las cuáles los actores locales toman sus decisiones productivas, por otro requeriría integrar demasiadas variables y otro tipo de herramientas. Tal enfoque se encuentra lejos del alcance e interés de esta investigación por lo que se consideró mejor opción retomar la tipología binaria que hace Aboites Aguilar (2001a), quien distingue solamente entre *labores viejas* y *labores nuevas*, a las cuáles detalla de la siguiente forma:

En la zona chihuahuense lo que aquí se denomina “labores nuevas” se conoce simplemente como las tierras “del distrito”; en cambio, las viejas son las que quedaban fuera de la jurisdicción del distrito de riego... lo viejo eran esas tierras ubicadas junto a los ríos que estaban en manos de un gran número de propietarios y que se regaban con una infraestructura considerada por los callistas como arcaica e ineficiente; en muy raras ocasiones operaban con bancos aunque sí con préstamos de molinos harineros y acaparadores... En las labores viejas, “labor” tiene al menos dos significados: el primero se refiere a la parcela, el terreno sembrado; el segundo tiene que ver con una forma de organiza... “labores viejas” es una denominación genérica que alude a una gran diversidad social. De hecho, la aparición de ese término uniformizó y simplificó tal diversidad...

Aboites Aguilar (2001a: 58)

La continuidad geográfica con la que pueden encontrarse las *labores viejas* por todo el Desierto Chihuahuense, aún en nuestros días, es una razón adicional para integrar los conceptos de Aboites Aguilar como parte del marco conceptual en el que se basa el análisis de los casos aquí estudiados. En tanto que en la presente investigación pudo constatar que en la region de estudio siguen reproduciéndose las mismas prácticas que describe este autor, aquí se retoma el concepto de *labores viejas*, puesto que en *las labores* del Sureste de Coahuila que pudieron ser observadas durante esta investigación no se encontraron diferencias, por lo que se considera que razonablemente se puede asumir que, los acuerdos

para su manejo son, si no idénticos, sí tienen mínimas diferencias, por lo que pueden considerarse matices de la diversidad de tipos que se manifiestan probablemente por todo el Altiplano Mexicano.

Aunque el término *labor* tiene una definición muy amplia, relacionada con las acciones que tienen que ver con diferentes tipos de trabajo humano, en el contexto de esta investigación se retoma la que aplican los campesinos de la región de estudio, para referirse al sitio donde realizan sus cultivos agrícolas; lo cual pueden efectuar permanente o eventualmente, de manera individual o colectiva. No tiene para ellos el mismo significado que *parcela*, pues ésta la pueden tener en un sitio donde no existen condiciones adecuadas para la agricultura.

Para los casos de los cultivos de temporal o de secano, por regla general las *labores* se encuentran ubicadas en un bajío o bajial, donde se concentran las de otras familias de la comunidad. Se puede decir que es inevitable que sea de otra forma, pues las restricciones ambientales no permiten que las *labores* se establezcan en sitios que tengan pendientes topográficas acusadas, o lejos del centro del bajial, donde se encuentran los puntos altitudinales más bajos (puesto que es justo por ahí que pasan las escorrentías). Cuando hay varios bajiales, se puede dar el caso que un campesino tenga una *labor* en cada uno de ellos, por lo que interactúa con otros vecinos de la comunidad. Esto es un aspecto crucial para comprender las formas que toman los acuerdos para el aprovechamiento de las escorrentías bajo sistemas de producción tradicionales, ya que esa vecindad y la indivisibilidad física del agua obliga a establecer *acuerdos de cooperación* entre los usuarios de esas aguas; luego, por omisión, permite también comprender el origen y forma de los conflictos que se desencadenan, cuando alguno de los involucrados percibe que el otro o los otros no están cooperando de acuerdo a las reglas pre-establecidas para sostener un acuerdo justo y permanente con los dueños o usufructuarios de las *labores* vecinas que tienen acceso a las escorrentías disponibles.

Los procesos de trabajo implicados en las “labores viejas” conllevan hasta en nuestros días un esquema de organización social construido a lo largo de siglos, si no es que de milenios, que solamente podrán proyectarse como una herencia cultural hacia las generaciones futuras si se mantienen los valores y sentido comunitario; pues como señala Aboites Aguilar:

...Con estos rasgos podemos llegar quizá al meollo del carácter de estas comunidades: el control del agua. La organización colectiva tenía sentido en la medida en que sólo con el trabajo del conjunto de propietarios era viable construir, reconstruir y conservar en buen estado las obras de irrigación. La complejidad y el costo de esas obras obligaba a sumar esfuerzos. Un contraste evidente con las labores nuevas es que el control hidráulico quedaba a cargo de cada comunidad o labor. El nombramiento y pago del aguador por parte de los comuneros era la mejor expresión de esta forma diametralmente distinta de organizar los usos del agua...

Aboites Aguilar (2001a: 63)

Expresado de manera sintética, se le denomina *la labor* a los sitios o zonas con las mejores cualidades agrológicas y cuya importancia radica en que constituyen no solamente el punto físico o *topos* en el que se materializan las condiciones técnicas para establecer con éxito los sistemas de producción, sino que son el punto físico o *topos* en el que se materializan los acuerdos o reglas para el manejo mancomunado del agua.

A partir de los anteriores razonamientos, que son de tipo ambiental, resulta posible señalar que, al concentrar en una sola persona la toma de decisiones administrativas, el latifundio facilitó el manejo de las escorrentías y los arroyos para desviarlos de sus cauces o de sus cuencas originales, almacenarlos en presas o reservorios, canalizarlos en acequias o canales o regarlos en las labores; pese a esto, la gran resiliencia que tienen las milenarias instituciones para el manejo mancomunado del agua queda ilustrada por el hecho de que el latifundista no siempre pudo tomar una decisión autocrática en todos los casos que se le presentaron, ya que siempre hubo zonas en las que debió compartir las aguas con algún o algunos vecinos colindantes, o incluso lo tuvo que hacer dentro del mismo latifundio, en las labores que prestaba a sus peones o en las que establecía con ellos acuerdos de aparcería.

Situaciones similares se presentaron no solamente al latifundista virreinal o decimonónico, sino también al hacendado de la segunda mitad del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX, por el simple hecho de que la extensión de su propiedad era mucho menor que la del latifundio y, por tanto, rara vez alcanzaba a cubrir cuencas completas, por lo que estaba obligado a compartirlas con sus vecinos. Con más razón las hubo tras el reparto agrario, ya que éste representó el advenimiento del minifundismo y con él un incremento superlativo de la cantidad de actores que tienen o requieren acceder al agua la tierra.

Por lo anterior, aquí se insiste que los tres elementos nodales de la cultura del agua traída por los españoles fueron: el saber tecnológico, el saber jurídico y el saber administrativo. Los dos últimos constituyen en conjunto el saber institucional del manejo del agua, que ha demostrado ser más importante en muchos sentidos que el saber tecnológico. Además de más resiliente, en tanto que al paso de los siglos las colosales obras de ingeniería hidráulica construidas por el latifundio y sus haciendas no pudieron sobrevivir, pero los acuerdos para el manejo mancomunado del agua han resistido dentro de la cultura local hasta nuestros días; al menos en las sociedades tradicionales, como las campesinas.

## Conclusión

La leyenda de la fundación de Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, explica que ésta se realizó por un pueblo bárbaro, que emigró desde la región conocida como Gran Chichimeca ubicada al sur del Desierto Chihuahuense<sup>118</sup>; región en la que la permanente sequía impidió el desarrollo de la agricultura obligándolos a llevar un modo de vida nómada. Según esa

---

<sup>118</sup> . La Gran Chichimeca comprendía como zona central los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y la mitad oriental de Jalisco (citadas en orden del sentido en que avanzan las manecillas del reloj); con pequeñas porciones del sur de Coahuila y Nuevo León, norte de Michoacán y sureste de Durango

misma narrativa, los mexicas peregrinaron durante décadas hasta llegar al lugar donde encontraron las señales que las profecías les indicaban que era el sitio predestinado para construir su ciudad; un lugar en donde lo que más abundaba era el agua: un islote del Lago de Texcoco.

Hasta ese lugar llegaron los invasores españoles, tomándolo por las armas en 1521. Tras instalar la sede de sus poderes políticos, económicos y eclesiásticos sobre las ruinas de Tenochtitlan, avanzaron hacia los cuatro puntos cardinales con ánimo de hacerse de cada vez más territorios. Durante los siguientes tres siglos fundaron decenas de poblados, que para el caso del rumbo norte estuvieron motivadas por la búsqueda de minas de plata y oro. Fue debido a la ambición por obtener esos metales que lograron establecer en la Gran Chichimeca los centros urbanos que no lograron construir los pueblos originarios; lo cual resalta la aparente paradoja de que los Mexicas emigraron hacia el sur desde la Gran Chichimeca buscando agua y los españoles migraron hacia el norte para repoblarla, buscando plata.

Se considera que viene al caso concluir este Capítulo con esta ultrasintética historia ubicada en los años inmediatamente previos y posteriores a la invasión europea: por un lado, porque a la llegada de los españoles la Franja Sur de Coahuila estaba poblada, entre otros pueblos, por los Chichimecas; por otro lado, porque resalta un aspecto que ya ha sido tratado en capítulos precedentes y en éste: la hostilidad del Desierto Chihuahuense para establecer actividades agropecuarias y para el poblamiento. Pero sobre todo porque le otorga al agua una especial importancia simbólica, vista como elemento del territorio indispensable para la vida.

Las hostilidades impuestas por el medio natural condicionaron el éxito del extractivismo de metales preciosos a asegurar primero el abastecimiento de alimento y vestido; para lograrlo fue necesario ubicar lugares con suficiente agua para la agricultura y la ganadería, por lo que la *Franja Sur de Coahuila* se convirtió en un territorio estratégico, dada la abundancia de manantiales que brotaban en las cordilleras plegadas de la Sierra Madre Oriental (al oriente); amén de dos caudalosos ríos que desembocaban en un conjunto de lagunas (al poniente). Entre las ventajas estratégicas que tenían los ibéricos sobre los pueblos originarios para lograr solventar el reto productivo agropecuario estaba su amplio conocimiento tecnológico y administrativo para el manejo de los cuerpos de agua; estaban acostumbrados a lidiar con ambientes similares al Desierto Chihuahuense pues provenían de un país cuyo territorio experimenta en su mayor parte climas extremos con altos déficit de humedad; traían con ellos un conocimiento tecnológico e institucional para manejar mancomunadamente el agua, que habían ido perfeccionándose a lo largo de siglos, si no es que de milenios.

Así que a los ibéricos no les fue difícil adaptarse al medio, pues aplicaron su bagaje cultural mozárabe<sup>119</sup> y las sofisticadas tecnologías romanas para el manejo del agua<sup>120</sup>. Tuvieron

---

<sup>119</sup> En apartados anteriores de esta obra, se ha retomado de Ostrom (2000) el ejemplo de los Tribunales de Aguas, que desde la Edad Media han funcionado en el territorio que hoy pertenece a

tres siglos para hacerlo y probablemente lo más difícil, sobre todo en los primeros años, fue hacerse de las cuantiosas sumas de dinero requeridas para construir las obras de ingeniería hidráulica necesarias para eficientar el uso de las aguas que de las sierras bajaban en forma de escorrentías o de arroyos permanentes alimentados por los manantiales que en ellas abundaban, a través del despojo del bien común de los pueblos originarios para imponer la propiedad privada a través del régimen de tenencia latifundista.

Es así que hablar de acuerdos y de desacuerdos implica hablar de equilibrios de poder, ya que éstos determinan tanto la forma como el fondo de las reglas que los conforman; por eso no cabe esperar que éstas sean ni las más idóneas ni las mínimas deseables, sino que llevan un grado de imposición y/o de sometimiento de la parte débil a los intereses de la poderosa, aparte de que no necesariamente se establecieron poniendo a la justicia como meta a alcanzar. También dependen de las circunstancias sociales, económicas, culturales, políticas y ambientales del contexto, por lo que cabe esperar que con el paso del tiempo vayan evolucionando y no sean exactamente iguales las que se establecieron en un momento determinado a las que se establecieron en otro.

Sin embargo, la naturaleza está constituida de múltiples componentes con propiedades físicas particulares que inevitablemente imponen condicionamientos a la vida en general y por tanto al ser humano; es decir, que la capacidad de un determinado lugar para ser usado para la producción antrópica no solamente depende del ciclo del agua, sino también de otros componentes ambientales; tres de los cuáles definen la calidad agrológica de un sitio determinado: la topografía, el suelo y el agua en sí misma. Desde un punto de vista físico y químico, topografía, suelo y agua son factores que se comportan como gradiente, lo cual quiere decir que tanto sus propiedades cuantitativas como cualitativas son variables dentro de un rango; es decir, refieren a un fenómeno multivariable a lo largo y ancho del territorio. Lo cual viene al caso mencionar porque matizan los acuerdos para el manejo de los sitios con mayor potencial productivo; tema que resulta central para desarrollar el tema del manejo campesino del paisaje<sup>121</sup>. Esos sitios corresponden a lo que los actores rurales que habitan el Desierto Coahuilense denominan *las labores*, concepto que ha sido estudiado a profundidad por Luis Aboites Aguilar<sup>122</sup>.

---

España, al sur de la Península Ibérica, pero que hasta el Siglo XV se denominaba Al-Andalus y era gobernada por los árabes. En ese sentido, no se ha encontrado al menos alguna razón por la cual negar que la base de la institucionalidad traída de España y aplicada en esas “Labores Viejas” tiene como antecedentes la institucionalidad musulmana.

<sup>120</sup> En el trabajo de Fernández Casado, C., (2008) se ilustra de manera contundente la trascendental importancia que tuvo la arquitectura romana ligada a la construcción de acueductos para proveer a las ciudades hispanas; sobre todo las del norte del país.

<sup>121</sup> Una descripción de las implicaciones de la calidad agrológica en el sistema de producción tradicional o campesino del semidesierto del Sureste de Coahuila ha sido documentada de manera detallada por Angel Carrillo (2009b).

<sup>122</sup> Aboites Aguilar (2001a) refiere la aplicación del término en algunos Distritos de Riego del centro del estado de Chihuahua, con algunas menciones a la Comarca Lagunera. A quien esto escribe le consta personalmente que el término labor se emplea por los campesinos que habitan en todos los

La importancia de las labores es que en ellas se materializan los acuerdos no formales y locales para organizar el manejo colectivo del agua, el suelo y la topografía, superando el obstáculo que implica la indivisibilidad física de las escorrentías y en general de cualquier cuerpo de agua.

Pero para alcanzar un consenso para el manejo mancomunado del agua no solamente es requisito moldear los elementos del paisaje, como pueden ser los ambientes de producción dentro de las labores; tampoco es suficiente ceñirse a los límites territoriales como pueden ser los de una cuenca o microcuenca. Por el contrario, existen otros tipos de consideraciones que no son tangibles, como lo son los componentes del paisaje que son susceptibles de modelarse con herramientas físicas: los intangibles acuerdos que solamente pueden “moldearse” o matizarse a través de instrumentos también intangibles; es decir, mediante el consenso de intereses individuales dentro de un colectivo. Por tal razón y en aras del enfoque, objetivos y prioridades particulares de la presente investigación se considera del todo inadecuado ceñir la investigación a los límites estrictos que definen una labor o una microcuenca, como es lo usual en los trabajos con enfoque técnico; no se quiere decir con ello que se dejan de lado esas consideraciones ni la delimitación hidrológica como un elemento importante, sino que da relevancia sobre ellos a los acuerdos sociales.

---

municipios a un lado y otro de las líneas limítrofes entre Coahuila y Zacatecas, así como los que viven en los limítrofes de Nuevo León y San Luis Potosí; de voz de campesinos que migraron siendo niños desde Tula, Tamaulipas, indirectamente también sabe que lo aplican en ese municipio colindante con Nuevo León.

## CAPÍTULO 5. FRAGMENTACIONES

En los capítulos anteriores se ha expuesto una narrativa que versa sobre la influencia que históricamente han tenido la tierra y el agua en el contexto natural de sequía del Desierto Chihuahuense; a partir de la cual se hace una descripción sobre cómo estos dos elementos de la naturaleza han sido factores determinantes para la actual realidad social, económica, demográfica, cultural y política de esta región ubicada al norte de México. Mediante una aproximación que pretende ser interdisciplinaria, se ha insistido en destacar la complejidad de las interrelaciones multifactoriales ligadas a la presencia o la ausencia de estos bienes naturales que, destacadamente en el caso del agua, son vitales para el ser humano.

Desde un punto de vista histórico ambiental, se ha subrayado el hecho de que la escasez del agua condicionó desde siempre el proceso del poblamiento de esta región semidesértica y en el caso de Coahuila y Texas, tal escasez combinada con las enormes extensiones de territorio y la resistencia de los pueblos originarios impidió al Virreinato de la Nueva España consolidar los asentamientos humanos que se intentaron crear entre Monclova y San Antonio. En contraste, en el Sur de Coahuila la relativa abundancia de manantiales permitió consolidar las ciudades de Saltillo y Parras, así como extensísimas propiedades privadas como el Marquesado de Aguayo, que tuvo continuidad en el México postindependiente como el Latifundio Sánchez Navarro. Del mismo modo, con la finalidad de contextualizar los temas centrales que aquí se tratan, se ha destacado el tema del acaparamiento monopólico de la tierra durante los tres siglos que sucedieron desde la llegada de los invasores españoles hasta la confiscación y fraccionamiento del Latifundio Sánchez Navarro, instrumentado entre 1866 y 1868.

El presente capítulo arranca retomando la idea de fragmentación territorial, que se considera trascendental para esta investigación. La del Latifundio Sánchez Navarro representa el primero de tres hitos históricos que impactaron la estructura de la tenencia de la tierra en la región de estudio, fragmentándola. Los otros dos eventos fueron: i) el reparto agrario de 1936, en el que se expropió parte de las tierras a las haciendas, para otorgarlas en usufructo a campesinos; ii) la contrareforma agraria de 1992, que orientó el marco jurídico de la materia, para reprivatizar las tierras ejidales que fueron otorgadas en el reparto agrario.

Esas tres grandes fragmentaciones fueron operadas por el Estado, aplicando leyes creadas específicamente para orientar al país a objetivizar el proyecto de desarrollo de las clases gobernantes en turno. En el primer caso fundamentándose en la Ley de Infidencia<sup>123</sup>,

---

<sup>123</sup> Bazant (1983: 556), al respecto, señala que "Con objeto de contener en cuanto fuese posible las defecciones que se cometían por los sublevados y descontentos, que o se unían abiertamente a la intervención extranjera o le prestaban un auxilio indirecto, pero eficaz", cuenta Matías Romero en su Memoria de Hacienda de 1870, el presidente Juárez expidió el 25 de enero de 1862 la ley de infidencia en la que "impuso penas severas contra los mexicanos que cooperasen de algún modo a la intervención extranjera [...] El gobierno nacional completó la ley mencionada con el decreto del 29 de enero de 1863, que agregó a las penas de prisión y otras el embargo de los bienes de los infidentes, que se llamaría después "secuestro", y su venta por el gobierno..."

decretada en 1862 en el marco de las Leyes de Reforma y el triunfo de la República sobre el Imperio de Maximiliano. Para los otros dos casos, orientando al Artículo 27 de la Constitución de 1917 hacia interpretaciones contradictorias entre sí: para fortalecer la propiedad social a principios del Siglo XX y para debilitar a la misma con miras a reconstituir la propiedad privada, a fines del mismo siglo. Al afectar los derechos de la propiedad de la tierra, las tres acciones jurídicas señaladas también tuvieron un efecto sobre los derechos de acceso al agua, por tanto a las estructuras de su gobernanza.

A partir del presente capítulo se aborda la discusión analítica de las instrumentadas en 1992, dado que, como se señala más adelante, tuvieron un efecto demoledor sobre las formas tradicionales de concebir los derechos de acceso y uso del agua; esto es, un choque frontal entre la concepción del agua como un bien común y la concepción de la misma como un bien privatizable, con lo cual se desencadenaron conflictos que involucraron a actores a escala local, municipal y regional.

La información de campo levantada durante el curso de esta investigación permite afirmar que los acuerdos tradicionales para manejar colectivamente las escorrentías lograron resistir todo el Siglo XX y hasta nuestros días las restricciones que les significó la fragmentación de las haciendas porfirianas, ocurrida por la vía del reparto agrario efectuado tras la Revolución Mexicana; o al menos aconteció así en esencia en muchos de los ejidos del Sureste de Coahuila. También se ha podido constatar en ella un nivel de resiliencia notable, ante el embate de las políticas reprivatizadoras impulsadas por el Estado neoliberal durante las últimas dos décadas del Siglo XX y las dos primeras de los inicios del Siglo XXI.

No se considera aventurado afirmar que la capacidad de persistencia mostrada por esos acuerdos ante las fragmentaciones territoriales acaecidas durante el último siglo y medio se encuentra estrechamente relacionada con la capacidad de adaptación de sus formas de gobernanza, para reconstituirse ante los cambios al marco jurídico del Estado. Capacidad desarrollada, sí por el perfeccionamiento que han podido lograr tras miles de años para armonizarlos con las circunstancias, necesidades y conflictos cotidianos de las sociedades rurales, compartiendo el elemento natural en el marco de su convivencia interna como sociedad local, pero también porque los acuerdos, vistos como abstracciones sociales, poseen la misma propiedad de *fractalidad* que poseen las redes hidrográficas. De ahí su gran capacidad para confrontar las amenazas de despojo lanzadas por agentes externos.

Con todo y el reconocer la gran resiliencia a las transformaciones agrarias que han mostrado las sociedades tradicionales de la región de estudio, algunas más y otras menos, sí en unas facetas y en otras no, se considera pertinente subrayar aquí que los equilibrios de poder que contextualizan la última fragmentación son diferentes a los que contextualizaban a la primera y a la segunda gran fragmentación del territorio del Sureste de Coahuila; circunstancia nada menor, en tanto que la forma como se ha efectuado el reparto del poder entre Estado y sociedad ha sido determinante para definir el grado de fortaleza o debilidad de la gobernanza en cada uno de los periodos acontecidos entre una y otra fragmentación.



## 5.1. Algunos efectos del fraccionamiento del Latifundio Sánchez Navarro sobre los derechos de acceso al agua

En el Capítulo 2 de este documento se ha abordado de manera general la historia de los dos grandes latifundios que durante el Virreinato y dos terceras partes del Siglo XIX acapararon las tierras de la región que hoy día se denomina Sureste de Coahuila. Los privilegios que siempre tuvieron los hacendados españoles los convirtieron en los amos y señores de tierras y de vidas. De aquí que, durante más de dos siglos, el Marqués en turno representó al que probablemente era el mayor poder fáctico de la región que sirve de marco geográfico de esta investigación<sup>124</sup>. Confirman este hecho varias crónicas, como la siguiente que se retoma de un artículo periodístico, en la que se relatan algunos sucesos acontecidos en el Siglo XVIII en la Hacienda de Santiago de La Castañuela, que existió dentro de la cuenca del Arroyo San Miguel:

Hacia el año de 1772, el gobernador de la Nueva Vizcaya realizó un recorrido de inspección... En dicha inspección [el gobernador] Fayni constató que en Parras, había dos capitanes, que solo ostentaban el título, pero no tenían bajo su mando a ningún individuo enlistado en las milicias. Además pudo verificar que de la defensa de la región se encargaban los hacendados y en lo que correspondía a La Castañuela, su propietario el marqués de San Miguel de Aguayo, mantenía en dicha hacienda una fuerza de treinta escolteros, bien armados, con cinco caballos y una mula cada uno...

Sobre el particular, don Teodoro de Croix, cinco años después criticó severamente a los hacendados del Norte Novohispano, de quienes opinó, que dichos señores gobernaban sus dominios como monarcas absolutos y se molestaban con la intervención del gobierno provincial.

Contreras Palacios (2017).  
[el subrayado es mío]

El poder ligado a la gran extensión de territorio que poseyeron los sucesivos Marqueses de Aguayo fue un factor que, sin duda, facilitó la toma de decisiones respecto al uso del agua, puesto que abarcaba no solamente lo económico, sino también político y social pues, como se ha referido en otros apartados de este trabajo, la hacienda constituyó el núcleo de un microsistema social que regía y daba protección a las vidas de sus peones, artesanos y demás trabajadores; en un contexto como ese, resulta de sentido común asumir que la amplia potestad que tenía el patrón hizo posible que nunca pasaran “a mayores” los diferendos y/o controversias que por el uso de las escorrentías pudieran suscitarse entre las haciendas, puesto que todas esas disputas podían “resolverse en casa”.

---

<sup>124</sup> García Alonso (2010) al respecto, explica que “...todos los ricos y nobles hacendados de este periodo... basaban su poder, su patrimonio y sus empresas en el latifundio y los servicios a la corona española... consolidaron un modelo de ocupación basado en los colonos, los presidios militares, la reducción de indios nómadas y las misiones... una auténtica tierra de frontera en la que, con valentía y sin demasiados escrúpulos, se podía hacer fortuna...”.

Como en casi todo el norte de México, la lejanía con la sede del poder federal y el poder que dio la institucionalidad hacendaria permitieron a los hacendados sobrevivir a la Guerra de Independencia, mantenerse como clase agraria hegemónica durante el resto del Siglo XIX y hasta muchos años después de la Revolución Mexicana. Lo cual se debió en buena medida a que las circunstancias sociopolíticas y económicas del país en su entorno internacional favorecieron la manutención de la relevancia del régimen hacendario como eje de la producción agropecuaria.

Con todo, la venta que hizo el gobierno juarista de las haciendas que pertenecieron a los Sánchez Navarro no fue inocua, pues con el fraccionamiento del latifundio se liberaron las fuerzas productivas que habían sido obstaculizadas por el mega acaparamiento de la tierra efectuado durante los tres siglos anteriores. Esto es, que permitió entrar en escena a una burguesía agraria con visión modernizadora, que encontraban en la demanda internacional de materias primas un incentivo para dar a la tierra nuevos usos económicos. Entre esos nuevos hacendados se contaban los Madero, que fortalecieron la agroindustria vitivinícola y dieron un impulso definitivo al cultivo del algodón.

La producción de algodón demanda cantidades de agua mayores a las de los sistemas de pastoreo que sostenían la economía de las haciendas de los Sánchez Navarro, ante lo cual se hizo necesario redefinir la distribución territorial de los sistemas de producción. El criterio principal fue el de la disponibilidad de este elemento natural; esto es, se asignaron al cultivo del algodón las zonas donde los cuerpos de agua superficiales se mantenían a lo largo del año, en tanto que a los sistemas tradicionales quedaron relegados a las tierras con disponibilidad de agua estacional; es decir, lugares donde el agua superficial de la que se puede disponer se encuentra solamente en forma de escorrentías. De esa suerte, las plantaciones textileras fueron ubicadas en las haciendas de la Comarca Lagunera, mientras que los cultivos cerealeros-frijoleros quedaron relegados a las haciendas ubicadas al oriente de Parras, como fueron la de Jalpa y La Castañuela. Pero recuérdese que se ha mencionado ya en el capítulo anterior que dentro de los sistemas de producción con mejores resultados económicos se encontraba la ganadería de ovinos; a este respecto, la hipótesis del autor de estas líneas es que este tipo de crianza fue afectado de una manera importante *desde* esta primera fragmentación del territorio, dado que el fraccionamiento del latifundio en muchas haciendas limitó el tránsito de los borregos entre éstas, lo cual representó un serio problema para la continuidad del sistema de producción, puesto que técnicamente los hatos requieren de ser trasladados en diferentes estaciones del año, generalmente a grandes distancias, por la necesidad de ubicar a los animales en los mejores pastos, debido a que la escasez de lluvias en las condiciones climáticas extremosas del Desierto Chihuahuense no permiten la sobrevivencia de cada pradera natural más que por unos cuantos meses.

El caso es que, al fragmentarse el gran latifundio también se fragmentaron las cuencas, que a partir de ese momento debieron de ser compartidas por dos o más haciendas, ahora propiedad de diferentes personas. Este hecho condicionó las posibilidades de acceso a escorrentías que tenían los nuevos propietarios, puesto que por razones meramente topográficas se facilitó una mayor disponibilidad de sus aguas para algunos a costa de privar

a otros. Tal circunstancia, que no se presentaba cuando las haciendas pertenecían al mismo propietario, trajo en consecuencia la aparición de disputas por el acceso y uso de las mismas, lo cual planteó la necesidad de establecer acuerdos entre vecinos para evitar conflictos mayores. Es decir, que cuando las haciendas dejaron de pertenecer a un solo dueño, para pasar a pertenecer a muchos, se evidenció la necesidad de definir muy claramente “*hasta donde sí y hasta donde no*” cada propietario que comparte con otros los derechos de acceso y uso a un cuerpo de agua tiene derecho a tomar decisiones sin consultar al resto de los usuarios; es decir, acuerdos orientados a restringir el beneficio individual cuando éste afecta el beneficio de los demás, sobre la base de considerar al agua como un bien común. Fue así que esta primera fragmentación del territorio trajo en consecuencia la necesidad de hacer una reestructuración de la gobernanza del agua.

Quien estas líneas escribe considera razonable asumir, en base a su experiencia de investigación empírica personal<sup>125</sup>, que esos acuerdos no debieron ser muy diferentes a los que Aboites Aguilar (2001a) describe para las *labores viejas*, que sobrevivieron o sobreviven en los entornos del Distrito 005 Delicias, Chihuahua. Además de la referencia de Aboites Aguilar, también toma en consideración que los actuales acuerdos para el manejo de las labores no presentan diferencias sustanciales con los que se han descrito para épocas aún más antiguas que las del Siglo XIX (p.ej. Ostrom 1990, 2000).

No obstante, al tenor de lo que el mismo Aboites Aguilar (2001a) ha descrito para las *labores viejas*, el hecho de existir la posibilidad de establecer acuerdos entre vecinos para realizar un manejo mancomunado de las escurrientías no implica la ausencia de conflictos. Lo anterior porque la dinámica de cooperación entre propietarios es función de la relación dialéctica acuerdo-desacuerdo, a partir de la cual suele definirse un equilibrio más armónico o más conflictivo. Así, debido a que tras el fraccionamiento del gran latifundio ya eran otras las circunstancias materiales de la tenencia de la tierra, no debe sorprender que muy pronto pesaron desacuerdos que hicieron quedar fuera de toda posibilidad de ser solucionados disputas que sí eran posibles de solucionar dentro del anterior marco gobernanza del agua; fue por eso que varias de las disputas vecinales que se desataron por las aguas del Arroyo San Miguel tuvieron que tratarse en los tribunales, como la citada por Pasztor (2002), que se retoma en el apartado 8.2.1. de este mismo documento.

Al llegar a la descripción anterior, se considera pertinente llamar la atención al lector respecto a que la vía de los tribunales por las que algunos hacendados optaron para tratar de solucionar los conflictos por el agua representan un parteaguas para la vigencia del derecho consuetudinario, en tanto que el dejar de dirimir esos desacuerdos en los espacios instituidos por la sociedad local para alinearlos al marco jurídico del Estado implicó debilitar

---

<sup>125</sup> Quien esto escribe ha podido constatar personalmente que las *labores* son una forma de organización para el manejo de las escurrientías que rige en el territorio que dio en denominarse Región Ixtlera, que abarcó localidades coahuilenses, neoleonesas, potosinas y zacatecanas. También tiene referencias, por conversaciones, de su existencia en al menos un municipio tamaulipeco (Tula). En ese sentido, retoma el concepto de *labores* que maneja Aboites Aguilar (2001a).

a las normas dictadas por los usos y costumbres, en aras de fortalecer las del Estado. Tal evento representa, por tanto, un paso de deterioro de la gobernanza; que no sería tan importante si no fuera por el hecho de que significó una significativa pérdida del poder de las organizaciones locales de regantes. La estimación de la magnitud de tal pérdida de poder es un tema que requiere una investigación aparte; el autor de estas líneas se atreve a especular que probablemente no haya antecedentes históricos que le sean equiparables, considerando que la pérdida de poder de decisión de comunidades de regantes no aconteció ni siquiera frente al poder del Rey durante la reconquista de los territorios de la Península Ibérica ocupados por los moros; tampoco ante el poder del Virrey de la Nueva España.

A la vista de esas consideraciones, se quiere cerrar este apartado subrayando el hecho de que con el debilitamiento de la gobernanza, también se debilitó la eficacia de los acuerdos establecidos localmente hasta entonces, para resolver los conflictos entre los usuarios de ese elemento natural y se afectó la integridad de las estructuras de ingeniería hidráulica, construidas durante siglos bajo la perspectiva del gran latifundista, para quien deslindes de sus haciendas vecinas no les representaban impedimento para tomar decisiones de manejo como una sola unidad<sup>126</sup>.

## **5.2. Reduccionismo territorial en la reforma y contrarreforma agrarias**

La Reforma Agraria fue un conjunto de acciones jurídicas que se emprendieron por el Estado postrevolucionario para cumplirle a los campesinos, levantados en armas durante esa gesta, la promesa de construir para ellos un ambiente propicio para acceder a una vida más digna y con justicia social. Innegable es que, al aplicarse, liberó a miles de campesinos del sistema de vasallaje al que fueron sometidos como peones acasillados de las haciendas porfirianas y que la entrega de tierras constituye un hito histórico para nuestro país y para Latinoamérica toda. Con todo y esas bondades, no debería dejar de verse que el hablar de reparto agrario conduce a hablar de fragmentación del territorio y por tanto implica hablar de desarticulación del *holum* territorial. En ese sentido, en el presente apartado se sostiene que, si bien las afectaciones generadas por el reparto agrario no fueron tan evidentes en aspectos intangibles como la organización social para el uso de las escorrentías, sus efectos sobre las tangibles infraestructuras hidroagrícolas hacendarias fueron catastróficas.

En los capítulos precedentes se han dado argumentos para comprender las razones por las cuáles las instituciones para la gobernanza territorial y en especial la del agua han resistido las transformaciones estructurales por las que han pasado a lo largo de la historia. No obstante, la gran resiliencia que han mostrado tener las organizaciones tradicionales para el

---

<sup>126</sup> A petición de algunos ejidatarios a la Universidad Autónoma de Coahuila, recientemente se ha empezado a investigar sobre el grado de afectación a las infraestructuras hidrotécnicas en esa etapa de la historia y en la siguiente fragmentación que se hizo del territorio a consecuencia del reparto agrario. Se tiene conocimiento de que mientras se realizaba este estudio, el historiador Carlos Dávila realizaba un estudio sobre los sistemas hidrotécnicos.

acceso y uso del agua no es visto en otros artefactos contruidos con materiales duros por el ser humano, como es el caso de las construcciones de piedra o de cal y canto. Esto es, que en tanto que las ideas, propósitos y conciencia tienen la capacidad de adaptarse y evolucionar, debido a que la mente humana de las que dependen puede reconfigurarlas en abstracto, para resistir a eventos externos como pueden ser las fragmentaciones, las ideas materializadas en obras contruidas con materiales físicos resultan muy difíciles, cuando no imposibles, de ser reconfiguradas para adaptarse a los cambios del entorno; máxime cuando esos cambios se dan de forma repentina. Es de tal suerte que cuando dicho entorno es fragmentado, resulta muy común que se fragmenten con él.

Con lo anterior se quiere decir que, en el caso de México, la capacidad de resistencia de las reglas para el manejo mancomunado del agua les permitieron sobrevivir al reparto agrario; se adaptaron a las nuevas normas que les impuso el modelo de Estado postrevolucionario, en los que jurídicamente se subordinó a los usuarios locales al control del agua por parte de las instituciones gubernamentales; centralizándolo en un aparato corporativizante, pensado más en función de cumplir los objetivos políticos de las clases dirigentes que los objetivos productivos y existenciales de los campesinos a los que se hizo la entrega de tierras. En tal contexto, la acción agraria terminó desarticulando los sistemas hidrotécnicos que daban a los latifundistas y a los hacendados la posibilidad de manejar con eficiencia<sup>127</sup> e integralidad productiva el agua que baja de las serranías y lomeríos; las destruyó por completo al fragmentar las haciendas, ya que mientras el territorio de una sola de estas unidades económicas llegaba a cubrir decenas de miles de hectáreas bajo la propiedad de un solo dueño, cada ejido fue constituido sobre una fracción de la superficie hacendaria, en áreas que rara vez superaron las 5,000 Has.; las cuáles, a su vez, fueron subdivididas en un área de uso común y en decenas de parcelas, cada una para un diferente usufructuario.

Al no haber aplicado medidas preventivas (jurídicas, técnicas o administrativas), actos de autoridad o al menos alguna acción educativa orientadas a crear conciencia respecto a la importancia de conservar esas infraestructuras, el Estado postrevolucionario incurrió en un error histórico que a la postre puede catalogarse como catastrófico, pues no se fomentó la creación de un ambiente institucional propicio para que los actores beneficiarios del reparto agrario adquirieran conciencia no sólo del valor económico de las mismas sino, sobre todo, que formaban parte de un sistema hidrotécnico diseñado con una perspectiva de cuenca, dentro de un orden superior al que ellos podían percibir dentro de sus respectivas subcuencas y, por tanto, sujeto a la necesidad de un nivel de organización social que el requerido para administrar cada subcuenca en particular. En ese sentido, vistos los ejidatarios y/o pequeños propietarios minifundistas como los únicos actores locales con derecho legal a usar los componentes naturales del territorio dotado, la falta de conciencia de la complejidad de ese sistema hidrotécnico allanó el camino para destruirlo.

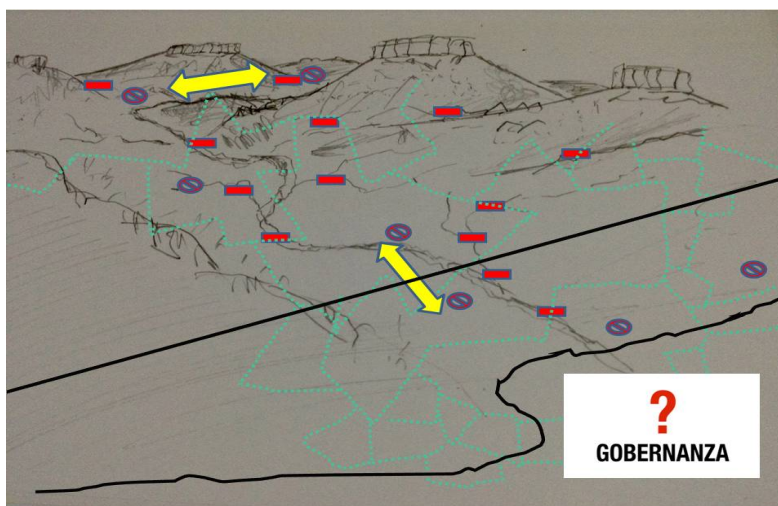
---

<sup>127</sup> Se requiere de una investigación especialmente enfocada a obtener evidencia que compruebe la muy difundida apreciación que tienen los campesinos locales, fruto de la tradición oral pues todos refieren a que eso les comentaban sus padres y sus abuelos, respecto a que la hacienda obtenía rendimientos agrícolas que nunca se volvieron a tener, hasta nuestros días.

Queda en el terreno de las hipótesis la idea que, de haberse cobrado conciencia de la gran inversión financiera que para ser construidas requirieron las obras hidráulicas recibidas con la tierra, muy probablemente se hubiera encontrado el sentido de darles mantenimiento como bienes de capital. El hecho es que, con el correr del Siglo XX, se consolidó en los ejidatarios la percepción fragmentada de esos sistemas hidroagrícolas y con la estrecha visión respecto a la utilidad práctica de cada obra, en el contexto de la pequeña superficie de cada ejido, no faltaron ocasiones en que demolieron obras con el propósito de utilizar sus materiales con otros fines<sup>128</sup>.

A partir de la imagen idealizada que se muestra en la Figura 4 puede deducirse a que la inhabilitación o destrucción de un solo canal o una sola presa fragmenta una parte del sistema; sin embargo, las consecuencias o afectaciones que tenga ese evento dependen de la ubicación específica que la infraestructura dañada tenga dentro de la cuenca.

**Figura 4 Fragmentación territorial de la Hacienda y su paisaje**



Fuente: elaboración propia<sup>129</sup>.

Los acuerdos corrieron una suerte diferente al de las infraestructuras hidráulicas, ya que lograron adaptarse a la cantidad de agua de escorrentía que siguieran bajando por las laderas. Esto es importante de insistir, puesto que implican que la forma de gobernanza del agua pudo reconfigurarse, moldeando los acuerdos para adaptarlos a sus capacidades y a los límites sociales dentro de las que los usuarios del agua se desenvuelven; pese a los cambios de magnitud de los factores físicos.

<sup>128</sup> Esta apreciación no le fue evidente al investigador en un principio, debiendo reconocer que pudo hacerlo hasta que le fue señalada por Juan Gamboa, ejidatario de Jalpa.

<sup>129</sup> En la Figura 4, se denota con pequeñas barras rojas la presencia de presas y canales, construidas para la retención y conducción de escorrentías; con líneas achuradas en verde los límites entre ejidos, sobre los que se indican con flechas amarillas en dos sentidos las interacciones entre usuarios de diferentes ejidos.

Por lo anterior, se puede afirmar que la fragmentación conceptual de las infraestructuras hidrotécnicas, es decir la pérdida de la noción de que formaban parte de un sistema integral para el manejo de las aguas de toda la cuenca, trajo en consecuencia la pérdida de la conciencia colectiva<sup>130</sup> respecto al valor patrimonial de las construcciones; peor aún, también se perdió el conocimiento acumulado durante los siglos que duró la etapa hacendaria, respecto a su funcionamiento técnico, su administración financiera y la organización social requerida para funcionar. Sin esa conciencia colectiva, no hubo siquiera capacidad para concebir, mucho menos dimensionar, las consecuencias económicas de la fragmentación física del sistema.

En ese contexto se facilitó la implantación de un sistema regional de recolección y tallado de ixtle, basado en lo que fueron procesos de trabajo complementarios del *sistema de producción* hacendario. La intervención realizada desde el Estado, para orientar la producción hacia un mercado específico del sector forestal<sup>131</sup>, bloqueó la posibilidad de desarrollar sistemas de producción agropecuaria alternativos, que pudieron haber sido impulsados mediante la utilización de las infraestructuras hidrotécnicas confiscadas a las haciendas o mediante la perforación de pozos para aprovechar las aguas subterráneas. Así, la extracción del ixtle pronto se constituyó en el eje central de la economía de los nuevos poseedores de la tierra, quienes debido a la falta de otras opciones encontraron en este producto un ingreso monetario que les era muy difícil allegarse de otra manera.

Con el deterioro y las demoliciones se fueron perdiendo los conocimientos ancestrales, traídos desde el Siglo XVI al Sur de Coahuila desde Eurasia, sobre un manejo más tecnificado de las aguas broncas. Peor aún, se perdió casi por completo la conciencia (si es que alguna vez la hubo), de que esas “ruinas” posibles de hallar en diferentes sitios del ejido eran, hasta antes del reparto agrario, partes de un todo que funcionaba de manera integrada como una sola unidad productiva. Circunstancia que no deja de provocar cierta extrañeza, en tanto que las dimensiones que tienen algunas cortinas de presas, así como la longitud y cobertura de algunos sistemas de canales dan cuenta de que en su esplendor fueron obras magnificentes<sup>132</sup> (

---

<sup>130</sup> En la actualidad, resulta común constatar que casi todos los actores locales dan a los vestigios de las obras de compleja ingeniería un aprecio equivalente al que dan a cualquier otro vestigio de la presencia humana en otras épocas, dentro de los espacios ejidales; es decir, no tienen un significado claro ni diferenciado en el tiempo y en sus usos, así sean petroglifos o chuzos (puntas de flecha prehispánicas, hechas de material pétreo) u hornos de cal de la Época Virreinal.

<sup>131</sup> Desde la institucionalidad del Estado se implantó un modelo de producción extractivista de fibras naturales, dirigido a satisfacer las demandas e intereses del capital internacional. Lo que se hizo fue promover la asociación de los talladores del ixtle en cooperativas locales, que en 1939 fueron corporativizadas en una empresa que, aunque oficialmente se tipificaba como autónoma, en la práctica desarrolló un perfil corporativista que la hizo orgánica y funcionalmente muy similar a una empresa paraestatal.

<sup>132</sup> Para optimizar los escasos volúmenes de agua que bajan de las sierras de manera estacional y errática, se construyeron sistemas de riego complejos, conformados en amplias redes de canales integrados a presas de captación y de derivación estratégicamente ubicadas y adaptadas a los accidentes topográficos que definen los cursos naturales de los arroyos, dispuestos específicamente para conducir el agua hacia los terrenos más adecuados para la agricultura. Visto desde la óptica



**Foto 2).**

**Foto 2 Ruinas de la Presa “La Castañuela” o “El Carruaje”**



Construída sobre el Arroyo San Miguel, en lo que hoy son las inmediaciones del ejido Segúin, Mpio. de Parras de La Fuente, Coahuila. Para tener idea de sus dimensiones, obsérvese el tamaño relativo de las personas que se encuentran en el ángulo inferior derecho (Foto: Saúl Angel).

El caso es que, para mediados del Siglo XX, el conocimiento del sistema de producción para el que estaban diseñados los sistemas hidrotécnicos de las haciendas se habían desvanecido de la memoria colectiva, no sólo de las sociedades rurales locales sino también de los miembros del sector académico; ya no se diga de los funcionarios y técnicos de las instancias de gobierno encargadas de promover la agricultura y la ganadería.

La destrucción de los sistemas hidrotécnicos representó un punto de quiebre que selló el destino de los campesinos de la Región Sureste de Coahuila y seguramente el de otras regiones que integran el Desierto Chihuahuense. No cabe duda que se encuentra ligada a graves omisiones por parte del Estado, que se conjuntó con la decisión, tomada en el seno del mismo Estado, de promover la monoproducción de ixtle. A pesar de que los sistemas

---

económica, lo anterior significa: por un lado, que su construcción requiere aplicar una inversión de capital que por su monto resulta inasequible para cualquier campesino con poder adquisitivo promedio dentro de sus pares en la región; por otro, que no pueden ser construidos en cualquier sitio, sino en uno que presente la doble característica de ubicarse en un punto donde confluyan escorrentías que provengan de cuencas amplias, para garantizar la captación de un volumen de agua suficiente para llenar el reservorio, pero que a la vez ese sitio tenga un sustrato geológico impermeable, puesto que ya las pérdidas por evaporación son cuantiosas, como para que también se pierdan por filtración volúmenes considerables del agua que se haya logrado captar.



hidrotécnicos que se encontraban dentro de los terrenos de las haciendas, fueron muy eficientes en términos de rentabilidad económica y ecológica para aprovechar el agua escasa, hacia mediados del Siglo XX el sistema de producción hacendario ya había sido olvidado por los académicos especializados en temas agropecuarios. Con muy escasas excepciones, los autores de estudios rurales en el Sureste de Coahuila tienden a asumir que el único sistema de producción tradicional para la región es el conocido como “ixtlero”.

Por lo anterior, no se considera exagerado afirmar que la inacción del Estado para instrumentar políticas de conservación de bienes de capital, combinada con su intervención en los mercados de productos y de trabajo, condenó a los campesinos “beneficiados” con la dotación de tierras a prolongar su estatus de vasallaje y de pobreza; por un lado, porque las infraestructuras que se perdieron significaban la materialización de enormes inversiones de capital realizadas a lo largo de siglos; por otro lado, porque provocaron que los ejidatarios se hicieran dependientes de un solo producto, cuyo margen de rentabilidad ya había sido cuestionado, desde inicios de los años treinta, por los mismos capitalistas que lo acopiaban para colocarlo en el mercado internacional.

Difícil es comprender las razones por las cuáles fueron desatendidas las infraestructuras de riego construidas por los hacendados, por quienes tuvieron la suerte de que presas y canales quedaran dentro de los límites de su ejido. El resultado final fue el de que incluso las presas más grandes terminaron azolvándose, cuando no habían sido ya destruidas; en otras ocasiones los ejidatarios de aguas arriba, desviaron las escorrentías hacia terrenos con suelos no siempre aptos para ser regados. Así, para finales del siglo XX era común entre los campesinos la idea de que la función principal de las labores es proveerles principalmente forraje para las cabras ya que *“sí se obtiene grano ya es ganancia”*<sup>133</sup>.

### **5.3. Contrarreforma agraria de 1992 y fragmentación del paisaje**

En el Capítulo Tres de este documento se explicó el papel determinante que jugaron las fibras vegetales duras y los decretos de veda a los acuíferos subterráneos para definir el destino histórico del Sureste de Coahuila. De ahí que, para no caer en repeticiones, se remita al lector a dicho capítulo, concebido más contextual para esta obra; limitando la temática del presente apartado a tratar algunos detalles de algunos sucesos acontecidos entre 1936 y 1992, que se consideran relevantes para comprender de mejor forma la tercera gran fragmentación del territorio estudiado.

Es importante señalar que dicho periodo ha sido definido entre esos años en razón de que 1936 marca el inicio del reparto agrario en la región y porque el 6 de enero de 1992 se expidió el Decreto Presidencial mediante que reformó al Artículo 27 Constitucional con el objetivo de legalizar el viraje de la política pública agraria, para alinearla ideológicamente al neoliberalismo económico y a la globalización; es decir, para ajustar un marco jurídico para permitir: la entrega de títulos de propiedad definitiva a los ejidatarios; abrir la posibilidad de

---

<sup>133</sup> Esta expresión es muy común oírse entre los campesinos de los ejidos del Sureste de Coahuila.

enajenar tierras ante instituciones de crédito para la obtención de recursos económicos; la adquisición de terrenos rústicos por sociedades mercantiles, suprimiendo la prohibición de que las corporaciones civiles tengan en propiedad o administren bienes raíces; la asociación de las sociedades mercantiles con inversionistas privados; la ampliación de las propiedades para modernizar sus sistemas de producción, equipo y en general bienes de capital.

En dicho tenor, el contenido del Decreto Presidencial firmado por Carlos Salinas de Gortari oficializó el abandono por el Estado del reparto agrario. Y aunque los cambios al marco jurídico se perciben o interpretan de diferente manera dependiendo de la inclinación ideológica o enfoque profesional de quien da su punto de vista [Cf. pej: Durand Alcántara (1993) con Ávila Cisneros (2019)], quien estas líneas escribe interpreta que la elección de la fecha exacta de su publicación no está exenta ni de simbolismo ni de alevosía.<sup>134</sup>

No puede dejar de mencionarse aquí, en aras de tratar de ser lo más objetivo posible en este tema, que de ninguna manera pueden hacerse generalizaciones respecto a las consecuencias que ha tenido la contrarreforma agraria a lo largo y ancho del país; puesto que han sido muy variable; lo que sí se puede decir que las más importantes acontecidas en los entornos de la Zona Metropolitana de Saltillo sí se encuentran entre las que marcan una tendencia en los entornos de las ciudades más industrializadas. Entre las más destacables se encuentra el acaparamiento de la tierra a través de la compra-venta de terrenos ejidales, facilitadas por el tráfico de influencias de agentes inmobiliarios con información privilegiada, bien capitalizados y con relaciones económicas y familiares muy estrechas con funcionarios de los gobiernos municipales y estatal. Con las enormes ventajas que les da su colusión con actores con poder económico y político, estos personajes han tenido manga ancha para elegir extensas áreas potencialmente adecuadas, pagándolas a precios abusivos y luego especular con ellas: fraccionándolas, construyendo infraestructuras de servicios (en ocasiones ni siquiera con su propio capital sino con dinero público), a la par de obtener con facilidad los permisos de cambio de uso de suelo necesarios para ofrecerlos en reventa como terrenos industriales, con altos márgenes de ganancia.

Un ejemplo de este proceso de reprivatización de terrenos ejidales se encuentra al sur, por la salida a Zacatecas, que abarcó varios ejidos e hizo posible iniciar la construcción de la Zona Industrial de Derramadero (Imagen Google Earth 3); cuyo nombre lo retoma de la conformación orográfica que domina el paisaje ecológico local, que recibe el nombre de Cañón de Derramadero.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Este autor considera que la elección de la fecha conlleva la intencionalidad política de borrar de la memoria colectiva la fecha de la expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, mediante la cual se ordenaba la restitución y dotación de tierras, así como la procuración de justicia social a los pueblos y comunidades indígenas; es decir se sobrepuso la fecha del decreto neoliberal a la ley basada en el principio “La Tierra es de quien la trabaja”; como para remarcar el desquite o venganza de los defensores del pensamiento económico del *laissez-faire* sobre el ideal de justicia social que motivó el alzamiento campesino contra los dueños del capital en 1910.

<sup>135</sup> Si se aplican criterios técnicos el establecimiento de los límites del Cañón de Derramadero es diferente a si se aplican criterios socioculturales: en el primer supuesto podría afirmarse, basándose

### Imagen Google Earth 3. Zona Industrial de Derramadero <sup>136</sup>



Fuente: elaboración propia.

en las continuidades de la topografía de pendientes suaves, que el cañón atraviesa por el sur a casi todo del municipio de General Cepeda, hasta muy cerca de los límites con Parras de La Fuente (a la altura del poblado común de los ejidos Macuyú, Hacienda de Guadalupe, Guadalupe Alamos y Ampliación 2 de Abril); en el segundo supuesto, el del consenso local basado sobre todo en la tradición oral, el del consenso local basado sobre todo en la tradición oral, el lado poniente de su poligonal queda definido de manera un poco difusa en los alrededores de los límites municipales de Saltillo y General Cepeda, sobre un lomerío de baja altura que corre transversalmente de sur a norte entre la Sierra de La Casita y una sierra paralela, a la altura de los ejidos El Nogal y La Paz (que pertenecen al segundo de esos municipios); esto es, excluyendo al ejido El Jaralito, que se localiza en la otra vertiente del lomerío donde se asientan El Nogal y La Paz. En cualquiera de las dos definiciones mencionadas de los límites del Cañón de Derramadero, la cabecera de General Cepeda queda excluida, ya que se encuentra claramente separada del cañón por algunas lomas de mediana altura. Al sur, el Cañón de Derramadero queda delimitado por los respectivos parteaguas de la Sierra del Pino y la Sierra de La Casita; al norte por la Sierra de Palma Gorda; al oriente por las estribaciones de la Sierra de Zapalinamé, que no son transversales sino puntuales e incidentes ya que, desde lo alto de esta sierra, confluyen o se abren al Cañón de Derramadero las bocas de tres cañones: de Los Caballos, de Santa Fe y de El Recreo.

<sup>136</sup> En un determinado sitio del Cañón de Derramadero, del que toma su nombre esta zona industrial, se ubica el entronque de las Carreteras Federales 54 (tramo Saltillo-Zacatecas) y 57 (tramos Saltillo-San Luis Potosí) y la Carretera Estatal 105, que comunica con la cabecera municipal de General Cepeda, pasando al lado o muy cerca de una veintena de localidades rurales. Es atravesado también por la vía del ferrocarril Ciudad de México Nuevo Laredo, que a unos treinta kilómetros adelante, dentro de la ciudad de Saltillo, entronca con la vía Tampico-Monterrey-Torreón (González Galindo M.A., 2016).

La creación de la Zona Industrial de Derramadero implicó fraccionar terrenos que habían sido de agostadero para ajustarlos su tamaño a uno adecuado para venderse como predios industriales. Para ello se subdividieron terrenos con superficies de entre 2,000 y 4,000 hectáreas en lotes de tamaño variable<sup>137</sup>, con accesos pavimentados y provisión de los servicios de electricidad y de agua. Fue en terrenos de uso común ejidal<sup>138</sup> donde comenzó el proceso de privatización, impulsado por el incentivo de crear un espacio con todas las condiciones de comunicación y de suministro de servicios básicos requeridos para instalar una ensambladora de automóviles, vista como “empresa-ancha” para atraer a otras fábricas cuya producción final está orientada a proveer de insumos integrados a la cadena de producción automotriz.

En la Imagen Google Earth 3 puede observarse claramente una especie de triángulo de terrenos que han sido desprovistos de su vegetación original y aplanados, cuyos vértices de su base son los poblados San Juan de La Vaquería al poniente y Agua Nueva al Sureste (denotados con sendas elipsoides) y su vértice norte el poblado La Encantada (sin nombre en el mapa fuente [Google Maps] y denotado con un rectángulo). Hacia el poniente, casi colindando con este último poblado, se localizan dos plantas armadoras Daimler-Chrysler y un conjunto de fabricas de proveedores (señaladas con una flecha). Entre San Juan de La Vaquería y el entronque de las carreteras a General Cepeda y Zacatecas se encuentra el poblado Providencia, plenamente incorporado dentro de la zona industrial. Como una referencia adicional importante se destaca que, en el ángulo superior derecho de este mapa, se puede localizar el campus de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que marca la entrada a la ciudad de Saltillo; un poco al sur de este *campus* se encuentra el ejido La Angostura, que también se considera importante de mencionar, en la medida que sus antiguos terrenos de uso común también han sido vendidos por los hoy exejidatarios a empresas constructoras y de bienes raíces, para su habilitación para uso industrial.

La misma Imagen, vista desde una perspectiva paisajística, muestra también de manera clara la transformación del paisaje rural original. Esto es, que como ya se denotó en párrafos anteriores, los terrenos privatizados o reprivatizados, previo a su reventa a empresas industriales, por intermediación de empresas constructoras y de bienes, han pasado por la fragmentación de la tenencia de la tierra y por la modificación topográfica; después de su venta, por la edificación de naves industriales.

Lejos van quedando los días cuando el paisaje del Cañón de Derramadero estaba dominado en sus fondos semi-planos por campos cerealeros (trigo/avena en el ciclo otoño-invierno y maíz en el ciclo primavera-verano). La escasa presencia de cercos determinaba una relativa

---

<sup>137</sup> Las superficies de esos lotes dependen, desde luego, del tipo de fábricas que se proyectan instalar; pero hablando de las del subsector de proveedores de la industrial automotriz, el concepto más arraigado como proyecto de negocios es el de ofrecerlos en parques industriales; lo cual se traduce en tamaños mínimos de unas cinco hectáreas, pero en ocasiones de más de cien.

<sup>138</sup> Los terrenos del Ejido Agua Nueva, que hasta ese momento tenían la cobertura legal del usufructo comunitario y eran utilizados como agostaderos fueron los primeros en entrar al derecho pleno, para ser fraccionados y poder ser enajenados.

libertad de tránsito, especialmente para los pastores de caprinos y algunos pocos ovinos, lo cual permitía que la ganadería se realizara todavía a la manera tradicional; es decir, llevando a los animales a pastorear a los lugares donde aprovecharan los mejores pastizales, rastrojos agrícolas o agostadero, dependiendo de las características de humedad que se presentaran en cada la estación del año y respetando acuerdos no escritos, establecidos entre los campesinos de un mismo ejido o de ejidos vecinos, para que las reses no afectaran a los cultivos.

Tal paisaje rural era todavía posible apreciar hasta principios de los años noventa, pero tras la privatización de las tierras comunales de los ejidos, sus *tesseras* agrícolas y naturales de manera veloz van siendo transformadas para perfilarse cada vez más antropizadas, dominados por construcciones fabriles.

Tras las descripciones anteriores puede deducirse que la tercera gran fragmentación del territorio en el Sureste de Coahuila, especialmente en los entornos metropolitanos de Saltillo fue la consecuencia más tangible e inmediata del Decreto del 6 de enero de 1992. Sin lugar a dudas, se puede afirmar que se trató de un momento histórico trascendental, puesto que a partir del mismo se objetivaron las condiciones jurídicas para abrir paso a la tercera gran fragmentación del territorio.

Esa fragmentación del territorio se tradujo en una fragmentación del paisaje ecológico<sup>139</sup>, que al perder su estructura y fisiología ecosistémica original, desestabilizó las formas de uso humano de sus componentes; es decir que, desde un punto de vista socioambiental, la alteración que genera la desintegración paisajística altera de manera drástica los flujos de materia y energía de los ecosistemas originarios, afectando con ello las relaciones de producción que mantenían los actores locales tanto con los componentes del paisaje (i.e. las de sus campesinos con la tierra y con el agua), como consigo mismos y con el exterior.

Por lo anterior, no se considera aventurado afirmar que el origen de la fragmentación del paisaje puede ubicarse en la formalidad jurídica, que fue reorientada a desplazar al espíritu que tenía la antigua ley, que era la de concebir a la tierra ejidal y al agua como bien común, a cambio de imponer el espíritu de la propiedad privada, por la vía de su mercantilización de la tierra y del agua.

#### **5.4. Fragmentaciones socioambientales**

Retomando una aproximación conceptual naturalista, resulta destacable mencionar aquí que en un paisaje ecológico el tamaño y diversidad de los parches del paisaje o *tesseras* (unidades mínimas paisajísticas), así como de las unidades ambientales (conjunto de

---

<sup>139</sup> Las *fragmentaciones paisajísticas* pueden ser percibidas visualmente por un espectador como *parches* o *tesseras*, en los que cada parche posee una estructura diferente a la de sus vecinos inmediatos. Los expertos llaman *mosaico paisajístico* a la estructura formada por el conjunto de parches, en alusión a los diseños artísticos en los que la imagen lograda está conformada por multitud de pequeños fragmentos de diferente color (tradicionalmente de vidrio, llamados *tesseras*, en los mosaicos venecianos). Otros autores las denominan *unidades ambientales*.

*tesseras*) son indicadores del grado de intervención humana en el paisaje natural, por lo que analizando la calidad de sus componentes en el mosaico paisajístico éste puede definirse como más natural o más antropizado. Se trata en realidad de un proceso dialéctico, puesto que, de igual manera, las alteraciones al paisaje ecológico reconfiguran inevitablemente las relaciones que hasta entonces han mantenido los seres humanos con la naturaleza; esto es, que las transforman estructural y fisiológicamente, pues al cambiar tanto a la calidad como a la cantidad de las unidades paisajísticas terminan afectando la disponibilidad y acceso<sup>140</sup> que a ellas han tenido los actores locales en el pasado.

Entre más fragmentado se encuentra un paisaje serán menores los tamaños sus unidades ambientales, pero mayores las diferencias morfológicas entre ellas; por lo cual un paisaje homogéneo tiene pocas *tesseras*, y en uno heterogéneo hay muchas de ellas, que son diferentes entre sí. Pero hablar de homogeneidad paisajística no implica necesariamente hablar de mayor biodiversidad, ya que ésta depende más del bioma que se trate<sup>141</sup>. Llevadas estas consideraciones a un análisis especializado, arroja resultados útiles para evaluar el estado de salud de un paisaje<sup>142</sup>.

Los datos técnicos anteriores son importantes para el análisis socioambiental porque apoyan a fundamentar las explicaciones que se van dando sobre la magnitud de los efectos que la fragmentación territorial genera en las relaciones sociedad-naturaleza; en nuestro caso, en los entornos de la Zona Metropolitana de Saltillo. Como se argumenta en el apartado previo de este capítulo, en esa zona estos procesos están ligados en específico a la privatización de antiguos terrenos ejidales; sin embargo, se considera importante no dejar de subrayar que no debe asumirse, de ninguna forma, que esta fragmentación territorial sea el único e inexorable proceso o “destino” para las zonas rurales tras los cambios al marco jurídico realizados en 1992. No, se trata tan sólo de una entre una gama de reconfiguraciones del territorio y, como en las demás, responde a causas, circunstancias y condiciones específicas

---

<sup>140</sup> La disponibilidad y la accesibilidad que un determinado componente del paisaje ecológico tiene para los seres vivos depende, entre otros factores, de su abundancia y de su estado de conservación. En un paisaje fragmentado, cada unidad ambiental posee características específicas, diferentes a las de las unidades ambientales vecinas, con lo cual se forma un gradiente, que a veces sutil y a veces muy notable o brusco, que determina una disponibilidad y una accesibilidad variable de los componentes naturales presentes en cada parche o fragmento (como puede ser el caso del suelo o el agua). Al final, la abundancia y el estado de conservación de los componentes del paisaje ecológico se constituyen en factores limitantes o propiciadores de la sobrevivencia de un tipo más o menos específico de biota, natural o cultivada/criada; esto es, se constituyen en condicionantes ambientales y al mismo tiempo condicionantes económicos, pues si de origen son parte integral de un ecosistema o un paisaje, cuando el ser humano entra en escena, los usa como insumos de sus sistemas de producción.

<sup>141</sup> Esto es, que puede tenerse un paisaje homogéneo con poca biodiversidad, como en la tundra; o con alta biodiversidad, como en un bosque tropical.

<sup>142</sup> Existe una abundante bibliografía sobre estos temas, pero una lectura sugerida al lector poco familiarizado con ellos, puede encontrarse en la parte introductoria del artículo de Martí y Pintó (2011), donde de manera didáctica se explica la trascendencia que tienen los mosaicos paisajísticos en la vida de los actores locales.

de su entorno inmediato. Dicho de otra forma, es consecuencia de presiones ejercidas por los intereses y fuerzas económicas y políticas que desde los entes de poder actúan en la periferia metropolitana y en otros lugares de la región.

De acuerdo a la experiencia cursada durante esta investigación se puede afirmar que un factor muy influyente para que los multicitados cambios jurídicos deriven en privatización y fragmentación territorial es la proximidad a la ciudad. Esta apreciación se ha consolidado a partir de considerar que dentro de la misma Región Sureste de Coahuila existen zonas alejadas de los centros urbanos, en las que el ejido se ha mantenido como el régimen de tenencia de la tierra predominante; en algunos incluso es posible reconocer actores en franca resistencia a la privatización. También se ha tenido oportunidad de constatar la existencia de zonas en las que el proceso de privatización ha tenido el efecto de reconcentrar parcelas en pocas manos<sup>143</sup> o ejidos en los que de manera simultánea ocurren fragmentaciones y reconcentraciones de propiedad o derecho al usufructo<sup>144</sup>. Comprender estas consecuencias diversas pasa primero por reconocer que para concretar con éxito la venta de la tierra no basta con que exista el deseo de venderla, sino que es indispensable que “la mercancía” que se oferta sea atractiva a los potenciales compradores<sup>145</sup>; lo anterior considerando, también, que lo que resulta atractivo para unos, puede desalentar a otros<sup>146</sup>. Dicho de manera sintética: que la venta de un terreno depende de la demanda del mercado.

Hasta que se efectúa la compra-venta es que se termina de definir la manera como se transforma al territorio; es decir, que dependiendo de las fuerzas e intereses económicos que llevaron a la transacción mercantil es que el territorio mantiene su integridad o se concentra o se fragmenta. Especialmente en el último caso se provoca un impacto que

---

<sup>143</sup> Un ejemplo que ilustra un caso de reconcentración de la tenencia de la tierra, es decir una consecuencia opuesta a la fragmentación territorial, es el del ejido El Coyote, que se encuentra dentro de la misma Región Sureste, pero en una serranía alejada de la ZMS pero dentro del municipio de Ramos Arizpe. Dijeron unos ejidatarios a quien estas líneas escribe que una sola persona compró todas las parcelas del ejido, sin dificultades ni oposición para hacerlo, puesto que ya para los años noventa del siglo pasado había sido prácticamente abandonado.

<sup>144</sup> En ejidos que no son tan cercanos a Saltillo, pero tampoco muy alejados (como pueden ser algunos de la Sierra de Zapalinamé o los que se encuentran a lo largo de la carretera Saltillo-Zacatecas), es posible encontrar tendencias que van en sentidos opuestos: por un lado la fragmentación y por contraparte la nueva acumulación de la tierra. Esto porque en el mismo ejido hay quien reparte su parcela entre sus hijos y también quien compra tierras a otros ejidatarios o hace usufructo de las parcelas de familiares ausentes.

<sup>145</sup> Por dar un ejemplo, si fuera la pretensión vender un terreno de agostadero para ser fraccionado en lotes para uso industrial, debe cumplir con requisitos mínimos, tales como una buena localización con conectividad, una topografía convenientemente plana, disponibilidad de servicios de electricidad y agua potable, facilidad para encontrar insumos y mano de obra calificada y/o no calificada asequible en los mercados cercanos.

<sup>146</sup> No resulta el mismo interés el que tiene un comprador por un terreno industrial que el de un terreno comercial o residencial; tampoco dentro del mismo sector industrial, son diferentes las necesidades para instalar una industria automotriz que una de alimentos. En los casos en los que ha habido concentración de parcelas, esta puede derivarse para hacer con ellas un uso del sector agrícola o, como se ha dado en el Sureste de Coahuila, para extraer minerales.

desbalancea los equilibrios logrados en los flujos de materia y energía. Pero tales procesos no afectan solamente a las facetas paisajísticas en las que se realizaban las antiguas prácticas de producción agropecuaria; también impactan a las pequeñas zonas urbanizadas de los poblados rurales y entre más cercanos se encuentren éstos a la ciudad experimentan con más intensidad una transformación<sup>147</sup>.

Para el caso de la Zona Industrial de Derramadero, localizada en la periferia sur de la ZMS, la carretera estatal 105 Saltillo-General Cepeda representa la infraestructura clave porque proporciona la conectividad<sup>148</sup> que hizo viable la construcción de la primera armadora automotriz o empresa ancla; puesto que fue precisamente en el cruce que forman esa vía y la carretera federal 54 y la vía del ferrocarril Monterrey-Ciudad de México donde los directivos de la empresa aprobaron su instalación. En ese sentido, se puede afirmar que ese cruce debe ser considerado como el núcleo original de la Zona Industrial de Derramadero; la cual, en menos de dos décadas transformó de manera profunda el hábitat humano y el modo de vida rural tradicional.

Debe aclararse que, no obstante, la transformación del modo de vida tradicional campesino por efecto de la industrialización no se origina, al menos por el lado sur de Saltillo, a partir de instalarse la planta automotriz; pero sí se acelera y profundiza a partir de ese momento. Esto porque a lo largo de todo el Siglo XX siempre hubo campesinos jóvenes que migraban a la ciudad, entonces pequeña pero ya con un sector industrial incipiente. Los poblados ejidales no se encontraban en su vecindad inmediata, como hoy, pero ya había motivaciones tanto laborales como de educación para que algunos solamente regresaran el fin de semana a los ejidos. Esto es que, de acuerdo a algunos ejidatarios viejos, desde los años cincuenta ya se daba ese ir y venir a los ejidos para ir a trabajar en instalaciones industriales, como fue hacia la extinta fábrica de vinos El Álamo, ubicada en los alrededores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que en ese entonces todavía se encontraba muy lejos de la zona urbana.

---

<sup>147</sup> Es así, por ejemplo que, al cabo de unos pocos años después de que inició la expansión industrial, los poblados de origen ejidal que se encuentran en el Cañón de Derramadero han terminado de perder su tradicional fisonomía rural y así: donde antes predominaban casas de adobe, hoy día se erigen todo tipo de construcciones industriales; los solares que las rodeaban son hoy patios de maniobras; las pequeñas tienditas rurales van siendo desplazadas por las “tiendas de conveniencia”. Incluso se han construido hoteles de varios niveles, como en la zona central del poblado Providencia, cuyas instalaciones están diseñadas para servir, al mismo tiempo, como dormitorio y como oficina; para personal enviado por empresas foráneas a realizar trabajos de administración, asesoría técnica y/o supervisión a sus sucursales.

<sup>148</sup> Se trata de una vía que ha tenido un papel importante en el proceso de poblamiento del Sureste de Coahuila, puesto que existen registros de su existencia desde El Virreinato, cuando era una de las vías internas que comunicaron las haciendas del Marquesado de Aguayo; durante el Siglo XIX mantuvieron ese papel dentro del Latifundio Sánchez Navarro y durante El Porfiriato se construyó una vía férrea que comunicó Saltillo con Real de Catorce, S.L.P., cuyo terraplén, o un tramo de la misma, fue aprovechado para construir esta carretera, cuando se desmantelaron las vías a fines de los años setentas del Siglo XX.



Con lo anterior se quiere ilustrar que los campesinos del Cañon de Derramadero tuvieron un contacto casi permanente con la ciudad. Sin querer decir con ello que hayan logrado independendizarse del tallado y la venta del ixtle como actividad económica central, es cierto que desde la fundación de sus ejidos la ciudad les ofreció alternativas de sobrevivencia. Los que sí estuvieron siempre aislados por ese lado sur de la ciudad fueron los ejidos que perteneciendo al mismo municipio de Saltillo se ubican cerca de la línea limítrofe con el estado de Zacatecas; desde luego también los de General Cepeda. Como quiera que sea, la influencia de esas relaciones urbano-rurales no alcanzó a cambiar sustancialmente el modo de vida campesino de los ejidos del Cañon de Derramadero, por lo que con certidumbre se puede afirmar que la gran transformación social, económica y social de los ejidos de dicho cañón inició en el último lustro del Siglo XX, con la instalación de las primeras fábricas del sector automotriz.

El solo hecho de construir la zona industrial requirió de cuadrillas de albañiles al por mayor, por lo que numerosos contingentes de campesinos no tardaron de incorporarse a ellas; luego, en el arranque de las operaciones, a los mismos se les ofertaron empleos como obreros no especializados y con el correr de los años muchas oportunidades para ir escalando jerarquías laborales al interior de las empresas, a cambio de demostrar capacidad para integrarse a la fuerza de trabajo requerido por el proceso manufacturero automotriz. Pero desarrollar esas capacidades implicó tener disposición para adaptar su vida social y familiar a los ritmos de trabajo marcados por sus patrones; esto es, un constante ir y venir de la fábrica a la casa familiar, rolar turnos de manera permanente, cubrir horas extras en tiempos de demanda, aceptar paros técnicos en tiempos de crisis, etc. Todos ellos factores que fueron incidiendo de manera importante para transformar las localidades rurales no solamente en su fisonomía, sino también en su funcionalidad, en muchos casos pasando de ser espacios familiares campesinos a ser “barrios dormitorio” para obreros<sup>149</sup>.

Las mujeres tampoco han quedado fuera de esta transformación económica, ya que también han pasado por el mismo proceso de separación de los roles que la tradición les asignaba, para incorporarse al trabajo asalariado en las fábricas. Con desventajas evidentes respecto a los hombres, ya que en el contexto de la cultura patriarcal que sigue imperando en las localidades rurales les resulta más difícil que a ellos adquirir la capacitación exigida para ascender en los organigramas empresariales; no por falta de capacidad, desde luego, sino porque es muy común que sean marginadas a las áreas de trabajo menos remunerado. Lo anterior, sin considerar que son muy vulnerables al acoso laboral y sexual, derivado de lo cual muchas de ellas pasan a formar parte del sector de madres solteras, al poco tiempo de emplearse en la industria. Dado tal caso, que no es raro, lo común es que su situación personal desemboque en dificultades que trastornan su estructura y funcionalidad familiar, ya que las necesidades de manutención de los hijos y su escaso grado de profesionalización llevan a quedar encerradas en un círculo vicioso a la mayoría de ellas, pues se ven doblemente obligadas a seguir trabajando en las fábricas, sometiéndose a realizar labores

---

<sup>149</sup> Esto es, dejan de cumplir su función social de espacio para la reproducción social del modo de vida campesina, enajenándose a las necesidades económicas del modo de producción capitalista.

con salarios son bajos y otras desventajas, como rotar turnos; teniendo que encargar a los hijos con sus padres o con otras mujeres.

Estamos hablando entonces de que otra de las fragmentaciones que se encuentran en curso en el universo de estudio es el de la familia, basamento de la unidad económica campesina. Además de las mujeres, entre los más afectados por esta desestructuración se encuentran los campesinos ancianos, que ya no tienen la fuerza suficiente para cultivar por sí mismos la tierra ni para llevar a pastar al monte las cabras, pero que suelen no irse del rancho porque no quieren cambiar su forma de vida; los que corren con más suerte tienen algún hijo avecinado en el poblado, del cual reciben cobijo y sustento para llevar una vida relativamente digna; sin embargo, hay otros cuyos hijos emigraron de forma definitiva, por lo que se enfrentan a serias dificultades de sobrevivencia, muchas veces en la miseria.

### **5.5. Fragmentaciones socioculturales**

La ausencia de las y los jóvenes, sea por unas horas al día, algunos días de la semana o por migración definitiva, se convierte en un factor que desestabiliza a la familia y a los sistemas de producción tradicionales. Al dejar sin relevo generacional a los campesinos viejos, que ya no tienen el vigor suficiente para superar los momentos del ciclo agrícola en los que el esfuerzo de trabajo requerido aplicar es grande, la falta de jóvenes provoca el abandono de las parcelas y se pierde el interés por efectuar oficios considerados aburridos y poco remunerados, como el de pastor que es crucial para la producción pecuaria.

Por su parte, las transacciones de compra-venta pocas veces se realizan entre actores locales, sino que se consuma generalmente con actores externos, lo cual trae en consecuencia la pérdida de espacios de convivencia y cooperación comunitaria para las actividades productivas. Los cercamientos ligados al fraccionamiento de los agostaderos obstaculizan el tránsito de personas para ir a las labores y el acceso de los animales a los abrevaderos; no siendo raro los casos en los que los nuevos propietarios bloquean o desvían las escorrentías, sea con movimientos de tierras realizados con fines de construcción o porque las consideran parte de su derecho privado. De esta forma, los cercamientos propician el sobrepastoreo de los sitios en los que queda confinado el ganado, elevando sus costos de manutención, por tanto afectando su rentabilidad, al tener que surtirlo de agua y forraje.

Atrás de los cambios al paisaje local se encuentran, a estas alturas ya nada ocultas, las transformaciones acaecidas en los valores y las estructuras de sus sociedades tradicionales. La fragmentación de los solares de los poblados de origen ejidal traen en consecuencia la pérdida de los espacios familiares en los que se recreaba y reproducía la cultura tradicional campesina; la irrupción de la industria y de la concepción mercantilista de la tierra y del agua llega acompañada de una fuerte presión para la transculturización, que termina por dismantelar las formas mismas que tienen los actores locales de apreciar la/su vida, la de sus familias, la de otros campesinos y la de los no campesinos.

Así, la descampesinización<sup>150</sup> indica *otro tipo de fragmentación, que es la cultural* y se puede considerar un hecho consumado en lo que fueron los poblados ejidales que hoy día han sido absorbidos en su totalidad dentro de la Zona Industrial: Agua Nueva, La Encantada, La Angostura y Providencia. También puede considerarse en otros ejidos cercanos como un hecho en vías de consumarse en el corto plazo: Jagüey de Ferniza, Santa Fe de Los Linderos, San José de La Joya, San Juan de La Vaquería y Derramadero; ya que aunque sus poblados todavía no se han fusionado físicamente a la Zona Industrial, su economía se encuentran funcionalmente articulada a ella.

## Conclusión

El eje articulador de los temas tratados en el presente capítulo es el de las fragmentaciones territoriales, de las cuáles la región estudiada ha experimentado tres muy grandes: la de 1867, la de 1936 y la de 1992; cada una de ellas ligada a cambios jurídicos (constitucionales en las dos últimas ocasiones) que fueron realizados con la intención de generar una redistribución de la propiedad de la tierra y con ello la de trastocar los equilibrios de poder que sustentaban una cierta forma de apropiación del territorio.

En los tiempos del Marquesado de Aguayo y de Los Sánchez Navarro las decisiones relacionadas con el uso de las escorrentías recaían en un solo dueño, pero al ser afectado su latifundio por la confiscación decretada por Juárez en 1867, se le fraccionó en 17 haciendas; reconfigurando con ello la estructura de la tenencia de la tierra y creando nuevos equilibrios de poder regional. Una consecuencia que estos eventos tuvieron para el manejo del agua es que pasaron a ser demasiados los involucrados en la toma de decisiones; de ahí que, para evitar futuros conflictos entre vecinos, los hacendados se vieron forzados a dialogar entre ellos y consensuar las reglas que les aseguraran que a nadie le faltara el abasto de agua.

Pero el desmembramiento del latifundio de 1867 fue solamente la primera de dos grandes fragmentaciones del territorio regional estudiado, pues 70 años después las haciendas en las que fue fraccionado fueron afectadas por el reparto agrario, que como instrumento legal aplicado por el Estado abrió una nueva etapa en la historia de la estructura de la tenencia de la tierra: la del minifundismo (tanto privado como ejidal. Con el reparto agrario los terrenos de cada hacienda afectada fueron fraccionados para dotar a cientos de campesinos; lo cual implicó la atomización de la toma de decisiones sobre los aspectos relativos a la gestión del territorio; debido a ello, esa segunda fragmentación territorial generó impactos sociales, económicos y políticos mucho más profundos que la primera.

Con todo, la evidencia bibliográfica recabada no permite afirmar que ninguna de las dos fragmentaciones señaladas hayan afectado sustancialmente a las formas de gobernanza del agua; en todo caso, ha permitido reconocer que tras la primera fragmentación se llevaron a

---

<sup>150</sup> Una investigación enfocada especialmente a tratar el tema de la descampesinización y otros procesos de transformación socioambiental, correlativos a la industrialización en terrenos que eran ejidales localizados en el Cañón de Derramadero, fue realizada por este autor (Angel Carrillo, 2009).

tribunales algunas controversias por el acceso a las escorrentías; lo cual, a pesar de tratarse de casos excepcionales, no deja de ser significativo, en la medida de que al involucrar la mediación de los tribunales del Estado se desplazó por primera vez a los acuerdos para el uso mancomunado de las escorrentías como forma de mediación tradicional para resolver los conflictos locales por el agua.

Recuperando la hipótesis formulada por Juan Gamboa, un ejidatario de Jalpa, a la luz del análisis realizado en esta investigación, que incluyó una revisión en los documentos archivados en el Registro Agrario Nacional y visitas de campo, se ha llegado a la conclusión de que durante el proceso de fraccionamiento de los terrenos de las haciendas, entre las prisas y la negligencia y/o la ignorancia de muchos funcionarios, el Estado no tuvo la capacidad de al menos informar sobre la importancia del sistema hidrotécnico hacendario que también se les entregaba en fracciones; con lo cual los ejidatarios proimordiales no tuvieron la oportunidad de tomar conciencia sobre la importancia de conservarlo para beneficio económico de ellos mismos, así como de instituir un organismo orientado a administrar la gestión de las escorrentías a nivel de cuenca; es decir, a sentar las condiciones mínimas para mantenerlo funcional, en su dimensión integral. Debido a ello, primero perdieron de vista la utilidad de ese eficiente sistema de manejo de escorrentías, después de lo cual lo descuidaron y finalmente contribuyeron a destruirlo, perdiendo con ello no solamente un patrimonio invaluable, sino echando por la borda todo el conocimiento tecnológico acumulado durante siglos.

Pero de la revisión bibliográfica también se encontró evidencia documental de que el Estado estuvo sujeto a presiones para favorecer los intereses del capital internacional y a los del gobierno estadounidense, que demandaban la producción de ixtle; lo cual ha llevado a plantear aquí la duda de si la creación de La Forestal F.C.L. y los Decretos Presidenciales de establecimiento de vedas a los acuíferos subterráneos para la Región Sureste de Coahuila no tuvieron en realidad otra prioridad mayor en sus criterios que los políticos; es decir, fortalecer al partido de Estado y quitarse las presiones de los Estados Unidos cumpliéndole la demanda de fibras duras generadas en épocas de guerra.

El caso es que, al cierre del siglo XX, las consecuencias netas de esa mezcla de segunda fragmentación del territorio e intervención del Estado en la economía, pueden sintetizarse diciendo que indujo a mantener el sistema de vasallaje del campesino empobrecido, impuesto a sus ancestros durante la Época Hacendaria. Y aunque tuvo impactos más profundos que los que generó la primera fragmentación, éstos no fueron lo suficientemente drásticos como para generar la necesidad de diseñar nuevas formas de organización administrativa de manejo mancomunado del agua; bondad que puede atribuirse a que la Constitución Mexicana, en su texto original de 1917, mantuvo para el agua la noción inspirada en el Derecho Romano de *bien común*, concepto que por otro lado estaba enraizado profundamente en la psique de los actores locales. Es decir que tanto el marco jurídico como los valores de la sociedad coincidían en reconocer al agua como un bien natural destinado a aprovecharse colectivamente, no de manera individual.

Pero existe una tercera gran fragmentación, que se encuentra actualmente en curso; que se derivó de reformas realizadas en 1992 al Artículo 27 Constitucional. Misma que ha traído en consecuencia impactos drásticos para los actores locales y para la economía regional; pues aunque tales cambios a la legislación lograron generar procesos exitosos de modernización económica y tecnológica en algunas partes del Sureste de Coahuila, lo ha sido a costa de generar altísimos costos sociales y ambientales.

Esos cambios al marco jurídico abrieron los cauces legales para reprivatizar las tierras y aguas ejidales; lo cual en la práctica se ha traducido en la subdivisión de las áreas de uso común para su venta a diferentes compradores; es decir, representa otra fragmentación del territorio, que se refleja en múltiples dimensiones, de las cuáles se han destacado la paisajística, la socioambiental y la sociocultural. Tres formas de fragmentación íntimamente interrelacionadas que han desestabilizado la vida de los actores locales en una magnitud mucho mayor que los dos anteriores fragmentaciones. De ahí que, para poder formarse un marco comprensivo de los conflictos por el agua abarcados en la presente investigación, sea imprescindible tenerlas presentes como factores determinantes de los procesos sociales que actualmente se encuentran en curso y tienen que ver con el acceso y uso del agua.

El caso de las fragmentaciones paisajísticas implica el desplazamiento de los paisajes naturales por los paisajes antropizados, lo cual refiere a la transformación de los ambientes de producción y a las actividades productivas; lo que termina dando al paisaje un aspecto de mosaico, que es a lo que precisamente se le llama un paisaje fragmentado, que se convierte en un factor que conlleva a las fragmentaciones socioambiental y sociocultural, puesto que implica la desestabilización de los ciclos ecológicos de materia y energía.

La fragmentación del paisaje local en la región de estudio está relacionado con el desplazamiento de los sistemas de producción tradicionales por sistemas de producción modernos; lo cual ha desencadenado un proceso de deterioro la cultura tradicional que conlleva al rompimiento de los valores comunitarios. La incorporación de la fuerza de trabajo de las nuevas generaciones a la industria es un proceso social que no distingue género, pero casi siempre conlleva mayores desventajas para las mujeres; también es el factor principal de la migración y del abandono de las parcelas. Cerrándose de esta suerte un círculo vicioso que induce a la venta de la tierra e indirectamente con ella a la renuncia a los derechos de acceso al agua, pues las tierras abandonadas son vistas con menor interés por las nuevas generaciones; lo cual los motiva a venderlas y en demasiadas ocasiones a malbaratar estos bienes a empresas inmobiliarias, cuyos dueños forman parte de una oligarquía que acapara tierras y concesiones de agua, a como dé lugar.

## **CAPÍTULO 6. COMPLEJIDAD DEL ANÁLISIS SOCIOAMBIENTAL DEL DESPOJO DE LOS COMPONENTES DEL TERRITORIO**

Con todo y que tienen contrastes, los conflictos por el agua que fueron estudiados mediante la presente investigación trabajo tienen como rasgo común el hecho que tienen un grado importante de relación con el proceso global de acumulación de capital por desposesión (Harvey, 2005). Fase del capitalismo que tomó impulso en la región de estudio a partir de la contrarreforma agraria de 1992, que facilitó la expansión de la industria automotriz en la Región Sureste de Coahuila y con ello incrementó sustancialmente la demanda de tierra y agua.

En tal contexto y dado que se encuentran al centro de la Franja Sur de Coahuila, la presión para privatizar la tierra y el agua en los municipios de General Cepeda y Parras de La Fuente abrió dos vías o rutas principales: una de Oriente a Poniente que se instrumenta desde la zona metropolitana conformada en torno a la capital del estado y otra en sentido Poniente a Oriente, que lo hace desde la zona metropolitana conformada en torno a las ciudades conurbadas de Torreón (Coahuila) y Gómez Palacio (Durango); en este segundo caso generada por la expansión de la agroindustria.

La magnitud de los problemas derivados de este contexto no había alcanzado a concebirse por el investigador cuando realizó sus primeros acercamientos a las localidades estudiadas. Es por ello que en su propuesta original de investigación planteaba únicamente analizar los acuerdos y desacuerdos establecidos entre los ejidatarios de Jalpa para usar el agua almacenada en la Presa Jalpa<sup>151</sup>. Sin embargo, las entrevistas de campo pronto le hicieron saber que debería incluirse al ejido San Juan del Cohetero, puesto que Jalpa comparte con este vecino el agua que almacena esa presa. Del mismo modo, también se percató que la presencia de otras presas en partes altas del Arroyo San Miguel implicaban que su universo de trabajo se encontraba embuído en una cuenca hidrológica de grandes dimensiones; pero tuvo que desechar la posibilidad de ampliar su marco contextual de investigación siguiendo el mismo enfoque de analizar acuerdos y desacuerdos entre vecinos debido a las limitaciones de recursos y tiempo.

Con todo, el conocimiento del conjunto de presas erigidas sobre el Arroyo San Miguel<sup>152</sup>, tuvo trascendencia en la investigación, pues dio la base para perfeccionar el marco teórico,

---

<sup>151</sup> La idea era vincular ese tema con la ruptura de la institucionalidad tradicional para el uso de la tierra, estudiada años atrás por el mismo investigador en un ejido del Cañon de Derramadero (Angel Carrillo, 2009); pero debido a que en ese lugar las instituciones tradicionales han prácticamente desaparecido, tras veinte años de contrarreforma agraria, se optó por hacer la investigación en Jalpa, Mpio. de General Cepeda. Este ejido se localiza a una distancia de poco más de 100 Km de la Z.I.D., por lo que gracias a esa lejanía la identidad de sus habitantes conserva gran parte de sus rasgos tradicionales y se mantienen vigentes acuerdos ancestrales entre sus ejidatarios, para usar colectivamente el agua de la "Presa Jalpa", construída sobre el cauce del Arroyo San Miguel.

<sup>152</sup> El investigador reconoce que este conocimiento le fue transmitido íntegramente por el líder campesino Juan Gamboa, de quien se ha hecho referencia en varios apartados de este documento.

dado que algunas de ellas fueron construidas por la hacienda, lo que demostró que hubo otra forma de gobernanza del agua, anterior a la ejidal<sup>153</sup>, que había sido desplazada por el reparto agrario. Esto es, que el investigador se vio precisado a incorporar a su marco teórico la noción de que la gobernanza es dinámica y que se manifiesta no solamente en una *dimensión espacial* sino también en una *dimensión temporal*, por lo que la forma que adquiere no debe considerarse definitiva sino transitoria; dicho de otra forma: el investigador quedó prevenido de que el tipo de gobernanza del agua observable en Jalpa y San Juan del Cohetero debe enmarcarse exclusivamente bajo el régimen de tenencia ejidal<sup>154</sup>.

La *dimensión espacial o territorial* que el proyecto de investigación concibió originalmente como cobertura de los acuerdos entre los usuarios del agua de la Presa Jalpa abarca las partes media y alta de la cuenca, ya que ahí se asientan otros ejidos que captan y/o desvían parte de las escorrentías, impidiendo que lleguen a Jalpa. La noción de *dimensión temporal* facilita comprender que el reparto agrario marca un parteaguas histórico, ya que antes de este evento había instituciones locales para el manejo del agua que se extinguieron tras el mismo. Bajo la misma mirada, la contrarreforma agraria representa otro parteaguas en el que a partir de tal cambio jurídico se vuelven a generar condiciones propicias para el advenimiento de un nuevo cisma para la gobernanza del agua en el espacio rural.

El reconocimiento de la *dimensión temporal* que tiene la gobernanza del agua es importante también en la medida que permite analizar de mejor manera de la resiliencia de las redes institucionales tradicionales establecidas para proteger y regular el acceso a los bienes comunes; que para el presente estudio atañe a las capacidades que tienen o dejan de tener los actores locales para reconfigurar sus acuerdos y amoldarse (*de facto*) a las nuevas disposiciones impuestas (*de jure*) por el Estado

Cabe señalar que al norte San Juan del Cohetero colinda un ejido, con Noria de la Sabina, cuya dotación se ubica al otro lado de un lomerío, por lo que no comparten escorrentías superficiales<sup>155</sup>. Pese a que por dicha razón fisiográfica no tienen motivos para competir o para acordar usos comunes de ellas, la construcción un confinamiento de residuos industriales peligrosos en sus vecindades dio lugar a inquietudes compartidas por todos o casi todos los habitantes de General Cepeda, al darse a conocer el riesgo de contaminación de mantos acuíferos tanto subterráneos como superficiales, a partir de tal proyecto.

---

<sup>153</sup> Esta deducción planteó la posibilidad de realizar un análisis comparativo entre los acuerdos para el uso del agua en los ejidos y en la hacienda; siendo de esperar un marco de gobernanza del agua menos complejo en la última en la que se manifiestan una diversidad de opiniones, que no siempre son convergentes.

<sup>154</sup> Esto es, una gobernanza en la que la toma de decisiones pasa(ba) obligadamente por la Asamblea Ejidal, interviniendo muchos actores; diferente a la gobernanza que existía antes del reparto agrario, en la que el sistema de presas hacendario controlaba las escorrentías de toda la cuenca del Arroyo San Miguel y la toma de decisiones la centralizaba el hacendado o su mayordomo.

<sup>155</sup> De hecho, esos lomeríos representan el parteaguas del Arroyo San Miguel con el Arroyo Patos. Más aún, entre las Regiones Hidrológicas Cuencas Centrales del Norte (a las que pertenece el San Miguel) y la del Río Bravo (a la que pertenece el Patos).

Las inquietudes desembocaron en el desarrollo de un conflicto de dimensiones regionales, que por su magnitud amplió la perspectiva de trabajo de esta investigación, ya que incorporó al contexto que se estaba investigando la noción de que, a diferencia del caso del conflicto de la Presa Jalpa que se deriva de un proceso de *expansión extractivista* del agua, en el caso del conflicto de Noria de La Sabina ya no es la extracción sino la contaminación el eje del riesgo ambiental y del conflicto social; es decir, representa el salto a una nueva forma de afectación: la *expansión polutiva*<sup>156</sup>. Esto es, un tipo de afectación al agua con riesgos irreversibles para la estabilidad de los ecosistemas regionales, dada la naturaleza de los materiales involucrados puesto que se ha demostrado que los niveles piezométricos se elevan hasta a menos de 20 metros de profundidad en el predio contiguo a donde se construyó el confinamiento<sup>157</sup>; ya no se digan las gravísimas implicaciones para la salud de los seres vivos que viven en los alrededores.

Desde luego, las cuencas subterráneas tienen una dinámica diferente a las superficiales, por lo que solamente un estudio hidrológico podría determinar la magnitud potencial de la contaminación que se pudiera derivar de una infiltración de sustancias tóxicas al subsuelo; pero se considera importante destacar aquí que los ecosistemas cercanos al confinamiento son los que se encuentran en la cuenca del Arroyo Patos, que al confluir con el Río Santa Catarina y otros arroyos conforman la cuenca del Río San Juan, que atraviesa la Zona Megalopolitana de Monterrey antes de continuar su camino al Río Bravo.

## **6.1. De cómo la magnitud real de los conflictos por el agua obligaron a reconfigurar el marco teórico de la investigación**

En contraste con la Región La Laguna, donde existen registros de conflictos por el agua entre los actores locales, acontecidos desde los años setenta del Siglo XIX, en la Región Sureste de Coahuila este tipo de registros son muy escasos, incluso durante el Siglo XX<sup>158</sup>, en cuyas postrimerías apenas empezaron a visibilizarse públicamente con el bloqueo de las carreteras 54 y 57 por campesinos de varios ejidos del Cañón de Derramadero que se originó a partir de una inconformidad con el Sistema Municipal de Agua de Saltillo (SIMAS).

Cuando se presentó el protocolo original de esta investigación, esas movilizaciones sociales eran vistas como un evento independiente, ya que no resultaba evidente algún tipo de vinculación con el conflicto por el agua entre Jalpa y San Juan del Cohetero, que era el

---

<sup>156</sup> Puede encontrarse una explicación de las características de estos dos tipos de afectaciones en el apartado 6.9.1.

<sup>157</sup> . Véase, por ejemplo: RCG (2016) “No quieren el CIMARI” (<https://www.youtube.com/watch?v=37fqLDSuuiI>, revisado el 18/03/2023).

<sup>158</sup> Comparativamente a La Laguna, el Sureste de Coahuila es una región con disponibilidad de agua mucho más escasa; en ese sentido en este trabajo se ha planteado que fue a partir de esa circunstancia que se desarrolló el llamado sistema de producción ixtlero, que a pesar de sostenerse en la explotación de grandes contingentes de poblaciones campesinas pudo extenderse durante todo el siglo XX mediante el control económico y político, primero de las oligarquías rurales ligadas a los intereses transnacionales y después del Estado corporativizador post revolucionario.



centro de atención de dicho protocolo. Así las cosas, con visión todavía localista, hacia los mediados de 2015, la investigación involucraba únicamente a los usuarios de las escorrentías que llegan a la parte baja de la cuenca del Arroyo San Miguel, por lo que para estudiar las instituciones locales para manejar colectivamente los bienes comunes se proponía combinar el Enfoque del Actor de Norman Long (2007) con conceptos de la corriente económico institucionalista desarrollados por Elinor Ostrom (+) y su equipo; pero al mismo tiempo atendiendo con diligencia las opiniones que tienen los ejidatarios sobre su realidad y sobre las causas del conflicto<sup>159</sup>.

Pero apenas se habían reiniciado las actividades de investigación en los ejidos cuando se suscitó un evento imprevisto en terrenos vecinos a San Juan del Cohetero, que de manera drástica cambió el escenario de la investigación. A reserva de detallarlo en el apartado correspondiente, se sintetiza aquí diciendo que empresarios de Saltillo anunciaron su proyecto de construir un confinamiento de residuos industriales tóxicos en un terreno aledaño al ejido Noria de la Sabina; con lo cual se generaron manifestaciones de protesta cuando los habitantes de ese ejido se dieron cuenta de que habían sido engañados por el dueño de la empresa.

Se puede afirmar que a partir de la construcción del confinamiento de residuos tóxicos de Noria de La Sabina se inició una nueva etapa en la historia ecológica y del respeto a los derechos humanos<sup>160</sup> en Coahuila y quizá el Noreste de México; esto es, que hay un “antes” y un “después” de Noria de La Sabina. Un “antes” porque cuando no se había construido el confinamiento de sustancias químicas tóxicas las amenazas de deterioro físico a los cuerpos de agua subterráneos estaban focalizados en el abatimiento de sus volúmenes disponibles; pero hay un “después”, porque tras la puesta en funcionamiento del confinamiento se inició una etapa en la que se ha vuelto posible el riesgo de deterioro irreversible para los ecosistemas y para la salud de un número incuantificable de personas.

La revelación de la afectación potencial a los mantos freáticos trastocó la forma de concebir la problemática del agua en esta investigación, puesto que cuestionó a fondo el supuesto teórico de que el conflicto por las aguas de la Presa Jalpa era demasiado lejano a la Z.M.S.,

---

<sup>159</sup> Por ser un aspecto que se considera importante destacar, no se omite dejar asentado aquí que, adicionalmente a la aplicación de los enfoques con perfil más académico de Long N. (2007) y Ostrom E. (1990), se propuso incentivar el involucramiento de los actores locales, mediante la implementación de talleres participativos. Esto debido a que el investigador tiene plena convicción, reforzada tras la experiencia de enriquecimiento del marco teórico metodológico a partir de las primeras entrevistas, de la importancia de integrar a la investigación la visión y el conocimiento de las personas que viven en carne propia los procesos sociales estudiados.

<sup>160</sup> El Derecho Humano al Agua se encuentra consagrado en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al pie de su párrafo sexto señala que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

por lo que no podía ser afectado, al menos en el corto plazo, por los impactos generados por su industria. Sobre todo porque con el desencadenamiento de las acciones de protesta de los actores locales se abrieron las vías, tanto de la tradición oral como de la revisión documental, para enterarse que la experiencia de la movilización social para defender el agua no era nueva en el municipio y que muchos de los actores que ahora se incorporaban a la defensa del acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda ya habían salido a manifestarse, veinte años antes, para confrontar con el llamado Movimiento para la Defensa del Agua de la Sierra de La Casita, cuando la oligarquía saltillense intentó por primera vez apropiarse de los acuíferos subterráneos 0502-Derramadero y 0521-Salttillo Sur.

Ante tales revelaciones el investigador se cuestionó: *¿Se puede concebir que se encuentre completa una investigación sobre conflictos por el agua en General Cepeda, sabiendo que se está dejando fuera al mayor de ellos, tanto por su continuidad durante dos como por la cantidad de actores involucrados?*

Se trató de un “golpe de la realidad”, que condujo al investigador a plantearse tomar una de dos opciones: i) mantenerse investigando como una arena *micro* el conflicto por las aguas de la Presa Jalpa, privilegiando con ello sus intereses personales a pesar de tener la certeza de realizar un estudio reduccionista; ii) modificar la propuesta de investigación para adaptarla a las inquietudes prioritarias de los actores locales y ser congruente con su motivación de realizar una investigación útil a ellos. Optó por la segunda y con ella ampliar los objetivos de investigación y reconfigurar su marco teórico metodológico.

## **6.2. Reconfiguraciones a la investigación y Teoría Fundamentada**

El apartado anterior alerta al lector sobre cómo el proceso de investigación fue marcando la pauta para ampliar una secuencia de cambios que al acumularse terminaron reconfigurando de manera sustancial el marco teórico original del proyecto; así, a partir de la información obtenida en las entrevistas iniciales redimensionó el conflicto planteado originalmente para estudiar; después, identificando a los actores movilizados que también estuvieron presentes en otro conflicto por el agua acontecido veinte años antes en el mismo municipio de General Cepeda; lo cual conllevó a comprender que también se estaba observando la reaparición del mismo grupo de actores externos que en aquellos años intentaron apropiarse del agua de la Sierra de La Casita; esto es, la misma colusión de políticos y empresarios saltillenses, unidos por intereses económicos comunes en la Zona Industrial de Derramadero.

El conocimiento de esos antecedentes históricos esclareció que las contiendas por el agua observadas se insertan dentro del proceso de globalización de la industria automotriz que marca la dinámica económica del sureste de Coahuila. Es decir, que al llegar a esta primera conclusión tuvo que admitir que la perspectiva inicial del conflicto estudiado había dado un giro de 180 grados.

Respecto a ese giro, el autor de estas líneas considera importante precisar que si bien al haber realizado cambios en un punto intermedio de la investigación se expuso a ser cuestionado por el aparente cambio de tema, como defensa puede argumentar a su favor

que lo hizo alineándose al argumento central esgrimido por Corbin & Strauss (2008) al formular su Teoría Fundamentada<sup>161</sup> (TF): que el investigador no puede escapar a su propia subjetividad, que no es otra cosa que un producto de su historial personal y académico; por lo cual debe estar abierto a modificar sus postulados iniciales a partir de conocer, de viva voz de ellos, las opiniones que tienen los sujetos afectados de la problemática que como académico pretende estudiar.

Mediante la TF el investigador analiza la semántica del lenguaje<sup>162</sup> que usan los actores entrevistados cuando se refieren a sus problemas más sentidos, buscando detectar “qué” o “cuál” es la problemática que a ellos les interesa resolver prioritariamente. Con esa misma motivación busca empatizar con ellos respecto a las consecuencias que desde su perspectiva de afectados preveen que se derivarán, de mantenerse las tendencias del conflicto o problema; lo anterior para enfocar su atención hacia ese “qué se debe investigar”.

De los tres enfoques principales o escuelas (Clásica; Reformulada y Constructivista)<sup>163</sup>, reconocidos por quienes apoyan sus investigaciones en la TF, aquí se retoma la última, que ha sido desarrollada por Charmaz, C. (2006)<sup>164</sup>, en tanto que, a diferencia de las otras dos,

---

<sup>161</sup> En su idioma original se le denomina *Grounded Theory*, concebida originalmente por el mismo Strauss, en coautoría con Barney Glaser (Glaser y Strauss, 1967).

<sup>162</sup> Mediante el análisis del discurso se puede profundizar en indagar, por otra parte, las subjetividades individuales que subyacen a la respuesta o las explicaciones que dan a las preguntas; analizando el conjunto de discursos individuales es posible conocer las inter-subjetividades del colectivo entrevistado; por contraparte, también se pueden detectar contradicciones que den indicio de aquellas respuestas que por alguna razón no parecen emanar de manera espontánea, auténtica u honesta, por parte de los entrevistados.

<sup>163</sup> Una discusión bien resumida sobre las características generales de cada una de estas escuelas, de lo teóricos que la formularon, de su evolución y de sus diferencias puede encontrarse en Juanillo Maluenda (2019), quien explica que: “... la primera está representada por los sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss, quienes a finales de la década de los sesenta articularon la metodología que plantearía las bases de la TF... [la cual]... se caracterizó por una fuerte inclinación positivista en el análisis, asumir las categorías como variables, construir una teoría a partir de cómo emergen los datos y reinterpretar los hallazgos. La segunda escuela la representa Strauss, pero ahora en compañía de la enfermera Juliet Corbin ... [quienes] en 1990... enfatizan en la necesidad de realizar interacciones entre los conceptos para interpretar los datos y brindar una explicación a partir de ellos... La tercera escuela llamada constructivista, fue desarrollada por la socióloga Kathy Charmaz, ...en el año 2006, establece un rediseño al modelo de la corriente clásica, al cuestionar sus bases objetivistas mediante un enfoque sistemático, que fomenta la integración de la experiencia subjetiva del investigador en la co-construcción de la teoría.” (p. 207)

<sup>164</sup> Charmaz ubica su investigación en condiciones históricas, sociales y situacionales de su producción, al tiempo de reconocer los múltiples puntos de vista que presentan tanto al investigador como a sus participantes desde sus roles y realidades diversas. Como resultado de esta aproximación metodológica “el rol que asume el investigador en la propuesta de Charmaz, es lo que implica realzar no sólo un trabajo interpretativo que debe tener el investigador, sino que también cómo éste juega un papel al construir una teoría sujeta a las motivaciones, experiencias pasadas, interacciones y perspectivas de los investigadores como actores sociales... [y que]... para Charmaz, quienes realicen investigaciones a partir de la TF constructivista deben ser conscientes de sus presuposiciones y cómo pueden afectar a la investigación que dirigen, por ello, la reflexividad

fomenta la integración de la experiencia subjetiva del investigador en la co-construcción de la teoría, pues “considera que existen múltiples realidades sociales que se vinculan a un mundo empírico; mantiene las estrategias inductivas de la TF desarrollada por sus predecesores, pero establece un alejamiento de la objetividad del investigador, por lo que reconfigura el rol del investigador en la construcción de los datos y la teoría.” (Juanillo Maluenda, 2019, p. 207).

El investigador espera que, al considerar estos conceptos metodológicos, al lector se le facilite comprender que una teorización fundamentada en el conocimiento empírico fue la vía que le condujo a reconfigurar partes del protocolo original de investigación; no del objetivo general, que se mantuvo como una preocupación central, pero sí de los objetivos específicos (que en ocasiones solamente matizó pero en otras reformuló). Eso sí, sin alterar la propuesta original de tejer el análisis sobre la base de los cinco ejes de investigación: territorialidad, gobernanza, despojo, resistencia y poder.

### **6.3. Acumulación por despojo del agua (Water grabbing)**

Dos de los procesos globales que completan el bagaje conceptual aquí incorporado para comprender los estudio de caso abordados, son los que en la literatura publicada en lengua inglesa se denominan *Land Grabbing* y *Water Grabbing*, que son conceptos acuñados recientemente dentro del campo de atención de la Ecología Política; pero que en el caso del segundo todavía existen diferendos entre autores que tratan los conflictos socioambientales respecto a su preciso significado, como lo explica Dell’Angello (2018):

“...En tanto que sobre el concepto de land grabbing hay un amplio consenso semántico que ha sido formalmente definido por una coalición de organizaciones (Declaración de ILC Tirana), el concepto water grabbing no ha sido nunca utilizado oficialmente en algún foro político ni tampoco de manera no oficial por organizaciones internacionales de desarrollo [...] el concepto de water grabbing ha sido utilizado por diferentes autores en publicaciones de revisión por pares para indicar un fenómeno relativamente diferente. El común denominador entre las diferentes definiciones es que hay aspectos de injusticia y desbalance de poder representados en la palabra grabbing. Water grabbing significa algo diferente a apropiación, explotación, extracción, consumo o uso del agua. Involucra la noción de “grabber” y “grabbed”, una dinámica de usurpación basada en un desbalance de poder entre los sujetos que pierden y que ganan, injustamente. La definición de water grabbing va de acuerdo con el cuestionamiento ético de cuando resulta apropiado definir un caso particular de una tipología de extracción de recursos naturales como “grabbing”. También va de acuerdo con el cuestionamiento biofísico sobre cómo vamos a cuantificar o identificar la apropiación de un recurso, que por su propia naturaleza es un fluido, renovable y difícil de cuantificar (Rodríguez-Labajoz y Martínez Alier, 2015)...”

Dell’Angelo et al. (2018: 277).  
(Traducción libre de Saúl Angel)

---

contribuye a fomentar las interpretaciones tanto de investigadores como de quienes participan en sus investigaciones, para alcanzar este nivel de conciencia.” (Juanillo Maluenda, 2019 p. 208).

Del texto anterior, resulta obvio que, al no existir aún consenso sobre el significado preciso del concepto en su lengua original, menos se puede esperar que lo tenga en otra lengua. Sin embargo, su comprensión no resulta tan difícil en tanto que se considere como criterio el sentido de “*aspectos de injusticia y desbalance de poder representados en la palabra grabbing... una dinámica de usurpación*” que plantean Dell’Angelo y colaboradores; pues desafortunadamente esos aspectos son frecuentes de ver en este tipo de conflictos socio ambientales y no son una excepción los casos estudiados, pues en ellos resulta evidente que la capacidad de acceso a la tierra y al agua que tenían los actores locales se ha visto mermada cuando actores externos han irrumpido en su territorio para tratar de imponerles sus propios intereses, cobijando injusticias que cometen en la posición ventajosa que les proporciona el desbalance de poder generado por los cambios al marco jurídico de 1992.

No está por demás prevenir al lector respecto a que no es por la traducción literal de la palabra *grabbing* a partir de la cual se logra la mejor noción de su significado, pues al limitarse a ella se corre el riesgo de caer en malinterpretaciones, tanto que atañe a un concepto embuído de connotaciones éticas<sup>165</sup>. En ese sentido, mientras el Cambridge Dictionary interpreta “*grab*” como “*to take the opportunity to get, use, or enjoy something quickly*”, que se traduce literalmente como “tomar la oportunidad de traer, darse o disfrutar algo rápidamente”<sup>166</sup>; el diccionario Word Reference, por su parte, otorga tres acepciones para interpretarla, que son coger, agarrar o atrapar; pero matiza que, en ciertos contextos, cobra sentido como “*to take illegally, snatch*”, que se traduce literalmente como “*tomar ilegalmente, arrebatarse o robar*”.<sup>167</sup> De ahí que al autor de estas líneas considere que resulta más adecuado interpretar el término en inglés “*grabbing*” alineándolo con el concepto de “desposesión”, que hace David Harvey (2005) desde la sociología, tras reflexionar respecto a que la depredación que, desde hace unos pocos años, está realizando el capital de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) no puede ser explicada de manera satisfactoria partiendo de los supuestos iniciales de la teoría general de la acumulación de capital de Marx.

Según Harvey (2005: 112), dichos supuestos tienen la desventaja de que “...relegan la acumulación basada en la depredación, el fraude y la violencia a una “etapa originaria” [...] o, como en el caso de Luxemburgo, es vista como algo “exterior” al sistema capitalista...”. Debido a lo anterior, en lugar que “primitivo” u “originario” considere más acertado denominar a ese proceso *accumulation by dispossession*, ya que lo considera equiparable a

---

<sup>165</sup> Así se explica que en el título de la versión en español del libro “The Global Water Grab” (Kay & Franco, 2012) sea “El Acaparamiento Mundial de Aguas”, que como puede confrontarse con lo señalado en el párrafo anterior, no concuerda con las definiciones de diccionario; independientemente de que “acaparamiento” sea una palabra que si bien se identifica con la acumulación con un ligero matiz negativo, en ciertas circunstancias puede implicar un sentido positivo; con lo cual estas autoras (o si no fueron ellas, el editor que tradujo mal el título del libro) han terminado dando al concepto un sentido vago e impreciso.

<sup>166</sup> <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/grab?q=grabbing>; recuperado el 25/01/2023.

<sup>167</sup> <https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=grabbing>; recuperado el 25/01/2023.

la acumulación a través del el sistema de crédito y en el capital financiero, en el sentido que lo explican Lenin, Hilferding y Luxemburgo, quienes enfatizan que los factores que influyen más significativamente en ese tipo de acumulación son la depredación, el fraude y el robo. Para Harvey, hoy sucede lo mismo con la depredación que hace el capital de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua), pero empleando nuevos mecanismos como son: las patentes y licencias de materiales genéticos; la mercantilización de las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual; la corporativización y privatización de activos previamente públicos (como las universidades); la privatización del agua y otros servicios públicos. Enfatiza este autor que mediante esos y otros mecanismos que se van innovando se ha constituido una nueva ola de “*cercamiento de los bienes comunes*”, utilizando frecuentemente el poder del Estado.

para forzar estos procesos, incluso en contra de la voluntad popular. Como también sucedió en el pasado, estos procesos de desposesión están provocando amplia resistencia, de esto se trata el movimiento antiglobalización. La vuelta al dominio privado de derechos de propiedad común ganados a través de la lucha de clases del pasado (el derecho a una pensión estatal, al bienestar, o al sistema de salud nacional) ha sido una de las políticas de desposesión más egregias llevadas a cabo en nombre de la ortodoxia neoliberal...

(Harvey, 2005:115)

Retomando el sentido de las reflexiones y argumentos de Harvey (2005), en este trabajo se interpretan *land grabbing* como *desposesión de tierras* y *water grabbing* como *desposesión de aguas*; con las reservas derivadas de matices semánticos, podría también admitirse interpretarlos como *despojo de tierras* y *despojo de aguas*. La importancia de las aportaciones de Harvey para la teorización consiste en que reconoce que si bien por un lado la mercantilización de tierras y aguas tiene como finalidad emplear la tierra y el agua como insumos para la producción, por otro lado ubica este tipo de procesos de mercado como las nuevas formas de actuar del capitalismo en su actual etapa de globalización no duda en utilizar el despojo de estos dos bienes para lograr reproducirse; siendo recurrente que su instrumentación sea llevada a cabo por grandes corporaciones multinacionales.

En síntesis, se puede decir que la lucha actual no se hace a partir del despojo del producto del trabajo, sino del despojo de los elementos de la naturaleza que hacen posible a la producción pero todavía luchan por sobrevivir frente a la gran embestida del capitalismo. La embestida es brutal, pues lo que ahora se encuentra en el centro de la lucha el agotamiento de los elementos de la naturaleza ante la extracción del plusvalor de su producción.

#### **6.4. Necropolítica, necroeconomía y necrocapitalismo**

Lo que hoy llamamos crecimiento es en realidad una proliferación carcinomatosa y carente de un objetivo fijo. Actualmente estamos asistiendo a un paroxismo de producción y de crecimiento que recuerda a un paroxismo de muerte. Finge una vitalidad que oculta que

se está avecinando una catástrofe mortal. La producción se parece cada vez más a una destrucción. La autoalienación de la humanidad posiblemente haya alcanzado aquel punto en el que ella experimenta su propia destrucción como un goce estético. Lo que Walter Benjamin dijo en su momento sobre el fascismo se puede aplicar hoy al capitalismo.

Byung Chul Han (2022).

El inicio de los años noventa del siglo XX han quedado marcados para la historia mundial como un periodo en el que se desencadenaron una serie de reconfiguraciones territoriales en Eurasia, que trajeron en consecuencia un abrupto e intempestivo trastocamiento de los equilibrios de poder que habían quedado establecidos tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial entre los países triunfantes; esto es, entre el bloque de países occidentales capitalistas, liderados por Estados Unidos y el bloque de países socialistas de Europa del Este, liderados la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así, tras la caída del muro de Berlín, noviembre de 1989, Alemania se reunificó en el lapso de unos cuantos meses; en tanto que la ya para entonces muy debilitada U.R.S.S. terminó fragmentándose en diciembre de 1991; después, sobrevino el desmembramiento del bloque de países que conformaban el bloque surgido del Pacto de Varsovia<sup>168</sup>.

El párrafo anterior ha sido incorporado aquí con la finalidad de ilustrar cómo se presentaba el contexto mundial al iniciar el año 1992, año de la contrarreforma agraria en México. Los teóricos del neoliberalismo celebraban “El fin de la Historia” (Fukuyama 1992) y brindaban por el advenimiento de nuevos tiempos en los que se lograrían concretar los diez postulados del Consenso de Washington (Williamson, 1990), con los que alcanzarían transformar al mundo, al compás de los más altos valores de su ideología y con la ventaja de no tener que enfrentarse más a los obstáculos que siempre les opuso el bloque socialista, desde los valores de su propia ideología.

En consideración de lo anterior, se puede afirmar con un buen nivel de certidumbre que, si alguna característica peculiar pueda atribuírseles en materia de política y economía, los años noventa fueron una década en la que se presentaron condiciones óptimas para el florecimiento del neoliberalismo; en consecuencia para la expansión del capital a escala global. La velocidad con la que colapsó el socialismo real fue de tal magnitud que a sus liderazgos en decadencia no les dio siquiera tiempo para recuperarse del azoro que les provocaba el curso de los acontecimientos; por contraparte, en las más altas esferas del poder económico y político mundial, en especial en la Inglaterra de Margaret Thatcher y los Estados Unidos de Ronald Reagan, al tiempo de celebrar la llegada de esos nuevos tiempos propicios para instrumentar el modelo de globalización modernizante, se esmeraban en aplicar catalizadores políticos y económicos definitivos para concretarlos.

---

<sup>168</sup> La URSS se desintegró tras la dimisión de Mijáil Gorbachov, tras lo cual la desintegración del bloque de la hasta entonces conocida como Europa del Este se desarrolló durante los siguientes años. En los casos más afortunados los países que lo conformaban se fueron separando por la vía pacífica; pero en otros desencadenó guerras genocidas, como en Yugoslavia, que se prolongó hasta 2008.

Han pasado desde entonces poco más de tres décadas de continua expansión de la globalización capitalista<sup>169</sup>. Sus efectos socioambientales han sido terribles, por lo que en el presente trabajo se presentan algunos de los que se resienten a nivel local, a consecuencia de la modalidad de expansión industrial. Para abordar su análisis se ha optado por recurrir a cuatro conceptos teóricos formulados en los primeros años del Siglo XXI: el de la *acumulación por despojo*, ya se ha tratado en el apartado anterior. Los otros tres se tratan en este apartado, pues llevan en su nombre, como común denominador, la raíz etimológica griega νεκρο (nekro-) que significa “muerto”, “cadáver”: *necropolítica*, *necroeconomía* y *necrocapitalismo*.

Los cuatro conceptos son básicos para explicar los efectos nocivos que el capitalismo hoy día cierne sobre las sociedades y sobre los ecosistemas y contribuyen a mostrar las falencias que tiene el modelo neoliberal para poder sostenerse en el tiempo. La razón de portar tan macabra etimología es que, para fundamentarlos como concepto, sus creadores partieron de analizar evidencias empíricas que mostraban que *la muerte* se había convertido en un factor o un elemento que se manifiesta recurrentemente en lugares en donde, durante la década de los noventa, fructificaron procesos económicos coligados con una rápida expansión del capital amparada en políticas neoliberales; esto es, corroborando la presencia de la muerte como efecto perceptible de la irrupción violenta del sistema capitalista en lugares donde el binomio Estado-iniciativa privada ha instrumentado proyectos que implican incorporar, sustituir o de alguna manera desplazar a los sistemas de producción tradicionales. Su cuño coincide con lapso temporal cuando Harvey (2005) teorizaba sobre la *acumulación por despojo*: la de Echille Mbembe (2003) para abordar el tema de la *necropolítica*, la de Warren Montag (2005) para tratar el concepto de *necroeconomía* y la de Subhabrata Bobby Banerjee (2008) para referirse al *necrocapitalismo*. No estando por demás precisar que en la bibliografía citada de los dos primeros autores existió una reiterada

---

<sup>169</sup> . Aunque ya desde los años setenta se había ido haciendo cada vez más evidente la expansión del capital a escala global, fue en la coyuntura de los primeros años de la década de los noventa que esa tendencia se hizo avasalladora. Tendencia que se mantuvo durante más de un cuarto de siglo, hasta que empezó a desacelerarse cuando la pandemia de COVID-19 dejó de manifiesto las vulnerabilidades de dispersar los eslabones productivos en geografías lejanas (*off shore*) a los centros de consumo; debilidades que significan incremento de riesgos que se suman a los que se derivan de la consolidación de China como una potencia mundial. Todo lo cual forzó a los Estados Unidos a reconsiderar las ventajas estratégicas, incluso en el ámbito de su seguridad nacional, de localizar los procesos de producción en lugares cercanos de su territorio; emergiendo entonces el nuevo paradigma del capitalismo conocido como *near shoring*.

Puesto que no son tema de este trabajo, no se entra a dar detalles de esta reconfiguración en las estrategias localizacionales de los procesos de crecimiento económico. Sin embargo, tampoco se ha querido dejar de dejarlas indicadas aquí, en tanto que se trata de elementos y factores que son imprescindibles de considerar para comprender el contexto económico mundial y sus tendencias, que se vivía al momento del cierre de edición del presente documento. En este sentido, se puede agregar que resulta previsible que el *near shoring* reforzará de manera importante la continuidad de las tendencias expansivas de la Zona Industrial de Derramadero, cuya localización es estratégica en el contexto de América del Norte, según se discute en el apartado 7.1. de este mismo documento.



referenciación mutua, por lo que se deduce que sus desarrollos conceptuales, en ocasiones confluyentes y en ocasiones divergentes en puntos de vista. Por su parte, Banerjee (2008) postula un poco más tarde el concepto de *necrocapitalismo*, por ser una especie de puente teórico que integra los postulados de Montag (2005) y Mbembe (2003) y los de Harvey (2005) es el que se usa con mayor insistencia en este trabajo.

Pero si es posible afirmar que Banerjee contribuye de manera importante a integrar el pensamiento de los autores señalados y de otros, los que vinculan los procesos económicos y políticos actuales<sup>170</sup> con la muerte, también resulta muy importante mencionar que de manera directa o indirecta todos ellos han reconocido que se basaron, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, en del concepto de *Biopoder*<sup>171</sup> desarrollado por Foucault durante los años setenta del siglo pasado.

Según Foucault (2005), el poder de decidir quien vive y/o quien muere se reflejan en las leyes y políticas públicas diseñadas para que el poder se ejerza aplicando formas de control diferentes; esto es, no solamente para controlar a la población mediante la gestión del territorio y los bienes que en este se hallan, sino dando al Estado la potestad de ser un vehículo para proporcionar a sus ciudadanos elementos que le faciliten acceder a una forma más cómoda de vida; así por ejemplo leyes que definen la obligación del Estado de proporcionar servicios públicos de salud o de agua y drenaje; con lo cual el Estado adquiere un perfil o imagen de *brindar vida* a los ciudadanos, lo cual Foucault refiere con el término *Biopoder*.

Foucault establece que los mecanismos del biopoder 'pueden ser vistos como los elementos constitutivos del poder del Estado a partir del advenimiento de la modernidad. Pero aclara que, al reservarse el derecho soberano de matar (*droit de glaive*), el Estado no renuncia a la potestad de decidir sobre quien debe vivir y quien debe morir. Desde luego, por principio esta potestad atañe o afecta directamente a sus ciudadanos; pero debido a que, por otro lado, el Estado tiene el derecho o la potestad de salvaguardar la *soberanía* y con ello proteger su integridad, su poder de matar se amplía más allá de quienes pertenecen a su sociedad, ya que para cumplir esos objetivos justifica el realizar acciones que impactan la la vida de ciudadanos de otros Estados; especialmente cuando entra en guerra con ellos.

---

<sup>170</sup> De ninguna manera se está afirmando aquí, con lo anterior, que el tema de la muerte, como contradicción o como complementariedad de la vida (como se le quiera mirar) sea un tema novedoso en la filosofía económica. Al respecto, resulta de lo más interesante la discusión que hace Dusell (2024) sobre las reflexiones que mismo Marx realizó en torno a las contradicciones que tiene la economía con la vida; reflexiones que Dusell interpreta por la doble formación que Marx tenía como filósofo y como economista, que marca a su pensamiento una diferencia sustancial con el de Hegel, que también abordó el tema de la vida pero no contaba con esa mirada de economista, que sí poseía Marx.

<sup>171</sup> Foucault (2005) propuso este concepto a partir de señalar que, desde la conformación histórica de los Estados, en ellos ha radicado el derecho de decidir quien de sus ciudadanos debe vivir y quien debe morir; pero que a diferencia de los Estados absolutistas, en los que pendía permanentemente sobre los súbditos la amenaza del Rey de mandar a aplicar la pena de muerte sobre alguno o varios de ellos, los Estados modernos enfatizan más en el derecho de vivir que en la condena al morir, puesto que en ellos se sostiene el principio de igualdad de derechos de los ciudadanos.

Pero Foucault aludía con sus conceptos a Estados tal cual eran o pasaban por la etapa propia del contexto histórico que le tocó vivir; en ese sentido, quien estas líneas escribe considera importante retomar una observación que hace Dussel (2024), al señalar que, como es el caso de otros filósofos, la mirada de Foucault es eurocéntrica y que, en ese sentido se puede entender el surgimiento de filósofos que ofrecen otras perspectivas desde otros contextos históricos, sociopolíticos y económicos materializados en otros confines y realidades del mundo, lejos de Europa; perspectivas que no invalidan sino complementan los conceptos que Foucault construyó. Es en esos espacios donde emerge la mirada de Achille Mbembe; de quien, para darse una idea de su trayectoria y aportaciones a las ciencias sociales, puede comentarse lo siguiente.

Nacido camerunés y con una sólida formación filosófica que lo llevó a tener una fructífera vida académica en tres continentes, Mbembe reflexiona en torno al concepto de soberanía de Foucault, pero defendiendo sus propios orígenes y su identidad; así, retoma la afirmación que el filósofo francés hace respecto a que el Estado Nazi es “el ejemplo más logrado del Estado que ejerce su derecho de matar ... que culminó en el proyecto de la “solución final”, pero lo traslada con todo y sus teorizaciones al caso de los Estados africanos que en el Siglo XXI siguen sojuzgados por Estados neocolonialistas europeos (Mbembe, 2006).

Con esa recontextualización, Mbembe retoma las argumentaciones que hace Foucault respecto a que en los Estados modernos existe una segregación de la sociedad, en grupos de acuerdo a una gama de diferencias entre ellos; así, de la misma manera en que Foucault explica que el Estado Nazi se autojustifica a partir de percibir al “...otro como un atentado a mi propia vida...”. Mbembe enfatiza que el racismo es el elemento que subyace en la indolencia de los Estados coloniales para matar a los ciudadanos de los países colonizados; discute el papel que en este proceso han jugado actores que, habiendo nacido en estos países, se prestan a servir a los intereses colonialistas a través de gobiernos autoritarios, que mediante la fuerza de las armas y otros medios de disuasión y de control someten a quienes oponen resistencia.

...la hipótesis de que la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quien puede morir. Hacer morir o dejar vivir constituye, por tanto, los límites de la soberanía, sus principales atributos. La soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder.

He aquí un resumen de lo que Michael Foucault entendía por biopoder, ese dominio de la vida sobre el que el poder ha establecido su control. Pero, ¿En qué condiciones concretas se ejerce ese poder de matar, de dejar de vivir o de exponer a la muerte? ¿Quién es el sujeto de ese derecho? ¿Qué nos dice la aplicación de este poder sobre la persona que es condenada a muerte y de la relación de enemistad que opone esa persona a su verdugo? ¿La noción de biopoder acaso da cuenta de la forma en la que la política hace hoy del asesinato de su enemigo su objetivo primero y absoluto, con el pretexto de la guerra, de la resistencia o de la lucha contra el terror?

Eschille Mbembe. (2006: 19-20).

Se puede utilizar la metáfora de que Mbembe dió vuelta a una moneda que estaba mostrando solamente uno de sus lados: en su envés el biopoder, pero ocultaba en el revés lo que él vino a denominar el *necropoder* y con él a la *necropolítica*, a la cual define de como “el trabajo político de matar”. Al aplicarse a responder sus cuestionamientos, Mbembe encamina sus reflexiones a discutir el uso del terror y de la amenaza de muerte como vía principal de control de la ciudadanía por parte del Estado. Utilizando el miedo se baja el precio de las mercancías, el dolor se negocia, las empresas extractivas que saquean la riqueza natural se coluden con las organizaciones criminales, la sociedad se militariza; eso sí, siempre y cuando la violencia o eliminación corporal no afecte la disponibilidad de fuerza laboral a tal grado que limite la continuidad de los procesos productivos de interés para las fuerzas colonialistas.

Desarrollos teóricos en esa misma tesitura de discutir la incorporación de la noción de vida en el pensamiento político ya habían sido previamente desarrollados por Giorgio Agamben (1998), quien retoma conceptos filosóficos griegos y se extiende también hasta Foucault, aportando reflexiones filosóficas que resultan importantes para comprender más cabalmente las disertaciones argumentativas de Mbembe. Sin embargo, no se discutirán aquí, en tanto que su profundidad filosófica implican un esfuerzo de abstracción muy alto y aportan pocos elementos prácticos para analizar los conflictos por el agua que aquí se estudian. Pero tampoco se les deja de mencionar dado que Montag, otorga a las aportaciones filosóficas de Agamben una importancia similar a las que otorga a las de Mbembe durante la construcción del concepto de *necroeconomía*.

Y es que Montag, tras la lectura de esos dos autores, se cuestiona si, de la misma manera como se habla de *necropolítica*, se pudiera hablar de *necroeconomía*. Sobre lo cual diserta de la siguiente manera:

Mbembe ha contestado implícitamente la descripción de biopolítica como el inverso de la operación de la soberanía mientras esta última hace morir o permite la vida, el biopoder opera como hacer morir y dejar vivir (*faire vivre et laisser mourir*). Siguiendo a Agamben en insistir sobre la coexistencia del poder soberano y el biopoder, Mbembe asigna a la política una relación mucho más activa con la muerte, lo cual se convierte indudablemente en su primer objetivo. La cuestión de la *necroeconomía* nos compele a regresar a la noción de “dejando morir” o de “exponiendo a la muerte” y no solamente morir en la batalla. Eso no debería de tomarse como una alternativa a la *necropolítica*, tal cual la entiende Mbembe, sino otra vez como su complemento, como si los dos fueran uno y un mismo proceso entendido en dos vías diferentes. Pensar esta posibilidad, sin embargo, requiere de nosotros que abandonemos la perspectiva de cualquier dualismo, como una tarea indudablemente difícil, cuando hayamos asegurado que las únicas alternativas al dualismo son la combinación, la visión borrosa y la indistinción...

(Montag, 2005: 11).

Lo anterior, dicho en palabras llanas, significa que Montag relativiza los puntos de vista de Agamben y de Mbembe en el sentido de que la muerte no solamente acaece por medios violentos (morir en la batalla), sino también a través de formas más sutiles (el “*dejar morir*” y el “*exponer a la muerte*”); es decir, mediante procedimientos no políticos sino económicos: *necroeconomía*, pues.

Inmerso en esta vorágine de reflexiones en torno a la relación de la política y de la economía actuales con la muerte, Banerjee las ha venido a redondear tan sólo unos pocos años después, al señalar enfáticamente lo siguiente:

Sostengo que el necrocapitalismo surge de la intersección de la necropolítica y la necroeconomía, como prácticas de acumulación en contextos (post)coloniales por parte de actores económicos específicos -las empresas transnacionales, por ejemplo- que implican desposesión, muerte, tortura, suicidio, esclavitud, destrucción de los medios de vida y la gestión general de la violencia. Es una nueva forma de imperialismo, un imperio que ha aprendido a “gestionar mejor las cosas”. La característica fundamental del necrocapitalismo es la acumulación por desposesión y la creación de mundos de muerte en contextos coloniales. La privatización de la tierra y la posterior expulsión forzosa de los campesinos, la conversión de la propiedad pública en propiedad privada, las restricciones al uso público de los recursos de propiedad común...

Banerjee (2008: 1548)

[el subrayado es mío]

Las palabras de Banerjee que se citan textualmente en el párrafo anterior se describen por sí mismas. Ponen foco a la importancia que tiene el concepto necrocapitalismo, en tanto que integra no solamente a los conceptos que se exponen en el presente apartado, los que se vinculan con la muerte, sino también a los de Harvey (2005).

Finalmente, por considerar que redondean los conceptos que en párrafos anteriores se han discutido, se retoman las siguientes ideas elaboradas por Jacobo Silva Nogales:

...habría que considerar que el capitalismo es siempre una necroeconomía y que ha existido tanto en los tiempos de soberanía como en los del biopoder y del necropoder. Sin embargo, aunque es cierto que así opera siempre el capitalismo, en la sociedad actual se ha acentuado el papel de la muerte en la economía. Nunca como ahora la muerte había ocupado un lugar tan destacado en la sociedad en su conjunto, no solamente por su mecanismo general ni por sus consecuencias, en los que se centra Montag, sino en todos los elementos que intervienen en su economía. Por eso, sería más acertado utilizar el término necroeconomía para la economía tal como funciona en la actualidad... en primer lugar, lo que se acumula no es dinero o poder económico, fundamentalmente, sino poder depredador. Lo que interesa es la capacidad de poder despojar a la gente de sus propiedades particulares o de lo común... El dinero no es el objetivo sino el poder depredador que se puede tener con él. Lo que se acumula es necropoder...”

Silva Nogales (2020: 206-209)

[el subrayado es mío]

## 6.5. Actores y Actantes ensamblados a diferentes escalas

La reconfiguración que tuvo la propuesta de investigación original, tema detallado en 6.2., tuvo entre sus repercusiones la necesidad de adecuar la concepción original del eje rector de aproximación, observación y análisis de la problemática planteada, que resaltaba la importancia que tienen los roles de actores concretos y con agencia suficiente para incidir en decisiones colectivas e influenciar con sus acciones a otros actores que juegan en la arena o las arenas de contienda donde se dirimen los conflictos por el agua. En contraste, al incorporar el conocimiento de las opiniones de los actores locales se fue tomando una idea más realista de su problemática; es decir, factores que no habían sido percibidos en la propuesta original, como: que existen otros actores, que viven en lugares lejanos pero son dueños de las concesiones del agua y que con ellas afectan a los actores locales; la influencia del nivel de prioridad que dan a los conflictos que enfrentan; el significado que dan los actores locales a los eventos que han generado dichos conflictos; de sus necesidades y de sus aspiraciones, individuales o colectivas, que como seres humanos sienten durante el enfrentamiento a actores evidentemente muy poderosos; de sus propuestas de solución... pero sobre todo trajo a la conciencia los vínculos entre los conflictos por el agua locales (a escala *micro*) y los procesos económicos y políticos ligados a la industrialización de la Franja Sur de Coahuila (a escala *macro*).

Mediante proceso de acercamientos y exploraciones sucesivos, que promovieron casi siempre la aparición de nuevas preguntas, fueron también definiéndose los estudios de caso, así como los métodos para abordarlos de manera tal de vincularlos integradamente. Esos acercamientos se dieron las más de las veces de manera paulatina, pero en ocasiones a saltos ante circunstancias inesperadas; así, no exento de momentos de confusión, este proceso fue moldeando la perspectiva metodológica construida desde el *enfoque del actor*, planteada originalmente dando mayor peso a los postulados de Norman Long (2007), hibridizándose poco a poco con los postulados propuestos por Bruno Latour (2008) desde la Teoría del Actor Red.

A partir de la interacción con los actores durante las primeras etapas del trabajo de campo quedó de manifiesto que el agua otorga poder a quien la posee o tiene acceso a ella, se retomó el postulado que hacen autores como Latour (2008) o Law (2003), en su enfoque denominado Teoría del Actor-Red (Actor Network Theory o ANT por sus siglas en inglés), según el cual la *agencia*<sup>172</sup> es una cualidad o atribución no solamente de las personas, sino también de los objetos inanimados, a los que denomina actantes.

---

<sup>172</sup> Se destaca la creación de *agencia* a partir de las interrelaciones entre colectivos de actores rurales y objetos y cómo a partir de ella se posibilita la evolución de un estado social anterior a uno nuevo. Así, de la misma manera que Dwiartama y Rosin (2014) analizan como la construcción de redes sociales para mantener la viabilidad de cultivos agrícolas tradicionales (*i.e.* plantas) sirven de base para crear formas de resiliencia social, reforzando las estructuras sociales y la gobernanza, el presente trabajo se orienta estudiar como la construcción de redes sociales para mantener las formas tradicionales para el manejo del agua sirven de base para cumplir ese mismo objetivo.

Pero si con lo anterior se reconoció la agencia que tiene el agua, durante la etapa de análisis se vislumbraron que existen artefactos humanos que también la tienen o la han tenido, puesto que influyó en la definición de las circunstancias que dan marco al conflicto actual. Tal es el caso de las infraestructuras hidrotécnicas sobre las que pudieron sostenerse los sistemas de producción hacendarios; pero también puede encontrarse esa capacidad en las instituciones para el manejo mancomunado del agua<sup>173</sup>. Es en ese tenor que aquí se ha considerado retomar tanto las definiciones de Norman Long, como las de Bruno Latour, al considerar que no solamente no se contradicen sino que sinergizan.

Durante la reconfiguración del marco teórico no se presentaron dificultades prácticas para incorporar actores que no habían sido percibidos en el proyecto original de investigación. Así, después de definir el marco de referencia destacando una arena (ejido Jalpa) al nivel *micro*, se pretendía realizar una indagatoria respecto a las interrelaciones que se dan entre actores locales y cómo esa red determina la creación de un ambiente propicio o poco adecuado para establecer acuerdos para el manejo mancomunado del agua. Sin embargo, cuando el trabajo de campo llevó al investigador a comprender que lo que él podía observar en la arena local estaba siendo trastocado por los embates de una problemática que estaba aconteciendo a nivel regional, que es la del confinamiento de residuos industriales tóxicos en Noria de la Sabina, reconoció la necesidad de abarcar con la investigación ya no solo esa escala<sup>174</sup> *micro*, sino también la *meso* y la *macro*; esta circunstancia planteó lógicamente la necesidad de incorporar nuevas arenas.

Estas modificaciones al marco de investigación han sido concebidas por el investigador dentro de un proceso de teorización fundamentada constructivista, tal y como lo proponen Chaimaz (2006), Corbin y Strauss (2008) y en sus orígenes Glaser (1967); pero guiando la teorización relacionando sus postulados con los de la TAR o ANT propuesta por Latour (2008). Es decir, fundamentando la creación de teoría con el conocimiento empírico obtenido en campo, utilizando para lograrlo los modelos de ensamblaje de actores y de actantes que, de acuerdo con el último autor, permiten explicar de una manera alternativa a los enfoques sociológicos tradicionales, ya que van organizando la vida cotidiana de esos actores en el contexto en el que se van sucediendo y a partir de acontecimientos que afectan a la red o ensamble.

---

<sup>173</sup> . La Teoría del Actor Red (ANT por sus siglas en inglés), en esencia propone que la realidad funciona como un todo ensamblado y por tanto lo social no debe de estudiarse únicamente como una causa sino también como una consecuencia del ensamblaje socio-técnico complejo y transversal de aspectos heterogéneos (tecnológicos, científicos, políticos, psicológicos, etc. (Latour, 2008).

<sup>174</sup> La *escala* debe ser concebida primordialmente como una herramienta necesaria para dimensionar una representación gráfica, en este caso del territorio estudiado. Se habla de *escala prioritaria de análisis* porque en esta investigación se realizó el análisis en tres escalas: *macro*, *meso* y *micro*; sin dejar de vincularlas permanentemente. La adecuación de prioridad se refiere a que, en su primera propuesta, el análisis de los conflictos se centraría principalmente en obtener conclusiones a la escala *micro* (análisis institucional de los acuerdos basados en la tradición comunitaria), pero en la propuesta final ha quedado centrada en la escala *meso* (análisis del movimiento social a nivel microrregional), sin descuidar la vinculación ni con la *micro* ni con la *macro* (conflictos por el agua en Coahuila).

Como resultado de esta forma de acercamiento se obtuvo un marco teórico mucho más detallado y complejo, por las interdependencias que implica concebir redes o ensambles de actores y actantes de múltiple naturaleza pero a la vez interrelacionados. Con lo cual se contrajo la obligación de realizar un análisis mucho más complejo, tardado y en ocasiones asincrónico, puesto que, por ejemplo, no requiere el mismo nivel de profundidad un estudio *meso*, que los que un estudio *micro*<sup>175</sup>. Condicionado, además, a que no podría ser de otra forma, en tanto que solamente a esta escala es la que el investigador puede estudiar, con la resolución espacial más adecuada, la vida cotidiana de los actores involucrados<sup>176</sup>; en ese tenor, el primer paso que se realizó fue la definición tanto a los actores como de las arenas<sup>177</sup> en las que de dichos conflictos se desarrollan.

Lo anterior no excluye la posibilidad de enfocar el estudio de a algunos de esos actores en la escala *meso*, cuando en la misma desempeñen un determinado rol; tampoco impide reconocerlos como actores jugando otro rol en la escala *macro*. Lo anterior, en la conciencia de que para cada escala entran en la escena otros actores, que solamente son visibles en ella porque no tienen rol en otras escalas. En ese sentido, en tanto la escala *micro* define como centro de la atención de esta investigación a la localidad y al ámbito doméstico de los actores, la resolución de observación y análisis que se alcanza en la escala *meso* de la investigación no es suficiente para entrar en los detalles de esa vida cotidiana; ya no se diga para la escala *macro*, donde ya no se puede hablar siquiera de actores individuales, sino solamente colectivos.

---

<sup>175</sup> Considerando los criterios que en este estudio se utilizaron para definir las proporciones métricas de las escalas, a manera de ejemplo se puede decir que en ciencias sociales el análisis *meso* emplea preferentemente los métodos de investigación de la sociología, pero para el análisis *micro* son mucho más adecuados los métodos antropológicos; de la misma manera, para las ciencias naturales, en la escala *meso* los de la Ecología del Paisaje resultan los más adecuados, pero para la escala *micro* son los métodos topográficos los más explicativos de los fenómenos o elemento estudiados.

<sup>176</sup> Dada la relevancia que para esta investigación tiene la visibilización del drama humano que subyace a los conflictos por el agua, se considera a la escala *micro* como la más adecuada para centrar los análisis institucional y de vida cotidiana.

<sup>177</sup> El concepto de *arena*, pertenece al marco teórico-metodológico sociológico, retomando la definición original hecha por Long y Van Der Ploeg, quienes hablando en plural estipulan que son “espacios en los que tienen lugar las contiendas sobre recursos, demandas, valores, asuntos, significados y representaciones: es decir, son los sitios de lucha que se dan dentro de y que atraviesan los dominios” [Long y Van Der Ploeg (1994) en Lettelier s/f, p.5]. Definición que lleva a la que los mismos autores hacen de que “...los dominios representan el sitio de reglas, normas y valores que se convierten en centrales para el proceso de ordenamiento social y para el establecimiento de ciertas reglas pragmáticas de gobernanza...”

En el mismo trabajo se señala que “...La idea de dominio es importante también para entender cómo las fronteras sociales y simbólicas se definen y sostienen, aunque queda como pregunta abierta identificar con precisión qué principios estratégicos o normativos prevalecerán situacionalmente a largo plazo. Los dominios no deben concebirse como “supuestos culturales” sino que se producen y transforman a través de las experiencias compartidas y las luchas de los actores.” (Lettelier, s/f, p 5)

Para poder hablar de acercarse multiescalarmente a los conflictos ambientales, debe asumirse como una necesidad metodológica la de utilizar no un solo método, sino varios. Esto es, asumir que una sola metodología resulta inadecuada para ocuparse en todas y cada una de las escalas propuestas, sino que para cada escala se requiere dar mayor peso a una, que si bien no la misma, tampoco muy diferente a las empleadas en otras escalas; que de hecho tienen que imbricarse en nodos analíticos en los que los rasgos peculiares de cada conflicto trascienden de una y otra escala. Es por lo anterior que el investigador no debe carecer de una buena dosis de eclecticismo, con tal de aplicarlo empatar los métodos propios de una escala con los de otra escala; entendiendo que una vía para poder realizar tal empate es procediendo a imbricarlos tanto en torno al eje central o referencial de procedimientos metodológicos como en los nodos estratégicos.

Aplicando estos procedimientos de índole metodológica, que aquí se reconocen eclécticos, se hizo posible la inclusión de una gama de actores locales y externos que a pesar del importante rol que juegan en los conflictos por el agua no habían sido percibidos al realizar la propuesta inicial de investigación. Por su parte, el procedimiento multiescalar ha permitido acceder a mucho más elementos explicativos de los conflictos estudiados.

## **6.6. Arenas integradas jerárquicamente como cortes de cebolla morada**

La manera de trabajar en varias escalas puede analogarse al uso de la herramienta “Zoom” que se integra en el *software* de los mapas digitales para “alejar” o “acercar” un mapa en la pantalla de un dispositivo electrónico, a conveniencia del usuario; que en este caso refiere a las necesidades de cobertura espacial con buena definición cartográfica que en un momento dado pudiera tener el investigador para describir o analizar un conflicto, ya que: i) la escala *micro* es la más adecuada para realizar los estudios locales, considerando que en la cartografía se requiere analizar áreas territoriales dentro de un círculo con radio aproximado de 50 Km<sup>178</sup>; ii) la escala *meso* lo es para los estudios que comprendan la cobertura del territorio de municipio y algunas localidades pertenecientes a municipios vecinos, ubicadas en las cercanías de los linderos, para lo cual se requiere tener buena definición cartográfica dentro de un círculo de entre 60 y 120 Km; la escala *macro* a distancias superiores a los 130 Km y hasta unos 180 Km<sup>179</sup>, para analizar los conflictos en sus interrelaciones regionales.

---

<sup>178</sup> Esta distancia se eligió tomando como base la distancia promedio que de manera empírica pudo comprobarse como la más probable para delimitar la mayor parte de los conflictos locales; o como *esa distancia después de la cual resulta improbable encontrar expandido un conflicto de origen local*.

<sup>179</sup> Con el mismo criterio usado para definir el umbral de la escala *micro* a *meso*, se definió el umbral de la escala *meso* a *macro*; es decir, sobre la base del conocimiento empírico de la región. Se eligió un radio aproximado a los 130-180 Km porque esa es la distancia aproximada y equidistante a la que se encuentran, desde la zona donde se ubican tres de las localidades donde se abordan los estudios de caso (Jalpa, San Juan del Cohetero y Noria de la Sabina), las urbes donde operan la mayoría de los actores empresariales y gubernamentales involucrados en los conflictos que aquí se analizan (la Zona Metropolitana de Saltillo y la Zona Metropolitana de La Laguna).



La primera de las dificultades prácticas para realizar el análisis inter e intraescalar es acceder a una visión dinámica y de conjunto de todas ellas; de ahí que resulte muy útil el empleo de *Sistemas Jerárquicos de Integración* que es uno de los modelos de enfoque más recurridos en las disciplinas de las ciencias naturales, que esencialmente se puede concebir como una serie de sistemas anidados; esto es, como entes con organización compleja, como lo son los seres vivos. La virtud de este modelo es que es muy útil para abordar varias escalas a la vez, con lo cual se facilita analizarlos desde una perspectiva holística. Esta propuesta de sistemas anidados ya ha sido utilizada por Poteete *et al.* (2012) para realizar estudios socioambientales en los que entran a considerarse temas relativos al manejo de bienes comunes. Se trata de autores formados en la escuela institucionalista de Elinor Ostrom, quien también basó parte de sus teorizaciones en modelos de integración jerárquica. En el caso de esta investigación se retoma el modelo de anidación, considerando que los “*sistemas*” a estudiar son las arenas del conflicto que se anidan una(s) dentro de otra(s) como si se trataran de las capas de una cebolla morada (Figura 5).

**Figura 5 Modelo de la cebolla morada cortada transversalmente**



Fuente: elaboración propia.

Una referencia general sobre este modelo la ofrecen Casanueva M. et al. (2013), si bien se considera importante aclarar que al aplicarlo a esta investigación se ha tenido cuidado de mantener una distancia teórica con su origen en las ciencias biológicas; pero sobre todo de su concepción original, dentro de la Teoría General de Sistemas, que fue concebida en un entorno académico tecnocrático. Dicho de otra forma, que se ha evitado caer en enfocar esta investigación con tintes sociobiologistas o de ingeniería social; es por esa razón que la palabra “sistemas” se entrecomilló en el párrafo anterior.

La analogía con los cortes transversales de cebollas moradas es que representa un bulbo con varios nodos de crecimiento (lo que los botánicos llaman meristemas) proporciona una idea más cercana a lo que se busca representar: que hay varias arenas *micro* dentro una misma arena *meso* y varias arenas *meso* dentro de una misma arena *macro*. No se usa la imagen de una cebolla blanca porque se considera que no es tan adecuada para aplicarse una investigación como la presente, en la que se abordan varios estudios de caso, dado que las cebollas de este color generalmente tienen un solo nodo de crecimiento; esto es, puede enviar al lector el mensaje equivocado de que solamente se concibe una arena *micro* dentro de una arena *meso*, la cual a su vez se encuentra inserta dentro de una arena *macro*.

La analogía que se hace con estos sistemas amplía la capacidad de análisis relacional de las escalas de trabajo, puesto que facilita establecer vínculos sobre un eje vertical (Eje “Z”); también hace factible establecerlos de forma horizontal, abordando el análisis de arenas con un nivel jerárquico similar sobre los ejes “X” y “Y” de una misma escala. Con ello, se logra disponer de una herramienta metodológica aplicable para resolver la necesidad práctica de analizar los conflictos por el agua realizando aproximaciones tanto *intraescalares* como *interescales*; incrementando de esa forma la comprensión de los procesos complejos que se están desarrollando en las arenas donde tales conflictos se dirimen. Partiendo de esas consideraciones, las arenas de esta investigación se definen de la siguiente manera:

- i) a los pequeños núcleos de comunidades vecinas que comparten cuerpos de agua (superficiales o subterráneos), como las “*arenas micro*”;
- ii) al municipio de General Cepeda como la “*arena meso*”;
- iii) al semidesierto del Sureste de Coahuila como la “*arena macro*”;

Una investigación multiescalar y multitemporal permite apreciar que los impactos o derivaciones de las acciones emprendidas por los actores de uno u otro bando de la contienda tienen repercusiones en un abanico de ámbitos particulares de cada escala; esto es, que estudiar sólo los que se manifiestan a una escala implica limitar los resultados, en el sentido de que se dificulta apreciar claramente cómo los conflictos no solamente generan repercusiones horizontales, dentro de una misma escala, sino también las escalas inmediatas “por arriba” y “por debajo”, afectando a actores que no siempre se visualizan en todas las escalas. Tal pérdida de percepción conduce, lógicamente, a la obtención de una explicación incompleta o parcial sobre los conflictos estudiados.

Aunque hablar de incorporar varias escalas en el marco teórico pareciera una tarea sencilla, en la práctica implica establecer medidas especiales para integrar de manera coherente las conclusiones que se obtengan en cada una de ellas, en tanto que los métodos de investigación tienen diferentes niveles de precisión y eficacia para cada escala, lo cual se traduce en inconveniencias si se pretendiera aplicar un solo método para todas las escalas<sup>180</sup>. Por contraparte, aplicar una metodología específica para cada escala, tomando

---

<sup>180</sup> Debido a la complejidad que entraña trabajar a ese nivel de detalle resulta materialmente imposible trabajar a escala *micro* conflictos que impactan en varios sitios a la vez. Es decir, que la

como criterio el usar para la misma la más idónea, implicaría exponerse a dificultades y/o cuestionamientos respecto a la equiparabilidad de los resultados obtenidos en cada caso de estudio, bajo diferente método y con respecto a los otros casos. De ahí que se hizo necesario diseñar estrategias destinadas especialmente para lograr integrar y equiparar dichos resultados.

Con el avanzar la investigación se fue corroborando que existe un grado de interacción entre los actores y de movilidad éstos en las arenas de la contienda por el agua; es decir, que algunos de ellos tienen rol y agencia en más de una arena, en ocasiones dentro de la misma escala y en ocasiones en diferentes escalas. Cabe abrir aquí un paréntesis para destacar que las arenas son fijas; pero los actores no. Esta es una premisa que se recomienda considerar al entrar a revisar las definiciones que se hacen en el presente capítulo, puesto que con ella, aunque salte a obviedad, se subraya la importancia de tener en todo momento presente que los actores son los que tienen la posibilidad de moverse entre las arenas y no al revés. Se mueven según les permitan sus individuales capacidades y/o criterios; o para decirlo en términos de Norman Long, según las limitaciones y potencialidades que les da su *agencia*. Se mueven incluso entre arenas de diferentes escalas pero, además, no solamente se mueven en el espacio sino también en el tiempo, lo que explica porqué hay algunos momentos en los que los actores pueden visibilizarse mucho mejor que en otros, en los que parecen permanecer ocultos o ausentes.

La multiplicidad de interacciones que puede tener un solo actor con actores de diferentes arenas y escalas, así como las diferencias entre la agencia que tiene en cada una de ellas, vistas como variables estocásticas, dan como resultado su complejización del análisis y por tanto una mayor demanda de tiempo para realizarlo; de ahí que se haya optado por acotar la investigación de las arenas *micro* a solamente dos casos de estudio.<sup>181</sup> La escala *micro* concierne, en los hechos<sup>182</sup>, a los ejidatarios de Jalpa y San Juan del Cohetero, que viven en poblados ubicados a pocos kilómetros de distancia, uno de otro.

En el conflicto a la escala *meso* se involucra una cantidad mucho mayor de actores, que en el conflicto a escala *micro*; la mayor parte de ellos son de perfil rural. De ninguna manera esto significa que formen un colectivo homogéneo, ya que lo integran no sólo campesinos y/o ejidatarios sino también agroempresarios que son pequeños propietarios o ejidatarios; también comerciantes, clérigos, obreros, académicos, intermediarios de ganado y hasta

---

propuesta de estudiar a una misma escala todos los casos implicaría analizar con el mismo nivel de minuciosidad todas las localidades involucradas en cada conflicto; así como todas las interacciones entre los actores de una misma localidad y de ellos, en conjunto, con los conjuntos de actores que se identifican con otras localidades, sean rurales o san urbanas.

<sup>181</sup> La limitación de la cantidad de estudios de caso tiene la virtud de que, al ser pocos, se pudo atender el análisis del contexto sin perder meticulosidad; es decir, con un nivel de detalle que lo sustrajo de quedarse solamente en lo general.

<sup>182</sup> En las cartas hidrológicas puede apreciarse que el reclamo de aguas del Arroyo San Miguel debiera concernir también a los ejidatarios de Pilar de Richardson y a algunos pequeños propietarios vecinos; sin embargo, en el campo no se encontraron indicios que haya interés de parte de ellos por reclamar.

cantineros, por citar ejemplos. Su mayor presencia social y política se encuentra al interior del territorio municipal y debido a la fortaleza del movimiento ha habido momentos en que han logrado proyectar su presencia en la capital del estado, en foros regionales o incluso en eventos fuera de Coahuila.

La escala *macro* es la regional, es decir la Región Sureste de Coahuila, que tiene como centro rector a la Zona Metropolitana de Saltillo pero, para los fines de esta investigación, dentro de ella se focaliza de manera especial a la Zona Industrial de Derramadero, donde se pueden encontrar actores que pueden catalogarse como extrarregionales las empresas insertas en la cadena de valor de ese sector industrial, la mayoría de ellas de origen extranjero, pero también muchas nacionales. Con un papel destacado como operadores directos de la privatización de la tierra, entran también a escena un grupo de empresarios inmobiliarios, respaldados política y jurídicamente por funcionarios de los tres niveles gubernamentales, con quienes se coluden dentro de una misma estructura oligárquica.

El propósito principal para incluir tres escalas de investigación es evidenciar que un mismo conflicto por el agua puede manifestarse al mismo tiempo y en magnitudes diferentes de manera local, municipal y/o regional. Apuntando a cumplirlo, la primera estrategia aplicada fue definir a la escala *meso* como la *escala prioritaria de análisis*;<sup>183</sup> lo que en la práctica permitió enmarcar en el territorio municipal de General Cepeda el mayor esfuerzo de estudio de los conflictos por el agua; para ello se dio una mayor relevancia a ese territorio como referente geográfico e histórico común a los tres casos de estudio. La segunda estrategia consistió en ratificar al Enfoque del Actor como eje metodológico rector del análisis multidisciplinario, aplicándolo con mayor grado de minuciosidad a los conceptos de Long (2007) y de Latour (2008), en la escala prioritaria de análisis (*meso*), pero complementándolo con elementos conceptuales de la Teoría del Sujeto Social de Zemelman (1992, 1997) al aplicarlo en la escala *macro* y con los económico institucionalistas de Ostrom (1990, 2000) más ligados a la Teoría de los Bienes Comunes, en la escala *micro*.

No debe perderse de vista, sin embargo, que la realidad es compleja y los factores que la configuran son múltiples y mutuamente interdependientes; retomando a Latour (2008) se considera conformada por múltiples ensambles de factores no solamente sociales sino de todo tipo (ambientales, políticos, técnicos, organizacionales, culturales, históricos...) así como de un numeroso conjunto de actores o actantes con la agencia suficiente para influir en la orientación de los procesos en curso. Del mismo modo, se asume que los impactos en cuestión son de diferente magnitud y no se dan necesariamente de manera sincrónica, sino que pueden acontecer diacrónicamente; por tanto son percibidos de diferente forma y a diferentes tiempos por los actores.

---

<sup>183</sup> Debido a estas complejidades, la propuesta metodológica final incorporó el criterio de priorizar cuando menos una de las escalas que se abordan, para centrar en ella una mayor atención de la investigación. Al hacerlo debe tenerse presente que la selección de esa escala definirá indirectamente la metodología prioritaria. Entendiendo esta última como aquella que pasa a constituirse como eje central o referencial de los procedimientos metodológicos de las otras escalas.

Lo que aquí se defiende es que los factores y variables que determinan los contextos específicos de las arenas de cualquier escala no están inconexos o aislados entre sí, sino que se encuentran imbricados e inmersos en una red de interrelaciones cuyo conocimiento puede profundizarse estudiando a detalle las interdependencias que se dan entre las arenas *micro*, *meso* y *macro*; esto es, haciendo uso minucioso del modelo de los cortes de una cebolla morada.

Este procedimiento metodológico permite “moverse entre escalas”, con la finalidad de ir haciendo comparaciones que llevan a obtener conclusiones integradas de los análisis realizados en cada una de ellas; desde el análisis de contexto *macro* hasta el microanálisis, con lo que se logra no perder de vista a otras localidades involucradas de forma indirecta en un conflicto<sup>184</sup> mientras se concentra la atención en las localidades focales. Otro aspecto que ayuda a analizar la movilidad entre escalas es la expansión espacial de los conflictos, puesto que éstos se desarrollan a ritmos desiguales diferentes puntos del territorio.

Para una mejor comprensión del procedimiento empleado para “moverse entre escalas”, el lector familiarizado en el uso de cartografía geográfica podría tratar de imaginar que tiene ante sí seis cartas: una a escala 1:100,000 donde puede apreciar la Región Sureste de Coahuila en su totalidad (Carta 1); tres a escala 1:20,000 donde en una aprecia el municipio de Saltillo (Carta 2), el de General Cepeda en otra (Carta 3) y el de Parras de La Fuente en otra (Carta 4); dos a escala 1:5,000 en las que en una se aprecia el Oeste-Noroeste de General Cepeda (Carta 5, donde se localizan Jalpa y San Juan del Cohetero) y el Norte-Noreste del mismo municipio en otra (Carta 6, donde se localiza Noria de La Sabina). A diferencia del tratamiento que se da para estudiar los conflictos de la Carta 2, en los que el foco de atención del investigador se centra en la escala *meso* (Cañón de Derramadero) contextualizada en la escala *macro* (Región Sureste de Coahuila), para tratar los conflictos que se dan en la Carta 3 se recurre de manera constante a las Cartas 5 y 6, sin nunca perder de vista en la Carta 3 al Arroyo San Miguel y al Arroyo Patos, que representan las cuencas hidrográficas a las que pertenecen, respectivamente Jalpa/Sn J del Cohetero y Noria de la Sabina. Como en los casos saltillenses (Carta 2), en la explicación de los estudios de caso cepedenses (Carta 3) se “sube y se baja” a/de su escalas *macro* (Carta 1), pero a diferencia de aquellos también se “sube y se baja” a sus escalas *micro* (Cartas 5 y 6). Sin embargo, la vinculación entre “cartas” no se detiene ahí, sino que de manera permanente se vinculan las Cartas 2, 3 y 4, que contienen las escalas meso de los municipios de Saltillo, General Cepeda y Parras de La Fuente.

## **6.7. Fragmentaciones y fractalidad de las redes hidrográficas**

En apartados del Capítulo 5 se ha tratado de dar al lector una panorámica general sobre los impactos más fuertes que han afectado a las sociedades campesinas que habitan la región

---

<sup>184</sup> Y es que sobre la marcha de la investigación se hizo evidente que cuando se analizan los conflictos a escala *micro* se presentan interacciones entre una localidad con otras, que en ocasiones no son siquiera vecinas, sino que se enciendan en un radio más amplio de distancia.

de estudio y que pueden ser atribuidos a las fragmentaciones del territorio acontecidas en el Sureste de Coahuila a lo largo de poco más de siglo y medio. Y si bien no se pretende decir que esos impactos han sido abarcados en su totalidad, sí se ha procurado incluir los que se consideran los que se encuentran más relacionados con los ejes de investigación aquí planteados.

El presente apartado trata el efecto que han tenido las fragmentaciones sobre dos constructos que lograron ser articulados sobre los componentes hidrográficos: la institucionalidad para el manejo mancomunado del agua y las infraestructuras hidrotécnicas; para lo cual se plantearon dos cuestionamientos: *¿Qué podrían tener en común estos dos aspectos, como para justificar que es posible hacer una comparación entre ellos?* Y de ser afirmativa esa respuesta *¿Existe algún argumento en el cual se pueda anclar el análisis comparativo entre algo tan intangible como son los acuerdos entre seres humanos y algo tan concreto como son las obras de ingeniería?*

La reflexión que estas preguntas generaron en el investigador le llevaron a concluir que el aspecto común entre los temas que se han puesto sobre la mesa es el hecho que ambos son *constructos humanos*; más específicamente a visualizar que los dos tienen como propósito final el manejo de las escorrentías con objetivos productivos. La vía que uno usa es la de instituir las reglas de un contrato social y otro la de construir muros y canales dentro de un sistema hidrotécnico, pero una y otra vías tienen como finalidad última la de controlar las aguas que bajan por la red hidrográfica o cuenca (que en esta investigación es la del Arroyo San Miguel).

Partiendo de los razonamientos anteriores, resulta posible proponer al concepto *constructo* como el nodo en el cual se puede anclar el análisis comparativo entre ambos temas de estudio; ésto, con la acotación teórica de que: i) los acuerdos son constructos intangibles; ii) las infraestructuras hidráulicas son constructos tangibles. Reconocer esa similitud acotada es crucial para el análisis, pues solamente teniéndola presente se hace posible solventar las dificultades para efectuar una aproximación metodológica que permita compararlas y crucial para establecer cualquier juicio, inferencia, deducción o conclusión<sup>185</sup>.

La razón de abordarlas como constructos humanos es que, desde tal lógica, resulta posible comprender dos temas torales de esta investigación: por un lado, la razón por la cual los acuerdos para el manejo mancomunado del agua lograron mantenerse vigentes tras las fragmentaciones territoriales estudiadas; por otro, la razón por la cual no aconteció lo mismo con las obras de ingeniería hidráulica construidas durante el latifundio y la hacienda, puesto que colapsaron tras el reparto agrario.

---

<sup>185</sup> No debiera sorprender esta complejidad, puesto que al final de cuentas, visto con sentido lógico, no podía ser de otra manera, en tanto que el tema de la investigación se circunscribe dentro del campo de estudio que ha dado en denominarse socioambiental. En ese sentido, al focalizar el estudio en los acuerdos se está abordando la parte sociológica, que en este caso se liga al uso del agua, que representa la parte ambiental y al mismo tiempo se constituye como el nodo donde se anclan simultáneamente los estudios de dichos acuerdos y los de las infraestructuras hidrotécnicas.

Ahora bien, el tema de las redes hidrográficas es demasiado vasto para un análisis que requiere precisión. De ahí que para el presente estudio haya sido necesario definir primero en qué parte específica de los constructos se encuentra el punto donde se define tanto la resiliencia de los acuerdos para el manejo mancomunado de las escorrentías como la labilidad del sistema hidrotécnico para control de las mismas. Así, puestos a buscar una respuesta convincente, se observó que las redes hidrográficas presentan una respuesta diferente a la que se observa en otros componentes de un paisaje cuando éste se fragmenta; ya que todos los demás pierden en alguna medida propiedades cualitativas durante el proceso de fragmentación, lo cual se traduce en pérdida de homogeneidad estructural y generalmente en un trastocamiento fisiológico, por lo común negativo; con ello también pierden dentro del paisaje la suavidad de su gradiente de heterogeneidad, lo cual genera los patrones de mosaico indicativos del deterioro paisajístico. Lo extraordinario de las redes hidrográficas es que, salvo eventos cataclísmicos, tras la fragmentación del paisaje mantienen su integridad estructural y su funcionalidad fisiológica.

La razón por la cual las redes hidrográficas presentan resiliencia ante la fragmentación se debe a una propiedad particular que ellas tienen y que no tienen otros componentes del paisaje, que es la *fractalidad*, ya que:

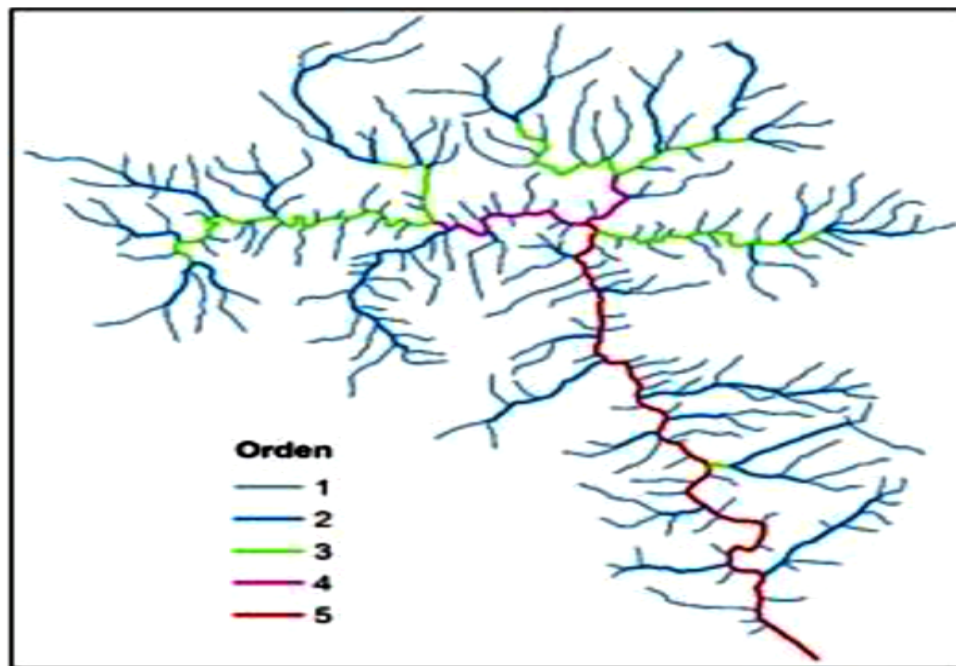
La noción de fractal fue introducida en los años setenta del siglo pasado por el matemático francoestadounidense Benoît Mandelbrot para designar conjuntos con propiedades geométricas específicas, que se pueden resumir rápidamente por los conceptos de similitud interna e invariancia de escala: una estructura fractal es la misma tanto “de cerca como de lejos”. Cualquiera que sea la escala en que se considere... Este tipo de estructura es muy común en la naturaleza... no deja de encontrar nuevos campos de aplicación en geología, biología, física, diseño y cinematografía...

Danièle Dehouve. (2017: 131)

La fractalidad determina que el impacto de la fragmentación del territorio sobre las redes hidrográficas tenga efectos comparativamente muy diferentes a los que experimentan otros componentes del mismo paisaje ecológico, puesto que en todos ellos se presenta algún tipo de desconfiguración de sus propiedades físicas. Fenómeno especialmente notable en los componentes bióticos que en los abióticos, ya que estos últimos experimentan tasas de degradación mucho más lentas que las de los primeros; de tal suerte que cuando el territorio se fragmenta lo más común de observar es que componentes como el suelo y el lithos se conservan todavía durante mucho tiempo, mientras con las comunidades de seres vivos experimentan drásticas transformaciones. El ejemplo por excelencia es el de la cobertura vegetal ya que por su fragilidad se degrada en poco tiempo, lo cual rompe su distribución original dentro del paisaje, en ocasiones de forma inmediata (como puede ser tras un incendio forestal).

En contraste, debido a su fractalidad<sup>186</sup>, las redes hidrográficas mantienen una estructura, denominada cuenca, que se replica en otra similar pero más pequeña, de manera continua a diferentes escalas: sus subcuencas, que a su vez pueden volver a dividirse en otras subcuencas. Las subcuencas se unen mediante confluencias, es decir cauces que coinciden en un mismo punto, en el que mezclan los caudales o volúmenes de agua que conducen. Con fines prácticos y explicativos, aquí se asume que cada subcuenca se ubica en un orden fractal (Figura 6)

**Figura 6. Clasificación de una red de drenaje, según Strahler (1952)**



Fuente: Ramírez Hernández et al, 2017, p. 168

Cada uno de los órdenes fractales representa una unidad que no pierde sus propiedades físicas al visualizarse como una subdivisión del orden fractal superior o como una supradivisión del orden fractal inferior. Bajo esa misma lógica, cuando se amplían las escalas de una carta de un mapa temático se mostrarán las subdivisiones de una cuenca hidrográfica que no se alcanza a ver, por falta de definición, en una escala menor<sup>187</sup>. En

<sup>186</sup> Otras fuentes que aportan datos e información que complementan la definición de Danièle Dehouve (2017) son Ramírez Hernández et al. (2017) e Izarra et al., 2023).

<sup>187</sup> Es decir que si, por ejemplo, a una escala, por decir 1:1'000,000 observamos que una cuenca se subdivide en tres subcuencas y no alcanzamos a distinguir más subdivisiones, cuando ampliamos a escala 1:250,000 podremos observar que esas subcuencas se subdividen, dada la mayor definición; de tal suerte que el cartógrafo puede pasar a concebir a estas subcuencas como cuencas con sus respectivas subcuencas. Si repetimos ese procedimiento, ampliando la escala a 1:50,000 se podrá



base a estas consideraciones, las subcuencas tienen estructura y funcionalidad quasi idénticas a las de la cuenca de la que han sido fraccionadas. En esa misma línea de razonamiento, la fractalidad plantea la posibilidad de montar constructos humanos sobre redes hidrográficas ubicadas en diferente orden fractal; así por ejemplo: (i) infraestructuras para la retención, almacenamiento ya distribución de las aguas; (ii) acuerdos para el manejo mancomunado del agua.

Desde un punto de vista teórico las infraestructuras pueden plantearse como constructos concretos y tangibles, lo cual marca una diferencia sustancial con las instituciones sociales, que pueden plantearse como constructos abstractos e intangibles. Esa diferente naturaleza de cada constructo tiene importantísimas implicaciones prácticas, ya que para montar en la vida real los constructos concretos sobre una red hidrográfica es necesario fijarlos a un sustrato, o sea al lithos, mediante una cimentación (puesto que requieren de estabilidad para no ser arrastradas por la corriente); caso contrario, los constructos abstractos no necesitan fijarse a un lithos para no ser arrastrados por alguna fuerza física relacionada con las escorrentías, sino que se anclan en la mente humana y en la memoria colectiva.

Pero al quedar fijos a un punto de una red hidrográfica ubicada en un determinado orden fractal, esos constructos concretos, que son las infraestructuras hidrotécnicas, suelen perder parcial o totalmente su sentido práctico<sup>188</sup> para la mayoría o todos los actores que viven en cauces que se encuentran integrados a otros órdenes fractales de la misma red hidrográfica; puesto que al no tener conocimiento o hacer uso de ellas terminan no siéndoles de importancia. No acontece lo mismo con los acuerdos para el manejo mancomunado del agua, puesto que al ser constructos abstractos no pueden ser anclados a un sitio de una red hidrográfica, sino que lo están a la psique de los actores involucrados y pueden “ser trasladados” sin ningún problema y conscientemente a cualquier otro sitio de la red hidrográfica; incluso si ese sitio se ubicara en otro orden fractal porque su conceptualización no tiene nada o tienen muy poco que ver con la dimensión escalar en la que se desenvuelve la vida y la comprensión humana, que es en la que los actores perciben en la vida real a los cauces y su utilidad para ellos; sin importar el orden cartográfico en el que se encuentren.

Lo anterior es perfectamente posible, en la medida que los actores que tienen acceso a las aguas de ese orden fractal pueden perfectamente seguir operando como un colectivo más pequeño, sin perder con ello la capacidad para administrar los también menores volúmenes de escorrentías que bajan por un territorio de menor superficie (la subcuenca). De ahí que los acuerdos puedan seguirse aplicando sin problema, incluso cuando el colectivo de actores original se haya fragmentado y escindido a la par de sus respectivas subcuencas. Es por eso que para cada escala se pueden aplicar perfectamente los acuerdos, ya que lo único

---

observar lo que no se pudo observar a la escala anterior, confirmando que se definen nuevas subcuencas con una cobertura territorial más pequeña. Teóricamente este procedimiento es repetible un infinito número de veces.

<sup>188</sup> No está por demás subrayar al lector que se habla de pérdida del sentido, no de la utilidad. Se considera importante remarcarlo, puesto que lo primero está relacionado con la capacidad que tienen los actores que comparten el cauce en un determinado orden fractal.

que pasa es que los actores que se mueven a esa escala se adaptan a la extensión de su territorio y por ende a los volúmenes de agua que tiene el ORDEN hidrográfico que les corresponda.

## **6.8. Microhistoria y subjetividad de los actores**

Considerando que son los aspectos intangibles los que introducen mayor dificultad al análisis, puesto que implican la incorporación de la subjetividad del investigador, el proceso de elaboración del marco teórico se dejó guiar por los principios expuestos por Charmaz (2006) y por Long (2007), planteados a diferentes escalas y a lo largo de la historia. Espacio por cuanto enfoque territorial, pero no solamente con la perspectiva limitada por una determinada escala sino una perspectiva espacial ampliada por el empleo de diferentes escalas de apreciación de los conflictos; pero también con una visión no estática sino dinámica, como la que da la perspectiva historiográfica y para el caso de la escala *micro* por la microhistoria, en tanto que ésta:

...nos permiten comprender cómo las personas interpretan su momento histórico y cómo, a través de esa interpretación, responden a los problemas que se les plantean... [de tal suerte que] ...el enfoque microhistórico nos obliga a recordar que, entre un fenómeno “objetivo” y otro, siempre median lecturas “subjetivas” y que las personas no reaccionan ante la realidad sino ante lo que ellas creen que es la realidad y ante lo que ellas piensan que puede llegar a convertirse el día de mañana. Los hechos pasados se transforman en un presente que nos interpela y que nos exige una respuesta a través del prisma del futuro posible, deseado o temido.

Viqueira, Juan Pedro (2008)

La dificultad para responderlas se incrementa cuando uno da cuenta de que un aspecto que las atraviesa es el de la intangibilidad que tienen las razones, las motivaciones y los sentimientos que en un momento dado puedan tener los actores que juegan un rol de decisión dentro de un colectivo, para subordinarse ante las agresiones e imposiciones provenientes del exterior o para tomar la iniciativa de emprender acciones de resistencia.

## **6.9. Tipología de los conflictos**

Más allá de las argumentaciones para explicar los temas un tanto complejos de escalas y arenas, planteadas en uno de los apartados precedentes, la propia dinámica interactiva de esta investigación llevó a tomar conciencia de la necesidad de clasificar los conflictos estudiados; lo cual llevó a clasificarlos en dos tipos: i) por afectación territorial y ii) por cuerpo de agua afectado; mismos que se discuten en este apartado.

### 6.9.1. Por tipo de afectación territorial

A treinta años de los cambios efectuados al Artículo 27 Constitucional en 1992, ya se puede afirmar que estos cambios a la legislación no se tradujeron en una tendencia definitiva para el país, ni para fomentar ni para desalentar procesos de concentración o fragmentación del territorio. Resultados hay que apuntan en un sentido y otros que apuntan hacia lo contrario. Y lo mismo acontece cuando se entra a hablar desde un punto de vista económico, ya que sin dificultad se pueden encontrar argumentos que apuntalan a exaltar beneficios al bienestar de la población, pero también se pueden esgrimir con facilidad otros argumentos que resalten los perjuicios a los que han conllevado a los habitantes del lugar los cambios al marco jurídico que regula la tenencia de la tierra. Argumentar a favor de una u otra postura depende de la lectura que se prefiera dar a de los datos, puesto que en el fondo entraña una toma de posición política, frente a los hechos promovidos por el Estado y algunos sectores sociales.

En lo referente a la Región Sureste de Coahuila no se puede negar que, durante los años del siglo XXI se han alcanzado sustanciales incrementos al Producto Interno Bruto merced al crecimiento generado desde la industria automotriz, que se refleja en mejores niveles de ingreso monetario de la población (Carbajal et al., 2016). Con todo y eso, los cambios de uso del suelo para implementar procesos de producción ligados al mismo crecimiento industrial han causado afectaciones a los ecosistemas que deterioran la calidad de vida de las personas que tenían o tienen sus medios de vida en esos sitios, al desplazar a las actividades primarias que tradicionalmente se practicaban en la región.

Esas afectaciones ambientales tienen que ver con la visión extractivista con la que el capital ha irrumpido en casi todos los rincones de la región, siendo ejemplo palpable de su actuar en ese sentido el del agua, cuyo uso en las actividades industriales ha incrementado su demanda en grado superlativo, con lo cual se han generado dos tipos de procesos degradativos: el de la sobre explotación de los mantos acuíferos del subsuelo y el de la contaminación tanto de cuerpos de agua superficiales como subterráneos. En ese tenor, aquí se han tipificado en dos grandes vertientes: la *expansión extractivista* y la *expansión polutiva*. Dos conceptos que el autor de este trabajo entiende de la siguiente manera:

- i) por *expansión extractivista* al proceso histórico experimentado en un territorio o paisaje ecológico mediante el cual la extracción progresiva de elementos o componentes naturales del ecosistema, para ser empleados en actividades humanas, van agotando su existencia, al grado de poner en riesgo la capacidad de regeneración y la integralidad ecosistémica.
- ii) la *expansión polutiva* es entendida aquí como el proceso histórico experimentado en un territorio o paisaje ecológico, mediante el cual actividades humanas asentadas en el mismo generan cambios fisicoquímicos a sus componentes o elementos naturales, merced a los cual deterioran sus equilibrios a escala molecular; con ello a la integridad, a la viabilidad y a la resiliencia de sus ciclos naturales de materia y energía.

Una característica observable, útil para diferenciar fácilmente una actividad extractiva de una polutiva, es que en la primera se causan daños físicos a los ecosistemas, en tanto que en la segunda se les causan daños químicos y fisicoquímicos; de aquí que la expansión polutiva sea considerada la más peligrosa para el mantenimiento de los ciclos que sostienen la vida.

El ejemplo que por excelencia es utilizado para ilustrar la expansión extractivista es el proceso de producción de las actividades mineras, en el que las empresas explotan el mineral mientras obtienen elevadas tasas de ganancia, pero abandonan el lugar cuando ha quedado tan escaso mineral que el negocio ha perdido su rentabilidad; dejando territorios desolados y sociedades locales en la pobreza, sin importarles en lo más mínimo el destino que corran de ahí en adelante los seres vivos que se quedan. Más allá de ese ejemplo clásico, hablar de *expansión extractivista* también aplica a otras actividades económicas que implican extraer de los ecosistemas sus componentes abióticos y bióticos<sup>189</sup>, sin reponerlos, rehabilitarlos o restaurarlos; es decir, depredándolos. Aquellos componentes que experimentan una mayor afectación son los que se encuentran integrados a ciclos de regeneración natural lentos; especialmente aquellos en los que tales ciclos se miden en periodos de tiempos geológicos, como es el caso de las aguas subterráneas.

Entran en la definición de *expansión polutiva* las actividades humanas contaminantes que afectan al entorno ecológico, ampliando progresivamente la cobertura territorial del daño. Este tipo de afectaciones siempre acompañan a la extracción de los componentes naturales, en especial de los abióticos, donde los procesos de producción emplean algún tipo de sustancias químicas: desde combustibles y lubricantes para la maquinaria ocupada en dichos procesos (como pueden ser durante una perforación o un barrenado) hasta explosivos o incluso solventes químicos muy tóxicos, como se hace en la minería (incluyendo el *fracking*).

Como sucede en otros lugares del mundo, tanto las actividades extractivas como las polutivas que en el Sureste de Coahuila son desplegadas en la actualidad tienen una estrecha relación causal con el crecimiento económico y poblacional. En específico, para el tema que nos ocupa, que es el del deterioro de sus acuíferos subterráneos, al hablar de *expansión extractivista* se hace referencia a una serie de irregularidades administrativas y operativas que se han hecho, por parte de actores externos, en torno a las concesiones de los permisos de perforación de pozos profundos, lo cual han traído en consecuencia sobre explotación y abatimiento de los volúmenes disponibles. Al hablar de *expansión polutiva*, la referencia más fuerte es la de la construcción de confinamientos de residuos industriales de alta toxicidad, “gestionada” también por parte de actores externos mediante la manipulación documental y/o procedimental de los permisos de autorización, que han puesto en grave peligro de contaminación a varios mantos acuíferos y cuerpos superficiales, no solamente del Sureste de Coahuila sino también del Este de Nuevo León.

Los mismos modos irregulares de operar u otros parecidos, que suelen utilizar los actores externos interesados en que les sean otorgadas concesiones de agua y permisos para

---

<sup>189</sup> . En el rubro de los recursos bióticos se incluyen los genéticos.

instalación de empresas contaminantes en estas regiones, suelen ser recurridos por ellos mismos para apoderarse de la tierra; apoyándose para ello en el marco jurídico reformado en 1992. Esto es, que se trata de acciones que dan constancia de que la acumulación de capital por la vía del despojo es hoy una realidad en la región de estudio.

### **6.9.2. Por el tipo de cuerpo de agua afectado**

En la descripción de los sistemas de producción rural históricos para la Franja Sur de Coahuila, que se hace en los últimos apartados del Capítulo 3 y los primeros del Capítulo 4 de este documento, se mencionan los tres tipos de cuerpos de agua de los que ésta se extrae para ser empleada como insumo de producción en los campos de cultivo: i) los ríos (cuerpos de agua superficiales permanentes), ii) las escorrentías (cuerpos de agua superficiales estacionales) y iii) los acuíferos del subsuelo (cuerpos de agua subterráneos).

Sin dejar de reconocer la excepcional centralidad que posee La Laguna para tratar el tema de los conflictos por el agua, dado que los objetivos de la presente investigación se centran en el Sureste del Coahuila, la atención que se le brinda a aquella es solamente de resaltar su importancia dentro del contexto geográfico. En ese tenor, en apartados del Capítulo 3 se explicó que los dos sistemas de producción en la Franja Sur de Coahuila han sido, por excelencia el de secano para el sureste y el de riego para La Laguna. Se ha reiterado ahí que la instrumentación de uno u otro sistema de producción dependió de los volúmenes de agua en disponibilidad. Esto es, que la presencia de los ríos Nazas y Aguanaval en La Laguna permitió implementar, desde el tercer tercio del Siglo XIX, el modelo agrícola basado en sistemas de canales y presas que la derivaban de sus cauces hacia los campos de cultivo; por contraparte, en el apartado 4.4. de este documento, se han descrito de manera detallada las características del sistema de producción de secano, basado en el desvío y aprovechamiento de las escorrentías que bajan estacionalmente por las laderas de los lomeríos y de las serranías.

Para los fines de la presente explicación, baste aquí con señalar que todos ellos poseen, como sistemas hidrológicos que son, un punto de carga y otro de descarga. Los cuerpos de agua superficiales se cargan del agua pluvial y de manantiales; su descarga se realiza por filtración al subsuelo. Los cuerpos de agua subterráneos se cargan a partir de filtraciones del agua superficial, quedando confinada la mayor parte de sus volúmenes en hoquedades y cavernas, por un tiempo indeterminado (desde unos meses hasta millones de años), aunque en algunos casos una parte de esos volúmenes son regresados a la superficie, pasando por grietas geológicas que, bajo condiciones topográficas favorables, afloran en algún punto en forma de manantiales.<sup>190</sup>

---

<sup>190</sup> . Los manantiales reciben regionalmente el nombre de *chupaderos*. En ocasiones afloran solamente en temporadas lluviosas del año o permanecen muchos meses sin aflorar cuando se atraviesa por periodos de sequía severos.

Algunos manantiales afloran todo el año como fuente de agua, pero algunos solamente durante algunas temporadas del año; de ahí que los pequeños arroyos que de ellos se forman son

Debido a lo anterior, resulta importante no perder de vista que, debido a que tanto las escorrentías como los mantos acuíferos forman un *continuum* físico indivisible, los conflictos que se generan entre quienes compiten por acceder a esos cuerpos de agua no deben verse como eventos independientes. Esto es, que la indivisibilidad, como propiedad física de los acuíferos subterráneos y superficiales, tienen efectos determinantes en los acuerdos sociales que han sido instituidos para su aprovechamiento; por otra parte, el hecho de ser un cuerpo continuo de tamaño variable (i.e. pequeño o grande), que se extiende sobre la superficie o por debajo del territorio, explica la importancia de analizar los conflictos por el agua a diferentes escalas pues, dependiendo de dicho tamaño, un conflicto puede ser visible o perceptible en más de una escala y tener diferente impacto socioambiental en cada una de ellas.

## Conclusión

Los apartados comprendidos en este capítulo tratan de explicar el proceso de integración de un marco metodológico ecléctico, fundamentado en imbricar enfoques y métodos de varias disciplinas científicas sociales y naturales, mediante nodos conceptuales en los que, en cada uno de ellos, convergen al menos dos disciplinas. Se ha pretendido construir de esta manera una especie de prisma metodológico, con varias facetas disciplinarias, a través del cuál el investigador se asoma buscando encontrar una explicación holística de los conflictos por el agua que se propuso estudiar.

Una labor de diseño metodológico de ese tipo ha implicado realizar un especial esfuerzo para identificar redes y nodos, en los cuáles se vinculan al problema estudiado actores y actantes. El reto que se presenta al investigador es algo parecido a armar un puzzle en el que la meta es conectar temas que a primera vista parecen no tener conexión; la vía para lograrlo pasa por definir variables biofísicas y sociales interdependientes dentro de la misma escala o entre diferentes escalas, a través de un ejercicio dialéctico entre la teoría y la praxis. El resultado es un constructo de ideas, teorías y propuestas, ensambladas en un *holum* complejo que representa el marco contextual de las diferentes arenas en las que se manifiestan las repercusiones de la sobreexplotación de los cuerpos acuíferos, como conflictos entre una gama de actores, tanto locales como externos a las arenas o incluso al territorio comprendido en cada una de las escalas de estudio.

El tomar conocimiento de la existencia en la cuenca del Arroyo San Miguel de los restos ruinosos de un enorme sistema hidrotécnico mediante el cual los hacendados controlaban las escorrentías antes de ser afectados por el reparto agrario y el conflicto desatado a partir de la imposición de un confinamiento de residuos industriales tóxicos en Noria de La Sabina, llevaron al investigador a reconfigurar dentro de la propuesta de investigación: i) el periodo histórico a abarcar; ii) el territorio a considerar como universo de trabajo; iii) las escalas de

---

considerados cuerpos de agua superficiales intermitentes; así, dependiendo de si fluyen un mayor o menor porcentaje de los meses del año, pueden ser denominados semi permanentes o semi estacionales.

investigación y iv) la gama de actores que juegan un rol en los conflictos por el agua. Al optar por hacer esas modificaciones se incrementó drásticamente la complejidad de la investigación, debido a lo cual el presente capítulo, dedicado a explicar el enfoque teórico metodológico de la misma, ha resultado ser el más basto en número de apartados, en relación a los demás capítulos de este documento.

En base a tal complejidad, los dos primeros apartados de este capítulo se dedican a hacer una descripción detallada sobre cómo se fue reconfigurando el proyecto de investigación original, en paralelo a ir confrontando el conocimiento obtenido de manera empírica en el campo con la propuesta que antes de su inicio se hizo de la arena (el ejido Jalpa) y los actores (los ejidatarios jalpenses) y concluir que los factores que inciden en los conflictos no solamente se encuentran en la escala local, sino en la microrregional y en la regional.

Una de las acciones para superar las limitaciones del contexto hidrogeográfico que se había propuesto originalmente en la reconfiguración al marco teórico fue reorientar la investigación hacia el objetivo de explicar porqué, frente a las fragmentaciones del territorio estudiado, los acuerdos para manejar mancomunadamente las escorrentías que bajan por las laderas de las sierras muestran tener una extraordinaria resiliencia, que contrasta con la labilidad de las infraestructuras del sistema hacendario construido con el fin de instrumentar en la práctica el manejo de control de escorrentías. El desarrollo de la investigación llevó a observar que al fragmentarse los paisajes ecológicos se deterioran sus componentes, marcándose una clara tendencia a perder sus características cualitativas; contribuyendo con ello al rompimiento de la homogeneidad del paisaje natural; no siendo el caso para las cuencas hidrográficas, se profundizó en revisar las fuentes bibliográficas, encontrando que estos componentes tienen la propiedad de ser fractales, lo cual trae en consecuencia su resiliencia a la fragmentación de la tenencia de la tierra, como variable antrópica, en tanto que el componente no se fragmenta con la tierra sino que pasa a conformar un orden hidrográfico inferior (subcuenca o microcuenca) en el que se circunscribe el territorio ejidal. Esto ultimo no es asunto trivial pues, como se discute en el siguiente capítulo, la incidencia de esos factores, al ser de contexto, suelen jugar un papel determinante para definir la forma y calidad de vida de los actores locales, siendo ejemplo de ello la cantidad de agua disponible para cubrir las necesidades básicas y productivas o los riesgos de contaminación de los ecosistemas acuícolas locales.

El resto de los apartados del presente capítulo entran dentro de dos tipos: i) los que ofrecen una aproximación general a las teorías y enfoques pertinentes para el análisis; ii) los que se dedicaron a ofrecer teorizaciones propias, desarrolladas con el propósito de integrar las teorías y enfoques descritos en i). Cabiendo destacar que tanto en el caso de las teorías y enfoques retomados de otros autores como en las propias teorizaciones, se buscó orientarlos a proporcionar al investigador un marco de explicación para los procesos socioambientales observados durante el trabajo de campo; lo cual fue posible de realizar mediante el análisis dialéctico; es decir, analizando que teoría y praxis mantengan en todo momento una interrelación coherente y consistente.

Para afrontar la tarea de analizar los datos colectados en campo a la luz de los ejes de esta investigación, se ha recurrido a integrar los enfoques y/o las propuestas teóricas de varios autores reconocidos como especialistas en temas que, de acuerdo al autor de estas líneas, resultan pertinentes para lograr alcanzar los objetivos planteados. En varios de los apartados del presente capítulo se abordan con cierto nivel de detalle, pero de manera sintética se pueden enumerar así: i) enfoques: *Teoría Fundamentada* (Grounded Theory) de Charmaz (2006), Strauss y Corbin (2008) y Glaser y Strauss (1967). Para desarrollar el enfoque del actor, se han retomado tanto conceptos desarrollados por Long (2007), en su *Enfoque del Actor*, como por Latour (2008) en su *Teoría del Actor Red* (Actor Network Theory).

Concebidos los actuales procesos de fragmentación territorial y deterioro socioambiental como consecuencias de la aplicación de políticas públicas de perfil neoliberal, se ha incorporado al enfoque general de la investigación la noción de que el sistema capitalista, que guía a ese tipo de políticas, actúa de acuerdo a un patrón universal que se encuentra definido instrumentalmente de acuerdo a la fase histórica por la que cursa. En ese sentido, para ubicar al capitalismo en su contexto global actual se han retomado las teorizaciones de David Harvey (2005) respecto a la *acumulación por desposesión*; Echillie Mbembe (2003) sobre el concepto de *necropolítica*; Warren Montag (2005) sobre *necroeconomía* y de Subhabrata B. Benerjee (2008) en relación al *necrocapitalismo*.

En tanto que comparten el principio de concebir al capitalismo como un modo de producción nocivo para la vida, la sociedad y el bien común, las teorizaciones citadas marcan pauta a las premisas sociales, económicas y políticas asumidas en esta investigación. Cabiendo precisar que, de todos esos autores, es Harvey quien aborda directamente el tema de los impactos nocivos que ese sistema económico genera sobre el medio ambiente; pudiéndose considerar, por tanto, el más cercano a la Ecología Política. Con todo, un tema tan complejo como el de los conflictos por las escorrentías requiere de ser abordado no solo por enfoques planteados desde las ciencias sociales sino, ineludiblemente, desde enfoques y/o métodos planteados desde las ciencias naturales; esto es, que tratándose de un tema socioambiental su metodología de análisis requiere integrar tanto conceptos ligados a “*lo socio*” como a “*lo ambiental*”.

Partiendo de los razonamientos anteriores, en lo que se refiere a la parte más social del enfoque aspirado se tomó la decisión de enfatizar búsqueda de información para ampliar la comprensión del proceso histórico que ha llevado a la actual situación; pero también se tomó la decisión de diseñar tres propuestas de aproximación metodológica a la investigación, sustentadas en conceptos teóricos de las ciencias naturales:

- i) un modelo de integración espacial *multiescalar*, inspirado en los cortes transversales de una cebolla morada;
- ii) la noción de las redes hidrográficas como *fractales* organizados en sus subsecuentes órdenes hidrográficos (Strahler, 1952);



- iii) la noción de *infraestructuras hidrotécnicas* como *constructos materiales*, por tanto *tangibles* y de *acuerdos para el manejo mancomunado del agua* como *constructos inmateriales*, por tanto *intangibles* o al menos *poco tangibles*.

La primera de ellas se propuso tras reconocer que hay factores que, aunque sólo pueden percibirse ciertas escalas espaciales y no en otras, no por ello dejan de tener una influencia determinante en la cantidad y la calidad del agua a la que los actores locales tienen acceso; es decir, que no son necesariamente evidentes para ellos, o al menos a primera vista como aconteció para el investigador en su primera aproximación al problema. Todo cual, entre otras situaciones, se puede explicar en función de las interacciones e interdependencias que existen, a partir del ciclo natural del agua, entre los sustratos geológico y atmosférico; con todos sus factores y variables, que nada tienen que ver con las convenciones humanas para estudiarlas, que en este caso es el de las escalas.

La segunda y tercera propuestas se desarrollaron buscando hacer de ellas una vía para responderse a la inquietud de porqué, mientras por un lado las instituciones locales para el manejo mancomunado del agua han demostrado tener a lo largo de tiempo inmemorial una alta resiliencia ante los impactos de las fragmentaciones territoriales estudiadas, por otro lado las infraestructuras hidrotécnicas hacendarias colapsaron tras el reparto agrario de los años treinta del siglo XX. Considerando que ambos elementos tienen al menos dos puntos en común: i) que son constructos humanos, uno social y otro material, creados como instrumentos para controlar escorrentías; ii) que, por tanto, están montados en la red hidrográfica local, como su punto de anclaje.

Respecto al tema del manejo mancomunado de escorrentías, las observaciones realizadas en campo durante la presente investigación permitieron constatar que la resiliencia de los acuerdos destinados a compartir las aguas entre vecinos fue muy superior a la de las estructuras hidrotécnicas para mantenerse íntegras. Encontrando que el concepto clave para poder comprender este efecto es el de *fractalidad*, ya que se trata de una propiedad que tienen tanto las redes hidrográficas como los acuerdos sociales, lo cual hace posible que puedan trasladarse exitosamente a cada uno de sus órdenes hidrográficos (cuenca, subcuenca, subsubcuenca, microcuenca, etc), haciéndolos tremendamente resilientes. Las obras hidrotécnicas no son fractales por lo que, en su materialidad, se fragmentan a la par del territorio. De esta suerte, los acuerdos no dependen ni del orden hidrográfico de la cuenca ni del volumen de agua de escorrentías que bajan por su vaso; como sí dependen de esos aspectos las obras hidrotécnicas. Por esa razón es que las evidencias que se encontraron en campo demuestran que si bien las infraestructuras hidrotécnicas construidas por la hacienda fueron prácticamente arrasadas con la pérdida de su unidad territorial, causada por el reparto agrario, no fue ese el caso para los acuerdos centenarios o milenarios para el manejo mancomunado del agua. De aquí que los dos argumentos centrales que se esgrimen por el investigador son: i) que los acuerdos, como constructos abstractos e intangibles, tienen la capacidad de adaptarse o absorberse a la fractalidad de las cuencas; ii) las infraestructuras hidrotécnicas, como constructos concretos y tangibles, no tienen esa capacidad.

No se omite señalar aquí la opinión del autor, de que la explicación que en los párrafos anteriores encaja perfectamente en un enfoque estructuralista materialista y que, desde esa perspectiva, abre la puerta para realizar reflexiones teóricas potencialmente interesantes ya que través de ese enfoque los acuerdos pueden ser concebidos, en tanto que instituciones, como superestructuras; mientras que las obras de ingeniería como infraestructuras. Esto es, por un lado las estructuras intangibles y por otro las estructuras concretas que como constructos humanos dan cohesión al Estado. De ahí que quede en el tintero (hoy diremos en el tablero) que realizar un ejercicio de abstracción teórica con este enfoque permitiría, por ejemplo, indagar ¿Hasta que punto toda superestructura cuenta entre sus propiedades la de la fractalidad y en esa medida hacer estimaciones sobre la resiliencia que pueden tener durante los cambios de régimen político?

## CAPÍTULO 7. CONFLICTOS POR EL AGUA A ESCALAS MACRO Y MESO

*... Esta subsunción de la vida humana al mundo y las exigencias de la relación de capital transita hoy también por la subordinación de la naturaleza y de procesos biológicos constitutivos de la reproducción natural de la vida. En la realización del ser de tal relación se despliegan formas antes impensables de colonización de la naturaleza y de la vida humana. La subordinación de los procesos naturales a los procesos del capital y a su dinámica es uno de los fenómenos que define la actual mutación epocal, impuesta "por la hegemonía de la voluntad puramente cósmica del mundo de las mercancías habitadas por el valor económico capitalista"... Son las máscaras de una nueva barbarie a las puertas de la ciudad, tal vez aquella que entrevió la mente deslumbrante de Rosa Luxemburg...*

Adolfo Gilly (2014: 44).

En materia de conflictos por el agua Sureste de Coahuila, en la revisión documental realizada en esta investigación no se encontraron registros documentales a lo largo de prácticamente todo el Siglo XX. De ahí que llame doblemente la atención: por un lado, que hayan detonado de manera relativamente repentina y después se hayan continuado, uno tras otro, durante el último lustro del Siglo XX; por otro, porque los registros hallados sobre los conflictos por el agua previos a esos dos casos están fechados más de cien años antes. La diferencia más importante entre unos y otros es que, mientras los conflictos que disparan con el siglo XXI se relacionan con los acuíferos subterráneos e involucran a actores locales (campesinos y agroempresarios) que se confrontan con actores externos (funcionarios de gobierno y empresarios de perfil industrial), los acontecidos hacia finales del Siglo XIX refieren a una confrontación entre actores locales (hacendados) por los volúmenes de escurrimientos que consideraban que les tocaba recibir a cada quien (Cf. Apartado 5.1.).

Comparar estos hechos dio pie al investigador a hacerse las siguientes preguntas *¿Cuáles fueron las causas de que no hayan surgido conflictos que públicamente se hayan visibilizado durante tan largo periodo de tiempo? ¿Cuál(es) fue(ron) el/los evento(s) que aconteció(eron) que hizo/hicieron detonar el conflicto, de una manera tan repentina y tumultuosa?*

Para responderlas se realizó una comparación de las circunstancias en que acontecieron los conflictos por el agua del Siglo XIX y los del cambio de Siglo XX al XXI, a partir de la cual se encontró que el elemento común en sus contextos históricos fue el hecho de que el Estado mexicano estaba implementando cambios sustanciales a los marcos jurídicos de la tenencia de la tierra, que trajeron en consecuencia tan masivas transacciones de compra-venta de predios rurales que modificaron la estructura de la propiedad; de tal magnitud que generaron la fragmentación del territorio.<sup>191</sup>

---

<sup>191</sup> Estas fragmentaciones se abordan en este documento en sus apartados 5.1. (Fraccionamiento del Latifundio Sánchez Navarro) y 5.3. (Contrarreforma Agraria de 1992). En la Imagen Google Earth 3, se ilustran las fragmentaciones al paisaje, que aquí se consideran atribuibles a las modificaciones al Artículo 27 Constitucional de 1992.

En base a las anteriores consideraciones, el presente capítulo se dedica a describir el estado de los conflictos cuando han concluido las dos primeras décadas del Siglo XXI; argumentando que los conflictos desatados al final del Siglo XX en el Sureste de Coahuila son una consecuencia del actual proceso de fragmentación territorial y que, en ese contexto histórico, representan expresiones de resistencia de los actores rurales locales, para confrontar las maniobras emprendidas por la oligarquía saltillense con la intención de apropiarse de las aguas subterráneas que, hasta antes de la contra reforma agraria de 1992 no eran legalmente privatizables. Visto desde esa perspectiva, la emergencia de sus acciones de protesta, desde las más sutiles hasta las más agresivas, se convierten en evidencia empírica, como otras que se han recolectado a lo largo y ancho del país, de que con la apertura de los mercados de tierras y aguas se dieron condiciones favorables al capital, para despojar de estos componentes naturales a sus antiguos dueños.

Y es que la posibilidad de obtener transferencias a unos cuantos individuos de concesiones de extracción de volúmenes de agua subterránea, que antes estaban otorgadas a los ejidos, significó la conversión de este elemento natural en mercancía; es decir, en “una cosa” susceptible de poderse “comprar” por quien ofrezca más dinero a los funcionarios facultados para “legalizar” las concesiones. Así, literalmente de la noche a la mañana y salvo algunas zonas vedadas, los acuíferos subterráneos que rodean la Z.M.S. se convirtieron en objeto de apropiación de una oligarquía ambiciosa, que vio la manera de lograrlo precisamente a través de apañarse de alguna manera las concesiones en oferta. Conforme fueron consiguiéndolo fueron surgiendo conflictos por el agua, antes no vistos en la región, ya que el marco jurídico anterior al de 1992 restringía el acceso a las aguas subterráneas, amén de no permitir su acaparamiento, ya que en el espíritu de esa legislación se concebía al agua como un bien común.

Se considera de especial pertinencia destacar aquí que un acercamiento a la problemática como el que se describe corresponde más bien a lo que comúnmente es observable a escala regional y en muchas ocasiones a escala municipal, más no necesariamente a escala local. Esto es, que cualquier persona que cuente con algún nivel de entrenamiento y experiencia de campo en investigación social o antropológica sabe reconocer que en cualquier comunidad pequeña nunca faltan pequeños o medianos conflictos entre los actores locales, por las más diversas razones; que no trascienden los confines de sus espacios comunitarios, pero que no obstante son conocidos por quienes viven en el lugar; así, en lugares donde las precipitaciones pluviales son escasas, los desacuerdos por las escorrentías que bajan a las parcelas no dejan de presentarse, así no siempre alcancen a ser observables a escala municipal y mucho menos a escala regional. De ahí que aquí se pueda argumentar, con base a la experiencia empírica de investigación, que en realidad no es que haya habido ausencia de conflictos por el agua durante el Siglo XX sino que éstos no se registraron y/o se hicieron visibles a nivel regional, ya que pudieron ser resueltos mediante los acuerdos intracomunitarios para acceder y usar de manera pacífica las aguas locales.

**Tabla 1 Recarga, extracción y disponibilidad en los acuíferos del Sureste de Coahuila que tienen volúmenes registrados bajo el concepto de libre alumbramiento (Datos en hm<sup>3</sup>/año)**

ACUÍ- FERO	Clave	R	DNC	VEAS				DMA	
				VCAS	VEALA	VAPTYR	VAPRH	Positiva	Negativa
General Cepeda-Sauceda	0505*	113.4	30.5	76.7	98.9	0.0	0.0	0.0	-92.7
La Paila	0509*	14.7	0.0	24.6	67.2	0.0	0.0	0.0	-77.1
Saltillo-Ramos Arizpe	0510*	66.0	2.7	90.5	15.9	0.0	0.0	0.0	-43.0
Saltillo Sur	0521*	13.1	0.0	9.3	4.5	0.1	0.0	0.0	-0.8
Cañón de Derramadero	0502**	31.6	5.1	27.4	1.4	0.1	0.0	0.0	-2.4

*Adaptado de Tobón (2021) para CCA con base en información extraída de DOF, 2018).*

\* Acuíferos en los que VEALA ha dado lugar a una disponibilidad (DMA) negativa.

\*\* Acuíferos en los que VEALA es pequeña o cero, pero volúmenes concesionados muy grandes han dado lugar a una disponibilidad (DMA) negativa.

R: Recarga total media anual                      DNC: Descarga natural comprometida

VEAS: Volumen de extracción de aguas subterráneas

VCAS: volumen concesionado/asignado de aguas subterráneas                      VEALA: Volumen de extracción de agua en las zonas de suspensión provisional de libre alumbramiento y los inscritos en el Registro Nacional Permanente                      VAPTYR: Volumen de extracción de agua pendiente de titulación y/o registro en el REPDA                      VAPRH: Volumen de agua correspondiente a reservas, reglamentos y programación hídrica

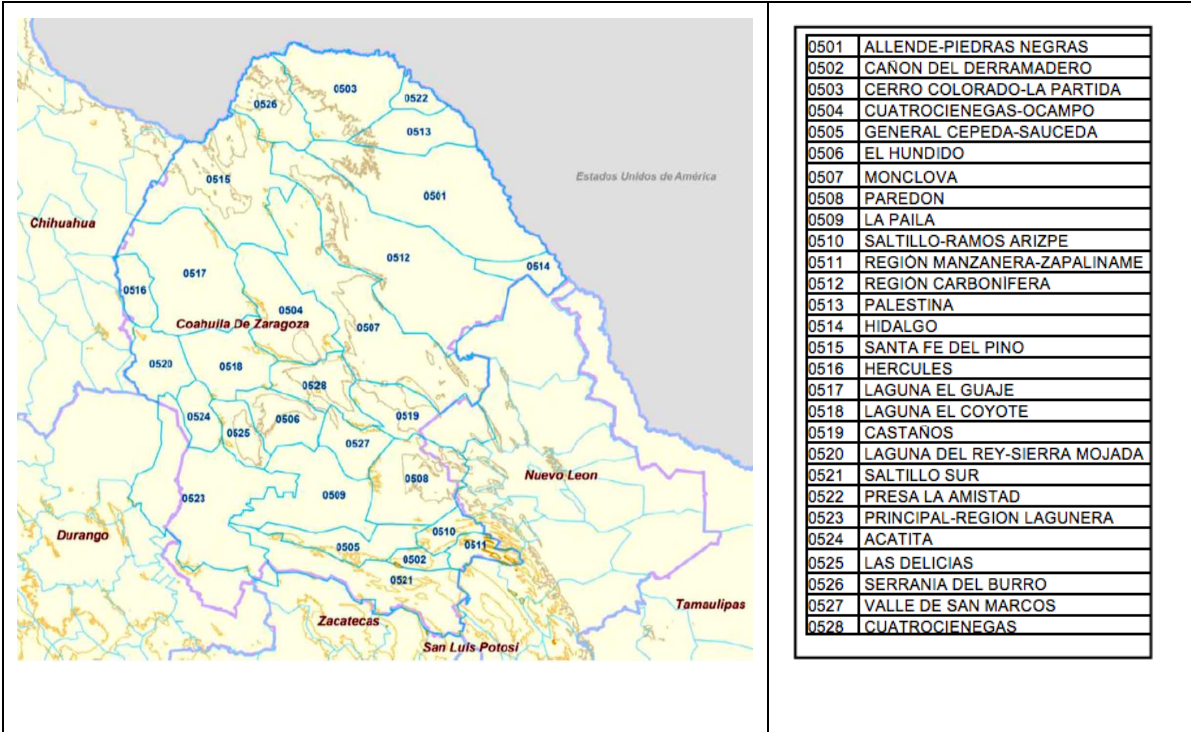
DMA: Disponibilidad media anual de agua del subsuelo.

La fuente resalta que los 13 valores más altos de VEALA en esta tabla corresponden a acuíferos con déficit de disponibilidad

Hoy día los conflictos ya no solamente son locales (escala *micro*), sino que han escalado a nivel municipal (*meso*) y regional (*macro*); pero además son más graves, en tanto que ya no son los relativos únicamente a las escorrentías, sino afectan a los mantos subterráneos de una manera drástica; han pasado a ser observables a nivel regional dada la magnitud de la sobreexplotación de la que están siendo objeto, tras tan sólo unos pocos años en los que se han ido acaparando en las manos de unas cuantas personas físicas o morales las concesiones de extracción. Se trata, sin duda, de un proceso extractivo depredador; que ha traído en consecuencia que para el año 2021 la disponibilidad media anual (DMA) de agua presente tasas negativas en todos los acuíferos subterráneos, alcanzando tasas alarmantes en los que corresponden a la microrregión estudiada (0505 y 0509), como puede observarse en la **Error! Reference source not found..**

### 7.1. Aproximación general a los conflictos regionales

**Mapa 1 Acuíferos subterráneos de Coahuila.**



Fuente: <http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Aguasubterranea/img/coa.png>.

Ante la incapacidad, por no decir corrupción, de las dependencias gubernamentales a las que compete la regulación del uso del agua dada en concesión, al cabo de unos pocos años después de la contrarreforma agraria se ha ido conformando un escenario socioambiental complejo, ya que tras el acaparamiento de estos últimos ha sobrevenido su sobreexplotación y consecuentemente el abatimiento de sus niveles piezométricos. Circunstancia que, por sí misma, terminó convirtiéndose en fuente de conflictos sociales, no solamente derivados por la competencia para acceder a estos cuerpos de agua bajo la

localizados bajo la superficie de la tierra, sino también a las aguas superficiales<sup>192</sup>, en tanto que los mayores volúmenes de agua que fluyen por las redes hidrográficas provienen de manantiales, puesto que éstos son afloramientos de aguas subterráneas.<sup>193</sup>

Así las cosas, el periodo en el que se realiza el estudio con mayor detenimiento y detalle cubre veinte años, partiendo precisamente de 1992 y cerrándolo en el año 2021. Los conflictos a los que se ha focalizado la atención en la presente investigación son los que se han suscitado en los acuíferos 502 505 y 521. Y aunque, como se verá en este capítulo, existen muchas formas de interdependencia entre ellos, respecto al destino que dan al agua extraída los titulares de sus concesiones puede establecerse una notable diferencia, ya que en el primero se orienta principalmente al abasto tanto del servicio urbano de la ciudad de Saltillo como de la Zona Industrial de Derramadero<sup>194</sup>, mientras los otros dos se orienta al riego de plantaciones hortofrutícolas en Parras.

Pero también se dedica atención al acuífero 505, ya que en esta investigación merece un tratamiento especial a partir del hecho de que, a diferencia de los otros acuíferos subterráneos, cuya problemática está muy ligada a la sobreexplotación, en este caso se liga al riesgo de contaminación por residuos químicos de alta toxicidad.

Colateralmente, sin más detalles que los necesarios para comprender mejor aspectos contextuales también se aborda la problemática del Acuífero 509.<sup>195</sup>

La información recabada en la escasa bibliografía generada en torno al peso que ha tenido la construcción de varios parques industriales en la Zona Industrial de Derramadero complementa la obtenida en campo mediante entrevistas. Esas fuentes apuntan a que el principal actor, jerárquicamente hablando, en lo que respecta al inicio de las operaciones emprendidas tanto desde el Estado como desde actores empresariales dedicados a los negocios inmobiliarios fue Rogelio Montemayor Seguy, quien desde su cargo como Gobernador del Estado 1993-1999<sup>196</sup> emprendió una serie de acciones destinadas a

---

<sup>192</sup> Uno de los casos explicados en el Capítulo 8, que involucra a ejidatarios de Jalpa y San Juan del Cohetero, ilustra de manera detallada cómo se da este tipo de agravamiento del conflicto.

<sup>193</sup> Tanto a los cuerpos de agua que se encuentran bajo la superficie terrestre como a los que se encuentran sobre ella se encuentran integrados como componentes o facetas dentro de un solo sistema biofísico, por tanto no pueden escapar de las interdependencias del ciclo natural del agua.

<sup>194</sup> Una narrativa sobre la evolución histórica de la Zona Industrial de Derramadero ya se ha realizado en los apartados 5.3 al 5.5. de este documento.

<sup>195</sup> De acuerdo a la CONAGUA (<http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Aguasubterranea/img/coa.png>) los acuíferos subterráneos comprendidos dentro de la Región Sureste de Coahuila son los siguientes: el 0502 Derramadero, el 0505 General Cepeda-Sauceda, el 0509 La Paila, el 0510 Saltillo-Ramos Arizpe, el 0511 Región Manzanera-Zapalinamé, el 0521 Saltillo Sur; que pueden ubicarse en el Mapa 5, en el que se muestran los veintiocho acuíferos subterráneos que la Comisión Nacional del Agua tiene definidos para el estado .

<sup>196</sup> Si bien Rogelio Montemayor fue candidato del PRI para llegar a la gubernatura de Coahuila, también contó con la anuencia y concurrencia de empresarios panistas de La Laguna; ya no se diga que con todo el apoyo político que le brindó el entonces Presidente de México Carlos Salinas de Gortari, con quien se dice que le liga una cercana amistad. Un acercamiento a su perfil político puede consultarse en <https://www.proceso.com.mx/nacional/2002/1/21/rogelio-montemayor-su-mala-fama-63999.html> (publicada en enero de 2002; revisada en 04/09/2016).

facilitar el proyecto de la oligarquía a la que él mismo pertenece. En ese tenor, desde los primeros meses de su mandato, en 1994 ordenó constituir un fideicomiso ad hoc (Fidagua), justificado con el argumento que con él se resolvería el problema del abastecimiento de agua a la ciudad de Saltillo; mediante el cual contrató, en enero de 1995, a la empresa estadounidense Malcolm Pirnie Inc.<sup>197</sup>, para realizar un estudio prospectivo para la explotación de los acuíferos subterráneos cercanos a dicha ciudad. Pero de acuerdo a algunos testigos, las razones de la constitución de Fidagua y de cómo con sus acciones se desató un conflicto con los actores rurales fueron otras, como se plantea en un artículo periodístico de la época:

...lo que en realidad sucede es que Fidagua pretendía solucionar el problema de líquido para Saltillo, explotando exhaustivamente los acuíferos, de acuerdo con una programación que habían realizado empresas extranjeras, mismas que señalan los sitios que se sugieren para la explotación. Las zonas indicadas van desde el Cañón de La Casita, donde se quiebra la Sierra de Parras, municipio de General Cepeda, hasta las aguas superficiales del Río Nazas, explotando los acuíferos de Carneros Dos y Parras. En el primero están los ejidos Tinajuela, La India, Frayle y Palmas Altas.

Más aún: En esta programación se considera que el único problema a resolver es el de Saltillo, ignorando las demás poblaciones que tienen derechos prioritarios sobre el acuífero. Y más, las autoridades estatales y municipales han estado explotando los acuíferos de este municipio, contraviniendo las disposiciones del decreto de veda, del 7 de abril de 1979, en el que se establece el municipio de Saltillo. La realidad es que la explotación del acuífero ha ido más allá de lo racional...

*(Ríos Navarrete, 2000 [2]).*

Desde esa perspectiva puede deducirse que tanto las movilizaciones que se dieron a partir de 1995 tanto en el Cañón de Derramadero como en el Cañón de La India tuvieron un mismo origen. Pese a que también cabría argumentar que se trató de un mismo conflicto el autor de esta investigación defiende la idea de que se trata de dos conflictos; lo hace a partir de analizar los perfiles socioeconómicos y políticos de los actores locales que intervinieron en cada movimiento y cómo a partir de dichos perfiles se configuraron los respectivos equilibrios de poder en la confrontación con los actores externos. Equilibrios de poder que tuvieron un peso determinante para que las presiones sociales ejercidas con las movilizaciones hayan adquirido diferente magnitud final para cada conflicto.

Para respaldar las afirmaciones anteriores, el autor recurrió a dos tipos de fuentes diferentes: las historiográficas y las entrevistas/diálogos con algunos actores locales

---

<sup>197</sup> Ríos Navarrete H. (2000 [2]) señala a que la Malcolm Pirnie Inc. tenía su sede en Nueva York y que le encargaron realizar unos estudios basados en isótopos del agua subterránea. Sin embargo, en una entrevista, Francisco Zamora Cancino (quien fue uno de los protagonistas centrales en el conflicto por el agua en el Cañón de Derramadero en su calidad de Presidente del Comisariado Ejidal de Jagüey de Ferniza), explicó que la encargada de realizar los estudios en su ejido fue una empresa eslovaca (no recordó su nombre); explicando que esos estudios los realizaba introduciendo cámaras de video por los adames de los pozos exploratorios. Se deja aquí sin más indagación esta anotación, al no tener tiempo para confirmar si fue una, otra o ambas empresas las encargadas.



clave<sup>198</sup>. Ordenando cronológicamente los acontecimientos, los apartados del presente capítulo se dedican a describir las vías por las cuáles la Región Sureste de Coahuila se ha ido integrando en la globalización de la industria automotriz y cómo la privatización del agua, como instrumento económico político promovido por el Estado, detonó los primeros conflictos por este elemento natural, que pudieron ser percibidas a la escala *meso* debido al tamaño de la movilizaciones de los actores rurales en resistencia: el del Cañón de Derramadero y el del Cañón de la India o Sierra de La Casita.

Considerando que ya ha sido descrito el contexto de investigación en capítulos previos<sup>199</sup>, en el presente se entra directamente a definir la *arena* a escala *macro* como la Región Sureste de Coahuila, donde se localizan los municipios de General Cepeda y de Saltillo, que son a los que se enfoca esta investigación. Tal definición debería, sin embargo, tomarse como una mera formalidad en tanto que, por cuestiones prácticas, al territorio regional se le concibe aquí más como contexto que como una *arena*. Es decir que, en términos metodológicos estrictos, el análisis *macro* debería integrar sistemáticamente el análisis individual y de conjunto de todas las *arenas meso* comprendidas dentro de la región/*arena macro*; sin embargo, debido a las limitaciones de recursos y de tiempo, el estudio *macro* se enfoca a la región y el *meso* a los acuíferos subterráneos que ya han sido mencionados; con ello, se logra obtener la perspectiva de la problemática más acuciante de un área geográfica más amplia, lo cual permite al investigador contextualizar de forma muy adecuada a los estudios de caso, que definidos como *arenas micro* se abordan en el Capítulo 8.

## 7.2. La escala *macro*

En términos de la cobertura geográfica de la presente investigación, la aquí denominada escala *macro* se corresponde con la Región Sureste de Coahuila; sin embargo, nunca, ni remotamente, se pretendió abarcar con este estudio su totalidad, debido a que su superficie territorial es tan amplia<sup>200</sup> que imposibilita cualquier intento de hacerlo, al menos para los fines últimos de esta investigación. En ese sentido, a la región se le concibe como el contexto territorial a escala *macro* de los casos estudiados; dentro de la cual quedan comprendidos los contexto *meso* y *micro*. Para ubicar los estudios de caso en esas tres escalas se elaboraron dos tipos de ilustraciones: la primera es el Mapa 6, en el que se

---

<sup>198</sup> Uno de los principales actores clave que fueron entrevistados en varias ocasiones lo es Francisco Zamora Cancino, quien en 1996 era Presidente de Comisariado Ejidal de Jagüey de Ferniza y una de las cabezas de las movilizaciones campesinas por la defensa de la tierra y del agua del Cañón de Derramadero.

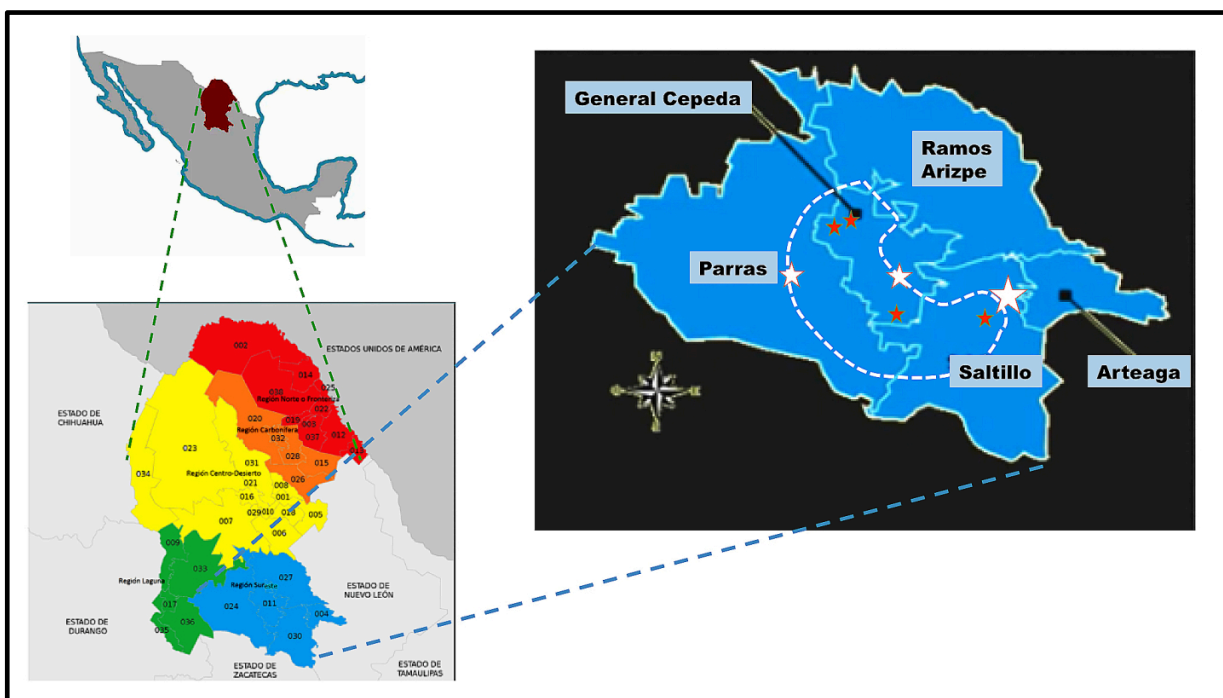
<sup>199</sup> Antecedentes sobre el marco geográfico de esta investigación han sido desarrollados en los Capítulos 1 y 3 del presente documento, donde por un lado se describen las características del Desierto Chihuahuense, que viene a ser el contexto natural del estado de Coahuila; por otro lado, se ofrece una explicación sobre las repercusiones que ha tenido a lo largo de la historia la escasez de agua en la evolución de la economía de esta entidad del Noreste de México.

<sup>200</sup> Con sus 26,751.8 Km<sup>2</sup> (Gobierno del Estado de Coahuila, 2019), la Región Sureste de Coahuila equivale a una superficie aproximada a la que tienen en conjunto siguientes estados del país: Tlaxcala (4,016 Km<sup>2</sup>), Morelos (4,089 Km<sup>2</sup>), Aguascalientes (5,016 Km<sup>2</sup>), Colima (5,025 Km<sup>2</sup>) y todavía 4/9 del sexto más pequeño (Querétaro, que cubre 11,699 Km<sup>2</sup>) (INEGI: <https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/#collapse-Resumen>, revisado el 19/04/2023).

muestra la escala *meso* dentro de la escala *macro*; la segunda es la Imagen Google Earth 4, en la que se muestra la escala *micro* dentro de la escala *meso*.

En el Mapa 6 se resalta en color azul la localización que tiene la Región Sureste de Coahuila en el estado, en tanto que destaca con color café a Coahuila dentro del territorio mexicano. Luego, en el cuadro que detalla la Región Sureste se ha dibujado una línea de guiones blancos los límites del territorio (que tiene forma parecida a la de una letra “C”) que representa el universo de trabajo de esta investigación<sup>201</sup>, que en base al conocimiento empírico del investigador define al área de afectación de la Zona Industrial de Derramadero a los recursos acuíferos del Sureste de Coahuila. Dentro de dicha línea perimetral se han dibujado tres estrella de color blanco que, citadas de Oeste a Este, representan las cabeceras municipales de Parras de La Fuente, General Cepeda y Saltillo; también hay dibujadas cuatro estrellas más pequeñas, de color rojo, con las que se indican los sitios en donde se localizan las localidades seleccionadas para realizar los estudios de caso.

**Mapa 6. Localización de la zona de influencia económica de la Zona Industrial de Derramadero, dentro de la Región Sureste de Coahuila**



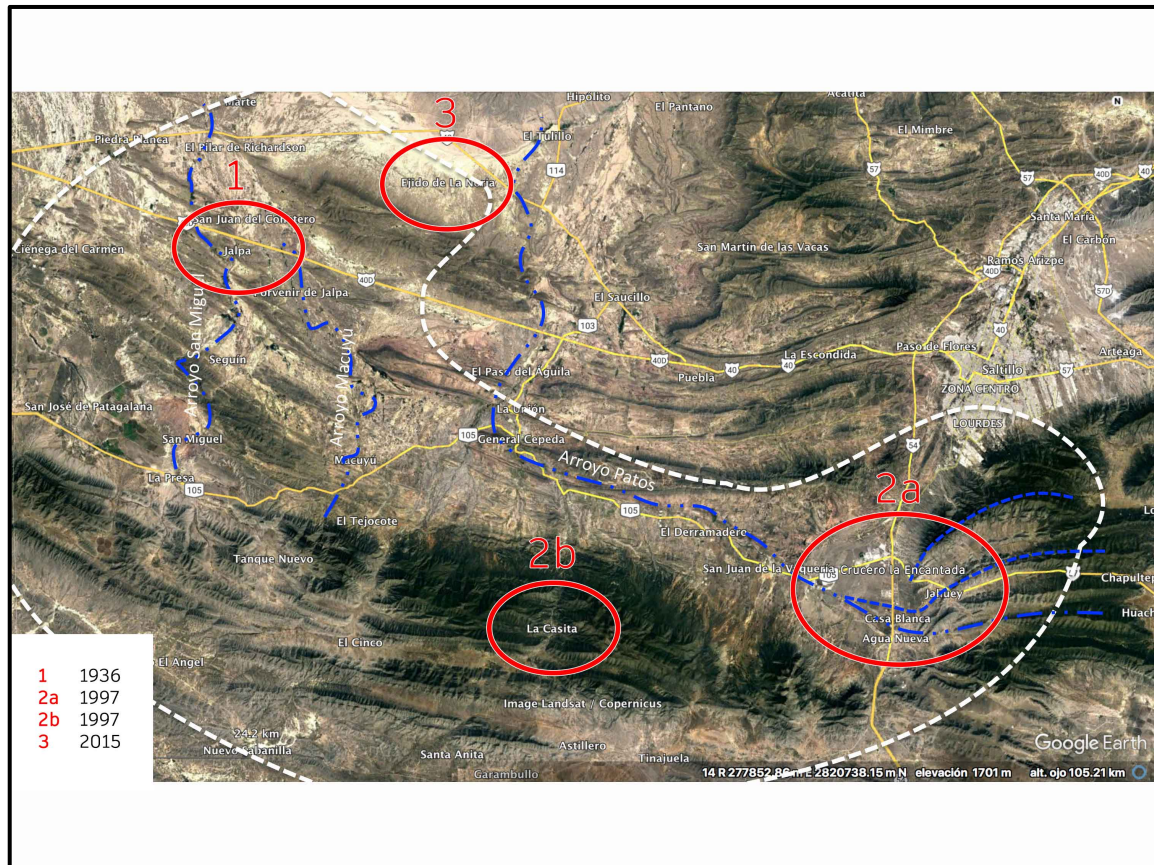
Fuente: Elaboración propia.

En la Imagen Google Earth 4 las estrellas rojas han sido sustituidas por elipses del mismo color, a las que se les ha rotulado con números, de acuerdo a su antigüedad: a la de la Presa Jalpa se le ha rotulado con el número 1, por ser el más antiguo de los cuatro casos;

<sup>201</sup> El trazo con forma de “C” es discrecional pero aproximado, al haberse realizado con base en el conocimiento empírico acumulado en diez años de trabajo de campo, en los que el investigador recorrió en varias ocasiones la mayor parte de los ejidos que se encuentran dentro del área de cobertura de la imagen de satélite; preguntando a los actores locales, siempre que podía, sus impresiones sobre la disponibilidad de agua antes y después de la instalación de la Z.I.D.

las elipses 2a (Crucero La Encantada) y 2b (Sierra de La Casita) corresponden a los conflictos que surgieron en 1997 como respuesta a los primeros intentos del Sistema Municipal de Aguas de Saltillo (SIMAS) de apropiarse de las concesiones de los acuíferos subterráneos; la elipse 3 corresponde al caso del confinamiento de residuos industriales tóxicos en Noria de La Sabina. En este mismo mapa se han resaltado con líneas de guiones de color azul los cauces principales de los arroyos Patos y San Miguel, que son los de mayor interés en este estudio.

#### Imagen Google Earth 4 Localización de los estudios de caso en el área de influencia de la Zona Industrial de Derramadero, Coahuila



Fuente: elaboración propia.

Idealmente, el universo de trabajo puede concebirse como la cabeza de un bastón, que sobre la superficie terrestre tendría una longitud aproximada de unos 150 Km de largo, por unos 30 Km de ancho promedio. Se le ha diseñado con el auxilio de la aplicación Google Earth®, pero con la finalidad de tener una mejor idea sobre ella, se sugiere imaginar que ha sido dibujada con un plumón grueso, comenzando al Sureste de la ZMS, justo en la Zona Industrial de Derramadero. Desde ahí el trazo se hizo primero hacia el Oeste, siguiendo el sentido de las manecillas de un reloj; el cual nos lleva hasta una distancia aproximada de 40 Km, donde se encuentra la Sierra de La Casita. Girando paulatinamente hacia el Noroeste y luego hacia el Norte, pasamos muy cerca de las localidades parrenses de Seguin y Presa de San Antonio; para seguir hacia el Noreste, sobre una línea

imaginaria que pasa muy próxima a Jalpa, San Juan del Cohetero y Noria de la Sabina; el trazo podría haberse prolongado hacia en esa misma dirección Noreste, hasta Hipólito, que es una localidad que pertenece al municipio de Ramos Arizpe, pero a pesar de que se trata de una localidad expuesta a riesgos de impactos letales, en caso de un derrame de tóxicos, no se incorpora al universo de trabajo de la investigación debido a que los habitantes de este ejido se autoexcluyeron de integrarse solidariamente al movimiento de Noria de La Sabina, por las razones que en el apartado correspondiente se explican.

Los conflictos por el agua en el Crucero La Encantada y en la Sierra de La Casita se circunscriben para su estudio en la escala *meso*; en ese sentido, deben conceptualizarse como contexto de los conflictos de la Presa Jalpa y de Noria de La Sabina, en los que la mayor interacción con los actores locales proporcionó mayor detalle de información de campo y permitió analizarlos a escala *micro*. Pero la magnitud que adquirió el segundo de ellos hizo necesario analizarlo también en la escala *meso* e incluso en la escala *macro*.

Se considera pertinente recalcar que dentro de esta delimitación de territorio no se han abarcado, ni remotamente, todos los conflictos por el agua que existen en él. Los tiempos y los recursos disponibles no permitieron abarcarlos. La delimitación del mismo tuvo como finalidad dar contexto geográfico a los tres casos estudiados y soslayó la mayor parte de los conflictos por el agua, incluso graves, como los están ocurriendo en Parras de la Fuente y en Arteaga; también se dejan sin tocar los muy graves que se ciernen sobre Ramos Arizpe<sup>202</sup>.

### **7.2.1. Arena regional /contexto**

Las cinco cabeceras municipales del Sureste de Coahuila fueron fundadas por los conquistadores españoles y tlaxcaltecas, durante la segunda mitad del siglo XVI. Salvo el caso de Ramos Arizpe, las otras cuatro ciudades se fundaron arrinconándolas en oquedades de las estribaciones de las sierras aledañas, desde donde se han extendido hacia los valles aledaños, cuyas pendientes topográficas de escasa inclinación son más propicias para el diseño y construcción urbanas. Ese “arrinconamiento” es un reflejo de la relación del sitio de su fundación con las fuentes de agua, ya que sus cascos viejos se encuentren alrededor de manantiales o pequeños arroyos permanentes, que nacen o bajan

---

<sup>202</sup> El crecimiento industrial del municipio de Ramos Arizpe ha sido ampliamente estudiado desde hace décadas (Mendoza C., 2001), en virtud de que cuenta con una localización privilegiada, entre las zonas metropolitanas de Saltillo y de Monterrey. Como se ha señalado en otros lugares de este documento, sus actuales tasas de crecimiento económico son de las más altas del país. En este contexto, a mediados del 2023 se armó a nivel nacional un gran revuelo publicitario, que creó enormes expectativas en el ánimo de la población neoleonense y coahuilense, con el anuncio de la instalación de la ensambladora automotriz de Tesla en Santa Catarina, N.L. Y aunque se dio como un hecho seguro, al cerrar la edición del presente documento (fines de 2024) ya no se veía tan clara esa posibilidad.

Viene a colación esta nota porque uno de los problemas que se han vislumbrado con relación a la elección de la ubicación de esas instalaciones industriales es la escasez de agua, ya que ésta es un insumo que se consume en grandes cantidades por este tipo de industrias. Puesto que Santa Catarina colinda Ramos Arizpe, Coah., en caso de que se llegara a concretar su instalación, es de preverse que se desatarán fuertes conflictos relacionados con el acceso a este elemento natural.

en los piedemontes. Así, hasta la actualidad, el agua que aún corre por las acequias de algunas calles de Arteaga, Parras de la Fuente y General Cepeda al mismo tiempo de ser fuente de vida son parte de la identidad local.

Aunque son cinco los municipios que conforman esta región<sup>203</sup>, el presente estudio centra su atención en los dos antes señalados, así como colateralmente en el de Parras De La Fuente, debido a que el acuífero subyacente al territorio municipal de Ramos Arizpe (0510 – Saltillo Ramos Arizpe) no es el mismo que los que subyacen a los territorios municipales de General Cepeda, Parras de La Fuente y Saltillo (acuíferos 0502 Derramadero y 0521 Saltillo Sur); por ello, las afectaciones locales que la infraestructura industrial ubicada en Ramos Arizpe hace a ese cuerpo de agua subterráneo generan dinámicas socioambientales diferentes a las que se dan en los acuíferos que subyacen a los tres municipios señalados y debido a ello repercuten en comunidades y actores insertos en otros sistemas hidrológicos subterráneos. Por su parte, el municipio de Arteaga se excluye, aparte de que se encuentra sobre otro acuífero subterráneo (0511 Región Manzanera-Zapalinamé), su problemática socioambiental es muy distinta a la del resto de municipios de la región puesto que en él predominan los paisajes rurales enmarcados por bosques de pino encino<sup>204</sup>, que mucho contrastan con los semiáridos de casi todo el resto del Sureste de Coahuila.

La localización estratégica de Saltillo ha sido un factor determinante para su consolidación como un importante cluster automotriz en los marcos del TLCAN y del T-Mec, lo cual ha tenido un efecto directo en su crecimiento económico, que alcanza tasas superiores a las del promedio nacional (Villa de Patos-IMDEC; 2018: 95).

La Zona Metropolitana de Saltillo (Z.M.S.), en los inicios de los años veinte del Siglo XXI alberga a casi un millón de habitantes (INEG1, 2021). Al sur de la misma, por los rumbos de la salida a Zacatecas por la Carretera Federal 40 y la vía del ferrocarril a San Luis Potosí, se localiza la Zona Industrial de Derramadero, en la que, para 2018, se habían establecido cinco parques industriales.

Los parques industriales del Cañón de Derramadero empezaron a construirse de forma simultánea a la ensambladora automotriz en 1996, sobre terrenos comprados por la empresa Chrysler al Ejido Agua Nueva. Tal compra habría sido legalmente imposible de realizar antes de la promulgación de las Reformas al Artículo 27 Constitucional, pero una vez que se decretó este cambio constitucional bastaron cuatro años<sup>205</sup> para que los terrenos pasaran de tener un régimen de propiedad social a uno privado.<sup>206</sup>

---

<sup>203</sup> De modo auxiliar, se puede recurrir al Mapa 6 para constatar que la Región Sureste de Coahuila tiene los siguientes límites geográficos: al Oriente con el estado de Nuevo León, al Sur con el estado de Zacatecas; al poniente y al Norte con la Región La Laguna y también al Norte con la Región de Cuatrociénegas y con la Región Centro.

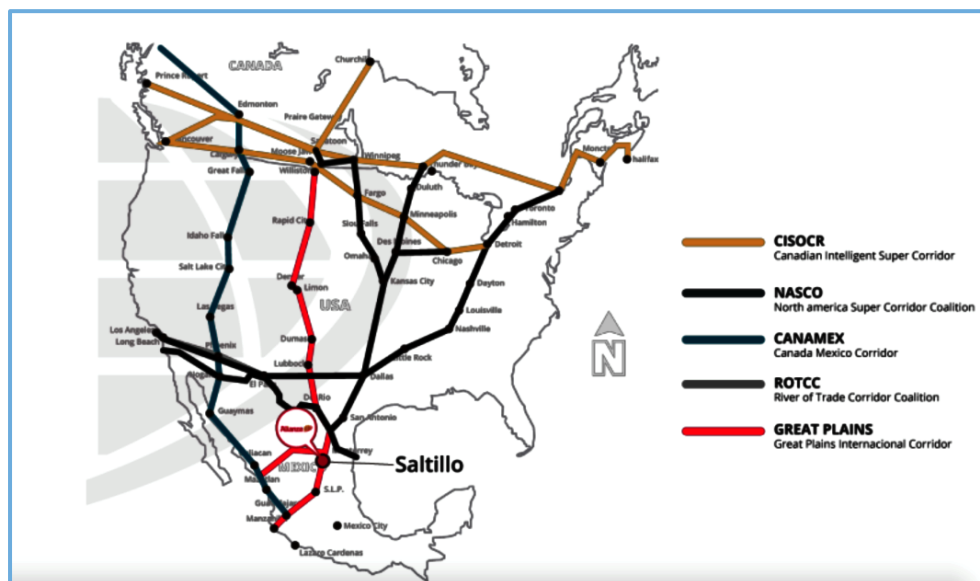
<sup>204</sup> Las mayores precipitaciones de las sierras arteaguenses, que permiten su cobertura vegetal de bosques templados, está relacionada tanto con su mayor cercanía a la Planicie Costera del Golfo de México como a su mayor altitud, que favorece la condensación de los vientos húmedos que provienen del mar

<sup>205</sup> También habían pasado dos años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que para el capital transnacional representó el cierre de “la pinza institucional” diseñada para dar certidumbre jurídica al proyecto de industrialización de Saltillo, visto como



Las ventajas localizacionales del Cañon de Derramadero con respecto al mercado estadounidense son muchas: i) se encuentra en el punto de confluencia de importantísimas vías de comunicación hacia los Estados Unidos de América (Mapa 7), tanto por vía terrestre como aérea; ii) subyacen a su área de ocupación dos de los cuatro acuíferos más importantes de la Región Sureste de Coahuila, con lo cual se hace posible el acceso a grandes cantidades de agua, vista como el “insumo” más importante para el funcionamiento de los procesos industriales.

**Mapa 7. Corredor NAFTA/T-MEC**



Fuente: Villa de Patos-IMDEC (2018: 95)<sup>207</sup>.

Esas ventajas económicas dieron viabilidad a la implantación de cluster automotriz en la Z.M.S.; pero por contraparte, al enmarcarse dentro del proceso privatizador de la tierra y

---

satélite económico de Monterrey, que apostaba a la construcción de un nuevo cluster automotriz en el corto plazo.

<sup>206</sup> Visto desde la misma óptica mercantilista neoliberal con la que fue reformado al Artículo 27 Constitucional en 1992, la construcción de la Zona Industrial de Derramadero puede ser calificada como un “exitoso caso local”, en el sentido de que el cambio de régimen de tenencia de la tierra de ejidal a privado fue logrado en un brevísimo tiempo. La instalación de la armadora automotriz tuvo el efecto deseado de empresa-ancla pues, una vez entrando en funcionamiento, muy pronto repercutió en la instalación de fábricas de proveedores en sus cercanías. Es así que en la ZID se han construido ya cinco parques industriales: Alianza Derramadero, Derramadero Mencorsa, FINSA Sur, Santa Fe y Santa Mónica (Villa de Patos/IMDEC, 2018); cada uno de los cuáles significa un cluster de servicios, con amplias extensiones de terreno que permiten planear futuras expansiones.

<sup>207</sup> Según la fuente de la que se ha tomado este mapa “...“el Corredor NAFTA” conecta a Saltillo con las economías más grandes de Estados Unidos, que son California, Texas, y el Este industrial de este país, así como todo el corredor canadiense de la frontera con la Unión Americana, particularmente hacia Toronto, Ottawa, Montreal y Quebec...”.

del agua generaron fragmentaciones de varios tipos dentro del territorio, que comprenden aspectos socioambientales y socioculturales (véase Capítulo 5).

### **7.2.2. Actores regionales**

En el apartado anterior se ha hecho la aclaración de que el investigador ha optado por tratar a la región de estudio primordialmente como contexto, puesto que aún habiendo sido definida la misma como la arena macro, los objetivos de esta investigación están mejor identificados con las escalas meso y micro. Sin embargo, concebir a la Región Sureste de Coahuila más como contexto que como arena implicó al investigador la dificultad de distinguir a los actores regionales, ya que al tratarse de un territorio regional muy extenso la cantidad y la heterogeneidad de los actores presentes resulta poco práctica de manejar en el marco de una investigación que tiene como referencia central el Enfoque del Actor, ya que éste requiere reconocer y analizar perfiles de personajes concretos que juegan un rol social y/o poseen una agencia al interior de un colectivo social, frente a “los otros”; en un territorio tan extenso y lleno de heterogeneidades, sin embargo, las personalidades individuales de los actores se vuelven difusas y poco tangibles, lo cual conduce a dificultar su análisis y crea el riesgo de caer en “sin sentidos” metodológicos<sup>208</sup>.

Pero recapitulando sobre la decisión de concebir a la región como contexto, se puede decir que el contexto económico político en el que se desarrolló esta investigación experimentó un agresivo proceso de mercantilización de la tierra y del agua, cuya instrumentalización no puede explicarse sin considerar el papel activo que jugaron actores individuales que se coludieron e infiltraron en los tres niveles de gobierno. Al respecto, existen evidencias de que su intervención no fue imparcial sino que favoreció los intereses de grupos de poder político y económico, a los que ellos pertenecen. Desde luego, se trata de acciones de los funcionarios que estuvieron a cargo que no fueron realizadas transparentemente, sino mediante simulaciones y ocultamientos de su fuerte conflicto de, al jugar el doble rol de empleados gubernamentales de alto nivel y empresarios privados.

La intervención de estos actores externos terminó teniendo características más parecidas a las de un despojo que a las de una libre transacción de compra-venta entre las partes; es decir, una privatización hecha de manera socialmente desequilibrada y fuera de las autoregulaciones que suponen que debiera tener el mercado, según las teóricas leyes del liberalismo económico. Medir a escala temporal humana dicho proceso puede parecer largo; pero no lo es al medirl con la del tiempo histórico; en ese sentido es que se puede afirmar que las tres décadas cursadas desde el Decreto de Contrarreforma Agraria hasta el día de escribir estas líneas no han bastado para *incorporar* las otrora tierras ejidales

---

<sup>208</sup> Es por tal razón que, si se hubieran querido analizar a detalle los movimientos sociales que han logrado visibilizarse hasta la escala *macro* se hubiera hecho necesario dar cabida a otras formas de acercarse a la investigación (p.ej. incorporar elementos del Enfoque del Sujeto Social (Zemelman 1992, 1997)); pero ojo, subrayando: solamente en la escala *macro*, no a las escalas *meso* y mucho menos a la escala *micro*, pues ellas abarcan territorios pequeños, en los que puede aplicarse sin dificultad la centralidad del Enfoque del Actor (Long, 2007) y la Teoría del Actor Red (Latour, 2008).

ubicadas en el Cañón de Derramadero al mercado de tierras<sup>209</sup>. Las razones son diversas, pero muchos de quienes fungieron durante los años noventa del siglo veinte como instrumentadores de políticas públicas de fomento a la privatización de los terrenos ejidales siguen hoy ocupando puestos clave en los gobiernos estatal y municipal; de la misma manera, en las pequeñas poblaciones rurales viven muchos campesinos que participaron en las movilizaciones realizadas durante esos mismos años para la defensa del agua.

Sintetizando: En función de que los objetivos de la investigación más correlacionados con las escalas *meso* y *micro*, para tratar la escala *macro* se se concibe la región más como contexto que como arena; en la conciencia que, por cualquiera de estas dos opciones que se le quiera ver, se le reconoce como un territorio que posee un ritmo de transformación muy dinámico. Por los condicionamientos propios de la escala, para complementar el análisis sociológico, se opta por enfocar éste no los actores individuales que han logrado visibilizarse a nivel regional debido a sus luchas por el agua, sino en los actores colectivos; para lo cual se retoman algunos conceptos de la Teoría del Sujeto Social, como el de las utopías y su rol para concretar movimientos sociales y construir al sujeto social.

En base de las consideraciones planteadas en el párrafo anterior, sumadas a la necesidad de limitar la extensión del apartado en el que se describe el contexto regional, la definición de actores se generaliza en actores rurales y actores no rurales; incluyendo dentro de los primeros a todas aquellas personas que tienen sus medios de vida fuera de la ciudad y a los segundos, por omisión, a quienes los tienen en ella.

En base a la decisión de aplicar más bien generalidades que especificidades, en el marco del enfoque de región/contexto al que se le da relevancia al tratar la escala *macro*, cuando se ha requerido mayor precisión en la denominación de los actores se han usado términos que nos remiten al régimen jurídico de tenencia de la tierra: por un lado las de ejidatarios y pequeños propietarios para los actores rurales y, por otro, las de empresarios y funcionarios gubernamentales para los actores no rurales; en el caso del agua se utiliza el de concesionario, indistintamente de tratarse de actor rural o no rural. Dicho lo anterior, asumiendo que los actores rurales de la Región Sureste de Coahuila son los que habitan fuera de la Z.M.S.<sup>210</sup> quienes en esta escala representan a los actores no rurales son aquellos cuyos medios de vida no se encuentran en la misma; no siendo otros que los

---

<sup>209</sup> Se advierte que cuando se hace referencia a la *incorporación* al mercado se está hablando de una acción realizada obligadamente después de la privatización de la tierra; es decir, después de haber gestionado ante las autoridades agrarias el cambio de sus títulos de usufructo de la tierra por títulos de plena propiedad. Sin omitir señalar que el uso del verbo *incorporar* marca una diferencia conceptual respect a usar el verbo *ofrecer*, pues existe un número muy grande de parcelas que ya se encuentran bajo regimen de plena propiedad que aunque se ofrecen en venta **no** resultan atractivas, al menos momentáneamente, para los compradores. En ese sentido: *incorporar* se usa aquí para especificar que se trata de terrenos que primero se privatizaron, luego se ofrecieron en venta y finalmente se vendieron.

<sup>210</sup> A pesar de ser Parras De la Fuente una localidad urbano-rural y de que, a nivel municipal, muchos de sus conflictos por el agua se dan entre actores rurales y no rurales, con un sentido práctico los actores de tales conflictos a los que aquí se hace referencia son rurales. La razón de ello es que en este documento se abordan los mismos solamente de manera colateral y en el contexto regional no viene al caso entrar a detallarlos.



empresarios y los funcionarios gubernamentales, como queda patente en la crónica siguiente:

En el Cañón de Derramadero, la intervención del Gobierno del Estado para tratar asuntos relacionados con el acceso de empresas privadas al agua subterránea empezó a sentirse con mayor fuerza a partir de 1996, tras la instalación de la armadora de vehículos automotores Chrysler. Esta presencia gubernamental se hizo a través de un fideicomiso constituido especialmente para asegurar la dotación de agua a la capital del estado (Fidagua) mediante el establecimiento de acuerdos con los ejidos para extraer del subsuelo el agua necesaria para surtir a la red de agua potable de la misma. Tales acuerdos se realizaron sincrónicamente a la entrada de inmobiliarias privadas al Cañón de Derramadero, por lo que en la memoria de los ejidatarios y otros ciudadanos que vivieron esa etapa persiste la idea de que aunque Fidagua argumentaba que su intervención se limitaba a buscar satisfacer la demanda de agua para el uso doméstico de la ciudadanía saltillense, el objetivo real era dotar también a la industria en proceso de instalación.

Respecto a lo anterior, conviene ubicar a Rogelio Montemayor Seguy pues fue él, como Gobernador de Coahuila entre 1987 a 1993, quien decretó la constitución del Fidagua y por tanto se trata de un actor clave en la generación de los conflictos por el agua que son tema de este trabajo: egresado como licenciado en Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con Maestría y Doctorado en Economía por la Pennsylvania University.

Fidagua sentó las bases para las futuras privatizaciones y acaparamiento de este elemento natural, lo cual es hoy el foco de la disputa entre quienes defienden el *derecho* a acceder y a emplearlo como un *bien común* y quienes lo conciben como una *mercancía*, que como tal se puede acumular para beneficio privado. Montemayor presenta el perfil idóneo que requería la entonces nueva élite tecnocrática, que desplazó dentro del PRI a los antiguos jerarcas de línea nacionalista revolucionaria. De ahí que con su llegada a la gubernatura del estado se defina un parteaguas en la forma de hacer política gubernamental en Coahuila, ya que marca la llegada del neoliberalismo. Y es en ese contexto que debe verse la constitución del Fidagua, instancia concebida para instrumentar acciones conjuntas concertadas con empresarios saltillenses, en las que funcionarios del Gobierno Estatal y de las Presidencias Municipales<sup>211</sup> apoyaban a los primeros a apropiarse *de facto* de los mantos acuíferos 0502 Derramadero y 0521 Saltillo Sur.

Entender el *modus operandi* de esta alianza oligárquica sirve colateralmente para no sorprenderse que el tipo de alianza impulsada por Montemayor en el Fidagua durante los años noventa del siglo XX tenga muchos rasgos en común con el del *Cluster de Energía*

---

<sup>211</sup> Aunque resulta obvio, no se deja de señalar que todos esos funcionarios pertenecían al mismo partido que llevó a Montemayor a la gubernatura. En el caso específico de General Cepeda, fue Rodolfo Zamora Rodríguez, el alcalde que instrumentó los apoyos institucionales municipales que requerían tanto Fidagua como la empresa Servicios Ambientales de Coahuila S.A. para lograr alcanzar sus objetivos de extraer agua del subsuelo y de instalar el confinamiento de residuos tóxicos de San José de La Paila. De ahí que no sea casualidad que este mismo actor reaparezca en 2015, con el mismo cargo de alcalde, para apoyar políticamente el otorgamiento de los permisos para la construcción del CIMARI de Noria de La Sabina, destinado a confinar tanto los residuos peligrosos de la industria automotriz como los procedentes del *fracking* en la Cuenca de Burgos.

*Coahuila A.C.*, en el cual Montemayor Seguy volvió a aparecer en la escena pública, como su titular, tres décadas después, cuando le llegó el tiempo de ser Gobernador del Estado a otro miembro de la *Nomenklatura* coahuilense, Rubén Moreira Valdés (2011-2017).

El rasgo común entre el “Cluster de Energía Coahuila A.C” y el Fidagua, es que ambas instancias fueron presentadas públicamente como organismos intersectoriales. Este dato no debería pasarse por alto, en tanto que permite ver que forma parte de una estratagema ideada para permitir a los actores implicados desempeñarse a su conveniencia, como funcionarios públicos en algunas ocasiones o como empresarios en otras ocasiones; es decir, jugando un doble e intercambiable rol funcional. Circunstancia que hay que tener siempre presente para no caer en la confusión de son actores bien diferenciados y que actúan de forma imparcial e independiente, unos de otros.

Se considera pertinente mencionar que no se trata de un organismo particular de este estado, sino que forma parte de un proyecto que debe contextualizarse en el ámbito nacional, con similar perfil al de los programas federalizados; es decir, que aunque su presupuesto es mayoritariamente federal, su administración se lleva a cabo directamente por los gobiernos estatales. Estos organismos se concentran principalmente en el norte del país, pues todos los estados, excepto Baja California, tienen uno; por contraste, en el centro solamente se encontró registro de su existencia en Querétaro y de ninguno más en cualquier otra región del país (lo cual es de llamar la atención, cuando hay estados, como Chiapas, en donde se produce la mayor parte de la energía hidroeléctrica de México).

Respecto al caso concreto del Cluster de Energía Coahuila, su Misión está definida en la página web oficial como la de “Articular esfuerzos de academia, empresa y autoridades para promover el desarrollo regional sostenible que beneficie a jóvenes, empresas, propietarios de tierras, comunidades, a partir de la explotación de los recursos energéticos que existen en México”. Misma página en la que Montemayor Seguy, con sus propias palabras, señala que “...nos hemos propuesto atender, desde lo local, los desafíos que enfrenta la puesta en práctica de la Reforma Energética en materia de formación de capital humano, y de desarrollo de proveedores, así como de prevención y disminución de los impactos sociales y ambientales...”<sup>212</sup>

Una idea de la magnitud del poder económico y político adquirido por su titular es el siguiente comentario, captado “de paso” durante una conversación informal que sostuvo este investigador con quien era entonces Subsecretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado “*En Coahuila nadie mueve un dedo en cuestiones que tengan que ver con el gas [shale] sin antes tener el visto bueno de Montemayor*” (Arnoldo Martínez Cano, Subsecretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, *com.pers.* 6/10/2017).

De lo que puede lograrse usando ese poder tan amplio para beneficio individual o de grupo da cuenta el siguiente texto, en el que se alude directamente a Montemayor: “...Una versión hasta ahora no confirmada es que, entre sus asociados [del Cluster de Energía] y políticos de la entidad, hay inversiones millonarias en acaparamiento de tierras con

---

<sup>212</sup> La cita de la Misión y de las palabras de Montemayor fueron recuperadas de <https://clusterenergia.org/sobre-nosotros/>, el 10/11/2023. Página en la que se pudo observar, debido al burdo trabajo que hizo el diseñador web, que se había corregido el cargo de este actor; quedando, al momento de recuperar estas citas como “presidente con licencia”.

potencial de shale gas [sic], pues hasta hace unos días el negocio parecía inminente, con tenue oposición de los siempre minoritarios ambientalistas...” (Rodríguez García, 2018).

Sabiendo lo anterior, resulta más fácil comprender el porqué Rubén Moreira mandó a acuñar como slogan de su sexenio de gobierno la frase “Coahuila un Estado con Energía”<sup>213</sup>.

Por si no bastara con todos los datos anteriores, todavía puede agregarse que la Secretaría del Medio Ambiente es una de las dependencias del Gobierno del Estado que integran el Consejo de Administración del Cluster de Energía Coahuila; de ahí que, vista ya la red de complicidades que se han tejido entre la función pública y la función empresarial no sea de extrañar la actitud omisa de su titular<sup>214</sup> ante las demandas de los actores locales para detener la construcción del confinamiento de residuos peligrosos.

Reparando en este aspecto del contexto, salta a la obvia la razón por la cual, en la práctica, la figura jurídica de Asociación Civil funciona como una fachada para disimular<sup>215</sup> lo que es en realidad una operación de Estado, que se orienta (tanto en Coahuila como en el resto de las entidades federativas que tienen un organismo similar) a crear el entramado adecuado para que la oligarquía nacional, con su respectiva “tajada” para cada oligarquía estatal, realizara hasta antes de 2018 negocios ligados a la Reforma Energética, sin mucho escrúpulo respecto a los daños socioambientales que pudieran generar. En el caso concreto de los *Cluster de Energía* de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la perspectiva de hacer negocios estaban centradas en la producción de gas shale de la Cuenca de Burgos (Mapa 8), que comparten todos esos estados con el de Texas, en Estados Unidos de América, donde desde fines del siglo XX el fracking se practica a todo lo que da. En ese sentido, la constitución sincrónica de esos tres organismos tiene como objetivo crear todas

---

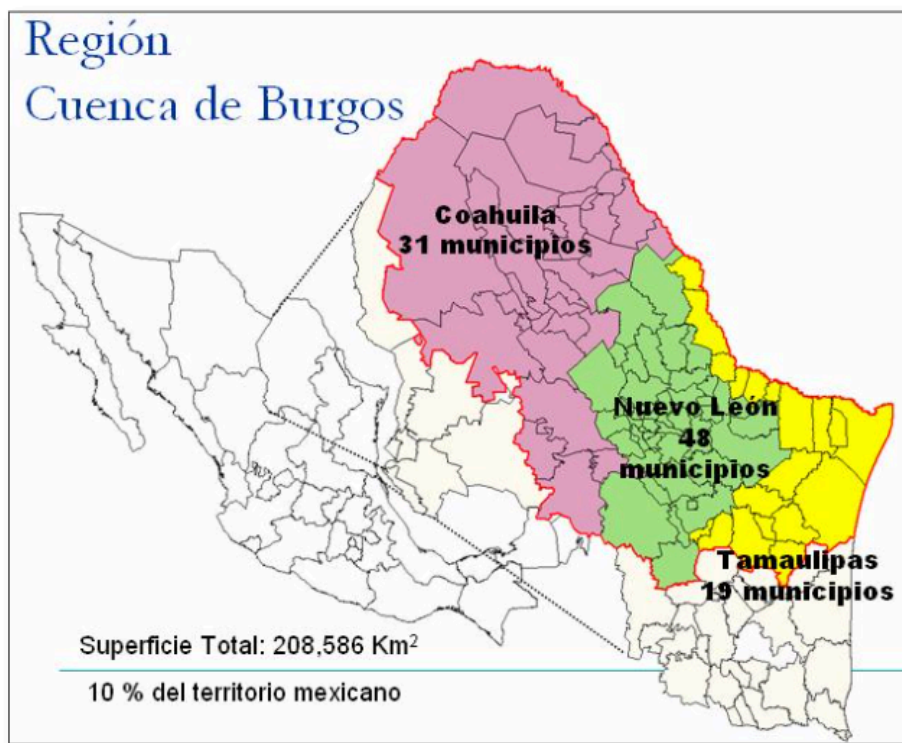
<sup>213</sup> En realidad, Moreira aludía con dicho slogan no solamente al gas shale, sino sino también a otras dos grandes fuentes energéticas para las cuáles fue diseñada la Reforma Energética constitucional en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que él estaba retomando para Coahuila: la eólica y la solar. Estas dos últimas, también integradas al ámbito de competencia del Cluster de Energía. La cuarta fuente de energía es el carbón, cuya producción ha caracterizado a Coahuila como el principal productor a nivel nacional.

<sup>214</sup> En un sitio de la página web del Cluster de Energía Coahuila (<https://clusterenergia.org/sobre-nosotros/>, recuperado el 11/11/2023), en que se se insertan las opiniones de los integrantes del Comité Directivo de ese organismo, se encontraron las siguientes palabras atribuidas a la Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, entre los años 2011 y 2023, Eglantina Canales Gutiérrez: “El Comité está integrado de manera muy plural. Hay académicos, integrantes de la sociedad civil [?], empresarios y gobierno. De esta manera, los puntos de vista convergen [!] en un solo tema, que es el ambiental; sabemos [!!!] que va a ser el tema más importante en la explotación de hidrocarburos...”

<sup>215</sup> Dicha figura jurídica tiene para su presidente, además, el beneficio de servirle como coartada, puesto que al mimetizarse jugando un rol de empresario privado no solamente ocupa un puesto clave para recibir fuertes apoyos económicos y políticos, sino que logra evadir la inhabilitación jurídica para ocupar puestos públicos, a la que se hizo acreedor tras los desvíos de dinero que realizó o consintió cuando fue Director de PEMEX, en el caso conocido como Pemex-gate, que refiere a un desvío de multimillonarios recursos financieros, tanto propiedad de la empresa paraestatal como de su sindicato, a la campaña electoral de Salvador Labastida Ochoa, siendo candidato del PRI a la Presidencia de la República, en 2000.

las facilidades, institucionales y materiales, para desplegar todo el potencial para la producción de gas shale.

**Mapa 8 Distribución del gas shale en el Noreste de México**



Fuente: Periódico Oficial (Coahuila) Tomo CXXI, No 6; 21/01/2014.

Puede verse de la anterior explicación que la intervención sesgada que desde el inicio tuvo Fidagua estaba catalizada por los intereses empresarios inmobiliarios interesados en proveer a las industrias que se estaban asentando el Cañón de Derramadero de terrenos con agua, drenaje y electricidad, para lo cual se valieron de funcionarios estatales y municipales que vieron en ese acto la oportunidad de allegarse “comisiones” o en participar en los negocios directamente; con lo cual en muy poco tiempo se distorsionaron procedimientos administrativos para favorecer los intereses empresariales, creando conflictos de interés en las gestiones institucionales relacionadas con el otorgamiento de concesiones para explotar los acuíferos subterráneos. Dicho esquema, cuestionable ética y jurídicamente, perfila perfectamente en lo se ha dado en denominar “capitalismo de compadres”, “capitalismo de amigos” o “capitalismo de cuates” (Galindo Rodríguez, 2021), que poco tienen que ver con los postulados de “libre competencia” y “libre mercado”, enarbolados por el liberalismo económico; pero los *actores externos* no se han detenido ahí, sino que se han actualizado en la aplicación de las fases de avance del capitalismo, al aplicar métodos que ya son propios de la que Harvey (2005) denomina *acumulación por despojo*.

Así las cosas, no debería ser motivo de sorpresa el hecho de que los derechos de acceso a las aguas subterráneas representen, desde que a principios de los años noventa, origen de desacuerdos entre los actores locales y los actores externos. Desacuerdos que no

solamente tienen un impacto a nivel intra o intercomunitario en las sociedades locales, sino afectaciones socioambientales a mayor escala geográfica, en la medida que han ido ampliando su cobertura territorial y han involucrado a actores externos.

### **7.3. La escala *meso***

Independientemente del estatus de legalidad que posean los procedimientos mediante los que se obtienen las concesiones para la perforación de pozos, la extracción desmedida de volúmenes del agua del subsuelo incrementa paulatinamente la profundidad de sus mantos acuíferos. Y aunque el abatimiento que origina la extracción se manifiesta de forma puntual en un primer momento, debajo de donde se ha perforado el pozo, de inmediato se extiende a las áreas contiguas, pues el pozo actúa de la misma manera como un popote cuando se sorbe con él el contenido de un vaso con agua.

Debido a que el agua subterránea y superficial forma en realidad un solo cuerpo o sistema que guarda un equilibrio entre sus partes, al continuar extrayendo se llega un momento en el que la afectación se manifiesta en la superficie, siendo lo más común que los espejos de agua de las norias bajen de manera abrupta y hasta terminen desapareciendo; de manera similar, se secan los manantiales. Como resultado final, el agua se hace menos asequible a los actores locales y en casos graves derivar en la pérdida de cualquier posibilidad de acceder a este elemento vital, generando una tragedia humana. Esto es, que cuando los volúmenes de extracción de agua rebasan a los de la recarga de los acuíferos la poca disponibilidad de ella lleva a la incapacidad del ecosistema para proveer del volumen mínimo necesario para satisfacer las necesidades básicas de consumo humano. En contextos donde casi no existen cuerpos de agua superficiales, como es el caso de esta región, las unidades económicas que suelen ser las primeras y las más afectadas por esta forma de expansión extractivista son aquellas cuyos medios de vida tienen una alta dependencia del sistema de producción de secano.

De los cuatro acuíferos que se encuentran en los entornos de la Z.M.S., en el presente documento se dedica una atención especial a tres de ellos: el 0502 Derramadero y el 0505 General Cepeda-Sauceda y el 0521 Saltillo-Sur.

No debiera perderse de vista, al enfocar la expansión extractivista sobre los acuíferos 0502 Derramadero y 0521 Saltillo Sur, que su avance en el primero de ellos tiene dirección de poniente a oriente; pero en el caso del segundo va de oriente a poniente; de tal suerte que entre ambas forman una especie de pinza que se va ciñendo poco a poco sobre la parte sur del territorio municipal de General Cepeda. Sobre la parte norte de este municipio subyace el Acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda, cuyo abatimiento es más incipiente que el de los otros dos y se deriva de la expansión de los cultivos de riego parrenses, por lo que no debe de asumirse que las afectaciones que experimenta son las mismas; es decir, que no tienen que ver con la construcción de la Z.I.D.

Para ilustrar mejor esos procesos, se sugiere hacer un ejercicio de imaginación y pensar en un expectador recorriendo el municipio de General Cepeda y sus alrededores, quién podría observar que en la parte norte del municipio de Parras existen las más antiguas huertas de nogal y de viñedos de la micro región; también como éstas han empezado a expandirse sobre terrenos cepedenses, traspasando los límites territoriales de Parras de

La Fuente; al hacer su recorrido cerca de los vértices donde coinciden esos dos municipios y el de Saltillo, repararía que la expansión de esas plantaciones se detiene al topar en los límites con territorio saltillense. La razón de tal detención se explica en términos de que en el norte de General Cepeda se extraen del subsuelo, para establecer esos cultivos, las aguas de los acuíferos 0509 Paila y 0505 General Cepeda-Sauceda (que se citan aquí en el orden de la dirección que lleva la expansión), cuyas concesiones se entregan sin mayores restricciones legales; en cambio, en el sur del municipio se hace uso del Acuífero 0521 Saltillo Sur, que se encuentra vedado en la parte saltillense.

No resulta tan evidente para un observador percibir que exista una presión adicional que se cierne sobre el norte de General Cepeda; sin embargo hay una en grado potencial desde la Zona Industrial de Ramos Arizpe (Z.I.R.A.), pero la dificultad en percibirla se debe a que el Acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda en realidad no ha sido sobre explotado, en tanto que los pozos profundos que nutren a la Z.I.R.A. han sido perforados sobre el Acuífero 0510 Saltillo-Ramos Arizpe. La tendencia de crecimiento de esta zona industrial es a expandirse hacia la Zona Metropolitana de Monterrey (Z.M.M.), ya que la gran mayoría de las factorías se van instalando sobre la carretera 40 Saltillo-Monterrey y muy pocas hacia General Cepeda, sobre el libramiento norponiente de Saltillo. No obstante, existe un potencial de riesgo muy alto, de que a la vuelta de pocos años la expansión extractivista tome dirección del Acuífero 510 hacia al Acuífero 505, debido a que se espera un incremento con tintes exponenciales en la demanda de agua, tanto para la industria como para el uso doméstico.

Se puede emitir un sintético diagnóstico sobre el estado de conservación que guardan los tres mantos acuíferos que subyacen al territorio municipal de General Cepeda diciendo que presentan contrastes dependen de la localización en que se encuentran: los dos que se localizan al sur del municipio se encuentran sobreexplotados, pero el del norte municipal todavía se encuentra relativamente bien, respecto al equilibrio entre las tasas de recarga y de extracción. Dado que los municipios de Parras, Ramos Arizpe y Saltillo envuelven territorialmente a General Cepeda, se visualizan tres amenazas sobre esos tres acuíferos subterráneos, cuyo origen se encuentra en las actividades económicas de los municipios envolventes: desde Parras la de los sistemas intensivos de riego empleados en las nogaleras y los viñedos; la de establecimientos industriales y de servicios, proveniente de Ramos Arizpe y Saltillo que se expanden con gran dinamismo y con ello generan un crecimiento poblacional con tasas exponenciales.<sup>216</sup>

### **7.3.1. Arenas y actores municipales**

Se ha señalado, en otra parte de este documento, que en la propuesta original de esta investigación se planteaba analizar los acuerdos y conflictos que establecen los usuarios de escorrentías que bajan de la Sierra de Parras hacia el ejido Jalpa; pero que tras conversar con los actores locales pudo comprender de mejor forma el tema y reconoció

---

<sup>216</sup> Entre 2010 y 2020, la población del municipio de Ramos Arizpe pasó de 75,461 a 122,243 habitantes, que representa una exorbitante tasa de crecimiento del 62% (datos recuperados el 08/03/2023 de <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/ramos-arizpe>),.

que se había quedado corto en esa primera aproximación, por cuanto se refiere a su apreciación de la complejidad del tema; optando a partir de ello por hacer una serie de modificaciones tanto a los alcances como a la metodología a aplicar en la investigación.

Es en este contexto de reflexión académica que el investigador pudo corroborar que los conflictos por el agua más severos, tanto en el municipio como en la región de estudio, están más relacionados con la afectación que se hace a los acuíferos subterráneos que a las escorrentías y cuerpos de agua superficiales. Recapitulando sobre ese punto, se destaca el hecho de que las amenazas a la integridad de los acuíferos subterráneos cepedenses poseen diferente origen, magnitud, dirección y temporalidad; también que las afectaciones principales a esos acuíferos se derivan de dos tipos de fuentes: la industrial y las plantaciones hortofrutícolas. Por ello, los conflictos por el agua tienden a presentar mayor o menor similitud entre sí, dependiendo de su ubicación geográfica específica; lo cual implica que debería descartarse la idea de que exista algún conflicto que se pueda considerar representativo de los que ocurren en el municipio: ni en su connotación sociopolítica local, ni en las causas del deterioro del cuerpo de agua de referencia, ni mucho menos en las consecuencias que pudieran derivarse en el corto plazo del mismo.

Lo importante a destacar aquí, de los razonamientos antes expuesto es que, sobre la base de la experiencia empírica adquirida en campo<sup>217</sup> se definieron las arenas a escalas *meso*; tomando como referente a los acuíferos subterráneos y no a las cuencas hidrográficas superficiales, como originalmente se había concebido. Así, para el municipio se definieron como arenas *meso* los territorios ubiados sobre tres acuíferos subterráneos:

Acuífero 0502 Derramadero (Saltillo)

Acuífero 0521 Saltillo Sur (Saltillo-Parras).

Acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda

Siendo de destacar aquí que, al ser colindantes entre ellos, se encuentran en permanente y estrecha interacción en múltiples formas; por lo que respecta a lo socioambiental se atiende aquí con meticulosidad las interacciones ligadas a los flujos de materia y energía entre sus ecosistemas y, por ende, las afectaciones que tienen los desequilibrios de esos flujos sobre la sostenibilidad de los modos de vida de las sociedades locales.

Aspectos sustanciales de estas tres arenas se describen en los apartados comprendidos más adelante en este mismo capítulo, pero conviene resaltar aquí que no se entra al mismo nivel de profundidad en cada una de ellas; lo cual es debido a que cada uno de los acuíferos subterráneos cepedenses ejercen un grado de influencia diferente sobre los casos de los conflictos de la Presa Jalpa y de Noria de La Sabina; es decir, sobre las arenas *micro*, que se tratan por separado y con minuciosidad en el Capítulo 8.

Cabe señalar que entre la arena *meso* Saltillo Sur y la arena *micro* Presa de Jalpa se define una arena interfase (*meso-micro*), que es la del Arroyo San Miguel; a la que se le da

---

<sup>217</sup> Con este procedimiento metodológico, retomado de la Teoría Fundamentada (Corbin, 2008), se ha obtenido la información que soporta empíricamente la mayor parte de los desarrollos teóricos formulados en esta investigación.



una mención especial dentro del análisis, puesto que no solamente representa un referente físico como cuerpo de agua, sino sobre un referente con un componente simbólico de gran importancia; que como tal representa un elemento cultural que fortalece la identidad de los actores locales involucrados tanto en el conflicto de la Presa Jalpa como en el conflicto de Noria de La Sabina.

Resulta importante destacar que, al encontrarse la escala *meso* en la parte media del modelo escalar empleado, ancló en cada una de sus arenas un “nodo analítico”, desde el cual se vincularon las interacciones inter-escalares entre ellas, en tres direcciones: i) “hacia los lados” o entre acuíferos; ii) “hacia arriba”, entre un determinado acuífero y su contexto regional y global; iii) “hacia abajo”, cada acuífero visto como contexto de las arenas *micro*: la Presa Jalpa y Noria de La Sabina.

Para definir el nivel de profundidad al cual llevar la descripción de las arenas *meso*, se ajustó su nivel de detalle al grado de influencia que el deterioro del acuífero subterráneo en cuestión tiene sobre los conflictos que se contienden en las arenas *micro*. Así, la descripción del Acuífero 0502 y su circunstancia se hace a mayor profundidad que la que se hace del Acuífero 0521; en el mismo sentido, la del Acuífero 0505 se trata sólo referencialmente. Debido a este procedimiento es que la información que se presenta al comparar entre sí a las tres arenas presenta disparidades, pero vistas en conjunto son complementarias y ofrecen una perspectiva del contexto que tienen las arenas *micro*.

Por otra parte, puesto que la cartografía tiene una definición suficiente para distinguir las localidades dentro de los territorios municipales, en esta investigación y a esta escala ya se configuran rostros y nombres de los actores que se disputan el acceso al agua en las arenas; luego, si bien se sigue recurriendo como en la escala *macro* a hacer la distinción entre actores rurales y no rurales, la ampliación de escala también permite diferenciar a *actores locales* de *actores externos*; pero sobre todo permite distinguir si algunos de ellos han emprendido acciones de movilización.<sup>218</sup>

Estos detalles son, sin duda, de mucha relevancia para el análisis planteado desde el Enfoque de Actor, ya que permiten establecer la secuencia histórica de acontecimientos que de otra manera parecerían que no tienen relación entre sí. En tanto que la secuencia histórica es un proceso, al ubicarla y comprenderla se abre la puerta al investigador para establecer relaciones causales, en este caso de los conflictos y las movilizaciones sociales por la defensa del agua, que no son evidentes cuando dicho investigador solamente tiene la imagen de un momento, como de fotografía; permite incluso, como fue el caso de esta investigación, darse cuenta que existen ciertos actores, algunos de ellos muy relevantes de tener presentes para comprender el proceso, “que aparecen y desaparecen” en momentos críticos o coyunturas históricas o en ciertos espacios sociales y en otros no; incluso permite

---

<sup>218</sup> Afirmaciones como éstas, en las que se señala “lo que la escala permite ver”, son relativas al contexto de cada investigación puesto que dependen de muchos factores; que van desde la dimensión territorial del universo de estudio hasta la de calidad de la información disponible. En ese sentido, se previene al lector de que, si bien es válida la afirmación que en este párrafo se hace, respecto a que es en la escala *meso* donde pueden distinguirse a los *actores locales* de los *externos*, así como sus movilizaciones, solamente lo es para esta investigación; pero no lo es necesariamente para otras donde, por ejemplo, la region no funga como arena *macro* sino como *meso* o *micro*.

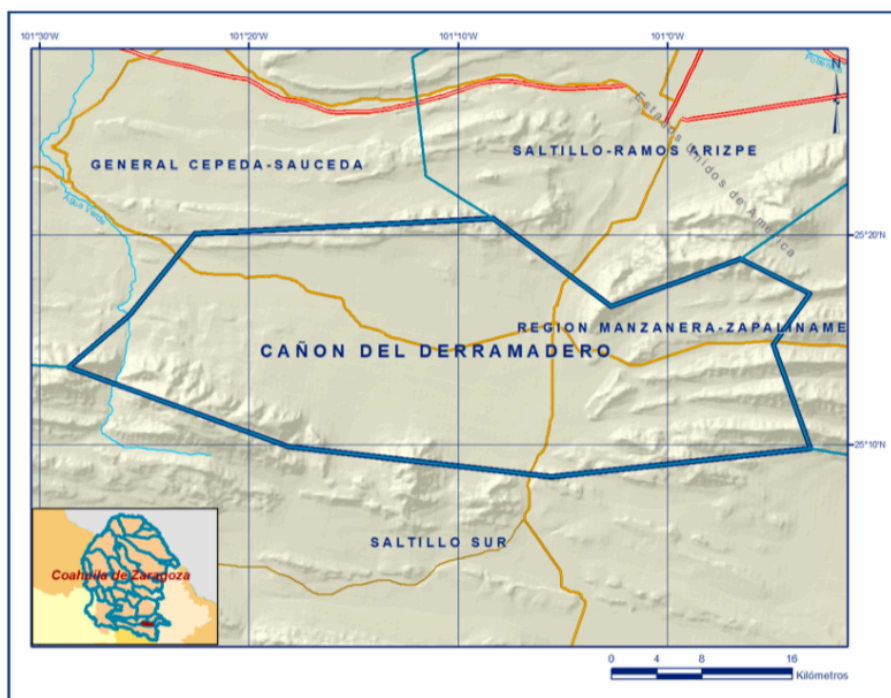


notar espacios de la contienda que se encuentran vacíos, debido a que no son ocupados por actores que uno esperaría que estuvieran ocupándolos, pero que no lo hacen por razones que en ocasiones son claras, pero en otras requieren de formular una posible explicación por parte de quien realiza el análisis del conflicto.

### 7.3.2. El Acuífero 0502 Derramadero

La CONAGUA (2024a) establece los límites de este acuífero subterráneo (0502), con otros similares, de la siguiente manera “...al norte con el acuífero Saltillo-Ramos Arizpe, al este con Región Manzanera-Zapalinamé, al sur con Saltillo Sur y al norte y oeste con el acuífero General Cepeda-Sauceda...”, especificando que “...casi la totalidad del territorio que cubre el acuífero se ubica en el municipio de Saltillo, porciones pequeñas de sus extremos oriental y occidental pertenecen a los municipios de Arteaga y General Cepeda...”

**Mapa 9 Poligonal del Acuífero 502 Derramadero**



Fuente: CONAGUA (2024a)

Dentro de la poligonal del Acuífero 502, tal y como ha sido determinada por la CONAGUA (Mapa 9), quedan comprendidas las dos vertientes de la Sierra de El Pino (al sur) y de una parte de la Sierra de La Casita (al suroeste), además de una extensa superficie (al menos una tercera parte) de la Sierra de Zapalinamé (en la parte oriental). En esta última cubre de manera transversal tres pequeños cañones: dos que corren de oriente a poniente (Cañón de Los Caballos y Cañón de Santa Fe) y otro de Suroeste a Noreste (Cañón de El Recreo). Por su parte, los límites del Cañón de Derramadero se encuentran menos definidos, debido

a que en la connotación de la Región Sureste de Coahuila la concepción de los cañones llevan implícito un fuerte componente sociocultural.<sup>219</sup>

Hecha la aclaración anterior, conviene precisar que de aceptarse la definición de los límites del Cañón de Derramadero en función de la fisiografía, se tendría también que asumir el hecho de que subyacen a él dos acuíferos subterráneos: el 0502 Derramadero y el 0521 Saltillo Sur; en cambio, al aceptar la delimitación consensuada en base a la tradición, que es la que discrecionalmente asumió el investigador dentro del marco geográfico de este estudio, para todo fin práctico se acepta también que existe coincidencia limítrofe entre el cañón y el acuífero. Se trata de una decisión que afecta directamente a los procedimientos de análisis, a la construcción sistemática de la estructura y a la forma en que se presentan las conclusiones, puesto que la extracción de las aguas del Acuífero 0521 Saltillo Sur está parcialmente vedada y sujeta a las disposiciones de 2 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación: uno del 7 de febrero de 1952 y otro del 25 de abril de 1979. Esto es, que el asumir que hay coincidencia entre los límites del Cañón de Derramadero y del Acuífero 0502 Derramadero, en el contexto de la presente investigación permite diferenciar los asuntos del Acuífero 0521 Saltillo Sur (entre ellos los conflictos por el agua) con un matiz de ruralidad, respecto a los procesos económicos y demográficos que prevalecen en la Zona Industrial de Derramadero<sup>220</sup>.

### ***El conflicto en el Cañón de Derramadero***

Inusualmente movilizados en un numeroso contingente, campesinos ejidatarios del Cañón de Derramadero manifestaron en 1995, mediante expresiones de fuerza como tomas de carreteras, su inconformidad por las pretensiones de Fidagua de adquirir de ellos la cesión de los derechos de sus pozos de abastecimiento de agua. Y si bien es obligado reconocer que no puede afirmarse que la movilización fue generalizada, pues en muchos ejidos hubo poca o nula movilización de sus pobladores, sí resulta posible decir que las movilizaciones tuvieron consecuencias muy importantes en la definición de los equilibrios del poder actuales, a nivel micro, por cuanto se refiere a establecer quiénes tienen hoy en día acceso al agua y quienes no. Así, por ejemplo, los ejidatarios de Jagüey de Ferniza, de los más rebeldes<sup>221</sup>, lograron negociar en esa coyuntura con Fidagua y posteriormente con la empresa Aguas de Saltillo un acuerdo mediante el cual recibirán el servicio de agua potable de manera

---

<sup>219</sup> Conviene tener presente que los límites del Acuífero 0502 Derramadero, aunque son parecidos, no son los mismos que los del Cañón de Derramadero. La definición de los límites del acuífero subterráneo se basan en la aplicación de métodos hidrológicos determinados por la CONAGUA. En cambio, los del Cañón responden a convenciones sociales que encuentran su explicación más bien de aspectos identitarios, que comprenden tanto la percepción colectiva del paisaje ecológico como consideraciones culturales.

<sup>220</sup> Aunque la Comisión Nacional del Agua (2024a) reconoce oficialmente el abatimiento de sus niveles piezométricos de este acuífero en la práctica ese organismo no muestra tener capacidad para aplicar medidas efectivas para impedir que continúe su sobreexplotación.

<sup>221</sup> Desde aquellos años hasta hoy, en mucho debido a la ascendencia local de Zamora Cancino, Jagüey (que se encuentra aguas arriba del Cañón de Derramadero) se ha resistido a la privatización de sus tierras y de sus aguas, negándose sistemáticamente a incorporarse a los programas federales de fomento al cambio de régimen de tenencia. Durante el pasado cuarto de siglo ha cursado por múltiples episodios de confrontación abierta con la Empresa Aguas de Saltillo.

gratuita y “a perpetuidad”; en contraste, como consecuencia de que en aquel 1995 no protestaron, hoy en día los pobladores del ejido Agua Nueva (colindante con Jagüey de Ferniza) están obligados a pagar el servicio de agua para uso doméstico a la empresa que extrae el agua del subsuelo del mismo Agua Nueva.<sup>222</sup>

Como ya se explicó antes, el problema se origina a partir de que Fidagua empezó a frecuentar los ejidos del Cañón de Derramadero. A decir del actor clave Francisco Zamora, fue la coincidencia en los tiempos con la construcción de la armadora de automóviles y la inusual insistencia de los funcionarios de que les cedieran los derechos del agua por tiempo y volúmenes indefinidos en los contratos que les ofrecían lo que les hizo sospechar que las intenciones últimas de la dependencia eran hacerlos víctimas de un engaño; es decir, que tras del argumento oficial de Fidagua de destinar el agua requerida a satisfacer la demanda de la ciudad de Saltillo se ocultaba el objetivo real de darla a la industria. Según la misma fuente, pese a esos resquemores decidieron negociar con el fideicomiso y darle acceso a realizar perforaciones exploratorias en el ejido, pidiéndole a cambio que les construyera una red de distribución del agua extraída en su poblado ejida; pero sorpresivamente para ellos, recibieron respuesta negativa a su solicitud, con lo cual se tensó la relación entre las partes; los ejidatarios de Jagüey comprendieron que corrían riesgo de quedarse sin abasto de agua hasta para uso doméstico; su molestia coincidió con la que también se había despertado en otros ejidos por causa del Fidagua, por lo que el reclamo pronto se formalizó en las Asambleas Ejidales; primero en las del Cañón de Derramadero y las del Cañón Del Caballo y luego en ejidos de otros cañones. Así, para cuando Fidagua insistió en proseguir con sus gestiones para quedarse con los derechos de los pozos, varios ejidos ya estaban puestos a la defensiva; organizaron manifestaciones públicas, pero al no encontrar oídos en el Gobierno del Estado escalaron sus acciones y cerraron la Carretera Federal 57.

El autor de estas líneas no se atreve a asegurar que la razón última por la que el Fidagua se haya sentado a negociar con ellos, cediendo a sus peticiones, se haya debido a las presiones ejercidas “desde abajo”, por los actores locales; más bien, considera más probable que el fideicomiso se haya visto también sometido a una presión “desde arriba”, ejercida por la oligarquía saltillense<sup>223</sup>, que se encontraba ansiosa por subirse al carro de los negocios prometidos por los inversores de capital transnacional. El caso es que se pacificaron los ánimos exaltados de los actores locales en resistencia y la desmovilización resultó tan repentina como lo fue la movilización no siendo de extrañar este patrón de comportamiento social pues, después de todo, fueron los campesinos más aguerridos para defender su agua quienes se convirtieron los protagonistas más proactivos de las movilizaciones, que detuvieron cuando aseguraron para sí mismos el acceso futuro gratuito

---

<sup>222</sup> Zamora Cancino atribuye la respuesta negativa que originalmente les había dado Fidagua a que esa dependencia había conseguido, semanas antes, los derechos para perforar pozos en Agua Nueva, sin encontrar objeción ni condicionamiento a sus peticiones: “...pensaron que aquí podían hacer lo mismo” interpreta.

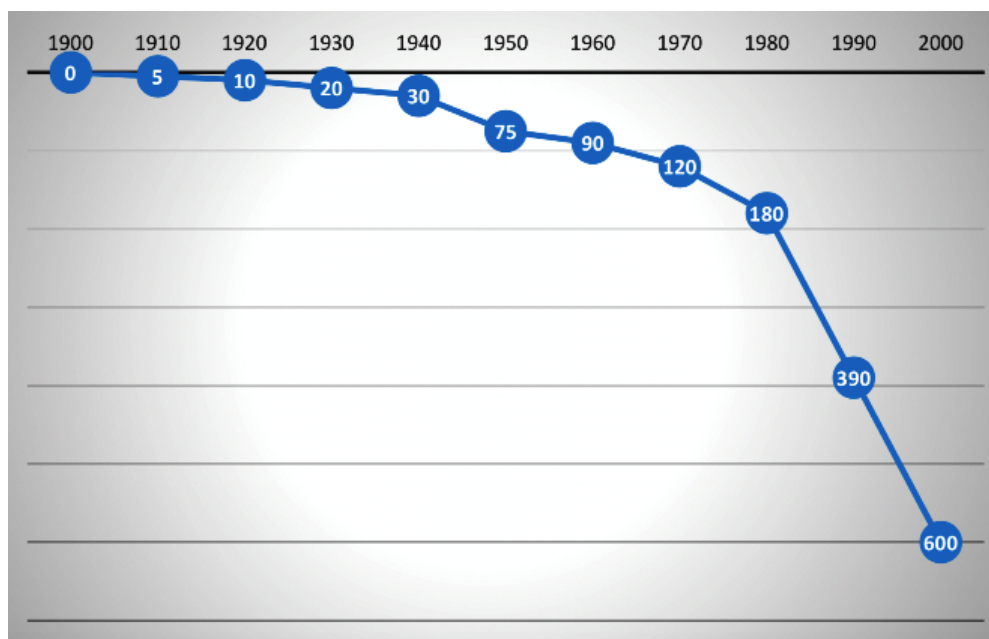
<sup>223</sup> Los actores externos, a quienes aquí se denomina como *oligarquía saltillense*, tenían (y hasta la actualidad tienen) agencia tanto en empresas privadas como en dependencias gubernamentales claves o estratégicas. Se trata de un grupo de empresarios y políticos saltillenses que actúan como auténticos mercaderes predadores del agua y de la tierra para lo cual se coluden de manera sistemática al capital internacional.

a la misma, que (con justa razón) no podían concebir de otro modo que como un derecho<sup>224</sup> del cual siempre habían gozado.

Con la desmovilización se mejoraron sustancialmente las condiciones objetivas para Fidagua, el sentido de que pudo continuar con su labor de obtención de cesiones ejidales para acceder o para perforar pozos exploratorios tanto en el Acuífero 0502 Derramadero como en el Acuífero 0521 Saltillo Sur. No estando por demás mencionar aquí que, para lograrlo, los funcionarios a cargo no dudaron en usar en sus tratos con las autoridades ejidales todo tipo de técnicas de convencimiento, incluso la de la corrupción.

Pero una vez neutralizado el movimiento campesino gestado entre 1995 y 1996 en el Cañón de Derramadero hubo otras repercusiones a favor de la privatización de los elementos naturales, como fue el caso del fortalecimiento de los procesos de compra-venta de terrenos, que junto con las gestiones para adquirir concesiones de agua y permisos para perforar nuevos pozos fueron expandiéndose hacia General Cepeda

**Gráfica 1 Comportamiento de los niveles freáticos (1900-2000)  
(Profundidad de bombeo en mts./promedios)**



Fuente: Destenave F. (s/f: 78).

Así, la actividad extractiva sobre el acuífero fue afectando a las actividades económicas tradicionales de los actores rurales: primero las agrícolas, con el incremento de los siniestros derivados de la escasez de agua; a partir de estas también se afectaron las actividades ganaderas, pues se interrumpieron eslabones de la cadena de producción de

<sup>224</sup> Derecho que, con el pasar de los años se convirtió en un privilegio, que hoy NO tienen quienes en 1996 mantuvieron una actitud pacífica, ya que su inacción les significó, como una consecuencia al mediano plazo, el despojo del elemento natural que garantiza la vida.

los esquilmos necesarios para complementar la dieta de las reses. Todo lo cual disminuyó el ingreso económico de las unidades productivas locales.

A la vuelta de unos pocos años se aceleró la extracción de agua y con ella el abatimiento de los mantos freáticos. Para los inicios del año 2000 la situación ya se había tornado crítica, como lo ilustra la Gráfica 1. Al cabo de unos pocos años las afectaciones han alcanzado mayores dimensiones y formas, como lo muestra el Mapa 10, en el que la línea roja representa los límites del polígono del acuífero, establecidos por la Comisión Nacional del Agua (DOF, 11/10/2011); los íconos con forma de rombos muestran las localidades en las que se encontró presencia de algún conflicto, que se denotan de acuerdo al siguiente código de colores:

- i) con color amarillo aquellos que presentan una percepción social que puede todavía (aunque con reservas) ser catalogada como buena, respecto al papel que el Estado ha estado jugando para resolver el conflicto;
- ii) con rojo aquellas donde se percibe inconformidad de los actores locales, respecto a lo que consideran un deficiente papel o tratamiento institucional de un conflicto cuyos impactos, por otro lado, pueden juzgarse como severos.
- iii) con amarillo y rojo aquellos que aunque se presentan impactos severos se han aplicado alguna(s) medida(s) de remediación, por parte del Estado, que han logrado mantener un cierto nivel de coordinación y cordialidad en el tratamiento de los conflictos.

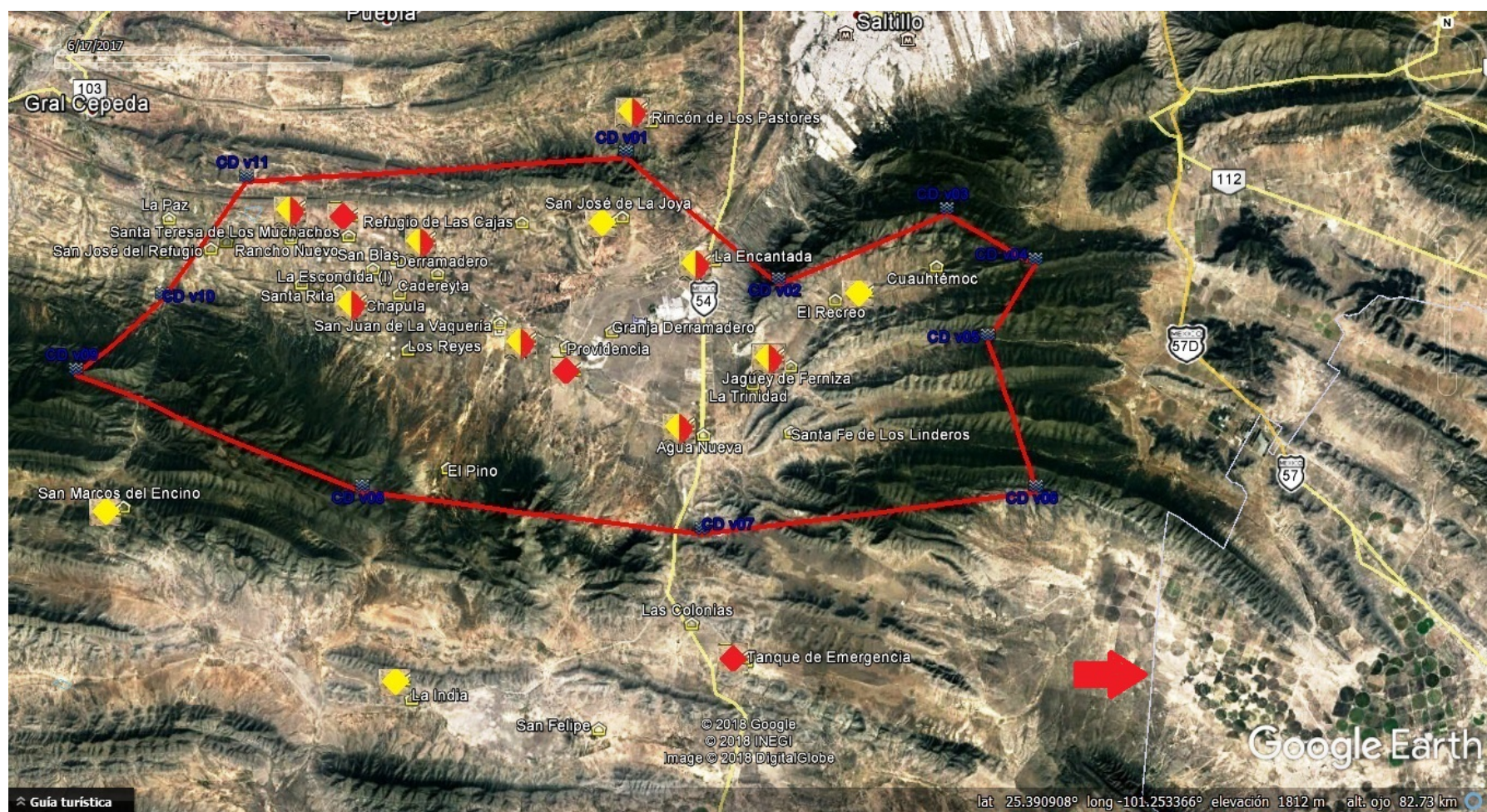
Angel Carrillo (2017) ubica los conflictos más conspicuos que a nivel *micro* se suscitaban en ejidos y propiedades privadas del Cañón de Derramadero, en el tiempo que se realizó esa investigación. De acuerdo a la percepción de esos actores locales se presentan, al menos, tres *facetas de afectación*: i) la afectación económica, derivada del abatimiento de los mantos freáticos que se utilizaban para actividades agropecuarias intensivas; ii) la afectación al acceso al agua para consumo doméstico; iii) la afectación de los derechos jurídicos colectivos. Con *niveles de afectación* diferenciados como *mayores, trascendentes y menores*. En base a estas consideraciones, el autor concluye que los conflictos por el agua se han ido agravando con el paso del tiempo, creando una atmósfera de inquietud social, que se expresa en diferente forma, dependiendo de cada localidad.

Se considera importante destacar que uno de los tres casos que presentan mayor conflictividad, de acuerdo a la investigación de referencia, se ubica a unos 10 Km fuera del polígono del acuífero, hacia el sur. Se trata de un problema que ha durado muchos años y se suscitó entre la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo (Agsal) y el ejido Tanque de Emergencia.

Pero más allá del problema entre las dos partes que existe en Tanque de Emergencia, la ubicación del pozo se encuentra sobre el Acuífero Saltillo Sur, en el cual oficialmente se encuentran vedados los otorgamientos de concesiones de extracción, de acuerdo a los decretos de 1952 y 1979, por lo que, de comprobarse esta deducción, se estaría demostrando la comisión de un delito federal por parte de alguna de las dos partes o de ambas.



**Mapa 10 Magnitud del impacto de conflictos por el agua y calidad de las relaciones entre el Estado y la sociedad local.**



Fuente: Angel Carrillo (2017).

IMPORTANTE: La fuente de este mapa hace una descripción individual de los conflictos señalados en este mapa.

Los otros dos casos que han sido destacados con el rombo color rojo son los casos de Providencia y Santa Teresa de Los Muchachos, en lo que se tiene es ya no un conflicto por acceder al agua sino el impacto del abatimiento de los mantos freáticos sobre la agricultura con sistemas de riego, que ha dejado pérdidas millonarias en plantaciones de nogal que actualmente languidecen.

Para conocer mayores detalles sobre los demás conflictos registrados se remite al lector al documento original de referencia, rescatando del mismo la advertencia de que además de las afectaciones descritas, con la llegada de empresas industriales al cañón se estableció una competencia desigual por el acceso al agua entre éstas y los actores rurales locales: confrontando por un lado a un grupo de actores externos que enfocan su interés en dar un uso exclusivamente económico al agua, contra otro de actores locales para quienes, en el contexto de su vida cotidiana, dan prioritariamente al agua un uso social y no solamente económico, pues en ello les va de por medio la sobrevivencia física de sus familias.

Los cercamientos posteriores al fraccionamiento y venta de los agostaderos imposibilitaron continuar con el antiguo sistema de producción, el cual suponía el uso de la tierra y del agua como un bien común y, como tal, se basaba en prácticas solidarias entre varios ejidos; como lo era el libre pastoreo de los animales por los valles del Cañón, de acuerdo a las estaciones del año y sin restricciones impuestas por los límites ejidales (*i.e.* sin importar si los animales pasaran de un territorio ejidal a otro). Los cercamientos vinieron no solamente a impedir ese libre tránsito de los rebaños hacia donde estuvieran creciendo en ese momento los mejores pastos, sino que bloquearon el tránsito de las reses a los antiguos abrevaderos de uso común<sup>225</sup>.

Resulta destacable rescatar de los resultados de la misma investigación la observación de que los conflictos más graves se registraron al poniente-centro del cañón, en tanto que los que todavía no se han traducido en impactos negativos para la economía local se encuentran hacia el oriente. Eso se debe a que las corrientes subterráneas fluyen de oriente a poniente, de tal suerte que el llamado “efecto popote” tiene un comportamiento sumatorio conforme se avanza en esa última dirección; es decir, que el abatimiento de los niveles piezométricos se va haciendo mayor hacia el poniente.

Pero debe advertirse al lector tener presente que una cosa es tal comportamiento, que se explica en base a las propiedades físicas de los cuerpos de agua subterráneo y otra, muy diferente, las tendencias de ubicación de las actividades humanas en la superficie del territorio. Es decir, que si el abatimiento de los mantos freáticos tiende de manera natural a agudizarse en la parte poniente del cañón; pero como contraparte existe al oriente del cañón el abatimiento de los mismos es fomentado de manera antrópica, originado en el proceso de urbanización que se ha venido desbordando sobre el Cañón de Derramadero, por las facilidades que le proporciona la Carretera 57.

---

<sup>225</sup> Desde un punto de vista histórico, este proceso fragmentación de los espacios comunales es muy similar al que describe Polanyi (2017) para explicar cómo, en los años de la Revolución Industrial, desde las esferas del Estado fueron forzados los campesinos ingleses a emigrar a la ciudad, ante la demanda de mano de obra obrera. Con un resultado neto de despojo del acceso a la tierra y consecuente proletarización

La urbanización implica nuevas casas de estilo urbano que se construyen en los entornos de los antiguos poblados de origen ejidal; principalmente en los que se ubican rumbo a Saltillo (La Angostura, La Encantada y Agua Nueva). Los que eran solares se fraccionan en lotes, contribuyendo con ello a definir que esos poblados terminen por perder su perfil rural y ser más parecidos a las colonias suburbanas. El mismo proceso de integración física a la zona metropolitana también acontece en Providencia, también un poblado de origen ejidal, ubicado sobre la Carretera Estatal 105 Saltillo-General Cepeda. Ahí, la construcción ininterrumpida de nuevas infraestructuras industriales ha terminado por transformar por completo el modo de vida campesino tradicional y de aquel paisaje rural que todavía podía apreciarse hasta fines de los años noventa del Siglo XX queda muy poco: a los costados de ese antiguo camino hoy se yerguen no sólo naves industriales sino también de establecimientos comerciales y de servicios, como las llamadas tiendas de conveniencia e incluso hoteles especializados en albergar ejecutivos que llegan de las oficinas matrices a supervisar los procesos industriales.

Con el incremento de los habitantes en el Cañón de Derramadero se genera una presión adicional sobre los mantos acuíferos subterráneos, tanto por el incremento de la demanda de agua para uso doméstico como porque los poblados de origen ejidal no alcanzan a cubrir las necesidades de servicios de drenaje; lo cual obliga al uso de letrinas, que elevan los riesgos de contaminación del subsuelo.

Desde una perspectiva sociológica, la urbanización conlleva a una transformación social que tiene como uno de sus puntos de origen el hecho de que resulta muy común que las nuevas casas sean habitadas por familias procedentes de otros lugares, en ocasiones incluso de otras entidades del país; que por lo general son familias de obreros y empleados menores que buscan acercar su lugar de residencia a sus centros de trabajo.

### **Ciudad Derramadero**

*Por ahora, la Ciudad Derramadero arrancará con todos los acuíferos importantes para Saltillo y, en general, para el Sureste de Coahuila, con CERO DISPONIBILIDAD DE AGUA en ellos, con excepción de General Cepeda Saucedo (con CERO RECARGA registrada, según reporta CONAGUA –DOF-) y Saltillo Sur (que no pertenece a la Región Hidrológica 24)... para la anunciada construcción de Ciudad Derramadero, la intención del Municipio de disponer de 31.536 millones de m<sup>3</sup> del ASS, pudiera incidir en la afectación de la disponibilidad de agua para los municipios de Parras de la Fuente y General Cepeda, por la interconexión que existe entre los acuíferos regionales. Esta presunción ha puesto en alerta a sectores de la población de esos municipios, con la consecuencia de enfrentar a esos pueblos con actores que están interesados por esa agua. Sobre este conflicto se han posicionado los alcaldes de Saltillo y G. Cepeda, y algunas autoridades a nivel estatal (Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y Secretaría de Economía)*

(Aguirre Villaseñor et al, 2019:523)



Bajo la lógica del capital, la demanda de casas habitación, la mayoría de ellas de interés social por estar destinadas a ser ocupadas por familias cuyas cabezas son obreros, representa una nueva oportunidad de hacer negocios basados en los bienes raíces, que desde la contra reforma han probado generar tasas de ganancias muy altas. En ese sentido, las empresas inmobiliarias que originalmente enfocaban su mayor atención a negocios relacionados con el sector industrial, desde hace muchos años han lanzado la ambiciosa propuesta de construir una nueva ciudad asentada en el cañón, a la cual se le denominaría Ciudad Derramadero (Villa de Patos-IMDEC, 2018).

El proyecto de Ciudad Derramadero es un caso que puede calificarse como oligárquico, en muchos sentidos, sobre todo porque las motivaciones de quienes lo están fomentando con la fuerza tienen que ver esencialmente con la mayor acumulación de un ya de por sí inmenso poder económico y político mediante la especulación de la tierra y del agua, por parte de un pequeño grupo de particulares. Y aunque a primera vista pareciera que un proyecto de tal envergadura fuera fantástico o irrealizable, en realidad no lo parece tanto cuando se toma en consideración que la oligarquía saltillense tiene la capacidad, basada en la experiencia de hacer negocios al amparo del presupuesto gubernamental, maniobrar de mil maneras, con la finalidad de cumplir los objetivos que a sus intereses más les convengan. En ese contexto de abuso del poder, la especulación con bienes raíces les ha rendido tan buenos dividendos que, cuando lo juzgan necesario, no dudan en echar mano de su bagaje de artificios legales o legaloides especialmente diseñados para consumir el despojo a los antiguos propietarios o usufructuarios. A través del despojo protegido desde la esfera gubernamental, no sólo se han convertido en multimillonarios, sino también en una especie de nuevos latifundistas, que como tales pueden actuar como si fueran amos y señores de los ciudadanos comunes y corrientes de la región.

Desde la perspectiva de la economía moral, se percibe como un asunto de extrema gravedad, en tanto que la racionalidad económica que guía a este proyecto está regida por la ambición desmedida, combinada con ascendidos egoísmo y avaricia, de esta colusión de actores externos al Cañón de Derramadero que no tiene escrúpulos para detenerse, pese al daño irreversible que se prevé que el proyecto provocaría al medio ambiente y a la sociedad en general.

Al no tener margen para ahondar en este documento sobre detalles relacionados con el tema de las implicaciones que tiene la construcción de Ciudad Derramadero para la disponibilidad de agua en el futuro cercano, para al menos tres de los cinco municipios el Sureste de Coahuila (General Cepeda, Parras de La Fuente y Saltillo), se recomienda la lectura del documento intitulado “Informe Derramadero: La “Ciudad Modelo” y el agua en Saltillo, Coahuila” publicado no hace mucho por Fundación Villa de Patos/IMDEC A.C. (2018). Otra fuente de información ya un poco antigua, pero con una cobertura territorial más amplia en los entornos de la Z.M.S., que resulta complementaria para la comprensión de esta problemática, puede encontrarse en Maya Martínez (2012)

Por considerar que sintetizan bastante bien los pronósticos que hacen los críticos de ese megaproyecto, se reproduce el texto siguiente extraído del primero de los dos documentos recomendados en el párrafo anterior:

El problema más ingente que enfrentará la población rural ancestralmente asentada, así como la estratégica zona industrial en Derramadero es el relativo a la captación, distribución y suministro de agua, e implica que, en el futuro mediano, la disputa por el líquido vital tendrá lugar con consecuencias, previsibles varias de ellas, de conflicto social y político...

...Desde mediados del año 2007, el cabildo del Municipio de Saltillo había negado su aprobación al proyecto de instalar una “Ciudad Modelo” en el lugar. La objeción más importante y trascendente fue hecha sobre la base de un estudio técnico (1995) que indicaba claramente, doce años después, que el proyecto de la “Ciudad Modelo” era inviable por la escasez de agua para dotar a una población urbana completamente nueva, con tendencia a crecer por la vía migratoria y la vía de la concentración de la población trabajadora local.

Desde los años ochenta, las autoridades locales y federales conocían los muy sensibles niveles de abatimiento de las cuatro y luego cinco zonas de carga o recarga de los acuíferos que nutren a la Zona Metropolitana de Saltillo...

Fundación Villa de Patos/IMDEC A.C. (2018: 7-8)

Contra las evidencias, la protesta pública y uno pensaría también que contra el sentido común más elemental, la presión que ejerce el grupo de empresarios inmobiliarios por concretar el proyecto no ha sido retirada, ni en el ámbito o campo de operación económica ni del ámbito de la operación política que compete al sector gubernamental (ya no al sector privado al que formalmente pertenecen). Así, a partir de que algunos de los integrantes más poderosos del subsector se encuentran colocados en posiciones de gobierno claves, desde hace varios periodos del gobierno municipal, en los Planes de Gobierno Municipal<sup>226</sup> que corresponden a los sucesivos alcaldes del presente siglo, siempre se inscribió de forma a veces es más explícita y a veces menos algún objetivo, meta o acción, que ha contribuido a concretar en alguna medida el avance del proyecto en los hechos. Lo anterior, sin decir que también desde el nivel de Gobierno del Estado se trabaja y/o apoya a esa misma causa, de manera ininterrumpida y sistemática<sup>227</sup>.

---

<sup>226</sup> Véanse, por ejemplo y no exclusivamente: Gobierno Municipal de Saltillo (s/f) Anteproyecto Plan Municipal de Desarrollo Saltillo 2022-2024. Documento para Consulta Ciudadana, pp 29 y 45 (en <https://saltillo.gob.mx/pmd/>) y Gobierno Municipal de Saltillo (s/f) Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2019-2021 (en [http://www.implansaltillo.mx/files\\_publicaciones/archivo\\_publicacion\\_1.pdf](http://www.implansaltillo.mx/files_publicaciones/archivo_publicacion_1.pdf) ambos revisados el 12/04/2023).

En el plan correspondiente al periodo 2022-2024 solamente se dedican dos breves y generales párrafos dentro de un “anteproyecto de Plan Municipal de Desarrollo”, sin embargo, en el del 2019-2022 se diseñó todo un Plan de Desarrollo Urbano en el que la palabra Derramadero aparece 10 veces, en la de la página 35 dentro del siguiente contexto: “... *En especial, se buscará el acceso a programas federales y se definirán incentivos locales para fomentar el desarrollo de la vivienda de interés social, con un enfoque que privilegie su localización cercana a las fuentes de empleo, y/o que forme parte de complejos integrales con áreas comerciales, educativas, de salud, recreativas y administrativas, con la infraestructura y los sistemas de movilidad adecuados. El proyecto de Ciudad Derramadero, al sur de Saltillo, se concibe como un complejo urbano integral que reúna estas características...*”

<sup>227</sup> Un ejemplo de este apoyo al proyecto se manifiesta claramente analizando la siguiente nota aparecida en la página web del Gobierno del Estado de Coahuila, el 15 de octubre de 2018,

Por parte de la ciudadanía ha habido reacciones a las pretensiones de esos actores que juegan el doble papel, de aparecer de una manera generalmente oculta en el sector gubernamental cuando aparecen públicamente en el sector privado; encontrándose entre las más destacables la movilización campesina descrita al inicio de este apartado, aunque también ha surgido un activismo con una perspectiva territorial más amplia y un enfoque sectorial diferente, en el sentido de que enfoca la problemática del agua desde el punto de vista de los consumidores que habitan la ciudad; es decir, un activismo urbano dentro del que puede destacarse, por su persistencia, el de la Unión de Usuarios de Aguas de Saltillo A.C.<sup>228</sup>

Gloria Tobón Echeverri (+) (*com. pers.*), presidenta de esta asociación civil explicó, unos meses antes del cierre de la edición de este documento, que “Aguas de Saltillo ofrece a los campesinos del Acuífero Sur (Saltillo-Parras) darles agua para uso doméstico , a cambio de permitirles extraer el agua de sus pozos en concesión. Los provee con equipos que jamás van a poder comprar ellos, con lo que extraen diez veces más volumen de agua... pero una vez que los dejan entrar, poco a poco los van despojando”. Esta misma activista, en un artículo de su coautoría explica que: “...Lo que la CNA ha demostrado en

---

cuando el entonces Secretario de Gobierno José María Fraustro Siller y el entonces Presidente Municipal de Saltillo Manuel Jiménez Salinas realizaron una reunión de trabajo con los representantes de la empresa inmobiliaria Grupo Alianza, el Delegado del INFONAVIT y el sempiterno Secretario de la CTM en el estado, Tereso Medina. Según la nota: “Este megaproyecto, que se contempla en un espacio de mil 032 hectáreas, tiene como primer acuerdo generar la denominación de “Perímetro de Contención Urbana”, otorgada por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), y cuyo principal objetivo es crear ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad económica, y fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica, ecológica y social. De esa manera, a través del trabajo conjunto entre Estado, Municipio e iniciativa privada se pueda desarrollar la construcción de más de tres mil 400 viviendas, establecimientos comerciales, un centro médico, áreas verdes y deportivas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores de esta zona industrial de Saltillo...” (revisado el 12/04/2023 en: <https://coahuila.gob.mx/noticias/index/sientan-las-bases-del-proyecto-ciudad-derramadero-15-10-18>).

No dejando de resaltar que a Fraustro Siller era en 1996 Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y como tal tuvo a su cargo negociar con los ejidatarios movilizados por la defensa del agua en Derramadero. Después de ocupar numerosos cargos y representaciones de primer nivel alcanzó la titularidad de la Presidencia Municipal de Saltillo en el periodo 2022-2024, como sucesor inmediato de Manuel Jiménez Salinas; quien pasó a ocupar el puesto de Gobernador del Estado a partir de diciembre de 2023.

<sup>228</sup> Al cierre de la redacción de este documento esta organización se encontraba muy inmovilizada, tras el fallecimiento de su principal promotora Gloria Tobón Echeverri, el 18 de noviembre de 2023. Coincidió este grave descalabro sufrido por el activismo ambientalista con la autorización del Cabildo Municipal a Aguas de Saltillo S.C. para extender por 7 años más la concesión para ser el operador del sistema de agua y drenaje municipal; más aún, a mediados de 2024 el Gobierno del Estado empezó a promover concesiones para Aguas de Barcelona en varios municipios de la entidad, comenzando por Torreón, Arteaga y Sabinas.

De ninguna manera se trata de eventos fortuitos ni aislados; baste señalar que se encontraban en ese momento ocupando puestos clave de gobierno: José María Fraustro Siller, como Presidente Municipal; Manolo Jiménez Salinas como Gobernador del estado y Oscar Pimentel como Secretario de Gobierno; todos ellos actores clave con roles muy destacados en todo el proceso de privatización de los servicios de agua acontecido durante los años que han corrido del Siglo XXI.

este caso, es un mal manejo administrativo del problema, al proceder con poca transparencia por no informar a la parte que puede ser perjudicada, en este caso los pueblos mencionados, al grado de que el acuerdo de asignación estuvo a punto de consumarse sin haber tenido oportunidad de manifestar sus inquietudes. En cambio, fue muy clara la participación de actores como el gerente de AGSAL y políticos locales con otros intereses que pueden estar ligados al acaparamiento del agua y la tierra para la llamada Ciudad Derramadero (CD), proyecto que se ha esbozado como una mejora de la movilidad de los trabajadores de los parques industriales de CD, pero del que poco sabe la opinión pública regional...” (Aguirre et al.: 2019: 519).

El conocimiento de la *expansión extractivista* ligada al proyecto de Ciudad Derramadero es de importancia crucial para poder contextualizar adecuadamente y con datos suficientes los conflictos que se analizan a nivel micro en el Capítulo 8. Del amplio documento realizado por Fundación Villa de Patos/IMDEC A.C. (2018) se han retomado varios temas y datos que se discuten en este Capítulo, pues aportan información relevante para obtener una visión integral de las tres escalas con las que se analizan los conflictos por el agua dentro del universo de trabajo de esta investigación.

Y aunque debido a que las vedas al Acuífero 0521 están limitadas al municipio de Saltillo, eso no quiere decir que no haya intenciones de perforar pozos en este municipio; muy al contrario, es ahí donde existen constantes diligencias de orden jurídico o acciones extrajudiciales, por parte de la empresa paramunicipal que presta los servicios de distribución del agua a la parte saltillense de esta zona metropolitana, que van desde las gestiones ante la CONAGUA para la suspensión de la veda hasta el establecimiento de convenios leoninos con pequeños concesionarios de pozos agrícolas. Al final del día, el hecho concreto es que actualmente los volúmenes de extracción en este acuífero han sobrepasado su capacidad de recarga natural puesto que del mismo se surten ya no solamente las necesidades de agua para el uso doméstico de los habitantes de Saltillo, sino también las de los parques industriales de la Zona Industrial de Derramadero<sup>229</sup>.

Subyacen a las cuencas de los arroyos Patos y San Miguel dos acuíferos: el 0521 Saltillo Sur y el 0505 General Cepeda-Sauceda, que se tratan en los dos apartados siguientes. En base a esa consideración se puede afirmar que el sistema hidrológico del contexto inmediato de los estudios de caso se compone de cuatro cuerpos de agua, de los cuáles dos son superficiales y dos son subterráneos.

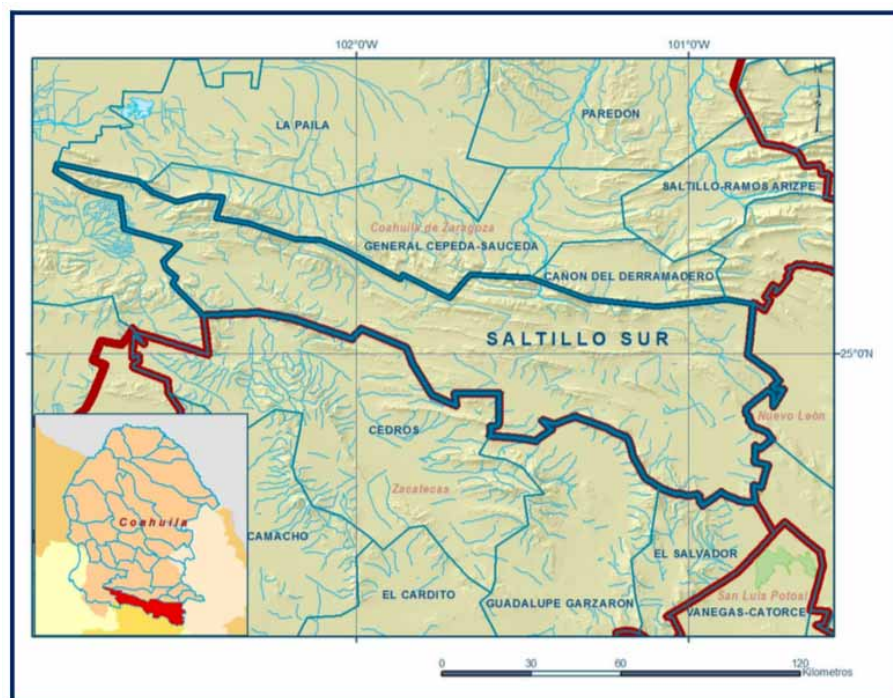
---

<sup>229</sup> Un estudio interesante sobre los vínculos e interacciones que hoy día son evidentes entre la sobreexplotación del Acuífero 0521 Saltillo Sur y las acciones tendientes a implementar a como de lugar el megaproyecto Ciudad Derramadero puede encontrarse en Aguirre Villaseñor et al. (2019). Se trata de un documento testimonial el que se discuten varios conflictos por el agua que hoy día afectan a los municipios de General Cepeda, Parras de la Fuente y Saltillo.

Quien esto escribe considera que el documento que presentan esos autores enriquece y retroalimenta el contexto *macro* de los estudios de caso que aquí se presentan, puesto que aporta datos físicos, sociales, ambientales, económicos y políticos sobre la sobreexplotación del Acuífero 0521 que aquí se abordan con una mirada diferente, con un acercamiento a tres escalas y apuntando con más insistencia la mirada hacia el Acuífero 0505; en ese sentido, los detalles que en el presente documento se resaltan y los que resaltan Aguirre Villaseñor et al. (2019) pueden verse como complementarios.

### 7.3.3. Acuífero 0521 Saltillo Sur

Mapa 11 Poligonal del Acuífero 0521 Saltillo Sur



Fuente: CONAGUA (2024b).

De acuerdo a la CONAGUA (2024b), el Acuífero 0502 Saltillo Sur “...se localiza en la porción sur del Estado de Coahuila, entre los paralelos 24° 33’ y 25° 34’ de latitud norte y los meridianos 100° 44’ y 102° 53’ de longitud oeste, cubriendo una superficie aproximada de 7,664 km<sup>2</sup>... limita al norte con los acuíferos La Paila, General Cepeda-Sauceda, Cañón del Derramadero (*sic*<sup>230</sup>) y Región Manzanera–Zapaliname, al oeste con el acuífero Principal- Región Lagunera, todos ellos pertenecientes al estado de Coahuila; al este con los acuíferos Navidad-Potosí-Raíces y El Peñuelo-San José el Palmar, pertenecientes al estado de Nuevo León; y al Sur con los acuíferos Cedros, Guadalupe Garzarón y El Salvador, pertenecientes al estado de Zacatecas...”.

Se considera importante subrayar que, al realizar una revisión preliminar a las coberturas territoriales del Acuífero 0521 Saltillo Sur se concluyó que, para lograr un acercamiento analítico pertinente, resulta más conveniente no basarse demasiado en los “datos duros” que proporciona la cartografía; ésto porque los conflictos no solamente se relacionan con la competencia entre los actores por las aguas subterráneas, sino también con las aguas superficiales; en ese sentido, deben tomarse muy en cuenta los acuerdos sociales relativos a estas últimas, para no caer en confusiones durante el análisis de dichos conflictos. Tales afirmaciones se desprenden del hecho de que, aunque el Acuífero 0521 Saltillo Sur

<sup>230</sup> Nótese que la CONAGUA confunde aquí el nombre del acuífero Derramadero con el Cañón de Derramadero.

solamente subyace al 1% del territorio municipal de General Cepeda, el abatimiento de sus niveles piezométricos también está afectando gravemente a una cantidad importante de localidades cepedenses, que a pesar de que sus dotaciones agrarias o su escrituración como propiedades privadas las ubican sobre el Acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda, dependen de escorrentías que bajan de sierras que NO se encuentran sobre dicho acuífero, sino sobre el 0521 Saltillo-Sur.

Detalles más puntuales sobre el abatimiento de los niveles piezométricos de este acuífero, así como de los intereses políticos y económicos de actores externos específicos que han jugado un papel importante en dicho abatimiento pueden encontrarse en el trabajo de Aguirre Villaseñor et al. (2019). Por la importancia que revisten para el presente trabajo, no se omite mencionar que las actividades productivas que más se han consolidado en cada uno de los tres municipios tienen estrecha relación con su estatus jurídico respecto a la veda de extracción de sus aguas; es decir las vedas decretadas durante los años cincuenta y setenta (D.O.F. de fechas 07/02/1952 y 06/12/1958 y 25/04/1979) que son aplicables solamente al municipio de Saltillo pero no para los de General Cepeda ni de Parras de La Fuente. Es por esta razón que, a pesar de que el Acuífero 0521 se encuentra comprendido en un 49% en el primero y 50% en el tercero, el desarrollo de las fuerzas productivas es muy contrastante entre ellos: del lado saltillense basado en la industria automotriz globalizada y del lado parrense en plantaciones frutícolas.

Viene también al caso destacar los contrastes que se dan entre los modelos de desarrollo económico saltillense y parrense, en tanto que tienen un peso muy notable en la definición del contexto de los conflictos por el agua que actualmente se suscitan en General Cepeda. Como quiera que sea, se reconocen ambos estrechamente ligados a sistemas de producción extractivistas y que si bien utilizan el agua de diferentes acuíferos subterráneos, dada su vecindad geográfica en la superficie terrestre no pueden sustraerse de confluir en procesos sociales comunes, o al menos con mucha interacción entre los actores que involucran; en ese tenor, su comprensión pasa necesariamente por conocer los antecedentes históricos que llevaron a su emergencia. De ahí que, para orientar la construcción de este documento a reflejar el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, su autor dedica particular atención a describir el conflicto de la Sierra de la Casita, en tanto que significa la interfase histórica entre el conflicto del Cañón de Derramadero y los conflictos de la Presa Jalpa y el de Noria de La Sabina, que se tratan detenidamente en el Capítulo 8 de esta misma obra.

### ***El conflicto de la Sierra de La Casita***

Al igual que las que como sucedió en el Cañón de Derramadero, las incursiones de Fidagua a ejidos del Cañón de La India<sup>231</sup> iniciaron desde fines de 1994 y principios de

---

<sup>231</sup> El investigador optó por referirse de manera genérica como “Cañón de La India” a un entramado de varios cañones que confluyen y/o divergen entre sí, localizados entre pequeñas cordilleras que corren paralelas al sur de la Sierra Playas de Madero (Saltillo) y sus continuidades Sierra de la Casita (General Cepeda), la Sierra del Laurel (Parras de La Fuente); recibiendo varias denominaciones: “Cañón de Buñuelos” (Saltillo), “Cañón de La Casita” (General Cepeda) o “Cañón

1995. Físicamente les resultaba fácil hacerlo, pues ambos accidentes orográficos corren paralelos y están separados sólo por las cimas de la Sierra de La Casita, que se comparte por los municipios de Saltillo y de General Cepeda; de ahí las facilidades para proyectar el envío del agua desde ahí a la Zona Industrial de Derramadero, en el corto plazo, y a las zonas habitacionales incluidas dentro del megaproyecto Ciudad Derramadero, al mediano y largo plazos.

Con esas intenciones, el procedimiento usual de Fidagua era el de solicitar permiso a los ejidos para realizar pozos exploratorios, ofreciendo compensaciones en efectivo a los ejidatarios, bajo la firma de un contrato en cuyas “letras chiquitas” se encerraba la trampa para apropiarse de facto de los derechos sobre ellos, como por ejemplo, con cláusulas que declaraban que el permiso era por tiempo indefinido.

La versión más difundida por aquellos años, confirmada en campo, era del tipo de la que ofrecía Ríos Navarrete (2000b), para quien:

...los supuestos contratos no están firmados por la asamblea. En los mismos se ofrece pagarles \$3000 a cada ejidatario, pero no a todos les cumplió. Tienen fecha de 1996; están escritos a mano y solamente están firmados por los presidentes del comisariado ejidal... los pozos perforados por el gobierno estatal, de entre 16 y 19 pulgadas de diámetro y 500 m de hondo, se localizan en la ladera sur de la Sierra de Parras, desde el Puerto de Carneros hasta la Sierra de La Casita. Supuestamente son pozos exploratorios, según la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo hay nueve pozos que son explotados. Estos se ubican en lo que se conoce como la primera etapa de Carneros Uno, cita el abogado Fernando Cisneros Barrón. Frente a esas “irregularidades”, dice Cisneros, el municipio, 35 ejidos y 44 pequeños propietarios de General Cepeda, interpusieron demanda de amparo el 2 de noviembre de 1996... [pero]... los jueces federales han permitido que esta demanda se difiera injustificadamente... el juez federal, Alfonso Martínez, fue incapaz de ejercer su autoridad sobre esa dependencia “que se ha negado a entregar documentos”

(Ríos Navarrete, 2000b).

De la descripción anterior puede observarse que la inconformidad contra Fidagua, que ya se había manifestado en el Cañón de Derramadero, cundió al Cañón de La India, donde no tardó en surgir un nuevo conflicto, en el cual, de acuerdo a la misma fuente:

...los ejidatarios recapacitaron y presentaron una demanda de nulidad de contrato<sup>232</sup> en un juicio agrario... la petición es concreta: “que se le concesione a cada ejido la

---

de Garambullo” (Parras de la Fuente); que aluden los nombres de poblados que se encuentran en sus bajíos, a lo largo de cinco o seis decenas de kilómetros.

Aquí se le ha denominado “Cañón de La India” de manera discrecional. El criterio para denominarlos genéricamente fue la mera intención de facilitar la explicación que aquí se quiere dar y se basó en retomar el nombre que empleaba en sus programas conjuntos de extensionismo el Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria A.C. (INCA-Rural) y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en el año 2000, cuando ocurrían los sucesos que aquí se relatan.

<sup>232</sup> En otro lugar de este artículo periodístico, Ríos Navarrete explica que “...el ejido La Casita, que pertenece al municipio de General Cepeda, junto con los ejidos Palmas Altas, Tinajuela y La India,

explotación del acuífero para uso doméstico: 200 l per capita por día, según la población de cada comunidad; la cantidad suficiente y necesaria para regar lo que habrán de comerse, considerando un mínimo de 5 ha por ejidatario y el volumen promedio para regar 1 ha de cultivo; y la cantidad suficiente de ganado, de acuerdo al inventario actual y la programación fundada en cada ejido...

(Rios Navarrete, 2000b).

Vale la pena confrontar su punto de vista con la de José Luis García Valero (com. pers., 2022), activista del *Colectivo Sí a la Vida*; quien, entrevistado en varias ocasiones durante el trabajo de campo de esta investigación, dio la siguiente respuesta a un comentario del investigador respecto a que que Fidagua había querido despojar a los ejidatarios: “Esto es parcialmente falso. Hay que hablar de los pozos de La Casita poniéndolos entre comillas porque en realidad no estaban concesionados a nadie, ni a ejidatarios, ni a particulares; eso lo descubrimos más tarde y tiene que ver con la ley salinista de Aguas Nacionales. Emilio Arizpe Narro [Industrias FAROC y Villa de Patos], movilizó a los ejidos, éstos se metieron a una lucha que, a final de cuentas, fue en defensa del agua de Emilio Arizpe y de los empresarios que se apresuraron a adquirir más y más concesiones.”

Sin negar la veracidad que tengan los datos de Rios Navarrete, del comentario de García Valero se puede deducir que en el 2000 se desconocía el dato de que no estaban concesionados los pozos o supuestos pozos; es decir, que Rios Navarrete tampoco conocía bien el estatus jurídico de los pozos. Hoy día este dato es un elemento crucial, en tanto que cambió la interpretación que tenían los propios actores locales respecto a las motivaciones habidas por Fidagua, pero también respecto a las de un sector de los actores locales que apoyaron las movilizaciones, que son los agroempresarios.

El caso es que se deja aquí esta perspectiva de los hechos, esperando que en el futuro aporte un elemento de juicio para interpretar sobre los intereses ocultos y/o las causas reales que pudo haber en algunos actores locales involucrados de uno y otro bando. Debe reconocerse, por otro lado, que en este trabajo ya no se tuvo tiempo de profundizar en algunos temas, como por ejemplo las razones por las cuáles Rogelio Montemayor Seguy decretó la desaparición de la Fidagua el 25 de marzo de 1998<sup>233</sup>. De acuerdo a Rios

---

que pertenecen a Saltillo, interpusieron una demanda de juicio agrario de nulidad de contrato y anexión de los pozos, a favor de los ejidos...”

<sup>233</sup> Se postula que una línea de investigación viable para indagar los detalles de su razonamiento político parta de considerar que, en lugar de haber construido una vía fácil para cumplir el propósito de satisfacer la demanda de agua para la Z.M.S. y la Z.I.D., lo que creó fue una serie de conflictos sociales, difíciles de subsanar en el escaso año que le faltaba para entregar la gubernatura a su sucesor.

Para hacer una interpretación política, debe tomarse en cuenta que él tenía una filiación muy cercana a Carlos Salinas, pero no las traía todas a su favor con Ernesto Zedillo; lo cual permite pensar que Montemayor pudiera haber tenido incertidumbre sobre el apoyo político que hubiera recibido de la federación, en caso de que al darle continuidad el conflicto se hiciera más complejo, pues a diferencia de que el Cañón de Derramadero solamente se encuentra en territorio saltilloense, el de La India se comparte por los municipios de Saltillo, Parras de La Fuente y General Cepeda, por lo que cualquier negociación con los actores rurales hubiera resultado mucho más complicada, con riesgo de salirse de control.



Navarrete (2000b) “sin informar el destino de los 14 pozos que se perforaron en La Casita, Tinajuela, La India y Palmas Altas. Como tampoco sobre los supuestos pagos que este fideicomiso hizo a estos ejidos para comprarles”.

Debe destacarse aquí que, en este caso, la respuesta social, o sea las movilizaciones en contra de las intenciones de Fidagua no guardan lógica (al menos desde una mirada positivista, que resalta los datos cuantitativos sobre los cualitativos) con las magnitudes y la distribución física del “objeto de conflicto”; ésto es, no corresponde proporcionalmente a las cifras oficiales de la CONAGUA, que estipulan que las aguas del Acuífero 0521 que subyacen en territorio cepedense es de solamente el 1%; en tanto que el descontento y movilizaciones sociales se manifestaron de forma explosiva y concentrada en este municipio; con mucho mayor fuerza que en los de Saltillo y Parras. Tal paradoja puede explicarse partiendo de reconocer que la dirección que toma y los espacios de casi cualquier movilización ciudadana o popular depende más de los equilibrios de poder y de las conyunturas políticas del momento que de esos “datos duros” cuantitativos, que si bien son adecuados para explicar ciertos aspectos de la realidad, a menudo son insuficientes para explicar los aspectos sociales de la misma; esto es, que en este análisis tiene mejores resultados centrar la mirada en los factores de carácter cualitativo del contexto sociopolítico que existía en el año 2000 y cómo a partir de ellos se encarriló el curso del conflicto de la Sierra de La Casita; no en la lógica basada en la cobertura territorial del acuífero.

Comprender incluso los factores más propios de la psicología social, como puede ser el temor de los cepedenses de que, al abatirse los niveles freáticos del Acuífero 0521 Saltillo Sur, sobrevendría el secamiento de los manantiales ubicados en dicha sierra. Temor comprensible si se repara en el hecho de que, para esos años se empezaban a crear expectativas económicas favorables respecto a la instalación de la armadora automotriz en Derramadero; con ello, un menor grado de incertidumbre respecto a la necesidad de emigrar tanto de la cabecera municipal como de los poblados ejidales con acceso a las carreteras; de ahí un revaloramiento de los manantiales (casi todos emanados en las sierras de La Casita y de Parras), así como la toma de conciencia de que su agotamiento traería como consecuencia una catástrofe para los proyectos de vida que, desde su propia percepción y expectativas, daban indicios de estar iniciado un proceso de reconfigurarse a la par de un desarrollo local, muy favorable para ellos.

Pero para una cabal comprensión del proceso que experimentó el conflicto de la Sierra de La Casita también resulta necesario reconocer la importancia de la presencia, entre los residentes de General Cepeda, de actores económica y políticamente muy poderosos; esto es, agregar al análisis la consideración de que este municipio, con todo y su perfil rural, es asiento de familias con capacidad económica prominente.

La presencia de ese sector de actores empresariales fue factor determinante en la definición de los equilibrios de poder contra el bloque conformado por miembros de la oligarquía saltillense que pretendía acumular concesiones para la extracción del agua en los ejidos de esa zona. Al integrarse en un solo frente con los actores de perfil campesino se crearon sinergias sociales, económicas y políticas que permitieron hacer una férrea defensa del agua.

Tal contrapeso al poder representa una gran diferencia con el conflicto del Cañón de Derramadero, en el que los actores campesinos nunca lograron aliarse con actores con tan alto poder económico y político. Gracias a la esa fortaleza los actores locales de General Cepeda accedieron a una mayor libertad para elegir las estrategias para movilizarse y para emprender diligencias en instancias jurídicas superiores, cerrando con ello las puertas de acceso a los acuíferos subterráneos al bloque de actores externos.<sup>234</sup> Y es en este marco de fortalecimiento de los actores locales rurales que se consolidaron liderazgos como los de Juan Gamboa Maldonado y Pedro Jasso, pero también evitaron debilitarse varios de los que habían declinado a la par del desmantelamiento paulatino de La Forestal F.C.L.

Pero no debe perderse de vista que los actores externos también tejieron alianzas estratégicas con actores locales cuyos intereses personales empataban con los suyos. Tal es el caso destacable de Rodolfo Zamora Rodríguez<sup>235</sup> quien, como Presidente Municipal de General Cepeda se alineó con el proyecto privatizador promovido por Fidagua, en tanto su pertenencia al mismo grupo político al que también se afiliaban todos los funcionarios del Gobierno del Estado (por tanto del Fidagua). La consecuencia de hacerlo significó una afrenta directa la sociedad cepedense, que lo interpretó como una traición a su investidura como representante y defensor de los intereses de su ciudadanía; peor aún, dio al conflicto un caríz partidista que no tenía de origen.

Dada la gravedad de los riesgos implicados en el proyecto en cuestión, el bloque de defensores del agua de la Sierra de La Casita recurrió a los tribunales, pero al obtener magros resultados de esa y otras diligencias en las que se enfrentaron a omisiones recurrentes de los jueces, que siempre iban en su contra, fueron creciendo las acciones de protesta y se fortalecieron las sospechas de que tanto funcionarios del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial debían tener algún tipo de colusión con los empresarios externos.

Los líderes de ese bloque plural visualizaron, en ese contexto de conflicto de intereses, la necesidad de hacerse de la Presidencia Municipal, como vía para facilitar el logro de los objetivos de su defensa y resistencia contra los proyectos anti ecológicos a los que Zamora Rodríguez estaba abriendo las puertas. Así, cuando se llegó el año 2000, Sofía Ochoa Mendoza fue postulada como candidata del PAN a la alcaldía; pero no llegó sola, porque también llegó cobijada por la militancia del PRD municipal, así como de gente sin partido e incluso de priistas disidentes (Rios Navarrete 2000a); capitalizando políticamente de esta manera su activismo de los años recientes, pudo rebasar en número los votos al PRI y ser reconocida como alcaldesa de General Cepeda en el periodo 2000-2002.<sup>236</sup>

---

<sup>234</sup> Se verá más adelante que no fue el mismo caso para la arena de disputa por imponer confinamientos de residuos industriales; que a la vuelta de tres lustros conllevó a nuevos conflictos entre los mismos contendientes.

<sup>235</sup> Durante su periodo, Zamora Rodríguez no solamente proporcionó todas las facilidades para que el bloque de actores externos realizara las gestiones que le fueran convenientes para obtener las concesiones de los pozos sino también para instalar un confinamiento de residuos industriales; chocando de frente con grupos campesinos y empresariales.

<sup>236</sup> *Vox populi*, quien buscó originalmente esa candidatura fue Emilio Arizpe, pero fue bloqueado de diversa maneras en su propósito por el bloque priista estatal; en esas circunstancias, el PAN optó por postular a Sofía Ochoa, burlando con esa estrategia los bloqueos que a su esposo se hacían.

Por lo que se refiere al Fidagua, se puede decir que sus operadores cometieron un error fatal, al no haber medido las consecuencias de alinearse con un compañero militante de su mismo partido político, que si bien era de probada fidelidad a la estructura del poder del Estado (como lo eran quienes conformaban como personas al Fideicomiso), dentro de la arena política local era visto por la ciudadanía como un traidor a los intereses del pueblo. Con esa mala recomendación y con el antecedente de haberse visto envuelto (Fidagua) como parte agravante de los campesinos de la Sierra de Zapalinamé y del Cañón de Derramadero, no tuvieron margen de maniobra para mantenerse, ya no digamos en el campo sino incluso dentro de la estructura orgánica del Gobierno del Estado.

Vista hasta aquí, podría pensarse que esta historia ha tenido “un final feliz” para los actores locales; de hecho, así parecía serlo todavía cuando se realizaban los últimos recorridos de campo, a principios de 2018. Sin embargo, el desengaño para todos (incluyendo para quien esto escribe) vino con los años de la pandemia del COVID, cuando los líderes campesinos cayeron en cuenta que los únicos beneficiarios de esta lucha fueron los agroempresarios locales; amargamente, aquellos que se involucraron en la movilización. Mediante un video hace públicos a inicios del 2023 en sus redes sociales, Juan Gamboa da testimonio de este inesperado desenlace:

Y cuando salimos algunos empresarios y campesinos a defender el agua, los agroempresarios capitalizan toda esa información, no dejamos que se lleven el agua a las empresas de Saltillo, pero, sin embargo, los agroempresarios con el tiempo, al conocer esa información, se concesionan el agua, ¿No? Se concesionan el agua de la zona. Y entonces tenemos a Miguel Guajardo con 10'800,000 metros cúbicos concesionados y tenemos a Emilio Arizpe con un poco más de la cantidad, que no tengo en la cantidad exacta pero es el principal acaparador del agua en la zona. Y luego está Arturo Mendel, los Martínez, los Villarreal, el dueño de Parvada; están los Milmo, Toño Rivero. Entre todos ellos acapararon el agua, el agua de toda la zona y que era el agua con la que regábamos todos los ejidos, ¿No? Desde los ejidos que están pegados a Parras, como: el 6 de Enero, El Durazno, San Lorenzo, Lomas de San Isidro, el 28 de Agosto. Todos esos ejidos, que regábamos esa agua, poco a poco los van concesionando los agroempresarios...

... Y despojan a todos estos ejidos del agua; hacen que la gente viva de forma miserable en esta región...”

Juan Gamboa Maldonado (Enero de 2023).<sup>237</sup>

---

No se omite señalar aquí que, durante la recolección de información para esta investigación se encontró que, cuando se “googlea” el nombre de Sofía Ochoa Mendoza, prácticamente no aparecen registros de ella. Incluso en las páginas donde se enlistan los presidentes municipales que ha tenido General Cepeda se encuentran huecos en donde necesariamente debía ir inserto su nombre.

<sup>237</sup> Estenográfica de parte del video publicado (27/01/2023) por él en su página de Facebook [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid02rqmkM1ARjndgx5xzc4mh7kjsyi692ex1Ji9BK7oWfz46F5Sw51AwZs8ksxtsRUNcl&id=100031847269869&mibextid=Nif5oz&paipv=0&eav=AfZP](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rqmkM1ARjndgx5xzc4mh7kjsyi692ex1Ji9BK7oWfz46F5Sw51AwZs8ksxtsRUNcl&id=100031847269869&mibextid=Nif5oz&paipv=0&eav=AfZP)

El autor de este documento considera que hay muy poco que decir o que explicar, a la luz del desenlace final del conflicto; es decir, tal y como lo percibe un líder campesino, en el relato estenográfico anterior.

Con los datos disponibles, el autor no se atreve a realizar ninguna estimación sobre los escenarios probables en el mediano plazo, ya que en conversaciones circunstanciales o casuales que tuvo entre 2013 y 2018 con ejidatarios del Cañón de La India, encontró posiciones políticas personales diferentes respecto al conflicto aquí relatado. Por un lado, no han faltado quienes tienen una actitud expectante o asertiva para con el proyecto de entregar los pozos a la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo; encogen los hombros, como lamentándose y se expresan utilizando frases como “pues ya no vinieron a ofrecernos nada... así que los pozos están ahí, no más tapados...”. Por otro lado, se conversó con jóvenes que cuando eran niños fueron testigos de ese primer movimiento de defensa ciudadana del agua y en la actualidad han empezado a tomar cargos dentro de los Comisariados Ejidales; de ellos, pudo constatarse que casi todos ellos mantienen un espíritu crítico respecto a los acontecimientos que presenciaron; más aún, los que han alcanzado una escolaridad media superior o superior cuentan con recursos discursivos mediante los que expresan su disposición a defender a sus coterráneos del despojo que pretende hacer de ellos la misma empresa, respaldada por “el gobierno”.

### ***El conflicto en Parras de La Fuente (1)***

De todos los municipios de Coahuila, quizá Parras de La Fuente sea el que en la actualidad presenta una mayor diversidad de conflictos por el agua, los cuáles en última instancia se derivan del deterioro cada vez más acuciante del Acuífero Saltillo Sur, que está siendo provocado tanto por la perforación legal, pero de manera reprochable también por la extracción ilegal que se está haciendo de este cuerpo de agua subterránea, tanto en este municipio como en el de Saltillo.

Y aunque dicha legalidad está siendo fuertemente cuestionada desde hace varios años, por el activismo de varios actores de la sociedad civil, la respuesta de la Comisión Nacional del Agua ha dejado mucho que desear, no solamente desde el denominado periodo neoliberal, sino también durante la denominada Cuarta Transformación tanto en la rigurosidad de los estudios técnicos para justificar los volúmenes de agua concesionados como en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la misma Comisión. Teniendo como resultado un acaparamiento de concesiones en manos de propietarios de grandes extensiones de terrenos dedicados los cultivos de la vid y del nogal, así como en empresarios hoteleros.

Durante la segunda década del Siglo XXI se han incrementado de manera tan desmesurada los volúmenes de agua extraídos que actualmente son ya evidentes las señales del abatimiento de los mantos freáticos. Se trata de un problema grave, que desde

el punto de vista económico representa la pérdida de la viabilidad de sus cadenas de valor tradicionales, puesto que proporcionalmente al abatimiento de los niveles piezométricos de sus acuíferos subterráneos (0505 General Cepeda-Sauceda, 0509 La Paila y 0521 Saltillo Sur) se han ido disminuyendo los volúmenes de agua que aflora a la superficie en los manantiales y en los tajos de los cuáles se alimentan los cultivos hortofrutícolas que son columna vertebral de la economía del municipio parrense.

Derivado de lo anterior, el desabasto de agua para riego amenaza la viabilidad del sistema de producción de la vid, que durante más de cuatro siglos ha permitido el desarrollo de la industria vinícola, así como el de la nuez, que se ha desarrollado a partir de su gran rentabilidad durante los años de este siglo XXI, a pesar de requerir grandes inversiones de capital<sup>238</sup>. Y aunque con relativamente<sup>239</sup> menor impacto económico, también arriesga la viabilidad productiva del higo, que es un cultivo tradicional, que se hace a escala pequeña y es menos exigente en volúmenes de agua para su sostenimiento,

Pero las presiones que generan el abatimiento de los acuíferos subterráneos no se limitan a las ejercidas desde el sector primario, ya también desde la segunda década del Siglo XXI se ha incrementado la inversión de empresarios foráneos en construir hoteles de lujo, generalmente en la periferia de la cabecera municipal. Para lo cual acuden a la CONAGUA a gestionar permisos de extracción de agua del subsuelo, que no pasarían la prueba de ser sujetos de una revisión de contraloría (pero que sorprendentemente sí la aprueban), puesto que dan a ver muchas evidencias de haberse expedido de manera irregular<sup>240</sup>.

Sin demérito de que el fenómeno de la corrupción de las autoridades del sector se enraiza de manera profunda en toda la CONAGUA, para mayor infortunio de los actores locales, la administración del agua en este municipio depende de la oficina denominada Cuencas

---

<sup>238</sup> . El establecimiento de las nogaleras requiere millonarias cantidades de inversión de capital a tasa de retorno de mediano plazo, pues inician su producción hasta los siete u ocho años; sin embargo, para cuando las plantaciones tienen unos doce años se logra la amortización y se pasa al periodo de ganancias por la venta de nuez muy altas.

Desde un punto de vista ambiental representa un factor de presión adicional para la extracción del agua del acuífero, ya que la manutención de las nogaleras requiere volúmenes de riego mayores a los que requieren los viñedos

<sup>239</sup> . Comparativamente con la cadena de valor vitivinícola, que usa tecnologías industrializadas, la del higo es de tipo artesanal, orientadas principalmente a la producción de dulces. Las plantaciones de uva y de nuez necesitan mucha inversión de capital, trabajo y agua para su mantenimiento, por lo que quienes se dedican a esos cultivos son productores muy capitalizados; en ese contexto, los procesos artesanales como el de la fabricación de dulces de higo y/o nuez sean el medio de vida del que dependen muchas familias de clase media y media baja, pues al agregarles valor mediante ese pequeño nivel de transformación pueden comercializarlos con mayor margen de ganancia.

<sup>240</sup> Felipe Rodríguez, presidente del Comité de la Defensa del Agua de Parras de La Fuente, comentó en una conversación sostenida con él a mediados de 2022, que los constructores de hoteles a menudo acuden a despachos de abogados que se han especializado en establecer demandas jurídicas contra el gobierno federal. Aprovechando que éste no tiene la capacidad operativa para contestarlas, aprovechan resquicios que existen en la ley, siendo común emplear el procedimiento administrativo por el que se solicitan los “permisos de libre alumbramiento”, pues debido a su complejidad les es fácil otorgar “gratificaciones” a los funcionarios de CONAGUA encargados de tramitarlos, para que cometan ciertas omisiones claves que impiden a la misma CONAGUA u otras instancias del gobierno efectuar posteriores contrademandas.

Centrales del Norte, la cual también administra la Comarca Lagunera. Esto es, que a partir de las explicaciones dadas en el apartado 3.2. de este documento, entre las que aquí se retoma y destaca la de que se trata de una de las regiones del país en las que la intervención del Estado para tratar asuntos relacionados con la distribución del agua ha sido constante desde El Porfiriato, pero se manifestó con su mayor fuerza a partir de 1929 (Aboites Aguilar, 2001b), la presencia de funcionarios laguneros o vinculados a esta región siempre ha estado presente a todos los niveles de las instituciones encargadas de su gestión. En ese sentido, debido a tanta antigüedad de la intervención, los vicios de la administración del agua se encuentran muy presentes en el Parras de La Fuente de nuestros días; entre estos vicios, la de facilitar las concesiones no de acuerdo al interés común, buscando un máximo beneficio social y conservación del elemento natural, sino la entrega de permisos a los mejores postores, individuales o empresariales.

Y aunque el problema del acaparamiento de concesiones se da en los tres acuíferos que subyacen bajo el territorio municipal de Parras, considerando una afectación a todos ellos, por lo que se refiere al Acuífero 0521 Saltillo Sur, que es el que en este apartado ocupa la mayor atención, las afectaciones del abatimiento de los mantos freáticos se manifiestan de manera palpable en la disminución de los volúmenes de agua que manan de los manantiales y, de hecho, al menos dos de ellos (en la cabecera municipal) han terminado por extinguirse. Ha tenido mucho que ver en este fenómeno el hecho de que las corrientes subterráneas de ese acuífero fluyen en dirección oriente-poniente, con lo cual el abatimiento del acuífero se concentra por determinantes naturales bajo la Sierra de Parras; es decir, al sur y al suroeste de la cabecera municipal; ejemplo de los daños que ya están presentes debido a ese deterioro son el siniestro casi completo de las huertas de nogal del ejido Seis de Enero, donde los pozos que las abastecían de riego se encuentran secos en la actualidad (Ricardo Enrique, diácono de la parroquia de Parras, com.pers).

Otro gran afectado por el abatimiento de los mantos acuíferos es el sistema de acequias que, durante siglos, ha sido la vía tradicional de distribución del agua en la ciudad. Para acabar con el cuadro, un segundo factor que propicia la destrucción del sistema de acequias es la presión para privatizarlas, ejercida por un puñado de empresarios con mucho poder económico y político quienes en los últimos años han maniobrado de diversas formas para “convencer” a las autoridades municipales y estatales de entubar el agua que las alimenta<sup>241</sup>, como una manera de reorientar el destino del agua hacia las empresas productoras de vino y con ello transformando el agua de ser un bien público a ser un bien privado<sup>242</sup>.

Agrava los conflictos relacionados con el agua la deforestación en la Sierra de Parras (al sur) y en la Sierra de La Paila (al norte), puesto que a partir de ella disminuye la infiltración

---

<sup>241</sup> . Existe la sospecha ciudadana respecto a que bajo el proyecto de entubamiento se oculta un interés de beneficiar con desvíos de agua a varios empresarios, pero principalmente a los propietarios de “Casa Madero” empresa vitivinícola propiedad de una de las familias más poderosas del Noreste de México, desde hace más de un siglo.

<sup>242</sup> Un impacto evidente de este proceso es la muerte de algunas de las centenarias Sabinas que crecen a sus costados, consideradas por la mayor parte de sus habitantes, a la par del patrimonio arquitectónico de la ciudad colonial, como esencia de la identidad parrense

que recarga los acuíferos y las escorrentías bajan de manera torrencial aceleran, en las partes altas y medias, los procesos erosivos de sus laderas y en las partes bajas causan inundaciones en la cabecera municipal y localidades cercanas.

En ese contexto, son destacables<sup>243</sup> grupos civiles como: el Comité Parrense Protector de los Recursos Naturales (ciudadanos), el Comité Pro-Parras (empresarios), el Movimiento de la Defensa del Agua de Parras (ejidos vs Casa Madero y la Asociación de Nogaleros de Parras; pero también grupos de usuarios organizados como, Usuarios del Agua del Tajo de Lobatón, Usuarios del Agua del Tajo de Villarreal, Usuarios del Agua del Tajo El Trasmín, Asociación de Tajos de Aguas de Parras (ejidatarios y empresarios, preside Casa Madero) y la Sociedad de Pequeños Propietarios de Sombrerete A.C. De los cuáles, a primera vista, se señala que están conformados con actores locales de muy diferentes perfiles; tanto que, en algunos casos, tienen intereses encontrados entre sí. Tal panorama tan complejo se considera importante de mencionar<sup>244</sup> para dar al lector una idea general sobre la heterogeneidad de actores locales involucrados en la lucha por el agua en este municipio; lo cual deriva en la dificultad que implica configurar alianzas, tanto entre las agrupaciones del municipio de Parras como con los grupos organizados para el mismo fin de defender el agua en General Cepeda.

### ***Los conflictos del Arroyo San Miguel***

El Arroyo San Miguel nace en la Sierra de Parras, desde donde sus aguas descienden hacia el norte, rumbo a las planicies aledañas a la Laguna de Mayrán.

En la zona alta de la cuenca se asienta el ejido San Miguel<sup>245</sup>, pero debido por un lado a que su poblado no es cercano al arroyo y a que existe una zona de accidentada topografía y por otro lado a que (pese a su nombre) la mayor parte del ejido se encuentra fuera de la cuenca del San Miguel, los ejidatarios ponen poca atención en detener las escorrentías de este último; así, no se presentan condiciones propicias para suscitar conflictos importantes por sus aguas.

En su cuenca media existe un conflicto entre los ejidos Presa San Antonio y Seguí, debido a una serie de obras realizadas durante los primeros años del Siglo XXI, mediante las que han desviado las aguas del cauce principal mediante tuberías; situación que ha levantado las inconformidades respecto a la proporción de agua que los documentos legales establecen que “debe tocarle” a cada uno de los ejidos. El problema del agua por

---

243 El enlistado que se incluye en este párrafo fue amablemente proporcionado por el activista parrense Edgar Tolentino (*com.pers.*, 28/05/2024)

<sup>244</sup> Dado que el foco de interés de la presente investigación son los conflictos por el agua en General Cepeda, sumando a ello limitaciones de tiempo y recursos, aquí solamente se dejan mencionados los grupos de activistas por la defensa del agua que más se han destacado en base a su compromiso y acciones de resistencia; derivado de lo cual han desarrollado una agencia sólida que los proyecta hacia y legitima con la ciudadanía parrense.

<sup>245</sup> La dotación de este ejido se concretó en 1968; esto es, tres décadas después que las del resto de los ejidos de la cuenca del San Miguel (1937).

las aguas del San Miguel está relativamente focalizado entre algunos ejidatarios, puesto que no todos los ejidatarios de uno y otro ejido dependen para regar de las aguas de su cauce; esto porque, por un lado, al ejido Presa San Antonio llegan aguas de los sobrantes de la Presa de Guadalupe, que se localiza en la cuenca del Arroyo Boca de Domingo-Macuyú, pero por contraparte, Seguí recibe aguas del Arroyo El Salitre (Silvestre Gatica, ejidatario de Seguí, *com. pers.*, julio 2018). Dicho de otra forma, que no todas las escorrentías que bajan por los ejidos Presa de San Antonio y Seguí se encuentran en la cuenca del Arroyo San Miguel, cuyos conflictos aquí nos ocupan.

Lo que origina que se vuelvan un poco más complejos los desacuerdos es la construcción de infraestructura hidrotécnicas (especialmente presas derivadoras) ya que estas alteran los cursos originales de las escorrentías;<sup>246</sup> alguna incluso trasvasándolas de una cuenca a otra. De ahí que la obra de entubamiento que utiliza tubos de 14" para desviar parte de las aguas que salen de las ruinas de la Presa La Castañuela hacia terrenos del ejido Presa San Antonio esté causando molestias a Seguí, no solamente por el volumen desviado en sí, sino porque parte de esa agua que se desvía se trasvasa a la cuenca del Boca de Domingo, por lo que cualquier excedente ya no baja por Seguí sino que se dirige a otro ejido, que es Porvenir de Jalpa (Silvestre Gatica, *com. pers.*).

Debido a las restricciones de tiempo a las que tuvo que sujetarse el responsable de esta investigación no le fue posible profundizar más en la indagación de este conflicto; por ello, la información de campo de la que dispone no es suficiente ir más allá de su descripción ni alcanza a dimensionar las afectaciones actuales y potenciales para los campesinos de la parte media de la cuenca que se derivan y derivarán de estos desacuerdos. Han tenido que ver en esta circunstancia las reconfiguraciones a la investigación discutidas en el apartado 6.2 de este trabajo, que obligaron a no perder la atención del investigador en la cuenca baja, para dejar de tratar con detalle el caso del conflicto de la Presa Jalpa.

La prioritaria razón para perder la atención en la Presa Jalpa es que fue ahí donde se propuso realizar el estudio de un conflicto por las aguas del Arroyo San Miguel que confronta a los titulares de los derechos ejidales de Jalpa y de San Juan del Cohetero desde el momento mismo en que se decretaron sus dotaciones ejidales, en 1937. Y que ante la falta de una respuesta asertiva por parte del Estado, tuvo que resolverse mediante acuerdos no formales entre los ejidatarios originales; es decir, acuerdos *de facto*, que no *de jure*; mismos que, con el paso de los años y de las generaciones de herederos de la tierra, con la llegada del nuevo siglo han empezado a ser cuestionados por quienes reciben menos agua, ya que los nuevos tiempos les despiertan inquietudes por reclamar la parte de agua que por ley les corresponde. Tratándose de comunidades que conservan la mayor parte de su esencia campesina, tales inquietudes generan mucha contradicciones, tanto

---

<sup>246</sup> . La importación, por así llamarla, de escorrentías desde microcuencas vecinas se traduce en una suficiencia relativa del agua que se requiere para la producción agropecuaria de los ejidos Presa de San Antonio y Seguí, por lo que solamente en sequías prolongadas (i.e.: con duración de más de tres o cuatro años) se propicia que reinicien conflictos entre las partes (tanto entre ejidos como al interior de cada uno); pareciera ser que, en todo caso, cuando estas circunstancias llegan a presentarse, los conflictos por el agua son más frecuentes al interior del ejido Presa de San Antonio, debido a rivalidades previas entre familias.

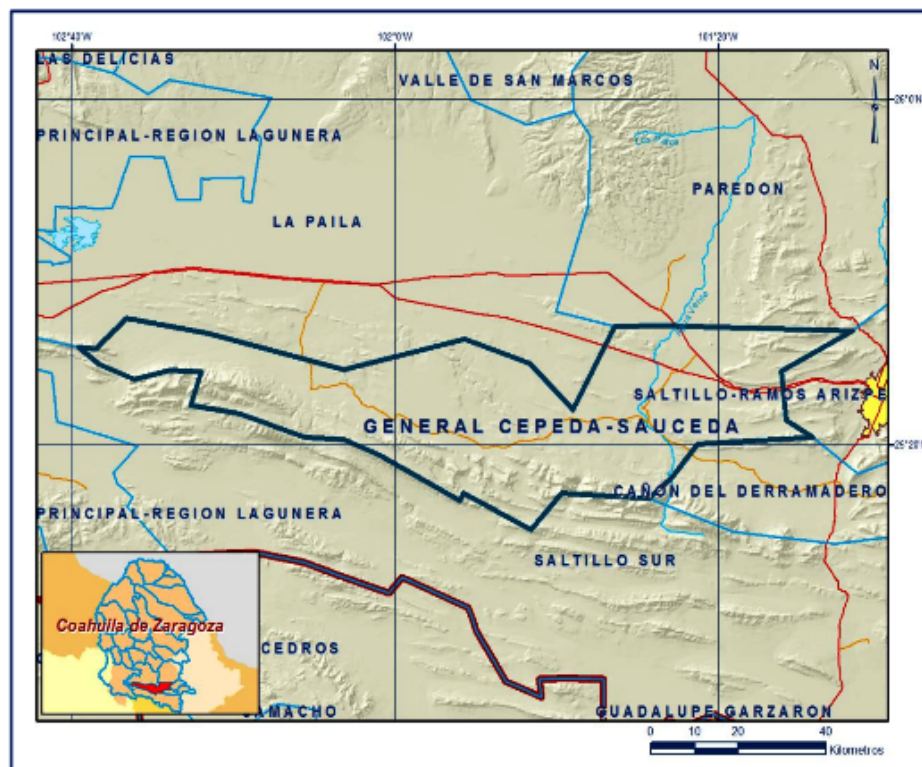


personales como comunitarias; especialmente porque, al menos hasta el momento de realizar este estudio, exigir la distribución legal que establecen los decretos implica faltar el respeto a la memoria de sus ancestros, quienes de manera voluntaria establecieron los acuerdos a la manera tradicional; es decir, con apego a reglas y valores comunitarios no escritos.

Se ha denominado a este último “El conflicto de la Presa Jalpa” y siendo uno de los estudios de caso de esta investigación, en el párrafo anterior se ofrecen sus generalidades, pero no se entra a detalle para no hacer este documento injustificadamente reiterativo y en lugar de ello se remite al lector al apartado 8.1.2, donde se le trata a detalle.

#### **7.3.4. Acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda**

**Mapa 12. Poligonal del Acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda**



Fuente: CONAGUA (2024a)

De acuerdo a la CONAGUA (2024<sup>a</sup>: 2) el Acuífero 0505 General Cepeda–Sauceda cubre parte de los municipios General Cepeda, Ramos Arizpe, Parras y Saltillo “...se ubica en la porción sur del Estado de Coahuila, entre los paralelos 25° 10' 26" y 25° 34' 33" de latitud norte, y los meridianos 101° 03' 21" y 102° 39' 25" de longitud oeste, cubriendo una superficie aproximada de 3,300 km<sup>2</sup>. Limita al norte con el acuífero La Paila; al noreste con Paredón; al este con Saltillo–Ramos Arizpe y Cañón del Derramadero, al sur y oeste con el acuífero Saltillo Sur, todos ellos pertenecientes al Estado de Coahuila.”

En base a la información que proporciona la misma fuente, se deduce que la administración de este acuífero presenta cierto grado de complejidad, puesto que se señala que su territorio se encuentra bajo la jurisdicción de dos Consejos de Cuenca: la porción central y occidental al Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval, y el extremo oriental al Consejo de Cuenca Río Bravo; por otra parte porque:

su territorio se encuentra parcialmente vedado; sólo una pequeña área de su extremo oriental está sujeto a las disposiciones del “Decreto por el que se establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas subterráneas, de la zona no vedada por el diverso publicado el 7 de febrero de 1952, en el área que ocupa el municipio de Saltillo, Coah. ... [pero que] ...la porción no vedada... que abarca la mayor parte de su territorio, se encuentra sujeta a las disposiciones del “ACUERDO General por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento en las porciones no vedadas, no reglamentadas o no sujetas a reserva de los 175 acuíferos que se indican”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2013...”

(CONAGUA (2024a: 4-5)  
[el subrayado es mío]

Considerando especialmente el último decreto del 5 de abril de 2013, sería de esperarse que las concesiones de sus aguas debieran ser más bien la excepción; lo cual no es el caso ya que “...de acuerdo con información de la Conagua, en 2008 tenía un déficit de 18 millones 916 mil 145 metros cúbicos anuales, para 2020 registraba ya un déficit o disponibilidad negativa de 69.27 millones de metros cúbicos de agua... [y] ... según el Registro Público de Derechos de Agua (R.E.P.D.A.), se tienen inscritos 216 permisos de agua, con un volumen concesionado de 27 millones 331 mil 539.75 metros cúbicos de agua, para diferentes usos... El problema, principalmente, es que Conagua se ha dedicado a otorgar y otorgar concesiones cada vez más, aún en acuíferos sobreexplotados. La gente que tiene esas concesiones empieza a sacar todo lo que hay ahí y los niveles van bajando y bajando y bajando hasta que se acabe el agua...” (Peña, 2021)

Para ayudarse a comprender el origen y naturaleza de los conflictos por el agua aquí estudiados resulta de enorme utilidad siempre tener presente que los límites entre el Acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda y el 0502 Saltillo Sur coinciden en su mayor longitud con las sierras de La Casita y de Parras (Mapa 12). La importancia de este dato radica en que un número indeterminado de los manantiales que nutren a los arroyos Patos y San Miguel, quizá la mayoría, se encuentran sobre un acuífero diferente al que se encuentra debajo de sus cauces de los arroyos, o parte de sus cauces.

Dado que los arroyos transportan agua de una zona de la superficie terrestre a otra, en términos prácticos se puede afirmar que al cruzar esos arroyos los límites entre acuíferos subterráneos transvasan el agua de uno a otro; lo hacen mediante un proceso de afloramiento, escurrimiento e infiltración. Así, mezcladas con escorrentías de origen pluvial, el Patos transvasa al Acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda aguas afloradas en manantiales del Acuífero 0502 Derramadero, tras escurrir por el Cañón de Derramadero y confluir más escorrentías que bajan por la Sierra de La Casita (afloradas en manantiales

del Acuífero 0521 Saltillo Sur); por su parte, el San Miguel transvasa al mismo Acuífero 0505 las aguas del Acuífero 0521 que afloraron en manantiales de la Sierra de Parras.

Considerar lo anterior ayuda a comprender porqué el abatimiento piezométrico del Acuífero Subterráneo 0521 repercute en la disponibilidad de agua superficial en localidades ubicadas sobre su vecino, el Acuífero Subterráneo 0505.

### ***El conflicto en Parras de La Fuente (2)***

Estas localidades enfrentan entonces una doble escasez: la generada por la sobreexplotación del acuífero subterráneo vecino y la generada por la sobreexplotación del mismo Acuífero 0505, que directamente está relacionada con la expansión de cultivos que tradicionalmente han sido la base económica de Parras de La Fuente, pero que hasta la privatización de las concesiones del agua subterránea eran implementados con aguas superficiales; pero también ha sido acelerada por el desarrollo turístico de Parras, que ocupa la extracción de grandes volúmenes para el riego de campos de golf, albercas y jardines.

Para acompletar el cuadro anterior, desde los años noventa del Siglo XX se emprendieron acciones de actores con vasto poder económico y político, destinadas a instalar un confinamiento de residuos industriales tóxicos en la zona; esto es, acciones que ya no solamente están relacionadas con una amenaza para la integridad del acuífero desde el punto de vista cuantitativo, sino que trascienden a lo cualitativo; como es este caso, en el que se trata de una acción que está relacionada con una amenaza de contaminación con residuos tóxicos industriales. Y de eso trata el siguiente apartado

### ***El conflicto de Noria de La Sabina***

El territorio ejidal de Noria de La Sabina se encuentra en una planicie que es atravesada por algunos lomeríos, que aunque son de escasa altura tienen importancia orográfica debido a que son los parteaguas entre las cuencas bajas de los arroyos Patos, Boca de Domingo y San Miguel. Tanto la poligonal de la dotación original como la del anexo de ese ejido se encuentran dentro de la primera de esas cuencas.

Se distingue el Patos por conducir volúmenes mucho mayores de aguas superficiales que los de los otros dos arroyos; lo cual tiene que ver principalmente por que su longitud es mayor, al formarse de aguas de manantial y escorrentías que se van incorporando a su cauce desde la Sierra de Zapilamé; es decir, desde los límites de los municipios de Saltillo y Arteaga. Las aguas que escurren por los otros dos arroyos, en cambio, terminan su proceso de infiltración y de evaporación precisamente en los entornos inmediatos de los lomeríos bajos mencionados en el párrafo anterior. Es decir, que los arroyos Boca de Domingo y San Miguel son endorreicos; no tienen salida al mar porque los volúmenes de sus aguas por desaparecer de la superficie terrestre debido a que pasan a ser agua atmosférica o del Acuífero 0505, incluso en época de lluvias; el Patos, en cambio, es exorreico y llega al mar porque en temporada de lluvias logra atravesar la planicie y entrar por el Cañón de Hipólito a otra zona serrana, donde su caudal vuelve a incrementarse por

acción de las escorrentías que van bajando por el oriente de las laderas de la Sierra de Guajardo-El Chiflón y por el poniente de la Sierra de La Paila<sup>247</sup>; de esa forma, logra prolongarse hacia el estado de Nuevo León, donde cambia su nombre al del Río Pesquería que, al tiempo de que va incrementando cada vez más los volúmenes de agua que acarrea, afluye al Río Bravo y de éste al Golfo de México.

La descripción anterior ha resaltado el tema de las interacciones que de manera natural existen entre los subsistemas de aguas superficiales y de aguas subterráneas, dentro del sistema hidrológico en el que se encuentra embudo el ejido Noria de La Sabina. Se hace de esta forma para ofrecer de manera más precisa los fundamentos ambientales que dan sosten a la resistencia de miles de personas, que se organizaron en torno a los ejidatarios que desde el primer momento se opusieron a un grupo de empresarios, apoyados por funcionarios de los tres niveles de gobierno, al descubrir las verdaderas intenciones de construir un confinamiento de residuos peligrosos industriales y no una maquiladora a un lado de ejido.

El proyecto en realidad data de los años noventa del siglo pasado, cuando esos mismos actores externos realizaron un primer intento, en el que no alcanzaron el éxito debido a la resistencia de la ciudadanía cepedense. En ese sentido, la construcción del confinamiento al lado de Noria de La Sabina representa una segunda carga, emprendida por ellos mismos. La narración de cómo se efectuó el proceso de construcción contra la voluntad popular y de cómo a partir de eso se desencadenaron movimientos de resistencia se ofrece al lector en los apartados del capítulo 8 de este mismo documento. Lo que en este apartado se destaca es el hecho de que, según durante dicho proceso los ciudadanos cepedenses comprobaron públicamente, el nivel freático del Acuífero 0505 se encuentra a menos de 20 metros bajo la superficie del terreno contiguo a donde se construyó el confinamiento; lo cual no es de extrañar, considerando que entre las características del sistema hidrológico descritas dos párrafos antes se explica que tras unas lomas que se encuentran en el entorno inmediato terminan de infiltrarse las aguas de dos arroyos.

Lo realmente significativo de esta circunstancia es que, siendo tan superficial el nivel freático, en caso de derrames de sustancias tóxicas o a partir de los simples lixiviados o *escurriduras* como aquí se les ha querido llamar, el riesgo de contaminación del Acuífero 0505 es altísimo. En un escenario en el que se concreta esa posibilidad, la dinámica de los flujos de agua subterránea y los de las aguas superficiales provocarían una catástrofe de dimensiones regionales, pues aquí entra en consideración que si tanto este acuífero como el Arroyo Patos se contaminan, el daño ambiental sería catastrófico, ya que de la presa “El Tulillo” las aguas bajan al estado de Nuevo León hasta llegar al municipio de China, donde se encuentra la Presa El Cuchillo, que almacena el agua que después se transvasa a la Presa Marte R. Gómez, construida en el Municipio de Camargo, Tamps.

---

<sup>247</sup> . Antes de adentrarse por el Cañón de Hipólito, las aguas del Arroyo Patos son retenidas en la Presa El Tulillo, que se localiza en los límites de los municipios de General Cepeda y de Ramos Arizpe. Se trata de una presa muy antigua que se alimenta tanto de las aguas que bajan por el Arroyo Las Vegas (afluente del Arroyo Patos) como del Acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda, que pasa por debajo del confinamiento de residuos peligrosos construido en Noria de La Sabina.

Por lo anterior, los daños al ecosistema pudieran igualar a los que se generaron con los derrames de los confinamientos de sustancias tóxicas de la mina Buenavista del Cobre S.A. de C.V., propiedad del Grupo México, que afectó a más de 22,000 personas de siete municipios situados en las orillas del Río Sonora, tanto en su economía como en su salud a muy largo plazo, debido a los efectos bioacumulables de los metales pesados; además de múltiples afectaciones al medio ambiente (Lamberti, 2018)

## Conclusión

Derivado de las consideraciones metodológicas que se explicaron en el Capítulo 6, el análisis de los conflictos por el agua estudiados aquí fueron abordados en tres escalas cartográficas; procedimiento que ha llevado a una presentación de resultados que requiere un espacio relativamente extenso, por lo que se ha hecho necesario emplear dos capítulos para hacerlo: el primero de ellos es este Capítulo 7, en el que se presentan resultados que se obtuvieron al realizar una aproximación analítica dentro de las escalas *macro* y *meso*; el segundo es el Capítulo 8, en el que se presentan los resultados obtenidos de la aproximación analítica dentro de la escala *micro*.

En consonancia con lo anterior, en este Capítulo 7 en una primera aproximación se hace la contextualización estatal; puesto que la definición de escalas *macro*, *meso* o *micro* no puede ser sino relativa, se estableció la escala *macro* como aquella en la que resulta posible apreciar sin dificultad no solamente una panorámica general de la Región Sureste de Coahuila, sino a su alrededor la Comarca Lagunera al Oeste y los bordes de la zona Metropolitana de Monterrey al Este. Así, una vez delimitados los límites de la cartografía, se ha hecho una nueva delimitación, que en este caso se focaliza en establecer la parte del territorio en el que, de acuerdo a la información colectada en campo durante esta investigación, se resienten con mayor efecto los impactos económicos y socioambientales de la Zona Industrial de Derramadero. Es de este modo que queda definida de manera específica la zona en la que se encuentran comprendidos y en proceso los conflictos aquí estudiados: una franja de territorio, de forma curva, que abarca desde el Sureste de la Zona Metropolitana de Saltillo hasta el Noroeste del municipio de General Cepeda (incluso el extremo Este del municipio de Parras de la Fuente). A esta franja territorial se le ha denominado como la *arena regional* o *macro*, pero dado que a esta escala no se pueden definir con claridad actores individuales, se les refiere a ellos como *actores locales* y *actores externos*; asumiendo que los primeros son rurales, por antonomasia.

Los *actores locales* que se alcanzan a distinguir en esta escala *macro*, en su mayoría, tienen un perfil socioeconómico eminentemente campesino; pero también existen otros sectores de la población que no poseen tal perfil, entre los cuáles pueden diferenciarse agroempresarios, comerciantes, profesionistas, prestadores de servicios, religiosos y políticos.

Por lo que se refiere a los *actores externos* que intervienen en el escenario local destacan especialmente funcionarios gubernamentales y empresarios inmobiliarios y/o industriales, los cuáles no son tan fácilmente posibles de distinguir, como puede indicar la lógica más elemental. Y es que las acciones emprendidas de manera conjunta por esa dupla de

*actores externos* están motivadas principalmente por el interés común que tienen de apropiarse de todos los medios de producción posibles. Esta conclusión, derivada del análisis de la información recabada en el campo por el investigador, resulta convergente con la opinión de la mayoría de los actores locales y se deriva de la observación constante de un modo de operar de esos *actores externos* que sin problema puede ser catalogado como lo que ha dado en llamarse “capitalismo de cuates”. Y es que algunos personajes juegan un doble rol poco transparente, tanto como empresarios como funcionarios, ya que directa o indirectamente (a través de familiares cercanos) ocupan indistintamente puestos de decisión en el sector privado y en gobierno, lo cual los orilla a mantenerse en un permanente conflicto de intereses económicos y políticos. En ese sentido es que se les ha tipificado aquí como miembros de una oligarquía, que tiene su sede en la ciudad de Saltillo.

Al amparo del mencionado doble rol se ha promovido la conversión de la tierra y del agua en mercancías, empleando procedimientos poco transparentes; pero lo peor es que no han parado ahí los hechos, sino que se ha avanzado con el mismo en la realización de acciones que pueden caracterizarse ya como propias de un capitalismo bien entrado ya en su fase de acumulación por despojo.

Por las características antes señaladas, la *arena macro* puede concebirse como el contexto general de los conflictos por el agua aquí estudiados y, con ello, permite encauzar el énfasis de este capítulo en la escala *meso* y el del Capítulo 8 a entrar con mucho detalle la escala *micro*, ya que es propiamente la que permite definir las acciones de la vida cotidiana de los actores.

Derivado de lo anterior, la mayor extensión del presente capítulo se dedica a tratar el tema de la sobreexplotación de los mantos acuíferos subterráneos y sus consecuencias en la sociedad y el medio ambiente. De esta forma, se ha dedicado atención especial a tratar la historia reciente, o crónica si se quiere ser estricto en los conceptos, de los acuíferos 0502 Derramadero, 0505 General Cepeda Saucedo y 0521 Saltillo Sur. Ubicando las presiones que se ejercen sobre los actores que habitan en el municipio de General Cepeda desde todos los puntos cardinales: desde el Noreste por la Zona Industrial de Ramos Arizpe, desde el Este por la Zona Industrial de Derramadero y desde el Suroeste, Oeste y Noroeste por las áreas de plantaciones hortofrutícolas bajo riego.

Definida la *arena macro*, se abrió la posibilidad de definir las arenas *meso*; para lo cual se tomó como primer criterio de delimitación el hacerla coincidir en la superficie terrestre con los límites del acuífero subterráneo, tal cual fueron definidos por la CONAGUA. La lógica de hacerlo de ese modo se fundamentó, más que nada, en que al hacer una superposición cartográfica de los polígonos de esos cuerpos de agua con la franja del territorio definida como *arena macro* quedan claramente definidos cuáles conflictos por el agua están vinculados a cuáles mantos acuíferos. Esta manera de definirla no encontró objeciones al tratar los conflictos que se suscitaron a fines del Siglo XX en el Cañón Derramadero o en la Sierra de La Casita, en tanto que las presiones de los actores externos se ejercieron precisamente sobre esos acuíferos; sin embargo, no se obtuvieron los mismos resultados positivos cuando debieron de empujarse las arenas *micro* a las arenas *meso*, ya que al analizar las interacciones y mutuas afectaciones entre arenas de diferente escala se cayó en cuenta que la disminución de los caudales del Arroyo San Miguel se explica no

solamente por la disminución de los niveles piezométricos del Acuífero 0505, que es el que subyace a la mayor parte de la superficie de su cuenca, sino también a la disminución de esos mismos niveles en el Acuífero 0521.

La circunstancia anterior no es cosa menor, ya que al sur de la Sierra de Parras existen mucho más plantaciones regadas con aguas subterráneas que al norte de la misma; lo cual implica que el abatimiento de los niveles piezométricos de ese lado, que son los del Acuífero 0521, es mucho más intensa. Eso se traduce, según se ha corroborado en campo, en una disminución de los volúmenes de agua que afloran en los manantiales, mayor a la disminución de los volúmenes de los manantiales que son afloramientos del Acuífero 0505; tan mayor que, de acuerdo a las afirmaciones de los *actores locales*, son cada vez más los manantiales que acaban por secarse a consecuencia de tal sobreexplotación; realizada muchas veces incluso sin tener la concesión de extracción debidamente legalizada (o lo que es lo mismo, lo que puede tipificarse como huachicoleo del agua del subsuelo, como forma de despojo).

Puede comprenderse, pues, que si bien no es muy extensa la parte del territorio cepedense en las que se realizaron los estudios de caso, el origen hidrológico de sus cuerpos de agua resulta muy complejo. Es por ello que se considera que vale detenerse un momento en insistir que, para las arenas que se definan a cualquier escala, debe tenerse presente en todo momento que existe siempre un grado de incertidumbre en la definición de los límites de las cuencas subterráneas, lo cual impone al investigador el deber ser muy cauto en dar por sentado la infalibilidad de sus conclusiones. Se trae a mención este tema al considerar que resultan más que pertinentes las observaciones que, ya hacia los finales de esta investigación, hizo a quien estos párrafos escribe un activista de la organización civil “Agua para Todxs”, quien radica en la Comarca Lagunera y es especialista en geohidrología y dentro de su experiencia profesional incluye muchos años de actividades técnico administrativas como funcionario de la CONAGUA; se trata de Carlos Chairez Araiza, quien fue tajante al decir: “...los límites que estableció la CONAGUA para los acuíferos subterráneos son administrativos, pues no están basados plenamente en fundamentos técnicos debidamente comprobados...” (Chairez, *com. pers.* 12/Oct/2024)

Chairez explica que para determinar los límites como lo exigen los estudios técnicos, estos deberían haberse basado en datos muy detallados de la geología regional; datos que no se tenían cuando se presentó la obligación de cartografiar los acuíferos subterráneos. Explicó que, simplemente considerando la Ley de D’Arcy se aprecia que resultan del todo insuficientes los datos obtenibles de la carta geológica G14C23 (1975)/1:50,000, que es la más actualizada de la que dispone el INEGI, que ya en sí misma tiene muchas imprecisiones; debido a lo cual, para poder generar límites más confiables de los acuíferos subterráneos, deberían haberse hecho estudios muy detallados, que no se pudieron hacer por falta de presupuesto. A falta de esa información, explicó que los límites fueron trazados basándose más en la intuición de los técnicos a quienes se encargó esa tarea, que en un conocimiento cabal que ellos tuvieran de los parámetros geológicos locales.

Se considera que nodal importancia de la advertencia que hace Chairez, debido a las profundas implicaciones que tiene para cualquier posible propuesta de solución técnica al problema de la sobreexplotación de los acuíferos. Nos subraya la necesidad de no perder

de vista, en ningún momento, que las clasificaciones que hace el ser humano para simplificar el estudio del agua, separando cuencas (subterráneas o superficiales) son solamente medidas discrecionales. Para completar el cuadro, debe recordarse que, en la vida real, el *holum* del ciclo del agua implica interacciones y flujos de materia y energía entre esos cuerpos, que los hace interdependientes.

Pero, más allá de las conclusiones que se desprenden de analizar la información de carácter técnico como la que se ha descrito en los párrafos anteriores, del ejercicio analítico realizado también se desprenden otro tipo de conclusiones, que se refieren al carácter multiescalar que se integró a la metodología empleada:

La definición de la escala *macro* está orientada, más que entrar en los detalles de los conflictos por el agua, a establecer el contexto regional en el que se deben enmarcar dichos conflictos. Esto es un punto importante de tener presente, ya que al orientar la discusión al contexto y no a detallar los conflictos se tiene como consecuencia implícita la inevitable necesidad de flexibilizar el enfoque del actor, en tanto que a estas escalas pequeñas rara vez resulta posible o viable estudiar actores concretos, ya n stos solamente son perceptibles por la mirada de un sociólogo a escalas locales y eventualmente a escalas municipales. De ahí que solamente se pueda hablar, en una investigación con el perfil que tiene la presente, en un sentido un tanto abstracto, respecto a actores rurales y actores no rurales. La poca definición que permite observar la escala macro para los temas sociológicos hacen pensar más en emplear como aproximación de investigación a postulados como el de Zemelman y el Sujeto Social (1997), dejando para la escala *meso* y *micro* el enfoque del actor.

Bajo el mismo razonamiento anterior a la escala *meso* ya es posible observar con un buen grado de definición colectivos de actores conspicuos en el contexto municipal<sup>248</sup>; especialmente los que se encuentran movilizados. Pero lo más importante es que, gracias a la definición que se alcanza a esta escala, ya es posible vincular causalidades históricas entre conflictos locales que se suscitan en la región; en base a lo cual se han desarrollado las historias de los conflictos por el agua de los acuíferos; primero del 0502, después del 0521 y finalmente del 0505, que se incluyen en el presente apartado. Historias en las que se han destacado las movilizaciones efectuadas por los actores locales, en resistencia a las intromisiones de actores externos que han tratado de posesionarse de los acuíferos subterráneos; también las afectaciones económicas y socioambientales de las que han sido objeto los actores locales.

No por casualidad fue que la mirada de los dueños del capital y el poder político se orientó hacia los cuerpos de agua subyacentes a la superficie terrestre, en tanto que sus volúmenes son inmensamente superiores a los volúmenes de las redes hidrográficas superficiales.

---

<sup>248</sup> . Desde luego, depende mucho de la extensión superficial que tengan los municipios, ya que no es lo mismo la superficie promedio de, por ejemplo los municipios en Oaxaca, que en Hidalgo, que en Coahuila o que en Baja California. En ese sentido, se precisa que, en el caso de este estudio, se está hablando de que el de General Cepeda tiene 3,517 Km<sup>2</sup>, el de Saltillo 6,837 Km<sup>2</sup> o Parras con 9,272 Km<sup>2</sup> (www.coahuila.gob.mx)



## CAPÍTULO 8. CONFLICTOS POR EL AGUA A ESCALA MICRO

*Los bienes comunes son coextensos con los recursos naturales y el patrimonio inmaterial. Son parte de la definición de una comunidad. Su privatización se llama despojo. Es la realidad violenta que nos amenaza y se extiende en un planeta donde la ley valedera no son ya los derechos humanos y la legalidad establecida sino cada relación de fuerzas dada: es decir, en un planeta sin ley.*

Adolfo Gilly (2014: 42)

En la búsqueda de comprender los conflictos por el agua en las localidades de estudio, en el capítulo anterior se emplearon como referentes cartográficos dos escalas: la *macro*, orientada a estudiar a la Región Sureste de Coahuila como universo de trabajo, dentro de su contexto geográfico, que es el Desierto Coahuilense. En esa escala se definieron la Zona Industrial de Derramadero y su área de influencia económica y socioambiental. Esta última fue llevada a la escala *meso*, en la que gracias a la mayor definición pudieron ilustrarse los cuerpos de agua superficiales y subterráneos que en ella se encuentran.

Bajo los criterios establecidos para definir las escalas de aproximación a los sujetos de esta investigación, relativizados de acuerdo a los parámetros de extensiones territoriales de esta región del país, la *meso* resulta la adecuada para hacer estudios municipales, que son en los que se observan con buena definición los conflictos que involucran a varias localidades. De aquí que conviene tener presentes las observaciones y los resultados del análisis que en esta escala se realizan, ya que aportan los elementos del contexto de los conflictos locales que se estudian en el presente Capítulo 8, empleando la escala *micro*.

La virtud que tiene la escala *micro* que no tienen las escalas *meso* y *macro* es que permite ubicar personalmente a los actores locales, así como a los roles que cada uno de ellos juega individualmente en las arenas donde dirimen sus desacuerdos o conflictos. Es por ello que esta escala resulta adecuada para estudiar la vida cotidiana de los actores y permite dar relevancia a aspectos de la misma que ilustran el lado humano y los valores comunitarios implícitos en cada conflicto; con un nivel de detalle que no se puede percibir empleando la escala *meso*; mucho menos la escala *macro*.

Por lo anterior, en el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis a escala *micro* de los conflictos por el agua más relevantes de General Cepeda. La fuente de información que fundamenta estos resultados es, en esencia, la obtenida durante el trabajo de campo para los dos estudios de caso de esta investigación: el primero es el conflicto en el que se confrontan los ejidatarios de Jalpa y San Juan del Cohetero, en una disputa que se originó hace ya casi nueve décadas por las aguas almacenadas en la Presa Jalpa, en el contexto del reparto agrario; el segundo refiere a la lucha de resistencia que iniciaron setenta y cinco años después del reparto agrario los ejidatarios de Noria de la Sabina, contra la construcción de un confinamiento de residuos tóxicos y en el contexto de la expansión del capitalismo industrial globalizado, invadiendo y despojando los territorios concedidos por ese mismo reparto agrario.

La ventaja principal de ocupar la escala *micro* para realizar análisis socioambiental es que permitió al investigador profundizar el estudio a nivel comunitario, de las interacciones que tienen los actores locales, entre sí y con su entorno. Dentro de sus ventajas para analizar los casos de estudio se encuentra la de su idoneidad para emplear métodos de campo, como la observación y la entrevista, que permiten investigar de manera detallada las repercusiones y/o implicaciones que han tenido los conflictos por el agua en la vida de las familias campesinas que viven en los ejidos estudiados. Advirtiéndose, sin embargo, que dichos métodos de colecta de información debieron de matizarse al aplicarse en uno y otro caso, puesto que mientras que el conflicto por las escorrentías que se almacenan la Presa Jalpa tiene más de ochenta años, el de Noria de La Sabina apenas se encontraba emergiendo; es decir, que se tomó muy en cuenta que en el primer caso las respuestas correspondían a los nietos de los actores del conflicto, por tanto filtradas por el paso de al menos dos generaciones humanas, mientras en el segundo las respuestas derivan de la experiencia personal que les da el ser los actores del conflicto.

Para desarrollar el análisis a escala *micro* se ha recurrido a métodos de recolección de datos de campo empleados comúnmente en los estudios etnográficos, en especial las entrevistas o conversaciones, dirigidas o circunstanciales, programadas o fortuitas. En concordancia con esto, la redacción empleada para presentar los resultados del trabajo de campo ha recurrido a aplicar un estilo más estenográfico, entreverado con algunas observaciones del autor.

Mediante esas formas de aproximación se logró alcanzar un buen nivel de detalle en la información colectada; esto, especialmente en el caso de Noria de La Sabina, donde el investigador pudo obtener información más minuciosa y mayor riqueza de expresiones relativas a sentimientos y resentimientos, las menos de las veces felices y en ocasiones muy trágicos; además de haber tenido la oportunidad de incorporarse directamente como testigo presencial de muchas acciones de la movilización.

Como consecuencia de lo anterior, la tarea de documentar los orígenes del conflicto de la Presa Jalpa tuvo que pasar primero por conversar con actores locales de edad avanzada, para luego procesar la información recabada, vista la información así obtenida como un primer acercamiento a los primeros desacuerdos entre los ejidatarios *primordiales*<sup>249</sup>, se acudió con ella al Archivo Central del Registro Agrario Nacional, a confrontarla con las versiones oficiales guardadas en las carpetas básicas de las dotaciones de tierras ejidales. La tarea de documentar el conflicto de Noria de la Sabina fue diferente, ya que al haberse desencadenado cuando esta investigación se encontraba en sus primeras etapas, permitió documentarlo de primera mano, aplicando las mismas herramientas metodológicas de forma participativa con los actores directamente involucrados en el mismo; visitando de manera regular al ejido e incorporándose a los espacios de discusión y/o manifestaciones

---

<sup>249</sup> Angel Carrillo (2009: 7) señala que: “Existe un apelativo que regionalmente se aplica a quienes fundaron los ejidos, cuyo significado lingüístico y el tono en que se pronuncia dan a entender al observador externo el alto grado de admiración y respeto que genera su sola mención entre los campesinos viejos: “los primordiales””.

de protesta que fueron organizados por los actores movilizados, hasta donde éstos le permitieron al investigador acercarse a ellos<sup>250</sup>.

Quien estas líneas escribe considera que conviene aclarar que no pretende, con ese estilo de presentación, de ninguna manera, afirmar que ha logrado realizar una investigación etnográfica rigurosa ni acabada; simplemente se trata de una selección de expresiones de los actores, que pudo recabar en torno al conflicto por el agua y las consecuencias que éste ha desencadenado en sus vidas; que han llegado a ser fatales, como da constancia de ello la historia sobre la muerte de Toño Hernández. Desde luego, se reconoce que estas crónicas siempre pueden ser interpretadas por el lector en un sentido diferente al que se le quiere dar en este documento.

### **8.1. Desecamiento de los arroyos Patos y San Miguel**

Hoy día, a tres décadas después de que se aceleró el proceso de abatimiento de los niveles piezométricos de los acuíferos subterráneos que rodean la Z.M.S., la escasez de agua han pasado a ser una realidad generalizada, extendida por todo el municipio de General Cepeda y expresada en multitud de conflictos por el agua que se dan a diferentes escales. Si los conflictos del Cañón de Derramadero y del Cañón de La India dieron a conocer a la ciudadanía coahuilense que los entonces recientes cambios a la legislación que regula la propiedad, el acceso y uso de la tierra y del agua no eran inocuos ni ambiental ni socialmente, hoy día saltan por todos lados las evidencias de que la extinción de los manantiales que emanan de las sierras de La Casita y de Parras es un hecho consumado en varias localidades, que tiene derivación directa de la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos y éstos, a su vez, derivan de la privatización de la tierra y del agua en las zonas rurales saltillenses, cepedenses y parrenses.

La información recogida en campo en esta investigación, centrada en poblados asentados en la cuenca baja del Arroyo San Miguel y en la cabecera municipal (asentada en la cuenca baja del Arroyo Patos) permiten afirmar que esa desaparición de manantiales ya se preveía por habitantes de los poblados asentados en las proximidades del Arroyo Patos desde los años noventa y que se fueron materializando con el paso del tiempo en casos locales de secamiento de los mismos; primero dentro de esa cuenca pero después extendida hacia el poniente (hacia Parras), donde fueron apareciendo de manera paulatina las tendencias de agotamiento de los manantiales de los poblados asentados en las proximidades del Arroyo San Miguel<sup>251</sup>.

---

<sup>250</sup> Durante el desarrollo de la investigación se procuró siempre la interacción directa y personal con los actores locales involucrados en el conflicto, tanto en espacios colectivos abiertos en la arena del conflicto como en espacios domésticos de los actores individuales. No obstante, como sucede en toda organización colectiva, los dirigentes del movimiento hacían (y hacen) reuniones restringidos a solamente uno cuantos seleccionados, por lo que a algunas de ellas no tuvo acceso el investigador.

<sup>251</sup> A procesos socioambientales como los anteriores, que implican un crecimiento progresivo de afectaciones a un territorio es lo que en el apartado 6.9.1. se ha denominado *expansión extractivista*; definiéndola como “el proceso histórico experimentado en un territorio o paisaje ecológico mediante el cual la extracción progresiva de elementos o componentes naturales del

Lo dicho antes, se insiste, válido para la cuencas bajas, ya que hay referencia por otros lados de que el proceso de disminución de los caudales en la cuenca alta del Arroyo San Miguel ya había sido percibido por los actores locales desde los años ochenta:

...los caudales de los ejidos localizados en la cuenca del Arroyo San Miguel, comenzaron a bajar a principios de la década de los ochenta, cuando una cooperativa abrió la zona agrícola de Parras el Alto, que actualmente pertenece al empresario Miguel Guajardo [por lo que] “se acabó el agua de Presa San Antonio, de Seguin y otros ejidos. El de Seguin y Presa San Antonio era un caudal más fuerte, se hizo más intermitente y el agua de Jalpa disminuyó un poco, sin que se acabara, pero disminuyó.

(Peña, 2021).

Y es que la mayor parte de los volúmenes de agua que corren tanto por el Arroyo Patos como por el Arroyo San Miguel poseen afloramientos del Acuífero 0521 en las serranías donde se localizan sus respectivas cuencas alta y media. El primero de estos arroyos nace así en el territorio municipal de Saltillo, mientras el segundo en el de Parras de La Fuente; orientados sus cauces de tal manera que el Patos entra a General Cepeda por su sureste y el San Miguel por su suroeste. Conforme ambos arroyos se van adentrando en el municipio traspasan los límites con el Acuífero 0505. Dicho de otro modo, que cada una de ambas cuencas tienen su *topos* sobre dos diferentes acuíferos subterráneos<sup>252</sup>.

Debido a que a lo largo de los cauces se van realizando desvíos de las aguas para regar parcelas, los volúmenes disponibles para emplearse en las localidades y predios/parcelas que se encuentran en zonas más bajas de las cuencas van paulatinamente disminuyendo. De ahí que, en la medida en que han ido secándose los manantiales que manaban en las partes altas en la actualidad la falta de agua para ellos ya ha alcanzado niveles críticos en muchos casos, lo cual se traduce en inviabilidad productiva, decremento de los indicadores de salubridad, abandono de los predios (los que no tienen pozo) y en emigración. La escasez de escorrentías se manifiesta de manera más palpable en las comunidades de toda la cuenca de Patos, ya que tiene una mayor densidad poblacional precisamente por

---

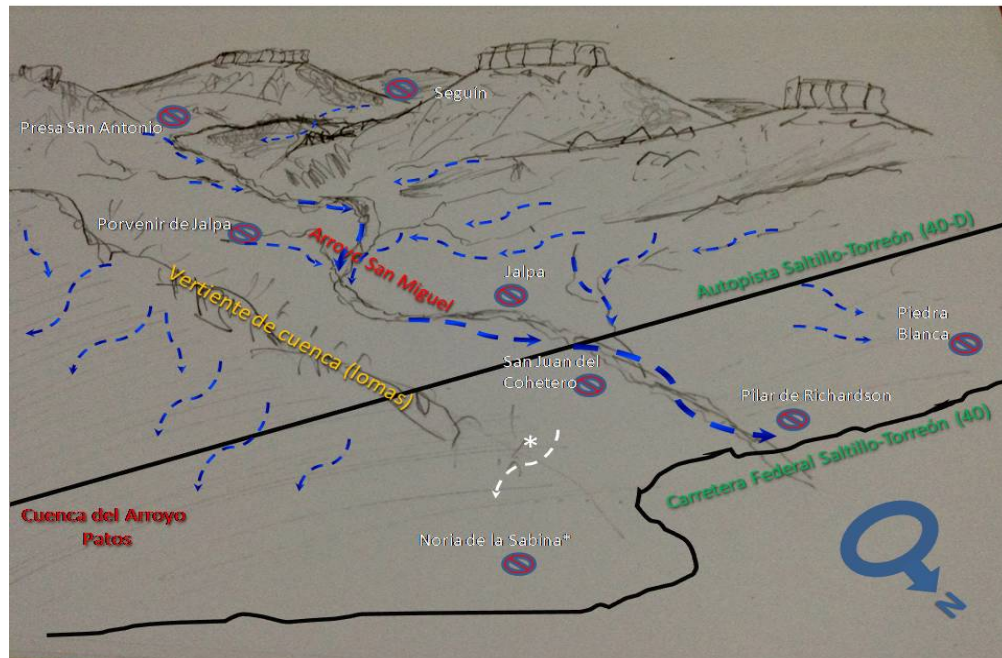
ecosistema para ser empleados en actividades humanas van agotando su existencia, en superficies o profundidades cada vez más amplias, poniendo en riesgo su capacidad de regeneración y su integralidad sistémica en el corto plazo”.

Se trata de un concepto que no debiera perderse de vista, puesto que alude a un proceso territorial que afecta tanto a los cuerpos de agua que se encuentran bajo la superficie terrestre como los que se encuentran sobre de ella, ya que en realidad son elementos de un mismo ecosistema.

<sup>252</sup> Con el auxilio de la Imagen Google Earth 4 puede observarse como una de las vertientes de las sierras que se localizan en el sur de General Cepeda se orienta hacia el noreste, debido a lo cual tanto el Arroyo Patos como el Arroyo San Miguel descienden tomando ese mismo rumbo hacia los bajíos del municipio de Ramos Arizpe. Destacando aquí que en la Sierra de Parras se encuentran los límites de los acuíferos 0521 Saltillo Sur y 0505 General Cepeda-Sauceda, por lo que los manantiales que alimentan al arroyo pasan de ser afloramientos del primero en su cuenca alta al del segundo, en sus cuencas media y baja; de ahí que se pueda afirmar que debido a que el arroyo lleva en esas dos zonas de su cuenca mezcla de aguas de los dos acuíferos. Tómese por otro lado en cuenta que Jalpa, San Juan del Cohetero y Noria de La Sabina se sitúan en las partes más bajas de la cuenca del San Miguel (las dos primeras) y de la de Patos (la tercera).

haber tenido más caudales disponibles de forma natural y, por tanto, más propicia para los asentamiento humanos. Los impactos que de manera más reciente se sienten en las localidades de la cuenca del San Miguel afectan a menor cantidad de familias, pues los volúmenes de sus escorrentías son menores y sus localidades más dispersas.

**Figura 7 Esquema simplificado de los Arroyos San Miguel y Patos**



Fuente: Elaboración propia.

Con lo anterior no se quiere decir que el abatimiento de los volúmenes de las escorrentías no sea grave para las localidades de la cuenca baja del Arroyo San Miguel, puesto que todavía en los últimos años del Siglo XX era común que el caudal llegara hasta la presa El Pastorcito (la última aguas abajo) u se alcanzaban a regar algunas parcelas del ejido Pilar de Richardson; pero hoy día son tan escasos los volúmenes que llegan a esa presa que, los campesinos de ese ejido, ya no se atienen a sembrar en los entornos y solo esperan que no falte en absolute, para que al menos sirvan para que abreen sus hatos ganaderos.

Dan constancia de este proceso de la disminución de los volúmenes que bajan por los arroyos de referencia las siguientes palabras de uno de los actores locales, cuya residencia se encuentra en el poblado del ejido Jalpa, que más se han destacado por su beligerancia a lo largo de su vida:

...Y primero nos vuelven los manantiales intermitentes y luego se terminan los manantiales, ¿No? Como en el caso de la cuenca del Arroyo San Miguel. En el caso de la cuenca del [Arroyo] Patos, que se tienen problemas con el agua desde los años 90, empezaron a disminuir los mantos freáticos y, bueno, ya se perdió el agua de toda esa zona; desde El Nogal, El Jaralito, La Paz, La Puerta, bueno el agua de Narigua ya no existe, el Ojo de Agua, Independencia que tenía mucha agua, Tanque de San Vicente, La

Hedionda, San Antonio del Jaral ¿Cuál se me pasa? La Rosa mismo, ¿No? Por la sobreexplotación de los mantos freáticos despojan a los ejidos, a todos estos ejidos. Igual a los ejidos del Arroyo San Miguel, que, como quiera, todavía tienen un poquito de agua, pero cada vez más intermitente.

Juan Gamboa Maldonado (Enero de 2023)

Puede apreciarse en este relato que han sido muchos los ejidos (no se digan ya los predios privados que no se mencionan) que han visto disminuir o incluso desaparecer los volúmenes de agua que les proporcionaban antes del cambio de siglo los arroyos Patos y San Miguel. La desaparición de los manantiales *pone en jaque* la sobrevivencia de ambos arroyos y la de todos los seres vivos que dependen de sus aguas. Más aún, arriesga la sostenibilidad de todo General Cepeda, en tanto que los cauces de los mismos cubren casi en su totalidad el municipio.

Lo anterior, visto a la escala *micro* en la que se estudian los conflictos por el agua que acontecen en las cuencas y los alrededores de los arroyos Patos y San Miguel, encuentra la principal degradación institucional gubernamental en la corrupción imperante en la Comisión Nacional del Agua, que en colusión con dependencias del Gobierno del Estado y con la oligarquía que hoy día acapara el agua en la *Franja Sur de Coahuila* ha favorecido la excesiva emisión de concesiones para explotar tanto al Acuífero 0521 Saltillo Sur como al 0505 General Cepeda–Sauceda; esto se traduce en la perforación de pozos en tal cantidad y con tanta capacidad de volumen extraído<sup>253</sup> que sobrepasan con creces la capacidad de regeneración natural de los acuíferos; rompiendo con ello los equilibrios ecológicos.

En definitiva, tanto en el Arroyo Patos como en el Arroyo San Miguel la gravedad de los conflictos por el agua que hoy día acontecen tienen una importancia crucial para el futuro inmediato de los actores locales; la imposibilidad material de analizar a la escala *micro* todos los casos obligó a limitar el universo de trabajo<sup>254</sup> y fue así como se seleccionó al inicio de la investigación el caso de la Presa Jalpa, construida en la cuenca baja del Arroyo San Miguel. Como se explica en otro apartado, en un segundo momento se optó por incluir dentro de la investigación un segundo caso, que fue el de Noria de La Sabina. De ahí que el presente apartado esté orientado a dar un contexto general de las características sobresalientes de la cuenca del Arroyo San Miguel, de cuyas aguas dependen tanto ejidos parrenses (Huariche, San Miguel, Sombreretillo, Seguin, Presa San Antonio y Agua Blanca) como cepedenses (Jalpa, Santa Inés, San Juan del Cohetero y Pilar de Richardson). Amén de una indeterminada cantidad de pequeñas propiedades.

---

<sup>253</sup> A la par de perforaciones realizadas legalmente, hay un clamor popular respecto a que existe una cantidad similar de perforaciones clandestinas, efectuadas mediante su ocultamiento o corrompiendo a unas autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley que aparentemente son las únicas que no se dan cuenta de las irregularidades que se encuentran bajo el proceso de *expansión extractivista* por el que se encuentran pasando los acuíferos citados.

<sup>254</sup> Se ha hecho mención ya, en la Introducción de este documento, el camino recorrido para llegar a los estudios de caso que finalmente quedaron seleccionados.

Dicho lo anterior, en conciencia de la naturaleza sistémica implicada en la problemática que plantea esta investigación, desde la perspectiva de la Ecología Política que se resalta en la presente investigación se postula que el problema de la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos tiene profunda raíz en la degradación de las instituciones, tanto de las del Estado como las de la sociedad; degradación institucional que, en última instancia, deriva de la expansión en la región de sistemas de producción extractivistas que se reproducen con base a la apropiación privada de los bienes naturales que hasta hace unos cuantos años se concebían como un bien común y como tales estaban todavía en manos de sociedades campesinas.

Más específicamente, se afirma que, para los casos estudiados, tal modelo implica un proceso de despojo basado su aplicación no solamente en la institucionalización de la privatización de la tierra y del agua dentro de las leyes que conforman al Estado mexicano actual, sino también en la degradación, mediante la corrupción, de las instituciones gubernamentales concebidas para vigilar la correcta aplicación de las leyes destinadas a conservar esos bienes naturales; así como la de las instituciones sociales tradicionales para el manejo colectivo del agua, cuyo resquebrajamiento ha sido favorecido por la fragmentación territorial y por la imposición de los valores individualistas propios del sistema capitalista. La degradación conjunta de esas y otras instituciones dan libre paso al despojo de la tierra y del agua, mediante un sistema estructurado esencialmente para hacer abuso del poder por parte de una oligarquía depredadora que se conforma de actores que se desempeñan ocupando cargos clave en los ámbitos empresariales y gubernamentales.

## **8.2. Un lugar al norte de General Cepeda**

Los casos de estudio de esta investigación se ubican al norte del municipio de General Cepeda, muy cerca del vértice limítrofe con los de Parras de La Fuente y de Ramos Arizpe. Desde el punto de vista de la hidrología superficial, se destaca que por esa zona cruza el parteaguas de las cuencas del Río Bravo y la de La Laguna; delimitadas respectivamente por las (micro)cuencas de los arroyos Patos y San Miguel. Respecto a la hidrología subterránea, subyace a toda la zona el Acuífero 505 General Cepeda–Sauceda.

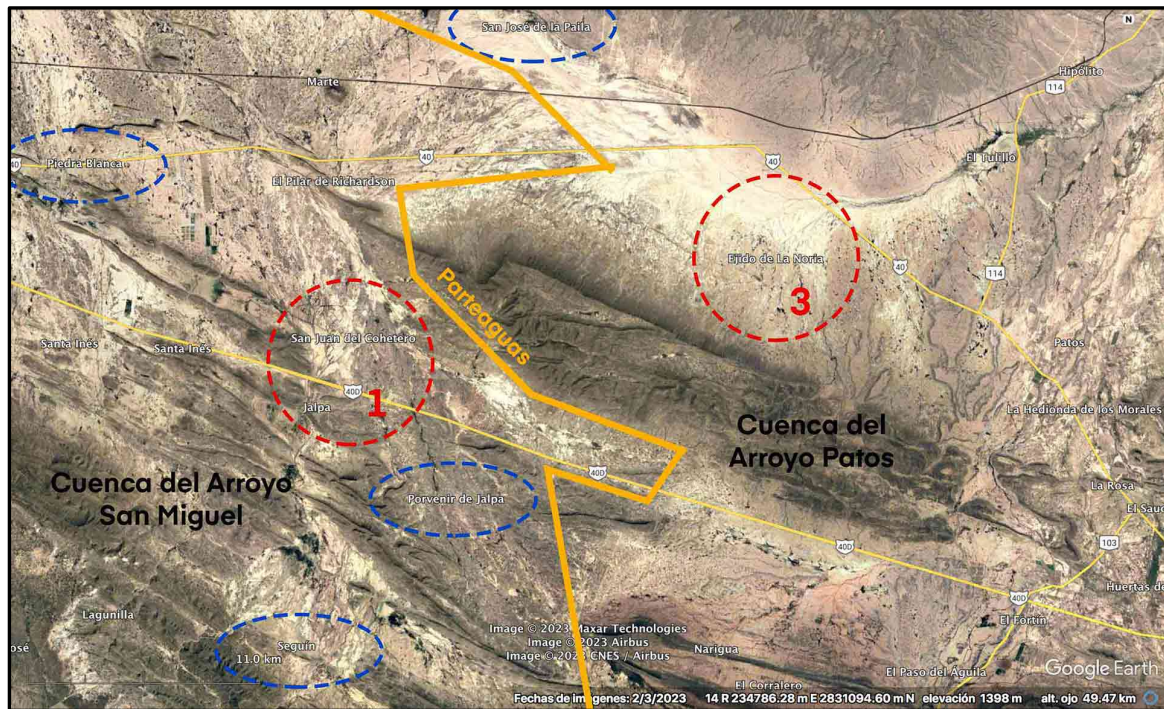
Vistos desde el punto de vista de su territorialidad ejidal, San Juan del Cohetero se encuentra en medio de los otros dos: al norte de Jalpa y al Suroeste de Noria de La Sabina, de ahí que sus poblados se encuentren dentro de un radio no mayor a 15 Km. Los más alejados entre sí son los de Noria de La Sabina y Jalpa, que distan entre sí unos 25 Km en línea recta, pero el de San Juan del Cohetero se encuentra a no más de 4 Km del de Jalpa, por lo que a ambos se accede desde un mismo entronque con la Autopista 40D Saltillo-Torreón (de cuota), si bien en sentidos opuestos.

Los terrenos en los que se localiza el ejido Noria de la Sabina pueden describirse, por su parte, como un conjunto de pequeños bajíos que se fueron conformando a través de las eras geológicas, a partir de los arrastres de materiales desprendidos, de las sierras aledañas, por la acción erosiva del viento y del agua. Derivado de ello, en el primer plano de su paisaje ecológico dominan las planicies, mientras que al fondo (en especial hacia el



norte y hacia el sur) se distinguen varias cordilleras de mediana elevación. El acceso al poblado de Noria de La Sabina se hace desde un entronque con la Carretera Federal 40 (libre), que corre de manera casi paralela a la autopista, a distancias variables de ésta. Pero también es posible llegar a ese poblado desde el de San Juan del Cohetero, por un camino de terracería que pasa por el poblado del ejido Pilar de Richardson, desde el cual se accede a otro entronque con la misma carretera libre.

### Imagen Google Earth 5 Parteaguas de las Cuencas R24 Rio Bravo y R36 Nazas-Aguanaval<sup>255</sup>



Fuente: Elaboración propia.

El territorio de Jalpa presenta una conformación topográfica más diversa que las de los territorios de los otros dos ejidos; lo cual se debe a que la mayor parte del ejido se ubica en las estribaciones de la Sierra de Parras, pero también sobre bajíos que se abren hacia los valles que rodean a la Laguna de Mayrán, cuando no en la cuenca baja del Arroyo Patos (dependiendo de qué lado del parteaguas de encuentren). De aquí que los tres ejidos presentan matices en su paisaje, propios de la transición entre la sierra y los valles; mientras el sur jalpeño presenta pendientes más abruptas, terrenos de pendiente suave en el centro y casi planos en su parte norte, en cambio, San Juan del Cohetero y Noria de La Sabina son ejidos casi planos.

Sus perfiles sociológicos, en cambio, son muy similares; se pudiera decir iguales, puesto que son habitados por campesinos cuya historia, cultura y medios de vida proceden de una

<sup>255</sup> Las claves de las regiones son las definidas en la cartografía del INEGI, no las que definen las regiones administrativas de la CNA.



misma raíz, que no solamente se mantiene sino que se han vuelto a vincular a partir de los conflictos socioambientales surgidos a partir de la Contrarreforma Agraria neoliberal de los años noventa del siglo XX, en los que colectivamente se confrontan contra actores externos, cuyas acciones han tenido y tienen afectaciones directas y muy graves tanto sobre el Acuífero 0521 Saltillo Sur, del cual se nutren los manantiales de las cuencas alta y media del Arroyo San Miguel, como sobre el Acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda, que se encuentra bajo los tres ejidos, sobre el cual se cierne una amenaza más grave aún, que es la de su contaminación con sustancias tóxicas, lo que los convierte en una amenaza tangible para la vida, no solamente de humanos sino de todos los seres vivos que habitan los ecosistemas locales.

Como quiera que sea e independientemente de la antigüedad que tengan los conflictos, lo que en este trabajo se sostiene es que, en ambos casos, fue la apertura del mercado de tierras el factor que vino a exacerbar ambos conflictos. No queriendo decir con ésto que entre los actores locales no existieran o sigan recreándose conflictos por el agua, puesto que los hay entre Jalpa y San Juan del Cohetero desde los tiempos del reparto agrario, por los porcentajes que les toca a cada quien de las escorrentías del Arroyo San Miguel.

Con base al diseño de aproximación a los estudios de caso, descritos en el apartado 6.6. (Arenas integradas jerárquicamente como cortes de cebolla), complementados con las consideraciones expuestas en el apartado 6.5. (Actores y actantes a diferentes escalas), los dos casos de estudio sobre conflictos por el agua que se presentan en este capítulo son analizados a la escala *micro*. Habiéndose definido para ello: i) como *contexto general* al territorio municipal de General Cepeda; ii) como *contexto inmediato* a las cuencas del Arroyo San Miguel y del Arroyo Patos para abordar el tema de las aguas superficiales y a los Acuíferos 0505 General Cepeda-Sauceda y 0521 Saltillo Sur para abordar el tema de las aguas subterráneas.

Para el del conflicto de la Presa Jalpa se optó por mantener la atención medular del análisis dentro de la escala *micro*, enfocando a la cuenca superficial del Arroyo San Miguel y a las dos subterráneas como partes integrales de un solo sistema hidrológico<sup>256</sup> dentro de su *contexto inmediato*.

Para el estudio de caso de Noria de la Sabina se decidió aplicar el procedimiento de “subir y bajar” el análisis principalmente entre las escalas *micro* y la *meso*, acudiendo a “subirlo y bajarlo” incluso hasta/desde la escala *macro*, cuando se consideró necesario, pero enfatizando más la atención en el Acuífero 0505 y en el Arroyo Patos, por ser estos dos

---

<sup>256</sup> Se exhorta al lector a no perder de vista en ningún momento que los arroyos Patos y San Miguel transportan por su cauce el agua emanada del Acuífero 0521 a zonas de la superficie terrestre que se encuentran sobre el Acuífero 0505. La importancia de verlos permite desprenderse del riesgo de caer en la idea inconsciente de dividir el *holum* ambiental en base a abstracciones humanas hechas con la finalidad de “facilitar” el estudio de la naturaleza; en este caso específico las que refieren a definir los cuerpos de agua en superficiales y subterráneos y posteriormente hacer subdivisiones de cada tipo.

Con lo anterior se quiere advertir que debe tenerse cuidado para no caer en la confusión reduccionista de asumir como reales esas fragmentaciones de la naturaleza, puesto que ellas son meramente mentales. Por el contrario, ninguno de los componentes del “mundo real” se encuentra aislado de los otros, sino que se vinculan permanente e interdependientemente.

cuerpos de agua los que se encuentran expuestos de manera más directa a potenciales afectaciones derivadas de las acciones de los actores externos involucrados en el conflicto estudiado.

### **8.2.1. La Presa Jalpa y el vencimiento generacional de los acuerdos primordiales**

Muy cerca de la colindancia del municipio de General Cepeda y el de Parras de la Fuente, sobre las estribaciones de la Sierra Madre Oriental que bajan a las planicies que rodean la Laguna de Mayrán, se encuentran Jalpa y San Juan del Cohetero. Como se ha señalado en el párrafo anterior, esa ubicación propicia la diversificación topográfica de su paisaje, haciéndolo un poco diferente entre uno y otro ejidos.

La manera más rápida y directa para llegar a sus poblados es por el entronque que se encuentra en el kilómetro 48+270 de la Autopista de Cuota Saltillo-Torreón, desde el cual se accede: al de Jalpa unos cientos de metros hacia el sur y al de San Juan del Cohetero avanzando unos tres kilómetros en dirección al norte. Antes de que existiera la autopista, construída aproximadamente hace medio siglo, se accedía por el camino de terracería que parte de lo que fue la Hacienda de Patos, hoy cabecera municipal cepedense, y atraviesa por lo largo al Cañón de Narigua, pasando antes por los poblados de los ejidos El Gavillero, Narigua y Porvenir de Jalpa.

Las tierras que actualmente son de Jalpa y San Juan del Cohetero pertenecieron, hasta ya bien entrado el siglo XIX, del Latifundio Sánchez Navarro (Mapa 4). Tras el embargo de el gobierno juarista, en 1867, la fracción en que hoy se encuentran estos ejidos pasó a ser la Hacienda La Jalpa, que durante El Porfiriato pasó a pertenecer a la familia Madero, de tal suerte que al estallar la Revolución Mexicana eran propiedad de una rama de ellos, que era la del matrimonio conformado por Guillermo Richardson y Pilar González Madero; cuya memoria respecto a sus personas prácticamente se ha borrado tras casi nueve décadas de haber sido afectada su hacienda por la Reforma Agraria, pero que mantiene todavía una pequeña veta en el inconsciente colectivo en el nombre del ejido Pilar de Richardson, que colinda con el de San Juan del Cohetero.

Tanto en el periodo de la República Restaurada como en el de la Reforma Agraria, tales cambios de propietarios se efectuaron no por voluntad o iniciativa de los dueños de la tierra sino mediante decretos expropiatorios, totales o parciales, que respondieron a los valores políticos e ideológicos de los gobernantes en turno durante esas coyunturas sociopolíticas, que los condujeron a decretar reformas profundas a los marcos jurídicos e institucionales de la tenencia de la tierra vigentes en ese momento.

Los impactos principales que generaron los cambios jurídicos a la estructura local de la tenencia de la tierra fueron, para los estudios de caso de la presente investigación: i) la subdivisión del latifundio en diecisiete fracciones o haciendas, efectuada en 1867; ii) el fraccionamiento de las haciendas en una cantidad no determinada, pero que tampoco viene al caso enumerar aquí, de ejidos y pequeñas propiedades, efectuada entre 1935 y 1936.

Dicho de otro modo lo anterior, vistos en conjunto como dos etapas secuenciales de un mismo proceso histórico, representan la transformación del modo de tenencia latifundista colonial al minifundista postrevolucionario. Este proceso, visto desde la escala *macro*, se interpreta como una fragmentación de la propiedad de dimensiones regionales, mediante el cual el territorio pasó de pertenecer a un solo dueño a ser propiedad: en la primera etapa a unas dos decenas de hacendados y en la segunda etapa a centenas de ejidatarios.

### *Efectos de la fragmentación territorial sobre el uso de las escorrentías*

Los efectos socioambientales de la fragmentación del territorio fueron de tal trascendencia para la gobernanza de la tierra y del agua que se ha dedicado todo el Capítulo 5 a tratar el tema. El tema de la desarticulación del sistema hidrotécnico hacendario a consecuencia de las reestructuraciones a la tenencia de la tierra rural generadas por esas dos reformas a sido tratado en específico en el apartado 5.2. Los objetivos y lo limitado de los tiempos de esta investigación no han alcanzado para distinguir plenamente los impactos (i.e. la magnitud física y funcional) entre una y otra fragmentaciones territoriales, pero lo que sí se tiene claro es que sería demasiado simplista pensar que el asunto de las fragmentaciones territoriales se relaciona únicamente con un incremento de propietarios; muy al contrario, sus impactos fueron múltiples en todos los ámbitos de la vida rural, en cada una de esas dos etapas, por lo que es menester reconocerlos dentro de un “todo” dentro del proceso histórico local, para poder explicar hasta su esencia las causas y efectos vinculados a al menos algunos conflictos por el agua que ocurren actualmente en el Sureste de Coahuila; especialmente los que se encuentran relacionados con la *expansión extractivista*.

Lo que aquí se quiere destacar, como consideración previa a entrar a tratar el caso del conflicto de la Presa Jalpa, es que entre los efectos más importantes de la transformación de un sistema agrario latifundista a un sistema agrario minifundista, se encuentra el del trastocamiento de las relaciones sociales y económicas entre las personas que habitaban el territorio. Se está hablando, en relación a los temas de interés del presente estudio, las que se dieron en los acuerdos establecidos entre propietarios o usufructuarios de predios vecinos, para el uso del agua de escorrentías; situación que se fue complicando conforme el territorio se fue fragmentando cada vez más, puesto que entre más numerosos fueron los usuarios, el conflicto tendió a ser más difícil de solventarse, en tanto que precisamente por ser más los usuarios se fue dificultando la creación de acuerdos satisfactorios a todos.

Desde luego, con la afirmación anterior no se quiere decir que no hayan habido eventuales conflictos; pero tras varias revisiones bibliográficas el investigador ha podido constatar que desde 1867 hasta los años inmediatamente posteriores a la lucha armada existen muy escasos registros sobre disputas entre los hacendados. De aquí que se plantea: o que el tema no ha sido estudiado a profundidad por los historiadores o que los conflictos entre los nuevos hacendados fueron poco graves y pudieron resolverse de forma personal, sin tener que acudir a los tribunales.

Enfocada la revisión bibliográfica a encontrar antecedentes de conflictos por el agua en lo que hoy son los territorios ejidales de Jalpa y San Juan del Cohetero, se encontró un registro que da constancia de que antes de su fundación de los ejidos, ya había habido

uno, que refiere Pasztor (2002, p.15), respecto a que: *“En 1898, Martín Morales<sup>257</sup> y Francisco García Letona establecieron una demanda contra Guillermo Richardson, propietario de la hacienda La Jalpa. A Richardson se le hizo el cargo de cambiar el curso de una fuente de provisionamiento de agua corriente, con lo cual privaba a otros del recurso escaso<sup>258</sup>”*. Pese a que Pasztor no da ningún detalle adicional ni retoma el tema en otro punto de su libro, se infiere que cuando habla de *“cambiar el curso de una fuente de provisionamiento de agua”*, no puede tratarse de otro cuerpo de agua que un arroyo; que al ubicarlo en la hacienda La Jalpa es casi seguro que se trataba del Arroyo San Miguel.

Sirva la referencia anterior para denotar que la primera gran fragmentación territorial no estuvo exenta de crear controversias por el agua y aunque se desconoce la resolución a este conflicto entre hacendados, aparentemente tuvo lugar alguna forma de acuerdo conciliatorio entre las partes, pues no se encontraron registros de que haya trascendido a un conflicto mayor entre ellas, lo cual se puede atribuir a que en el contexto nacional y regional existieron factores que facilitaron la reconfiguración favorable de la gobernanza del agua entre los nuevos propietarios, pudiéndose destacar las siguientes: i) que tanto entre los actores rurales como en los gobernantes prevalecía como valor entendido que el agua es un bien común; ii) que tras las subdivisiones realizadas al Latifundio de los Sánchez Navarro, los nuevos hacendados eran relativamente pocos y las dimensiones de las haciendas resultantes todavía muy extensas.

En el caso concreto del territorio hacendario, fue determinante el hecho de que, a pesar de que cada hacienda se originó como un fragmento del latifundio, su superficie todavía era lo suficientemente grande como para poder manejar las escorrentías mediante una red de canales integrados en un sistema hidrotécnico a presas de almacenamiento y derivadoras, con los cuáles disponía de tal diversidad de ambientes de producción que les daba capacidades para obtener volúmenes excedentarios que se perdieron tras la siguiente fragmentación territorial ocasionada por el reparto agrario. Apoyan a fundamentar esta impresión las opiniones que se obtuvieron de campesinos viejos, quienes siempre que se tocó el tema de la producción que se obtenía de la hacienda expresaron su opinión de que en ésta tenía un excelente manejo del agua y que *“en toda la historia que tenemos como ejidos nunca hemos logrado hacer con las escorrentías lo que los hacendados hacían tan bien”* (Chón Sandoval)<sup>259</sup>.

---

<sup>257</sup> En otra revisión de documentos, se encontró que los herederos de Martín Morales fueron afectados en 1938, en sus terrenos para riego de la Hacienda La Hediondita y San Vicente, ubicada al norte con la Hacienda de Patos (véase el

**Mapa 4**), en las que disponían de las aguas del Arroyo Camisetas o Palma Gorda (DOF 20/05/1950).

<sup>258</sup> Según la referencia, los detalles de esta demanda se encuentran en el Exp. 11,752: “Junta Interventora” Saltillo, del 7 de abril de 1915; no especifica, pero en el contexto del texto se entiende que del Archivo Municipal de Saltillo.

<sup>259</sup> Asunción Sandoval, ejidatario de San Juan del Cohetero, transmitió al investigador detalles sobre las narraciones que le hacían sus abuelos, cuando él era niño, respecto a la manera como el hacendado de la época del porfiriato y principios del Siglo XX distribuía los diferentes tipos de

La información obtenida en la presente investigación resulta insuficiente para conocer hasta qué punto pudieron ser desestabilizantes para la integridad del sistema hidrotécnico los impactos de la fragmentación territorial acaecida en 1867; cabe señalar, sin embargo, que otros investigadores que se encuentran trabajando en Jalpa sobre ese tema<sup>260</sup>.

Más allá de la obtención de las respuestas fundamentadas en una investigación específica y sistemática, en base a la evidencia que ha podido recolectar tanto en gabinete como en campo, sumada a una lógica elemental, este autor considera razonable dar por sentado que, dado que el sistema hidrotécnico fue diseñado en un contexto en el que la extensión de la propiedad de la tierra por propietario era centenas de veces más grande, sino es que miles, la fragmentación del territorio causó la fragmentación física del sistema hidrotécnico hacendario; y que el proceso de desarticulación de este último se aceleró en la medida en que los fragmentos del territorio se hicieron más pequeños y numerosos. Esta misma línea de razonamiento permite postular las siguientes hipótesis:

- i) en la época en la que la estructura predominante de la tenencia de la tierra rural fue el hacendario debió haber tenido todavía un buen grado de funcionalidad del sistema hidrotécnico, aunque no necesariamente en todos sus fragmentos; pues siendo grandes las extensiones de los predios y relativamente pocos los propietarios, éstos tuvieron mayor oportunidad de comprender que los canales y las presas adquiridas con sus haciendas estaban integradas en “el todo” del

---

cultivos a lo largo y ancho de los actuales territorios de varios ejidos de la cuenca del San Miguel. Comentó que en la parte alta de la microcuenca se cultivaban perecederos, lo cual era posible por la facilidad de que podían ser sacados al mercado mediante el ferrocarril que pasaba cerca de ahí, en Seguí; que en la media microcuenca (hoy terrenos que en su mayor extensión son de Jalpa y de Porvenir de Jalpa) se cultivaban forrajes, así como granos básicos, ya que por tratarse de productos que pueden ser almacenados en una bodega o en esquilmos no corren el riesgo de echarse a perder como los productos que se sacaban por ferrocarril. Finalmente, explica Chón, que en los terrenos que hoy son de San Juan del Cohetero y de Pilar de Richardson (en la baja microcuenca) el hacendado mandaba a los rebeldes, ya que estando lejos del ferrocarril y con menos volúmenes de agua de escorrentía “no se prestaban para establecer cultivos comerciales”, por lo que las actividades económicas que aquí se realizaban eran las extractivas forestales, principalmente el corte y tallado de la lechuguilla, que por ser un trabajo muy pesado resultaba adecuado para castigar a quienes no mantenían una actitud dócil frente a los patrones.

<sup>260</sup> A iniciativa de Juan Gamboa Maldonado (ejidatario de Jalpa) y los activistas sociales José Luis García Valero y Juan Francisco Rodríguez Aldape (+), incorporados al movimiento “Custodios del Arroyo San Miguel”, fueron invitados a recuperar la historia del sistema hidrotécnico investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Esa investigación está en marcha, si bien va avanzando de manera lenta, ya que la han tenido que realizar con recursos personales los historiadores Carlos Manuel Valdés Dávila y Cristina Martínez García.

Se espera que los resultados que se obtengan de esas investigaciones permitirán contestar, en alguna medida, preguntas como las siguientes: *¿Cuál es la magnitud de los impactos provocados por cada una de las fragmentaciones territoriales en la funcionalidad del sistema hidrotécnico hacendario? ¿En qué medida esa pérdida de la funcionalidad fue producto, o se derivó, de la desarticulación de las infraestructuras físicas y en qué medida lo fue de la desarticulación de las instituciones locales establecidas para manejar colectivamente el agua? ¿Cuáles han sido los pesos específicos que han tenido la cantidad de usuarios y la dimensión de los predios como factores de desarticulación del “Holum” del sistema hidrotécnico de la hacienda? ¿Qué otros factores influyeron en la desintegración del sistema en cuestión?*

latifundio; y que esa conciencia pudo haber sido factor de facilitación para negociar acuerdos de beneficio mutuo entre ellos, para repartirse el agua almacenada en las presas y conducida por los canales y para darles algún tipo de mantenimiento<sup>261</sup>.

- ii) cuando el territorio de las haciendas fue fragmentado en muchos ejidos, cada uno de ellos fraccionado en decenas de parcelas, fue tan grande la cantidad de ejidatarios y de parcelas que se perdió entre ellos la perspectiva de integridad del sistema hidrotécnico, con lo cual los nuevos usufructuarios del territorio perdieron el sentido de utilidad de los tramos de canales y de las presas que quedaron en sus parcelas y en las de los alrededores, lo cual propició su destrucción y con ello el consecuente colapso del sistema mismo<sup>262</sup>.

Como corolario, se puede decir que la acción agraria desarticuló los sistemas hidrotécnicos que dieron a los latifundistas y a los hacendados la posibilidad de manejar con eficiencia<sup>263</sup> e integralidad productiva el agua que baja de las serranías y lomeríos; los destruyó por completo al fragmentar las haciendas, puesto que cada ejido fue constituido sobre una fracción de la antigua hacienda que rara vez superó las 5,000 Has., subdivididas a su vez en un área de uso común y un promedio de media centena de parcelas (cada una de ellas para un usufructuario); circunstancia que fragmentó físicamente la red de canales y presas, originalmente concebida para ser manejada por una sola unidad económica de producción, que cubría decenas de miles de hectáreas. Al no haber aplicado medidas preventivas (jurídicas, técnicas o administrativas), actos de autoridad o al menos alguna acción educativa orientadas a crear conciencia sobre la importancia de la conservación de esas infraestructuras, el Estado postrevolucionario incurrió en un error histórico catastrófico, pues no se fomentó la creación de un ambiente institucional ni social con una mínima conciencia de los nuevos actores beneficiarios del reparto agrario sobre la importancia estratégica de las estructuras de regadío con escorrentías, que les fueron entregadas junto con la tierra.<sup>264</sup>

Con todo lo anterior y pese a la vulnerabilidad del sistema hidrotécnico a ser desmantelado a causa de las fragmentaciones territoriales, las reglas para el manejo mancomunado del agua mostraron su resiliencia adquirida a través de los siglos, al adecuarse de manera sorprendente al sistema de tenencia minifundista que emergió del reparto agrario. Esto es, que los peones acasillados en las haciendas del Sureste de Coahuila, convertidos en usufructuarios de la tierra por el Estado postrevolucionario, fueron capaces de adaptar los acuerdos para el manejo de las escorrentías a su producción de cultivos básicos, complementando con ello al sistema de producción “ixtlero” fomentado por el mismo

---

<sup>261</sup> Hipótesis formulada por quien estas líneas escribe.

<sup>262</sup> Hipótesis formulada por el ejidatario de Jalpa Juan Gamboa Maldonado.

<sup>263</sup> Se requiere de una investigación especialmente enfocada a obtener evidencia que compruebe la muy difundida apreciación que tienen los campesinos locales, fruto de la tradición oral pues todos refieren a que eso les comentaban sus padres y sus abuelos, respecto a que la Hacienda obtenía rendimientos agrícolas que nunca se volvieron a tener, hasta nuestros días.

<sup>264</sup> De acuerdo a las evidencias encontradas en la literatura y documentación oficial, los técnicos y en general la burocracia del Departamento Agrario tenían la presión de terminar de hacer las gestiones de entrega de dotaciones ejidales, ejercida desde la misma Presidencia de la República. De ahí que, por la celeridad con la que tenían que realizar su trabajo de campo y de oficina, resulta muy improbable que tuvieran conciencia, ya no digamos de la importancia, sino de al menos la existencia de ese estratégico sistema hidrotécnico hacendario y su potencial productivo.

Estado que los dotó de tierras, al sujetarlos de muchas maneras a seguir produciendo fibras duras para satisfacer la demanda del mercado estadounidense.

La capacidad que tienen los acuerdos, vistos como constructos sociales, pero que no tienen las obras de infraestructura hidráulica, vistos como constructos físicos, para poder adaptarse con éxito a las fragmentaciones territoriales, se puede comprender considerando que los primeros tienen una propiedad en común con las redes hidrográficas sobre los que son aplicadas: la fractalidad. Se trata de una propiedad que no tienen los constructos físicos y cuyos detalles ya fueron tratados a detalle en el apartado 6.7 de este documento. El caso concreto es que durante el transcurso del siglo XX la mayor parte de las presas y canales hacendarias fueron deteriorándose de manera paulatina, hasta quedar literalmente convertidas en ruinas, pero los acuerdos para el manejo colectivo de las escorrentías se adaptaron al proceso de división de los derechos de acceso a la tierra y al agua de los actores locales<sup>265</sup>. Los ejidos que se fundaron sobre la cuenca del Arroyo San Miguel no fueron la excepción y prueba de ello es el hecho de que dichos acuerdos todavía persisten en los inicios de la tercera década del Siglo XXI, tanto entre los ejidatarios de un mismo ejido como entre ejidos, para distribuirse los volúmenes totales de agua que escurren por la cuenca.

Con todo, el paso de las décadas no han sido inocuos ni las relaciones intracomunitarias ni para las intercomunitarias, puesto que con los cambios generacionales no han faltado incidentes que se derivan principalmente de la pérdida de los valores tradicionales, que poco a poco han ido siendo desplazados por los valores individualistas del capitalismo. En ese contexto, la Contrarreforma Agraria de 1992 vino a dar la puntilla, pues la apertura del mercado de tierras, léase la privatización de los ejidos, representó una nueva posibilidad jurídica de fragmentar al territorio. En un contexto en el que el sistema hidrotécnico hacendario se encuentra ya desarticulado, es de temerse que su impacto más fuerte lo resentirán las instituciones tradicionales rurales, que son las que todavía articulan y dan cohesión a las últimas comunidades con perfil campesino en la región. Es por eso que se puede afirmar que el regreso a una estructura de tenencia privada pone en jaque al modo de producción campesino y con él al manejo colectivo del agua.

### *Debilitamiento de los acuerdos para el manejo colectivo de las escorrentías*

Las entregas de tierras a Jalpa, San Juan del Cohetero, Pilar de Richardson, Porvenir de Jalpa, Presa San Antonio y Seguí datan de la segunda mitad de la década de los treinta y se hicieron efectivas mediante expropiaciones a la Hacienda de Richardson. Los dos primeros de esos ejidos se confrontaron por el agua de la cuenca baja del Arroyo San Miguel desde el momento de sus dotaciones, hechas en 1937 y 1936, respectivamente. Similares confrontaciones se daban, casi al mismo tiempo, entre Presa San Antonio y Seguí, que se asientan en la cuenca media.

---

<sup>265</sup> Partiendo de considerar que, de acuerdo a los comentarios de los ejidatarios actuales, quienes fueron los beneficiarios originales de las dotaciones tenían orígenes diversos, el autor de estas líneas plantea que deben ser muy interesantes para el conocimiento de la evolución de las instituciones campesinas en esta región del país las microhistorias sobre cómo fue que se llegaron a esos acuerdos, tras la entrega de sus tierras. *¿Algunos de ellos eran peones de la hacienda y a partir de ello ya tenían conocimiento del manejo de las escorrentías locales? ¿Tuvieron que pasar por un proceso de aprendizaje? Si ese fuera el caso ¿Cómo se dio ese proceso?*

En ambos casos los desacuerdos se generaron por los porcentajes de los volúmenes de aguas que les asignó el personal del Departamento Agrario a cada ejido y aunque esos diferendos quedaron inscritos en las Actas levantadas durante las visitas, en el Archivo Agrario del RAN no se encontró ningún registro de que se haya dado alguna acción para resolverlos de manera oficial. Antes bien, según los testimonios recogidos en campo, las diferencias de omisión fueron dirimidas entre los ejidatarios fundadores mediante *Convenios de Palabra*; que mantuvieron vigentes durante el periodo de vida de quienes los formularon; también durante el de sus inmediatos sucesores, sobre la base del respeto a la palabra de sus mayores.

Al respecto de lo anterior, se ha considerado pertinente asentar que, en la revisión que se hizo de un conjunto de documentos resguardados en el Registro Agrario Nacional (RAN), fechados entre los últimos años treinta y principios de los cuarenta del Siglo XX, pudieron ser localizados en el legajo denominado *“Acción agraria: dotación y accesión de aguas”*, aquellos que respaldan la legal dotación de aguas del Arroyo San Miguel entre los diferentes núcleos agrarios. Siendo de destacar que refieren a que la distribución de los volúmenes de su caudal se basó en el criterio de constituir un *“sistema de cuotas”*, que se fue construyendo *“a la demanda”*; es decir, que no fue instrumentado a partir del diseño de un plan, formal o informal, sino que se fueron asignado conforme los ejidos fueron recibiendo los documentos legales que les ampararon el usufructo de la tierra.

Bajo esa manera tan improvisada de instrumentar el reparto agrario, quienes titularon primero tuvieron ventaja, sobre los que todavía no se titulaban, para gestionar antes que ellos la dotación de las aguas. Así, sin un plan de distribución diseñado previamente, el Departamento Agrario otorgó mayores volúmenes a los primeros solicitantes y fracciones cada vez más pequeñas a quienes fueron llegando después; es decir, les fueron dando los sobrantes. Bajo la lógica de *“sistema de cuotas”*, al haber sido dotadas las tierras de San Juan del Cohetero antes que las de Jalpa, a pesar de ser menor la cantidad de ejidatarios y por ende menor extensión de tierras, le fueron otorgados derechos de acceso y uso a un volumen mayor de las aguas del San Miguel.

Las limitaciones de tiempo y el enfoque de esta investigación no permitieron seguir urgando en los archivos del RAN; sin embargo, se considera que con los datos rescatados es posible argumentar que en los conflictos por el agua aparecieron entre varios de los ejidos del Arroyo San Miguel tuvieron mucho que ver improvisaciones y negligencias del personal del Departamento Agrario, efectuadas durante la ejecución de las resoluciones presidenciales; sin embargo, no permiten definir si tales errores tuvieron más que ver con la incapacidad de los técnicos<sup>266</sup> o si se dieron más en consonancia con las prisas generadas por la presión ejercida por la constante presencia personal del Presidente Lázaro Cárdenas en la región, para supervisar el avance del reparto agrario; es probable

---

<sup>266</sup> Por lo que se refiere a la cuenca alta, se encontró constancia escrita de que los ejidatarios de Seguí se negaron a firmar las actas que llevaron los funcionarios del mismo Departamento Agrario, mediante las que en ese momento pretendían formalizar las asignaciones de las cuotas de aguas del Arroyo San Miguel. Llama la atención la aparente insensibilidad con la que el Ing. Donato Flores anota en su informe de comisión del 16/12/1937: *“...como caso sin importancia, debo citar la rebeldía del Comisariado de Seguí y ejidatarios, a firmar los citatorios y acta de posesión.”*.



que haya sido derivado de una combinación de ambas o sumadas a otra razón que no se detectó.

Lo destacable es el hecho de que, ante la falta de una respuesta satisfactoria por parte de los actores gubernamentales, los ejidatarios lograron salir de las controversias entre ellos recurriendo a establecer acuerdos locales, basándose en el sentido del bien común, en los vínculos familiares y en general en los valores propios de las sociedades campesinas. La decisión que ellos tomaron fue la de realizar una distribución de las aguas en función del número de ejidatarios de cada núcleo agrario. Legitimaron esta decisión mediante un “Acuerdo a la palabra”, que significó hacer aun lado los porcentajes que se inscribieron en los documentos oficiales de dotación ejidal y dar más agua a Jalpa que a San Juan del Cohetero, puesto que tenía mayor número de ejidatarios.

Los acuerdos logrados con el uso de las reglas no escritas que sostienen las instituciones de la sociedad campesina local han perdurado durante casi nueve décadas; sin embargo, debido a que nunca se hicieron por escrito ni fueron formalizadas ante las instancias agrarias oficales, con los cambios radicales que experimentó el marco jurídico de la tenencia de la tierra en 1992, las disputas volvieron a emerger; así, actualmente los descendientes en tercera y cuarta generación de quienes hicieron los *Convenios de Palabra* se encuentran hoy ante la disyuntiva de seguir respetando la palabra empeñada por sus abuelos o bisabuelos, o recurrir a los canales legales para reclamar los derechos sobre el agua estipulados en los Decretos de Dotación Ejidal, que otorgan más agua a San Juan del Cohetero.

Lo anterior queda de manifiesto integrando las siguientes conversaciones sostenidas, de manera separada en 2014, por el autor de este trabajo con los líderes de San Juan del Cohetero y de Jalpa:

Saúl Angel (S.A.): “...A ver Chon, Juan me habló de que los antiguos ejidatarios habían llegado a un acuerdo, diferente a lo que dicen los papeles oficiales; es decir, que sí sé que en el Decreto Presidencial de Lázaro Cárdenas a ustedes les toca la mayor parte del agua, pero Juan me dijo que entre los padres de ustedes hicieron un acuerdo de que, como ellos son como setenta ejidatarios y ustedes como treinta, en esos años los de San Juan del Cohetero estaban sobrados de agua y que ésta se desperdiciaba, en tanto que a ellos no les alcanzaba [...] me dijo Juan, pues, que en esas circunstancias, entre ellos hicieron el acuerdo de invertir las cuotas, es decir que a los de Jalpa les tocara el mayor porcentaje y a los de San Juan el menor porcentaje, para que a nadie le faltara el agua.”

Asunción Sandoval (A.S.): “Efectivamente, así fue el acuerdo, así siempre nos dijeron que fue... la gente de antes era muy sabia y no era nada egoísta... tenían mucha solidaridad... lo hicieron también porque aquí todos somos medio parientes. De hecho, con Juan lo somos, porque su esposa es nuestra prima... pero nosotros no estamos ahora pidiéndoles nada que les afecte a ellos; como te dije, esa agua que se está desperdiciando ellos no la pueden aprovechar ¡Y a nosotros sí nos hace falta para abrir nuevos terrenos al cultivo! ¡Lo queremos hacer, pero ahora nos salen con que existe ese acuerdo entre nuestros ancestros! ¡Se agarran de ahí para no darnos el agua! ¡Y no se vale, porque esa agua, que no nos dejan utilizar, ellos ni la usan ni la pueden usar!

*¡La verdad, la verdad, así como se están poniendo ya nos están dando ganas de ir al Tribunal Agrario! Legalmente nosotros tenemos el derecho a la mayor parte del agua y si nos decidimos vamos a hacer valer nuestros papeles!...”*

Las palabras anteriores se recuperaron por el investigador como tema para una posterior conversación con Juan Gamboa (J.G.), quien al ser cuestionado sobre su negación a darles el agua a sus vecinos respondió con los razonamientos siguientes:

*J.G. Lo que no te dijeron los de San Juan de Cohetero es que sí les estamos dando, pero menos de las que ellos quieren, pues ellos nunca nos quisieron ayudar en las faenas. No nos ayudaron en la construcción de los canales y tampoco iban a ayudarnos a limpiar los canales que están dentro de nuestro ejido; pues decían que a ellos no les correspondía... pero nosotros decimos que sí les corresponde porque nosotros no tenemos culpa de que sus parcelas queden hasta el final de los canales y que tienen la misma obligación que tienen los ejidatarios de Jalpa que tienen sus parcelas lejos; o sea, de ayudar a construir y limpiar los canales desde arriba, porque nosotros los estamos ayudando a que el agua les llegue a los de abajo... pero los del Cohetero siempre se negaron a ayudarnos; entonces, lo que hacíamos es que les poníamos falta en la lista de faenas y como aquí se les cobra el jornal a los que no hacen faena, pues, después de muchos años, pues ellos deben todas esas faenas que no vinieron a hacer.*

*Pero eso no es todo, hay que ver también que para que funcionen los canales tienen que abrirse y cerrarse las compuertas; entonces, como ellos no venían, pues nosotros teníamos que ir a abrirlas y a cerrarlas; y eso es lo que no ven o no lo quieren aceptar... entonces, no es por que no queramos darles agua, lo que pasa es que no han pagado los jornales que nos deben; yo lo que les digo es: paguen los jornales que nos deben y les damos el agua... pero, aparte de eso, no es cierto eso que te dicen que necesitan el agua, pues tú ya viste que casi nadie de ellos vive ya en el rancho; unos viven en General Cepeda, otros en Parras, otros en Saltillo y otros más lejos, como en Monterrey; no hay gente en su rancho ¡Si eso de que no venían a hacer el jornal también se debe a que andan fuera! ¿Cómo crees tú que vayan a necesitar el agua si ni siquiera viven en el rancho? Lo que es más ¿Crees tú que un día nos van a pagar lo que nos deben?*

Con el fin de indagar más a fondo las perspectivas de una y otra parte, en una especie de “corre, ve y dile” el investigador volvió a San Juan del Cohetero, con su interlocutor, quien en esa segunda conversación sobre el tema particular de la distribución de las aguas de la Presa Jalpa se expresó de la siguiente forma:

*A.S.: ¿Por qué no nos permite reparar la presa que está en su ejido, para que podamos aprovechar el agua? ¡La verdad, la verdad es que no lo entendemos! Tú sabes que desde hace más de un año nos pusimos de acuerdo entre los dos ejidos para solicitar, a la Secretaría en la que estás<sup>267</sup>, los apoyos para repararla ¿Verdad? Y... ¿Con qué nos*

---

<sup>267</sup> El autor de este trabajo sostuvo esta conversación en ocasión de una visita realizada al ejido para supervisar el avance de obra de una presa de almacenamiento construida con recursos federales, estatales y locales. En ese sentido es que el entrevistado alude a la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, con la que relaciona el trabajo del entrevistador.

*salió a la hora de la hora? ¡Ya viste cómo terminó la cosa! Cuando ya creíamos que lo estábamos logrando comenzaron los desacuerdos... ¡Y terminaron quitándonos el apoyo que nos iban a dar para el proyecto!*

*La presa que queremos reparar está en terreno de ellos, pero a ellos no les causa ningún beneficio porque sus labores están más arriba ¡Sin embargo, Juan se ha opuesto todas las ocasiones a que la reparemos! ¡Él sabe que esa agua es de nosotros, que nos toca por derecho! En una ocasión ya le preguntamos ¿Cuándo nos vas a dejar repararla? ¿Sabes qué fue lo que nos contestó? Nos dijo: ¿Sabes cuándo? ¡Nunca!...”*

Puede verse que las transcripciones anteriores se explican por sí mismas. Dan a ver que las opiniones divergentes respecto a cómo se debe repartir el agua entre los dos ejidos no se derivan solamente de las disposiciones formalizadas en los Decretos de Dotación, sino en acciones y reacciones que se fueron dando entre los actores locales a lo largo de los años. También permiten observar cómo, a pesar de los posicionamientos encontrados de los bandos, de uno y otro lado muestran reticencias para elevar la disputa acudiendo a las instancias del Estado; es decir que los valores y las convenciones sociales propios de la sociedad campesina a la que pertenecen (el sentido del honor de cumplir la palabra empeñada, el respeto a los mayores los lazos de parentesco y la solidaridad comunitaria) tienen todavía capacidad de contener las compulsiones individualistas.

Podría decirse que el dilema que se plantea para uno de los bandos, de recurrir a ampararse a un marco legal que le puede resultar favorable, choca frontalmente con las reglas de la tradición y que el peso de la comunidad y sus valores todavía tienen un importante grado de efectividad como factor de mediación para limitar los alcances del conflicto; sin embargo, en las declaraciones recogidas también pueden distinguirse el peso de las condiciones socioestructurales, como lo es la falta de poblamiento que provoca la emigración, por tanto el debilitamiento comunitario (una historia muy típica del Desierto Chihuahuense, que recuerda los antecedentes tratados en el capítulo 1). La crisis demográfica, más grave en San Juan del Cohetero que en Jalpa, se traduce desde la incapacidad de no poder cumplir ni física ni económicamente con el pago de las faenas hasta no poder tomar decisiones colectivas para defender derechos, como lo puede ser sostener un juicio legal.

El caso es que los desacuerdos han vuelto a resurgir y en el centro de ellos se encuentra ya no solamente el tema del porcentaje del agua del Arroyo San Miguel que cada una de las partes considera que le debiera tocar; también se entremezclan nuevos factores de distanciamiento entre los miembros de las comunidades, como son los compromisos partidistas y la dilución del sentido comunitario, en aras del individualismo que se fomenta desde el modo de producción capitalista. Al final del día, los que se encuentran en medio de este “fuego cruzado” son los acuerdos tradicionales para el acceso y el uso comunitario de las aguas, cuya solidez va mermando paulatinamente, conforme el modo de producción campesino va siendo desplazado por el modo de producción capitalista. En la medida que crecen los desacuerdos se afecta la construcción de un proyecto común, como puede deducirse de la mención realizada sobre la suspensión de un apoyo de gobierno para reparar la presa, que ya había sido aprobado, cuando los funcionarios a cargo detectaron las contradicciones y controversias existentes entre los campesinos de ambos ejidos.

### **8.2.2. Noria de la Sabina: necrocapitalismo sin máscara.**

*La gente de este municipio no está solamente en contra de un confinamiento de basura, también se opone a la sobre explotación de los mantos acuíferos. Tiene cubiertos los flancos contra la depredación ecológica y hace un frente común que se extiende más allá del municipio. Es un equipo, cuyo gobierno se forma de perredistas y panistas. También hay priístas disidentes y gente sin partido. Parecen luchar contra el resto del mundo.*

Rios Navarrete (2000a)

El segundo de los casos que aquí se presentan es el del ejido Noria de La Sabina; el cual, a diferencia del de la Presa Jalpa y sus casi nueve décadas de haberse manifestado por vez primera, surgió apenas a mediados de la segunda década del presente Siglo XXI, cuando una empresa privada, al amparo del marco jurídico de la Contrarreforma Agraria, compró una franja de terreno ejidal con la intención de construir un confinamiento de residuos industriales tóxicos. Para lograr tal objetivo contaron con el apoyo de funcionarios de los tres niveles de gobierno, dispuestos a encaminar los procedimientos administrativos de su competencia por vías regulares o irregulares, sin importar si con ello se violentarían los derechos de los ejidatarios en particular o de la ciudadanía cepedense en lo general.

Las condiciones que dieron origen al conflicto se habían venido incubando poco a poco, desde 2012, pero fue durante el año 2014 que finalmente emergió y tuvo difusión pública propiamente. Esto es, que las acciones derivadas de la colusión de los referidos *actores externos* fueron drásticas y tomaron un perfil muy parecido al de un acto de despojo; luego, al hacer oídos sordos a las protestas de los *actores locales*, crearon un sentimiento de enojo de tal intensidad que éstos decidieron pasar de las palabras a las movilizaciones; que al no ser tampoco suficientes para generar alguna respuesta o señal de rectificación de los agravios infringidos, desataron un conflicto cuya magnitud creció tan repentinamente que en cuestión de semanas rebasó los límites municipales, trascendiendo a escalas regional y estatal.

En la misma dinámica de interacción con los actores locales, al conocer más detalles sobre el contexto del conflicto entonces emergente, se pudo apreciar que el origen del conflicto no era nuevo, sino que se trataba de una segunda arremetida realizada por empresarios saltillenses para construir en la zona un confinamiento de residuos tóxicos; esto es, que veinte años antes ya lo habían intentado hacer en otro ejido del mismo municipio de General Cepeda, San José de La Paila, que dista de Noria de la Sabina menos de 30 Km hacia el norte, del otro lado de la Carretera Federal 40. Más interesante resultó constatar que muchos de los actores que resurgían en este segundo conflicto también habían tenido parte activa en el primero, sea de uno u otro bando; pero lo más perturbador para el marco teórico planteado originalmente por investigador fue cuando al crecer el conflicto de Noria de La Sabina, volvieron a reproducirse ciertas características del proceso histórico del primer conflicto en el segundo conflicto. Es decir, como si se tratara de un tiempo cíclico en el que los acontecimientos volvieran a transcurrir, con casi los mismos actores o en

ocasiones con nuevos actores pero representando el mismo papel de otros actores desaparecidos.

Y de repente, en junio de 2015 se hace presente la tragedia humana, encarnada en el suicidio de uno de los actores locales que estaban en el centro de la controversia; la muerte del Presidente del Comisariado Ejidal, generada en última instancia por los mismos intereses del capital que motivaron al despojo de la tierra. Tras el enojo y el sentimiento de agravio colectivo infringido por el capital, irrumpe otro tipo de sentimiento humano, que es el de la consternación colectiva ante la muerte de quien, quierase o no, era el depositario de la autoridad formalmente reconocida por el Estado para el nivel de gobierno ejidal.

Lo macabro de ese evento impuso al investigador situaciones imprevistas en su propuesta original de aproximación teórica a esta investigación, que lo llevaron a reflexionar y confrontar ideas y finalmente, bajo las consideraciones que ya se ha explicado en los apartados 6.1. y 6.2., lo llevó a reconfigurar el marco teórico, dándole un enfoque diferente, del cual pueden destacarse dos aspectos o vertientes: i) a partir de tomar conciencia de que el conflicto por las aguas de la Presa Jalpa se ve agravado por la *expansión extractivista*, que solamente puede percibirse integralmente y en toda su magnitud aplicando una aproximación regional, se le ubicó ya no como estudio central de la investigación, sino como estudio de caso; para lo cual se asignó una aproximación a escala local; ii) al reparar que la construcción de un confinamiento de residuos tóxicos dentro de la misma microrregión en la que se encuentran Jalpa y San Juan del Cohetero, representa un paso más en el proceso de afectación a la población local, bajo una modalidad aún más grave, que es la *expansión polutiva*, se consideró pertinente integrarlo como segundo estudio de caso, dentro de la misma escala *micro*.

Por lo anterior, en el contexto que ofrecen para los dos estudios de caso las escalas *meso* y *macro*; el relato del conflicto por el confinamiento de residuos tóxicos de Noria de La Sabina que se aborda en las siguientes secciones inicia haciendo una breve revisión de sus antecedentes, establecidos en 1993 con el conflicto de San José de La Paila; para pasar en un segundo momento a describir los acontecimientos que se consideran más relevantes, de los que se pudieron registrar entre 2014 y 2020.

### ***Basurero Tóxico 1993: Corrupción y triunfo de la resistencia social***

Corría la última década del Siglo XX cuando se hizo presente en General Cepeda la empresa Servicios Ambientales de Coahuila S.A., con intención de construir un confinamiento de residuos industriales en terrenos de San José de La Paila, ejido muy empobrecido debido a la escasez de agua, como es la circunstancia de todos los ubicados en los entornos del vértice de ese municipio con los de Parras de La Fuente y Ramos Arizpe<sup>268</sup>. Y aunque existe muy escasa documentación en los medios, en la memoria de muchos habitantes de este municipio persiste el recuerdo de que dicha empresa contaba

---

<sup>268</sup> La escasez de agua se debe, aparte de las escasas precipitaciones pluviales, al hecho de que la fisiografía de este punto determina la presencia de extensos llanos con suelos arenosos, que sumados a la alta insolación propician la infiltración y evaporación de las escorrentías que bajan desde las sierras de La Casita y la de Parras, que se ubican al sur.

con el apoyo del entonces Presidente Municipal Rodolfo Zamora Rodríguez quien, de manera aparentemente incondicional, le facilitaba la obtención de los permisos municipales necesarios para concretar su proyecto.

Pero más allá de las implicaciones que en materia de impactos y riesgos que este proyecto tenía para la conservación de la naturaleza, muy importantes en sí mismas, desde el punto de vista de la Ecología Política, este caso del confinamiento de San José de La Paila tuvo una trascendencia nodal, en tanto que la ciudadanía cepedense se rebeló contra su alcalde, a quien lo menos que se le dijo fue traidor a sus representados, acusándolo de mancillar la honorabilidad del cargo para el que fue elegido. En este tenor, González Schmal<sup>269</sup> (2000) explica que la construcción del confinamiento fue rechazada y logró ser suspendida mediante una serie de acciones legales emprendidas por ejidatarios de San José de La Paila y ciudadanos cohesionados en torno a la figura de Movimiento Ciudadano por Coahuila Limpio A.C.; quienes denunciaron al alcalde y a funcionarios del Instituto Nacional de Ecología<sup>270</sup> (SEMARNAP) ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República, por las irregularidades cometidas en procedimientos relativos a la obtención de permisos.

Y fue en la dinámica de esta confrontación cuando Fidagua (instancia de Gobierno del Estado cuyo papel en aquellos años ya fue ampliamente discutido en el apartado 7.2.3.) pretendió entrar en territorio cepedense para operar su proyecto de canalizar el agua extraída de los acuíferos subterráneos a la satisfacción de las necesidades de la Z.M.S. Para no variar, el alcalde Zamora Rodríguez se involucró para favorecerlos en la obtención de sus objetivos pero, para infortunio del Fidagua, su intervención resultó contraproducente puesto que no solamente no les allanó el camino, sino que les creó condiciones adversas, ya que con el antecedente que tenía el alcalde de haber brindado sus favores a la empresa Servicios Ambientales de Coahuila S.A., el Fidagua fue inmediatamente visto como otro actor saltillense malintencionado y, como tal, su presencia incrementó el enojo de una ciudadanía que para entonces ya se encontraba bien organizada y fortalecida en su lucha de resistencia socioambiental. Es de destacarse que tampoco faltaron voces de actores locales priístas que disintieron del apoyo institucional que daba la presidencia municipal a los actores externos empresariales; al menos en algunos aspectos, como fue el caso de Jorge Luis Prado Rodríguez<sup>271</sup>, sucesor de Zamora Rodríguez en el cargo de alcalde.

---

<sup>269</sup> Este actor, nacido en Torreón, es propietario de la finca La Parrita, ubicada en el norte de General Cepeda. Como militante del PAN, fue nominado en 1987 como precandidato de dicho partido para la Presidencia de la República, siendo truncada por Manuel J. Clouthier su aspiración para llegar a la candidatura. Su participación en los movimientos ambientalistas de General Cepeda se refleja tanto como difusor (González Schmal, 2000) como en el papel de uno de los asesores jurídicos en varios de los conflictos acontecidos entre 1993 y 2014.

<sup>270</sup> Este Instituto era presidido por Gabriel Quadri De La Torre, cuando se hizo tal denuncia durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

<sup>271</sup> El disentimiento de Prado Rodríguez está reflejado el dato ofrecido por Ríos Navarrete, (2000b) de que su abogado municipal presentó en 1998 un recurso de revisión contra algunas resoluciones efectuadas por Instituto Nacional de Ecología que apuntaban a otorgar el permiso para construir dicho confinamiento.

A la luz de lo anterior, puede comprenderse sin mucha dificultad que el choque entre la ciudadanía y las instancias apoyadas por el alcalde fue frontal y brusca; pudiéndose afirmar que fue la solidez de la gobernanza del agua del territorio municipal el factor determinante para rechazar tanto a la empresa que proyectaba construir el confinamiento de residuos tóxicos como a la instancia del Gobierno del Estado que pretendía apropiarse de las concesiones de extracción del agua.

Estas confrontaciones han tenido, con el paso de los años del Siglo XXI, una importancia sociopolítica más que relevante, ya que al haber demostrado que las acciones ciudadanas por la defensa del agua y contra la instalación de empresas contaminantes resultan eficaces, hicieron de los años noventas del Siglo XX el momento histórico en el que dieron las condiciones objetivas y subjetivas para la consolidación un bloque plural de activistas ambientales en el municipio de General Cepeda. Es decir, del Sujeto Social al que refiere Zemelman (1992). La sucesión de los acontecimientos sociales de ese momento histórico permiten establecer con claridad que el conflicto de la Sierra de La Casitas indisoluble del Conflicto de San José de La Paila; es decir, que al imbrincarse las acciones ciudadanas relacionadas con el movimiento que inició en 1993 contra el Confinamiento de Residuos Tóxicos Industriales que se proyectaba para San José de La Paila con las que ocurrieron dos o tres años después para defender el agua de la Sierra de La Casita explican que la participación ciudadana no solamente no se diluyó frente a conflictos socioambientales distintos, sino que creó sinergias y consolidó un proceso de construcción de gobernanza construida desde abajo, generando lo que hoy puede considerarse el primer acto de resistencia ambientalista de todo el Sureste de Coahuila<sup>272</sup>.

Pese a la relevancia de este momento histórico, la revisión que se hizo de la bibliografía y de la hemerografía ha dejado constatado que tanto la lucha social contra el confinamiento de residuos tóxicos de San José de La Paila como la de la Sierra de La Casita se encuentran escasamente documentados. El regreso al escenario de Zamora Rodríguez, quien de manera sorprendente volvió a ser electo alcalde para el periodo 2014-2017 trajo de nueva cuenta al escenario a actores externos interesados en construir un confinamiento de sustancias tóxicas, ahora en Noria de La Sabina. Ante esta nueva acometida resurgieron los liderazgos de agroempresarios como el matrimonio Arizpe Ochoa y José Luis Villarreal; así como los liderazgos campesinos, como los de Juan Gamboa Maldonado y Pedro Jasso; acompañados por actores locales con perfil intelectual, como José Luis García Valero y políticos profesionales con proyección nacional, como Jesús González Schmal. Y es de destacarse que, de la misma manera como cuando los actores que se movilizaron para oponer resistencia al confinamiento de San José de La Paila fueron apoyados por la ciudadanía, en 2014 la historia volvió a repetirse; es decir, la mayoría de los habitantes de General Cepeda se sumaron a las movilizaciones y acciones jurídicas contra la empresa y contra el alcalde. Pero a diferencia de lo ocurrido en la primera ocasión, en esta nueva embestida la acción concertada de funcionarios de los tres niveles

---

<sup>272</sup> Ni durante las conversaciones con los actores locales ni a partir de la revisión bibliográfica se encontraron registros de que antes de estas movilizaciones haya habido alguna otra manifestación por la defensa del medio ambiente; o al menos ninguna que haya logrado aglutinar a centenas de adherentes en todo el Sureste de Coahuila.

de gobierno logró imponerse a la voluntad de la población y la construcción y operación del confinamiento se hicieron realidad. Una crónica sintética de los acontecimientos centrales se tratan precisamente en el siguiente apartado<sup>273</sup>.

### ***CIMARI 2014: Corrupción, despojo e imposición de un proyecto de muerte***

Bajo el denominativo Sociedad Ecológica Mexicana del Norte S.A. (SEMNSA), mejor conocida por su nombre comercial de "Ecolimpio Servicios Ambientales", a principios de 2014 irrumpieron en Noria de La Sabina<sup>274</sup> un par de empresarios saltillenses, Daniel Calvert Martínez y Javier Calderón Domínguez, quienes son o en esos años eran copropietarios de esa empresa recicladora de basura<sup>275</sup>. Siendo el segundo de ellos quien se presentaba personalmente en el ejido, con la tarea de convencer a los ejidatarios de lo conveniente que para ellos sería el que le vendieran una franja de terreno, para usarlo como camino de acceso a un predio vecino, en el que proyectaban edificar una granja avícola. Los ejes de sus argumentos, o el anzuelo de su oferta si se quiere ver así, eran la fuente de trabajo que la granja representaría para los habitantes del ejido; también la promesa de que, al cerrar el trato, Ecolimpio los vincularía con la Fundación Yuye

---

<sup>273</sup> El autor de este trabajo es consciente de que para aspirar a comprender este tema a cabalidad se requieren varias investigaciones más específicas; en ese sentido, se considera que conviene aclarar que los apartados que aquí se dedican a tratarlo tienen como única intención la de aportar una perspectiva general del conflicto, en la etapa de su emergencia y desde la escala *micro*, centrando su atención en los aspectos humanos implicados en el mismo.

Este tema ya ha llamado la atención de al menos un grupo académico local, como el de Aguirre Villaseñor (2024); si bien como tema colateral a otros de su mayor interés. Cabiendo destacar aquí que, casi al mismo tiempo de concluir el presente documento, Corona Mora (2025) presentaba su tesis de Maestría en Desarrollo Sustentable en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la cual aborda por entero el tema del confinamiento de residuos peligrosos de Noria de La Sabina; pero cuyo contenido no ha podido ser leído para incorporarlo aquí como fuente más formal, pues al cierre de edición todavía no se encontraba disponible en el repositorio de nuestra universidad.

<sup>274</sup> Noria de la Sabina se encuentra a 3 Km de un entronque con la Carretera Federal 40 Saltillo-Torreón, a unos 70 Km al poniente de Saltillo. Desde el punto de vista hidrográfico superficial su mayor parte como entidad agraria se localiza en el Cañón de Hipólito, pero desde el hidrográfico subterráneo se asienta sobre el Acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda.

La manera más rápida para acceder a su poblado ejidal, desde los de Jalpa y San Juan del Cohetero, se hace cruzando con rumbo norte al valle que conduce hacia la Laguna de Mayrán, por un camino de terracería que conecta el segundo con el poblado de Pilar de Richardson; desde el cual, dos kilómetros adelante por el mismo camino, se llega a un entronque con la Carretera Federal 40 Saltillo-Torreón. Por esta carretera, diez kilómetros dirigiéndose hacia el oriente, se llega a otro entronque, desde el cual, girando hacia el sur, lleva en tres kilómetros al poblado de Noria de La Sabina. Yendo desde Saltillo, a Noria de la Sabina puede llegarse directamente por la Carretera Federal 40;

<sup>275</sup> Esta empresa tiene sus instalaciones principales en el vecino municipio de Arteaga, desde donde opera bajo la denominación social "Ecolimpio S.A."; la cual, a pesar de lo que intenta proyectar con tal nombre, ha sido cuestionada por su desaseo en el manejo de los materiales de desecho durante dos décadas, pero que extrañamente no ha sido sometida a las disposiciones que marca la ley, a pesar de las varias denuncias de contaminación que se han interpuesto su contra.



Martínez, una organización de beneficencia (cuya Directora es Sofía Calvert Martínez) que los incorporaría a sus proyectos de desarrollo comunitario.

Las siguientes palabras, recogidas de una conversación con J.L. García Valero, ilustran de manera clara el procedimiento empleado por Calderón:

*...lejos de informar a las comunidades, las engañó abiertamente, diciendo que se proponía instalar una planta avícola y/o una maquiladora de ropa “para ofrecer trabajo a las mujeres de la comunidad [Noria de la Sabina]”. Su representante legal y Director General, Javier Calderón Domínguez, hizo amistad con los pobladores mediante obsequios y apoyos diversos; habiéndose ganado la confianza y amistad de la comunidad, consiguió un “redestino y asignación” de una porción de las tierras de uso común del ejido, las cuales fueron parceladas (redestino) y asignadas (asignación) a nombre de Calderón Domínguez al que se dio el carácter de “avecindado y ejidatario dedicado a las labores del campo”, todo ello con la complicidad de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional. Esa parcela constituye la vía de acceso entre el Basurero Tóxico y la carretera federal 40.*

José L García Valero (Marzo, 2017)

De estas explicaciones, puede comprenderse que, motivados hasta la ilusión con tan buenas perspectivas que les ponían enfrente, los ejidatarios accedieron a realizar las gestiones de *redestino y asignación* solicitada por Calderón. Sin embargo, en algún momento se enteraron que lo que en realidad planeaba construir era, a través de la empresa Ecolimpio, un confinamiento de residuos industriales tóxicos.

Tras la sorpresa, se sintieron burlados y consternados debido a las implicaciones de tener ese tipo de instalaciones en la vecindad de su ejido, pues razonaron que les acarrearía elevados riesgos para la salud de sus familias, para la productividad de sus tierras y para la inocuidad de los productos agropecuarios. Lo anterior, especialmente en el hipotético caso de que se contaminase el acuífero subterráneo a consecuencia de un derrame de los tanques de confinamiento de sustancias tóxicas.

Por la época en la que se daban en Noria de la Sabina los acontecimientos narrados en el párrafo anterior, el investigador visitaba a este ejido, en calidad de supervisor técnico<sup>276</sup> de un proyecto de control de escorrentías. En tal contexto se tuvo la oportunidad de conversar directamente con los actores locales que tuvieron un papel preponderante, al momento mismo en que se estaban desarrollando los acontecimientos que dieron inicio al conflicto. Pudieron recogerse directamente de ellos sus pensamientos, sus inquietudes e incluso sus

---

<sup>276</sup> Se considera importante precisar aquí que, si bien la instrumentación de la primera parte del trabajo de campo se realizó exclusivamente en Jalpa y San Juan del Cohetero y que en esas localidades quien esto escribe jugaba el rol de investigador académico, en Noria de La Sabina su rol era el de técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado. Se considera pertinente aclarar este punto, en tanto que la experiencia indica que ese doble rol NO fue inocuo para la orientación de los discursos de los actores locales entrevistados.

sentimientos frente a la afectación de la que estaban siendo objeto por parte tanto de los empresarios propietarios de Ecolimpo, como de la violencia institucional del Estado.<sup>277</sup>

Por lo que respecta a los ejidatarios, de las muchas conversaciones que se lograron, se han seleccionado las de Juan Gómez Hernández, Eduardo “Lalo” Alonso Tello y Francisca Hernández Gómez. Se les incluye aquí, porque se considera que ilustran muy bien las tensiones vividas por los habitantes de Noria de La Sabina, en los días inmediatamente previos y posteriores al 29 de junio de 2015, que es la fecha cuando amaneció colgado de un árbol del solar familiar el cuerpo de Antonio Hernández Gómez, quien tenía el cargo de Presidente del Comisariado Ejidal y fue durante la gestión anterior a la suya, a cuyo frente estuvo su hermana Francisca, cuando se efectuaron las gestiones de venta de la franja de terreno a la empresa constructora del confinamiento de residuos tóxicos, ante las instancias competentes de los gobiernos municipal y federal.

De acuerdo a la opinión de este autor, la muerte de Toño Hernández no es un asunto trivial en la historia del capitalismo en el Sureste de Coahuila. No; se trata de un evento que encaja muy bien en el proceso de evolución del capitalismo global; pues aparte de ser en sí mismo un terrible drama humano, puede verse como se trata de un caso en el que se manifiesta tanto el poder corruptor del capital como los daños fatales que éste provoca en una sociedad muy vulnerable, tanto económica como políticamente. Es decir que, para el autor de este trabajo, este suicidio representa *un punto de inflexión histórico* en tanto que significa la irrupción de lo que S.B. Banerjee (2008) denomina *necrocapitalismo*<sup>278</sup> a esta región; el triunfo de la muerte como consecuencia de la ambición de un puñado de actores poderosos, dominados por el interés de lucrar a costa de lo que sea.

En esa tesitura, en los párrafos siguientes se transcribe parte de conversaciones con actores locales, que se piensa que ilustran una faceta humana, que no se alcanza a proyectar ni en las noticias difundidas en la prensa<sup>279</sup>, por no decir que absolutamente NO en los medios oficiales ni gubernamentales ni empresariales.

---

<sup>277</sup> Esta violencia ejercida por el Estado ha llegado a involucrar, en algunos momentos, incluso a la Secretaría de la Defensa Nacional; pues, como señala García Valero (com. pers., 26/11/2023): “La maquinaria que inició los trabajos de desmonte y nivelación [para construir el confinamiento] llegaron al predio escoltadas por elementos del Ejército... y, por último, “por órdenes superiores”, PROFEPA permitió a SEMNSA recibir suelos contaminados con mercurio procedentes de dos fábricas de municiones recientemente desmanteladas [en el periodo presidencial de López Obrador], propiedad de la SEDENA.”

<sup>278</sup> Se retoma la definición de Banerjee (2008: 1548), que se discute en el apartado 6.4 del presente documento.

<sup>279</sup> No se omite señalar aquí que al investigador le ha causado extrañeza el hecho de que en las primeras búsquedas que realizó mediante navegadores de internet (entre 2015 y 2016), encontró cuando menos una media docena de artículos de periódicos locales que trataban el tema del suicidio de Antonio Hernández Gómez; pero cuando volvió a realizarlas en agosto de 2023 la búsqueda fue infructuosa, puesto que no se encontraron en esta nueva ocasión, a pesar de hacer la búsqueda con diferentes palabras; de hecho, solamente se encontró una referencia vaga y poco precisa en sus datos (<https://www.grieta.org.mx/index.php/2015/08/18/pobreza-extrema-se-ensana-con-el-ejido-noria-de-la-sabina/>). Llama la atención el hecho de que esta situación, de información “desaparecida”, coincide con la búsqueda realizada en la web de Sofía Ochoa Mendoza, quien era titular de la presidencia municipal de General Cepeda en 2000, cuando se dieron las movilizaciones

### Conversación con Juan Gómez Hernández (28/05/2015)

La primera conversación seleccionada es con este ejidatario de Noria de la Sabina y se realizó durante una visita de supervisión a su parcela, en la que se estaba implementando un proyecto de construcción de bordos y plantación de maguey<sup>280</sup>. En ese momento, en el contexto ejidal habían empezado a darse los enfrentamientos con el empresario Calderón. Cuando el investigador/supervisor le hace el comentario de que sabe que el CIMARI se hará fuera del territorio ejidal y le pregunta, a manera de provocación, que si él está consciente de que tal detalle los limita a realizar una protesta formal, Juan responde afirmativamente; pero argumenta que vendieron la franja de terreno porque ellos no sabían que el propósito de los empresarios se construirá el acceso al confinamiento. Explica que el empresario les dijo originalmente que iba a construir una fábrica y que entonces ellos se la vendieron y que *"...por cierto, nos la pagó muy barata: a razón de mil pesos la hectárea... nos traía despensas y nos decía que nos iba a dar trabajo para que pudiéramos tener un ingreso que remediara nuestra situación económica..."*. Explica que tampoco estaban claros hasta qué punto estaba avanzada la venta, puesto que el Presidente del Comisariado no les explicaba bien al respecto y que, cuando se dieron cuenta es porque ya la franja estaba vendida.

Tras el comentario anterior se le hizo la pregunta de si ante el engaño sufrido interpondrían algún tipo de querrela, ante alguna instancia administrativa o judicial; a lo que respondió:

*- El gobierno no le hace caso a la gente jodida, solamente a los que tienen... dicen que lo van a poner de todas formas y si eso pasa nos va a afectar un chingo... pero nadie quiere ponerse al frente, por no tener problemas... a ese que usted ve [señala a Eduardo Alonso] ya le mandaron decir que se quite, porque si no se lo van a tronar...*

*- A ver cuando me platicas más de eso, Lalo, le suelta el interlocutor externo a Alonso.*

[Eduardo, quien ha estado atento a la conversación, asiente con la cabeza y exclama].

*- Cuando gustes te platico, pregunta por mí en cualquiera de las cantinas que están en El Dorado*

### Expresiones de José Santos, ejidatario de Noria de La Sabina, el 27/05/2015

*"¡Ahhh! ¡Sí! Ya dijimos que si la quieren construir vamos a detener la maquinaria y se las vamos a quemar! ¡Que no van a pasar!"...*

---

por el agua de la Sierra de La Casita; es decir, que da la impresión de que alguien ha mandado borrar los rastros/registros en las páginas de Internet, incluso de las oficiales del gobierno municipal y estatal.

<sup>280</sup> Ya se ha señalado en una nota anterior, de este mismo apartado, que quien estas líneas escribe jugaba en 2015, en Noria de La Sabina, el rol de supervisor de un proyecto de control de escorrentías, financiado con recursos federales y operado por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.

*“Tuvimos una reunión con el presidente municipal y su respuesta fue que él oficialmente no sabe de la intención que tienen los empresarios de ubicar el CIMARI en el sitio... pero por otros documentos que hemos visto, en los que él participa, nos damos cuentas que sí lo sabe, desde hace mucho tiempo”...*

*“Si lo llegan a instalar y se diera un derrame de tóxicos, nos tendríamos que ir del rancho... nos tendríamos que ir a la ciudad... si eso pasa la juventud estará perdida, pues a la ciudad solamente se van a sufrir en las fábricas quienes encuentran trabajo y quienes no lo encuentran a convertirse en delincuentes”.*

### Conversación con Eduardo “Lalo” Alonso Tello (11/06/2015)

La entrevista se realizó en la localidad conocida como El Dorado, que se encuentra en terrenos que, de acuerdo a Lalo *“han estado ocupados por los de Noria de la Sabina desde hace cuarenta años”*. En ese lugar Lalo tiene un local comercial, igual o muy parecido a otros establecimientos de su tipo que se pueden contar por decenas a los lados de la carretera federal. Curiosamente todos dentro del municipio de General Cepeda, no en el de Saltillo ni tampoco de Parras de La Fuente, en los que se ofrece a los viajeros en tránsito desde bebidas espirituosas y otro tipo de enervantes hasta servicios para diferentes preferencias sexuales, pasando por la venta de combustibles (diésel y gasolina) obtenido mediante “la ordeña” o “huachicoleo” realizado a los tanques de los tractocamiones cuyos conductores se prestan a participar en ese mercado negro.

Lalo no sale del establecimiento hasta que el investigador baja de la camioneta, dejándose ver y llamándolo por su nombre. Cuando finalmente se asoma y tras de los saludos y cortesías de rigor, se le comentó que el motivo de la visita es abordar el tema del CIMARI, que quedó pendiente días atrás; a lo cual accede sin cortapisas y comienza explicando que está muy enojado por la manera en que fueron engañados por Javier Calderón y detalla:

*Tan comprometidos estábamos con él que cuando preguntó que qué opinaban todos se quedaron agachados, nadie alzaba la vista. Y es que ¡La verdad, la verdad nos tenía como si fuéramos sus perros! Siempre que llegaba nos traía algo: la despensa y el six; ¡por eso cuando llegaba salíamos a saludarlo corriendo y moviendo la cola, como si fuéramos sus perros! ¡ Por eso nadie volteaba a mirarlo a la cara cuando les preguntó que qué pensaban del video que les había pasado!*

Tras las anteriores expresiones, Lalo relata que a él le platicaron otros ejidatarios que a una reunión, llevada a cabo una noche, con todos los que estaban el ejido, Javier Calderón acudió *“...con una de la SEMARNAT que parece que es licenciada... no, no, no es esa que dices, es una chaparrita, jovencita y bonita...”*. Explica que ni él, ni José Santos ni Pedro Delgado, *“que están metidos en el movimiento”*, estuvieron en esa reunión, pero que algunos días después Calderón fue a la casa de Pedro, *“a pasarle el video”* y que en ese momento coincidió en que él (Lalo) llegó de visita:

*...me dijo Pedro: precisamente estaba pensando en tí, para decirte que nos acompañaras.*

*Pero creo que desde el principio le caí mal a Calderón, porque cuando entré a la casa de Pedro me vio medio feo; iba yo con una gorra de esas que le tapan a uno hasta las orejas y fue lo primero, que se me quedó mirando, yo creo que eso fue lo que no le gustó de mí, que viniera yo todo tapado y casi no se me veía la cara.*

*- Creo que no te he visto antes, me dijo.*

*- Yo sí te conozco a tí, le dije*

*- ¿De dónde?*

*- Pues de la Asambleas a las que llegas, le dije, ahí he estado yo, sentado entre los otros...*

Explica Lalo que en el video detallan el proyecto e insisten en decir que todo se encuentra muy controlado, porque la empresa ya tiene experiencia en construir este tipo de confinamientos, pues ya tiene varios años haciéndolo y que es una empresa responsable.

*- Después que lo vimos, Calderón me preguntó que qué pensaba del proyecto.*

*- ¿Porqué hasta ahora nos lo muestras? Le dije. Mira, si ese video me lo hubieras mostrado desde hace un año ¡En este momento no estaríamos aquí! ¿Porqué no nos dijiste desde antes que este es el tipo de empresa que querías venir a poner? ¡Nosotros no somos basurero de nadie! Si nos hubieras dicho que este era el tipo de empresa que traías ¡Te hubiera mandado a la chingada desde el primer momento!*

*- Mira, se me quedaba mirando y hasta se le salieron las lágrimas de sus ojos... pero le seguí diciendo*

*- ¡Aquí no te queremos con tu mugrero! ¡Aquí yo me encargo de que no pongas nada! ¡Es más, aquí no te quiero ver! [...]*

*A partir de aquella ocasión Calderón no me puede ver, ni de lejos... [y] ...que bueno, pues mi compadre Toño está de parte de ellos, pues antes de que yo llegara él ya había acordado con él... fue la comisariada de entonces la que le dió la firma para que él pudiera pasar por aquí hacia "la pequeña" que compró; se la dió sin la autorización de la Asamblea... luego volvieron a quedar ellos al frente porque lo eligieron a él, a Toño, como nuevo Presidente del Comisariado, pero con lo que no contaban es que yo quedé como Consejo de Vigilancia y ahí es donde se están topando... porque a Toño le conviene que pongan el CIMARI pues en cuanto lo hagan a él le van a regalar una casa allá en Saltillo... los que quieren que se ponga el CIMARI, los que tiene de su lado, son Pancha, su hermano y Máximo, no más ellos, la mayor parte no queremos...*

Continó su relato diciendo que, después de confrontarse con Calderón, Pedro, él y otros campesinos fueron con el Presidente Municipal, pero que éste les dijo que ese asunto no es de su competencia.

*...sí lo es, pero lo niega, porque es con el Cabildo que les toca autorizar el cambio de uso de suelo para que se instale el confinamiento... "La Chopa"<sup>281</sup> va a ser lo posible*

---

<sup>281</sup> "La Chopa" es el apodo con el que se conoce a Rodolfo Zamora Rodríguez, quien en ese momento era nuevamente Presidente Municipal. En el apartado anterior de este mismo capítulo se

*porque se autorice la instalación, porque también lleva ganancia en el asunto y lo mismo puede decirse de Luna Canales pues Calvert y Calderón le dieron dinero para financiar su campaña para diputado federal.*<sup>282</sup>

Prosigue diciendo que, cuando vieron que “La Chopa” estaba del lado de los empresarios y se enteraron de que la gestiones ya se encuentran muy avanzadas él, Juan Gamboa (quien, aclara, es su primo segundo por sus ramas maternas) y otros se lanzaron por todo General Cepeda a pedirles su apoyo a todos los ejidos; *“logrando que veintidós de los treinta y seis o treinta y ocho ejidos de General Cepeda los apoyaron enseguida”*.

Al preguntarle si están incluidos entre ellos los del Cañón de La India, respondió que sí están *“como también están Macuyú, Alamitos y todos los del cañón que está de aquel lado...”*

La conversación se dispersa por un momento en rememorar la importancia que ha ido adquiriendo hasta ese momento el movimiento. Lalo explica que las tensiones han alcanzado niveles muy altos y que como él fue de los que confrontaron a Calvert y a Calderón se encuentra muy expuesto y que tardó en salir de su casa porque cuando se detuvo la camioneta frente a su cantina sintió miedo de que vinieran “a levantarlo”, puesto que amenazaron con hacerlo a partir de que él es de los más involucrados en las protestas contra el proyecto del cofinamiento.

- *La Chopa” me amenazó de muerte*

- *¿Cómo que “La Chopa”?*

- *Sí, me dijo “te estás pasando de revoltoso, si sigues así te van a mandar matar”*

- *¿Delante de quién te lo dijo? ¿tienes testigos?*

- *Delante de mi esposa y de unas gentes, de los que siempre andan con él. Por eso cuando te paraste con esa camionetilla blanca me asusté, por eso me quedaba mirando a donde estabas en el volante, tratando de reconocerte pues no te reconocí en un principio...*

---

describe el rol que este actor jugó entre 1994 y 1996, cuando ocupó por primera vez el mismo cargo y se realizó el primer intento de instalar un CIMARI, en San José de La Paila.

<sup>282</sup> Es muy probable que, cuando se habló con Lalo Alonso, él ya contara con información que después se reflejaría en denuncias públicas. Tal parece ser el caso de este comentario que hizo sobre Armando Luna Canales pues, un mes y medio después de ser entrevistado por el investigador, el 28 de Julio de 2015 José Luis Villarreal Treviño y “más de 700 ejidatarios vecinos del lugar”, enviaron un oficio al Presidente de la República Enrique Peña Nieto, mediante el cual le solicitan que instruya a su Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Juan José Guerra Abud, para que cancele cualquier autorización otorgada al confinamiento de Noria de La Sabina; al tiempo de informarle que no han recibido respuesta satisfactoria del Gobernador Rubén Moreira Valdez “porque al parecer su Secretaria de Medio Ambiente Eglatina Canales le ha ocultado información básica, dado que tiene compromisos con la familia Calvert, que fue patrocinadora de la campaña de su hijo Armando Luna Canales, en la campaña para obtener una diputación, después de haber sido el Secretaria General de Gobierno del propio Moreira Valdez”. Foto de ese oficio e información detallada respecto a esta denuncia realizada por los habitantes de General Cepeda puede encontrarse en Fuentes López G (2015).

*- ... algunos me dicen que me vaya a otro ejido o a Saltillo, pero no tiene caso ¡Si quieren matarme a donde quiera que me vaya me van a encontrar!*

*- Me quieren fabricar delitos... También se los quieren fabricar a José Luis García ¿No acaso andan diciendo que tiene enterrados algunos muertos en El Chuzo<sup>283</sup>?*

Explica Lalo que no es la primera ocasión que tienen que enfrentar la amenaza de que alguien quiere colocar un basurero en General Cepeda. Señala que ya hubo una vez en la que los ejidatarios tuvieron que recurrir a defenderse con abogados y que Emilio Arizpe<sup>284</sup> los apoyó pero que, como en aquella ocasión él desembolsó dos millones de pesos, cuando se presentó el problema actual les dijo que no contarán con él, pues fue demasiado lo que puso aquella ocasión y no piensa volver a poner más dinero de su bolsillo. Dice que, afortunadamente, en esta ocasión cuentan con el apoyo de Jesús González Schmal, quien les ofreció asumir los costos jurídicos que acarree el actual caso. Cuando le pregunto el motivo del interés que este personaje tiene en este caso, me explica que se debe a que él tiene una nogalera en una localidad cercana (Oratorio Chico).

Puede observarse, en las expresiones frente a la adversidad de ese momento, que los niveles de tensión de los actores locales eran complejos en junio de 2015 (como lo siguen siendo actualmente): desde el sentimiento de despojo al lamentarse que se malbarató la franja de terreno y de vulnerabilidad ante su certidumbre de que de los actores gubernamentales solamente recibirá indolencia y negligencia, que se percibe en Juan Gómez Hernández hasta el valor de de Lalo Alonso para confrontar sin tapujos al representante de la empresa y para no huir de la localidad, a pesar de la incertidumbre que le crea la posibilidad de que en cualquier momento podrían llegar a hacerle efectiva la insinuación de que lo van a asesinar; pasando por la rebeldía de José Santos, para rebelarse tomando medidas drásticas para defenderse de la injusticia, mezclado con el temor al futuro que se cierne sobre los miembros de la comunidad.

En expresiones como las anteriores, tanto como muchas más que afloraron entre los habitantes de Noria de La Sabina por los días de junio de 2015, tuvieron mucho que ver, sin duda, los ánimos caldeados que entre los ejidatarios a raíz que, desde varios meses atrás, habían venido creciendo los rumores de que el Presidente del Comisariado Ejidal había sido corrompido por SEMNSA, para prestarse a legalizar de manera irregular la venta de la fracción del terreno; es decir, sin pasar por consultar a los ejidatarios en Asamblea.

Pero entonces aconteció que la mañana del 29 de junio de 2015, el cuerpo del acusado apareció colgado del solitario árbol del solar de la casa que compartía con su hermana Francisca.

---

<sup>283</sup> “El Chuzo” es el nombre de un predio privado del cual es propietario José Luis García Valero.

<sup>284</sup> Se buscó a Emilio Arizpe en dos ocasiones para solicitarle su punto de vista, respecto a los sucesos relacionados con el CIMARI, pero no respondió a ninguna de las solicitudes que se le dejaron con el personal de sus empresas.

## Conversaciones con Francisca Hernández Gómez y Lalo Alonso (julio 2015)

*... esa noche se levantó y se salió al patio, pero yo no le hice caso porque muchas veces hacía eso... especialmente en el verano le gustaba ir a dormir afuera, en unos colchones, porque el calor no deja dormir... salía casi todas las noches al baño, así que no me pareció raro cuando sentí que salió y me volví a dormir...*

En ese momento entra una pequeña, como de tres o cuatro años de edad. Le pide que se incline para susurrarle algo al oído y le muestra un pequeño objeto; Francisca le dice que lo guarde, porque es una pieza de un juguete. La niña vuelve a salir, tan silenciosamente como entró

Francisca se vuelve a dirigir a su interlocutor y comenta:

*...la niña esa que entró, esa me la dejó; era hija de su hija, pero él se había quedado con ella porque era de la hija que se le murió.*

*- ¿y el papá de la niña no la atiende, no la viene a ver? Se me ocurre preguntarle, para no quedarme callado.*

Francisca no responde; se alcanza a percibir que emite una especie de leve quejido, apenas audible; levanta un hombro y voltea para otro lado, como hacia el vacío, con esos ojos de enorme tristeza con los que abrió la puerta a las visitas unos minutos antes...

Me atrevo a retomar la conversación y pregunto:

*- ¿O sea que: usted vendría siendo tía abuela de la niña?*

*- ¡Su tía, su abuela, su mamá! ¡Muchas cosas que soy de ella!...*

Los párrafos anteriores muestran fragmentos de una conversación que quien esto escribe sostuvo a fines del mes de julio del 2015 con Francisca Hernández Gómez, ejidataria de Noria de La Sabina, municipio de General Cepeda, Coahuila. Sus palabras, como puede percibirse, estaban plenas de tristeza ante la muerte de su hermano Antonio y ante el futuro incierto de una sobrina nieta, nacida en la rudeza de la miseria, huérfana de padres y de abuelos.

En la escena se encuentran presentes, además del redactor, Francisca y Rosaura Ríos, una agrónoma que por esas fechas había estado fungiendo como responsable técnica del proyecto de manejo de escorrentías en parcelas agrícolas (cuyos avances había llegado a supervisar el autor de estas líneas). Rosaura llevaba en esa ocasión el dinero para pagar los jornales correspondientes a la última nómina del proyecto y desde varios días antes le había pedido a Francisca convocar a quienes trabajaron compactando y reforestando unos bordos parcelarios; el objetivo de la visita era finiquitar las cuentas que quedaron inconclusas debido a la sorpresica muerte de Antonio, acaecida cinco semanas antes.

Poco a poco fueron llegando quienes participaron en los trabajos. Desde luego, llegaban por el interés económico de cobrar sus jornales; pero la consternación era palpable en el



ambiente: se percibía en el silencio que guardaban quienes estaban presentes; se notaban a simple vista en los semblantes los sentimientos guardados, que no se atrevían a externar. La muerte de Antonio ha calado hondo a todos, más allá del tipo de relación que sostuvieron con él: aliados, adversarios, parientes, compadres, vecinos... ¡Misma Rosaura como gestora!

La reunión es breve, pero el poco tiempo que tarda basta para darse cuenta la existencia de valores entendidos entre los asistentes, respecto a la legitimidad que tiene Francisca de convocarlos. En ningún momento la cuestionan; ni siquiera lo hacen cuando los va llamando uno por uno “para hacerle su cuenta”, es decir, descontarles del monto indicado, en el cuaderno medio deshojado que hace las veces de libro de nómina, los adelantos que les fueron entregados por Antonio, en diferentes momentos; que él mismo escribió con la caligrafía temblorosa de la mayoría de los campesinos. Y es que a Francisca le asiste, para realizar el finiquito de la obra, no solamente la legitimidad que tiene como hermana de Antonio, sino también de que fue la Presidenta del Comisariado Ejidal en el periodo previo al de Antonio.

Entre quienes han llegado a cobrar se encuentra Lalo Alonso. Tiene el rostro desencajado y con una expresión de estar cavilando muchas cosas. Pide permiso para salir al solar, mientras Rosaura realiza el Acta de Finiquito de la obra. El supervisor del proyecto, o sea el autor de estas líneas, aprovecha el momento para alcanzarlo y después de conversar con él algunos detalles sobre el proyecto, le espeta:

- *¿Cómo ves, Lalo? Está cabrón este asunto ¿No?*

- *¡Pssss sí! ¡Ya habíamos platicado eso, que estaba cabrón! ¡Ya te había dicho! ¿Te acuerdas ?*

Lalo mueve la cabeza varias veces, como diciendo que no; con mirada de preocupación detiene su andar y me dice quedito, señalando con la vista una casuarina que se encuentra a un lado de la puerta de la casa donde vivía Antonio:

*Este árbol fue del que se colgó mi compadre.*

Lalo se asoma un poco por entre la puerta semiabierta al interior de la vivienda; una vez que ha comprobado que Francisca está ocupada conversando con Rosaura señala el punto exacto de la rama en la que Antonio amarró la cuerda que le sirvió como horca<sup>285</sup> y prosigue comentando:

---

<sup>285</sup> .- Se trata de un árbol cuyo tronco tiene apariencia de ser demasiado delgado y ramas tan endebles que cuesta creer que una de ellas haya soportado el peso de su cuerpo sin romperse. El dictamen del forense, a decir de la prensa y aceptado tanto por la familia del finado como por los habitantes del rancho, es que se trató de suicidio. El investigador reconoce que, al leer la noticia en el periódico le nació la duda de si no se trata en realidad de una ejecución disfrazada de suicidio. Sin embargo, la ubicación del árbol junto a la puerta de la casa, la dificultad de acceder al solar (solamente se puede hacer atravesando esa casa o la de otro hermano de ellos), la presencia de perros dentro del solar, pero sobre todo los comentarios de Francisca respecto a que volvió a dormir porque no sintió nada extraño esa noche, plantean la imposibilidad de que Antonio haya sido atacado al salir de su casa.

- *Mi compadre lo hizo porque no pudo más... ¡Su vida siempre fue muy desgraciada, llena de tragedias!...*

- *¿Porqué lo dices Lalo?*

- *Mira, primero le pasó lo de su hermano, que lo atropellaron de manera muy gacha en la carretera; al poco tiempo se murió mi comadre y después su hija ... fueron muchas desgracias que se le fueron acumulando... ¡Ya no aguantó... fue demasiada la presión para él! Lo del basurero nada más fue la gota que derramó el vaso, fue lo que lo hizo tronar..."*

*...Una cosa es que en esta bronca él y yo no tuviéramos el mismo parecer y que hayamos discutido en muchos lugares por esa situación y otra muy diferente es que era mi compadre. Aunque no me creas, lo apreciaba yo mucho...siempre estuve al tanto de que llevaba una vida muy desgraciada...*

Después de la conversación, Lalo y el supervisor regresaron a casa de Francisca y Antonio a terminar los obligados trámites burocráticos del finiquito; una hora después, mientras conducía la camioneta hacia Saltillo, el segundo no dejaba de reflexionar sobre el caso de ella y su sobrina nieta; sobre cómo la ambición de un puñado de capitalistas y funcionarios de gobierno ha terminado de destrozar la ya de por sí trágica vida de su familia, sumida desde siempre en la pobreza; que, como las otras del ejido estaban siendo despojadas inmisericordemente de su tierra, de su dignidad y hasta de su vida.

El autor de estas líneas deja asentada aquí la narración de esta desgracia de la que le tocó ser testigo presencial, esperando que sea como una puerta abierta, para asomarse y tomar conciencia sobre la magnitud que tiene la tragedia humana que genera el modelo de crecimiento industrializador en la etapa en la que el capitalismo adopta su forma de acumulación por desposesión ¡Tragedia tan profunda y al mismo tiempo ignorada, ya no digamos por los indolentes instrumentadores de ese modelo, sino por la generalidad de la gente, que ni siquiera imagina los alcances que pueden llegar a tener los impactos del modelo económico hegemónico en la vida de quienes, perteneciendo a sociedades rurales tradicionales, tienen o tenían sus medios de vida en las vecindades geográficas de las zonas industriales o agroindustriales.

Desde luego, en el universo de trabajo de esta investigación, el episodio de la muerte de Antonio Hernández Gómez no marca el inicio de eventos que, tras impactar inicialmente a una persona o a una familia, terminan convirtiéndose en un combustible para la agitación social; tampoco marca el fin, pero la magnitud de agravio que significa despojar a un ser humano de su vida, con tal de acumular capital, lo hace distinguirse de otros; pues desde una perspectiva teórica coloca a este caso, si no fuera sí en los límites de alcance de los postulados de Harvey (2005), respecto a la acumulación por despojo, puesto que lo coloca ya dentro del perfil del necrocapitalismo, que describe Banerjee (2008).

Se puede afirmar que las repercusiones más palpables de la muerte de Antonio Hernández Gómez, al corto plazo fueron: i) la dislocación del equilibrio de fuerzas que en ese momento inclinaban el poder local hacia el grupo político al que él se encontraba adscrito; ii) la catalización del descontento social, ya que éste se acrecentó en los ejidos localizados en las proximidades de Noria de La Sabina, tanto del lado de la cuenca del Arroyo Patos

como del lado del Arroyo San Miguel, con todas sus coincidencias y divergencias relacionadas con sus problemáticas de disponibilidad de agua.

Tener a la vista de los sucesos narrados en los apartados anteriores permite construir una buena base para atreverse a decir que el conflicto de la Presa Jalpa puede verse como una extensión del conflicto de la Sierra de La Casita y el conflicto de Noria de la Sabina como extensión del conflicto de San José de La Paila. Y entonces poder afirmar que así como a fines del Siglo XX hubo actores que simultáneamente fungieron un papel destacado en las movilizaciones ciudadanas de los años noventas por la defensa de los acuíferos y contra la construcción del confinamiento, también en las movilizaciones de la segunda década del Siglo XXI ha habido actores con roles en uno y otro, a la vez. Luego, tomando como un indicador social el hecho de que han pasado ya tres décadas en las que los actores locales no han dejado de ser hostigados por actores externos con la amenaza de agotar y/o envenenar con residuos tóxicos a sus cuerpos de agua, también puede señalarse que resulta más que evidente que los dueños del capital y del poder político han sido en absoluto insensibles a las protestas de los habitantes de General Cepeda y que parece no importarles nada más allá de lo que lo que les dictan sus intereses; ni siquiera les conmueve poner en riesgo la vida de los seres sintientes que han tenido el infortunio de encontrarse en los lugares donde han decidido imponer sus proyectos.

Así queda constatado en los oídos sordos que mantuvieron desde el momento cuando los habitantes de Noria de la Sabina se enteraron que, como les habían hecho creer, no se trataba ni una industria manufacturera ni una granja avícola lo que SEMNSA proyectaba construir en el terreno vecino a su ejido, se organizaron para rechazarlo. Así ha quedado constatado también cuando se les expresó el sentimiento de agravio generado por ese engaño y el temor que les sobrevino a ser afectados en la salud de sus familias y de su entorno ambiental por los materiales tóxicos a confinar.

De ese sentimiento de agravio y de otros más que a lo largo de este proceso de lucha fue que se ha ido materializando poco a poco la idea de crear un frente común de defensa ciudadana.

No se profundiza más aquí en detallar la crónica sobre el CIMARI de Noria de La Sabina y su íntima relación con el surgimiento del *Colectivo Sí a la Vida*, cuya semblanza histórica se incluye en el apartado siguiente. Sin duda, se trata de un tema de gran importancia y que reviste gran interés, desde muchos puntos de vista, pero si por un lado se encuentra fuera de las posibilidades de este trabajo abordarlo a mayor profundidad, por otro lado de lo que se trata aquí es de ligarlo a/enfocarlo dentro del contexto de los conflictos por el agua que acontecen en General Cepeda, como consecuencias de los procesos de globalización del capitalismo extractivista. No obstante, se pueden dejar aquí como referencias las de algunos escritos o videos en los que se presentan diferentes perspectivas de los actores involucrados: los que se encuentran en resistencia (pej. en el número especial de La Jornada Ecológica de Junio-Julio de 2016)<sup>286</sup>.

---

<sup>286</sup> los empresarios (<https://vanguardia.com.mx/coahuila/cimari-de-general-cepeda-esta-concluido-realizan-pruebas-de-funcionamiento-DRVG3234766>), actores de difusión académica (p.ej. Aguirre Villaseñor et al., 2019), funcionarios

### 8.3. Colectivo Sí A La Vida

*El miedo domina antes que las personas; cuando se deja de tenerlo el dominio termina...*

*Jacobo Silva Nogales (2020)*

Tras el descubrimiento de que no habría tal granja (algunos dicen que les dijeron que sería una maquiladora textil) sino que un confinamiento de materiales industriales tóxicos lo que se pretendía construir al lado de los linderos de Noria de La Sabina, los campesinos de este ejido solicitaron al representante de la empresa SEMNSA la suspensión de la transacción de compra-venta de la franja de terreno. Al obtener respuesta negativa, acudieron a las instancias agrarias, donde fueron informados que todos los trámites legales para la compra venta se encontraban cubiertos y finiquitados, por lo que ya no podían echar marcha atrás. Fue una respuesta sorpresiva, en tanto que implicaba la existencia de Actas de Asamblea, cuya existencia desconocían, en las que se aprueba la venta, lo cual implicaba una de dos razones: o los empresarios presentaron Actas apócrifas o el Presidente del Comisariado Ejidal Antonio Hernández Gómez les entregó unas que no habían pasado por la Asamblea Ejidal.

Los entredichos al proceso de enajenación de la franja de tierra pronto cundieron por todos los ejidos de General Cepeda. De eso dan constancia los comentarios de uno de los activistas más inquietos en torno al tema del agua en el municipio:

*Estábamos en ese proceso de visitar a las comunidades y platicar con los comisariados ejidales cuando se presentó el asunto del confinamiento de residuos industriales tóxicos y peligrosos en Noria de la Sabina... Cuando descubrimos la cantidad de engaños que había y de manipulación en todo el proceso... nos dedicamos a informar a las comunidades de las mentiras que habíamos detectado; entonces, nos metimos de cuernos en esa coyuntura qué, bueno, pues la estamos luchando; por el lado de la movilización, por el lado de la información y por el lado jurídico...*

José L García Valero (Marzo, 2017)

Con la difusión del conocimiento del conflicto, más personas se enteraron sobre las maniobras, tanto de las de ese momento como de las de veinte años atrás, con las que el alcalde reiteradamente favoreció a los intereses de los actores externos, en detrimento de los intereses de quienes supuestamente representaba; es comprensible entonces que, por mera empatía, la causa de los campesinos de Noria de La Sabina ganó inmediatas expresiones de apoyo y de solidaridad de sus coterráneos cepedenses; pero no solamente de ellos sino de muchos otros actores externos a su municipio.

---

(<https://vanguardia.com.mx/coahuila/2638391-cimari-en-general-cepeda-no-afectara-mantos-freaticos-semarnat-DMVG2638391>) o tesis de maestría en proceso (Lizeth Corona, com. pers., 27/05/2023).

Estando Noria de La Sabina a unos treinta kilómetros de Jalpa y San Juan del Cohetero, los campesinos de estos y otros ejidos circunvecinos hicieron propio los sentimientos de agravio por parte de SEMNSA; sin pensarlo mucho se sumaron a la protesta, dispuestos a impedir la construcción de lo que ellos empezaron a denominar “el basurero tóxico”. Los campesinos que formaron este grupo núcleo en el Noroeste de General Cepeda se organizaron para rechazarlo y de ser una veintena de personas las que iniciaron la protesta, en pocas semanas se involucraron miles de campesinos de tres municipios y docenas de actores de otros sectores de la sociedad civil<sup>287</sup>, constituyendo un frente ciudadano que manifestó su inconformidad de diversas formas.

**Foto 3. Asamblea interejidal en Noria de la Sabina. Por la defensa del territorio y de la Madre Tierra**



*Foto: Saúl Angel Carrillo.*

Así, al interrelacionarse con otros sectores sociales, se fueron nutriendo de cada vez más información sobre los riesgos a los que los exponen las escurriduras tóxicas: enfermedades crónico degenerativas, envenenamiento paulatino de sus familias, contaminación a los mantos freáticos, inhabilitación de sus tierras y , con ello pérdida de su valor económico, entre otros; incluso el razonamiento de que, contaminada la tierra ya nadie estaría dispuesto a comprarles ni siquiera los alimentos que pudieran todavía producir ahí y que, en caso de querer venderla, el único cliente posible de interesarse en ella sería la misma empresa SEMNSA, pagando precios irrisorios para ampliar la extensión de su predio; consumando así el despojo de la tierra.

---

<sup>287</sup> Se encontraban entre ellos: miembros de ONG's; militantes del PAN, del PRD, del PT y de MORENA; empresarios de General Cepeda y de Saltillo; fieles de varias Pastorales de la Diócesis de Saltillo; académicos de la UAdeC y medios de información independientes, entre otros.

Preocupados ante escenarios catastróficos como ese, en un tiempo sorprendentemente corto los ciudadanos movilizados tomaron decisiones más drásticas para fortalecer la resistencia contra el confinamiento. Así, de la misma manera como aconteció treinta años antes, la inquietud social motivada inicialmente para defender de la sobreexplotación las aguas subterráneas se reconfiguró en una gran movilización social contra la contaminación potencial de las mismas, con desechos industriales de alta toxicidad.

Acudieron entonces a solicitar al Presidente Municipal Rodolfo Zamora Rodríguez que no diera trámite al permiso de cambio de uso de suelo, pero tanto él como las autoridades federales hicieron caso omiso a sus demandas de suspensión de la obra<sup>288</sup>. Eso, pese a la exhibición pública de las pruebas<sup>289</sup> de la violación a varios procedimientos establecidos en las leyes agrarias, realizados desde las instancias de gobierno para facilitar que la empresa se posesionara de la franja de terrenos ejidales en litigio.

Tampoco hicieron caso el análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental, en el que se demostró la omisión de información sobre la profundidad a la que se encuentran los mantos acuíferos; es decir, un dato clave para aplicar la normatividad ambiental y justificar

Por el contrario, el alcalde aprovechó las vacaciones de fin de año para hacer una reunión de Cabildo, para autorizar el cambio de uso de suelo con la venia de los regidores de su partido (PRI) en ausencia de los regidores de oposición<sup>290</sup>. En ese contexto, incluso actores que no suelen opinar y mucho menos involucrarse en movimientos sociales que cuestionan el *status quo* manifestaron al investigador su desacuerdo. Así se considera que fue el caso de Chon Sandoval, que en algún momento de una entrevista (01/09/2015) no pudo ocultar su conflicto de interés, al ser al mismo tiempo ejidatario y por otro lado militante priísta cercano al poder estatal; con grandes beneficios por serlo, durante muchos años<sup>291</sup>.

---

<sup>288</sup> Según Hernández M. (2016) se entregaron 22 actas de un total de 38 ejidos al R. Ayuntamiento de General Cepeda y a la SEMARNAT, al Gobierno del Estado y al Congreso del Estado de Coahuila; además de “otros escritos” [sic]; eso, a la par de que los abogados Jesús González Schmal y Gustavo Valdés Madero interpusieron amparos contra el proyecto.

<sup>289</sup> La comprobación de la superficialidad extrema del Acuifero 505 General Cepeda-Sauceda ([https://www.facebook.com/vanguardia/101531005603510037/?ref=embed\\_video&t079](https://www.facebook.com/vanguardia/101531005603510037/?ref=embed_video&t079)) implica la existencia de serias irregularidades en la elaboración de las Manifestaciones de Impacto Ambiental, que al confirmarse obligan a aplicar la Ley de Responsabilidades a los funcionarios públicos federales encargados de realizar la revisión de ese documento. En la medida que los ejidatarios tienen registros comprobados de que durante la época de lluvias los niveles freáticos pueden encontrarse a menos de 15 metros de profundidad, en el sitio donde se han construido las instalaciones del confinamiento, en caso de haber derrames la contaminación del manto freático será materialmente inevitable.

<sup>290</sup> No es de extrañar este actuar tramposo de Zamora Rodríguez, considerando que fue él quien intentó autorizar el confinamiento de San José de La Paila, durante su primer periodo como alcalde (1994-1996). En un artículo periodístico de la época, Beltrán Enríquez (2014) aporta datos que son interesantes de tomar en cuenta, que versan sobre las motivaciones e intereses que tuvo Zamora Rodríguez para actuar reiteradamente en contra de su obligada defensa de los cepedenses, como una de las prioridades de su alto cargo.

<sup>291</sup> La historia de vida de este actor, incluyendo la de su liderazgo en varios espacios tanto locales como municipales y regionales, se encuentra estrechamente ligada a su militancia activa dentro del Partido Revolucionario Institucional y muy específicamente dentro de la Confederación Nacional

S.A.: Oye Chon... ¿Y cómo andan allá en El Cohetero con lo del CIMARI?

A.S.: Pues yo, la verdad, no me he querido meter, porque no quiero tener broncas...

S.A.: Pero sí les importa ¿O no?

A.S.: ¡Claro que nos importa! ¡De hecho yo estoy en contra de que se construya! Nosotros colindamos con los terrenos de La Noria de la Sabina en los que se va a construir y nada más hay una lomita que separa... estamos en dónde viene de vuelta el viento, o sea que va a traer los contaminantes de este lado... las aguas ahí dan vuelta también, pero van de San Juan del Cohetero a Noria de la Sabina... ¡Y de ahí se van hacia los ejidos de Ramos Arizpe!

S.A.: ¿O sea que las escorrentías se van al Arroyo Patos?

A.S.: Pues... se esparcen por esos terrenos, que son planos... y cuando son abundantes se van hacia los ejidos de Ramos...

Como puede verse, la falta de transparencia tanto en el Ayuntamiento, como en las dependencias competentes del Gobierno Federal<sup>292</sup> y estatal, no hicieron sino incrementar el malestar popular y alentar la inconformidad ante la construcción del CIMARI fomentando con ello el fortalecimiento del movimiento emergente, pero paradójicamente su heterogenización respecto al perfil socioeconómico e ideológico de sus integrantes; esto es, un proceso de organización civil más compleja y no exenta de contradicciones entre sus miembros, pero con la motivación de ver afectado un elemento vital para sus vidas.

Por su lado, el bloque de actores externos encabezado por el alcalde Rodolfo Zamora y los empresarios Calvert y Calderón, contaban con las ventajas de ser los detentores del poder político y económico, lo cual no desaprovecharon y se coludieron con funcionarios de todos los niveles de gobierno del Poder Ejecutivo y de los otros dos Poderes de la Unión, para criminalizar a los actores locales más comprometidos con la resistencia al confinamiento. Ante la necesidad de defenderse de esa amenaza real y poderosa fue que se formó el *Colectivo Sí La Vida*; en un proceso que no resultó nada sencillo, pues tal cual lo describió José Luis García Valero<sup>293</sup> (JLGV) al investigador (18/03/2017), hubo que superar una serie de desconfianzas entre los heterogéneos actores locales:

---

Campesina, dentro de la cual tuvo la oportunidad de acceder a importantes puestos directivos dentro de La Forestal F.C.L.

En la práctica, debido a sus compromisos partidistas, Chon se negó a unirse al movimiento campesino en contra del confinamiento, a pesar de su oposición personal a su construcción.

<sup>292</sup> Hernández M. (2016), explica que se acopiaron 22 actas de un total de 38 ejidos; las cuáles fueron entregadas, junto a otros escritos “a las autoridades competentes (Semarnat, R. Ayuntamiento de General Cepeda) y a otras autoridades (gobierno del estado y Congreso del Estado de Coahuila). Paralelamente, los abogados Jesús González Schmal y Gustavo Valdés Madero emprendieron una serie de iniciativas legales para interponer diversos amparos contra el proyecto. El licenciado Roberto de la Maza, especialista en derecho ambiental, interpuso un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, impugnando la autorización en materia ambiental, concedida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, en agosto de 2014”.

<sup>293</sup> Historiador, activista defensor del territorio, Co-fundador del *Colectivo Sí a la Vida*.

JLGV: Primero fueron muchos grupos no unificados. Y digamos enfrentados. El grupo más activista, digamos encabezado por José Luis Villarreal, nos tildaba de paleros de la empresa. En ese momento, nosotros estábamos recopilando información y se nos ocurrió darnos el nombre de Comité de Vigilancia. Nos dimos cuenta muy pronto de que era un error, porque no pretendíamos vigilar a alguien que había ya dado muestras de que no tenía ninguna ética y ningún profesionalismo. Entonces, mientras compilábamos información, sí nos nombramos Comité de Vigilancia. Y era un grupo formado pues, como te digo, por campesinos, por vecinos, en la que había personas sin ninguna filiación partidista; y había filio panistas y había un par de gringos y demás ¿No? Éramos ciudadanos preocupados por el bienestar de la comunidad. Y había otro grupo, comandado por José Luis Villarreal, o liderado por José Luis Villarreal, de filiación más morenista o perredista, que nos tildaba de paleros de la empresa.

Cuando descubrimos la cantidad de engaños que había y de manipulación en todo el proceso, renunciamos a la idea de vigilarlos y nos dedicamos a informar a las comunidades de las mentiras que habíamos detectado; entonces, había dos discursos: estaba el discurso apocalíptico, que amenazaba con la aparición de niños de dos cabezas o anencefálicos y estaba el otro discurso, de quienes decíamos ¡Aguas con esto! Porque si bien los confinamientos son necesarios deben ponerse en donde hacen falta y no donde no hacen falta. Y deben ponerse a cargo de personas profesionales, con ética de servicio comunitario y no solamente en manos de comerciantes o con meros especuladores o buscadores de utilidad. Conforme hicimos ese trabajo de información y de recuperación de Actas Ejidales en oposición al proyecto y demás, pues se fueron dando movilizaciones, concentraciones y manifestaciones y acabamos confluyendo con el grupo de Villarreal. Y nos constituimos ya como Colectivo Sí a la Vida.

...En el camino, la empresa y el gobierno acudieron, pasaron por varias etapas. Primero, ocultaron información; después, proporcionaron información falsa; después, calumniaron; después, amedrentaron y después, criminalizaron. Fue un proceso, pues, fue una escalada, de ocultar información a judicializar el proceso de lucha ¿No? En este sentido, ayudó la empresa a que nos uniéramos. Vinieron todas las movilizaciones, la toma de la Presidencia [Municipal], las marchas en General Cepeda; la caminata de Pilar de Richardson a Saltillo, pues.

Siempre dijimos, porque así nos lo enseñó la práctica, que el movimiento tiene dos pies: el pie de la movilización social, de la información, de la agitación por así decirlo; por el otro lado, la pata judicial. Entonces, vinieron las acciones, hubo los amparos que promovió González Schmal; hubo nuevos recursos que promovió él, junto con el licenciado Valdés Madero, que es un propietario de aquí de la región; Y vinieron los procedimientos del juicio de nulidad en el que intervenimos varios; con campesinos, que fueron los que firmaron, con un financiamiento anónimo muy cuantioso ¡Porque ese sí fue muy caro! De hecho, en eso estamos.

Cuando fuimos perseguidos judicialmente, tanto por la vía penal como por la vía civil, quien metió la mano por nosotros fue Don Raúl [Vera López]...

... Entonces, si tú te fijas, el movimiento consta de varias etapas y son varios actores que confluyen Y luego se ponen a divergir y luego vuelven a confluir; es un movimiento muy activo. De una primera etapa de confrontación y de recopilación de información viene un proceso de información a la comunidad, de recolección de actas en contra del proyecto,



*de movilización y de acción judicial paralela en los tribunales. Tras ese momento viene una especie de reflujo, por el activismo, por el desgaste del grupo y ahora viene un proceso de divergencia porque la temporada electoral hace que muchos compañeros se vayan a las campañas. Y ahí estamos ahorita...”*

El *Colectivo Sí a la Vida* pronto se dejó sentir con fuerza en manifestaciones pacíficas; las primeras bloqueando el acceso al confinamiento, sobre la carretera Saltillo-Torreón, bajo la presión de grupos de choque pertenecientes a la policía estatal; después marchas sobre la misma carretera y posteriormente en las calles de Saltillo y frente al Palacio de Gobierno.

#### **Foto 4 Manifestación del Colectivo Sí a la Vida en las calles de General Cepeda**



Foto: Saúl E. Angel Carrillo.

Unas pocas semanas más, llegaron acusaciones penales y amenazas de muerte a algunos activistas, al tiempo de que se solicitaba audiencia al Delegado Federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; la cual contra todos los pronósticos y la lógica de justicia ambiental más elemental, dio respuesta favorable a la empresa, al mantenerle los permisos de construcción y operación del confinamiento a SEMNSA<sup>294</sup>.

---

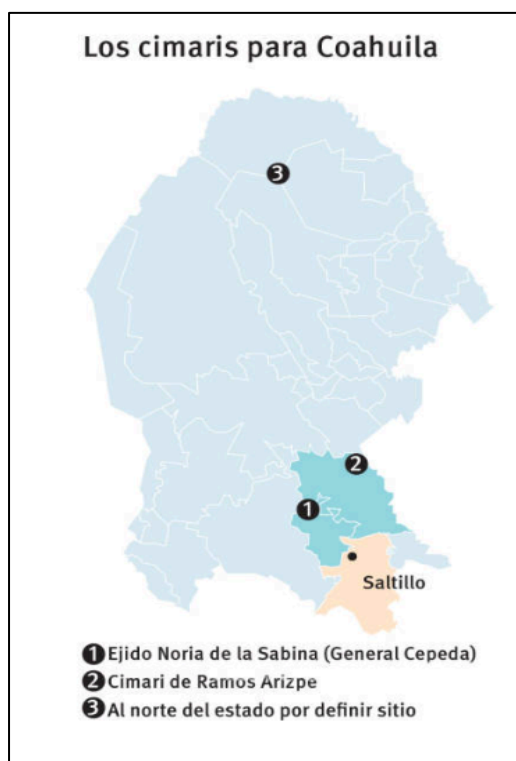
<sup>294</sup> La omisión del dato de profundidad en la que se encuentran los mantos acuíferos en los terrenos donde se proyectó construir el confinamiento es la inconsistencia más importante contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por SEMNSA para gestionar el permiso para construir el confinamiento ante las autoridades correspondientes. Esto porque la Norma Oficial Mexicana (NOM-055-SEMARNAT-2003) que estaba vigente al momento de proyectar la obra civil establece en su apartado I.4.1. una serie de consideraciones, relacionadas con los estudios geológicos previos que son requeridos para que la SEMARNAT autorice la construcción; dentro de los que cabe destacar que implican el conocimiento del tipo de acuífero del que se trata (libre, confinado...), siendo específica en señalar que deben “garantizar el conocimiento tridimensional del

*Interpusimos contra SEMARNAT dos Juicios de Nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en ambos casos obtuvimos la solicitada sentencia de nulidad, lo que significa que la autorización concedida en materia ambiental por SEMARNAT es nula. Pese a ello la empresa siguió y sigue operando sin contar con la autorización indispensable para ello. PROFEPA clausuró las instalaciones para, por debajo de la mesa, autorizar a la empresa a finiquitar los contratos previamente firmados con sus clientes, después le permitieron confinar los desechos recibidos...*

José Luis García Valero  
Activista del colectivo Sí a la Vida (3/10/2020)

Fue así, acumulando irregularidades de todo tipo, que el confinamiento se construyó y se puso en operación en agosto de 2016.

### Mapa 13. Proyectos SEMNSA en 2016



Fuente: González (2017).

comportamiento y distribución de los materiales del subsuelo, a una profundidad mínima de 300 m (trescientos metros) y con distribución horizontal adecuada a las características geológicas e hidrogeológicas” [el subrayado es mío].

El hecho real es que los habitantes del lugar han demostrado que en temporadas de lluvias se encuentran a menos de 15 metros ([www.youtube.com/watch?v=37fqLDSuuil](http://www.youtube.com/watch?v=37fqLDSuuil)).

Por otro lado, existen serias dudas entre los activistas del movimiento respecto a que la empresa consultora a la que se encargó realizar el estudio de impacto ambiental cumpla con la experiencia y con el perfil profesional requerido para hacerlo.

Una publicación que apareció en febrero de 2017 en un periódico local (González, 2017) da cuenta cómo, por esas fechas, Javier Calderón se sentía confiado para ampliar el negocio. En tal artículo, Calderón se expresaba de la siguiente manera, apoyándose en el mapa anterior, que aquí se ha referenciado como Mapa 13:

...por las inversiones futuras que habrá en la industria y por la extracción del gas shale, el Grupo Calmart, que controla el Cimari de General Cepeda, buscará invertir en un nuevo proyecto similar en el norte de Coahuila, explicó Javier Calderón; con esto serían tres confinamientos en la entidad... [y que]... El grupo ha puesto los ojos en la región norte de Coahuila debido al dinamismo en la industria, porque se proyectan más inversiones en el futuro en diferentes giros, pero también por la extracción del gas shale...” La confianza no paraba ahí, pues en la nota también se afirmaba que “...Grupo Calmart dio a conocer que proyecta invertir al menos 500 millones de pesos en nuevos negocios [sic] dedicados al manejo, confinamiento y reciclaje de residuos industriales y algunos [sic] peligrosos...[y que]...Grupo Calmart maneja Ecolimpio en Saltillo [el cual] adquirió el confinamiento Confinos, el cual se ubica en Tlaxco, Tlaxcala, por el cual se efectuó una transacción de 150 millones de pesos.

Puede observarse claramente que su argumentación a favor de la expansión de su “negocio” la basa en la expectativa que en ese momento él, seguramente también el grupo empresarial al que pertenece, se habían hecho del crecimiento de la producción de *gas shale*, al cual no veían como potencial, sino como inminente. Es decir, como el factor que definía en ese momento histórico la viabilidad económica a su proyecto de construir más confinamientos del mismo tipo que el CIMARI, diseñados para aislar a los “algunos” residuos peligrosos derivados de la explotación de dicho gas. De aquí que sea posible sostener aquí que es en el gas shale donde puede encontrarse el factor que define las acciones en pro de la imposición autoritaria de proyectos depredadores de la naturaleza, del despojo de la tierra y generación de amenazas de contaminación con consecuencias catastróficas para la vida.

Pero también puede exclamarse ¡Curiosa manera de concebir la generación de residuos tóxicos como un mero eslabón de una cadena de producción, que permite a unos pocos hacer pingües negocios con la contaminación! ¡Primero produciendo contaminantes y después confinándolos! Por un lado la generación, apropiación y acumulación de riqueza por “emprendedores” a partir de la extracción del gas shale, sin la mínima consideración de que para lograr tal extracción sea necesario aplicar la técnica de fracturamiento o *fracking*, un proceso tecnológico altamente generador de contaminantes; por otro lado, aprovechar que se contamina para justificar construir un confinamiento de sus residuos tóxicos. Negocio redondo para los dueños de este negocio de “protección ecológica”, quienes ni siquiera voltean a mirar la agresión que se hace a la vida de decenas de familias rurales y a la integridad de los ecosistemas.

Pero el entusiasmo de Calderón Domínguez fue interrumpido por el “balde de agua fría” que significó la prohibición que se hizo del *fracking* el 5 de octubre de 2020, con la cual, según un artículo periodístico recuperado casi al concluir de redactar este documento Rogelio Montemayor Seguy “se lamentó” [sic] de que como consecuencia de dicho decreto

“...se interrumpieron al menos 27 proyectos... que obviamente ya se perdieron. Más todos los que pudieron haberse generado” (Guardiola, 2023); según la misma fuente, el mismo actor “reprochó” [sic] que “...lo más grave es que nos están forzando a consumir energía generada con combustóleo, que es lo más sucio que puede haber. El desprecio que ha habido en este Gobierno (Federal) por el medio ambiente es verdaderamente criminal...”

Confrontar las palabras de Rogelio Montemayor con el posicionamiento de Calderón Domínguez refuerzan el argumento de este investigador, respecto a que el gas shale es un factor fundamental para explicar la ambición de la coalición de actores externos que recurrentemente aparece en las microhistorias de conflictos por el agua emergidos en General Cepeda durante las últimas tres décadas. Es decir, que visto el conflicto de Noria de La Sabina en el contexto del megaproyecto de extracción de gas shale (véase apartado 7.2.1.) salta a la obiedad reconocer que son colosales las fuerzas e intereses que impulsan los proyectos micro relacionados con él, como es el del confinamiento. De ahí, no resulta difícil comprender que el frente de actores externos que se abalanzan sobre el territorio para apropiarse de la tierra y del agua, sin que aparentemente tengan “llenadera”, son una parte del aparato instrumental del capital transnacional en expansión.

El contexto macroeconómico, el Tratado Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, así como la inercial perspectiva del fortalecimiento del *nearshoring* todavía<sup>295</sup> catalizaban la llegada de nuevas inversiones, la continuidad de la *expansión extractivista* y de la *expansión polutiva* acopladas al mecanismo capitalista de acumulación por despojo; desafortunadamente, también la posibilidad de nuevas expresiones del necrocapitalismo.

Confrontar a estas fuerzas, tanto económicas como políticas, requiere tener una capacidad de respuesta que muy difícilmente la generalidad de los campesinos de regiones marginadas y empobrecidas poseen. En ese sentido, debe tenerse conciencia de que la resistencia contra la construcción de confinamientos en General Cepeda no se hubiera podido sostener, ni mucho menos ganar, sin la presencia de actores con solvencia suficiente para responder en los tiempos y formas más adecuadas para neutralizar las acciones del oponente.

Es de ahí que, de la misma manera como se hizo una descripción de los principales actores externos que han jugado parte de estas historias sobre el agua, ahora se pase a describir el papel que han tenido aquellos cuyo poder, económico, político o moral los colocan en los puestos de liderazgo estratégicos para la defensa del agua.

So pena de correr el riesgo de simplificar demasiado, se puede decir que se distinguen cuatro tipos diferentes de actores locales que han tenido papel trascendente en estos procesos y que se citan en el orden en que fueron apareciendo en las arenas de los

---

<sup>295</sup> Si bien durante todo el periodo que duró la presente investigación nunca se dudó de la continuidad de este Tratado comercial, el cierre de edición del presente documento se realizó justo cuando tomaba posesión de la presidencia de los Estados Unidos de América Donald Trump, en su segundo mandato. Situación que vino a trastocar la seguridad de la continuidad de dicho Tratado. De ahí que el autor de estas líneas deje aquí asentado que esta última afirmación pudiera ser obsoleta, al cabo de un poco de tiempo de que esta obra salga a la luz pública.

conflictos por el agua: los líderes campesinos, los agroempresarios, los intelectuales orgánicos de izquierda y los jerarcas católicos.

Dentro de estos, quienes han contribuido con la mayor parte de los recursos financieros (o lo habían hecho hasta antes de la pandemia de COVID) fueron los agroempresarios, quienes junto con la jerarquía católica representan poderes fácticos que operan dentro de las vías legales (o al menos así lo proyectan). Siendo menester reconocer que sin el apoyo de ellos, en varios momentos clave, sería de dudarse que la resistencia de los campesinos hubiera durado lo que ha durado. La comprensión de los procesos por los que cursaron los conflictos por la defensa del agua de la Sierra de La Casita y los de resistencia a la construcción de los confinamientos de residuos en San José de La Paila y Noria de La Sabina, pasa entonces por reconocer que en el municipio de General Cepeda habitan familias dedicadas a la producción primaria que cuentan con capacidad económica amplia y no tienen compromisos de lealtad o alineamiento político con el régimen.

Dentro de esas familias se puede mencionar, por su participación en las movilizaciones y acciones para la defensa del agua, la de los Arizpe Ochoa<sup>296</sup>, cuyo linaje está compuesto esencialmente de empresarios con presencia en la región e incluso a nivel nacional e internacional durante varias generaciones<sup>297</sup>. Como cualquiera de los residentes de General Cepeda, los Arizpe Ochoa también se sintieron amagados con la amenaza de ser despojados del agua local, desde que en los años noventa el Fidagua maniobró para hacerse de las concesiones para extraer las aguas subterráneas del municipio. De ahí que, para enfrentar las amenazas que en ese momento se cernían, pusieron a disposición de los movilizados recursos financieros de su propio peculio, además de relaciones políticas de su nivel. Así lo reconoce uno de los líderes campesinos con mayor agencia en General Cepeda y Parras, al señalar que:

*...cuando empiezan a sobreexplotar los mantos freáticos, aunque la lluvia sea regular ya no nos llega el agua suficientemente en el invierno, que es cuando afecta los manantiales. En el 94 sin que hubiera una sequía importante ya hay una disminución drástica de los mantos freáticos en la zona y ya hay la amenaza de que se lleven el agua*

---

<sup>296</sup> Se trata del matrimonio de Emilio Arizpe Narro y Sofía Ochoa Mendoza. Dentro de la gama de negocios de los que son propietarios, los que se asientan en General Cepeda (en cuya cabecera municipal eligieron establecer su residencia permanente), se orientan principalmente a la fabricación los productos lácteos y derivados de agaváceas, como el ixtle, el pulque y la miel de aguamiel; incursionando en algunos alimentos orgánicos para exportación.

La familia ampliada de Los Arizpe, de la que forman parte los Arizpe Ochoa, tienen buena parte de su capital invertido en Arca Continental; empresa que en su página web (<https://www.arcacontal.com/>) se autodefine como la segunda embotelladora más importante de América Latina.

<sup>297</sup> Cuatro generaciones de “Emilios Arizpe” se registran desde hace aproximadamente 100 años: Emilio Arizpe De los Santos, Emilio Arizpe De la Maza, Emilio Arizpe Narro y Emilio Arizpe Ochoa. Las primeras noticias de la actividad empresarial familiar datan de 1840, cuando un tío abuelo de Emilio Arizpe De los Santos fundó en Saltillo la fábrica textil “La Aurora”. También, por una de las ramas ancestrales maternas (De la Maza), descienden de los fundadores (en 1864) de la Casa de Moneda del entonces emporio minero “Real de Catorce”, ubicado a 300 Km al sur de Saltillo, en el actual estado de San Luis Potosí (Acosta E. y G. Martínez, 2010).

*a Saltillo para la zona industrial. Nos amparamos, junto con los agroempresarios de la zona, como Emilio Arizpe, Los Milmo y Toño Rivero; y junto con los ejidatarios salimos a defender el agua. Nos amparamos, ganamos el amparo y, bueno, ya no se llevan el agua en ese momento a las empresas de Saltillo...*

Juan Gamboa (Enero de 2023).<sup>298</sup>

Pero aparte de hacer aportaciones económicas al colectivo movilizado por la defensa del agua, Emilio Arizpe Narro logró allegarse un lugar como líder social, al incorporarse como activista en varias manifestaciones sociales de defensa del interés común, como fue movilización contra la construcción de los confinamientos de San José de La Paila y de Noria de La Sabina, así como su adhesión al surgimiento del *Sí a la Vida*. De ahí que haya sido una sorpresa con sabor muy desagradable cuando salió a la luz que su nombre, junto con el de otros agroempresarios de General Cepeda, se encontraba en la lista de acaparadores de concesiones para explotar los acuíferos subterráneos 0521 y 0505.

*con datos de CONAGUA hemos identificado a los acaparadores de agua en la región, cito: Casa Madero, Patricio Milmo, José Antonio Rivero, Miguel Guajardo, Arturo Mendel, Salomón Abedrop, familia Salinas Aguilera<sup>299</sup>, Emilio Arizpe Narro, Joaquín Arizpe Sada, Jesús María Ramón, Gerardo Sada Zambrano, Daniel Flores, Gerardo Garza Sada, Isidro López Villarreal, Manuel López Villarreal, entre otros.*

José L. García Valero (com. pers., 2022)

Este hallazgo provocó no solamente consternación en el el sector campesino, sino entre sus integrantes un fuerte sentimiento de haber sido traicionados por él, que provocó el inmediato rechazo hacia todo lo que tuviera que ver con su persona, su familia y el resto de agroempresarios citados por Gamboa Maldonado y por García Valero. Significó el rompimiento de relaciones, no solamente con el *Colectivo Sí a la Vida* sino con actores ligados a la Diócesis católica e incluso con algunos (no todos) activistas defensores del agua del municipio de Parras.

Al llegar a este punto puede ya apreciarse el involucramiento de la jerarquía católica en estos conflictos y cómo se fue convirtiendo en un elemento nodal para que los actores locales hayan podido establecer un equilibrio de poder menos desfavorable para su causa. De manera particular, al hacer alusión a la jerarquía y no a todo el clero católico, se habla de Raúl Vera López, un fraile dominico con una extensa historia de apoyo a las luchas sociales reivindicativas de los derechos de actores que tradicionalmente han sido oprimidos por el autoritarismo de Estado.

Obispo muy reconocido a nivel nacional e internacional, no se entrará aquí en detalles sobre sus antecedentes episcopales y solamente se dirá que en ellas casi siempre terminó

---

<sup>298</sup> Estenográfica de parte del video publicado por él mismo en su página de Facebook, el 27/01/2023 (recuperado el 12/05/2023).

<sup>299</sup> Esta es la familia a la que pertenece quien era Gobernador del Estado, al momento de cerrar la edición de este documento: Manolo Jiménez Salinas.

envuelto en polémicas políticas, por su labor pastoral en favor de las clases marginadas<sup>300</sup>. Y dado tratar de hacer una síntesis sobre ésta siempre quedará con un margen de inexactitud, solamente señalará aquí que siempre se mantuvo alineado a la corriente de la Teología de la Liberación, desde mucho antes de llegar a Coahuila en 1999. Su sola mención suele causar escozor dentro de los sectores conservadores saltillenses, en especial aquellos vinculados de manera estrecha con el PRIAN. Esto, sin salvarse de ser motivo de críticas negativas dentro de los miembros del clero local, quienes en su mayoría tienden a colocarse dentro de lo que políticamente suele denominarse “la derecha”; ya no se diga con los sectores de ultra derecha, como son Los Legionarios de Cristo, en donde es visto con aversión debido a sus ideas “rojillas”<sup>301</sup>. En el contexto de su labor como Obispo de la Diócesis de Saltillo, se puede destacar su apoyo a migrantes en su paso hacia los Estados Unidos de América, la fundación del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y el acompañamiento a las familias de los muertos del derrumbe de la mina Pasta de Conchos, en 2006.

Por lo que respecta al foco de interés de esta investigación, Raúl Vera se involucró de manera indirecta, o al menos tuvo presencia eventual por lo menos desde 2010 en algunas acciones ciudadanas realizadas en contra de la privatización de los servicios de agua potable y drenaje en el municipio de Saltillo; pero fue durante el conflicto de Noria de La Sabina cuando entró de lleno<sup>302</sup> a jugar un rol permanente como activista en resistencia contra la construcción del confinamiento.

---

<sup>300</sup> Dentro de estos antecedentes se destaca de manera muy especial su papel como Obispo adjutor de Samuel Ruíz, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en los años inmediatamente posteriores al alzamiento neozapatista de la Selva Lacandona (1995-1999).

<sup>301</sup> En el contexto del conflicto de Noria de La Sabina tuvo contradicciones con el sacerdote Paulo Sánchez; a quien, teniendo a cargo La Parroquia San Francisco de Asís (el principal templo católico en General Cepeda), decidió relevar cuando cometió el error político de invitar a las fiestas patronales a Daniel Calvert (con quien, según se dice en el pueblo, mantenía una buena relación desde varios años atrás) y haberlo sentado a su lado (es decir, compartiendo presidium con el Obispo). Esto, a pesar que dicho sacerdote contaba con el aprecio de la mayor parte de sus feligreses, de quienes por lo general se han obtenido buenos comentarios respecto a lo que consideran que fue su buen desempeño y compromiso social.

<sup>302</sup> Se dice que “entró de lleno” porque tampoco se puede decir que el Obispo era ajeno a la problemática que se les estaba presentando a los campesinos, con el secamiento de los manantiales de la Sierra de Parras, a raíz de la privatización del agua del Acuífero 0521. Y si bien con la información disponible se puede deducir que durante los primeros años de este siglo la mayor atención se la otorgaba al caso de Parras de La Fuente, principalmente por la vía de CEP-Parras A.C..

Con todo, a partir del conocimiento que obtuvo empíricamente durante su trabajo de campo, el investigador puede afirmar que no por tener más presente los sucesos de Parras el Obispo desconocía la situación de los ejidos de General Cepeda colindantes; especialmente los de la Cuenca del Arroyo San Miguel que, al igual que la Sierra de Parras, es compartida por ambos municipios. De hecho, Durante su trabajo de campo, el investigador supo, por una conversación con un Diácono de la Parroquia de San Francisco (la principal de General Cepeda), de que el Obispo Raúl Vera se había presentado personalmente en Noria de La Sabina cuando se iniciaba el desarrollo de los hechos.



Pero para comprender de mejor manera el porqué de la importancia del involucramiento del Obispo, resulta imprescindible traer a mención que el Obispo Vera llegó no solamente provisto con la agencia (moral y política) que *per se* le daba su investidura, sino con un instrumento que representa el posicionamiento oficial de la Iglesia Católica frente a los conflictos socioambientales de nuestros días: la Encíclica *Laudato Si* “Sobre el Cuidado de la Casa Común” (Bergoglio Sívori, 2015); un manifiesto público decretado por el jerarca máximo de esta religión, el Papa Francisco, en el que exhorta a los católicos del mundo a tomar conciencia sobre los graves riesgos de catástrofe ambiental global, derivados de las acciones humanas regidos por los valores y las inercias que se encuentran coligados con el sistema económico hegemónico.

Y es que, de manera del todo fortuita, en el año 2015 en el que se iniciaba la confrontación abierta entre las partes del conflicto de Noria de La Sabina, de manera casual y sincrónica hubo un acontecimiento de la máxima relevancia dentro de la religión católica: la publicación de dicha Encíclica papal, acontecida el 24 de mayo de ese año; es decir, seis semanas antes del suicidio de Toño Hernández, que como se recordará aconteció el 29 de junio.

Para cuando Raúl Vera hizo su aparición en el escenario del conflicto de Noria de La Sabina los ánimos ya estaban al punto de ebullición, por lo que la interpretación de *Laudato Si* aplicada a dicho conflicto tuvo un impacto profundo y trascendente para configurar la orientación y posicionamiento político que definen la identidad y los valores del *Colectivo Sí a la Vida*. En ese sentido, de ninguna manera debe considerarse menor el peso que ha tenido este documento canónico en las motivación de los actores en resistencia, sobre todo considerando que la mayor parte de la ciudadanía cepedense tiene un fuerte arraigo en los principios y valores de la religión católica.

Con el tiempo, en la medida que se fueron decantando aquellos actores con mirada más individualista, se fueron fortaleciendo los posicionamientos de perfil más anticapitalista y decolonialista. Es decir, en la medida en que se fueron definiendo actores que no dejaron de ver al agua como un bien privatizable, de aquellos que la visualizan como un derecho humano y un bien común.

Haciendo una alegoría, diríase que el Colectivo Sí a la Vida es como un corazón que, funciona como una unidad para lograr su objetivo, impulsando hacia su entorno sangre procedente de una vena laica con elementos agnósticos o incluso ateos, pero también una arteria religiosa. Estas vías se imbrican en su interior, en cavidades diferentes para no mezclar sus contenidos; pero esto es aparente, puesto que en algún otro punto del sistema que irrigan se hacen un solo volumen, para lograr su objetivo, que es el de la defensa de la vida.

#### **8.4. Los “Custodios del Arroyo San Miguel”**

Para fines del 2015 el conflicto derivado de la construcción del confinamiento acaparaba la atención de los cepedenses. Y no era para menos, al considerar los riesgos que dicho proyecto conlleva tanto para la vida de las personas que viven en Noria de La Sabina y sus alrededores como para la integridad de los ecosistemas vinculados con las aguas del



Acuífero 0505 General Cepeda-Sauceda y del Arroyo Patos. Y es que la contaminación de cualquiera de esos dos cuerpos de agua, el subterráneo o el superficial, llevaría irremediablemente a una situación catastrófica, pues afectaría los límites regionales, en tanto una infiltración cuantiosa de sustancias tóxicas a al subsuelo afectaría a toda la cuenca del Arroyo Patos, que es la misma que la del Río Salinas, como se le llama en el estado de Nuevo León y atraviesa la Zona Metropolitana de Monterrey por su lado norte.

Esa grave amenaza de contaminación, sin embargo, no era la única para los habitantes del noroeste cepedense, sino que vino a sumarse a un problema que ya se presentaba desde décadas atrás, que es el de la sobre explotación de ese acuífero y del 0502 Saltillo Sur. Los manantiales se seguían agotando y los volúmenes de agua que bajaban por el cauce del Arroyo San Miguel eran cada vez menos, hasta que empezaron a hacerse insuficientes para llenar las presas que hay a lo largo de él, generando conflictos locales; algunos de los cuáles ya estaban pasando de ser conflictos entre ejidatarios de un mismo ejido a ser entre ejidatarios de diferentes ejidos, como son los casos de Seguí y Presa San Antonio en la cuenca media y entre Jalpa y San Juan del Cohetero en la cuenca baja<sup>303</sup>.

Contra lo que pudiera parecer a primera vista, la situación anterior, salvo algunas excepciones menores y al menos hasta 2022, no solamente no había llevado a los campesinos de los ejidos de la cuenca del San Miguel a tener más confrontaciones entre sí, pues a pesar de los desacuerdos que se dan entre localidades, con el paso de los años los ejidatarios han cobrado conciencia de que el problema de la disminución de los volúmenes de agua que escurren por el cauce de este arroyo, que ellos están padeciendo, tiene su origen fuera de la cuenca del Arroyo San Miguel. Una conciencia que les ha permitido ampliar su visión de la problemática, ampliando sus consideraciones a que, más allá de las diferencias existentes entre colectivos o de forma más personal, existe una relación directa entre el fenómeno que están atestigüando, el secamiento del arroyo, con la privatización del agua de los acuíferos subterráneos que *de facto* se incentivó a partir de la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992. Confirman esta mirada campesina tanto los testimonios que durante esta investigación han sido colectados como los de otros autores que han hecho registros sobre este proceso durante el último cuarto de siglo [destacadamente: Ríos Navarrete (2000b); Destenave Mejía (s/f); Maya Martínez (2012); Fundación Villa de Patos (2018); Aguirre Villaseñor et al. (2019); Peña J. (2021)].

Así, en el contexto de la vorágine de eventos que acontecieron en el contexto de las movilizaciones de resistencia contra el confinamiento de residuos tóxicos de Noria de La Sabina, los campesinos de la cuenca del Arroyo San Miguel se organizaron para conformar otro colectivo, al cual se incorporaron ejidatarios de San José Patagalana, Sombreretillo, Presa de San Antonio, Santa Inés y Seguí (del municipio de Parras) y de Jalpa, San Juan del Cohetero y Pilar de Richardson (del municipio de General Cepeda). Denominaron a este colectivo *“Los Custodios del Arroyo San Miguel”*, dándole como misión específica la

---

<sup>303</sup> En ese sentido, desde la perspectiva metodológica de esta investigación, este cuerpo fluvial representa una interfase entre la arena donde se dirimen los conflictos por el agua a escala *meso* y las arenas a escala *micro* donde se confronta los conflicto que en este párrafo se señalan.

de emprender acciones concretar para la defensa de este cuerpo de agua, cuya importancia resulta vital para todos ellos en conjunto.

Ha faltado tiempo y recursos al investigador para ir más a fondo en incrementar el aún limitado conocimiento de los detalles de esta organización campesina, por lo que para dar una idea general de la misma ha optado por recurrir a retomar como referencia un artículo periodístico, en el que se dan algunas generalidades:

Campesinos de la organización Custodios del Agua del Arroyo San Miguel han señalado como los principales responsables del saqueo de los acuíferos, que antes daban vida a los ejidos de esta cuenca, a al menos una docena de agroindustriales entre los cuales figuran: Miguel Guajardo, de la Hacienda Parras el Alto; Arturo Mendel Gruenebaum, de Vinos Don Leo; José Antonio Rivero Larrea, de Agrícola Faroc; la familia Milmo Brittingham, de Casa Madero, y Emilio Arizpe.

...Hasta antes de la pandemia los comisariados de Seguin, Presa San Antonio, Jalpa, Santa Inés, Porvenir de Jalpa, Pilar de Richardson y San Juan del Cohetero, que conforman la organización Custodios del Agua del Arroyo San Miguel, se reunían cada mes para sacar acuerdos que tenían que ver con la defensa y cuidado del agua de la cuenca.

La idea era que cada comisariado llevara la información que recibía en esas asambleas al ejido y que la gente se empapara del problema del agua, “de lo que estaba pasando, que a largo plazo vamos a batallar porque, a como se está viendo, el agua se está acabando y se están secando algunos aguajes donde salía el agua a pelo de tierra, para que la gente hiciera consciencia, apoyara, se sumara a la lucha. Hay mucha gente que no cree, que todavía no les cae el 20 [sic]”, dice Candelario.

Dos de los principales convenios que derivaron de estas reuniones fueron la rehabilitación integral de la cuenca del Arroyo San Miguel y la revisión de las concesiones de las comunidades de la cuenca para checar su vigencia y, en caso de que alguna estuviera pendiente, tratar de regularizarla... pero el Covid lo echó todo por tierra...

(Peña, 2021)

La última frase de la cita trae a mención la influencia que ha tenido la pandemia de la COVID; esto es, un factor que no debe dejarse de lado en cualquier análisis de este tema, pues de acuerdo a esta cita periodística ha tenido un efecto de incertidumbre respecto a la continuidad de este colectivo. Sin embargo, considerando que la opinión de Jesús Peña fue dada cuando todavía se encontraba en curso este problema de salud pública mundial, quien estas líneas escribe no descarta que su manera de expresarse hubiera estado un tanto influida por el clima de incertidumbre que trajo dicho episodio de salud pública durante los primeros años de la tercera década del siglo XXI.

Pero habría que matizar esta expresión que hace Peña (2021), ya que en 2023 se le permitió a este investigador incorporarse a la cabalgata que año con año, desde 2018, han organizado los integrantes de este colectivo para mantener viva su presencia (Foto 5). En tal ocasión pudo constatar que esta organización cuenta con la fuerza que le proporciona

la base popular que lo sostiene. Evidencias de ello lo fueron: lo numeroso del contingente de cabalgantes, la buena organización de las ceremonias de perfil ecuménico que se efectuaron al pie de la Presa La Castañuela, así como de la recepción a los cabalgantes en el ejido Jalpa. Pero además de basar su fuerza en los actores locales que lo conforman, se ha podido constatar que, como en el caso del *Colectivo Sí a la Vida*, esta movilización popular también cuenta con el apoyo del Obispo Emérito, Raúl Vera López. Actor que nuevamente se está haciendo presente en esta arena, con toda la fuerza moral que su investidura y su persona misma representa. Pero no es el único representante de la iglesia católica, ya que lo hace acompañado con quien lleva la titularidad de la defensoría de derechos humanos de la Diócesis, Jackie Campbell; por parte de la Compañía de Jesús, con sede en Parras de la Fuente, se hace presente el Hermano Ricardo Enrique Greeley, que tiene una gran presencia en todos los ejidos del mismo Parras y muchos de General Cepeda.

**Foto 5 Cabalgata (2023) por la defensa del Arroyo San Miguel**



Foto: Saúl Angel Carrillo

Otros actores importantes de destacar, que también aparecen aquí, son un pequeño grupo de investigadoras de diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila, que brindan su apoyo al movimiento a título personal y con sus propios recursos. Aparecen, así mismo, actores locales que han jugado un rol destacado en las movilizaciones de resistencia campesina contra el confinamiento de residuos tóxicos de Noria de la Sabina: Imelda Belmares, Pedro Jasso, Juan Gamboa y José Luis García Valero.

Debido a las limitaciones en recursos y en el tiempo no ha sido posible profundizar más en detalles sobre esta organización, pero no ha querido dejarse de incluir, en tanto que

representa una causa campesina muy importante, que tiene que ver con la defensa del agua en los ejidos que se encuentran sobre el Acuífero 0505 General Cepeda-La Sauceda y parte del 0509 La Paila. No obstante, por considerar que en ellos se sintetiza la razón de ser y aspiraciones de quienes conforman esta organización campesina, se transcribe a continuación algunos párrafos del pronunciamiento<sup>304</sup> que hicieron los *Custodios del Arroyo San Miguel* y 33 organizaciones aliadas tras la cabalgata efectuada en mayo del 2024:

Al amparo de la Ley Salinas, agroempresarios extractivistas, vitivinicultores, agroempresarios exportadores de nuez, frutillas, hortaliza y productores de forraje para la Cuenca Lechera de la Laguna se han apropiado del 94% del agua del subsuelo. Este saqueo se ha visto agravado por la demanda de agua por parte del Cluster Automotriz del Valle de Derramadero.

Este despojo se ha visto favorecido por la complicidad, opacidad y desinformación de parte de CONAGUA que no informó oportunamente a los ejidos y campesinos de los cambios en la ley, lo que acabó dejándolos en la indefensión. Los empresarios, por el contrario supieron aprovechar los cambios en la ley, declararon vacantes las dotaciones de agua de los ejidos y se las apropiaron, provocando la descampesinización del territorio, atropellado la dignidad, la vida, el trabajo y la relación histórica del campesinado con su territorio.

Parte fundamental del encuentro fue la cabalgata El Agua Nuestra Hermana como una proclama simbólica y festiva que busca visibilizar a los ejidos y afirmar su posesión y pertenencia al territorio, contra la invisibilización de que los hace objeto el modelo neoliberal de extracción, despojo, desmonte y gentrificación y denuncia las omisiones, complicidades, abusos y violencia lenta –que pretende descampesinizar el campo– expulsando a lxs campesinos de sus tierras para integrarlos a un modelo de desarrollo basado en la manufactura, la maquila, el “nearshoring”, los centros comerciales y el desarrollo urbano a expensas del Agro. Esta “modernidad” depende del despojo de tierras, agua y la erradicación de costumbres que no se adapten al mismo.

La cabalgata, es una forma de resistir a la ley de concesiones que legaliza el despojo del agua de los campesinos, es al mismo tiempo una fiesta, un acto de solidaridad y convivencia que busca hermanar a las comunidades y colectivos que resisten a la extracción de agua del Arroyo de San Miguel, pero también con otras luchas y movimientos en México y América Latina

## 8.5. Confluencia, sinergia y cemento de los movimientos

*Cada uno a su manera,  
cada quien con sus modos,  
detrás estamos todos,  
usted, yo y el de enfrente.  
Detrás de cada fecha,  
detrás de cada cosa,  
con su espina y su rosa  
detrás, está la gente.*

Joan Manuel Serrat

---

<sup>304</sup> Puede leerse el pronunciamiento completo en la página:

<https://www.caminoalandar.org/post/pronunciamiento-en-defensa-de-la-vida-y-el-territorio>

En los apartados previos de este capítulo se han hecho descripciones sobre las acciones de defensa del agua llevadas a cabo por la ciudadanía de General Cepeda durante los años que corren del presente siglo, para resistir los embates de actores externos que atentan contra la integridad de sus arroyos y acuíferos subterráneos, que al principio empleaban únicamente tecnologías extractivas pero hoy día incorporan, al menos de inicio, tecnologías polutivas que coartan directa o indirectamente el derecho humano al agua que tienen los actores locales.

En todos los casos aquí relatados, esos actores externos representan o son agentes de los intereses propios de un capitalismo en proceso de expansión territorial, cuyos modos de actuar permiten ubicarlo, bien adentrado ya, en la fase de despojo, con indicios que ya no son tan menores de que se encuentra ya estableciendo una tendencia a orientarse a la fase de *necrocapitalismo*. En tales circunstancias, la capacidad organizativa que han mostrado los actores afectados se convierte en un baluarte de la sociedad a la que pertenecen, puesto que la experiencia en este tipo de conflictos dicta que es solamente a través de que los pueblos cobren conciencia sobre la importancia de autodefenderse que se pueden tener posibilidades de confrontar exitosamente los proyectos de muerte promovidos por personajes que pertenecen a élites económicas y políticas muy poderosas.

Con todo, también es cierto que las expresiones de resistencia popular tienen el múltiple reto de que no solamente deben de aflorar sino, después de ello, tener el impulso suficiente para consolidarse y articularse eficazmente, con tal de desarrollar capacidad para sobrevivir y generar agencias políticas y sociales. Pero en un país donde el sistema de justicia tiende a favorecer a quien ofrece más dinero a los encargados de impartirla, también resulta imprescindible a las organizaciones de base de la sociedad civil contar con una bolsa de recursos financieros para sostener los largos juicios y los gastos colaterales que se derivan de enfrentar a los actores que intentan afectar sus derechos. Se ha visto en este capítulo que éste es el caso el *Colectivo Sí a la Vida*, cuya resistencia durante tantos años es precisamente porque cuenta con agencia social, agencia política y agencia económica (en ese orden de importancia). En el presente apartado se propone una explicación sobre las razones o los factores que facilitaron que fuera así y no de manera lenta.

Una primera premisa para allegarse de esa explicación es asumir que la movilización masiva de las personas no es un asunto azaroso, sino un resultado de la confluencia de un conjunto de factores coyunturales, históricos, económicos, políticos y socioculturales, entre otros. En ese tenor, comenzando por hacer una breve recapitulación histórica, se puede señalar que si, bien las movilizaciones ciudadanas de los años noventa lograron contener una primera embestida de los actores externos, sólo lo lograron temporalmente. En realidad sus operadores nunca declinaron de ellas y esperaron a que nuevamente se diera un contexto gubernamental favorable a sus ambiciones; así que, soterradamente, siguieron acaparando concesiones para extraer agua del subsuelo sin medida y sin control, mediante procedimientos administrativos poco transparentes, basados en la complicidad de los dueños del capital y funcionarios gubernamentales.

Las condiciones políticas favorables para volver a intentar construir el confinamiento de residuos industriales tóxicos se dio cuando el PRI volvió a estar al frente de los tres niveles de gobierno, a raíz de los triunfos de ese partido en los comicios federales de 2012, pero sobre todo en los municipales del 2014, con el regreso al cargo de Presidente Municipal de General Cepeda el mismo personaje en el que se apoyaron para realizar el primer intento de construcción en San José de La Paila.

Pero si los actores externos aprovecharon las enseñanzas que les dejó la experiencia de su primera fracasada embestida para adueñarse del agua, también aprovecharon lo mismo los actores locales; de ahí su capacidad para organizarse tan rápidamente para la defensa y pronto lograron estructurar al *Colectivo Sí a La Vida*. Pero los actores locales contaban con una ventaja adicional: los lazos de solidaridad comunitaria que los unen para establecer acuerdos cooperativos desde aspectos productivos como son los sistemas de trabajo basados en la mano-vuelta para cultivar o el uso comunitario de los agostaderos para el pastoreo, hasta los apoyos mutuos que se brindan ante las desgracias personales, familiares o climáticas que se les van presentando a lo largo de la vida. Todo eso en el pequeño territorio ejidal, heredado de sus abuelos y sus padres, peones acasillados de la hacienda que tenían plenamente internalizado en su conciencia moral el valor de esa solidaridad entre coterráneos. Y considerando que la solidaridad es uno de los valores que dan sentido de identidad comunitaria a las sociedades tradicionales, ya no resulta tan sorprendente la fortaleza que han mostrado los movimientos de resistencia para defender su agua. Defenderla del proceso de despojo que se desencadenó en esta región, como en el resto del país, a partir de las reformas al marco jurídico de tenencia de la tierra de 1992, que convirtieron en una “realidad jurídica” el atropello que se hizo a la noción milenaria de agua como *bien común*, para imponer la noción de *bien privado*.

Desde luego, existen mucho más factores sociales que influyen en el ánimo de una ciudadanía para movilizarse que la mera institucionalidad comunitaria dentro de la que se circunscribe la solidaridad y otros valores. Sin embargo, en una región semidesértica tiene implicaciones muy fuertes para la sobrevivencia de las familias que dependen de sistemas de producción temporaleros, dados los altos grados de incertidumbre que acarrear los elevados riesgos de siniestralidad que año con año amenazan las cosechas y las crianzas; lo cual, llevado al tema de interés de este trabajo que es el del agua, hacen que el acceso a este elemento marque la diferencia entre vivir o morir. En ese sentido, la noción de *bien común* es un factor que internaliza en cada miembro de la sociedad y que en el fondo lleva a la noción el valor de respetar la vida de los demás miembros de su sociedad, incluso de quienes no se consideran amigos, pero viven en la comunidad. Este valor, llevado a la práctica del uso mancomunado de agua implica, sí, la necesidad de construir acuerdos para su distribución equitativa, pero también el hacer propio el valor moral de no acapararla para un uso individual, puesto que al hacerlo se expone la vida de los demás ...

Como quiera que sea, el factor “solidaridad comunitaria” no basta por sí solo para explicar de manera convincente el porqué de tanta rapidez de la movilización para emerger, crecer, consolidarse y crear resiliencia ante la violencia de los contrarios. Y este argumento puede ser validado fácilmente poniendo sobre la mesa el hecho de que los actores locales que se aglutinaron, actuaron y posteriormente opusieron resistencia en pro de la defensa del agua

no eran ni son campesinos, en su totalidad; por el contrario, se trató de un bloque social heterogéneo, compuesto también por actores locales de los sectores agroempresarial, eclesiástico y comercial (dentro de la diversidad de estos últimos hasta propietarios de cantinas); también actores externos, algunos más integrados a la sociedad cepedense como maestros rurales y clérigos, pero otros con residencia fuera del municipio, como son académicos universitarios, ambientalistas y otros tipos de activistas de origen urbano.

Considerando entonces que: no todos viven comunidades y se trata de un grupo plural, cabe entonces cuestionarse *¿Cuál es el factor o cuáles son los factores que los mantuvo cohesionados y formando un bloque actuante en una sola dirección y un solo sentido?*

Aparte de la relación con la tierra, que representa sin duda el punto nodal a partir del cual por sí misma se explica la motivación entre ambos sectores rurales para establecer una alianza estratégica, existió otro elemento que en el corto plazo resultó fundamental para cohesionarlos, o al menos sirvió para eso en las primeras etapas de la resistencia contra la *expansión extractivista* y la *expansión polutiva* de los procesos de producción capitalista sobre los acuíferos subterráneos. Ese elemento es la Iglesia Católica, tanto a nivel cupular a partir de los vínculos de tipo más personal entre los líderes, campesinos y agroempresarios con el entonces Obispo, como de la población en general con la Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo, a través de las comunidades de base, que se encuentran constituídas por un enorme contingente de feligreses.

**Foto 6. Raúl Vera, José Luis García, Juan Gamboa y Pedro Jasso. Cuatro actores con agencia que coinciden en el *Colectivo Sí a la Vida* y en *Los Custodios del Arroyo San Miguel*.**



Fuente: Vanguardia (5/06/2021).

La importancia del involucramiento del entonces Obispo radica en que cambió de manera muy notoria los equilibrios de poder que determinan las posibilidades que tienen los contendientes de ganar la confrontación. Así se puede entrever en el siguiente texto, recuperado de un artículo periodístico escrito por el abogado defensor del *Colectivo Sí a la vida*:



Para responder a las graves amenazas lanzadas en contra de algunos activistas se buscó el amparo del obispo de Saltillo, fray Raúl Vera, quien después de enterarse a fondo de los hechos, decidió brindar al colectivo todo el apoyo de la Diócesis a su cargo y de la Comisión de Derechos Humanos Fray Juan Larios. Esto permitió romper el cerco informativo y llevar la lucha al ámbito nacional e internacional. La proclamación de la Encíclica Laudato Si, del papa Francisco, brindó aliento y claras orientaciones a nuestro colectivo, que adoptó al papa como padrino.

Hernández (2016)

Y es que el involucramiento más comprometido de la Diócesis de Saltillo en pro de defender los derechos de los sectores populares de la sociedad, tanto urbana como rural se incrementó a la llegada de Fray Raúl Vera López para ocupar su titularidad, en 1999. Y aunque por la fecha de su llegada ya coincide con la fase final de la confrontación de los años noventas de los pobladores de General Cepeda contra los intereses privatizadores de su agua y contra el confinamiento de San José de La Paila, Vera logró todavía vincularse con los líderes tanto campesinos como agroempresariales de ese movimiento<sup>305</sup> y muy pronto orientó las actividades de los representantes cléricales de la Pastoral Rural y la Pastoral Social a apoyarlas<sup>306</sup>

Se ha subrayado en el texto de la cita de Hernández (2016) la mención sobre la *Encíclica Laudato Si*, en razón de que durante el seguimiento efectuado al conflicto de Noria de La Sabina el investigador pudo constatar que si bien, *sensu stricto*, se trata de una proclama que tiene un carácter moral, su perspectiva anti sistema ofrece argumentos que al ser retomados permiten sostener ideológicamente la praxis de la resistencia socioambiental que se está dando en General Cepeda. La decisión del Obispo de hacerla suya, defenderla frente al clero conservador y presentarla a sus feligreses como una guía ética para defender “La Casa Común” de las agresiones de aquellos actores que afectan al bien común, encajó como un “guante hecho a la medida” en la causa del *Colectivo Si a la Vida*;

---

<sup>305</sup> En 2014 el investigador dialogó con el Coordinador de la Pastoral Rural el Pbro. Paulo Sánchez, a partir de lo cual consta la buena relación que llevaban, tanto Fray Raúl Vera como él con todos los líderes del movimiento social, tanto con los del sector social como del privado. Eran tiempos de convivencia muy positiva entre todos, en los que a menudo se realizaban eventos en casa de la familia Arizpe Ochoa, a los que acudían líderes campesinos y agroempresariales para combinar la discusión política con la convivencia social.

<sup>306</sup> En una conversación sostenida por el investigador en 2016 con Rodrigo Montelongo, Vicario de Pastores Rurales de la Diócesis de Saltillo, él hizo hincapié en que “...entre las mayores preocupaciones del Obispo se encuentra la de promover la solidaridad comunitaria entre los campesinos de esta región del país, pues desde su punto de vista no tienen la que se percibe en campesinos del Sur...”.

Quien esto escribe comparte la opinión del hoy Obispo Emérito y no omite expresar que en lo personal considera que en esa diferencia tienen muchísimo que ver los valores heredados de los pueblos originarios (entre ellos los que confluyen en la solidaridad). Esto porque en el Norte del país lo fundamental de ellos se perdieron parcial o completamente tras la invasión ibérica, como consecuencia del genocidio y absorción de los sobrevivientes a la cultura del invasor.



esto porque los argumentos que maneja coinciden en muchos puntos con los de algunos<sup>307</sup> de los integrantes más comprometidos del movimiento, cuyo perfil ideológico puede ubicarse más bien en la línea marxista.

La importancia que tuvo la intervención directa del Obispo en numerosos foros y espacios políticos, para defender la causa basándose en los recursos institucionales de su Diócesis (la Pastoral Rural, la Pastoral Social y la Oficina de Comunicación Social) es que, gracias a ella se incrementaron el poder de convocatoria y de resistencia social del *Colectivo Sí a la Vida*. Pero también se convirtió en un elemento de cohesión cuando sus integrantes cayeron en cuenta que, de manera paralela al avance de las movilizaciones por la defensa del agua de General Cepeda, los integrantes del círculo de agroempresarios cepedenses se dedicaron a acaparar concesiones para extraer las aguas subterráneas del municipio e incluso de las de Parras de La Fuente.

Desde luego, existen otros actores que apoyaron al movimiento en diferentes momentos. Dentro de ellos se hace mención destacada de Juan Francisco Rodríguez Aldape (+), profesor de un colegio privado de Saltillo profundamente comprometido con las causas campesinas, que al contar con la confianza de Fray Raúl Vera jugó una importantísima función de enlace entre este último y los activistas cepedenses pro defensa del agua, catalizando la constitución del *Colectivo Sí a La Vida y Los Custodios del Arroyo San Miguel*. Así mismo, en la defensa jurídica y/o en la capacitación jurídica en materia agraria han jugado roles de relevancia los abogados Jesús González Schmall, Max Hernández y Jackie Campbell Dávila; en registro histórico los investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila Carlos Dávila y Cristina Martínez; en trabajo con mujeres e investigación sociológica la tesista de maestría de la UAM-X Lizett Corona (2025).

Como puede verse, al momento de desencadenarse el conflicto de Noria de La Sabina se encontraban presentes un conjunto de actores que con sus respectivos ímpetus personales, productos de sus propias historias de vida, favorecieron la creación de un cuadro de liderazgos. Desde Los Arizpe que entre sus empresas se encuentra una nueva desfibradora de lechuguilla, hasta Pedro Jasso campesino proveniente de las luchas de su sector contra el capital privado, para no ser excluidos por éstos del mercado del ixtle; desde los intelectuales procedentes de instituciones académicas como Aldape hasta los intelectuales forjados en la lucha por los derechos campesinos como García Valero, un intelectual campesino como Juan Gamboa. No han faltado, sin embargo, las figuras que han surgido de los sectores más populares, como Lalo Alonso Tello, Martín Torres, José Santos, Imelda Belmares y Juan Reyna, por citar a algunos.

Y aunque al correr del tiempo propietarios privados y ejidatarios terminaron distanciados, se considera de elemental justicia no escatimar que el apoyo que los agroempresarios dieron en la primera etapa a la población movilizada fue determinante para encauzar las acciones del movimiento hacia momentos y espacios más propicios, a los que difícilmente

---

<sup>307</sup> Se dice aquí *algunos*, puesto que el colectivo está conformado de actores con diverso pensamiento político; pero que, de la misma manera como sucedió en los años noventa de la centuria pasada, nuevamente demostraron su gran capacidad para mantenerse unidos, haciendo de la defensa de la naturaleza su causa común, a pesar de ser socioeconómica e ideológicamente muy heterogéneos.

hubieran llegado sin ese apoyo. Esto resulta especialmente cierto en el caso de el apoyo financiero, jurídico y político que ofrecieron al movimiento para contrarrestar las acciones legales emprendidas desde el Estado y por los dueños de SEMNSA para criminalizar a los líderes más proactivos y críticos, pero al mismo tiempo vulnerables al uso del Poder Judicial contra ellos, por no contar con muchos recursos económicos. En ese sentido, es casi seguro que activistas como Lalo Alonso, Juan Gamboa o José Luis García Valero hubieran terminado en la cárcel, ante la dificultad de afrontar con sus propios medios los actos de criminalización judicial de las que fueron objeto en varios momentos del proceso. Del mismo modo, no hubieran sido posibles acciones de difusión de información sistematizada como el caso del libro digital de la Fundación Villa de Patos/Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (2018), que fue financiada por ellos.

Pero más allá de la valía de todos esos actores, tanto en lo individual como en la sinergia que les da el actuar en conjunto y de manera organizada, se encuentran los factores que tienen que ver con la identidad. Porque si bien entre los campesinos de esta parte del país no existen lazos de solidaridad comunitaria tan estrechos como los tienen los campesinos del sur del país, o al menos no lo existen en apariencia, hay otras cualidades ligadas a la identidad local que hacen la diferencia entre la disposición a defenderse de las agresiones de otros colectivos de actores o no hacerlo. Desde el punto de vista personal de quien estas líneas escribe, una que es muy importante para explicar una parte de esa capacidad de organización colectiva para la defensa de sus derechos que tienen los campesinos de la zona de estudio es lo que de manera coloquial pudiera llamar “el ímpetu del lagunero”<sup>308</sup>. Esto es, que debería tomarse nota de que los estudios de caso de esta investigación están localizados geográficamente en los límites de la Región Sureste de Coahuila con la Comarca Lagunera<sup>309</sup>, donde aparte de que en ella se dieron muchas batallas durante la Revolución Mexicana debido a que se encontraban dentro de la influencia de las fuerzas militares de Pacho Villa; por otra parte, el autor de estas líneas se atrevió a aventurar que

---

<sup>308</sup> Sin entrar en detalles, se puede hacer una explicación sintética de lo que se quiere decir con la expresión “ímpetu lagunero” señalando que, en general, los campesinos de la Comarca Lagunera tienden a ser más temperamentales, y más rebeldes que los de la Región Sureste de Coahuila. Siendo probable que este rasgo de identidad tenga que ver, al menos parcialmente, con las notables diferencias en sus procesos históricos. Ya no digamos que vivieron con intensidad la historia de la defensa del agua contra los terratenientes y contra las empresas transnacionales durante El Porfiriato; debe considerarse también que los hombres de campo laguneros se involucraron en mucho mayor medida que los del sureste de Coahuila en la gesta revolucionaria, lo cual se debe a que La Laguna se encuentra muy cerca a los límites con Chihuahua, en territorio donde sentaban sus reales las fuerzas villistas, levantadas en armas contra el gobierno central. Contrasta ese recorrido histórico con el de los campesinos del Sureste, quienes nunca salieron de su condición de subordinados, antes del reparto agrario a los hacendados y después del mismo al Estado que los forzó a corporativizarse económica y políticamente en la Forestal FCL. De hecho, de la revisión de los expedientes del RAN sobre dotaciones ejidales y de la bibliografía queda claro que la presión ejercida para instrumentar el reparto agrario provino de La Laguna y no del Sureste de Coahuila; y que, en todo caso, los campesinos de esta última región recibieron el beneficio un tanto “de rebote” cuando hicieron sus gestiones al darse cuenta de que estaban entregando tierras en la primera.

<sup>309</sup> La cuenca del Arroyo San Miguel es endorreica y se infiltra al subsuelo en las inmediaciones de la Laguna de Mayrán.

considera probable que al menos algunos rasgos de esa rebeldía lagunera pudiera tener alguna influencia de la cosmovisión republicana española, puesto que al final de los años treinta llegaron a esta región por miles los refugiados que venían precisamente de ser objeto de una represión muy violenta por el gobierno franquista, precisamente debido a su ideología antiautoritaria.

## **8.6. Contexto político y *status quo***

Coahuila y Durango, estados vecinos que en su mayor parte extienden su superficie territorial en la Altiplanicie Mexicana, eran en 2024 los únicos dos estados del país cuya gubernatura se haya representada por un militante priísta. Tal circunstancia es un factor del contexto supra-regional que, lógicamente, tiene mucho que ver con el equilibrio político del que dependen la gobernabilidad y la gobernanza en ambos estados; pero en especial en el primero de ellos pues, aceptando sin conceder que en Durango se presentó un cierto tipo de alternancia política<sup>310</sup>, resulta que Coahuila viene a ser el único estado del país que, debido a la ausencia de alternancia partidista, en 2029 cumplirá un siglo de ser gobernado por un mismo partido.

Esa situación define un control quasi-absoluto de las élites políticas del gobierno estatal. Máxime que la presencia de coahuilenses dentro de la dirigencia nacional del PNR/PRM/PRI ha sido permanente desde su fundación cuando Plutarco Elías Calles designó como primer Presidente de su Comité Ejecutivo a Manuel Pérez Treviño; actualmente dentro de los puestos más altos de su dirigencia se encuentra firme la figura de Rubén Moreira Valdés y previo a él la de su hermano Humberto. Desde luego que en la historia del PRI Nacional ha habido épocas de mayor y menor presencia coahuilense, pero la permanencia de más de 90 años en el gobierno del estado ha sido un factor determinante para la conformación de una estructura orgánica tipo piramidal en cuya base se cuenta con amplias ramificaciones que llevan el control del partido hasta los sitios más recónditos, tanto de las zonas urbanas como rurales; pero también en cuyo vértice superior se ha conformado una élite política que aprovecha todos esos hilos de control del partido para hacerse de un poder muy grande.

A partir de esa estructura, piramidal en su forma y vertical en su funcionamiento, es que se explica la capacidad corporativizadora que llegó a tener ese partido durante, por dar un ejemplo, el periodo de Cárdenas; que se cita aquí porque es sobre esa fortaleza del partido que el entonces Presidente de la República se apoyó para construir La Forestal F.C.L., de la que se han discutido y cuestionado aquí las razones últimas que llevaron a crearla y sobre las consecuencias históricas que se cernieron sobre la fuerza de trabajo campesina por haber sido corporativizada, mediante la fuerza del partido, a dicha empresa que se dedicó a extraer, beneficiar y comercializar el ixtle.

Pero también es a partir de entender esa estructura que se puede comprender que, con el correr del tiempo, a aquellos militantes con puestos cupulares dentro del partido se les

---

<sup>310</sup> Se matiza la afirmación, puesto que en realidad el candidato de la coalición PAN/PRD que ganó la elección de 2016 tuvo antes una larga trayectoria como militante del PRI.

fueron facilitando las vías para ampliar el poder político que ostentaban hacia el poder económico: sea mediante alianzas o sea canalizando recursos para beneficio propio; en lo individual o en lo grupal. En el contexto nacional, tras casi 100 años de fungir como partido de Estado dentro del estado, hoy día Coahuila representa uno de los últimos relictos del otrora omnipresente instituo político, precisamente por ello el poder se sigue ejerciendo de manera muy similar a como se ejercía en todo el país hasta los años ochenta del siglo pasado; desde arriba dando órdenes incuestionables y desde abajo sin cuestionar en absoluto esas órdenes de la dirigencia en turno.

En lo anterior se asienta la lógica de frases como la de *“En Coahuila nadie mueve un dedo en cuestiones que tengan que ver con el gas [shale] sin antes tener el visto bueno de Montemayor”*, que describe sin tapujos las maneras como son tomadas las decisiones políticas dentro de las estructuras de gobierno que tienen al frente a actores que militan dentro del partido de Estado, especialmente en los niveles estatal y municipal; que dicho sea de paso no habrían llegado a esos puestos si no hubieran pasado por numerosas pruebas de lealtad a las dirigencias, cuando no fue que llegaron por parentesco o compadrazgo.

Las ideas anteriores se han incluído aquí con la intención de alumbrarle el camino al entendimiento del lector(a) respecto a que la historia de la formación de los oligarcas que hoy día controlan los hilos de uno de los poderes fácticos más influyentes en Coahuila pasa por la comprensión de: i) cómo han sido empleadas las estructuras del partido político de Estado para establecer relaciones de mutua conveniencia con los detentores del poder económico; ii) que merced a tantas décadas en las que se han mantenido en el gobierno no solamente han logrado afianzar a sus leales, a sus parientes y a sus compadres o ahijados en puestos clave para formar una especie de fraternidad cerrada, en la que mutuamente unos les protegen las espaldas a los otros; iii) que usando el poder o agencia logrados tejiendo lazos con actores representantes del capital local e internacional (en ocasiones a través del matrimonio), es que se ha llegado a la situación actual, en la que unas cuantas familias imponen su voluntad y su ley a la ciudadanía subordinada a ellos.

En el actual contexto de transición de régimen político que el país vive desde 2018, se puede definir como excepcional la circunstancia de Coahuila, como un estado en el que nunca ha habido alternancia de partido en el poder. No obstante, a nivel de algunos municipios sí se presentaron cambios. Tal es el caso de General Cepeda, donde fue gracias al cambio de partido en el gobierno municipal que en el año 1999, cuando hicieron coalición el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, se logró neutralizar en ese momento el avance del proyecto original del confinamiento de residuos tóxicos en el ejido San José de La Paila; desde luego, tampoco se podría explicar esa capacidad de contención sin considerar que en el año 2000 el Partido Acción Nacional ganó la Presidencia de la República, por lo que aquí se propone que esta conjunción de alternancia en el gobierno federal y el gobierno municipal no dejó de tener sus efectos en la contención de los intereses de la oligarquía estatal. En ese sentido, aquí se sostiene que fue hasta que el PRI volvió a tener la titularidad de los tres niveles del gobierno que se volvieron a dar las condiciones políticas para que dicha oligarquía estatal iniciara nuevas

acciones y gestiones administrativas para construir el confinamiento, pero ahora en Noria de La Sabina.

En el apartado 7.2.2. se dan detalles sobre cómo en los años noventa operó la Presidencia Municipal priísta dando facilidades a los interesados en instalar el confinamiento en San José de La Paila y cómo a partir de ello se desencadenaron movilizaciones ciudadanas que integraron actores locales de perfil socioeconómico diverso. En aquella ocasión, los líderes de los agroempresarios locales que se movilizaron estaban bien identificados como militantes del PAN; pero habiendo también militantes del PRD en el bloque de resistencia, que compartían una postura política contraria al PRI, por puro pragmatismo político se dió un acercamiento entre los dos primeros, que se consolidó al conformar una coalición para acudir a las elecciones municipales. Esa alianza cuajó en el triunfo para ocupar la titularidad de la Alcaldía durante el periodo 2000-2002 y, con ello, lograr desactivar el proyecto de confinamiento de residuos tóxicos industriales; al menos momentáneamente.

Vale resaltar que en ese año 2000, accedió el también panista Vicente Fox Quesada a la Presidencia del país, de tal suerte que aunque Ochoa fue relevada en 2003 por el priísta Lázaro Vázquez Ramos, el PAN seguía gobernando a nivel nacional; circunstancia que significó para el PRI-Coahuila no ocupar los tres niveles de gobierno simultáneamente; sino hasta 2012. De ahí que la postulación de Zamora Rodríguez para contender en 2014 por la Presidencia Municipal de General Cepeda dé la impresión de haberse planeado con la intención de reconfigurar el arreglo institucional mediante el cual se dió el primer intento de construir el confinamiento; es decir, volver al arreglo institucional de los tres niveles de gobierno, para expedir todos los permisos necesarios para no fallar en un segundo intento.

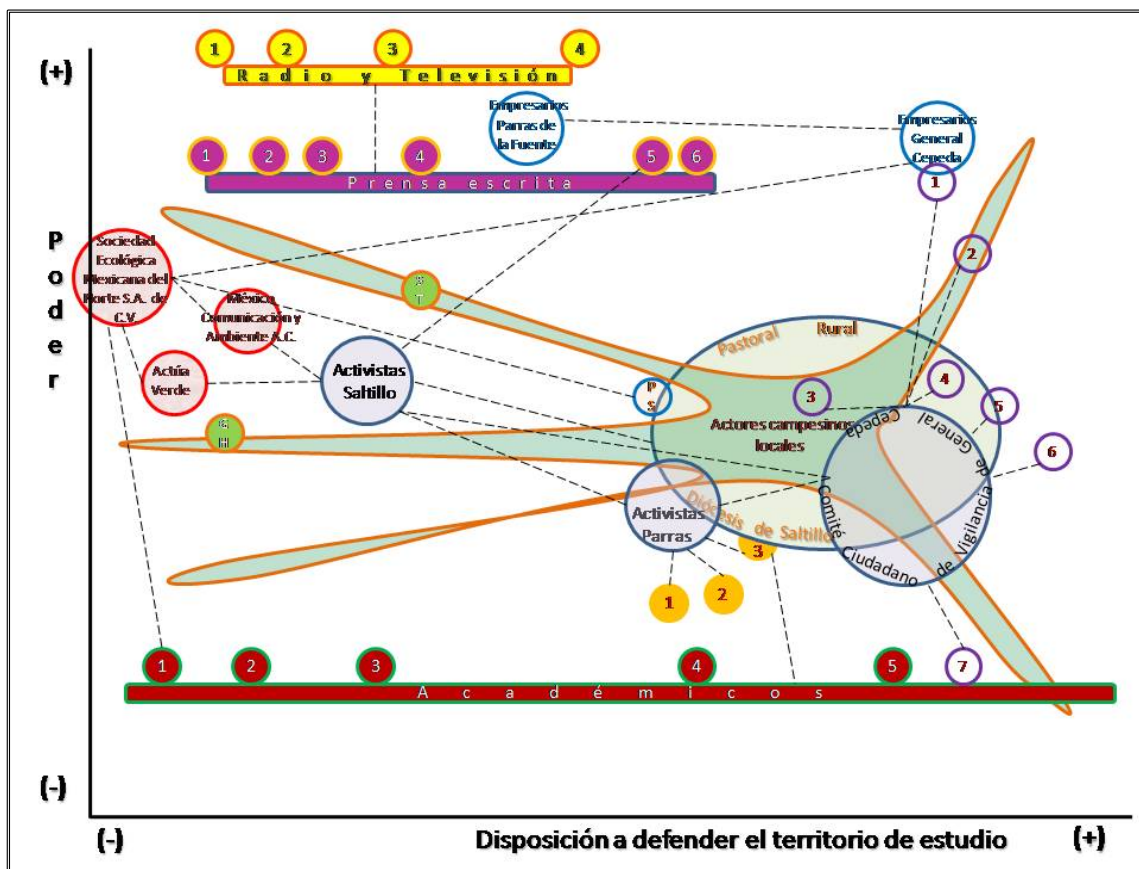
Las fechas de esos últimos acontecimientos políticos han tenido que ver directamente con los destinos que fue tomando la presente investigación, en tanto que el protocolo original para realizarla fue presentado en 2013; es decir, cuando el asunto del confinamiento de residuos industriales peligrosos parecía ser cosa del pasado. Fue en ese contexto que se explica que un conflicto de la magnitud que se desató no haya sido incluido en su marco de referencia; es decir, que la irrupción de SEMNSA en el escenario, con todo el apoyo político dado el presidente municipal reelecto, tomó desprevenidos a todos, desde a los actores locales hasya al investigador.

La decisión de reconfigurar el protocolo de investigación trajo entre sus consecuencias la de no dar un seguimiento puntual y detallado sobre la evolución de las movilizaciones a escala municipal. Intentando comprender el abrupto cambio del contexto sociopolítico del todavía objeto de estudio en ese momento, el investigador elaboró la **Gráfica 2** y la **Gráfica 3**, que se presentan y discuten en las páginas siguientes. Ambas gráficas fueron construídas en base de la información colectada en campo hasta ese momento de avance de esta investigación, 2014 y 2015, y se diseñaron pensándolas como una herramienta útil para complementar los escenarios o *arenas* locales, agregando al contexto estudiado elementos o factores que se estaban presentando a escala municipal que pudieran o no (en ese momento se desconocían detalles) incidir en los temas propuestos originalmente para estudiar. Sin embargo, el acelerado ritmo que en pocas semanas adquirieron los acontecimientos y la interacción con los actores locales, dejaron claro al investigador que las movilizaciones que se estaban observando eran en realidad parte de un conflicto

mayor, que se contendía en una *arena* conformada dos décadas atrás y que, pese a que hasta entonces parecía un asunto ya resuelto, los eventos del momento mostraban el inicio de una segunda embestida, realizada por la coalición de actores externos que ya a fines del siglo XX habían hecho un primer intento de apropiarse del agua subterránea baj el territorio municipal de General Cepeda, así como de construir dentro del mismo un confinamiento de residuos tóxicos.

A pesar de ello, se considera que el ejercicio de construir las gráficas es rescatable para ser incluido en este apartado, en tanto que proporciona una imagen de cuál era el escenario político municipal en los años en los que se reanudaron los conflictos. Queriendo verlo así, se muestran aquí con fines ilustrativos, respecto a cómo se encontraba dicho escenario político municipal tras los primeros meses de confrontación entre la coalición de funcionarios y empresarios posicionados a favor de construir el confinamiento de residuos tóxicos *versus* la ciudadanía cepedense posicionada mayoritariamente en contra de tal construcción, ordenando a todos esos *actores* en función de el poder o *agencia* que en ese momento se percibió que tenían contra su disposición a defender el territorio.

**Gráfica 2. Posicionamiento de actores de la sociedad civil frente al conflicto por el confinamiento de residuos tóxicos industriales, en 2016**



Fuente: elaboración propia.

Partiendo de esas intenciones y sin entrar en detalles, respecto a la Gráfica 2 se puede destacar aquí que, en la coyuntura del inicio del conflicto, si bien los medios televisivos y radiales eran percibidos se distinguían como los actores más poderosos, a partir de los contenidos de sus noticiarios no mostraban tener inclinación para defender el territorio amenazado; dando escaso tiempo a la noticia y manejándola como protestas menores. Tal actitud no resultó sorprendente, de ninguna manera, ya que las empresas líderes (RCG y Grupo Multimedia) son propiedad de personajes ligados, económica y socialmente a familias que gobiernan el estado. La prensa escrita, si bien un poco más dispuesta a abordar temas críticos, como actor colectivo tiene menos peso en la opinión pública; es decir, tiene menos poder que los medios electrónicos; pero más allá de este aspecto, enfrenta el problema cotidiano de que los reporteros son sujetos de control, presiones y censuras por parte de los editorialistas y gerentes de las empresas para las que trabajan cuando los temas a tratar implican a actores poderosos. Se hace notar que en la mencionada gráfica no se incorporan las redes sociales; lo cual es explicable en función de que en esos años todavía su uso era muy incipiente y de hecho desconocido para la mayoría de los actores involucrados.

Intercalados entre los medios de comunicación que se ilustran en la Gráfica 2 se encuentran representados los agroempresarios locales. Se les ilustra con dos círculos relativamente pequeños para aludir que cuantitativamente no son muchos; pero la cuantía de recursos económicos que poseen los ubica en la parte de gráfica que corresponde a los actores más poderosos. Uno de esos círculos representa a los de General Cepeda y los ubica dentro del rango de quienes mostraban mayor interés por defender el territorio; el otro a los de Parras de La Fuente; que además de tener menos interés por ser de otro municipio, con el pasar del tiempo se advertiría que una parte de ellos jugaban ya, desde aquellos años, un lugar importante entre los actores extractivistas del agua subterránea de General Cepeda.

Del lado izquierdo y en el rango de las escalas de poder superiores, de la misma Gráfica 2, puede distinguirse un cluster o concentración de organismos civiles, dentro de los cuáles se destaca a la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte S.A. de C.V. y su nula disponibilidad para defender al territorio, en tanto que se trata de la empresa dueña del proyecto del confinamiento de residuos tóxicos industriales de Noria de La Sabina. También se incluyeron en la gráfica y muy cerca de SEMNSA dos organizaciones civiles (“México, Comunicación y Medio Ambiente A.C.” y “Actúa Verde”) cuya presencia en el escenario se detectó en aquellos momentos de reinicio del conflicto, pero de las que ya no se volvió a escuchar con el transcurrir del proceso de resistencia, desconociéndose si se alejaron o por algún factor el investigador ya no pudo seguir ubicando su participación.

Probablemente la figura que más llame la atención dentro de esa gráfica sea la que tiene forma ameboide. Con ella se ha intentado representar a los actores con perfil campesino. El tamaño de dicha figura nos indica que se trata del sector más numeroso de la población local y la forma que se le dio en la gráfica corresponde a la heterogeneidad que puede encontrarse dentro del mismo, tanto por el poder que ostentan como por el interés por defender el territorio que en ese momento tenían; es decir que por sus diferentes grados de agencia la mayor parte de ellos se encuentran en un nivel medio tendiendo a bajo, pero

también en su mayor parte con disposición de media a alta para defender el territorio, pero con sectores menos numerosos de ellos (algunos con mucha agencia y otros con poca agencia) con disponibilidad total para involucrarse activamente en dicha defensa, pero también otros, también de agencia variable, que mostraban indiferencia ante el conflicto.

De tamaño no tan amplio, pero con una forma regular, se representa a la Pastoral Rural de la Diócesis. Se trata de una elipsoide que se intersecta principalmente con la figura ameboide que ilustra a los campesinos, pero también con los círculos que representan tanto a los activistas parrenses pro defensa del agua y con el entonces denominado *Comité Ciudadano de Vigilancia de General Cepeda* (ver apartado 8.3), que con el tiempo pasaría a denominarse *Colectivo Sí a la Vida*. El rol que jugó en esos años dicha Pastoral Rural fue muy importante, por cuanto a que representó un nodo de aglutinamiento de las clases populares que posteriormente se vincularían con las movilizaciones sociales; en ese sentido, no se intersectó con los círculos de agroempresarios; lo cual quizá derivó de una percepción insuficiente del investigador, que percibía a estos dos últimos grupos de actores no tanto con una relación con la Pastoral, sino con una tendencia a tratar los asuntos que consideraban importantes de manera directa con el Obispo Raúl Vera; lo cual no significa que no mantuvieran una relación cordial con el entonces Coordinador de la Pastoral Rural, Paulo Sánchez, quien al mismo tiempo llevaba la titularidad de la Parroquia de San Francisco,, ubicada en la cabecera del General Cepeda.

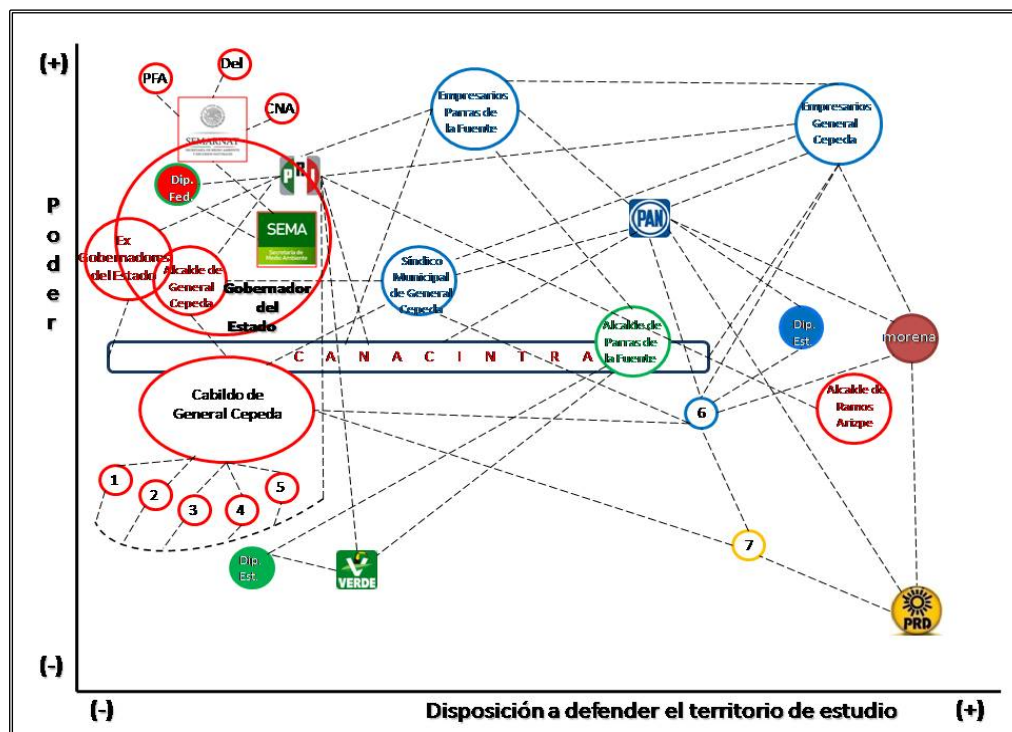
De cualquier forma que se le vea, los más interesados en defender el territorio eran tanto los actores campesinos como los actores agroempresariales, en tanto dueños de los medios de producción local; es decir, la tierra y el agua: los primeros dentro del régimen de propiedad social y los segundos en el de propiedad privada. Ese factor común bastó para motivarlos a unirse en la defensa de ellos, ante la amenaza proveniente de uno de los grupos oligarquicos más poderosos de Coahuila; aunque también no debe perderse de vista que los agroempresarios habían perdido el poder político local, al haber sido desplazados de encabezar la Presidencia Municipal.

Pero no todos los actores externos llegaron apoyando el despojo y entre los que se posicionaron por la defensa del territorio se encuentra actores académicos. Los más comprometidos entre éstos son algunos investigadores de la Escuela de Historia y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, en estudios relacionados con la arqueología de los sistemas hidrotécnicos; es decir, más alineados a la causa de *Los Custodios del Arroyo San Miguel* que a la del *Colectivo Sí a la Vida*. Al cuadrángulo que los representa se le ha rotulado como académicos y no como universidades en tanto que lo han hecho por inquietud propia, sin contar con el apoyo institucional de sus universidades, siendo esta la razón por la cual fueron colocados dentro de la gráfica a lo largo del rango de menor agencia o poder; haciendo notar al lector que también se les colocó abarcando todo el espectro de proclividad para defender el territorio. Esto porque esa actitud de servicio a las comunidades campesinas, mostrada por los académicos de la UAdeC contrasta con la ausencia que fue detectada por el investigador, respecto a representantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). Al investigador no deja de causar estupor esta situación, puesto que considera que no es cosa menor que una entidad universitaria en cuyos estatutos se establece mantener un



compromiso con las comunidades rurales, se deslinda de hacerlo. De ahí que no omita calificar su actitud como indolente y no se duda en definir a la UAAAN como un *actor ausente*; haciendo hincapié que su ausencia tiene implicaciones sociopolíticas trascendentes, puesto que su falta de apoyo a los campesinos favorece que la balanza de los equilibrios de los poderes confrontados se incline en en favor de quienes atentan contra ellos<sup>311</sup>.

**Gráfica 3. Posicionamiento de actores institucionales locales y regionales (privados, gubernamentales y partidos políticos) en 2016**



Fuente: elaboración propia.

Respecto a la Gráfica 3, de entrada se puede decir que resulta más elemental y desactualizada que la Gráfica 2. Más elemental porque únicamente incorpora a las instituciones del sector ambiental y a las alcaldías, y más desactualizada en tanto que al presentar las primeras etapas del conflicto se eximió de incorporar a muchos otros actores institucionales que se fueron incorporando conforme el conflicto fue creciendo y haciéndose más complejo. Por dar un ejemplo indicador, se puede señalar que con la

<sup>311</sup> Desde luego, eventualmente llega algún académico de esa universidad agraria a realizar trabajos de capacitación o de apoyo a la economía local, pero durante los muchos recorridos que el investigador hizo por los ejidos nunca vió a algún “Narro” realizando algún tipo de actividad en apoyo de los campesinos para resolver alguno de sus numerosos conflictos por el agua. Y ya mejor no hablar del papel que quienes encabezaron esta universidad quisieron darle a su institución educativa durante el sexenio peñanietista, cuando con financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), aceptaron dar cobertura institucional a la impartición de cursos de formadores de “mediadores de conflictos agrarios”, que se pronosticaban iban a derivarse de la aplicación del fracking para la extracción del gas shale.

judicialización de los casos se incorporaron desde fiscalías y jueces hasta organizaciones por la defensa de los derechos humanos y de los colectivos más vulnerables.

En ese sentido, debe tenerse bien claro que dicha Gráfica 3 es más como una instantánea fotográfica tomada en los primerísimos meses de 2015. Una instantánea en la que, hay que decirlo, los actores que se registran son eminentemente de carácter local y en todo caso regional. La razón de ubicar la gráfica a esta escala es sencilla de explicar, señalando que no debiera olvidarse que la gráfica se construyó con la intención de contextualizar el único conflicto por el agua que en ese momento se estudiaba, que era el de la Presa Jalpa. Eso, aparte de que los actores externos que estaban irrumpiendo llegaron de Saltillo, donde además de encuentran las sedes de las dependencias federales involucradas e incluso la de la CANACINTRA, que tenía cierta presencia en esos momentos.

Desde esa perspectiva local es que se explica la integración a la gráfica de las alcaldías de los tres municipios en cuyo vértice se proyectaba construir el confinamiento de residuos tóxicos; pero también es conveniente aclarar que, desde esa misma perspectiva fue que se definieron tanto las agencias como la disposición a defender el territorio de los partidos políticos; es decir, se habla de las representaciones municipales de los mismos en General Cepeda, no de las representaciones estatales y mucho menos de las representaciones municipales. Este detalle no es un asunto menor, en tanto que en las escalas estatal y nacional las rivalidades entre partidos políticos eran en algunos temas irresolubles, especialmente entre el PRI y el PAN, dado que al ser partidos alineados al neoliberalismo sus afiliados que alcanzan puestos de gobierno importantes suelen ser muy aficionados a realizar negocios personales al amparo de los gobiernos en turno que son de su misma afiliación partidaria; de ahí que suelen crearse entre ellos intereses económicos muy fuertes, por lo que las disputas llegan incluso a convertirse en personales<sup>312</sup>.

Aclarado lo anterior, puede destacarse que la ubicación en la Gráfica 3 de la totalidad de los *actores externos* coludidos para actuar a favor de la privatización del agua y de la construcción del confinamiento se encuentra en la parte superior derecha de la misma. Esto es, sobre el eje Y en los niveles altos de agencia o poder y sobre el Eje X en los

---

<sup>312</sup> Este investigador presencié en 2016 una conversación entre tres funcionarios, todos ellos con filiación y fuerte compromiso dentro de la estructura del PRI, en torno al confinamiento de residuos tóxicos que se encuentra en el Ejido El Sacrificio, en el municipio de Ramos Arizpe. En dicha conversación pueden encontrarse indicios de lo graves que pueden ser ese tipo de intereses económicos que, aunque personales, utilizan la protección política que les proporciona su afiliación partidaria. Fueron protagonistas de esta conversación: Juan Manuel Villarreal Valdés (+), Director de Promotora para el Desarrollo Rural (PRODERCO); Luis Alemán, Director de Desarrollo Rural de General Cepeda; y Andrés Rodríguez (Coordinador del INCA en Coahuila).

En su calidad de propietario de un terreno aledaño al confinamiento, Villarreal respondió así a la pregunta, que le hizo Alemán, de si los dueños de ese confinamiento eran personas que vivían en Monclova:

Villarreal: *Ni son tantos de Monclova ni son tantos de Saltillo aquí, los que están ahí son otros intereses ¡Ahí están los hijos de Martha Sahagún y están otras gentes!*

Rodríguez: *¿Saro Warman?* [político panista que fue alcalde de Rams Arizpe]

Villarreal: *Saro tenía tenía allí, pero no, ese, ¡Mira! Esas empresas manejan puro dólar y el camión que llega ahí ya pagó los dólares que debían descargarse; si no, no hay...*

niveles de escasa disposición a defender el territorio. Del mismo modo, se explica la ubicación del resto de los actores involucrados en el conflicto en los restantes espacios de la gráfica.

Es por lo anterior que se pueden ubicar a las dependencias del sector ambiental, tanto la federal como la estatal dentro de la misma ubicación en la que se encuentra la alcaldía de General Cepeda. Haciendo notar aquí que el nodo donde interactúan todas esas dependencias es el círculo que representa al Partido Revolucionario Institucional, que es el único de los partidos políticos que se ubica en esa especie de cluster (o sea, la coalición); explicándose la presencia de la Diputación Federal también en ese espacio, no tanto por el hecho de que su titular haya llegado a ese puesto a través de ese partido, sino por los lazos familiares en primer grado que lo vinculan con la entonces titular del la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) del Gobierno del Estado de Coahuila, que no solamente controlaba a esas dos últimas instancias sino también la presencia de ex gobernadores que en ese momento operaban los intereses del grupo político en la Cuenca de Burgo. Por supuesto, es desde el titular del Ejecutivo Estatal desde donde se controlaba y se sigue controlando al Comité Ejecutivo Estatal del PRI.

Respecto a las alcaldías, se destaca la ubicación de la de Ramos Arizpe, en pro de la defensa del territorio; la cual se explica no tanto en función de defender el territorio municipal aledaño al vértice con los otros dos municipios, que se encuentra a menos de 10 Km de Noria de la Sabina, sino porque el alcalde en turno, de extracción priísta, acababa de remunicipalizar los servicios de agua potable y drenaje para la cabecera municipal<sup>313</sup>. En el otro extremo se ubicaba la alcaldía de General Cepeda, que como se ha explicado en varios apartados de este documento, siempre operó a favor de los intereses de los actores externos coludidos para privatizar el agua y para construir el confinamiento de residuos tóxicos; su Cabildo, copado por actores afiliados al mismo PRI, queda ubicado en la gráfica como subordinado tanto al alcalde como a ese partido. Por lo que respecta a la alcaldía de Parras de La Fuente, en más de una ocasión su titular expresó su desacuerdo por la construcción del confinamiento; no se descarta, sin embargo, que esos desacuerdos los haya hecho forzado por el hecho de haber llegado a su puesto por la vía del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y con cierto conflicto de interés, en tanto que en aquellos años ese partido se unía en coalición electoral con el PRI; como quiera que haya sido (no se tienen aquí mayores elementos para analizar esta situación) a esa alcaldía se le ubica en una posición media respecto a su disposición para defender el territorio.

---

<sup>313</sup> Aguirre et al (2023) dan una explicación pormenorizada sobre las razones económicas y sociales que presionaron durante los años 2013 al alcalde Ramón Ocegüera a explicar las razones por las cuáles se habían privatizado remunicipalizar los servicios de agua potable y drenaje, en una sesión de Cabildo poco transparente, dentro de su gestión al frente del ayuntamiento. Al no escuchar Ocegüera a los ciudadanos movilizados en esa coyuntura, estos últimos presionaron a todos los candidatos que postulaban para las elecciones de 2013 a prometer remunicipalizar dichos servicios. Ricardo Aguirre ganó las elecciones y con todo a haber llegado al puesto postulado por el PRI cumplió su promesa el 11 de abril de 2014.

Los autores dan cuenta en este mismo documento de los fracasos de la remunicipalización, atribuyéndolos a que nunca logró consolidarse un sujeto social ciudadano que diera supervisión y seguimiento a la reconstituída instancia municipal que da actualmente dichos servicios.

Finalmente, puede observarse también en esta Gráfica 3 que los únicos actores que presenta en común con la Gráfica 2 son los actores agroempresariales parrenses y cepedenses. De los cuáles ya se ha presentado una explicación en párrafos anteriores, por lo que aquí solamente se señala que es debido a ellos que se explica la presencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) con la figura de una barra que abarca una gama de posicionamientos sobre el Eje X. Es decir, que dentro de esta organización empresarial se definían una diversidad de opiniones respecto al conflictos de Noria de la Sabina, en tanto que dentro de sus integrantes se encuentran tanto los dueños de SEMNSA como los agroempresarios locales que defendían el territorio, incluso empresarios neutrales, que nada tienen que ver con el conflicto.

Pese a la obviedad, no se quiere dejar de señalar que el escenario de esa arena de disputa ha cambiado de manera importante, en algunos aspectos incluso drástica, desde los tiempos en los que se construyeron las gráficas presentadas en este apartado. Sin embargo, no se ha querido dejar de incluir aquí, puesto que su aportación puede apreciarse si se le piensa como una especie de “línea base” de los balances del poder, que en mucho se definen por el *status quo* (el cual que no ha dejado de evolucionar), así como la disposición a defender el territorio que mostraron tener los actores involucrados en los momentos iniciales del conflicto.

### **8.7. Conflictos por el agua y praxis de *Laudato Si*.**

En el apartado 8.5 se ha insistido en señalar la importancia nodal que ha tenido la presencia de la Diócesis de Saltillo de la Iglesia Católica, pero en especial de Fray Raúl Vera López para establecer los equilibrios de poder entre los dos frentes de actores que se encuentran en disputa en la arena micro Noria de La Sabina.

Tomando como referencia la Gráfica 2, se puede afirmar con buen grado de certidumbre que el proceso de resistencia campesina en el marco de los conflictos socioambientales que actualmente ocurren en General Cepeda tuvo su punto partida en la confluencia los grupos campesinos con la Pastoral Rural; y es que es justo ahí, donde se intersectan gráficamente actores de diferentes sectores sociales, donde se gestaron las alianzas que evolucionaron hasta dar forma al *Colectivo Sí a la Vida* (“Comité de Vigilancia de General Cepeda” en la Gráfica 2) y *Los Custodios del Arroyo San Miguel*.

Más allá de pretender hacer una interpretación minuciosa sobre el rol específico que como persona ha tenido dicho actor religioso, el presente apartado se ha querido incluir para tratar en específico el rol que ha tenido la Encíclica Papal *Laudato Si*, documento filosófico-teológico que fue retomado por Vera López inmediatamente después de que vio la luz pública en 2015; trasladando de inmediato al ejercicio de la Pastoral Rural los principios planteados en ella por el Papa Francisco, para dar el cuerpo ideológico que necesitaban los campesinos cepedenses para consolidar su acción colectiva.

Desde la perspectiva de quien estas líneas escribe, la Encíclica Papal *Laudato Si* ha venido a plantear el ideario de la Utopía necesaria para configurar al Sujeto Social, tal cual lo plantea Zemelman (1997). Esto, porque trata precisamente un nuevo posicionamiento epistemológico respecto a cómo debe actuar la iglesia católica frente a la destrucción

ecológica, que ha causado gran polémica y ha sido considerada como un parteaguas que marcará la vida esta rama del cristianismo, ya que expone un pensamiento ecológico integral sobre las consecuencias políticas, económicas y sociales del modelo neoliberal capitalista que está dañando nuestro planeta a causa de la forma de explotar los recursos naturales

**Foto 7 Presencia de la Iglesia Católica en las movilizaciones contra el confinamiento de residuos tóxicos.**



*Fuente: Página Facebook del Colectivo Sí a la vida.*

Hay en el mensaje papal de esta Encíclica una ruptura inédita con la doctrina tradicional bíblica que establece “creced y multiplicaos, llenen la tierra y sométanla” para hacer un llamado a revertir el “progreso irracional” que induce al creyente a realizar un consumismo desenfrenado, que implica la degradación salvaje y violenta de la naturaleza de la que se desprende, dice, “una señal de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad”.

La Encíclica rompe el paradigma que coloca al hombre en el centro de lo que llaman “Creación”, para después ir contra la epistemología que fundamenta la Teoría Económica desarrollada por Adam Smith, en la que antropocentrismo no solamente se reconfigura en individualismo sino se consolida la creencia de que la naturaleza está puesta al servicio del ser humano, que puede ser cosificada, cuantificada en términos de valor monetario Baste con señalar algunos aspectos que se consideran relevantes de esta Encíclica, como lo es el cuestionamiento, desde su introducción, de la visión planteada en el Génesis, respecto a que el hombre es el amo de la tierra y de todos los seres vivos; planteando a partir de ésto

un concepto paradigmático nuevo, más cercano a la concepción de la “Madre Tierra” o la Pachamama que tienen muchos pueblos originarios a lo largo y ancho del mundo.

La propuesta de *Laudato Si* vino como anillo al dedo al caso de la instalación del confinamiento de residuos tóxicos, ya que en su texto se encuentran alusiones al daño que realiza a “la Tierra, nuestra casa” la industria y la minería, mediante sustancias tóxicas. Siendo la más directa la que se refiere en el punto 21, a partir de la cual se fortalece desde el punto de vista de la religión hegemónica la lucha de resistencia:

...21. Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos, que hoy se ven inundados de basura. Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agropueden producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores de las zonas cercanas, que ocurre cuando un nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. Muchas veces se toman medidas sólo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas...

Bergoglio Sívori (2015:19)

A la vista de lo anterior, desde su propia perspectiva política, Fray Raúl Vera vio una coyuntura muy favorable para retomar los principios inscritos en *Laudato Si*, para convertirlos en un argumento incuestionable para apoyar pastoralmente a la lucha que en esos momentos iniciaban los ciudadanos; difícil, por no decir que imposible de denostar incluso por los sectores de la derecha clerical católica.

El descubrimiento de que agroempresarios locales se dedicaban a acaparar concesiones de agua al mismo tiempo que participaban en movilizaciones en pro de la defensa del agua y el territorio vinieron a confirmar uno de los postulados de *Laudato Si*, que plantea que la motivación intrínseca del capitalismo, que es la acumulación. Esto es, que el sistema no puede negarse a sí mismo y más tarde que temprano afloran, aún en los capitalistas con supuesta conciencia socioambiental, valores individualistas que influyen en desplazar cualquier buena intención de proteger a la naturaleza; como puede apreciarse en las crónicas de este capítulo, el interés de apropiarse de ella los termina dominando y dejan de lado cualquier consideración que parta del principio de concebirla como un *bien común*.

Diríase en términos muy coloquiales que la Encíclica *Laudato Si* vino a ser “como que mandada a hacer” para aplicarse a esta “lucha de los pobres contra el capital” en su fase de acumulación por desposesión, o lo que es peor en su transición al necrocapitalismo,

que no es otra cosa lo que estaba sucediendo en Noria de La Sabina<sup>314</sup>, con el suicidio de su Presidente del Comisariado Ejidal.

El activismo político de Raúl Vera contra las imposiciones realizadas desde el gobierno marca una diferencia muy importante entre el consecuente activismo que es visible en el sector de la población cepedense que profesa la religión católica y la que practica otras ramas del cristianismo ligadas al protestantismo, como puede observarse en la siguiente conversación sostenida a principios de 2016 con el ejidatario de Boca de Guelatao Heriberto Vitela (HV)

*SEAC: ¿Cómo ve el problema de la instalación del CIMARI en Noria de la Sabina?*

*HV: ¡No! ¡No! Como quiera que digan estos hombres que no hay pedo... ¡Nos va a afectar! Fíjate, yo tengo una huerca de veintitres años y un hijo de dieciocho, pero mi hijo le dio por el lado de los Testigos de Jehová! Y dijo: ellos saben bien, dijo a los que estaban haciendo una encuesta sobre los CIMARI, dijo: nosotros como Testigos de Jehová y con la Biblia en la mano; en los últimos días, dijo, el hombre destruiría la tierra ¿Sí? ¡Y es lo que está haciendo el hombre! ¡Destruyendo la tierra! ¿Sí?*

*¡Nosotros no nos ponemos ni a favor ni en contra, sabemos que ésto va a suceder y va a suceder muy pronto. ¡Fíjate! Mi huerco tiene dieciocho años y fíjate, metido en la biblia y con la Biblia les dijo... [:] mira, nosotros nos guiamos por ésto y hasta al sacerdote le dijo de la religión católica le dijo: Mire, nosotros como Testigos de Jehová, nosotros no nos mezclamos en las políticas, somos neutrales, respetamos al gobierno que sea ¡Y ustedes! Como religión católica, ¡Ustedes en todo se meten! ¡Que vamos a hacerle política a este candidato y nosotros semos neutrales!*

*Los Testigos de Jehová no, son neutrales; no se meten ¡No le van a dar un voto porque no van a ir a votar! ¿Mmmmh? ¡No van a ir a votar! ¡Allá en mi rancho hay como unas ochenta gentes que son Testigos de Jehová, entre ellos mis tíos, hermanos de mi papá, ese chavito mío ¡Son ochenta!...*

El caso es que Vera López suele usar en sus homilías un lenguaje radical, en el que hablaba abiertamente de despojo y de violación a los derechos humanos. Pero no es de extrañar el uso de este tipo de discurso, considerando que este fraile dominico llegó a Saltillo procedente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, donde había ocupado el puesto de Obispo Coadjutor de Samuel Ruíz García (a quien se identificaba plenamente con la Teología de la Liberación), durante los difíciles años posteriores a la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su confrontación, contra el Estado mexicano.

Finalmente, no se omite señalar que para entender la intervención de la Diócesis de Saltillo hay que traer a relación varias consideraciones. La primera es aclarar que el origen de su posicionamiento a favor de defender el territorio de General Cepeda se encuentra no tanto en la institución *per se*, sino en algunos de los clérigos que la conforman; debe tomarse en cuenta que la Diócesis no es monolítica y que dentro de ella incluso se encuentran activos sacerdotes con posicionamientos políticos contrarios. En ese sentido, debe de ubicarse

---

<sup>314</sup> <https://democratanortedemexico.com/2015/11/07/laudato-si-a-discusion-en-museo-sacro-de-basilica-de-el-roble-hoy/>



que el foco de ese posicionamiento defensivo territorial se personaliza particularmente en Raúl Vera López y otros sacerdotes como Rodrigo Montelongo, Pedro Pantoja (+) y Fernando Liñán. Tampoco puede afirmarse que ese posicionamiento pueda considerarse permanente, ya que el apoyo se ha visto parcialmente debilitado tras la jubilación de Raúl Vera (junio de 2020), dado que la disposición para participar en estos movimientos por parte del nuevo Obispo Hilario González García se ve lejos de tener la misma intensidad que la que aún mantiene Vera López, en su calidad de Obispo Emérito. En la medida que las decisiones últimas recaen en Obispo titular, dicho menor interés de éste se refleja en una menor atención de los conflictos por el agua de General Cepeda, por parte de la Diócesis. Aunque Vera López ha mantenido su presencia, si no es que la ha incrementado, también se han presentado eventos que han afectado la labor pastoral en General Cepeda y Parras: entre los más destacables en ese sentido están los fallecimientos de Pedro Pantoja<sup>315</sup> y de Juan Francisco Rodríguez Aldape<sup>316</sup>, durante la pandemia del COVID.

Con todo, no faltaron contradicciones entre los clérigos a cargo de esas labores; una de ellas, que tuvo que ver ya con el conflicto de Noria de La Sabina fue la incorporación del Pbro. Pedro Pantoja (+) para llevar la representación del Obispo en el movimiento contra el CIMARI, ante algunos titubeos que en un determinado momento tuvo el Pbro. Paulo Sánchez, derivados de que tenía cierto nivel de amistad, cultivada años antes de su llegada a General Cepeda, con Daniel Calvert, copropietario de la empresa SEMNSA<sup>317</sup>.

A la luz de la apreciación anterior, puede decirse que, como ha sucedido en otros lugares del mundo, en General Cepeda el encuentro de la Teología de la Liberación con ideólogos laicos con una posición de izquierda muy firme y comprometida, como José Luis García Valero, encontró puntos de vista comunes y posibilidades de otorgarse mutuas sinergias; lo

---

<sup>315</sup> La labor principal del Padre Pantoja dentro de la Diócesis de Saltillo se centró en acciones en pro de la defensa de los indocumentados centroamericanos que pasan por la región. Destacándose por ser un elemento aguerrido y comprometido, que lo hizo ganarse la confianza de Raúl Vera. gracias a su dinamismo, llegó a tener reconocimiento en varios ámbitos a nivel nacional. Mantuvo siempre una relación estrecha con el Padre Solalinde, de la Parroquia de Ixtepec, Oaxaca. Falleció durante la epidemia de COVID.

<sup>316</sup> Aldape, como era conocido popularmente tenía una fortísima participación en el Centro de Educación y Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente A.C. (CEP-Parras), una asociación civil domiciliada en Parras de La Fuente que también se encuentra estrechamente ligada a la Diócesis de Saltillo; siendo en ese espacio de apoyo a las causas campesinas donde conoció y estrechó fuertes lazos de amistad con Juan Gamboa Maldonado. Con su fallecimiento se vio afectada la agencia de la Diócesis y más específicamente de Raúl Vera tanto en General Cepeda como en Parras; no solamente ahí, puesto que Aldape también servía de vínculo con otras congregaciones de base ubicadas en la Sierra Tarahumara, hasta donde se extendían sus actividades de capacitación. Su labor fue interrumpida de manera abrupta por la COVID, que causó su muerte.

<sup>317</sup> El investigador considera desafortunada esta circunstancia en muchos aspectos; en tanto que el Padre Paulo Sánchez era muy apreciado por parte de su feligresía; como se pudo constatar por muchos comentarios positivos recogidos entre los cepedenses. Su remoción generó varios efectos indeseados en varios ámbitos; entre ellos el alejamiento voluntario de la labor pastoral de Martín Torres Rada (+) uno de sus Diáconos, en solidaridad con él y en señal de protesta. En el contexto de esta investigación, la salida de ambos de la arena de conflicto cortó un canal de comunicación con la comunidades de base de la Diócesis en la misma, ya que tanto uno como otro habían accedido a apoyar esta investigación (disposición que no tuvo el sacerdote que llegó a sustituirlo).



cual redundó en la formación de una alianza que catalizó la protesta popular contra los abusos del capitalismo; en este caso en una de sus formas más depredadoras que es el que se ejerce contra la naturaleza. Peor aún cuando el capitalismo adquiere sus peores facetas, que son la de la acumulación por desposesión y finalmente el *necrocapitalismo*. En ese contexto se entiende la importancia que tiene la Encíclica *Laudato Si* “Sobre el Cuidado de la Casa Común”, ya que al ser retomada por la Diócesis para aplicarla de manera directa a un caso concreto trasciende sus propios límites como abstracción teórica, por lo que se vuelve perenterio analizarla desde la óptica de Filosofía de la Praxis.

## Conclusión

Desde la perspectiva del autor, el aporte más relevante que resulta de analizar los conflictos por el agua a escala *micro* es que fortalecen la convicción de que éstos no son eventos que acontezcan de manera aislada sino, por el contrario, mantienen orígenes comunes y vínculos con los conflictos por el agua que acontecen en otros lugares del territorio estudiado. Certidumbre que se incrementa cuando se integra la perspectiva *micro* con las perspectivas *meso* y *macro*, pues de esa manera se alcanza a tener una visión aún más amplia, ya que permite comprender las interrelaciones entre los conflictos de escalas diferentes. Así aconteció con el autor de estas líneas, al visualizar el conflicto por la Presa Jalpa a diferente escala; con esa experiencia, el autor se atreve a sugerir que el acercamiento multiescalar debiera siempre acompañarse con la apertura y disposición para aplicar la Teoría Fundamentada, en caso de que la visión multiescalar nos genere nuevas preguntas o nuevas respuestas que no habíamos alcanzado a ver, para abordar con más herramientas el problema de investigación.

Hay que precisar, no obstante, que los casos estudiados en este capítulo muestran que, cuando se habla de interrelaciones y vínculos, se hace no solamente referencia a aspectos ambientales, puesto que también han quedado patentes una gama de interrelaciones de tipo social, económico, político y hasta jurídico. Esto porque los problemas ambientales son consecuencia de presiones que se ejercen desde el poder, por actores con una ambición de enriquecimiento que no tiene escrúpulos para afectar a la naturaleza y a las sociedades.

Dicho lo anterior de manera general, se pueden señalar con carácter más específicos que, entro de las muchas evidencias de carácter empírico que deja el estudio de estos conflictos pueden señalarse los que a continuación se detallan.

El caso del conflicto por las aguas almacenadas en la Presa Jalpa.

- i) demuestra cómo la *expansión extractivista* del agua subterránea, percibidas al aproximarse a los conflictos por el agua empleando las escalas *macro* y *meso*, es un factor que agrava sobremanera los conflictos por el agua que se dan entre actores locales.
- ii) reconoce que los implicados en un conflicto no siempre se encuentran exentos de contradicciones socioculturales que les imponen los valores comunitarios propios de una sociedad campesina tradicional, frente a los valores individualistas del

capitalismo que trastocan en múltiples dimensiones a una sociedad rural en vías de descampesinización.

- iii) evidencia cómo los equilibrios de poder a nivel local no pueden abstraerse de ser influenciados por la dinámica demográfica, económica, cultural y socioambiental que, a nivel regional en este caso, impone el crecimiento del sector industrial; puesto que ilustra cómo, a pesar de contar con la documentación que avala el derecho jurídico a recibir mayores volúmenes de agua, la emigración de familias enteras a la ciudad repercute en la debilidad política del ejido San Juan del Cohetero, como ente colectivo. Y que al no tener capacidad real de enfrentarse al colectivo más numeroso de ejidatarios de Jalpa, logran prevalecer los acuerdos tradicionales en este conflicto por el agua.

Vista ya no como un elemento de la naturaleza sino como una mercancía, el agua se ajusta perfectamente a la definición de *commodity* o insumo para una multitud de negocios. El de los desarrollos inmobiliarios es uno de los pilares más sólidos en los que sostiene su poder la oligarquía saltillense; por tanto, al posesionarse del agua logran asegurar un insumo estratégico para el megaproyecto “Ciudad Derramadero”, que incluye desde la construcción de estructuras de servicios básicos hasta parques industriales, pasando por la de fraccionamientos para empleados de mediano y alto poder adquisitivo, así como de colonias de interés social para obreros.

En ese mismo contexto, la construcción del confinamiento de desechos tóxicos cierra el círculo de servicios complementarios a las empresas que lleguen a instalarse a los parques industriales. En el mismo tenor, las evidencias empíricas obtenidas durante el trabajo de campo en Noria de La Sabina dan a ver que:

- i) cuando en los contextos locales que se vinculan con la globalización neoliberal se requiere implementar proyectos que, aunque estratégicos desde el punto de vista económico, implican graves riesgos para los ecosistemas o la población, los operadores de los intereses del capital no dudan en utilizar cualquier tipo de instrumento, legal o extralegal, a fin de imponerlos.
- ii) para cumplir sus objetivos, en esos mismos contextos, dichos operadores aprovechan sistemáticamente las fisuras que existen en el marco de la ley para intimidar, agredir y/o corromper las expresiones de resistencia popular.
- iii) las evidencias recogidas en campo permiten postular que el capitalismo asentado en la región de estudio transita en la actualidad de la fase de acumulación por despojo a la necrocapitalista. Tal aseveración se basa principalmente en dos hechos observados: que la toxicidad que entraña el proyecto del confinamiento amenaza todas las formas de vida locales y que el suicidio de una persona está vinculado con las presiones derivadas de las acciones corruptoras del capital.

Integrando las conclusiones particulares deducidas para cada uno de los estudios de caso, más las que se observan en las escalas *meso* y *macro*, y también en la continuidad de los procesos históricos, se encuentran múltiples evidencias que pueden emplearse para argumentar que las agresiones que desde fines del siglo XX está haciendo el capital a los actores locales no son eventos separados; por el contrario, se trata de acciones

orquestradas para excluirlos de seguir teniendo acceso a los bienes naturales de su propio territorio.

Existen demasiados paralelismos y sincronidades entre los procesos de privatización de acuíferos subterráneos y de construcción del confinamiento de residuos tóxicos industriales como para no darse cuenta: por un lado, que la desecación del Arroyo San Miguel es una extensión del mismo proceso ocurrido en el Arroyo Patos; por otro lado, que la imposición del confinamiento de residuos tóxicos en Noria de la Sabina es la culminación exitosa del primer intento que hicieron de hacerlo en San José de La Paila. Especialmente elocuente de que se trata de una acción orquestada para excluir a los actores locales del acceso a los bienes naturales de su propio territorio resulta el hecho de que, en todos los casos, los cepedenses han tenido que enfrentar al mismo personaje que ha sido denunciado en varias ocasiones por realizar actividades criminales y que, sin embargo, goza de impunidad y es portador de un amplio poder político, merced al cobijo que a sus acciones proporciona su partido y empresarios saltillenses que participan en el tráfico de concesiones para perforación de pozos de extracción de agua subterránea.

En ese contexto, es de destacarse la enorme capacidad de resistencia y resiliencia que han mostrado tener los cepedenses a lo largo de poco más de tres décadas, ante los embates de actores externos al territorio, que al igual que los que llegaron a estas tierras hace 475 años, lo hacen con la espada desenvainada y con el plan de apropiarse de sus elementos naturales. De ahí es que se han dedicado dos de los apartados de este capítulo a tratar el tema de las organizaciones denominadas “Custodios del Agua del Arroyo San Miguel” y “Colectivo Sí a la Vida”; que son agrupaciones de actores locales que han logrado trascender más allá de los límites municipales; que en el caso de la segunda, por momentos ha llevado su lucha hasta arenas estatales y nacionales.

Vistos los estudios de caso de esta investigación como facetas diferentes de un mismo proceso histórico se ofrecen las siguientes conclusiones que abarcan a ambos:

- i) La contra reforma agraria (reconfiguración del marco jurídico) consolidó el modelo industrial automotriz globalizado (reconfiguración del marco económico) en el Sureste de Coahuila y fortaleció la agencia de los mercaderes de los bienes comunes de los actores locales (reconfiguración del marco político). El efecto combinado de esas tres formas de reconfiguración a las estructuras del Estado abrió la puerta al acaparamiento de la tierra y del agua, por la vía de la privatización de los bienes que antes eran ejidales.
- ii) A partir de esta reconfiguración del Estado, el *modus operandi* de la oligarquía, constituida por empresarios y por funcionarios gubernamentales, se basó en el uso faccioso de los instrumentos del Estado, para:
  - i. sesgar (por omisión, alteración y opacidad de) los procedimientos de gestión de la administración pública en cada uno de los tres órdenes de gobierno, en favor de los intereses del capital;
  - ii. corromper a actores ejidales clave, para hacerlos copartícipes en las irregularidades de procedimientos legales, con el propósito de consumir el despojo y la imposición de proyectos de muerte.

- iii. reprimir las movilizaciones sociales mediante el uso de la fuerza pública y la judicialización; en general contra los actores movilizados y en particular contra los líderes de la resistencia a sus acciones imposición y la injusticia.
- iii) Tal forma de operación, en tanto que tiene como último objetivo el acaparamiento de tierra y agua puede catalogarse como un proceso de acumulación por desposesión. En este capítulo quedan registradas evidencias que de esa fase despojo se está derivando una nueva fase, que es la del necrocapitalismo
- iv) La evidencia colectada en campo permite afirmar que las capacidades de los actores locales para organizarse se derivan principalmente de la experiencia política lograda tras tres décadas de agresiones por los actores externos; también dan constancia de que el éxito a mediano y largo plazo de su resistencia no podría explicarse sin considerar el peso determinante que han tenido sus alianzas estratégicas con actores con agencia económica y política sobresaliente.
- v) La heterogeneidad en los perfiles socioeconómicos de los actores locales ha sido un factor importante para resistir con éxito las incursiones de actores externos que buscan posesionarse de las concesiones para extraer agua del subsuelo y construir confinamiento de residuos tóxicos; pues las movilizaciones sociales legitimadas por esa diversidad de participantes, al tiempo de dar al movimiento el respaldo económico y político de actores con agencia.
- vi) Dentro de los actores locales involucrados en las movilizaciones se destacan por su agencia sobresaliente los que pertenecen a dos sectores: al agroempresarial y al religioso. Los primeros jugaron un papel estratégico para el sostenimiento de la primera movilización a fines del siglo XX y en las primeras fases de la movilización de la segunda década del siglo XXI; los segundos porque aportaron a los movilizados un nodo de cohesión ideológica y un código filosófico (la Encíclica Papal “*Laudato Si*” Nuestra Casa Común) a partir del cual catalizar la creación de las organizaciones locales denominadas “Custodios del Arroyo San Miguel” y “Colectivo Sí a la Vida”.
- vii) El hecho de que los agroempresarios locales se dedicaron a acaparar concesiones durante los años de receso entre las dos incursiones de los actores externos resquebrajó la unidad de los cepedenses y representa una evidencia de que la lógica del capital, independientemente del tamaño o la apariencia del capitalista, es la acumulación; incluso a costa de antiguas amistades o alianzas.

De los anteriores incisos, los dos primeros tratan el tema del contexto económico de los casos de estudio, el cual ha sido discutido ampliamente en el apartado de conclusiones del Capítulo 7, por lo que los últimos párrafos de este apartado se han dedicado a dar punto de vista conclusivo respecto al tema común de los cuatro últimos incisos, que es el de la movilización social por la defensa del agua de General Cepeda.

De una suerte afortunada, para ofrecer ese punto de vista, quien esto escribe no se vió en la necesidad de entrar a realizar reflexiones propias, pues ha razonado que resulta mucho mejor traer a mención las conclusiones a las que llegó hace más de siglo y medio un autor infinitamente más capacitado que él, frente a un caso paradigmático que a sus ojos presenta similitudes sorprendentes con las movilizaciones observadas durante la presente investigación. Se trata de un ilustre economista y filósofo alemán que reflexionó sobre dos movilizaciones sociales ocurridas en la Francia: la primera en 1789 y la segunda en 1851;

la primera que culminó en el derrocamiento del rey Luis XVII y la segunda en la imposición de la dictadura de Luis Bonaparte.

Y si bien por otro lado considera pertinente asentar aquí que tiene más que presente que cada proceso histórico responde a factores muy específicos de contexto y que no puede trasladar de manera mecánica las ideas que Marx expone en el 18 Brumario de Luis Bonaparte (Marx, 2003), si considera que es innegable que algunas pueden ser aplicables aquí, desde luego que con sus matices. Y es que los tantos los eventos observados en General Cepeda como los analizados en Francia por Marx tienen en común movilizaciones en los que se forma una alianza entre la burguesía y las clases populares; que triunfan en la primera ocasión y pierden o aparentemente pierden en la segunda, tras la traición de la burguesía a las clases populares. Y se dice aparente, porque como se verá en los siguientes párrafos, los que pierden son las clases populares<sup>318</sup>, la burguesía no.

En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx basa su análisis enfocándolo desde el materialismo histórico, con la intención de entender los movimientos sociales, lucha de clases y el papel de las ideologías en los acontecimientos históricos que está comparando. La peculiaridad de esta obra es que en ella Marx combina análisis concreto con teoría general, para con ello obtener su interpretación dialéctica de la historia: examina las alianzas entre clases, las traiciones, las ambigüedades desde los partidos políticos y el uso de la ideología como herramienta de dominación; identifica patrones de los procesos revolucionarios y contra revolucionarios

Marx establece que, para poder comprender los resultados diferentes que tuvieron los actores que se levantaron contra el *status quo* en 1789 y 1851 hay que reconocer una diferencia fundamental en los contextos. En 1789 la burguesía era una clase revolucionaria con un proyecto histórico coherente, que era eliminar el feudalismo y establecer un orden basado en la propiedad privada, el mercado libre y la soberanía nacional; en cambio, para 1851 esa misma burguesía había devenido en conservadora, temerosa de la movilización obrera y dispuesta a sacrificar La República para proteger su posición social. Dicho de otra forma, en el primer caso se trataba de generar una transformación profunda del orden político y social; mientras que el proceso que se estaba dando en el segundo era una repetición deformada sin contenido revolucionario genuino, del que Bonaparte supo sacar provecho para apropiarse del lenguaje y los símbolos del pasado, para encubrir sus intereses conservadores y personales.

Explica Marx que aunque entre los actores levantados existía una alianza entre la burguesía y el proletariado, las condiciones materiales y de clase que caracterizan al ascenso de Luis Bonaparte no correspondían en realidad a una fuerza revolucionaria, puesto que en ese momento histórica la pequeña burguesía actuaba en función de que se sentía agraviada por la gran burguesía financiera de la época, que no le permitía ocupar

---

<sup>318</sup> Aquí se ha preferido hablar de clases populares y no de proletariado, como lo denomina Marx, porque estrictamente hablando no lo son, puesto que son dueños de medios de producción y muy específicamente la tierra y el agua, que son dos focos centrales de esta investigación. Pero los campesinos son, finalmente, pueblo; de tal modo que para los fines prácticos de esta exposición comparativa y pensando en la heterogeneidad que conforma la sociedad cepedense, el autor opta por llamarlos clases populares, sin entrar en más discusiones conceptuales.

todos los espacios de poder a los que aspiraba; por su parte, el campesinado estaba compuesto por grupos desorganizados que no tenían mecanismos de representación ni de articulación política, lo cual la había llevado a su “atomización” según la propia definición de Marx.

Por las anteriores circunstancias materiales de ambas clases, señala Marx, rompieron su alianza en busca de satisfacer sus particulares intereses de clase, alineándose de diferente manera con el discurso mesiánico de Luis Bonaparte. Y como el bonapartismo en realidad sólo fingía representar al pueblo en esta etapa de crisis institucional para afianzar al poder a la clase dominante se terminó de consolidar una debilidad general del cuerpo institucional, que conllevó a un vacío político, que pudo ser ocupado por el autoritarismo.

Resulta particularmente interesante la referencia que Marx hace de Hegel, respecto a que en alguna de sus reflexiones plantea que todos los personajes de la historia aparecen dos veces; pero Marx critica a Hegel diciendo que a este último “se le olvidó agregar que una vez lo es como tragedia y la otra como farsa...”, subrayando además que la repetición de sucesos históricos solamente es aparente, puesto que bajo condiciones diferentes transforman su sentido. Afirma que Bonaparte teatraliza al poder y que con su actuar representa a la farsa como mecanismo de ocultamiento de las verdaderas dinámicas sociales; remacha señalando que en los hechos, los resultados de cómo discurrieron los acontecimientos de 1851 revelan cómo los actores políticos recurren a disfraces tomados del pasado para presentar sus acciones como inevitables o naturales

Marx concluye que fue un error creer que podía haber alianza entre la burguesía y el proletariado; si acaso, ésta fue pasajera durante los primeros momentos de La Revolución, cuando parecía que ambos grupos compartían la lucha; pero que una vez establecida La República resurgieron las aspiraciones a retornar a las viejas condiciones que daban privilegios a la vida burguesa. Eso en lo social, pues en lo económico y político las aspiraciones de esa clase se centraron restaurar el mercado, como vía para controlar la economía y las instituciones.

Desde el punto de vista de Marx, aunque la burguesía liberal defendía las ideas democráticas, prefirió una salida que coartara las libertades políticas, antes que permitir que el proletariado tuviera un papel político protagónico; por eso dio la espalda a sus aliados y prefirió aceptar el autoritarismo bonapartista como un mal menor para ella. Por lo que se refiere al proletariado, éste no puede liderar la revolución si no ha desarrollado su conciencia de clase y su capacidad organizativa. Debido a lo anterior, “...la revolución no fracasa por falta de capacidad o sustento ideológico de los auténticos revolucionarios, sino por las estructuras materiales establecidas en la sociedad...”

Finalmente, Marx critica al fetichismo político con el que algunos autores analizan los procesos sociales; es decir, a la creencia de que las instituciones del Estado son entes autónomos, por encima de las clases sociales.

## CONCLUSIONES GENERALES

*...Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso...*

Walter Benjamin (Tesis IX sobre la historia)

Integrada en la mayor parte de su superficie al bioma Desierto Chihuahuense, la escasez de agua que prevalece en casi todo Coahuila constituye una condicionante para la vida en todas sus formas. Fue de tal suerte que durante la invasión ibérica solamente pudieron consolidarse como ciudades algunos pocos centros urbanos que se ubican en subregiones con disponibilidad de este elemento natural; es decir, especialmente en lo que hoy es el Sureste de Coahuila, por su abundancia de manantiales y en Monclova, donde todavía existía un río permanente que hoy se ha secado.

Y aunque el río Bravo también ofrecía esa disponibilidad, hay que considerar por otra parte que el catalizador del avance hispano era la existencia de oro y plata, cuya carencia en lo que hoy es el norte de Coahuila y su vecino estadounidense Texas jugó un papel determinante para diferenciar la estructura demográfica de estas subregiones con lo que hoy son las regiones mineras del centro y el norte de México. Es por ello que puede afirmarse que, a lo largo de la historia, en la región de estudio y su contexto el Desierto Chihuahuense, el agua ha sido el factor ambiental que ha determinado los perfiles demográficos, económicos, sociales y políticos de las poblaciones que lograron asentarse en sus inmensos territorios.

El hecho es que, desde el Virreinato, los principales centros urbanos de Coahuila se consolidaron en los piedemontes de la Sierra Madre Oriental, donde afloraban numerosos manantiales que permitieron el florecimiento de las actividades agropecuarias como alternativa a la minería. En otras palabras, se definieron formas alternativas de desarrollo económico a los de las regiones mineras y con ellas sus particulares sistemas de

producción e instituciones económicas; dentro de los cuáles caben destacar, por su relación con los temas centrales de este estudio los conocimientos tecnológicos y las formas de gobernanza relacionadas con el manejo de las aguas broncas que bajan por las pendientes de serranías y lomeríos, para su aprovechamiento en la agricultura de secano en regiones semidesérticas; las que significaron una revolución económica, puesto que la falta de esos conocimientos en la época prehispánica fue una de las razones por las cuáles los pueblos originarios deieron de restringirse a llevar un estilo de vida nómada.

Tales conocimientos sobre el manejo de las escorrentías requirieron cientos de años para poder estructurarse en toda su complejidad, dado que son fruto de una construcción colectiva, en la que han participado muchas generaciones humanas: no solamente de obras de ingeniería hidráulica sino también de instituciones sociales. Cabiendo señalar que los españoles no fueron sus creadores sino que son herederos de conocimientos forjados en civilizaciones previas que habitaron la Península Ibérica, como la romana y la mozárabe.

Con los argumentos previos, aquí se sostiene que las instituciones tradicionales para el manejo mancomunado de las escorrentías que hoy todavía persisten en algunos lugares del Desierto Coahuilense se originaron desde hace cientos o miles de años en regiones con déficit de humedad del Viejo Continente. Dichas instituciones pueden ser concebidas como constructos sociales, cuya eficiencia y funcionalidad se sostenían sobre la base de que estaban integradas a valores comunitarios tradicionales y la concepción del agua como bien común, pero también en constructos físicos que permiten contener, desviar y distribuir dichas aguas broncas; lo anterior dicho de otro modo refiere a conocimiento social acoplado con conocimiento técnico hidráulico.

Las implicaciones que tiene la antigüedad de estos sistemas institucionales, tecnológicos y administrativos son muchas, pero aquí se considera importante destacar la observación de que fueron diseñados para operarse con reglas de gobernanza del modo de producción precapitalista. Así lo sustenta el hecho de que esos sistemas basan su aplicación en acuerdos de manejo mancomunado, que durante el medioevo ibérico fueron formalizados en las leyes establecidas por Alfonso X; es decir, en la base del Derecho Castellano, que tiene sus raíces en el Derecho Romano.

Esas instituciones para el manejo de las aguas, que durante siglos fueron practicadas en tierras mediterráneas, fueron replicadas por los invasores españoles en las haciendas y latifundios del semidesértico Altiplano Mexicano, tras el despojo territorial que hicieron a los pueblos originarios. Lo sorprendente en este caso es el hecho de que, en los tres siglos que abarcaron los latifundios del Marquesado de Aguayo y de la familia Sánchez Navarro, no obstante que los dueños de la tierra cuidaban celosamente a ésta con cuerpos de seguridad que llegaban a ser superiores en avituallamiento a los cuerpos de seguridad del Estado Virreinal, no objetaban compartir las escorrentías que pasaban por sus propiedades con los dueños de propiedades vecinas más pequeñas, aparentemente sin incurrir en conflictos mayores, como se puede inferir de que no se han encontrado reportes de su existencia en los registros históricos de los tribunales.

En contraste con lo que sucedía en los latifundios virreinal y decimonónico, fue entre algunas de las haciendas que resultaron del fraccionamiento del latifundio donde empiezan



a ser llevados a tribunales algunos conflictos por las escorrentías; a los cuáles, sin embargo, se les pudo dar salida a través de acuerdos entre las partes. Con ello, se ratificó la utilidad de la gobernaza del agua basada en el manejo mancomunado. Vista tal perdurabilidad, se puede afirmar que la información recuperada en el presente estudio ratifica la enorme resiliencia que, a través de los siglos, ha tenido la institucionalidad para el manejo de escorrentías. En ese mismo tenero, resulta aún más significativo el hecho de que tal tipo de manejo logró perdurar en la región de estudio tras el reparto agrario; esto es, también fue resiliente al fraccionamiento que se hizo de las haciendas para dotar de tierra a campesinos durante la tercera década del siglo XX.

Esto es, los acuerdos tradicionales para el manejo del agua lograron mantenerse útiles para los objetivos para los que fueron instituidos, pues a pesar de experimentar algún dislocamiento durante la instrumentación de la Reforma Agraria, se reconfiguraron de manera exitosa para adecuarse al mayor número de usuarios y superficies más pequeñas de las parcelas ejidales.

Sin embargo, los resultados de esta misma investigación no permiten afirmar lo mismo de las infraestructuras físicas que fueron parte del sistema hidrotécnico del latifundio y de las haciendas, ya que debido a las sucesivas fragmentaciones territoriales dejaron de ser funcionales en algún momento. Indican, sin dejar margen a dudas, que las infraestructuras hidrotécnicas que sostuvieron la gran productividad de estas inmensas propiedades se deterioraron hasta alcanzar un grado irreversible tras la fragmentación de la que fueron objeto a consecuencia de la instrumentación de la Reforma Agraria. Los resultados del trabajo de campo dan evidencia de que presas y canales se fueron deteriorando paulatinamente durante el siglo XX y en ocasiones hasta fueron demolidas por los mismos ejidatarios; así, en un momento dado, el sistema hidrotécnico del cual formaban parte dejó de ser funcional en absoluto.

En ese contexto y sin menoscabar en ningún sentido los beneficios y la justicia social que el reparto agrario representó, desde una perspectiva técnico-geográfica se puede concluir que la fragmentación del territorio hacendario provocó la pérdida de la perspectiva unitaria hidrográfica que poseía el hacendado; ésto porque la funcionalidad del sistema de presas y canales con los que contaba la hacienda para el manejo de las escorrentías que bajan por las pendientes de sus serranías y lomeríos otorgaban al hacendado poder o agencia para dirigirlos a su conveniencia hacia un determinado lugar o desviarlos hacia otro, sea para almacenarlos o para regar, sin importar que ese lugar se ubicara en otra subcuenca o cuenca.

Pero ese poder de decisión se esfumó al fragmentarse el territorio hacendario y dividirse los derechos de uso de sus cuenca y subcuencas entre centenas de ejidatarios. Esto tanto porque sus parcelas rara vez se traslapaban a más de una cuenca como porque se perdió la perspectiva de integralidad hidrográfica, puesto que los ejidatarios no le vieron beneficio ni utilidad a las presas y canales que por suerte les había tocado estar localizadas en sus parcelas y dispersaban las escorrentías a otros terrenos y muy probablemente tomaron conciencia que los canales que se encontraban en otras parcelas pudieran servirles para hacer llegar las escorrentías a sus propias parcelas. De esa suerte los ejidatarios perdieron la dimensión de la importancia que para su economía hubiera tenido conservar de alguna

manera el sistema de presas y canales para optimizar su uso del agua con fines productivos; en todo caso, se limitaron a aprovechar las infraestructuras construídas sobre sus parcelas. Así, sin esa visión integral a escala meso que tenía el hacendado, en el mejor de los casos abandonaron esas infraestructuras y en el peor las demolieron para ocupar sus materiales.

Para poder acceder a una respuesta a tal interrogante respecto a cuál o cuáles son las razones por las cuáles fueron tan contrastantes los impactos de las fragmentaciones territoriales en las instituciones para el manejo del agua y en las infraestructuras hidrotécnicas, en el sentido de su *resiliencia* y su *liabilidad*, se hicieron algunas reflexiones, de las cuales se desprenden las siguientes premisas y conceptos: i) tanto infraestructuras de ingeniería como acuerdos sociales tienen en común el hecho de ser *constructos humanos*; ii) ambos constructos están de alguna manera *montados sobre una base fisiográfica* sólida, que es la cuenca; iii) una diferencia como constructos se encuentra en su estado de *tangibilidad*, ya que los primeros están hechos de materiales concretos y los segundos de conceptos; iv) a partir de lo anterior, se pueden definir las primeras como *constructos físicos* y los segundos como *constructos sociales*; v) por su parte, a pesar de su solidez, las cuencas poseen una propiedad que no poseen otros componentes del paisaje ecológico, como pueden ser el suelo y la vegetación, que es el de la *fractalidad*.

Los conceptos anteriores, que han sido destacados en letras cursivas, se han integrado al marco teórico en el que se encuadra a esta investigación. Se destaca entre ellos el de la fractalidad, pues al ser una propiedad de las redes de drenaje hidráulico y también de los acuerdos para el manejo mancomunado de escorrentías, pero no de las infraestructuras hidrotécnicas ni de otros componentes del paisaje como la topografía y los suelos, la vegetación y los microclimas, a partir de ella se explica que estos últimos no tengan la capacidad de adaptarse a la fractalidad hidrográfica, como sí la tienen los acuerdos y los conocimientos técnicos. A partir de este ejercicio de sistematización se logra ofrecer una respuesta que se considera plausible desde el punto de vista físico a la interrogante de cuáles fueron las razones por las que, durante el siglo XX, colapsaron las infraestructuras hidrotécnicas pero no lo hicieron los acuerdos para el manejo mancomunado del agua.

Más allá del enfoque sociohidrográfico anterior no debiera perderse de vista que la explicación acabada está sujeta a múltiples factores dentro de un escenario complejo, dentro del cual las políticas gubernamentales han tenido un peso determinante para inducir el colapso de las infraestructuras hidrotécnicas de la época hacendaria. Esto es, que se debe reconocer la gran influencia que tuvo el Estado para forzar un “estilo del desarrollo” basado en la producción de fibras vegetales duras de la región mediante multimillonarios subsidios para mantener una estructura corporativizante como lo fue La Forestal F.C.L., a la par de aplicar vedas a la extracción de aguas en varios acuíferos subterráneos del Sureste de Coahuila que impidieron el desarrollo de las actividades agropecuarias. Situación muy contrastante con los permisos a diestra y siniestra que se otorgaron a propietarios privados de la vecina Comarca Lagunera para extraer grandes volúmenes de agua del subsuelo, sumados a las facilidades para la obtención de créditos y subsidios para reorientar la producción agrícola a los cultivos forrajeros y otros componentes de la cadena de producción de ganadería bovina lechera.

Resultado de reflexionar respecto al impacto que tuvo el fomento al ixtle del Estado en el Sureste y a la agroindustria lechera en el Suroeste se plantea aquí que Lázaro Cárdenas estuvo presionado por empresas y gobiernos estadounidenses y europeos, que desde el porfiriato monopolizaron su comercialización internacional, para orientar regionalmente diferenciada la actividad económica de la Franja Sur de Coahuila. Para facilitar la aceptación de los agobiantes procesos de trabajo del ixtle se construyeron mitos en torno a este producto como “Sistema de Producción Ixtlero” “Región Ixtlera” o “Identidad del campesino ixtlero”, los cuales incopóran al imaginario social conceptos que propiciaron una ideosincracia muy favorable para sostener una economía ficticia, que con la forma de subsidios trasladaba las ganancias del mercado internacional a mecanismos de control político y económico.

La conclusión anterior no invalida la posibilidad de que Cárdenas tuviera un sincero convencimiento de que, al decidir inducir desde el Estado corporativizar económica y políticamente a los capesinos ejidatarios en La Forestal F.C.L., los sacaría de la extrema pobreza en la que se encontraban inmersos al momento de recibir las tierras. No obstante, los resultados obtenidos tras medio siglo de haber aplicado políticas gubernamentales para sujetar a los descendientes de los peones acasillados de las haciendas a la extracción de ixtle como actividad eje de su economía apuntan a que, más bien, sucedió lo contrario; esto es, que el llamado “sistema de producción ixtlero” sacó de la pobreza solamente a algunos líderes de perfil caciquil y de ninguna manera a los campesinos obligados a tallar ixtle.

La contrastante diferencia entra la orientación de las políticas públicas para el empleo de las aguas subterráneas de la Región Sureste de Coahuila y la Comarca Lagunera pone en duda si tal esquema de ejercicio de poder estuvo fundamentado en un maquiavélico plan destinado a subordinar a ambas regiones a las necesidades de los Estados Unidos de América, con resultados que para desgracia de los campesinos del Sureste los condenó a seguir viviendo en la miseria por dos o tres generaciones más, tras haberseles dotado de tierras para supuestamente hacerles valer las aspiraciones agraristas sintetizadas en el lema “Tierra y Libertad”.

El caso es que, cuando hacia los años setenta del Siglo XX empezaron a darse las primeras señales del decaimiento de la demanda de fibra de lechuguilla en los mercados internacionales, se empezaron a consolidar las condiciones objetivas para incentivar a los “campesinos ixtleros” para vender su fuerza de trabajo no calificada a la industria que por esos mismos años empezaba a consolidarse en la Zona Metropolitana de Saltillo. En los años ochenta entró en crisis La Forestal FCL; lo cual se debió a varios factores, pero dentro de los que se destacan por su peso el desplome del precio internacional del ixtle y la crisis de corrupción interna que rampaba entre la mayoría de sus directivos. La desarticulación de la red de acopio y comercialización que sostenía a esta corporación monopólica fue determinante para facilitar al capital la apertura del mercado de tierras en el Sureste de Coahuila, consolidando al mismo tiempo el mercado laboral que ya para finales de esa década mostraba una clara inserción en el sector industrial automotriz.

Merced a estos procesos económicos, para los inicios del siglo XXI se habían constituido notables ventajas en la Región Sureste de Coahuila para instrumentar las políticas públicas

neoliberales que entonces estaban tan en boga. Así, los incentivos para que los ejidatarios vendieran sus tierras a las empresas inmobiliarias de la oligarquía coahuilense se hicieron muy atractivos, ante la emigración de sus jóvenes que generaba la pobreza en los ejidos que creaban las condiciones propicias para que los campesinos de edad madura prefirieran tomar esa alternativa a seguir tratando de convencer a sus hijos de que se quedaran con ellos a trabajar la parcela. De ahí que se concluya que la nueva legislación representó un factor fundamental para facilitar la proletarización de los campesinos del Sureste de Coahuila, mediante la transferencia de su fuerza de trabajo al sector industrial. Obvio es señalar, pero no se quiere dejar de mencionar que, con la enajenación de la tierra que era propiedad social, también se dieron las condiciones para que el sector privado tuviera la oportunidad de enajenar el agua del subsuelo.

La proletarización y migración campesina significaron la desarticulación de las sociedades tradicionales rurales, cuya evolución espacial se ha ido presentando en la región con las mismas tendencias que son observables en la generalidad de los casos de expansión urbano industrial: en relación inversa con la cercanía que tienen las localidades con los focos expansivos del modelo económico. Dado que General Cepeda y de Parras de La Fuente, dentro de su vecindad, tienen la peculiaridad de confrontar dos de esos focos, uno al oriente basado en la industria metalmecánica asentada en Saltillo y otro al poniente basado en la agroindustria de Torreón/Gomez Palacio, la dinámica de reconversión a sistemas de producción capitalista de tierras y aguas que en el pasado reciente sostenían sistemas productivos tradicionales presenta perfiles diferentes, dependiendo del foco expansivo al que se encuentren más cerca: en el primer caso prevaleciendo los del sector industrial metalmecánico y en el segundo los del sector agroindustrial. Este detalle no es asunto menor, en tanto que los sistemas de producción hortofrutícolas y agroindustriales que se viene expandiendo a General Cepeda desde el poniente ocupan cantidades ingentes de agua y las extracciones de ésta a partir de mantos subterráneos que se hacen para los cultivos de plantación son, con mucho, la principal fuente de los conflictos que actualmente se están dando por ese bien natural.

A muy pocos años de la contra reforma agraria, las concesiones y permisos otorgadas por el Estado para la extracción del agua subterránea han sido acaparados por actores que por regla general están ligados en alguna medida a la oligarquía inmobiliaria de la Región Sureste de Coahuila. Su presencia conlleva su carga de valores individualistas que afectan valores comunitarios y modos de vida de las sociedades campesinas, generando otro tipo de fragmentación: la sociocultural. El individualismo golpea, mella y termina fisurando los ancestrales valores comunitarios; desconfigura la noción de bien común que se tenía del agua, imponiendo la concepción mercantilista de bien privado; trastoca la perspectiva de su valor de uso, fundamental para la vida.

Con la fragmentación sociocultural se promueve el desplazamiento de la solidaridad entre los miembros de las sociedades afectadas, se pierde el sentido de cohesión comunitaria y se afianza el individualismo. El acaparamiento y uso descontrolado de aguas subterráneas, por empresas inmobiliarias cuyos propietarios son parte de la misma oligarquía que conforman los integrantes de la élite política que controla el gobierno del estado desde hace casi un siglo, consolida la imposición de extractivismo y en general los valores y

normas del capitalismo entrado a su fase de despojo; el agua se deja de apreciar como elemento vital para la sobrevivencia de “los otros”, los despojados, los que ya no la tienen; se violenta el derecho humano que tienen, para acceder a ella.

Como puede verse, la fragmentación territorial derivada de los cambios al marco jurídico constitucional de 1992 ha sido más grave que sus antecesoras de 1867 y 1917 porque está destruyendo las instituciones tradicionales, mediante la enajenación y desintegración de las comunidades campesinas; expulsando indirecta o directamente a los actores locales y normalizando el despojo de sus tierras y de sus aguas. Las evidencias recabadas en campo, realizando una aproximación a los conflictos por el agua a escala micro, indican que la modalidad de capitalismo que actualmente se está imponiendo en la región de estudio es la que se basa en la acumulación por despojo; el registro que aquí se deja sobre una muerte atribuible al contubernio de empresarios y funcionarios gubernamentales para despojar de tierras e imponer un confinamiento de residuos industriales tóxicos, así como las amenazas de muerte a activistas contra este proyecto de muerte son evidencias claras de que al menos algunas facetas del modelo económico de la Región Sureste de Coahuila se encuentran ya a las puertas de la fase denominada necrocapitalismo.

Como colofón a las conclusiones de la presente investigación y con la pretensión de redondearlas un poco más, no se quiere dejar de mencionar una serie de consideraciones que el autor de estas líneas sugiere que debieran tomarse en cuenta para facilitar la obtención de una perspectiva más integrativa de las observaciones realizadas durante los estudios de caso aquí presentados, esto es, para dar más sentido al enfoque histórico que aquí se ha insistido en señalar, incluso en el título de este documento. Para ello, en los párrafos siguientes se dejan explícitos algunos conceptos y apreciaciones que ayudan a comprender como encajan las crónicas aquí narradas en los subsecuentes procesos y contextos históricos mundiales.

En primer lugar, recordar que el extractivismo no es una forma de obtención de riqueza nuevo, sino que forma parte de procesos de apropiación de la naturaleza y la conformación de estructuras de poder que tienen sus raíces en un pasado colonial, que en el caso del Continente Americano fue impuesto a partir del Siglo XVI, como columna vertebral de la economía que sustentó a los imperios europeos.

Los invasores colonialistas implantaron procesos extractivistas, que en el caso del norte de lo que hoy es México, durante el periodo Virreinal se materializaron fundamentalmente en la minería del oro y la plata y ya durante el siglo XIX en las fibras duras vegetales, que tomaron auge incentivados por la demanda internacional de costalería que se empleaban como material esencial en el almacenamiento y transporte de productos de plantaciones agrícolas, como el azúcar, el tabaco, el café y el cacao; pero también cordelería de grueso calibre para los navíos marinos y factorías que se expandían tras la Revolución Industrial. También se implantaron procesos extractivistas para la obtención de ceras vegetales para la industria cosmetológica o para protección de maquinaria. Por esas mismas épocas, pero en otras regiones del continente, el extractivismo encontró sus expresiones en artículos como el guano, el hule, el chicle, la palma xat y las maderas preciosas; a partir del siglo XX en el petróleo, las llamadas tierras raras y últimamente el litio y el agua.

Lo que es importante destacar aquí, como primer punto, es que los sistemas extractivistas se basan en prácticas de comercio desiguales y muy comúnmente en prácticas de apropiación y despojo de tierras, así como en la explotación de las poblaciones autóctonas y/o locales. En ese sentido, el extractivismo fue un factor que jugó un papel destacado en la consolidación de las estructuras socioeconómicas que favorecieron a las élites coloniales, en detrimento de las mayorías.

Otro aspecto importante a destacar es el hecho de que a los actores extractivistas lo último que les interesa son las afectaciones socioambientales que su actividad depredadora genera, puesto que su objetivo es la de obtener, a como de lugar, una tajada de un pastel de ganancias que se reparte entre muy pocos actores, pertenecientes a las élites sociales. De ahí que los actores de las clases desposeídas no solamente no llegan a ver ni siquiera las migajas, sino que terminan siendo los más afectados en su salud, en la calidad de su entorno ambiental y en general en sus condiciones de vida.

Esto último porque ese tipo de sistemas están basados generalmente en ciclos de explotación hiperintensiva y contaminante, de ahí que lleven a consecuencias sociales terribles, con una gran profundización de la desigualdad y expulsión de la gente de sus territorios. A menudo terminan fomentando de manera muy importante el saqueo de las tierras y del agua.

Pero debe tenerse también muy presente que la persistencia de este modelo no se puede explicar únicamente a un legado colonial. La base del extractivismo depredador sigue atravesando todo lo que ha dado en denominarse últimamente como Sur Global y su persistencia es evidencia de cómo las estructuras de poder, de dominación y de explotación tienen una enorme capacidad para reproducirse a lo largo del tiempo; con ello consolidando un sistema que si bien tiene orígenes coloniales sigue creciendo y manteniendo estructuras de dominación, muy a menudo mediante prácticas de cohesión y de corrupción política. Y es que cuando hay abundancia de bienes naturales y al mismo tiempo las licitaciones son poco transparentes y los gobiernos son débiles o sus funcionarios proclives a coludirse con los actores extractivistas, resulta muy probable que se cree un espacio óptimo la impunidad.

A partir de dicho modelo, las élites locales convierten los bienes del territorio expoliado en mercancías para la acumulación de capital, sin importarles las posibles afectaciones que debido al proceso extractivo se hagan a la vida, la naturaleza, las sociedades y las culturas locales. Bajo la lógica de la obtención la máxima ganancia en el menor tiempo posible orientan el esfuerzo productivo en la obtención de un solo producto o unos pocos productos interrelacionados dentro de un solo sector de la economía, contribuyendo a que los demás sectores se vuelvan menos atractivos o competitivos y con el paso del tiempo obstaculizan la diversificación productiva, lo cual provoca que las economías locales o regionales sean más vulnerables ante cambios económicos. También es común que generen o muy poco empleo o empleo malpagado y riesgoso, debido a lo cual no aportan alternativas de vida digna a los actores locales.

Por lo que se refiere al caso específico de los sistemas extractivistas de agua, está documentado que la afectación más grave que provocan en el territorio es la generación de estrés hídrico; siendo que, en Latinoamérica, México y Chile son los países que ocupan los

primeros lugares en ese rubro, debido a las grandes extensiones de desiertos que los cubren (Instituto de Recursos Mundiales, 2025). El déficit de agua conduce a conflictos sociales, especialmente cuando los proyectos que implican actividades extractivas se llevan a cabo sin consulta. El descontento social surge generalmente cuando se amenaza a la salud, a los ecosistemas locales o cuando se realiza una violación flagrante de los derechos humanos. Cuando las protestas sociales alcanzan un grado de visibilización relativamente altos respecto a los niveles de tolerancia habituales en el Estado o de los actores depredadores, los líderes de las movilizaciones suelen ser amenazados y en ocasiones las poblaciones locales son desplazadas; en casos más extremos de violencia de los actores depredadores, llegan incluso a la comisión de asesinatos contra los actores defensores del territorio<sup>319</sup>.

Casos como los señalados en el párrafo anterior se hacen posibles, en tanto que otra característica que se presenta en los lugares donde predominan los modelos económicos extractivistas es la presencia de gobiernos autoritarios y autocráticos, cuya agencia perpetúa una serie de intercambios desiguales y dinámicas de apropiación de los bienes del territorio al amparo de la cobertura jurídica e incluso militar; esto es, que permiten la consolidación de las estructuras de poder asimétricas en las que se abusa de los bienes naturales para beneficio de intereses económicos y geopolíticos externos; lo cual va en detrimento de las sociedades locales.

Pero los matices conceptuales que uno encuentra en las fuentes de información de acceso abierto sobre este tema son innumerables. Baste con señalar, como un indicador, que en una consulta realizada en un “buscador web” al momento de escribir estas líneas, empleando únicamente la palabra “extractivismo”, se obtienen un aproximado de 33,600 resultados (según el mismo buscador). Un número que indica claramente la imposibilidad de leer siquiera un 1% de todas esas referencias, pero que si se abren como muestra al azar permiten reconocer que el calificativo en el que coinciden prácticamente todas es que se trata de un sistema económico depredador. Asumiendo que efectivamente lo sea y confrontando esta premisa con lo observado en esta investigación, se puede concluir que los resultados de los estudios de caso, o incluso los datos contextuales recopilados de la bibliografía revisada, corroboran que el extractivismo refleja fielmente la esencia medular del capitalismo. Ese capitalismo de tan asombrosa resiliencia que se “recarga” de acuerdo a sus subsecuentes fases y que, para infortunio de la gran mayoría de los habitantes de General Cepeda, se puede ubicar sin dubitaciones en el umbral que existe entre sus fases de despojo y del necrocapitalismo.

A pesar de ello, en los inicios de la tercera década del Siglo XXI aún pueden encontrarse trincheras de resistencia social en las que los usos y costumbres tradicionales aún se manifiestan y se defienden. Esta lucha social ha sido posible de ser protagonizada por

---

<sup>319</sup> América Latina es la región del mundo con más asesinatos de activistas pro defensa del medio ambiente (“Global Witness, 2024: Missing voices. The violent erasure of land and environmental defenders (10 September 2024) [https://globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmental-defenders/missing-voices/?gad\\_source=1&gclid=CjwKCAjwvr--BhB5EiwAd5YbXrRxRLIw\\_s8rGkyctdAC243P7p0pVXrG1ozB-CofVUo8ZOZns9G-RoCx\\_cQAvD\\_BwE](https://globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmental-defenders/missing-voices/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwvr--BhB5EiwAd5YbXrRxRLIw_s8rGkyctdAC243P7p0pVXrG1ozB-CofVUo8ZOZns9G-RoCx_cQAvD_BwE) revisado el 25/11/2024)

actores locales que no poseen o no aparentan poseer una posición económica sólida, pero cuyo nivel de conciencia y capital político han sido el combustible que mantiene viva la llama de rebeldía que los anima a no dejar consumir el despojo que el capital pretende hacer de sus medios de vida; para ello no han dudado en establecer alianzas políticas y económicas con una amplia variedad de actores, cuyos perfiles socioeconómicos no dejan de sorprender por su diversidad y contrastes.

Se tienen, pues, movimientos conformados por actores que aunque comparten el denominativo común de vivir en el medio rural del semidesierto, resultan ser muy diferentes entre sí en muchos otros aspectos; circunstancia que a los ojos del investigador representa una característica significativa, pues considera que es debido a tal peculiaridad que el colectivo de actores locales no sólo ha logrado mantenerse en pie de lucha contra los actores externos que aparecieron en escena tras las reformas hechas en 1992 al marco jurídico que regula la tenencia de la tierra y del agua sino, incluso, han logrado construir un amplio movimiento social de resistencia, con alcance micro-regional y por momentos regional o supra regional.

En base a lo anterior, el autor del presente documento postula que, para los conflictos aquí estudiados, la penetración del capitalismo a la micro region y la imposición de sus reglas a las sociedades locales ha encontrado en la heterogeneidad de éstas un antídoto que en ocasiones es más eficaz y en otras ocasiones no tanto contra el proyecto homogenizador. Heterogeneidad de los actores que se hizo más vasta al establecerse alianzas entre los actores de la resistencia; lo cual obligó a los actores externos a fortalecer sus propias alianzas con otros actores locales con intereses afines o convergentes a los de ellos, pero muy diferentes a ellos mismos en cuanto a su perfil socioeconómico; que de hecho es más parecido al de la mayoría de los actores de la resistencia.

El capitalismo avanza inexorablemente y quienes plantean que hay modos de producción y de vida alternativos, más esperanzadores respecto al futuro de la humanidad, se nos suele calificar de idealistas o desubicados. Y con todo, el ejemplo de esa resistencia que todavía se nos presenta en algunos lugares nos alienta a no dejar de seguir pensando que todavía hay un filo de esperanza. Que todavía existen condiciones para enfrentar el gran desafío de reconfigurar el estado de las cosas para orientar nuestros espacios vitales hacia un tipo de estructuras y de relaciones de poder menos injustos, en hacer prevalecer nuevamente derechos que han sido arrebatados, en la reconstitución del concepto de bien común, en que cualquier actividad que se desarrolle anteponga a otros intereses el de la preservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

Los conflictos son una expresión de la voluntad de la gente, de que se escuche sus padecimientos y sus sentires y sentimientos. Lo primero que se tiene que hacer es escuchar a la gente. Escuchemos con atención lo que nos dicen; reforcemos nuestra empatía para tratar de comprender lo que les está pasando.

Pero al mismo tiempo no olvidemos que, para ser sustentables, también se requiere regulaciones estrictas, tecnologías avanzadas y amigables con el medio ambiente, no depredadoras; especialmente en lugares donde el aparato de gobierno no solamente no aporta soluciones sino que resulta ser factor importante para perpetuar el problema político



del abuso del poder. Tengamos presente que se requiere fomentar la diversificación económica, retomando de los campesinos su estrategia de sobrevivencia ancestral de no poner todos los huevos en la misma canasta.

Para todo lo anterior se requieren instituciones fuertes y honestas, dentro de una estructura de poder equilibrado y el empleo de la consulta popular para involucrar a la población en los proyectos de desarrollo.

El problema es que todo eso es precisamente lo que las empresas extractivistas no quieren que se haga.

## REFLEXIONES METODOLÓGICAS

*...Existen montones de libros sobre higiene intelectual, sobre limpieza metodológica. Hay libros que ofrecen acceso a los espacios más elevados en cuestiones de metodología de investigación en ciencias sociales. Sin duda que hay mucho de bueno en esos textos. No hay duda respecto a la utilidad de conocer sobre significancia estadística, o como evitar sesgos del entrevistador. Los tips de investigación siempre son manejables. Pero en la medida que ellos asumen forma higiénica ellos realmente no trabajan, cuando menos para mí. En la práctica la investigación necesita ser sucia y heterogénea. Necesita ser sucia y heterogénea porque actualmente ese es el camino en el que la investigación es. Y también, y más importante, necesita ser sucia porque tal es la vía en la que la mayor parte del mundo es –sucio, irreconocible visto en modo regular y rutinario...*

John Law (2006, p. 2) (traducción libre de Saúl Angel C.).

Inspirados sus objetivos dentro del ámbito de la Ecología Política y orientada a comprender las interrelaciones que existen entre arenas locales que se encuentran embebidas dentro una gran arena regional, la presente investigación ha requerido aplicar una metodología con versatilidad vasta y suficiente para poder estudiarlas de manera conjunta desde una aproximación teórica multidisciplinaria y multiescalar.

Dado que la propuesta metodológica de investigación estableció como un eje central al Enfoque del Actor de Norman Long (2007), fue ineludible proceder a definir desde el inicio la arena en la que los actores dirimen sus diferencias; no teniendo dificultad para ello, puesto que el estudio se realizaba originalmente en una sola localidad; después tampoco la hubo cuando los primeros resultados del trabajo de campo hicieron patente que en realidad se trataba de dos arenas: una en la que contienden los actores de una misma localidad y otra en la que actores éstos, poniendo a un lado sus diferencias, contienden contra actores de una localidad vecina.

La necesidad de trabajar dos arenas al mismo tiempo planteó las primeras complicaciones teóricas: por un lado porque la arena local estaba parcialmente embuída en la interlocal; por otro lado porque, a pesar de que los desacuerdos entre los contendientes de ambas arenas tienen en común que su origen en los volúmenes de agua que cada parte cree que le corresponden, en el caso de los desacuerdos entre actores de localidades diferentes los usos y costumbres se encuentran tensionados por contradicciones inscritas en la

documentación legal que define los derechos jurídicos que tiene cada grupo; lo cual sucede en los desacuerdos entre actores de una misma localidad, en los que los usos y costumbres prevalecen sobre los documentos formales.

Pero al cabo de poco, las evidencias del posterior trabajo de campo trajeron a cuenta que los volúmenes de escorrentías estaban siendo abatidos debido al secamiento de los manantiales que afloraban en la sierras y que este fenómeno es consecuencia directa de la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos de la región. Esto es, que el agua ya no alcanza a aflorar por la caída de los niveles freáticos que provoca la excesiva extracción que se hace de la misma, mediante sistemas de riego en otros lugares del municipio o de municipios vecinos.

Lo anterior vino a patentizar que el diseño del marco de referencia para la investigación se quedó corto, por cuanto a que resulta mucho más complejo que como se le concibió originalmente: por una parte por que los actores de las arenas que se propuso estudiar no contienden en una sola arena local, sino, muy al contrario, contienden simultáneamente en arenas ubicadas en otras escalas geográficas y sociales (municipales y/o regionales); por otra parte porque en cada arena asumen roles diferentes a las otras, ya que en algunas lo hacen como adversarios entre sí y en otras como aliados contra otros actores. Por si fuera poco, desde la perspectiva ecológica plantea la necesidad de abordar las interacciones que en la naturaleza se dan entre cuerpos de agua subterráneos y cuerpos de agua superficiales, a partir de reconocer que su identificación como tales solamente es una convención para referirse al agua que se encuentra abajo o arriba de la superficie terrestre; pero sin una base científica real, que parta de concebirlas como elementos hidrográficos integrados en un solo ciclo del agua, en el que los complejos flujos de materia y energía los condiciona de tal forma a estar permanentemente interrelacionados que no los distingue por el topos en que se encuentran.

Ante tan abrupto cambio de percepción respecto al grado de complejidad que posee la realidad estudiada resultó del todo evidente que el tamaño del desafío metodológico que se tenía enfrente no era menor, pues ¿Cómo encontrar una vía para explicar cómo se vincula lo que está aconteciendo en las localidades con lo que sucede en el *holum*? ¿De qué herramientas metodológicas dar una explicación satisfactoria de la manera como están correlacionados los conflictos por el agua a diferentes escalas? ¿Como coligar los factores y las variables locales con sus homólogos a nivel municipal y regional? ¿Como estudiar simultáneamente varios casos a diferentes escalas que aunque pudieran compartir completa o parcialmente un origen común, invariablemente presentan especificidades que los hacen ser diferentes en mayor o menor medida a los otros casos con los que se les compara? ¿Cómo integrar un marco metodológico en el que quepan los datos obtenidos en gabinete y en campo, interconectando enfoques y métodos de una gama de disciplinas de las ciencias sociales y naturales?

La trascendencia de los hallazgos que emergieron del trabajo de campo orilló a elegir una de dos opciones: mantenerse en la investigación original, aplicando los procedimientos metodológicos validados para efectuar el estudio a escala local o *micro*, o ii) reconfigurar a profundidad la propuesta de investigación, para poder incorporar al análisis local los factores y variables que se originan en las arenas municipal y regional.

A sabiendas de que los métodos planteados en la propuesta de investigación original incorporan sólo colateralmente a los factores y variables que tienen peso en la escala municipal o *meso*, ya no se diga en las deficiencias para reparar en los que pesan en la arena regional, se decidió tomar el camino complejo; es decir, la segunda opción.

Ha tenido peso en esta decisión la reflexión en torno a los postulados básicos de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) originalmente concebida por Glaser y Strauss (1967), pero ampliada de manera sustancial por Charmaz (2006), de quien se retoma muy especialmente su propuesta de investigación constructivista, pero sin dejar de lado otros conceptos de Strauss y Corbin (2008). Se trata de una propuesta que se fue formando a partir de la práctica de sus autores en el contexto hospitalario, en el que ellos participaban como médicos y enfermeras, donde eventualmente se les presentaban casos de diagnóstico de enfermedades atípicas o poco comunes, que no estaban acostumbrados a tratar. Dichos autores plantean que para llegar a un diagnóstico más exacto no deben asumir que tienen en ese momento todo el conocimiento profesional para hacerlo y por tanto deben ver a la investigación como un proceso de construcción, dentro del cual el investigador reconoce, de entrada, que su *expertise* es producto de circunstancias que no siempre pudo controlar personalmente, sino que llegaron a su vida de manera fortuita. En ese sentido durante la primera aproximación al estudio no deben aferrarse que las impresiones que se deriven de ese acercamiento sean las acertadas, puesto que puede darse el caso que el tema a estudiar esté relacionado con alguna laguna de conocimiento de su *expertise*. En ese sentido, deben reconocer que no lo saben todo y abrir su mente tanto a lo que sus pacientes les están tratando de comunicar que sienten y/o a la interpretación que ellos dan al origen de su enfermedad, como a las opiniones de otros médicos de otras especialidades; en ese tenor, los autores describen casos en los que el problema de salud que se les presenta no se solucionó clínicamente, pej. con el uso de fármacos, sino con la atención a otros aspectos de la vida cotidiana del paciente, pej. factores sociales, económicos, ambientales, etc., que en ocasiones eran inimaginables para ellos, como profesionales de la salud.

Simultáneamente, las ideas vertidas en el párrafo anterior condujeron al ánimo del investigador hacia motivaciones divergentes: i) una tendiente a reconfigurar la propuesta inicial de investigación, motivada a partir de verificar que los resultados iniciales del trabajo de campo llevan a un escenario en el que se presentan circunstancias que, vistas con sentido práctico, puede analogarse en varios aspectos las que describen las autoras y el autor de la Teoría Fundamentada para argumentar la pertinencia científica de reconfigurar; ii) otra de renuencia a hacerlo, ya que trasladar una metodología desde las ciencias naturales hacia las ciencias sociales siempre implica el riesgo de caer en sesgos que lleven a resultados que puedan ser en alguna medida cuestionables. Pero más allá de esa indecisión, hubo que considerar también que el desafío que plantearon los resultados del trabajo de campo inicial de investigación traía más aristas, una de las cuáles, entre las que resultaban prioritarias de resolver, era la de encontrar una forma de correlacionar los resultados de campo obtenidos en arenas de diferente escala; ésto es, un asunto a resolver que se trae a cuenta aquí porque trajo al investigador la idea de lograrlo adaptando el modelo de sistemas de integración que se emplea Ecología para facilitar la conceptualización de sistemas vivos embebidos en otros, así como las interrelaciones que

se efectúan entre los mismos. Este modelo también es una de las bases de los sistemas de información geográfica, empleados para elaborar cartografía digital.

Una característica que tienen los sistemas de integración que se encontró relevante para el presente estudio es que concibe a cualquier sistema de una escala determinada como un subsistema integrado a una sucesión de sistemas que para cada decremento de escala se “convierten” en subsistemas de los sistemas más grandes. Esto es, una cualidad idónea para proponer a este modelo surgio para estudiar las interrelaciones de diferentes *arenas* (concepto retomado del Enfoque del Actor de Norman Long (2007)) no solamente cuando se las ubica en la misma escala, sino cuando se trata de integrar arenas ubicadas en diferente escala. En ese sentido, el investigador reflexionó: ¿Porqué no incorporar el modelo de sistemas de integración a la metodología de investigación si ésta implica trabajar en arenas a diferentes escalas? Como, por otra parte, la investigación a reconfigurar se circunscribe dentro del área interdisciplinaria de la Ecología Política, a juicio del investigador resulta lógico y no contradictorio proponer combinar métodos de investigación para ecología con métodos de investigación en política. Bajo esas nuevas premisas, se decidió efectivamente reconfigurar la propuesta de investigación original, retomando los argumentos teóricos que sostienen la Teoría Fundamentada.

La propuesta fue más allá, al concebir un conjunto de arenas dentro de un espacio tridimensional, a partir del cual tener una amplia perspectiva de las interacciones multidireccionales y multifactoriales que se establecen entre diferentes arenas, independientemente de la escala en la que se ubique cada una de ellas.

En función de las consideraciones anteriores, se procedió a identificar enfoques teóricos e integrarlos conceptualmente mediante un ejercicio de abstracción en el que el *holum* sea concebido como una malla de interrelaciones multidireccionales, en cuyos nodos sea posible anclar y vincular entre sí los temas relativos a los ejes de investigación. Esto es, que al decir multidireccionales se asuma que dichos nodos se unen mediante una red de relaciones no solamente horizontales sino también verticales; ésto es, asumir que existen nodos que son conspicuos solamente dentro de una escala, pero no se alcanzan a visualizar, o al menos no con claridad, al aproximarse a su estudio empleando una escala más grande o más pequeña. Para ubicar tales redes y nodos teóricos se construyó un modelo integrador, al cual se ha llamado “capas de una cebolla morada”, o simplemente “*modelo de la cebolla*”, cuya principal virtud metodológica consiste en que ofrece al investigador una perspectiva espacial con proyección tridimensional, que lo convierte en una herramienta metodológica idónea para visualizar las interdependencias que existen entre nodos que se entrelazan para formar una red con ejes en diferentes planos.

El paso siguiente fue homologar las arenas a nodos de anclaje teóricos donde se coligan e imbrican los hilos (las interacciones) que conforman las redes de análisis multidisciplinario; conveniendo clarificar que la integración del concepto *arena* al modelo de la cebolla se realizó respetando la definición original que le imprimió Long; pero se considera que, al embuirlas dentro de otras arenas más grandes, se facilita al investigador determinar si una arena específica es más “nítida” en una escala o en otra, de tal suerte que le permite seleccionar aquella escala más adecuada para estudiar las variables de su interés, al

mismo tiempo de visualizar más claramente las interrelaciones que se establecen entre arenas de una misma o de diferente escala.

Pero durante el proceso de diseño metodológico se reparó que el modelo todavía era perfectible en varios aspectos, dentro de los cuáles se destacaban de manera especial dos, vistos desde los ojos del investigador: i) no se quería que los resultados derivados de su empleo se presentaran como “una instantánea que captaba una situación en el tiempo”, sino que se quería que fuera un modelo dinámico; ii) aún no se hallaba su utilidad para responder una de las preguntas importantes que surgieron de la información recabada en campo ¿Porqué las fragmentaciones territoriales (que por su misma naturaleza obligan a cambiar entre escala de estudio) desarticulaban a los constructos físicos pero no a los constructos sociales creados para el control de escorrentías?

El primero de esos aspectos se pudo resolver dando especial relevancia a la historiografía, dentro de la gama de disciplinas que confluyen en los nodos del modelo; se aplicó incorporando crónicas que ilustran cómo se fue conformando la arena a través del tiempo. Para resolver el segundo, se encontró que el concepto clave para poder comprender el impacto diferencial de las fragmentaciones sobre los constructos es el de fractalidad, puesto que se trata de una propiedad que tienen las redes hidrográficas y los acuerdos para el manejo mancomunado del agua, pero que no poseen las infraestructuras hidrotécnicas.

La fractalidad explica tanto la moldeabilidad que tiene el componente líquido del paisaje (el agua) como de los constructos sociales (los acuerdos) a la topografía del paisaje vista a cualquier escala, y se erige como el factor fundamental para crear esa resiliencia mostrada a lo largo de milenios. Al mismo tiempo, permite coomprender también la labilidad de *los constructos físicos*, puesto que es precisamente su materialidad lo que impide que se moldeen o se adapten de similar manera a los cambios de escala; esto es, de la misma manera en que no pueden moldearse los componentes del paisaje sólidos, como pueden ser el suelo y la vegetación; esto es, *son demasiados rígidos y no moldeables por lo que corren la misma suerte de fragmentarse a la par de que lo hace el sustrato al que están fijos: la tierra*. Así, los acuerdos no dependen ni del orden hidrográfico de la cuenca ni del volumen de agua de escorrentías que bajan por la misma; como sí dependen de esos aspectos las infraestructuras hidrotécnicas. Cabiendo aclarar que, *sensu stricto* los acuerdos en realidad no se construyen, sino que se instituyen; son instituciones no son construcciones; pero aquí se les llama constructos con fines comparativos y facilitar la explicación.

Partiendo de los razonamientos anteriores, se tomó la decisión de enfatizar búsqueda de información para ampliar la comprensión del proceso histórico que ha llevado a la actual situación; pero también se tomó la decisión de resaltar los siguientes tres principios que son sustentados en conceptos teóricos de las ciencias naturales:

- i) un modelo de integración espacial *multiescalar*, inspirado en los cortes transversales de una cebolla morada;
- ii) la noción de las redes hidrográficas como *fractales* organizados en sus subsecuentes órdenes hidrográficos (Strahler, 1952);

- iii) la noción de *infraestructuras hidrotécnicas* como *constructos materiales*, por tanto *tangibles* y de *acuerdos para el manejo mancomunado del agua* como *constructos inmateriales*, por tanto *intangibles* o al menos *poco tangibles*.

Superados estos aspectos en el diseño del modelo, en sintonía con la aproximación ecléctica que permea todo el marco metodológico de este trabajo, pero ya más desde la perspectiva de las disciplinas sociales, los conceptos que han sido incorporados desde el *Enfoque del Actor* de Long han sido integrados otros enfoques y propuestas teóricas de varios autores reconocidos como especialistas en temas que se consideran pertinentes para lograr alcanzar los objetivos de investigación planteados... por su cercanía teórica, con todo y los matices que puedan tener entre ellos, se debe destacar la incorporación de conceptos establecidos por Bruno Latour (2008) en su *Teoría del Actor Red* (Actor Network Theory); muy especialmente los que se refieren a que dentro de las agencias individuales de los actores en una determinada arena no es una cualidad exclusiva de los actores-persona, sino también de los actores-objetos (o si se les prefiere denominar, los actantes), que forman una red de ensambles que definen los equilibrios del poder en esa arena (y otras con las que establecen interacciones).

Por otro lado, partiendo de concebir procesos de fragmentación territorial y de deterioro socioambiental como consecuencias de la aplicación de políticas gubernamentales de perfil neoliberal, lo cual las identifica con el patrón instrumental universal propio de la fase histórica por la que cursa el sistema capitalista, que vienen a ser, de acuerdo a las teorizaciones de connotados especialistas: la *acumulación por desposesión*, según David Harvey (2005); la de la *necropolítica*, según Echillie Mbembe (2003); la de *necroeconomía*, según Warren Montag (2005) sobre y la de *necrocapitalismo*, según Subhabrata B. Benerjee (2008). Teorizaciones que han sido de mucha utilidad para comprender las características del modelo de capitalismo que se ha ido imponiendo durante las últimas tres décadas en toda la *Franja Sur de Coahuila*, como contexto inmediato de la Región Sureste de Coahuila y los estudios de caso de esta investigación.

En el caso de las teorías y enfoques retomados de otros autores como en las propias teorizaciones, se buscó orientarlos a proporcionar al investigador un marco de explicación para los procesos socioambientales observados durante el trabajo de campo; lo cual fue posible de realizar mediante el análisis dialéctico; es decir, analizando que teoría y praxis mantengan en todo momento una interrelación coherente y consistente. Cabiendo precisar que, de todos esos autores, es Harvey quien aborda directamente el tema de los impactos nocivos que ese sistema económico genera sobre el medio ambiente; pudiéndose considerar, por tanto, el más cercano a la Ecología Política.

## BIBLIOGRAFÍA

Aboites Aguiar, L., 2001b. Alcabalas porfirianas, modernización tributaria y soberanía estatal. *Historia Mexicana*, 51(2), pp. 363-393.

Aboites Aguilar, L., 2001a. Labores nuevas, labores viejas. Historias de ríos y el estudio de los usos del agua en el Norte de México. *Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad*, XXII(87), pp. 51-76.

Aboites Aguilar, L., 2009. *La decadencia del agua de la nación. Estudio sobre la desigualdad social y cambio político en México. Segunda mitad del Siglo XX*. México: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos.

Aboites Aguilar, L., Birrichaga Gardida, D. & Garay, J. A., 2010. El manejo de las aguas mexicanas en el siglo XX. En: B. Jiménez Cisneros, L. Torregrosa y Armentia & L. Aboites Aguilar, edits. *El agua en México: cauces y encauces*. s.l.:Red Mexicana de Ciencias/CONAGUA, pp. 21-50.

Acosta, E. & Martínez, G., 2010. Muere Don Emilio Arizpe: un empresario ejemplar. *Zócalo Saltillo*, 9 Marzo, p. <http://assets.zocalo.com.mx/uploads/articles/12681464066.pdf>.

Acosta, E. & Martínez, G., 2010. Muere Don Emilio Arizpe: un empresario ejemplar. *Zócalo Saltillo*, 9 Marzo.

Adelman, I., Morris, C. T., Fetini, H. & Golan-Hardy, E., 1992. Institutional change, economic development and the environment. *Ambio*, 21(1), pp. 106-110.

Agamben, G., 1998. *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida*. Valencia: Pre-Textos.

Agua para Todxs, 2015. *Agua para Todxs. Agua para la Vida*. [En línea] Disponible en: <https://aguaparatodos.org.mx/compilacion-de-leyes-del-agua-en-la-historia-de-mexico/> [Último acceso: 10 Octubre 2022].

Aguirre Villaseñor, L., Tobón Echeverri, G. & Mendoza Alfaro, R., 2019. *Agua bajo nuestro territorio: Pueblos en movimiento frente a políticos y acaparadores especuladores en el Sureste de Coahuila*. Ciudad de México, s.n.

Aguirre Villaseñor, L., Tobón Echeverri, G. & Mendoza Alfaro, R., 2023. *La remunicipalización del organismo operador del agua potable de Ramos Arizpe ¿Caso de una victoria de innovación social no sostenible?*. Ciudad de México, Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C.

Aguirre Villaseñor, L, Mendoza Alfaro R. & Martínez López I. (2024). *Los colectivos, grupos en el sureste de Coahuila que fortalecen el tejido social en la gestión del desarrollo sostenible de su territorio*. Chetumal, Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C.

Alessio Robles, V., 1978. *Coahuila y Texas en la época colonial, Biblioteca Porrúa 70*. México D.F.: Editorial Porrúa.



Angel Carrillo, S. E., 2009a. *Urbanización de una comunidad patriarcal: transformación de sus instituciones tradicionales y rompimiento de acuerdos campesinos. El caso de San José de la Joya en los suburbios de Saltillo, Coahuila*. Tesis de Maestría en Desarrollo Rural ed. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Angel Carrillo, S. E., 2009b. *Manejo de recursos del paisaje en la construcción de los ambientes de producción campesinos en San José de la Joya*. Comunicación Idónea de Resultados para obtener el grado de Especialización en Desarrollo Rural ed. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco.

Angel Carrillo, S. E., 2012. *Manejo campesino de recursos del paisaje en el Noreste de México*. London, U.K./Chisinau, Mld: Editorial Académica Española.

Angel Carrillo, S. E., 2016. *Globalización y descampesinización en una comunidad ixtlera del Sureste de Coahuila*. Globalización y Agricultura. Nuevas Perspectivas en la Sociología Rural ed. Saltillo(Coahuila): UAAAN/UAdC.

Angel Carrillo, S. E., 2018. *Industria y escasez de agua en el Cañón de Derramadero, Mpio. de Saltillo, Coahuila. Estudio de la perspectiva rural local*, Saltillo: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila.

Arias, P., 2019. Los ejidos en 1935. Diversidad espacial, recursos naturales y organización social.. *Sociedad y Ambiente*, julio-octubre, VII(20), pp. 153-186.

Ávila Cisneros, R. y otros, 2019. Reforma del artículo 27 constitucional en el salinismo. ¿Sin efectos? Estudio de caso: 2010-2018 , vol. 44, pp. 222-231,. *Revista Mexicana de Agronegocios*, Enero-Junio, Volumen 44, pp. 222-232.

Banerjee, S. B., 2008. Necrocapitalism. *Organization Studies*, Diciembre, 29(12), pp. 1541-1563.

Bartra Vergés, A., 2006. *La subsunción del trabajo campesino en el capital y el carácter de la pequeña producción mercantil” en El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la vida..* México,D.F.: ITACA.

Bazant, J., 1983. Secuestro por infidencia 1863-1867. *Historia Mexicana*, Abril-Junio, 32(4), p. 554–576.

Beltrán Enríquez, R. E., 2014. Un alcalde corrupto hasta el tuétano. *Demócrata Norte de México*, 19 Diciembre.

Benjamin, W., 2008. *Tesis sobre la Historia y otros fragmentos*. Primera ed. México D.F.: ITACA-UACM.

Bergoglio Sívori, Jorge Mario (Papa Francisco);, 2015. *Carta Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco*. Sobre El Cuidado De La Casa Común ed. Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Boyer, R. & Hollingsworth, J. R., 1997. *From national embeddedness to spatial and institutional nestedness*. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, D. E., 1982. Subalpine Scrub. *Desert Plants*, 4(1-4).

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1990. *Proyecto de Reforma a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para erigir el Estado Libre y Soberano de La Laguna. Versión estenográfica de la Sesión Ordinaria del 23/11/1990* (recuperado el 12/02/20 en: <http://gaceta.diputados.gob.mx/Cronica/Iniciativas/54/191.htm> [Último acceso: 02 Diciembre 2021]).

Carbajal Suárez, Y., Almonte, L. J. & Mejía Reyes, P., 2016. La manufactura y la industria automotriz en cuatro regiones de México. Un análisis de su dinámica de crecimiento, 1980-2014. *Econ: teor. Práct.*, julio-diciembre, 45(1), pp. 39-66.

Casanueva, M., Folguera, M. & Peimbert, M., 2013. Jerarquías, integración y complejidad en Biología. Un Posible Marco para la Evo-Devo. *Contrastes. Revista Internacional de Filosofía*, Suplemento(18), pp. 127-142.

Cerutti M. (2006). *Burguesía y capitalismo en Monterrey (1850-1910)*, Colecc. La Historia de la Ciudad del Conocimiento, Monterrey, Fondo Editorial de Nuevo León.

Charmaz, K., 2006. *Constructing grounded theory. A practical guide through qualitative analysis*. London: Sage Publications Ltd.,.

Colectivo de Abogados y Defensores del Interés Público, 2015. *Fronteras Comunes*. [En línea] Disponible en: <https://www.fronterascomunes.org.mx/pdf/derechosdesca.pdf> [Último acceso: 7 Agosto 2023].

CONAGUA, 2024a. *Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Cañón de Derramadero (0502) Estado de Coahuila*. Ciudad de México.: Subdirección General Técnica/Gerencia de Aguas Subterráneas.

CONAGUA, 2024b. *Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el Acuífero General Cepeda-Sauceda (0505), Estado de Coahuila..* Ciudad de México: Subdirección General Técnica/Gerencia de Aguas Subterráneas.

CONAGUA, 2024c. *Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el Acuífero Saltillo Sur (0521), Estado de Coahuila*. Ciudad de México: Subdirección General Técnica/Gerencia de Aguas Subterráneas.

Contreras Palacios, G., 2017. Hacienda Santiago de La Castañuela” (Segunda Parte) en. *El Siglo de Durango*, 5 Noviembre, p. Noticias de Parras.

Corbin, J. & Strauss, A., 2008. *Basic of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory.*, Los Angeles, CA: Sage Publications Ltd.

Corona Mora, D.L., 2025. *Defendiendo el Territorio: Lucha y Resistencia Campesina ante el Establecimiento del Confinamiento de Residuos Peligrosos, en el Municipio de General Cepeda, Coahuila*. Tesis de Maestría en Sociedades Sustentables, ed. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Corral García, E., 1988. *Ordenanzas de los concejos castellanos: Formación, Contenido y Manifestaciones (s. XIII-XVIII)*. Burgos: Editado por el autor.

De Vos, J., 1995. Una legislación de graves consecuencias. El acaparamiento de tierras baldías con el pretexto de la colonización, 1821-1910. En: M. Menegus Bornemann, ed. *Problemas agrarios y propiedad en México, siglos XVIII y XIX*. México D.F.: s.n., pp. 227-264.

Dehouve, D., 2017. El fractal ¿Una noción útil para la antropología americanista?. *Desacatos*, Issue 53, pp. 130-149.

Dell'Angelo, J., Rulli, M. C. & D'Odorico, P., 2018. The Global Water Grabbing Syndrome. *Ecological Economics*, Issue 143, p. 276–285.

Destenave, M. F., s/f. *La historia del agua de Saltillo, México*. Saltillo (Coahuila): Editado por el autor.

Diario Oficial de la Federación. 04/01/1926. Ley de Irrigación de Aguas Federales y Creación de la comisión Bacional de Irrigación.

Diario Oficial de la Federación, 21/04/1945. Decreto que reforma el párrafo V del artículo 27 Constitucional.

Diario Oficial de la Federación, 31/12/1946. Ley de Riegos

Diario Oficial de la Federación, 20/05/1950. Acuerdo sobre acceso de aguas para el Ejido Hediondita Chica, Gral Cepeda.

Diario Oficial de la Federación, 10/03/1951 DECRETO que establece veda por tiempo indefinido, para la excavación de norias y galerías filtrantes y la perforación de pozos, para el aprovechamiento de aguas subterráneas, en la zona que circunda los manantiales de Guanajuato, en Ramos Arizpe, Coah.”

Diario Oficial de la Federación, 08/10/1951. “DECRETO que amplía la zona vedada para nuevos alumbramientos de agua del subsuelo en Ramos Arizpe, Coah.

Diario Oficial de la Federación, 07/02/1952. DECRETO que establece veda por tiempo indefinido para alumbramiento de aguas del subsuelo en los terrenos de la ciudad de Saltillo, Coah. en las zonas que el mismo delimita.

Diario Oficial de la Federación, 06/12/1958 DECRETO por el que se establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en las zonas de Ceballos y de La Laguna, que comprenden parte de los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila

Diario Oficial de la Federación, 18/02/1976. Resolución sobre segunda ampliación de ejido, solicitada por vecinos del poblado denominado Macuyú, del Municipio de General Cepeda, Coah.

Diario Oficial de la Federación, 03/06/1985. Resolución sobre segunda ampliación de ejido, solicitada por vecinos del poblado denominado Presa de San Antonio, antes San Antonio de la Pegajosa, ubicado en el Municipio de Parras, Coah. (Reg.-5353).

Diario Oficial de la Federación, 25/04/1979 “DECRETO por el que se establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas de la zona no vedada por el diverso publicado el 7 de febrero de 1952, en el área que ocupa el municipio de Saltillo, Coah., y se declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos de dicha zona”

Diario Oficial de la Federación, 01/12/1992. Ley de Aguas Nacionales.

Diario Oficial de la Federación, 11/10/2011. Acuerdo por el que se dan a conocer los estudios técnicos de los acuíferos Cañón de Derramadero, clave 0502, General Cepeda-La Saucedo, clave 0505, Saltillo-Ramos Arizpe, clave 0510 y Región manzanera-Zapalinamé, clave 0511, en el Estado de Coahuila.

Diario Oficial de la Federación, 5/04/2013. Acuerdo General por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento en las porciones no vedadas, no reglamentadas o no sujetas a reserva de los 175 acuíferos que se indican

Durand Alcántara, C., 1993. Las reformas al Artículo 27 Constitucional y su impacto en las poblaciones indias. *Alegatos*, Issue 23, pp. 107-112.

Durazo Herrmann, F. J., 2001. México y La Apachería. *Estudios Fronterizos*, vol. 2, núm. 3, 2(3), pp. 91-105.

Dussel, E., 2024. *Cátedra de economía política (volver a Marx). Primera sesión en la UACM..* [En línea] Disponible en: <https://youtu.be/AnjEiHXorrA?si=OGj6xY6Br7vcy5p> [Último acceso: 11 Julio 2024].

Dwiartama, A. & Rosin, C., 2014. Exploring agency beyond humans: the compatibility of Actor-Network Theory (ANT) and resilience thinking. *Ecology and Society*, Sept., 19(3), pp. 28-37.

Encuentro Ciudadano Lagunero, 2013. *Somos Desierto y aquí está situada la Cuenca mas grande de Leche en AL.* [En línea] Disponible en: <https://es.slideshare.net/encuentrociudadanolag/somos-desierto-y-e> [Último acceso: 19/03/2016].

Escobedo De León, M. R., 2014. *Misión y Pueblo de Nadadores. Acercamiento Histórico.* 1a. ed. Saltillo(Coahuila): Consejo Editorial del Estado.

Fernández Casado, C., 2008. *Acueductos Romanos en España.* 1a. ed. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

FIDA (Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola), s.f. *Development Project for Marginal Rural Communities in the Ixtlera Region.* [En línea] Disponible en: <https://www.ifad.org/en/w/projects/1100000270> [Último acceso: 22 Marzo 2021].

Foucault, M., 2005. *Naissance de la Biopolitique: Curso 1978-1979.* Gallimard, Paris, Collège de France, pp. 282-290.

Fuentes López, G., 2015. *Habitantes de General Cepeda, Coahuila, ligan a políticos en obra de basurero tóxico*. [En línea] Disponible at: <https://www.sinembargo.mx/02-08-2015/1433354> [Último acceso: 19 Febrero 2023].

Fukuyama, F., 1992. *El fin de la Historia y el último hombre*. 1a. ed. Barcelona: Planeta.

Fundación Villa de Patos/IMDEC, 2018. *Informe Derramadero. “La Ciudad Modelo” y el Agua en Saltillo, Coahuila*,. General Cepeda(Coahuila): Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C..

Galindo Rodríguez, J., 2021. The Origin of crony capitalism in modern Mexico and its current impact on foreign direct investment. *Revista Norteamérica*, jul./dic., 16(2), pp. 209-250.

García Alonso, M., 2010. *El Marquesado de San Miguel de Aguayo y su obra indiana*. [En línea] Disponible en: <http://vacarizu.es/drupal/articulo/el-marquesado-de-san-miguel-de-aguayo-y-su-obra-indiana> [Último acceso: 03 12 2021].

García, E., Vidal, R. & Hernández, C. R., 1985. Aspectos climáticos de las zonas áridas del norte de la altiplanicie mexicana. *Boletín del Instituto de Geografía*, Issue 15, pp. 41-74.

García, R. V., 1988. *Deterioro Ambiental y pobreza en la abundancia productiva. El caso de la Comarca Lagunera*.. 1a. ed. México(D.F.): CINVESTAV/IFIAS.

Garner, P. & Martínez Rodríguez, M., 2018. Fomento de la inversión británica en El Porfiriato. El caso de Pearson y de la concesión a The Santa Gertrudis Jute Mill Company, Limited. *Revista del Colegio de San Luis*, VIII(16), pp. 75-102..

Gilly, A., 2014. El tiempo del despojo. Poder, trabajo y territorio. En: Programa Universitario de Estudios de Género, ed. *Debate Feminista*. México, D.F.: Elsevier/UNAM, pp. 35-48.

Glaser , B. G. & Strauss, A., 1967. *The Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. 1st ed. New Jersey: Aldine Transaction.

Global Witness, 2024. Missing voices. The violent erasure of land and environmental defenders [En línea] Disponible en: [https://globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmental-defenders/missing-voices/?gad\\_source=1&gclid=CjwKCAjwvr--BhB5EiwAd5YbXrRxRLlw\\_s8rGkyctdAC243P7p0pVXrG1ozB-CofVUo8ZOZns9G-aRoCx\\_cQAvD\\_BwE](https://globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmental-defenders/missing-voices/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwvr--BhB5EiwAd5YbXrRxRLlw_s8rGkyctdAC243P7p0pVXrG1ozB-CofVUo8ZOZns9G-aRoCx_cQAvD_BwE) [Último acceso: 12 Enero 2025].

Gobierno del Estado de Coahuila, 2019. *Perfil Región Sureste. Secretaría de Economía*. [En línea] Disponible at: <https://investcoahuila.com/wp-content/uploads/2020/08/SEC-SURESTE-2019-SEP.pdf> [Último acceso: 22 Febrero 2021].

González Galindo, M. A., 2016. *Los Ferrocarriles de Coahuila (1888-1920). Bordeando El Monte N° 41*. 1a. ed. Saltillo, Coahuila: Gobierno del Estado de Coahuila,.

González González, A., 2010. Comarca Lagunera 1810. Reportaje. *El Siglo de Torreón*, 16 Septiembre.

González Jácome , A., 2013. El manejo del agua y algunos elementos de la agricultura en Tlaxcala. *Perspectivas Latinoamericanas*, Issue 19, pp. 69-82.

González Lezama, R., 10/06/2019. *La Ley Lerdo: un gran paso para la secularización de la sociedad mexicana*. [En línea] Disponible at: [https://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/La\\_ley\\_Lerdo](https://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/La_ley_Lerdo) [Último acceso: 5 Mayo 2021].

González Maíz, R., 2011. *Desamortización y propiedad de las élites en el Noreste mexicano 1850–1870*, 176 pp.. Monterrey(N.L.): Fondo Editorial de Nuevo León, UANL.

González Schmal, J., 2000. Ahora?... La Paila?. *El Universal*, 13 Marzo.

González, E., 2017. Alistan un tercer Cimari en Coahuila. *Vanguardia*, 5 Febrero.

Granados Sánchez, D., Sánchez González, A., Granados Victorino, R. L. & Borja de la Rosa, A., 2011. Ecología de la Vegetación del Desierto Chihuahuense. *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*, XVII(Edición Especial), pp. 111-130.

Gregory, Avery, Galán & Black, s/f. *Texas Beyond History. Los Adaes*. [En línea] Disponible at: <http://texasbeyondhistory.net/adaes/> [Último acceso: 5 Junio 2017].

Guardiola, M., 2023. Perdió Coahuila 27 proyectos por negativa al fracking: Montemayor. *Vanguardia*, 10 Octubre.

Guerra, E., 2006. *Historia de Torreón*. Edición Conmemorativa del Centenario de Torreón ed. s.l.:Republicano Ayuntamiento de Torreón, Coahuila.

Gutiérrez Becerra, A. I., 2013. *Producción vitivinícola en la Hacienda Del Carmen, Parras, Coahuila*. [En línea] Disponible en: <http://arquitecturayrestauracionunam.blogspot.com/2013/05/produccion-vitivinicola-en-la-hacienda.html> [Último acceso: 22 Abril 2022].

Harris, C. H. I., 1972. Un Imperio Mexicano: El latifundio de los Sánchez Navarro. *Humanitas*, Issue 13, pp. 383-394.

Harris, C. H. I., 1975. *A Mexican Family Empire. The latifundio of the Sanchez Navarro family, 1765-1867. Texas Pan American Series*. 1st ed. s.l.:The University of Texas Press.

Harvey, D., 2005. El “nuevo” imperialismo : acumulación por desposesión. *Socialist register 2004 (CLACSO)*, Volumen Enero, pp. 99-129.

Hernández, M., 2016. Colectivo Sí a la Vida en defensa de sus territorios. *La Jornada Ecológica*, 30 Mayo, Junio-Julio(Especial (206)), p. 6.

Hillerkus, T., 2013. Las minas de Nueva España en los mapas del siglo XVI. ¿Un secreto del Estado?. *Apuntes*, Ene.-Jun., 26(1), pp. 10-25.

Hill, J. B., Lyons, P. D., Clark, J. J. & Doelle, W. H., 2015. The “Collapse” of Cooperative Hohokam Irrigation in the Lower Salt River Valley. *Journal of the Southwest*, 57(4 (Winter 2015)), pp. 609-674.

INEGI, 2003. *Perfil Sociodemográfico del Área Metropolitana de Monterrey : XII Censo General de Población y Vivienda 2000*. Aguascalientes: INEGI.

INEGI, 2020. *Información por Entidad - Coahuila de Zaragoza*. [En línea] Disponible at: <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/coah/territorio/default.aspx?tema=m&e=05> [Último acceso: 8 Agosto 2022].

INEGI, 2021. *XIV Censo General de Población y Vivienda 2020*. Aguascalientes: INEGI.

Inzunza-Ibarra, M. A. & Curtis Monger , H., 2005. Historical analysis of the irrigation evolution of the Laguna Region of Mexico. *Terra Latinoamericana*, 23(3 (Jul.-Sept.)), pp. 363-370.

Izarra, M., Haiek Coll, A., Moraes, P. & Mena, T., 2023. *Territorios Fractales. Estudios del agua como definidor de un modelo de ciudad simbiótico*. [En línea] Disponible en: <https://blog.iaac.net/territorios-fractales/> [Último acceso: 11 Abril 2024].

Jiménez Cisneros, B., 2010. *El marco legal e institucional del agua en los siglos XIX y XX*. [En línea] Disponible en: [http://www.atl.org.mx/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2474:el-marco-legal-e-institucional-del-agua-en-los-siglos-xix-y-xx&catid=55:leyes-y-reglamentos&Itemid=468](http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2474:el-marco-legal-e-institucional-del-agua-en-los-siglos-xix-y-xx&catid=55:leyes-y-reglamentos&Itemid=468) [Último acceso: 26 Diciembre 2021].

Juanillo Maluenda, H., 2019. Posicionamiento del investigador de enfermería en la utilización de la teoría fundamentada constructivista. *Enfermería Universitaria*, Abril-Junio, 16(2), pp. 205-215.

Korosec, K., 2010. *T. Boone Pickens: A Water Baron for the 21st Century*. [En línea] Disponible at: <http://www.cbsnews.com/news/t-boone-pickens-a-water-baron-for-the-21st-century/> [Último acceso: 14 Noviembre 2015].

LaMadrid, E., Loeffler, J. & Martínez Saldaña, T., 2005. *El Camino Real Tierra Adentro*. 1st ed. Santa Fe(NM): New Mexico Dpt. Cultural Affairs.

Lamberti, M. J., 2018. *Derrame de 40 millones de litros de solución de cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora provenientes de las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo México*, Hermosillo, Sonora: CCRS/PODER.

Latour, B., 2008. *Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red* pp. 1a. ed. Buenos Aires: Editorial Manantial.

Law, J., 1987. Technology, closure and heterogeneous engineering: The case of the Portuguese expansion. En: W. E. Bijker, T. P. Hughes & T. J. Pinch, edits. *The Social Construction of Technological Systems, New Directions in the Sociology and History of Technology*. Cambridge, Mass.: MIT Press, pp. 111-134.

Law, J., 2003. *Heterogeneities*. [En línea] Disponible en: [www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-on-line-papers/papers/law-heterogeneities.pdf](http://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-on-line-papers/papers/law-heterogeneities.pdf) [Último acceso: 30 Nov 2015].



Law, J., 2006. *Making a Mess with Method*. [En línea] Disponible en: <http://www.heterogeneities.net/publications/Law2006MakingaMesswithMethod.pdf> [Último acceso: 17 September 2015].

Long, N., 2007. La Construcción de un Marco Conceptual e Interpretativo. En: *Antropología del Desarrollo: perspectivas de los actores*. San Luis Potosí, SLP: CIESAS/COLSLP, pp. 33-72.

López Villalba, J. M., 2006. Los fueros y ordenanzas medievales: embrión del gobierno de los cabildos coloniales hispanoamericanos. *Historia. Instituciones. Documentos*, Issue 33, pp. 339-363.

Madero González, F. I., 1907. *Estudio Sobre la conveniencia de la construcción de una presa (San Pedro, Coahuila, México)*. El autor ed. Parras de la Fuente, Coahuila.

Madrazo, J. & Méndez Celaya, F., 2015. La Constitución Mexicana: Obedézcase pero no se cumpla. Estado constitucional. En: M. Carbonell Sánchez, D. Valadés, H. Fix Fierro & L. R. González Pérez, eds. *Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo*. Ciudad Universitaria, México D.F.: UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Mager Hois, E. A., 2006. *Kikapú*. 1a. ed. México(D.F.): Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Martí, C. & Pintó, J., 2011. Pautas teórico-metodológicas para el estudio de la transformación del paisaje litoral de la Costa Brava. *Eria*, Issue 86, pp. 215-236.

Martínez Alier, J., 1991. La pobreza como causa de la degradación ambiental. Un comentario al Informe Brundtland. *Documents d'Analisi Geografica*, Issue 18, pp. 51-73.

Martínez Sánchez, L., 2008. *Coahuila durante la Intervención Francesa 1862-1867*. 1a. ed. Saltillo(Coahuila): Consejo Editorial del Estado.

Marx K., 2003. *18 Brumario de Luis Bonaparte*. 1ª. Ed. Madrid. Fundación Federico Engels

Maya Martínez, M. N., 2012. Límites sociales y ambientales al proceso de conurbación de la región sureste de Coahuila de cara al siglo XXI. *Trayectorias*, 14(35 (Jul.-Dic.)), pp. 90-122.

Mbembe, A., 2003. Necropolitics. *Public Culture*, 15(1), pp. 19-20.

Mbembe, A., 2006. Necropolitique. *Raisons politiques*, 1 ("Tranversées, diásporas, modernités")(21), pp. 29-60.

Mendoza C., J. E., 2001. Crecimiento y especialización en la región Saltillo-Ramos Arizpe. *Comercio Exterior*, Issue Marzo, pp. 250-258.

Meyer, J., 1986. Haciendas y ranchos, peones y campesinos en el porfiriato. Algunas falacias estadísticas. *Historia Mexicana*, 35(3), pp. 477-509.



- Meyer, M. C., 1997. *El agua en el Suroeste hispánico. Una historia social y legal 1550-1850*. 1a. ed. México D.F./Jiutepec, Mor.: CIESAS/IMTA.
- Meyers, W. K., 1994. *Forge of Progress, Crucible of Revolt: Origins of the Mexican Revolution in La Comarca Lagunera, 1880-1911*, 1994). 1st ed. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Montag, W., 2005. Necro-economics: Adam Smith and death in the life of the universal. *Radical Philosophy*, Nov/Dec, Issue 134, pp. 7-17.
- Morfi, J. A., 2010. *Relación geográfica e histórica de la provincia de texas o nuevas filipinas: 1673-1779*, Colección Ediciones Conaculta,. 1a. ed. México(D.F.): Fondo de Cultura Económica.
- Okada, A., 2000. El impacto de la revolución mexicana: la compañía constructora Richardson en el Valle del Yaqui (1905-1928). *Historia Mexicana*, I(1 (jul.-sept)), pp. 91-143.
- Ostrom, E., 1990. *Governing the commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. 1st ed. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
- Ostrom, E., 2000. *El Gobierno de los Bienes Comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva*. 1a (en español) ed. México(D.F.): FCE/UNAM/CRIM.
- Ostrom, E., Stern, P. C. & Dietz, T., 2003. Water Rights in the Commons. *Water Resources Impact*, 5(2), pp. 9-12.
- Oyervides Dávila, M. A., 2020. *Hacienda de Patos* [Entrevista] (14 Agosto 2020).
- Pasztor, S. B., 2002. *The Spirit of Hidalgo The Mexican Revolution in Coahuila*. 1st. ed. East Lansing(Michigan): University of Calgary Press/Michigan State University Press.
- Peña Garza, J. M., 2002. *Campesinado, región ixtlera y La Forestal F.C.L.; en el semidesierto del noreste de México*. Tesis de Maestría ed. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.
- Peña Garza, S., 2001. *Identidad y Territorio. Bases para el Desarrollo rural de la Región Ixtlera*. Tesis de Maestría ed. México(D.F.): Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.
- Peña, J., 2021. Campo, sequía y omisión, secan acuífero de Coahuila. *Semanario Vanguardia*, 6 Diciembre.
- Polanyi, K., 2017. *La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, México*. 3a. ed. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Poteete, A. R., Janssen, M. A. & Ostrom, E., 2012. *Poteete, Janssen y Ostrom (2012) Trabajar juntos: Acción colectiva y múltiples métodos en la práctica*. 1a. ed. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Punzo, J. L., 2006. Camino Real de Tierra Adentro, Durango El camino prehispánico. *Cuadernos de Patrimonio Cultural y Turismo*, Issue 15: "Itinerarios culturales y rutas de patrimonio", pp. 170-179.

Ramírez González, E. C., 1985. *El Ixtle: Un sistema Sociotécnico, Serie El Desierto*. 1a. ed. Saltillo(Coahuila): Centro de Investigación en Química Aplicada.

Ramírez Hernández, R., Rodríguez Infante, A. & Ordaz Hernández, A., 2017. Dimensión fractal de redes de drenaje controladas estructuralmente en cuencas hidrográficas de Pinar del Río, Cuba. *Minería y Geología*, 33(2 (Abr.-Jun.)), pp. 163-176.

Recio Dávila, C., 2021. Historia del Agua en Saltillo. En Los Acuíferos de Coahuila. En: *Ciclo de Conferencias de la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides 2018*. Saltillo: Universidad Autónoma de Coahuila, pp. 14-15.

Registro Agrario Nacional (RAN), 2007. *Núcleos agrarios que adoptaron el dominio pleno de parcelas ejidales y aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles*. [En línea] Disponible en [http://www.ran.gob.mx/ran/transparencia/Direccion%20general%20de%20registro\\_Actualizacion2007\(Diciembre\)/Dominio\\_PLeno\\_Desagregado.pdf](http://www.ran.gob.mx/ran/transparencia/Direccion%20general%20de%20registro_Actualizacion2007(Diciembre)/Dominio_PLeno_Desagregado.pdf) [Último acceso: 27 Febrero 2018].

Reguer, C., 1997. *Dios y Mi Derecho, Tomo I*. 1ª ed. México: Editorial JUS.

Ríos Navarrete, H., 2000a. Coahuila Ambiente Acosado. Un pueblo contra la autoridad. *El Universal*, 15 Marzo.

Ríos Navarrete, H., 2000b. Coahuila Ambiente Acosado. Se extinguen mantos acuíferos. *El Universal*, 16 Marzo.

Rodríguez García, A., 2018. Montemayor, el hombre del fracking. *Proceso*, 8 Octubre, p. Opinión.

Rodríguez García, E., 2013. El Camino Real de Tierra Adentro: un sendero recorrido. *Diario De Campo*, Enero-Marzo, Issue 11: Antropología Reciente en Chihuahua, p. 55–59.

Romero Navarrete, L., 2002. Legalidad y conflictos por las aguas del Nazas. El litigio entre la compañía del Tlahualilo y el gobierno de México, 1885-1912. *Estudios de historia moderna y contemporánea de México*, Issue 24 (Jul.-Dic.), pp. 45-78.

Romero Navarrete, L., 2006. Conflicto y negociación por el agua del Nazas, 1888-1936: Del dominio público a la propiedad nacional. *Región y sociedad*, 18(36), pp. 147-176.

Romero Sotelo, M. E. & Jáuregui, L., 2003. México 1821-1867. Población y crecimiento económico. *Iberoamericana*, III(12), pp. 25-52.

Rzedowski, J., 1978. *Vegetación de México*.. 1a. ed. México, D.F.: Limusa.

Salas Quintanal, H., 2011. *Rio Nazas. La Historia de un Patrimonio Lagunero*.. UNAM. México.. 1a. ed. México D.F.: Instituto de Investigaciones Antropológicas.

Sánchez Licea, L. E., 2003. *Plan Rector de Producción y Desarrollo Microcuenca San Juan del Cohetero, Mpio. de General Cepeda*, Saltillo, Coahuila: FIRCO.

Santoscoy Flores, M. E., 2016. Historia de Coahuila Cápsulas. Desde la formación del territorio hasta la implantación de las Reformas Borbónicas. *Revista Coahuilense de Historia*, Issue 112 (Sept.-Dic), pp. 103-176.

Sauri Riancho, D. M., 2012. *El Proceso de Industrialización de Yucatán 1880-1970. Henequén, Estado y Empresarios*, , , 615 pp. Tesis de Maestría en Historia ed. Mérida(Yucatán): CIESAS-Peninsular.

Senado de la República, 2020. Piden a Conagua estatus del conflicto en la presa "La Boquilla". *Boletín del Senado de la República*, Issue 30/12/2020.

Silva Nogales, J., 2020. Necroeconomía, economía de la sociedad actua. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25(90 (Jul.-Sept.)), pp. 204-216.

Terrazas y Basante, M., 2000. *Inversiones, especulación y diplomacia. Las relaciones entre México y los Estados Unidos durante la dictadura santannista*. 1a. ed. México(D.F.): UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas (Serie Historia Moderna y Contemporánea, 35).

Valencia Castro, C. M., 2005. Conservación de ecosistemas naturales en la Comarca Lagunera. *Revista Chapingo. Serie Zonas Áridas*, IV(2), pp. 1-8.

Van der Ploeg, J. D. & Long, A., 1994. Endogenous development: practices and perspectives. En: J. D. van der Ploeg & A. Long, edits. *Born from within. Practice and perspectives of endogenous rural development*. Wageningen: Van Gorcum, pp. 1-7.

Villarello, I., 2021. La Fundación de la Ciudad de Piedras Negras. *HUMANITAS DIGITAL*, Issue 14 (Ene.-Dic.), pp. 606-617.

Viqueira, J. P., 2008. *Todo es microhistoria*. [En línea] Disponible en: <https://letraslibres.com/revista-mexico/todoesmicrohistoria/> [Último acceso: 26 Junio 2024].

Williamson, J., ed., 1990. *Latin American Adjustment. How Much Has Happened?*. 1st ed. Washington D.C.: Institute for International Economics.

Williamson, O., 1989. *Las Instituciones Económicas del Capitalismo*.. 1a. ed. México(D.F.): Fondo de Cultura Económica.

Wolfe, M., 2006. Conflicto por un cambio de régimen de aguas en La Laguna. La 'construcción social' de la primera gran presa en el Río Nazas, 1900-1936. *Revista de Investigación Social de la Universidad Iberoamericana Laguna*, BuenaVal 2(verano), pp. 1-35.

Wolfe, M. D., 2010. Water and Revolution: The Politics, Ecology and Technology of Agrarian Reform in 'La Laguna. En: *Watering the Revolution: An environmental and Technological History of Agrarian Reform in Mexico*. PhD thesis ed. Chicago ILL USA: University of Chicago.

World Resources Institute, 2023. Insights: 25 Countries, Housing One-Quarter of the Population, Face Extremely High Water Stress. [En línea] Disponible en: [wri.org/insights/highest-water-stressed-countries](https://wri.org/insights/highest-water-stressed-countries) [Último acceso: 12 Enero 2025].

World Wildlife Fund, s.f. *Desierto Chihuahuense*. [En línea] Disponible en: [https://www.wwf.org.mx/que\\_hacemos/programas/desierto\\_chihuahuense/](https://www.wwf.org.mx/que_hacemos/programas/desierto_chihuahuense/) [Último acceso: 8 Diciembre 2020].

Zemelman, H., 1992. *Los horizontes de la razón: Historia y necesidad de utopía*. 1a. ed. Barcelona: Anthropos Editorial.

Zemelman, H., 1992. *Los horizontes de la razón: Historia y necesidad de utopía*. 1a. ed. México(D.F.): Anthropos Editorial.

Zemelman, H., 1997. Sujetos y subjetividad en la construcción metodológica. En: *Subjetividad: umbrales del pensamiento social*. Barcelona: Anthropol-CRIM, pp. 21-35.